

Document symbol:
A/3594

**Mejor copia
Disponibile**

NACIONES UNIDAS

**MEMORIA ANUAL
DEL SECRETARIO GENERAL
SOBRE LA
LABOR DE LA ORGANIZACION
16 de junio de 1956 - 15 de junio de 1957**



**ASAMBLEA GENERAL
DOCUMENTOS OFICIALES : DUODECIMO PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 1 (A/3594)**

Nueva York, 1957

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La simple mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Indice

	<i>Página</i>
PRÓLOGO	ix
 I. CUESTIONES RELATIVAS AL ORIENTE MEDIO	
1. Grado de observancia de los Acuerdos de Armisticio General y de las resoluciones del Consejo de Seguridad (abril-octubre de 1956)	
a) Informe del Secretario General, del 9 de mayo de 1956	1
b) Medidas para la cesación del fuego	1
c) Acontecimientos relacionados con la cesación del fuego	3
d) Acontecimientos relativos a la línea de demarcación fijada por el Armisticio concertado entre Israel y Siria	3
e) Acontecimientos relativos a la línea de demarcación fijada por el Armisticio concertado entre Jordania e Israel	4
f) Examen por parte del Consejo de Seguridad de las denuncias presentadas por Jordania e Israel	4
2. La cuestión del Canal de Suez (julio-octubre de 1956)	5
3. Intervención de Israel, de Francia y del Reino Unido en Egipto	
a) Examen de la cuestión por el Consejo de Seguridad (29 al 31 de octubre de 1956)	9
b) Medidas adoptadas por la Asamblea General en su primer período extraordinario de sesiones de emergencia (31 de octubre al 5 de noviembre de 1956)	11
c) Incumplimiento por parte del Reino Unido, Francia e Israel de la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de noviembre de 1956 sobre la cesación del fuego (resolución 997 (ES-I)): petición de la URSS para que el Consejo de Seguridad examine la cuestión (5 de noviembre de 1956)	13
d) Medidas adoptadas por la Asamblea General en su primer período extraordinario de sesiones de emergencia (<i>continuación</i>) (5-10 de noviembre de 1956)	13
4. Decisiones adoptadas por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones para lograr que las fuerzas de Israel, Francia y el Reino Unido se retiren de Egipto y promover condiciones pacíficas en la región de Palestina (noviembre de 1956-marzo de 1957)	
a) Nuevo llamamiento de la Asamblea General para el retiro de las fuerzas de Israel, Francia y el Reino Unido de Egipto (resolución 1120 (XI) del 24 de noviembre de 1956)	16
b) Desarrollo de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) (5 de noviembre de 1956-marzo de 1957)	17
c) Trato dado a los nacionales británicos y franceses y a la comunidad judía en Egipto (debate en la Asamblea General, 18-21 de diciembre de 1956)	19

d) Informe oral del Secretario General sobre el retiro de fuerzas británicas y francesas y sobre los planes para el retiro de las fuerzas israelíes de Egipto (referente al período comprendido entre el 27 de noviembre y el 22 de diciembre de 1956)	20
e) Informes sobre la Faja de Gaza (correspondientes al período comprendido entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de 1956)	20
f) Informe del Secretario General (referente al período comprendido entre el 22 de diciembre de 1956 y el 15 de enero de 1957) y resolución 1123 (XI) de la Asamblea General del 19 de enero que pide el retiro completo de Israel en un plazo de cinco días	20
g) Informe del Secretario General del 24 de enero de 1957, preparado en conformidad con la resolución 1123 (XI) de la Asamblea General del 19 de enero de 1957: cumplimiento de las resoluciones y medidas adicionales para establecer condiciones de paz	21
h) Resoluciones 1124 (XI) y 1125 (XI) de la Asamblea General del 2 de febrero de 1957 en las que se insta a Israel a completar su retiro sin más dilaciones y en las que se disponen otras medidas para crear condiciones pacíficas	23
i) Informe del Secretario General del 11 de febrero de 1957 redactado en cumplimiento de la resolución 1125 (XI) de la Asamblea General, del 2 de febrero de 1957	24
j) Debate en la Asamblea General sobre los informes del Secretario General y retiro de las tropas israelíes de Egipto (22 de febrero a 8 de marzo de 1957)	25
k) La operación de despejo del Canal de Suez (noviembre de 1956-abril de 1957)	26
l) Suspensión del debate sobre la cuestión del Oriente Medio (8 de marzo de 1957)	28
m) Hechos posteriores	28
5. La cuestión del Canal de Suez (26 de abril-21 de mayo de 1957) ..	28
6. Denuncia de Siria acerca de la violación por parte de Israel del Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria: examen de la cuestión por el Consejo de Seguridad (mayo de 1957)	30
7. Actividades de la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina	31
8. Socorro a los refugiados de Palestina	
a) Informes del Director y de la Comisión Asesora del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)	31
b) Examen por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones	32
c) Actividades del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)	33

II. LA CUESTIÓN DE HUNGRÍA

A. La situación de Hungría

1. Examen de la cuestión en el Consejo de Seguridad (28 de octubre-4 de noviembre de 1956)	35
2. Examen de la cuestión en el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General (4-10 de noviembre de 1956)	

a) Inclusión del tema en el Programa	37
b) Aprobación de la resolución de la Asamblea General 1004 (ES-II) de fecha 4 de noviembre de 1956	37
c) Aprobación de las resoluciones 1005 (ES-II), 1006 (ES-II) y 1007 (ES-II) de la Asamblea General, de fecha 9 de noviembre de 1956	38
d) Aprobación de la resolución 1008 (ES-II) de la Asamblea General, de fecha 10 de noviembre de 1956	39
3. Examen de la cuestión por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones	
a) Medidas tomadas por el Secretario General en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General en su segundo período extraordinario de sesiones de emergencia	39
b) Aprobación de las resoluciones 1127 (XI), 1128 (XI) y 1129 (XI) adoptadas por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1956	40
c) Informe del Secretario General del 30 de noviembre de 1956	42
d) Comunicación del Gobierno de Hungría con respecto a la propuesta visita del Secretario General a Budapest, y aprobación de la resolución 1130 (XI) adoptada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1956	42
e) Cambio de comunicaciones con respecto al cumplimiento de la resolución 1130 (XI) de la Asamblea General	43
f) Aprobación por la Asamblea General de la resolución 1131 (XI) del 12 de diciembre de 1956 y nueva comunicación del Gobierno de Hungría acerca de la propuesta visita del Secretario General a Budapest	43
g) Informe del Secretario General del 5 de enero de 1957	45
h) Creación de la Comisión Especial para el problema de Hungría (resolución 1132 (XI) de la Asamblea General, enero de 1957)	46
i) Otros acontecimientos	47
4. Informe de la Comisión Especial para el Problema de Hungría	47
B. <i>Asistencia humanitaria al pueblo de Hungría</i>	
1. Socorro al pueblo húngaro en Hungría	
a) Necesidades del pueblo húngaro	49
b) Respuesta de las demás naciones	49
c) Programas internacionales de socorro	50
2. Asistencia a los refugiados húngaros	
a) Afluencia de refugiados	51
b) Llamamientos internacionales y cómo se respondió a ellos ...	51
c) Coordinación del socorro de urgencia	51
d) Reasentamiento	51
e) Repatriación	51
f) Cuidado y manutención	52
g) Búsqueda de personas de paradero desconocido	52
h) Necesidades a largo plazo	52
i) Asistencia que todavía se necesita	52

III. OTROS ASUNTOS POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD

1. La cuestión del desarme	53
2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos	54
3. Denuncia formulada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la URSS y de sus actividades subversivas en contra de esos Estados	56
4. Cuestión de la reforma de la Carta para aumentar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de miembros del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia	56
5. Proyecto de convención sobre régimen de consultas	57
6. Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas	57
7. La cuestión de Chipre	58
8. La cuestión de Argelia	60
9. Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana	63
10. La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política de segregación racial (<i>apartheid</i>) del Gobierno de la Unión Sudafricana	63
11. La cuestión India-Pakistán	64
12. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)	66
13. La cuestión de Corea	67
14. La cuestión de la representación de China	71
15. Cambios en los Miembros del Consejo de Seguridad, en la Comisión de Desarme y en la Comisión de Observación de la Paz	71

IV. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

A. *Asuntos económicos y sociales*

1. Estudios económicos	73
2. Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados	74
3. Desarrollo de la cooperación económica internacional y expansión del comercio internacional	77
4. Problemas internacionales relativos a los productos básicos	78
5. Problemas fiscales y financieros	79
6. Colaboración internacional en cuestiones de cartografía	80
7. Transportes y comunicaciones	80

8. Servicios de estadística de las Naciones Unidas	82
9. Actividades económicas regionales	84
10. Derechos humanos	91
11. Condición jurídica y social de la mujer	95
12. Estupefacientes	97
13. Asuntos sociales	100
 B. <i>Asistencia técnica</i>	
1. Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo económico	106
2. Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas	108
C. <i>Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia</i>	108
D. <i>Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados</i>	109
E. <i>Cuestiones de coordinación y relaciones con organismos especializados</i>	111
 V. ASUNTOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y A LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS	
 A. <i>Territorios en fideicomiso</i>	
1. Funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria	113
2. Terminación del acuerdo sobre administración fiduciaria relativo al Togo bajo administración británica	115
3. Condiciones existentes en los territorios en fideicomiso	
1) Territorios en fideicomiso del Africa Occidental	115
2) Territorios en fideicomiso del Africa Oriental	118
3) Territorios en fideicomiso del Pacífico	120
 B. <i>Territorios no autónomos</i>	
1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta	122
2. Examen de la información transmitida	122
3. Cuestiones generales relativas a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta	123
4. Información sobre el progreso alcanzado por los territorios no autónomos	124
5. Colaboración internacional para el progreso económico y social	124
C. <i>Cuestión del Africa Sudoccidental</i>	125

VI. ASUNTOS JURÍDICOS

1. Corte Internacional de Justicia	127
2. Comisión de Derecho Internacional	131
3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar	133
4. Cuestión de la definición de la agresión y asuntos relacionados con ella	133
5. Tratados y convenciones multilaterales	134
6. Prerrogativas e inmunidades	136
7. Reglamentos de los órganos de las Naciones Unidas	137
8. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas	137
9. Propuesta de convocación de una conferencia general para la revisión de la Carta	139

VII. MAYOR COMPRENSIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA

141

VIII. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

1. Servicios de conferencias y documentos	147
2. Servicios generales	149
3. Administración del personal	150
4. Asuntos financieros	153

Prólogo

En este documento presento a la Asamblea General mi duodécima memoria anual sobre la labor realizada por la Organización desde el 16 de junio de 1956 hasta el 15 de junio de 1957.

La memoria se atiene a la modalidad seguida en años anteriores, salvo que las cuestiones relativas al Oriente Medio y a Hungría figuran separadamente en los capítulos I y II, mientras que el capítulo III se ocupa en los demás asuntos políticos y de seguridad.

La reseña de la función que la Organización desempeña en los asuntos mundiales, y que normalmente aparece en forma de Introducción a mi memoria anual, será presentada este año como adición a este documento en una fecha más próxima a la apertura del duodécimo período de sesiones.



DAG HAMMARSKJÖLD
Secretario General

25 de junio de 1957

Capítulo I

CUESTIONES RELATIVAS AL ORIENTE MEDIO

1. Grado de observancia de los Acuerdos de Armisticio General y de las resoluciones del Consejo de Seguridad (abril-octubre de 1956)

a) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, DEL 9 DE MAYO DE 1956

En la cuestión de Palestina se dió cima a una nueva etapa al terminar el Secretario General la misión que le fué encomendada en la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el 4 de abril de 1956 para que llevase a cabo un estudio y presentase el oportuno informe acerca del grado de observancia de los Acuerdos de Armisticio General y de las resoluciones pertinentes y para que conviniese con las partes en la adopción de medidas que permitiesen reducir la tirantez existente a lo largo de las líneas de demarcación del Armisticio. El informe del Secretario General del 9 de mayo de 1956 (S/3569) tenía por objeto aclarar los problemas fundamentales que existían e indicar ciertas líneas de conducta que, de ser observadas por las partes en colaboración con los órganos de las Naciones Unidas creados al efecto, podrían llevar a un grado de observancia total de los Acuerdos de Armisticio.

Según la opinión del Secretario General, confirmada por las conversaciones sostenidas en la región, el restablecimiento de la completa observancia de los Acuerdos de Armisticio representaba una etapa que había que superar para hacer posible el avance con respecto a las cuestiones principales. Ese restablecimiento dependía a su vez de que se restableciese la cesación del fuego. Para ello, el Secretario General había obtenido de todas las partes seguridades incondicionales de que se respetaría la cesación del fuego especificada en los Acuerdos de Armisticio General y en varias resoluciones del Consejo de Seguridad. El Secretario General advirtió que las seguridades que había recibido fueron dadas conforme a la Carta y que su carácter de incondicional únicamente se hallaba limitado por la reserva relativa al derecho de legítima defensa.

A la gestión del Secretario General había servido de base la actitud declarada en su informe del 9 de mayo, con la que las partes se manifestaron conformes, de que las cláusulas sobre cesación del fuego que figuraban en los diversos Acuerdos de Armisticio revestían un carácter especial respecto de otros artículos de los Acuerdos, porque dichas cláusulas reafirmaban una obligación contraída por todos los Miembros de las Naciones Unidas; porque encarnaban la orden reafirmada por el Consejo de Seguridad en su resolución del 11 de agosto de 1949 de que se observase una cesación incondicional del fuego; y porque en varios Acuerdos no formaban parte de los casos en que dichos

Acuerdos podían ser modificados por consentimiento mutuo. En consecuencia, la observancia de la cláusula relativa a la cesación del fuego solamente podía estar condicionada por la observancia recíproca de la misma cláusula por la otra parte. La infracción de otros artículos no podía servir de justificación para infringir la cláusula de cesación del fuego. De no reconocerse así, cualquiera de tales infracciones podría no sólo invalidar el régimen de armisticio sino también poner de hecho en peligro la propia cesación del fuego.

A fin de facilitar el mantenimiento de la cesación del fuego, se propusieron varios arreglos prácticos. Tres de estas propuestas fueron mencionadas concretamente en la resolución del Consejo de Seguridad del 4 de abril de 1956: retiro de las fuerzas de las líneas de demarcación del Armisticio, plena libertad de movimiento para los observadores a lo largo de las líneas de demarcación del Armisticio, en las zonas desmilitarizadas y en las zonas defensivas, y establecimiento de arreglos locales para prevenir incidentes y para determinar prontamente cualquier violación de los Acuerdos de Armisticio.

Además, en el informe del Secretario General del 9 de mayo se describían ciertos arreglos locales. Entre ellos figuraban algunas recomendaciones que habían sido propuestas anteriormente por el Jefe de Estado Mayor y que el Consejo de Seguridad había hecho suyas, pero que aún no habían sido puestas en práctica, así como propuestas adicionales originadas en las consultas realizadas entre el Secretario General y el Jefe de Estado Mayor y los gobiernos interesados en relación con ciertas zonas críticas.

El Consejo, por su resolución del 4 de junio, hizo suya la opinión del Secretario General acerca de la necesidad de restablecer la plena observancia de los Acuerdos de Armisticio. Instó a las partes a que implantasen rápidamente las medidas ya convenidas con el Secretario General y a que cooperasen con él y el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua para dar efectividad a sus nuevas propuestas prácticas. El Consejo pidió al Jefe de Estado Mayor que siguiese vigilando la cesación del fuego en cumplimiento de la resolución del Consejo del 11 de agosto de 1949, reafirmó la necesidad de que tuviesen plena libertad de movimiento los observadores militares de las Naciones Unidas, y pidió al Secretario General que siguiese ejerciendo sus buenos oficios cerca de las partes con miras al total cumplimiento de los Acuerdos de Armisticio General.

b) MEDIDAS PARA LA CESACIÓN DEL FUEGO

Durante el período transcurrido entre la presentación del informe del Secretario General del 9 de mayo

y el ataque perpetrado contra Egipto en 29 de octubre de 1956 por las fuerzas armadas de Israel, el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua y el Secretario General, este último en virtud del mandato del 4 de abril y 4 de junio que le había conferido el Consejo de Seguridad, trataron de llevar a cabo la implantación de propuestas concretas encaminadas a respaldar la cesación del fuego. A continuación se describen brevemente algunas de dichas propuestas y los acontecimientos con ellas relacionados.

Puestos de observación próximos a la zona de Gaza

Los Gobiernos de Egipto e Israel aceptaron la propuesta presentada en abril de 1956 de que se establecieran varios puestos de observación de las Naciones Unidas a ambos lados de la línea de demarcación del Armisticio. Israel, sin embargo, fijó un plazo de seis meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 1956, para la vigencia de este régimen. Los puestos de las Naciones Unidas estarían reforzados por patrullas del Organismo para la Vigilancia de la Tregua y se prometió a los observadores que en todo momento tendrían libre acceso a dichas posiciones. Se establecieron en total 12 puestos en lugares seleccionados, seis a cada lado de la línea de demarcación del Armisticio.

Las condiciones existentes a lo largo de la línea de demarcación que rodeaba la Faja de Gaza, condiciones que no habían variado durante cerca de dos meses y medio, empezaron a empeorar hacia mediados de julio. En un informe fechado el 5 de septiembre (S/3659, anexo), el Jefe de Estado Mayor manifestó que la presencia de los observadores no siempre había logrado que las partes se abstuviesen de disparar a través de la línea de demarcación ni que se privasen de cruzarla. A su juicio, las medidas adicionales que se habían propuesto pero que no habían sido puestas en práctica podrían haber contribuido considerablemente a evitar tantas infracciones como había habido a la orden de cesar el fuego.

Colocación de señales para fijar la línea de demarcación

En su informe del 9 de mayo, el Secretario General manifestó que ambas partes habían convenido en que el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua colocase señales bien visibles a lo largo de la línea de demarcación que rodea la Faja de Gaza. Se habían hecho los preparativos adecuados para comenzar este trabajo el 20 de junio. El 19 de junio, el delegado principal de Israel en la Comisión Mixta de Armisticio de Egipto e Israel manifestó que su país no estaba conforme con que los observadores militares de las Naciones Unidas colocasen las señales y sugirió otras disposiciones. Sin embargo, el Gobierno de Egipto no vio razón alguna para que se modificase el arreglo que ambas partes habían aceptado antes.

Retiro de las fuerzas a 500 metros de la línea de demarcación

En las negociaciones llevadas a cabo en abril, el Gobierno de Egipto convino en que las partes retiraran sus fuerzas armadas de la línea de demarcación a una distancia que permitiera eliminar o reducir en gran parte la posibilidad de violaciones de la cesación del fuego. Israel indicó que se abstendría de enviar patrullas hasta la línea de demarcación salvo cuando ello fuese indispensable. El Jefe de Estado Mayor mani-

festó que, en la práctica, los arreglos de Israel no habían resultado ser suficientemente eficaces.

La zona desmilitarizada de El Auja

Los artículos VII y VIII del Acuerdo de Armisticio General entre Egipto e Israel establecen una zona desmilitarizada que tiene por centro El Auja y prohíben la presencia de fuerzas armadas en dicha zona. También prohíben el mantenimiento por Egipto de posiciones defensivas en una zona adyacente situada al oeste de la zona desmilitarizada, y limitan las armas y tropas que puede haber en las zonas defensivas a ambos lados de la línea. Tanto Egipto como Israel habían manifestado al Secretario General que estaban dispuestos a cumplir plenamente estos dos artículos, siempre que la situación prevista en el Acuerdo de Armisticio volviese a imperar totalmente. No obstante, el Secretario General señaló la opinión expresada durante las negociaciones de que dicho cumplimiento había de ocupar el lugar que le correspondía respecto de otras medidas encaminadas a la realización de los objetivos del Acuerdo de Armisticio.

Desde el 21 de septiembre de 1955, fecha en que la zona desmilitarizada fué ocupada por fuerzas armadas de Israel, el Secretario General y el Jefe de Estado Mayor habían tratado de lograr que Israel retirase sus fuerzas armadas y que Egipto abandonase posiciones que estaban prohibidas. El Gobierno de Israel aseguró que en principio aceptaba totalmente el programa de tres puntos formulado el 3 de noviembre de 1956 por el Jefe de Estado Mayor y el Secretario General para que se llevase a cabo un retiro de fuerzas equilibrado. Sin embargo, el retiro convenido no llegó nunca a realizarse.

La aldea de El Auja es asimismo, en virtud del artículo X del Acuerdo de Armisticio, el lugar en que radica la sede de la Comisión Mixta de Armisticio de Egipto e Israel. Por el hecho de haber ocupado esta zona, Israel principió por limitar el acceso a El Auja a los miembros egipcios de la Comisión y después prohibió en absoluto dicho acceso.

Además, Israel implantó restricciones sobre el acceso de observadores militares de las Naciones Unidas a través de la zona desmilitarizada a la sede de la Comisión Mixta de Armisticio, y sobre sus actividades. El Jefe de Estado Mayor, en su informe del 5 de septiembre de 1956, señaló la importancia de que se mantuvieran observadores en la zona desmilitarizada y de que éstos tuvieran libertad de movimiento y pudieran enviar mensajes al Presidente de la Comisión y al Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua por los medios más rápidos que fuese posible. Era tal la importancia estratégica de las carreteras que parten de El Auja que, si una de las partes proyectase atacar en gran escala el territorio de la otra, forzosamente habrían de establecerse líneas principales o secundarias de operaciones a través de la zona desmilitarizada. Por lo tanto, la presencia de observadores militares de las Naciones Unidas constituía un factor disuasivo contra cualquier agresión.

El 3 de septiembre de 1956, el Sr. Ben Gurion, Primer Ministro de Israel, en una entrevista que tuvo con el Jefe de Estado Mayor, insistió en su negativa de permitir que la Comisión celebrase reuniones en El Auja, manifestando que los respectivos artículos del Acuerdo de Armisticio General se hallaban "en suspenso" por no haber cumplido Egipto el artículo I y la resolución del Consejo de Seguridad del 1º de sep-

tiembre de 1951 relativa a los obstáculos creados al paso por el Canal de Suez de los barcos que se dirigían a Israel.

En el informe que presentó el 27 de septiembre de 1956 (S/3659), el Secretario General comentó el argumento aducido por Israel de que cada uno de los Acuerdos constituía una unidad indivisible. A base de esto, lo que una parte interpretase como incumplimiento por la otra parte en los Acuerdos de Armisticio, especialmente de su artículo I fundamental, podía considerarse como motivo para que la parte que viese amenazados sus intereses quedase desligada de las obligaciones que había contraído en virtud del Acuerdo de Armisticio (aparte el compromiso de cesación del fuego), inclusive de las obligaciones que había contraído para con las Naciones Unidas en relación con la actuación de observadores prevista en los Acuerdos. Aun reconociendo que los Acuerdos de Armisticio habían sido previamente acuerdos bilaterales, el Secretario General señaló la circunstancia de que, con el consentimiento de las partes, los Acuerdos habían sido confirmados por el Consejo de Seguridad y que había de considerárseles como equivalentes a un compromiso internacional. Esa circunstancia hacía que la aplicación de la teoría de "indivisibilidad" a los Acuerdos de Armisticio se viese sujeta a muy serias limitaciones.

Acuerdos entre los comandantes locales

Con respecto a la situación existente en la línea de demarcación fijada por el Armisticio celebrado entre Jordania e Israel, el Secretario General dió cuenta de que las negociaciones entabladas para establecer acuerdos entre comandantes locales relativos a la totalidad de la línea habían adelantado mucho en el otoño de 1955. Había diferencias de opinión en cuanto a la presencia de observadores de las Naciones Unidas. En abril de 1956 se había llegado a un acuerdo sobre una cláusula en la que se especificaba que, a petición de cualquiera de las dos partes, un observador militar de las Naciones Unidas asistiría a las reuniones de los comandantes locales, pero estos acuerdos entre comandantes locales no llegaron a ser firmados.

Puestos de observación en el lago Tiberiades

La propuesta de que se estableciesen puestos de observación en las riberas este y nordeste del lago Tiberiades fué aceptada por Siria y puesta en práctica en mayo de 1956. Israel había aplazado su decisión para más adelante y, habiéndosele recordado el asunto varias veces, había rechazado la propuesta en septiembre de 1956 así como la sugestión de mantener en el lago una embarcación de las Naciones Unidas.

c) ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA CESACIÓN DEL FUEGO

En incidentes ocurridos en la zona de Néguev y en la Faja de Gaza en los días 14 y 16 de agosto de 1956, un camión israelí y un vehículo particular fueron volados por minas y un autobús y un jeep israelíes fueron atacados por los árabes. El Secretario General hizo una declaración (S/3638) en la que recordó a los Gobiernos de Egipto e Israel su deber de observar estrictamente la cesación del fuego, como también su obligación "de adoptar medidas eficaces contra el cruce de la línea de demarcación y contra los actos de violencia con él relacionados". Al día siguiente, a raíz de dos nuevos incidentes en los que un automóvil egipcio ocupado por personal médico fué objeto de una emboscada en territorio dominado por Egipto en la

que resultaron muertos nueve egipcios, el Secretario General hizo una nueva declaración en la que advirtió que la parte que cometía tales actos, ya fuese para iniciar o para prolongar una cadena de desórdenes, asumía una gran responsabilidad. La diferencia que pudiera haber entre el grado de responsabilidad imputable a los que resultasen haber iniciado semejante cadena de desórdenes y el grado de responsabilidad que cupiese a la otra parte no eliminaba la responsabilidad que suponía para esta última el perpetrar actos de violencia en contravención de las disposiciones de la Carta.

Con fecha 27 de septiembre, el Secretario General presentó su informe (S/3659) sobre los acontecimientos que se habían desarrollado a partir del 4 de junio de 1956. En el informe se señalaba la importancia del restablecimiento, logrado durante las negociaciones de abril de 1956, de la obligación general e independiente de hacer cesar el fuego. Además, las seguridades dadas a las Naciones Unidas sobre la observancia incondicional de las cláusulas relativas a la cesación del fuego hacían que las Naciones Unidas fuesen parte en las obligaciones de dicha cesación, con lo que una vez más quedaba claramente establecido su derecho a adoptar medidas que asegurasen el cumplimiento de dichas obligaciones.

Aún había posibilidades de que se adoptasen medidas constructivas sobre cuestiones tales como la abstención de amenazas repetidas, el cumplimiento por parte de Egipto e Israel de los artículos del Acuerdo de Armisticio relativos a la zona desmilitarizada de El Auja y a las zonas defensivas adyacentes, el restablecimiento de la libertad de navegación de los barcos israelíes por el Canal de Suez de conformidad con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el 1º de septiembre de 1951, y otros asuntos, como el de la repatriación y el reasentamiento de refugiados o la utilización de las aguas del Jordán, acerca de los cuales hacía mucho tiempo que se desatendían, o incluso recusaban, las decisiones de las Naciones Unidas.

El Secretario General estimó que los gobiernos de la región, a quienes incumbía principalmente la responsabilidad de cambiar la situación, no habían implantado aún una disciplina suficientemente firme para evitar incidentes que, poco a poco, habían de minar necesariamente el cumplimiento de la orden de cesación del fuego. Los actos de violencia que se suponían haber sido cometidos por una de las partes habían ido seguidos inmediatamente de actos de violencia que era de suponer habían sido realizados por personas de la parte contraria, en "defensa propia", como parte de una política de represalias. Incluso en aquellos casos en que los actos de violencia parecían limitarse a una norma de "reciprocidad a corto plazo", siempre se corría el riesgo de que tales incidentes provocasen una serie de acontecimientos, como ocurrió cuando se tomaron las disposiciones oportunas para lograr la cesación del fuego a mediados de abril. Este hecho de por sí justificaba plenamente, a juicio del Secretario General, la posición del Consejo de Seguridad acerca de todos los actos de violencia, incluso de aquellos que reflejasen una política de represalias.

d) ACONTECIMIENTOS RELATIVOS A LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN FIJADA POR EL ARMISTICIO CONCERTADO ENTRE ISRAEL Y SIRIA

En el anexo VII al informe del Secretario General del 9 de mayo, el Jefe de Estado Mayor había señalado

que la Comisión Mixta de Armisticio de Israel y Siria no había celebrado reuniones ordinarias ni extraordinarias desde 1951. Siria había denunciado violaciones cometidas por Israel del artículo V del Acuerdo de Armisticio, en el que se establecía una zona desmilitarizada y se conferían al Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio ciertas atribuciones claramente definidas en relación con dicha zona. Israel había sostenido que las violaciones del artículo V constituían un asunto que incumbía a la delegación de Israel y al Presidente de la Comisión. La oposición de Israel a que se sometiese a la Comisión Mixta de Armisticio la interpretación del artículo V para que se llegase a una decisión acerca de la competencia de la Comisión en la zona desmilitarizada había impedido que se reanudasen las reuniones ordinarias de la Comisión.

En su informe del 5 de septiembre de 1956, el Jefe de Estado Mayor comunicó que Israel había construido en las cercanías de Hagovrim y Susita, dentro de la zona desmilitarizada, grandes fortificaciones consistentes en trincheras de ataque y de refugio, fortines de hornigón y alambradas. A su parecer, estas obras iban más allá de lo necesario para la protección de la población civil. Pese al ruego del Jefe de Estado Mayor de que se procediese a deshacer dichas obras, Israel había seguido ampliando sus fortificaciones en dicha región. La delegación de Israel se había quejado de que ciertas fortificaciones sirias se hallaban dentro de los límites de la zona desmilitarizada. Al rogar el Jefe de Estado Mayor a las autoridades sirias que las derribasen, éstas habían respondido que estaban dispuestas a hacerlo cuando los israelíes derribasen las fortificaciones permanentes arriba citadas.

En una entrevista celebrada el 3 de septiembre con el Jefe de Estado Mayor, el Primer Ministro de Israel había dicho que Israel no podía acceder a destruir dichas fortificaciones ya que Siria estaba violando el artículo I del Acuerdo de Armisticio General.

e) ACONTECIMIENTOS RELATIVOS A LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN FIJADA POR EL ARMISTICIO CONCERTADO ENTRE JORDANIA E ISRAEL

Dos incidentes que se produjeron en los días 24 y 25 de julio en la zona de Sheikh Abd el Aziz y en el Monte Scopus, cerca de Jerusalén, con intenso intercambio de fuego a través de la línea de demarcación del Armisticio, constituyeron, como dijo el Secretario General en un informe del 3 de agosto de 1956 (S/3632), "una amenaza mayor para la política de cesación del fuego que las que habían tenido efecto hasta entonces".

En un informe fechado el 26 de septiembre (S/3660), el Jefe de Estado Mayor reseñaba los incidentes ocurridos a lo largo de la línea de demarcación entre Jordania e Israel durante el período comprendido entre el 29 de julio y el 25 de septiembre, indicando que la situación había empeorado seriamente. Los principales incidentes consistieron en el cruce de grupos de personas armadas de Israel a Jordania; en el cruce de grupos de personas armadas de Jordania a Israel y en el ataque cometido contra un autobús; en el cambio de disparos entre patrullas; en disparos de ametralladora hechos desde una posición jordania contra un grupo de miembros de un congreso arqueológico que estaba examinando un lugar situado en Ramat Rahel, en la zona de Jerusalén; en disparos hechos a través de la línea de demarcación; y en

ataques perpetrados por fuerzas armadas de Israel contra tres puestos de policía situados en Rahwa el 11 de septiembre, en Gharandal el 13 de septiembre y en Sharafi, cerca de la aldea de Husan, el 25-26 de septiembre.

En un informe fechado el 11 de octubre (S/3670) acerca de hechos posteriores, el Jefe de Estado Mayor manifestaba que el día 1º de octubre la delegación de Israel se había retirado de una reunión que estaba celebrando la Comisión Mixta de Armisticio porque su Presidente había indicado que tenía la intención de votar, a base de las pruebas presentadas, a favor de una enmienda jordania al proyecto de resolución de Israel relativo al incidente de Ramat Rahel. Varias veces, en ocasiones anteriores, representantes de ambas partes se habían retirado de las reuniones de la Comisión Mixta de Armisticio. Sin embargo, en esta ocasión, la delegación de Israel, contestando al Jefe de Estado Mayor, que le había señalado la conveniencia de pedir que los observadores militares de las Naciones Unidas investigasen el grave incidente que se había producido, y la utilidad de celebrar una reunión extraordinaria, manifestó que el Gobierno de Israel no estaba conforme con que dicho incidente fuese investigado por observadores militares de las Naciones Unidas. Ya lo estaban investigando las autoridades israelíes. Hasta nuevo aviso, el Gobierno de Israel se atendería a la política de que no fuesen los observadores militares de las Naciones Unidas los que investigasen las denuncias de Israel. Desde entonces, las autoridades israelíes han llevado a cabo sus propias investigaciones respecto de incidentes ocurridos en su lado de la línea de demarcación.

El 17 de octubre, el Jefe de Estado Mayor presentó un nuevo informe (S/3685) sobre el ataque realizado por fuerzas de Israel en la noche del 10 al 11 de octubre contra la aldea de Qalqiliya, en el que se destruyó con explosivos un puesto de policía y se ocasionaron grandes bajas. Se señaló la situación que había precedido a este incidente, en el cual una de las partes en el Acuerdo de Armisticio General había realizado sus propias investigaciones, que no estaban sujetas — ni podían estarlo — a comprobación ni confirmación por parte de los observadores militares de las Naciones Unidas, había hecho públicos los resultados de dichas investigaciones, había sacado de ellas sus propias conclusiones y, a base de las mismas, había hecho intervenir a sus fuerzas militares.

f) EXAMEN POR PARTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR JORDANIA E ISRAEL

El 15 de octubre, Jordania solicitó que se reuniese el Consejo de Seguridad para examinar la grave situación existente en la línea de demarcación fijada por el Armisticio concertado entre Jordania e Israel. El 17 de octubre, el representante de Israel solicitó que se incluyese en el orden del día una denuncia de su país acerca de las persistentes violaciones jordanas al Acuerdo de Armisticio General entre Jordania e Israel.

En la reunión celebrada por el Consejo el 19 de octubre se incluyeron ambas cuestiones en el orden del día. El representante de Jordania hizo una declaración en la que puso de manifiesto los ataques realizados por fuerzas armadas de Israel contra las aldeas de Rahwa, Gharandal, Wadi Fukin, Husan, Qalqiliya, Habla, Sufin, Jayyus y Nabi Ilyas. Calificó el último incidente que se había producido en Qalqiliya de acto

de agresión, que no podía considerarse en modo alguno como incidente fronterizo. Se trataba ya de una "verdadera guerra". Atribuyó lo sucedido a la política expansionista del Gobierno de Israel y se refirió a declaraciones hechas por el Primer Ministro de dicho país en el sentido de que el Estado de Israel había sido establecido en sólo una parte de la tierra de Israel. Acusó también a Israel de haber elegido el momento de atacar a fin de entorpecer las gestiones que conjuntamente realizaban los Estados árabes para solucionar pacífica y amigablemente con las Potencias occidentales el problema del Canal de Suez.

En la sesión del 25 de octubre, el representante de Israel acusó a Jordania de repetidas violaciones del Acuerdo de Armisticio General, a las que acompañaban, alentándolas, declaraciones hechas por el Rey y por dirigentes políticos y militares de Jordania en las cuales se fijaba como objetivo la destrucción de Israel. Mencionó incidentes que habían ocasionado daños a Israel desde mayo de 1956, y se refirió a las repetidas condenaciones de Jordania por la Comisión Mixta de Armisticio. Estas no habían dado ningún resultado. El representante de Israel mencionó las actividades realizadas por bandas de fedayín, que según él constituían parte de la organización militar jordania, y estaban equipadas, armadas y entrenadas por el ejército jordano, teniendo sus bases de operaciones en aldeas fronterizas. A su juicio, Egipto y Jordania compartían la responsabilidad que recaía sobre esta parte del ataque lanzado contra Israel desde territorio jordano. Afirmó que cualquier gobierno que se hubiera visto en el caso de Israel habría procedido como lo había hecho Israel, y tal vez con más rapidez.

El representante de Israel manifestó también que el Consejo de Seguridad, el Secretario General, el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua y la Comisión Mixta de Armisticio no habían conseguido proteger mejor que en otras circunstancias la vida de un solo ciudadano de Israel. En consecuencia, su gobierno no concedía gran importancia a la "rutina de condenaciones verbales y de investigaciones". Afirmó que Israel estaba dispuesto a observar fielmente la cesación del fuego siempre que la otra parte hiciera otro tanto. Israel no empezaría ninguna guerra. Israel no iniciaría ningún acto de violencia.

El examen de este problema no fué reanudado durante el período comprendido en esta memoria.

2. La cuestión del Canal de Suez (julio-octubre de 1956)

El 26 de julio de 1956, Egipto proclamó la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez y puso en manos de una autoridad explotadora egipcia la administración del tránsito por el Canal, que en 1955 fué de unos 14.000 buques con un tonelaje neto de unos 107 millones de toneladas. En el decreto correspondiente se preveía el pago de una indemnización basada en el valor que tenían las acciones en el mercado el día 25 de julio, indemnización que se haría efectiva contra entrega de todo el activo y de toda la propiedad de la Compañía del Canal.

La nacionalización de la Compañía del Canal fué seguida de una serie de acontecimientos entre los cuales figuraron largas negociaciones sobre la manera de resolver la cuestión de Suez, la acentuación del empeoramiento de la situación, especialmente a lo largo

de las líneas de demarcación del armisticio entre Egipto e Israel y entre Jordania e Israel en septiembre y octubre, y la acción militar iniciada en Egipto por Israel y por fuerzas anglo-francesas. Tras esfuerzos que finalmente tuvieron éxito, realizados por las Naciones Unidas para conseguir el retiro de dichas fuerzas, entre los que figuraron la creación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y la desobstrucción, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, del Canal de Suez, que había quedado intransitable, se iniciaron nuevas negociaciones acerca del Canal y se realizaron nuevos esfuerzos para fomentar la paz en la región mediante el restablecimiento de la plena observancia del Acuerdo de Armisticio.

Después de la nacionalización del Canal, que tuvo efecto en julio de 1956, Francia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido convinieron, en negociaciones celebradas en Londres entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 1956, en que la acción de Egipto amenazaba "la libertad y seguridad del Canal, tal como se hallaban garantizadas por el Convenio de 1888", y el Reino Unido distribuyó invitaciones para una conferencia, que se celebraría en Londres, de las partes en la Convención de 1888 y de otras naciones principalmente interesadas en la utilización del Canal. El propósito declarado de dicha conferencia era estudiar medidas para establecer disposiciones, en virtud de un régimen internacional, que asegurasen el funcionamiento del Canal tal como lo garantizaba la Convención, habida cuenta de los legítimos intereses de Egipto.

Entretanto Egipto había tomado posesión del Canal, de sus instalaciones y de todas las propiedades que tenía la Compañía del Canal en dicho país. Francia y el Reino Unido respondieron negándose a pagar derechos de tránsito a la nueva autoridad administradora egipcia. Junto con los Estados Unidos, bloquearon todas las cuentas egipcias, inclusive las de la Compañía del Canal.

Egipto se negó a asistir a la Conferencia de Londres, alegando que había sido convocada sin consultar a Egipto para discutir el porvenir de una parte integrante del territorio de dicha nación. Propuso en cambio que se celebrase una conferencia de los 45 usuarios del Canal con objeto de examinar de nuevo el Convenio de Constantinopla de 1888 y de confirmar y garantizar la libertad de navegación a través del Canal.

En la Conferencia de Suez, que se celebró en Londres entre el 16 y el 24 de agosto de 1956, 18 de las 22 Potencias que asistieron a la misma llegaron a un acuerdo sobre las propuestas que habían de presentarse a Egipto. Las 18 Potencias propusieron un régimen concreto que garantizase en todo momento y a todas las Potencias el libre uso del Canal, habida cuenta de los derechos soberanos de Egipto. Dicho régimen había de asegurar: 1) el eficaz funcionamiento y desarrollo del Canal y una vía de navegación libre, abierta y segura; 2) la separación de dicho funcionamiento de la política de cualquier nación; 3) una utilidad monetaria equitativa para Egipto, que aumentaría a medida que se ampliase el Canal y fuera utilizado por mayor número de buques; y 4) derechos de tránsito por el Canal que fueren tan reducidos como lo permitiesen las anteriores disposiciones. Para lograr tales resultados, una Junta del Canal de Suez, de la que formaría parte Egipto, dirigiría el funcionamiento, mantendría y desarrollaría el Canal, y enviaría informes periódicos a las Naciones Unidas.

Habría una comisión de arbitraje encargada de solucionar las controversias que se suscitasen y de aplicar sanciones efectivas, y que consideraría todo uso o amenaza de fuerza para entorpecer el funcionamiento del Canal como una amenaza contra la paz y como una violación de la Carta.

En la Conferencia, la India propuso una solución conciliadora que representaba un término medio entre la posición adoptada por la mayoría y el exclusivo dominio, administración del funcionamiento y desarrollo del Canal por parte de Egipto. Propuso que se crease un órgano consultivo que asesorase a Egipto de conformidad con los intereses de los usuarios del Canal y que mantuviese contacto con las Naciones Unidas. Esta propuesta fué apoyada por Ceilán, Indonesia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El plan de las 18 Potencias fué presentado en el Cairo al Gobierno de Egipto el 3 de septiembre de 1956 por una comisión compuesta de representantes de cinco naciones a cuyo frente se hallaba el Primer Ministro de Australia. El 9 de septiembre la comisión comunicó que el plan había sido rechazado por el Gobierno de Egipto, el cual, según manifestó la comisión, se resistía a todo dominio o administración del funcionamiento y desarrollo del Canal por cualquiera que no fuese el propio gobierno citado. En un memorándum fechado el 10 de septiembre, Egipto declaró que, en esencia, las propuestas consistían en establecer un dominio internacional, en vez de egipcio, sobre el Canal, y en estipular sanciones. En vez de ello propuso que se crease un órgano de negociación en el que estuviesen representadas las opiniones de los distintos usuarios, para buscar una solución a las cuestiones relacionadas con la libertad de navegación a través del Canal, el desarrollo del mismo y la fijación de derechos equitativos de tránsito. Esta propuesta, que Egipto declaró había sido aceptada por 21 Estados, fué considerada por la segunda Conferencia de Suez, celebrada en Londres entre el 19 y 21 de septiembre por los partidarios del plan de las 18 Potencias, como demasiado vaga para que pudiera constituir una base útil de deliberación.

El 12 de septiembre, los representantes de Francia y el Reino Unido comunicaron al Consejo de Seguridad que la situación creada por la acción de Egipto al intentar poner fin unilateralmente al régimen de funcionamiento internacional del Canal de Suez, que había sido confirmado y puesto en vigor mediante el Convenio de 1888, podría poner en peligro el tránsito libre y abierto de buques por el Canal. La negativa de Egipto a entablar negociaciones a base de las propuestas de las 18 Potencias, que, a juicio de los citados representantes, ofrecían medios para llegar a una solución justa y equitativa, constituía a su modo de ver un empeoramiento de la situación y, de prolongarse esa situación, representaría un peligro manifiesto para la paz y la seguridad.

El mismo día, el Primer Ministro del Reino Unido declaró que, de conformidad con Francia y los Estados Unidos, se crearía una asociación que permitiese ejercer sus derechos a los usuarios del Canal. En la segunda Conferencia de Suez que se celebró en Londres se previó la creación de una asociación voluntaria, la Asociación de Usuarios del Canal de Suez, órgano que había sido sugerido originalmente por los Estados Unidos. Dicha Asociación, en la que ingresaron como miembros 15 de las 18 naciones que asistieron a la

conferencia, constituía una fórmula provisional hasta que se encontrase una solución más permanente, y tenía por objeto ayudar a sus miembros en el ejercicio de sus derechos como usuarios del Canal en consonancia con el Convenio de 1888, habida cuenta de los derechos de Egipto.

Entretanto, el 15 de septiembre, en una declaración de la URSS, enviada al Consejo de Seguridad, se hacía constar que los preparativos militares del Reino Unido y Francia, llevados a cabo con el apoyo de los Estados Unidos, para coaccionar a Egipto con respecto a la cuestión de Suez, eran manifiestamente contrarios a los principios de la Carta y no podían ser considerados más que como un acto de agresión contra Egipto, el cual había ejercido sus legítimos derechos como Estado soberano al nacionalizar la Compañía del Canal de Suez, que era una empresa privada. La URSS estaba convencida de que las importantes cuestiones de la libertad de navegación y el normal funcionamiento del Canal podían y debían ser resueltas por medios pacíficos, y declaró que apoyaba las propuestas egipcias del 10 de septiembre. La URSS no podía mantenerse al margen del problema de Suez, ya que cualquier violación de la paz en aquella región no podía por menos de afectar a su propia seguridad.

El 17 de septiembre, Egipto comunicó al Consejo por carta que la alegación contenida en la carta anglo-francesa del 12 de septiembre según la cual la Compañía formaba parte del régimen establecido por el Convenio de 1888 había de considerarse como desprovista de todo fundamento jurídico, histórico o moral. Al proceder a la nacionalización, Egipto había actuado en pleno ejercicio de sus derechos soberanos y simultáneamente había reafirmado su determinación de seguir garantizando la libertad de paso por el Canal de conformidad con el Convenio de 1888, lo que no privaba a Egipto en modo alguno de su derecho a administrar el Canal. Citando las amenazas de recurrir a la fuerza y las hostiles medidas económicas tomadas por Francia y el Reino Unido, la carta establecía un contraste entre las propuestas de Egipto para entablar negociaciones y la proyectada Asociación de Usuarios del Canal de Suez, que se declaraba ser incompatible con los derechos soberanos de Egipto y constituir una violación del Convenio de 1888. Concluía diciendo que semejantes actos tenían por objeto, particularmente en lo que se refería a Francia y al Reino Unido, la virtual incautación del Canal y la destrucción de la propia independencia de Egipto. La proyectada Asociación carecía especialmente de justificación por cuanto hacía casi 60 días, pese a las dificultades creadas por Francia, el Reino Unido y la antigua Compañía del Canal de Suez, que el tránsito por el Canal se había realizado con toda regularidad y eficacia, habiendo pasado más barcos que durante el período correspondiente de 1955.

Cuando estos hechos y negociaciones, realizados fuera de la esfera de las Naciones Unidas, fracasaron en su intento de hallar una solución, las partes principalmente interesadas sometieron el problema a la Organización. El 23 de septiembre, Francia y el Reino Unido pidieron que se reuniese el Consejo de Seguridad para que examinase la situación de que le habían dado cuenta en su carta del 12 de septiembre. El 24 de septiembre, Egipto solicitó que se celebrase una reunión urgente con objeto de examinar los actos cometidos contra Egipto por algunas Potencias, particularmente por Francia y el Reino Unido, los cuales constituían un peligro para la paz y la seguridad inter-

nacionales y violaban gravemente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

El 26 de septiembre, el Consejo incluyó ambas cuestiones en su orden del día y decidió dar prioridad a la presentada conjuntamente por el Reino Unido y Francia. Se procedió a debatir la cuestión en siete sesiones públicas y tres sesiones privadas que se celebraron entre dicha fecha y el 13 de octubre, en las que participó el representante de Egipto.

El representante de Israel y los representantes de Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Siria y Yemen también intentaron participar en los debates del tema que iba a discutirse, pero no se dió curso inmediato a las solicitudes que al efecto presentaron. Sin embargo, a invitación del Consejo de Seguridad, formulada el 13 de octubre, todos estos representantes comunicaron por carta sus opiniones acerca de la cuestión.

El Consejo, en su sesión siguiente del 5 de octubre, se ocupó de un proyecto de resolución presentado por Francia y el Reino Unido, según el cual el Consejo reconocía que, al poner bajo exclusivo dominio egipcio el funcionamiento de un servicio público internacional, el Gobierno de Egipto había creado una situación que podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo, por lo tanto, tomaría las siguientes medidas: 1) reafirmaría el principio de la libertad de navegación por el Canal de Suez de conformidad con el Convenio de 1888; 2) haría suyas las propuestas presentadas por 18 de los 22 Estados que habían asistido a la conferencia celebrada en agosto en Londres, por considerarlas acertadas para llegar a una solución del problema por medios pacíficos y conformes con la justicia; 3) recomendaría que el Gobierno de Egipto cooperase mediante negociaciones en la preparación, a base de dichas propuestas, de un régimen de funcionamiento que sería aplicado al Canal, y que cooperase con la Asociación de Usuarios del Canal de Suez creada en la segunda conferencia celebrada en septiembre en Londres para ayudar a sus miembros en el ejercicio de sus derechos.

Durante las sesiones, los debates versaron sobre la historia del Canal y el carácter jurídico de la Compañía del Canal de Suez, la importancia económica del Canal, en particular su función en el transporte de petróleo del Oriente Medio, y los antecedentes y consecuencias políticas de la nacionalización del Canal. Se dijo que la parte esencial del problema consistía en armonizar los derechos soberanos de Egipto respecto del Canal de Suez con los intereses legítimos de la comunidad mundial, obteniendo las debidas seguridades con respecto a la libertad y seguridad de navegación fijadas por el Convenio de 1888 a través de una vía de excepcional importancia internacional.

Aun cuando ninguno de los partidarios del proyecto de resolución anglo-francés puso en duda la soberanía egipcia sobre el Canal o el principio del derecho de nacionalización, se insistió en que esa soberanía no significaba la inexistencia de derechos internacionales, y hubo quien mantuvo que la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez era ilegal. El carácter del Canal como vía de navegación internacional dedicada al libre tránsito de los barcos de todas las naciones había sido garantizado para siempre por el Convenio de 1888. El acto de nacionalización había destruido el equilibrio del régimen concesionario, la

declaración de Turquía de 1873 con respecto a los derechos de tránsito y el Convenio de Constantinopla de 1888, que habían garantizado los derechos de Egipto y de los usuarios.

Se alegó que de lo que realmente se trataba era de respetar las obligaciones internacionales. Subrayando el rudo golpe que había sufrido la confianza internacional ante la conducta de Egipto, sin que por ello resultasen protegidos los verdaderos intereses del pueblo egipcio, y acentuando la circunstancia de que los temores habían ido en aumento, hasta el punto de justificar la adopción de medidas preventivas, varios oradores hicieron mención, entre otros, de los siguientes factores: la sumaria anulación, sin previo aviso, de la concesión otorgada a la Compañía, que era válida hasta 1968, después de que Egipto había reafirmado su adhesión al Convenio de 1888 en el Acuerdo Anglo-Egipcio del 19 de octubre de 1954; la repudiación de un acuerdo del 10 de junio de 1956 por el que la Compañía invertiría grandes sumas de dinero en Egipto; las declaraciones que se habían hecho de que la acción realizada constituía una forma de represalia política por la actitud negativa que habían adoptado los Estados Unidos con respecto al financiamiento de la presa de Asuán, y de que los ingresos del Canal serían utilizados para construir dicha presa; y las posibles consecuencias que tendría la acción de Egipto sobre la afluencia internacional de capitales a países insuficientemente desarrollados.

Se declaró además que no sólo corrían peligro el porvenir económico y los intereses vitales de muchos países situados al este y al oeste del Canal, sino también el régimen de funcionamiento que podía aportar al pueblo de Egipto los mayores beneficios materiales. Si el Canal podía ser utilizado como instrumento de política nacional por cualquier gobierno que lo tuviese en su poder, no podía sentirse segura ninguna nación que dependiera del Canal. La negativa de Egipto a permitir el paso de barcos israelíes, en cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad del 1º de septiembre de 1951, constituía un ejemplo de discriminación¹.

Se sostuvo que las debidas garantías de los derechos de los usuarios habían de ser más que simples promesas. Egipto no podía exigir a los países usuarios que aceptasen una autoridad puramente egipcia para el funcionamiento del Canal. Las propuestas de las 18 Potencias tenían por objeto asegurar que en lo sucesivo se mantuviese el aspecto internacional del régimen de funcionamiento del Canal. Todos subrayaron la necesidad de llegar a una solución que no sólo fuese pacífica sino que estuviese de acuerdo con los principios de la justicia y del derecho internacional. Se dijo que la justicia exigía que el funcionamiento de este servicio público internacional quedase aislado de la política de cualquier nación. Otro orador dijo que el problema no podía resolverse mediante medidas parciales que sólo guardasen relación con la paz.

Por otra parte, los adversarios del proyecto de resolución anglo-francés sostuvieron que la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez, empresa egipcia que había llegado a amortizar su capital un sinnúmero

¹ En una serie de cartas cursadas entre junio y septiembre de 1956, Israel había protestado ante el Consejo de Seguridad de que Egipto había impedido el paso del buque griego *Pannegia*, que se dirigía de Haifa a Eilat, en Israel, y que había confiscado el barco israelí *Bat Galim*, que fué apresado en septiembre de 1954.

de veces, constituía un legítimo acto de soberanía egipcia. La pretensión de que la Compañía del Canal formaba parte del régimen establecido por el Convenio de 1888 carecía totalmente de fundamento. Se dijo que la propiedad y el funcionamiento del Canal, el cual estaba sujeto a la jurisdicción de Egipto, no tenían nada que ver con los compromisos internacionales de asegurar la libertad de tránsito asumidos por Egipto en virtud del Convenio de 1888. Egipto había cumplido fielmente esos compromisos. A pesar de los muchos obstáculos que se habían creado, la navegación a través del Canal continuaba con perfecta eficacia, y era inconcebible que la nacionalización de la Compañía del Canal pudiese poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

Los distintos planes de las Potencias occidentales para solucionar el problema de Suez, entre ellos el proyecto de resolución anglo-francés, violaban la soberanía de Egipto puesto que suponían una ingerencia en sus asuntos internos y se pretendía imponer una autoridad internacional como dueña del Canal.

Se reconoció que el problema era de interés vital para muchos de los países usuarios, pero también lo era, en el mismo grado por lo menos, para Egipto, como gobierno soberano interesado. Se insistió en los ofrecimientos de Egipto de negociar, en igualdad de condiciones, una solución pacífica y justa. Se dijo que a lo que se oponía Egipto no era a entablar negociaciones sino a que se le impusieran condiciones.

El 8 de octubre, el representante de Egipto reafirmó que su gobierno estaba dispuesto a negociar una solución pacífica a base del principio, establecido por el Convenio de 1888, de garantizar a todos y para siempre la libertad de navegación a través del Canal de Suez con miras a: 1) establecer un régimen de cooperación entre la autoridad administradora egipcia y los usuarios, habida cuenta de la soberanía y los derechos de Egipto y los intereses de los usuarios; 2) establecer un régimen equitativo de derechos de tránsito; y 3) dedicar a obras de mejoramiento un porcentaje razonable de los ingresos del Canal.

Concluido el debate general, el Consejo discutió el problema en tres sesiones privadas que se celebraron entre el 9 y el 12 de octubre. A medida que se celebraban estas reuniones, se realizaban conversaciones preliminares entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Francia y el Reino Unido, en presencia del Secretario General. En la siguiente sesión pública del Consejo, celebrada el 13 de octubre, el Reino Unido y Francia presentaron otro proyecto de resolución, en virtud del cual, de acuerdo con la enmienda sugerida por el representante de Irán, el Consejo, tomando nota de la información facilitada por el Secretario General acerca de dichas conversaciones preliminares: 1) convendría en que toda solución de la cuestión de Suez debería reunir los siguientes requisitos: i) el tránsito a través del Canal sería libre y abierto y no podría ser objeto de ninguna discriminación, ya fuese flagrante o encubierta — esto se refería tanto a los aspectos políticos como a los técnicos; ii) se respetaría la soberanía de Egipto; iii) el funcionamiento del Canal quedaría aislado de la política de cualquier país; iv) el sistema de fijar los derechos de tránsito y gravámenes se decidiría mediante acuerdo entre Egipto y los usuarios; v) se asignaría una proporción justa de los derechos para fines de desarrollo; y vi) en caso de originarse controversias, las cuestiones pendientes entre la Compañía del Canal de Suez y

el Gobierno de Egipto serían solucionadas mediante arbitraje, estableciéndose al efecto las debidas atribuciones y las debidas disposiciones para el pago de las sumas que se adeudaran; 2) consideraría que las propuestas de las 18 Potencias se ajustaban a dichos requisitos, pero reconociendo que el Gobierno de Egipto podía presentar otras propuestas que también respondiesen a los mismos requisitos; 3) tomaría nota de que dicho gobierno, si bien se había declarado dispuesto a aceptar el principio de una colaboración organizada entre la Autoridad egipcia y los usuarios, todavía no había formulado propuestas suficientemente precisas que llenasen aquellos requisitos; 4) invitaría a los Gobiernos de Egipto, Francia y el Reino Unido a que prosiguiesen conjuntamente sus gestiones y, al respecto, invitaría al Gobierno de Egipto a que diese a conocer pronto sus propuestas sobre un régimen que se ajustase a los repetidos requisitos; y 5) consideraría que, entretanto, la Asociación de Usuarios del Canal de Suez, que había sido facultada para cobrar los derechos de tránsito pagaderos por los barcos pertenecientes a sus miembros, y las autoridades egipcias competentes, debían cooperar para facilitar el buen funcionamiento del Canal y el tránsito libre y abierto a través del mismo de conformidad con el Convenio de 1888.

El representante de Egipto expresó la confianza de que el Consejo aprobaría la primera parte del nuevo proyecto de resolución en la que se esbozaban los seis principios fundamentales que habían sido presentados al Consejo por el Secretario General. Su delegación opinaba que la expresión del tercer principio, o sea el de mantener el Canal aislado de la política, podía dar lugar a interpretaciones contradictorias y que su propósito se garantizaría mejor mediante la renovación o reafirmación del Convenio de 1888. Dijo que la forma práctica de llegar a una solución pacífica consistía en entablar negociaciones a base de las propuestas concretas presentadas por Egipto el 8 de octubre y reiteradas en las seis reuniones celebradas recientemente por los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia, el Reino Unido y Egipto en presencia del Secretario General. El procedimiento esbozado en la segunda parte del proyecto de resolución haría que el Canal quedase a merced de la política de muchas naciones.

El representante de Yugoslavia, al declarar su oposición a la segunda parte del proyecto de resolución anglo-francés, que no ofrecía ninguna base para llegar a un acuerdo, presentó un proyecto de resolución en el que figuraban los seis requisitos del primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de las dos Potencias y en el que también se recomendaba que prosiguiesen las negociaciones, se pedía al Secretario General que, de ser necesario, ofreciera su ayuda, y se instaba a todas las partes interesadas a que se abstuvieran de adoptar medidas que pudieran perjudicar las negociaciones.

El 13 de octubre, el Consejo puso a votación, en dos partes, el proyecto enmendado de resolución anglo-francés. La primera parte, en la que se esbozaban los seis requisitos fundamentales, fue aprobada por unanimidad. La segunda parte obtuvo 9 votos a favor y 2 en contra (URSS y Yugoslavia) y no fue aprobado debido a que uno de los votos negativos era el de un miembro permanente. El representante de Yugoslavia dijo que no insistiría en que su proyecto de resolución fuese sometido a votación.

El 15 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto señaló a la atención del Consejo la declaración hecha por el Primer Ministro del Reino Unido el 13 de octubre, o sea después de haber aceptado Egipto los seis principios de la resolución del Consejo de aquella fecha y después de haberse abstenido de insistir en que se examinase el punto siguiente del orden del día, dada la importancia de crear el debido ambiente para las futuras negociaciones. En dicha declaración se anunciaba que proseguían las medidas militares en el Mediterráneo oriental, añadiéndose que el empleo de la fuerza sería la última solución a que se recurriría pero que no era posible excluirla.

Entre el 13 y el 19 de octubre, el Secretario General celebró conversaciones privadas con el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto y el 24 de octubre le expuso en una carta confidencial sus conclusiones acerca de los posibles arreglos que podrían establecerse para satisfacer los seis "requisitos" que se deberían estudiar si habían de reanudarse las conversaciones preliminares entre los tres gobiernos directamente interesados. El Secretario General manifestó que tenía entendido que no se presentarían dificultades en cuanto a: 1) la reafirmación jurídica de todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio de 1888 y la ampliación de dichas obligaciones a fin de que abarcasen la cuestión de derechos máximos de tránsito; conservación y desarrollo, y comunicación de informes a las Naciones Unidas; 2) el código y reglamento del Canal, con revisiones sujetas a consulta; 3) la cuestión de derechos de tránsito y gravámenes y la reserva de una proporción de los mismos para fines de desarrollo; 4) la cuestión de controversias entre la Compañía del Canal de Suez y el Gobierno de Egipto, que parecía tenerse debidamente en cuenta en el sexto principio; y 5) el principio de una cooperación organizada entre una autoridad egipcia y los usuarios. La "cooperación organizada" exigía que se previese la celebración de las reuniones mixtas que fuesen necesarias entre un órgano de la parte egipcia y una representación de los usuarios debidamente facultada para plantear cuantos asuntos afectasen a los derechos o intereses de estos últimos, para fines de deliberación y consulta o por vía de controversia, pero que ejerciera sus funciones de modo que éstas no chocasen con las funciones administrativas del órgano administrador. Semejante cooperación organizada no satisfaría los tres primeros requisitos a menos que fuese acompañada de arreglos para la determinación de hechos, reconciliación, recurso o la solución jurídica pertinente de posibles controversias, y garantías de ejecución de sus resultados. Entre los métodos de solución jurídica sugeridos figuraban la intervención de un órgano permanente local de arbitraje, la de la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción habría de ser obligatoria en este caso, y la del Consejo de Seguridad. Con respecto al cumplimiento de los fallos de un órgano de las Naciones Unidas, habrían de aplicarse las normas acostumbradas. Las partes deberían comprometerse a cumplir de buena fe las sentencias dictadas por los órganos de arbitraje. "En el caso de que se formulase una denuncia por supuesto incumplimiento de una sentencia, el mismo órgano de arbitraje que hubiese dictado esa sentencia haría constar su incumplimiento. Semejante "comprobación" permitiría que la parte agraviada pudiese recurrir a todas las formas acostumbradas de compensación, pero dicha parte tendría también derecho a adoptar ciertas medidas en defensa

propia, el posible alcance de las cuales estaría sujeto a un acuerdo en principio."

De no haber objeción en principio a esa serie de arreglos, el Secretario General consideraría que jurídica y técnicamente su estructura era lo suficientemente amplia para justificar el volver a explorar una posible base de negociaciones en el sentido indicado.

El 2 de noviembre, el Secretario General recibió contestación a su carta del 24 de octubre. En su respuesta, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto declaraba que, excepción hecha de la parte relativa al derecho de actuar en defensa propia, antes citado, compartía el criterio del Secretario General de que la estructura era lo suficientemente amplia para atender a dicho fin.

El 3 de noviembre, el Secretario General ordenó la distribución de dichas cartas, que a su juicio constituían un nuevo e importante acontecimiento en la consideración del asunto, tal como había sido iniciado por el Consejo de Seguridad.

3. Intervención de Israel, de Francia y del Reino Unido en Egipto

a) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD (29 AL 31 DE OCTUBRE DE 1956)

El 29 de octubre de 1956, los Estados Unidos comunicaron por carta al Consejo de Seguridad que fuerzas armadas de Israel habían penetrado muy al interior del territorio egipcio en violación del Acuerdo de Armisticio concertado entre Israel y Egipto y solicitaron que se reuniese inmediatamente el Consejo para examinar "la cuestión de Palestina: medidas para la inmediata cesación de la acción militar emprendida por Israel en Egipto". El Consejo examinó dicha cuestión en cuatro sesiones que se celebraron entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre y en las que participaron los representantes de Egipto e Israel.

El 30 de octubre el representante de los Estados Unidos abrió la sesión de la mañana manifestando que su gobierno consideraba imperativo que el Consejo actuase con la mayor rapidez posible para establecer el hecho de que se había producido un quebrantamiento de la paz, para que ordenase la inmediata cesación de la acción militar emprendida por Israel, y para que hiciera constar claramente su opinión de que las fuerzas armadas de Israel debían retirarse inmediatamente detrás de las líneas establecidas por el Armisticio.

El Secretario General dió entonces cuenta de que, según el Jefe de Estado Mayor del Organismo para la Vigilancia de la Tregua, tropas de Israel habían cruzado la frontera internacional y habían ocupado posiciones en Sinaí, violando el Acuerdo de Armisticio General y la orden de cesación del fuego dada por el Consejo el 11 de agosto de 1949. Aquella misma mañana, el Jefe de Estado Mayor había pedido que se retirasen las tropas y que cesase el fuego, y al efecto se había solicitado la cooperación de Egipto.

En la misma sesión, el representante de Egipto declaró que Israel había cometido el acto más grave de agresión armada que había tenido efecto desde que se concertaron los Acuerdos de Armisticio entre los países árabes e Israel. Subrayó que el ataque armado que sin provocación se había perpetrado contra Egipto, después de ordenar Israel una movilización general,

constituía un acto de guerra y ponía de manifiesto sin que cupiese lugar a ninguna duda los fines agresivos y expansionistas de la política de Israel.

El representante de Israel manifestó entonces que el más reciente quebrantamiento de la paz había sido cometido por bandas de fedayín procedentes de Egipto, que habían invadido el territorio de Israel. En la noche del 29 de octubre, Israel había adoptado medidas de seguridad para eliminar las bases egipcias de fedayín en la península del Sinaí.

En una intervención posterior, afirmó que, en los últimos meses había resultado evidente que los gobiernos árabes, y especialmente Egipto, habían llegado a considerar los grupos constituidos por los fedayín, empleados primeramente en 1955, no ya como instrumento de hostigación sino como arma destinada a la destrucción de Israel. Rechazó los cargos de agresión y afirmó el derecho soberano de actuar en defensa propia.

El representante del Reino Unido abrió la 749a. sesión en la tarde del 30 de octubre con una declaración basada en las observaciones hechas aquella mañana ante la Cámara de los Comunes por el Primer Ministro británico. Describiendo la tirantez que desde hacía algún tiempo iba en aumento en las fronteras de Israel, y advirtiendo que, de no lograrse poner fin rápidamente a las hostilidades, se vería amenazado el libre tránsito por el Canal de Suez, comunicó al Consejo que los Gobiernos del Reino Unido y Francia habían dirigido aquella tarde comunicaciones urgentes a Egipto e Israel, instando a ambas partes a que hiciesen cesar inmediatamente toda acción bélica por tierra, mar y aire, y a que retirasen sus fuerzas militares a una distancia de 10 millas del Canal. Habían pedido al Gobierno de Egipto que accediera a que fuerzas anglo-francesas se trasladasen provisionalmente a posiciones estratégicas situadas en Port Saïd, Ismailia y Suez. Si, expirado el plazo de 12 horas, cualquiera o ambos de dichos gobiernos no se hubiesen comprometido a cumplir estas condiciones, fuerzas británicas y francesas intervenirían en el número que fuese necesario para asegurar su cumplimiento.

Puesto que el plazo expiraba a la mañana siguiente, o sea el 31 de octubre, el representante de Egipto solicitó que se reuniera el Consejo por la noche a fin de examinar el acto de agresión que suponía la amenaza anglo-francesa de recurrir a la fuerza y el peligro inminente de que se ocupase territorio egipcio.

En aquel momento el Consejo consideraba un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos con arreglo al cual el Consejo: 1) pediría el retiro inmediato de Israel tras las líneas establecidas por el armisticio; 2) instaría a todos los Miembros a que se abstuviesen de emplear fuerza o de amenazar con el empleo de fuerza en esa región, a que ayudasen a las Naciones Unidas a asegurar la integridad de los acuerdos de armisticio, y a que se abstuviesen de prestar cualquier ayuda militar, económica o financiera a Israel mientras este país siguiese sin acatar la resolución; y 3) pediría al Secretario General que mantuviese informado al Consejo acerca del cumplimiento de la resolución y que formulase recomendaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en dicha región.

El representante de los Estados Unidos pidió encaresadamente que se aprobase sin demora este proyecto de resolución a fin de hacer frente a la situación creada

por la penetración militar que había tenido efecto en Egipto; aceptó una modificación sugerida por varios miembros en el sentido de que se añadiese al principio otro párrafo redactado en los siguientes términos: "Insta a Israel y Egipto a que cesen el fuego inmediatamente".

En el curso del debate, la mayoría de los oradores aplaudieron la iniciativa del representante de los Estados Unidos y estimaron que incumbía urgentemente al Consejo asegurar la cesación de las hostilidades y el retiro de las fuerzas de Israel del territorio egipcio.

El representante de Francia, sin embargo, se opuso al proyecto de resolución y dijo que el Consejo no podía condenar a Israel considerando la política destinada a aniquilar a Israel francamente proclamada por Egipto, la expansión del imperialismo egipcio, su visible intervención en los asuntos internos de Francia, su ayuda material directa a ciudadanos rebeldes, y la incautación ilegal por Egipto de una vía de navegación internacional. Dijo que las comunicaciones franco-británicas dirigidas a Egipto e Israel tenían por objeto asegurar la efectiva separación de los beligerantes y garantizar la libertad de tránsito por el Canal.

El proyecto de resolución de los Estados Unidos tal como fué modificado obtuvo 7 votos a favor, 2 en contra (Francia y el Reino Unido) y 2 abstenciones (Australia y Bélgica), pero no fué aprobado por haber votado en contra del mismo dos miembros permanentes del Consejo.

El representante de la URSS presentó entonces un proyecto de resolución según el cual el Consejo instaría a Israel a que retirase inmediatamente sus fuerzas armadas detrás de las líneas establecidas por el armisticio. Aceptó una enmienda propuesta por China de que se añadiese un párrafo en el que se instara a Israel y Egipto a que cesaran inmediatamente el fuego.

En la 750a. sesión, celebrada en la noche del 30 de octubre, el proyecto de resolución de la URSS, con la enmienda introducida, obtuvo 7 votos a favor, 2 en contra (Francia y el Reino Unido) y 2 abstenciones (Bélgica y Estados Unidos), pero no fué aprobado por haber votado en contra dos miembros permanentes del Consejo.

En la sesión de la noche, figuraba en el orden del día del Consejo la cuestión relativa a una carta del representante de Egipto, fechada el 30 de octubre, relativa a la comunicación de igual fecha que había sido entregada a Egipto por Francia y el Reino Unido. Dicho representante declaró que los autores de la citada comunicación parecían haber olvidado que la zona del Canal de Suez y el propio Canal eran parte integrante de Egipto. Egipto había sido víctima de la agresión de Israel, su territorio había sido invadido, y se había visto obligado a recurrir al uso de la fuerza. El que los Gobiernos de Francia y el Reino Unido intentasen unilateralmente resolver una cuestión que ya había sido sometida al Consejo de Seguridad constituía una violación de la Carta que era de todo punto injustificable. Hasta que el Consejo adoptase las medidas necesarias, Egipto no tenía más remedio que proteger sus derechos y defenderse de la agresión.

Antes de que se levantase la sesión, el representante de Yugoslavia sugirió la posibilidad de convocar a un periodo de sesiones de emergencia de la Asamblea General en virtud de la resolución 377 (V) de la Asamblea General sobre "Unión pro paz", ya que el uso del

veto había hecho que el Consejo se viese impotente ante una situación que empeoraba de un minuto a otro.

Cuando el Consejo reanudó el debate en la tarde siguiente, día 31 de octubre, se tenían noticias de que aviones franceses y británicos habían iniciado ataques aéreos contra objetivos militares en Egipto. Posteriormente quedó inutilizado el Canal de Suez debido al hundimiento de barcos realizado por Egipto dentro del mismo, con lo que quedó cerrado a la navegación. El Secretario General fué el primero en tomar la palabra en esta sesión. Declarando que él mismo habría pedido que se reuniese el Consejo, de no haberse tomado ya esa iniciativa, dijo que, como funcionario de la Organización, se veía obligado a seguir siendo útil a la misma absteniéndose de tomar ninguna posición acerca de conflictos originados entre países Miembros a menos que y hasta el momento en que ello pudiera contribuir a resolver el conflicto. Ahora bien, la discreción e imparcialidad que imponía al Secretario General el carácter de su labor inmediata no podía degenerar en una política de conveniencia. Tenía también la obligación de hacer cumplir los principios de la Carta, cuyos objetivos eran los que en definitiva habían de determinar en su ánimo lo que era justo y lo que no lo era. A ello había de atenerse. Declaró también que un Secretario General no podía prestar sus servicios bajo otra suposición que no fuese la de que — dentro de los límites que necesariamente imponen las debilidades humanas y las honrosas diferencias de opinión — todos los países Miembros hacían honor al compromiso que habían contraído de respetar en su totalidad los Artículos de la Carta. Había también de suponer que los órganos encargados de hacer respetar la Carta estarían en condiciones de cumplir su cometido. Llegó a la conclusión de que, si los Miembros opinaban que los intereses de la Organización serían mejor servidos mediante un concepto distinto de las obligaciones que correspondían al Secretario General, tenían perfecto derecho a proceder en consecuencia.

Los representantes de Francia y el Reino Unido manifestaron que el Gobierno de Egipto había rechazado la comunicación franco-británica del 30 de octubre. En consecuencia, los Gobiernos del Reino Unido y Francia habían intervenido. La acción que se estaba desarrollando se hallaba limitada estrictamente a objetivos militares, aeropuertos principalmente. La intervención supeditaba sus propósitos a la protección del Canal de Suez y al restablecimiento de la paz en el Oriente Medio. La intervención constituía una medida provisional y no iba dirigida contra la soberanía de Egipto. El representante del Reino Unido subrayó que no condenaba ninguna acción de Israel que tuviese por objeto la ocupación de posiciones en territorio egipcio. Opinaba que Israel debía retirar sus fuerzas tan pronto como fuese posible hacerlo convenientemente.

Yugoeslavia presentó un proyecto de resolución según el cual el Consejo de Seguridad, viendo que la falta de unanimidad demostrada por sus miembros permanentes en las 749a. y 750a. sesiones le había privado de cumplir su principal deber de mantener la paz y la seguridad internacionales, decidiría convocar a un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, en virtud de lo dispuesto en la resolución de "Unión pro paz" de la Asamblea (377 (V)), a fin de que se formularan las oportunas recomendaciones.

Los representantes de Francia y el Reino Unido sostuvieron que el proyecto de resolución era improce-

dente. El segundo de dichos representantes adujo que no se había presentado y puesto a votación, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, ninguna resolución sobre el fondo de la cuestión que estaba examinando el Consejo, y que por lo tanto no podía establecerse que el Consejo se hubiese visto en la imposibilidad de tomar una decisión debido a la falta de unanimidad de los miembros permanentes, condición previa para poder invocar el procedimiento previsto por la resolución de "Unión pro paz". Declaró asimismo que no podía invocarse, en apoyo de la propuesta de Yugoeslavia, ninguna de las dos resoluciones sometidas a votación en la sesión anterior. Rechazada, por 6 votos contra 4 y 1 abstención, la propuesta del Reino Unido de que se declarase improcedente el proyecto de resolución de Yugoeslavia, éste fué puesto a votación quedando aprobado por 7 votos contra 2 (Francia y el Reino Unido) y 2 abstenciones (Australia y Bélgica).

b) MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE EMERGENCIA (31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 1956)

El 31 de octubre de 1956, el Secretario General comunicó a los Estados Miembros la decisión tomada en dicho día por el Consejo de Seguridad de convocar a un período extraordinario de sesiones de emergencia, de conformidad con los términos de la resolución 377 (V) de la Asamblea. La Asamblea se reunió el 1º de noviembre y aprobó, por 62 votos contra 2, y 7 abstenciones, el programa del período de sesiones: "Cuestión examinada por el Consejo de Seguridad en sus sesiones 749a. y 750a., celebradas el 30 de octubre de 1956". La cuestión fué examinada por la Asamblea en el curso de siete sesiones plenarias celebradas entre el 1º y el 10 de noviembre.

En la primera sesión, los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución según el cual la Asamblea General, entre otras cosas: 1) instaría, como cuestión máxima de urgencia, a todas las partes que participaban en hostilidades en la zona a que conviniesen inmediatamente en una cesación de fuego, inclusive la suspensión del envío de fuerzas militares y de armas a la zona; 2) instaría a las partes en los Acuerdos de Armisticio a que retirasen inmediatamente todas las fuerzas tras las líneas de armisticio, a que desistieran de cruzar las líneas de armisticio para efectuar incursiones en territorio vecino, y a que observasen escrupulosamente las disposiciones de los Acuerdos de Armisticio; 3) recomendaría que todos los Estados Miembros se abstuviesen de introducir materiales militares en la zona de hostilidades y, de un modo general, se abstuviesen de cometer todo acto que pudiera demorar o impedir el cumplimiento de esta resolución; 4) instaría a que, una vez que se hiciese efectiva la cesación del fuego, se adoptasen medidas para reabrir el Canal de Suez y restablecer la libertad y la seguridad de la navegación; 5) pediría al Secretario General que observase el cumplimiento de la resolución e informase prontamente al respecto al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, para que adoptasen las demás medidas que considerasen necesarias de conformidad con la Carta.

En la madrugada del 2 de noviembre, la Asamblea aprobó en votación nominal, por 64 votos a favor y 5 en contra (Reino Unido, Australia, Francia, Israel y Nueva Zelandia), con 6 abstenciones, el proyecto de

resolución de los Estados Unidos (resolución 997 (ES-I)).

En cumplimiento del párrafo 5 de la resolución 997 (ES-I), el Secretario General comunicó, el 3 de noviembre, que el Gobierno de Egipto había aceptado la resolución, declarando que no podría dar cumplimiento a la misma en el caso de que los ejércitos atacantes continuasen su agresión. Comunicó, además, que los Gobiernos de Francia y el Reino Unido seguían manteniendo su opinión de que la acción de policía debía llevarse a cabo urgentemente a fin de detener las hostilidades que amenazaban el Canal de Suez, prevenir una reanudación de esas hostilidades y despejar el camino para una solución definitiva de la guerra árabe-israelí que amenazaba los intereses legítimos de tantos países. Detendrían las operaciones militares a condición, entre otras cosas, de que los Gobiernos de Egipto y de Israel consintiesen en aceptar que una Fuerza de las Naciones Unidas mantuviese la paz, constituyéndose y maneniéndose dicha Fuerza hasta que los Estados árabes e Israel se hubiesen puesto de acuerdo sobre las condiciones de paz y se hubiesen convenido arreglos satisfactorios con respecto al Canal de Suez, acuerdos ambos que habrían de ser garantizados por las Naciones Unidas. El Secretario General comunicó asimismo que la Faja de Gaza y las islas de Tirán y Senafir, en el Mar Rojo, habían sido ocupadas por fuerzas militares israelíes y que habían continuado sin interrupción las operaciones aéreas sobre territorio egipcio.

En la misma sesión, el representante de Israel declaró que su gobierno le había autorizado a anunciar que Israel convenía en cesar inmediatamente el fuego a condición de que Egipto diese una respuesta similar.

La India, en unión de otros 18 países africanos y asiáticos, presentó un proyecto de resolución, según el cual la Asamblea General, tomando nota con pesar de que no todas las partes interesadas habían convenido hasta el momento en acatar las disposiciones de la resolución 997 (ES-I): 1) reafirmaría dicha resolución y pediría una vez más a las partes que acatasen inmediatamente las disposiciones de la misma; 2) autorizaría al Secretario General a que hiciese inmediatamente los arreglos necesarios con las partes interesadas para el cumplimiento de la cesación del fuego y para la suspensión del envío de fuerzas militares y de armas a la zona, y le pediría que informase sobre el acatamiento de estas medidas dentro de las 12 horas de la aprobación de la resolución; 3) pediría al Secretario General que, con ayuda del Jefe de Estado Mayor y de los miembros del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, tratase de obtener el retiro de todas las fuerzas detrás de las líneas de armisticio.

El Canadá presentó también un proyecto de resolución, según el cual, tal como quedó modificado, la Asamblea, teniendo en cuenta la urgente necesidad de facilitar el cumplimiento de la resolución 997 (ES-I), pediría al Secretario General que le presentase dentro de 48 horas un plan para establecer, con el consentimiento de las naciones interesadas, una Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para lograr que cesasen las hostilidades en conformidad con las disposiciones de la resolución mencionada y para que vigilase dicha cesación.

Más temprano en la noche del 3 de noviembre, el representante de los Estados Unidos había presentado

dos amplios proyectos de resolución, uno relativo a la solución de los principales problemas pendientes entre los Estados árabes e Israel y otro acerca de la solución de la cuestión del Canal de Suez. Por tratarse de cuestiones a largo plazo, solicitó que se diese prioridad al proyecto de resolución del Canadá relativo a la creación de una Fuerza Internacional de Emergencia.

El proyecto de resolución del Canadá y el de las 19 Potencias fueron sometidos a votación en la madrugada del 4 de noviembre. El primero fué aprobado por 57 votos contra ninguno y 19 abstenciones (resolución 998 (ES-I)); y el segundo por 59 votos contra 5, y 12 abstenciones (resolución 999 (ES-I)).

El 4 de noviembre, el Secretario General, informando sobre el cumplimiento de las resoluciones del 2 y 4 noviembre de 1956, manifestó que, con respecto a las gestiones realizadas a base de la resolución 999 (ES-I), hasta el momento sólo había recibido contestación de uno de los cuatro gobiernos directamente interesados. En dicha contestación, el Gobierno de Egipto aceptaba la resolución de cesación del fuego del 4 de noviembre de 1956.

El Secretario General informó también que el Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua había comunicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel le había hecho saber, el 4 de noviembre, que el Acuerdo de Armisticio General carecía ya de validez y que se le había pedido que ordenara el retiro de la zona de Gaza del personal del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua. Semejante orden hubiera sido contraria a las instrucciones que él tenía del Secretario General.

En una respuesta dirigida al Secretario General, el mismo día, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel solicitó aclaración con respecto a si el Gobierno de Egipto: 1) había convenido inequívocamente en una cesación del fuego; 2) seguía manteniendo la actitud de que se hallaba en estado de guerra con Israel; 3) estaba dispuesto a entrar en negociaciones con Israel con miras a establecer la paz; 4) aceptaba poner fin al boicoteo económico contra Israel; y 5) se comprometía a retirar las bandas de fedayín que estaban bajo su control en otros países árabes.

También el 4 de noviembre, el Secretario General presentó un primer informe sobre el plan para establecer una Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas pedido por la resolución 998 (ES-I). Hizo saber su conclusión de que, sin esperar su informe definitivo, la Asamblea General debía decidir que se estableciese un Mando de las Naciones Unidas para "una Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para lograr y vigilar la cesación de las hostilidades en conformidad con todas las disposiciones" de su resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre de 1956; que además la Asamblea nombrase, como medida de emergencia, jefe del nuevo Mando al General Burns, a la sazón Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua; que se autorizase al General Burns, en tal calidad, a organizar inmediatamente el efectivo necesario de oficiales reclutándolos del cuerpo de observadores del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua y, en consulta con el Secretario General, de diversos Estados Miembros que no fuesen miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En las

siguientes consultas acerca del establecimiento de una fuerza de las Naciones Unidas, el Secretario General procuraría preparar un plan en el que, como cuestión de principio, no se utilizarían tropas de países que fueran miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El mismo día el Canadá, Colombia y Noruega presentaron un proyecto de resolución por el que la Asamblea General tomaría nota con satisfacción del primer informe del Secretario General y establecería un mando de las Naciones Unidas para una Fuerza Internacional de Emergencia encargada de lograr que cesasen las hostilidades, en conformidad con todas las disposiciones de la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre, y de vigilar dicha cesación, y autorizaría el inmediato reclutamiento de oficiales por el General Burns, a quien se nombraba Jefe del Mando. El proyecto de resolución fué aprobado el día siguiente, 5 de noviembre, por 57 votos contra ninguno, y 19 abstenciones (resolución 1000 (ES-I)).

c) INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL REINO UNIDO, FRANCIA E ISRAEL DE LA RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1956 SOBRE LA CESACIÓN DEL FUEGO (RESOLUCIÓN 997 (ES-I)): PETICIÓN DE LA URSS PARA QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD EXAMINE LA CUESTIÓN (5 DE NOVIEMBRE DE 1956)

El 5 de noviembre de 1956 el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió que el Consejo de Seguridad se reuniera inmediatamente para discutir "el incumplimiento por parte del Reino Unido, Francia e Israel de la resolución del 2 de noviembre de 1956 del período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la adopción inmediata de medidas para detener la agresión de dichos Estados contra Egipto". Presentaba un proyecto de resolución por el que el Consejo, tomando nota del incumplimiento por parte de los Gobiernos del Reino Unido, Francia e Israel de la resolución 997 (ES-I) del período extraordinario de sesiones de emergencia del 2 de noviembre de 1956 y proponiendo que dichos Gobiernos se abstuvieran inmediatamente, y en todo caso en un plazo no superior a 12 horas contado a partir de la aprobación de la resolución, de toda actividad militar contra Egipto y retiraran sus tropas de Egipto en un plazo de ires días, consideraría esencial que, de conformidad con el Artículo 42 de la Carta, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y especialmente los Estados Unidos de América y la URSS, miembros permanentes del Consejo de Seguridad con fuerzas aéreas y navales poderosas, prestaran asistencia militar y de otra clase a Egipto mediante el envío de fuerzas armadas, voluntarios, instructores militares y otras formas de asistencia, si el Reino Unido, Francia e Israel no cumplían dicha resolución en el plazo señalado.

Antes de que el Consejo se reuniera aquella misma tarde, los Gobiernos de Francia y del Reino Unido informaron al Secretario General, en respuesta a su petición de cesación del fuego, que acogían con agrado la idea de interponer una Fuerza Internacional entre Israel y Egipto para impedir que continuaran las hostilidades entre los dos países, obtener el pronto retiro de las fuerzas israelíes, adoptar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos en el Canal de Suez y restablecer la circulación por él, y para

promover la solución de los problemas que afectaban a aquella región. En cuanto los Gobiernos de Israel y de Egipto hicieran saber que aceptaban un plan para la constitución de una Fuerza Internacional encargada de las funciones indicadas anteriormente, y las Naciones Unidas sancionaran dicho plan, los dos Gobiernos, se declaraba, cesarían toda acción militar.

En su intervención al comienzo de la sesión de la tarde, el Secretario General informó al Consejo sobre aquellos resultados de sus esfuerzos para lograr una cesación del fuego que consideraba importantes para las consideraciones del Consejo. Después de citar las respuestas del Reino Unido y de Francia anteriormente mencionadas, declaró que, al aprobar su resolución 1000 (ES-I) del 5 de noviembre, estableciendo un Mando de las Naciones Unidas, la Asamblea había dado el primer paso decisivo para poner en práctica algo que ya había aceptado en principio: la organización de una Fuerza de las Naciones Unidas que garantizara la cesación de las hostilidades de acuerdo con los términos de la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre. El Gobierno de Egipto había aceptado además sin condiciones la petición de cesación del fuego. El Secretario General añadió que había recibido otra comunicación del Gobierno de Israel por la que, en vista de la declaración de Egipto de que aceptaba la orden de cesar el fuego, Israel confirmaba que estaba dispuesto a hacer lo mismo. El Secretario General declaró que las condiciones para una cesación general del fuego dependían así de la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el plan de creación de una Fuerza Internacional y añadió que esperaba poder presentar dicho plan a la Asamblea al día siguiente.

Después de un breve debate sobre la aprobación del programa el Consejo rechazó por 4 votos (Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido) contra 3 (Irán, URSS, Yugoslavia) y 4 abstenciones (Bélgica, Cuba, China y Perú), el tema propuesto por la URSS.

Después de la votación, varios representantes aludieron a la acción militar emprendida por la URSS contra el pueblo de Hungría calificando de inconcebible la propuesta de la URSS. Los representantes de Bélgica, Cuba, China, los Estados Unidos y Perú declararon que la consideración de la propuesta dificultaría únicamente el proceso pacificador de Egipto iniciado por la Asamblea en el período extraordinario de sesiones de emergencia y continuado activamente por la Asamblea y el Secretario General.

d) MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE EMERGENCIA (CONTINUACIÓN) (5-10 DE NOVIEMBRE DE 1956)

En una nueva comunicación de fecha 5 de noviembre, Israel comunicó al Secretario General que aceptaba incondicionalmente la cesación del fuego y que, desde aquella mañana, habían cesado todos los combates entre las fuerzas de Israel y Egipto.

El 2 de noviembre toda la península de Sinaí estaba virtualmente en poder de Israel, después de haber ocupado a Gaza el 1º de noviembre. El 4 y el 5 de noviembre las fuerzas armadas israelíes ocuparon las posiciones egipcias a la entrada del golfo de Aqaba.

Aquella misma mañana, se realizaron desembarcos anglo-franceses en la zona de Port Saïd a la entrada norte del Canal. Antes de la sesión del Consejo de

Seguridad del 5 de noviembre (véase *supra*, apartado c)), el Secretario General, teniendo en cuenta la situación, dirigió un *aide-mémoire* a los Gobiernos de Francia y el Reino Unido, sobre cesación del fuego por parte de las fuerzas de los dos Gobiernos. El 6 de noviembre se recibieron las respuestas a dicho *aide-mémoire*. En sus respuestas, los representantes del Reino Unido y Francia declaraban que sus Gobiernos estarían dispuestos a poner fin a las operaciones militares si el Secretario General podía confirmar que los Gobiernos de Egipto e Israel habían aceptado una cesación incondicional del fuego y que la Fuerza Internacional que se estaba organizando estaría en condiciones de cumplir la misión que se le encomendaba en la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre. Proponían que los especialistas al servicio de las fuerzas franco-británicas se dedicaran inmediatamente a la tarea de despejar el Canal. En espera de recibir confirmación, habían dado a sus fuerzas la orden de cesar el fuego a las 12 de la noche del 6 de noviembre, a menos que fueran atacadas.

En una carta del 7 de noviembre el Secretario General dió las garantías solicitadas en sus comunicaciones. Se consiguió la cesación del fuego después de que las fuerzas anglo-francesas ocuparon Port Saïd y Port Fuad. En su carta, el Secretario General señalaba a la atención de los dos Gobiernos una declaración hecha aquel día por el Primer Ministro de Israel diciendo que las líneas de demarcación de armisticio entre Israel y Egipto no tenían ningún valor y añadiendo que Israel no aceptaría en modo alguno que una fuerza extranjera, sea cual fuere su nombre, se estacionase en territorio israelí o en ninguna de las zonas que ocupaba Israel. En cuanto a la cuestión del Canal de Suez, el Secretario General añadía que estaba estudiando la posibilidad de que se llevara a efecto aquella labor bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

En la sesión de la Asamblea del 7 de noviembre el Secretario General presentó el segundo informe sobre el plan para establecer una Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas, pedido por la Asamblea General. El Secretario General señaló que en su resolución sobre la constitución de un Mando de las Naciones Unidas, aprobada el 5 de noviembre de 1956, la Asamblea decidió que la Fuerza debería establecerse a base de los principios fijados en la constitución de las propias Naciones Unidas y que sus oficiales serían nombrados por las Naciones Unidas, como el Jefe del Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, con absoluta independencia de la política de cualquier nación.

El método de reclutamiento de oficiales aprobado en la resolución 1000 (ES-I) proporcionaba un indicio importante del carácter de la Fuerza que había de organizarse. Por una parte, se reconocía la independencia del Jefe del Mando en el reclutamiento de oficiales. Por otra, se establecía el principio de que la Fuerza debía ser reclutada de los Estados Miembros, salvo de los que eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Un análisis más a fondo del concepto de la Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas indicaba que la Asamblea se proponía que la Fuerza tuviera carácter temporal y que la duración de su misión fuera determinada por las necesidades que surgieran del conflicto. Era también evidente que, en su resolución 1000 (ES-I) de 5 de noviembre de 1956, la Asamblea General, al referirse a su resolución 997 (ES-I) de 2 de noviembre, quería reser-

varse totalmente la facultad de determinar las funciones de aquella Fuerza de Emergencia y la base jurídica sobre la cual debía funcionar en el cumplimiento de su misión. Del cometido que se le asignaba, se desprendía que, al crear la Fuerza, no se pretendía influir en el equilibrio militar en el conflicto, y, por consiguiente, en el equilibrio político que afectaba a los esfuerzos para resolver el conflicto. Por lo tanto, al establecer dicha Fuerza, la Asamblea no había adoptado posición alguna con respecto a objetivos distintos de los que aparecían clara y plenamente señalados en su resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre.

Al funcionar, como lo haría, a base de una decisión tomada en virtud de las disposiciones de la resolución 337 (V) sobre "Unión pro paz", el estacionamiento y las operaciones de la Fuerza, en caso de ser creada, tendrían los límites que suponía el hecho de que se requeriría el consentimiento de las partes interesadas según los principios generalmente reconocidos del derecho internacional. El Secretario General declaró además que había una diferencia evidente entre establecer dicha Fuerza para asegurar la cesación de las hostilidades, con retiro de las fuerzas, y establecer tal Fuerza a fin de imponer el retiro de las fuerzas.

En cuanto a las funciones de la Fuerza, el Secretario General declaró que en conformidad con la resolución 997 (ES-I) consistirían en entrar, al lograrse la cesación del fuego, en territorio egipcio con el consentimiento del Gobierno de dicho país, a fin de ayudar a mantener el orden, durante el retiro de las tropas no egipcias y después de efectuado éste, y asegurar el cumplimiento de las demás disposiciones que contenía la resolución citada. Evidentemente, la Fuerza no debería tener más derechos que los necesarios para el cumplimiento de su cometido, en colaboración con las autoridades locales. Sería algo más que un cuerpo de observadores, pero de ninguna forma constituiría una fuerza militar que controlase temporalmente el territorio en el cual estuviese estacionada. Además, la Fuerza tampoco debería desempeñar más funciones militares que las necesarias para asegurar condiciones pacíficas, en el entendimiento de que las partes en la controversia tomarían todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General. Sobre esta base, cabía suponer que sus funciones abarcarían una zona que se extendería aproximadamente desde el Canal de Suez hasta las líneas de demarcación del armisticio, establecidas en el Acuerdo de Armisticio entre Egipto e Israel.

Refiriéndose a las cuestiones de la magnitud y organización de la Fuerza, el Secretario General manifestó que la experiencia general parecía indicar que convenía que los países que participaran en la Fuerza proporcionaran unidades completas a fin de no incurrir en la pérdida de tiempo y de eficacia inevitable cuando se establecen unidades nuevas mediante la unión de pequeños grupos de nacionalidades diferentes. Era probable que durante la primera etapa la Fuerza tuviera que estar constituida por unos cuantos batallones. El Secretario General se proponía, al dirigirse a los gobiernos, formar una lista lo suficientemente amplia para que fuera posible escoger las unidades de tal manera que se lograra constituir una Fuerza bien equilibrada. En anexos del informe del Secretario General se incluían las ofertas de participación en la Fuerza de seis Estados Miembros. Después se hicieron otras 18 ofertas análogas además de tres ofrecimientos de apoyo logístico.

Con respecto al financiamiento de la Fuerza, el Secretario General manifestó que dicha cuestión necesitaba nuevos estudios pero que provisionalmente por lo menos podría aplicarse la siguiente norma fundamental, a saber: toda nación que proporcionara una unidad correría con todos los gastos por concepto de equipo y pagas, y los demás gastos serían costeados por las Naciones Unidas con cargo a un presupuesto extraordinario.

Finalmente, el Secretario General propuso que se estableciera un comité asesor del Secretario General que considerara las cuestiones pendientes y las cuestiones relacionadas con las operaciones.

El Secretario General respondió más tarde a las solicitudes de aclaración que se formularon durante el debate. El representante de Siria había expresado el temor de que en caso de que Israel no acatara la solicitud de retirar sus fuerzas detrás de las líneas de demarcación del armisticio, se planteara, a base de la posición adoptada en el informe del Secretario General, una situación en la cual Egipto se encontrara ante un hecho consumado, ya que la Fuerza de las Naciones Unidas no se establecía por entonces con el propósito de hacer cumplir el retiro de las fuerzas. El Secretario General respondió que, en caso de plantearse dicha deplorable situación, se consideraría en la obligación de señalarla inmediatamente a la atención de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

Respondiendo a otra pregunta, el Secretario General declaró que a su parecer y ateniéndose a la resolución 997 (ES-I), todas las fuerzas no egipcias — salvo evidentemente la Fuerza de las Naciones Unidas, que estaría allí con el consentimiento del Gobierno de Egipto — tendrían que retirarse de territorio egipcio. "Territorio egipcio" significaría en tal caso lo que se desprende del derecho internacional y del Acuerdo de Armisticio.

En cuanto a su referencia a la zona en que tendría que actuar la Fuerza de las Naciones Unidas, lo que quiso expresar fué que la Fuerza actuaría en lo que era entonces la línea divisoria entre las fuerzas egipcias e israelíes. Cualquiera que resultara ser la línea divisoria, allí actuaría la Fuerza de las Naciones Unidas. Esto significaba que las actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas deberían comenzar cerca del Canal de Suez, pero que después que se cumplieran, como se esperaba, las recomendaciones de la Asamblea General esas actividades se extenderían hasta la línea de demarcación del armisticio.

En la misma sesión, Dinamarca presentó un proyecto de resolución en nombre de Argentina, Birmania, Ceilán, Dinamarca, Ecuador, Etiopía y Suecia, según el cual, tal como fué modificado posteriormente, la Asamblea General, recordando sus resoluciones del 2, 4 y 5 de noviembre de 1956, y tomando nota con reconocimiento del informe segundo y definitivo del Secretario General: 1) expresaría su aprobación de los principios rectores para la organización y el funcionamiento de la Fuerza que figuraban en dicho informe; 2) convendría con la definición de las funciones de la Fuerza que se indicaban en él; 3) invitaría al Secretario General a continuar sus gestiones con los Gobiernos de los Estados Miembros en lo que respectaba a los ofrecimientos para participar en la Fuerza, a fin de lograr su composición equilibrada; 4) pediría al Jefe del Mando que, de acuerdo con el Secretario General en cuanto a la magnitud y composición, procediera a la

organización completa de la Fuerza; 5) aprobaría, provisionalmente, la norma fundamental para el financiamiento de la Fuerza expuesta en el informe; 6) establecería un Comité Consultivo compuesto de un representante de cada uno de los siguientes países: Brasil, Canadá, Colombia, India, Irán, Noruega y Pakistán, y pediría a dicho Comité, cuyo Presidente sería el Secretario General, que se ocupara de aquellos aspectos relacionados con el plan para establecer la Fuerza y su aplicación que hubieran sido ya tratados por la Asamblea General y que no fueran de la responsabilidad directa del Jefe del Mando; 7) autorizaría al Secretario General a dictar todas las normas e instrucciones indispensables para el funcionamiento eficaz de la Fuerza, previa consulta con el Comité Consultivo, y a adoptar todas las demás medidas administrativas y ejecutivas que fueran necesarias; 8) determinaría que una vez cumplidas las obligaciones inmediatas que se le asignaban en los precedentes párrafos 6 y 7, el Comité Consultivo continuaría ayudando al Secretario General en las obligaciones que le incumbían en virtud de aquella resolución y de otras resoluciones pertinentes; 9) decidiría que el Comité Consultivo, en el cumplimiento de sus funciones, estaría facultado para pedir que se reuniera la Asamblea General y para presentarle informes cuando se plantearan asuntos que, a su juicio, fueran de tal urgencia e importancia que requirieran su consideración; y 10) pediría a todos los Estados Miembros que prestaran la asistencia necesaria al Mando de las Naciones Unidas para el desempeño de sus funciones, inclusive los arreglos necesarios para el paso con destino a la zona de que se trataba y al regresar de la misma.

El representante de Polonia propuso que en la lista de miembros del Comité Consultivo se incluyera a Checoslovaquia. La enmienda de Polonia fué rechazada por 31 votos contra 33 y 14 abstenciones.

El proyecto de resolución de las siete Potencias con las enmiendas introducidas fué aprobado el 7 de noviembre por 64 votos contra ninguno y 12 abstenciones (resolución 1001 (ES-I)).

El representante de la URSS, al explicar su voto, comentó que, en cuanto al establecimiento y envío al territorio egipcio de fuerzas internacionales de policía, la delegación de la URSS consideraba indispensable señalar que con la creación de dichas fuerzas se violaba la Carta de las Naciones Unidas. Citó el Capítulo VII de la Carta manifestando que con arreglo a él sólo el Consejo de Seguridad, y no la Asamblea General, estaba autorizado a crear fuerzas armadas internacionales y a ejercer la acción que fuese necesaria.

El 7 de noviembre el representante de Ceilán presentó otro proyecto de resolución en nombre de 19 países de África y Asia, por el que la Asamblea: 1) reafirmaría sus resoluciones del 2, 4 y 5 de noviembre; 2) instaría nuevamente a Israel a que retirara inmediatamente todas sus fuerzas detrás de las líneas de armisticio establecidas por el Acuerdo de Armisticio; 3) instaría nuevamente al Reino Unido y a Francia a que retiraran inmediatamente todas sus fuerzas del territorio egipcio, en conformidad con las resoluciones antes mencionadas; y 4) encarecería al Secretario General que informara prontamente a la Asamblea General acerca del cumplimiento de la resolución.

El proyecto de resolución de las 19 Potencias fué aprobado aquel mismo día por votación nominal de 65 votos contra 1 (Israel), con 10 abstenciones (resolución 1002 (ES-I)).

En carta de fecha 8 de noviembre, el representante de Israel comunicó al Secretario General que su Gobierno retiraría las fuerzas de Egipto inmediatamente después de que se concertaran con las Naciones Unidas arreglos satisfactorios en relación con la Fuerza Internacional de Emergencia, aunque al mismo tiempo reiteraba su petición de que las Naciones Unidas instaran a Egipto para que diera una respuesta afirmativa a las cuatro últimas preguntas formuladas por el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel en su respuesta al Secretario General de fecha 4 de noviembre (*supra*, apartado b)).

En la sesión plenaria del 10 de noviembre, se distribuyó un proyecto de resolución de los Estados Unidos por el que la Asamblea General: 1) decidiría incluir con prioridad en el programa provisional de su undécimo período ordinario de sesiones (cuya apertura estaba prevista para el 12 de noviembre) la cuestión que figuraba en el programa de su primer período extraordinario de sesiones de emergencia; 2) remitiría para su examen en el undécimo período ordinario de sesiones las actas de las sesiones y los documentos de su primer período extraordinario de sesiones de emergencia, y 3) pediría a la Asamblea General que examinara con carácter urgente los proyectos de resolución de los Estados Unidos sobre las cuestiones de Palestina y del Canal de Suez. El proyecto de resolución, con la enmienda presentada por el representante de los Estados Unidos para que se suprimiera el punto 3), fué aprobado en votación nominal por 66 votos contra ninguno y 2 abstenciones (resolución 1003 (ES-I)).

4. Decisiones adoptadas por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones para lograr que las fuerzas de Israel, Francia y el Reino Unido se retiren de Egipto y promover condiciones pacíficas en la región de Palestina (noviembre de 1956-marzo de 1957)

a) NUEVO LLAMAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA EL RETIRO DE LAS FUERZAS DE ISRAEL, FRANCIA Y EL REINO UNIDO DE EGIPTO (RESOLUCIÓN 1120 (XI) DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1956)

El 13 de noviembre, la Asamblea General decidió por unanimidad incluir en su programa y considerar directamente en su sesión plenaria la cuestión tratada en el primer período extraordinario de sesiones de emergencia entre el 1º y el 10 de noviembre. La Asamblea debatió diversas fases de la cuestión en cuatro grupos de sesiones entre el 23 de noviembre de 1956 y el 8 de marzo de 1957; siete sesiones entre el 23 y el 27 de noviembre; cinco sesiones entre el 18 y el 21 de diciembre de 1956; 12 sesiones entre el 17 de enero y el 2 de febrero de 1957; y nueve sesiones entre el 22 de febrero y el 8 de marzo.

Desde el 15 al 18 de noviembre de 1956, el Secretario General visitó Egipto y conversó en El Cairo con el Presidente y con el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. En informes que se citarán más adelante los resultados de dichas conversaciones fueron expuestos a la Asamblea el 23 de noviembre. Un memorándum del Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto de fecha 17 de noviembre señaló que en las conversaciones de El Cairo se había señalado a la atención del Secretario General el hecho de que las fuerzas armadas de Francia, el Reino Unido e Israel

no habían sido retiradas del territorio egipcio, a pesar de haber transcurrido 13 días desde la última resolución de la Asamblea General instando a dicho retiro, y habían consolidado sus posiciones. Se habían señalado además a la atención del Secretario General los actos de provocación de dichas fuerzas armadas en Port Saïd y en la zona del Canal de Suez. Una carta del 21 de noviembre del representante de Egipto señaló posteriormente a la atención del Secretario General el hecho de que las fuerzas anglo-francesas seguían en acción contra la población civil de Port Saïd.

En un informe de fecha 21 de noviembre (A/3384) el Secretario General declaró que en cumplimiento de las resoluciones 997 y 1002 (ES-I) del 2 y el 7 de noviembre, había pedido verbalmente el 19 de noviembre a los Gobiernos de Francia, Israel y el Reino Unido que aclararan el estado de cumplimiento de dichas resoluciones. Mientras que los tres Gobiernos habían informado que estaban observando estrictamente la cesación del fuego a pesar de ciertas violaciones de la misma por Egipto, Francia informó el 21 de noviembre que había realizado un retiro parcial y manifestó que estaba dispuesta a retirarse tan pronto como la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas estuviera en condiciones de desempeñar sus funciones. La respuesta del Reino Unido, también de fecha 21 de noviembre, declaraba que hasta entonces no se había hecho retiro alguno importante aunque se había convenido en que una unidad de la FENU entraría aquel día en Port Saïd. El Gobierno del Reino Unido para indicar sus intenciones había decidido retirar inmediatamente un batallón de infantería de Port Saïd. El retiro de las demás unidades seguiría tan pronto como la Fuerza de las Naciones Unidas fuera efectiva. Israel informó sobre un retiro realizado, en profundidad diversa, por sus fuerzas, a lo largo de todo el frente egipcio, y sobre el retiro, a partir del 7 de noviembre, del equivalente a dos brigadas de infantería del territorio egipcio a Israel. Israel reiteraba su posición del 8 de noviembre de que retiraría sus fuerzas de Egipto inmediatamente después de la conclusión de arreglos satisfactorios en relación con la Fuerza Internacional de Emergencia, que garantizarían la seguridad de Israel contra el peligro de ataque y contra actos de beligerancia. Además, desearía tener información satisfactoria sobre el método propuesto para el cumplimiento de las funciones de la FENU. Israel declaraba que no había tenido aún oportunidad para discutir dichos arreglos con las Naciones Unidas.

El 21 de noviembre, 22 Estados de Asia y Africa, en vista de que según los informes recibidos la situación estaba empeorando en la Faja de Gaza, pidieron que se adoptaran urgentemente medidas para lograr el retiro inmediato de las fuerzas israelíes y para proporcionar socorro a la población de la zona. En una carta sobre la situación dirigida a Israel, el Secretario General repetía otra petición anterior para que se permitiese a observadores de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas ejercer sus funciones autorizadas por la Asamblea dentro de la Faja de Gaza. Israel declaró en su respuesta que el 10 y 12 de noviembre habían ocurrido en Gaza algunos disturbios de inspiración egipcia que habían causado víctimas, pero que se había restablecido la tranquilidad y que los servicios civiles, incluso las actividades de socorro, funcionaban normalmente. El Secretario General aceptó una invitación para enviar un representante personal a Gaza que informara sobre la situación.

Antes de que la Asamblea comenzara sus debates sobre el problema el 23 de noviembre, el Secretario General, a base de sus conversaciones en El Cairo, presentó tres informes sobre problemas relacionados con la FENU y con los acuerdos para despejar el Canal de Suez. Dichos informes se estudian más adelante en los apartados b) y k).

El 23 de noviembre se presentó a la consideración de la Asamblea un proyecto de resolución patrocinado por 21 Potencias de África y Asia conforme al cual, habiendo recibido el informe del Secretario General sobre el cumplimiento de las resoluciones de 2 y 7 de noviembre (A/3384), la Asamblea: 1) tomaría nota con grave preocupación de que no se habían cumplido sus varias resoluciones en que instaba a una retirada completa e inmediata de dichas resoluciones. El 24 de noviembre se presentó, en nombre de los mismos patrocinadores con la excepción de Egipto, un proyecto de resolución revisado por el cual el primer párrafo de la parte dispositiva del texto original se substituía por otro en el que la Asamblea advertiría con pesar que seguían permaneciendo en Egipto dos tercios de las fuerzas francesas y la totalidad de las fuerzas del Reino Unido, aunque se había anunciado la adopción de medidas para el retiro de un batallón, y que no se había retirado detrás de las líneas de armisticio ninguna fuerza israelí, no obstante el considerable tiempo transcurrido.

Después de haberse rechazado una enmienda de Bélgica, la Asamblea aprobó aquel mismo día el proyecto de resolución modificado de las 20 Potencias por 63 votos contra 5 (Australia, Francia, Israel, Nueva Zelandia, Reino Unido) y 10 abstenciones (resolución 1120 (XI)).

En el curso del debate, muchos representantes señalaron las consecuencias probablemente graves de toda demora en la retirada y declararon que no podía hacerse depender de ninguna condición relacionándola por ejemplo con la competencia de la FENU. La necesidad de despejar el Canal de Suez era urgente y la retirada un requisito previo para las operaciones de despejo y la solución de otros problemas fundamentales. Algunos no creían que el comienzo de las operaciones de despejo tuviera que ser posterior a la retirada, que a su entender coincidiría con la llegada de la FENU.

El representante de Egipto pidió el retiro inmediato e incondicional en un plazo de pocos días y declaró que era imposible concebir que se despejara el Canal mientras las Potencias invasoras permanecían en Egipto. Dijo que el Gobierno de Egipto se encargaría de los trabajos de despejo con la ayuda de las Naciones Unidas en cumplimiento de la resolución 1121 (ES-I) aprobada por la Asamblea el 24 de noviembre (véase *infra*, apartado k)) y de los acuerdos que se concluirían entre el Secretario General y el Gobierno de Egipto. Comentando la importancia del precedente establecido por la FENU, declaró que su Gobierno opinaba que la FENU podría operar en Egipto únicamente con el consentimiento del Gobierno de dicho país. La Fuerza se hallaba en Egipto para poner fin a la agresión y a la presencia de fuerzas invasoras en el territorio egipcio. No se encontraba allí como fuerza de ocupación ni para limpiar de obstrucciones el Canal, ni para resolver ninguna cuestión o problema, en relación con el Canal de Suez, con Palestina o con cualquier otro asunto.

El representante del Reino Unido declaró que la razón principal de las medidas tomadas por el Gobierno británico el 29 y 30 de octubre fué el fracaso de las Naciones Unidas para mantener la paz y lograr el cumplimiento de sus propias resoluciones y para preparar el camino a una solución definitiva en lo que al Cercano Oriente se refería. La intervención anglo-francesa fué de carácter temporal y proyectada con el objeto de impedir que se extendieran las hostilidades. Las fuerzas británicas se retirarían tan pronto como la Fuerza de las Naciones Unidas estuviera en condiciones de asumir con eficacia las funciones que se le habían asignado. El retiro de las fuerzas británicas ya había comenzado y por lo tanto parecía razonable que se iniciara también la labor de despejar el Canal.

El representante de Israel declaró que su Gobierno no veía razón alguna para modificar su convicción de que la acción emprendida por él el 29 de noviembre era la única manera de evitar su destrucción inmediata por la acción agresiva concertada de Egipto y sus vecinos. Su Gobierno seguía siendo fiel a su compromiso del 8 de noviembre de retirar sus fuerzas de Egipto, pero el proceso debería relacionarse con los planes relativos a la FENU y realizarse de manera que impidiera un retorno al *statu quo* de beligerancia y una reanudación del conflicto y proporcionara una oportunidad de paz.

b) DESARROLLO DE LA FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS (FENU) (5 DE NOVIEMBRE DE 1956-MARZO DE 1957)

Inmediatamente después de la aprobación de las resoluciones 1000 (ES-I) y 1001 (ES-I) del 5 y 7 de noviembre de 1956 sobre el establecimiento de la FENU, el Secretario General se puso en contacto con el Gobierno de Egipto a fin de preparar el terreno para la rápida aplicación de las resoluciones. Después de algunas interpretaciones aclaratorias de aquellas resoluciones hechas por el Secretario General respondiendo a preguntas que le dirigió el Gobierno de Egipto sobre las funciones de la Fuerza, Egipto dió su consentimiento al arribo de la Fuerza. Después de aprobar esa interpretación el Comité Consultivo, formado de siete Miembros, recomendó que el Secretario General iniciase el traslado de la Fuerza a Egipto. Entonces comenzó una serie de reuniones entre el Secretario General y el Comité Consultivo con el fin de tratar los diversos aspectos relacionados con la preparación y operaciones de la Fuerza. Todas las decisiones políticas importantes se tomaron con la colaboración del Comité. Para junio de 1957 se habían celebrado ya 32 sesiones.

Respondiendo directamente a la resolución 1001 (ES-I) de 7 de noviembre, los siguientes 24 Estados Miembros ofrecieron su participación en la Fuerza: Afganistán, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Colombia, Checoslovaquia, Chile, Dinamarca, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Finlandia, India, Indonesia, Irán, Laos, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Perú, Rumania, Suecia y Yugoslavia. Se celebraron constantes consultas entre el Secretario General y el General Burns sobre la selección de las unidades que podrían satisfacer sus necesidades. Finalmente se aceptaron las ofertas de tropas de 10 Estados: Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Finlandia, India, Indonesia, Noruega, Suecia y Yugoslavia. Las ofertas de los otros 14 Estados quedaron en pie, pudiéndose disponer de ellas en caso de necesidad. Comentando el problema, el Secretario

General declaró el 12 de noviembre que no había rehusado ninguna contribución pero que consideraciones de orden práctico habían hecho necesaria una selección para lograr la necesaria composición equilibrada con una participación razonablemente limitada y representativa. Además, las facilidades logísticas ofrecidas por los Estados Unidos, Italia y Suiza facilitaban la reunión, transporte y aprovisionamiento rápidos de la Fuerza.

El primer contingente de tropas llegó a la zona de estacionamiento del aeropuerto de Capodichino en Italia el 10 de noviembre y los primeros 10 observadores de la UNTSO fueron transferidos para que prestaran sus servicios en Egipto el 12 de noviembre; la primera unidad de la Fuerza fué transportada por avión a Abu Suweir, en las cercanías de Ismailia, en el Canal, el 15 de noviembre. El 20 de noviembre habían llegado allí 696 hombres.

Del 16 al 18 de noviembre el Secretario General celebró conversaciones en El Cairo con el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Como resultado de las mismas, publicó en un *aide-mémoire* su acuerdo sobre tres puntos fundamentales relativos a la presencia y al funcionamiento de la FENU en Egipto: 1) el Gobierno de Egipto declaraba que, en el ejercicio de sus derechos soberanos respecto de cualquier cuestión relacionada con la presencia y el funcionamiento de la Fuerza, se atendería de buena fe a su aceptación de la resolución 1000 (ES-I) del 5 de noviembre; 2) las Naciones Unidas declaraban que las actividades de la Fuerza se ajustarían de buena fe a la tarea fijada a dicha Fuerza en las resoluciones pertinentes, y, en la inteligencia de que ello correspondía a los deseos del Gobierno de Egipto, reafirmaban su propósito de mantener la Fuerza hasta que hubiera cumplido su cometido; y 3) el Gobierno de Egipto y el Secretario General declaraban que tenían la intención de proceder de inmediato a examinar conjuntamente los aspectos concretos del funcionamiento de la Fuerza; el Gobierno de Egipto reiteraba su intención de facilitar el funcionamiento de la Fuerza y las Naciones Unidas convenían en cooperar en el cumplimiento de los principios rectores que se establecieran como resultado de ese examen.

El Secretario General informó sobre estas medidas preliminares a la Asamblea General el 20 de noviembre (A/3375). En su resolución 1121 (XI) de 24 de noviembre, la Asamblea tomó nota con aprobación del contenido del *aide-mémoire*.

En un segundo informe de fecha 21 de noviembre sobre las disposiciones administrativas y financieras adoptadas para la creación y la actuación de la Fuerza de Emergencia (A/3383), el Secretario General esbozó las disposiciones provisionales relativas a las responsabilidades personales, administrativas y logísticas del Comandante y señaló que el Secretario General, en consulta con el Comité Consultivo, decidiría en última instancia todas las operaciones administrativas y financieras de la Fuerza, incluso los acuerdos con los gobiernos contribuyentes con respecto al suministro de tropas, abastecimientos o servicios que requiriera la Fuerza. El informe planteaba también ciertas cuestiones de policía y proponía medidas para el financiamiento de la Fuerza.

Sobre esta última cuestión el 26 de noviembre la Asamblea aprobó por 52 votos contra 9 y 13 abstenciones un proyecto de resolución presentado por el

Secretario General, estableciendo las medidas provisionales para el financiamiento de la Fuerza fuera del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y a reserva de las futuras recomendaciones de la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto (resolución 1122 (XI)).

Cuando la Asamblea reanudó su debate sobre la cuestión del Oriente Medio entre el 18 y el 21 de diciembre, los efectivos y la organización, así como las actividades de la Fuerza, habían aumentado considerablemente. El 28 de noviembre el Secretario General declaró que el 12 de diciembre la Fuerza sería una "fuerza militar organizada" con el personal adecuado y las tropas de reserva necesarias. El 30 de noviembre habían llegado a Egipto cerca de 2.500 hombres y el 13 de diciembre, al terminar la cuarta semana del transporte aéreo, más de 3.700 hombres procedentes de ocho Estados Miembros prestaban ya servicio en Egipto. A principios de febrero de 1957, la llegada de los contingentes indonesio y brasileño completó virtualmente los efectivos totales de la Fuerza en Egipto con unos 6.000 oficiales y hombres procedentes de 10 Estados Miembros.

Al aumentar sus efectivos, la FENU fué asumiendo su papel orgánico. El 21 de noviembre de 1956 las primeras tropas de las Naciones Unidas se trasladaron de su base en Abu Suweir, cruzando la línea de demarcación del armisticio, y entraron en Port Saïd; el 30 de noviembre unidades de la Fuerza cruzaron el Canal de Suez a el Cap en la orilla este y el 3 de diciembre ocuparon posiciones entre las líneas israelíes y egipcias. El 21 de diciembre la Fuerza fiscalizó en zona neutral el canje de 472 civiles británicos internados (personal de la Base de Suez) y 375 soldados o civiles egipcios detenidos, antes de asumir el control temporal de Port Saïd el 22 de diciembre, cuando las fuerzas anglo-francesas terminaron su retirada. Al retirarse gradualmente las fuerzas israelíes entre diciembre de 1956 y el 8 de marzo de 1957 conforme se expone más adelante, la Fuerza pasó de su posición inicial cerca del Canal a su posición actual a lo largo de la línea de demarcación del armisticio entre Egipto e Israel, estableciendo su Cuartel General en Gaza, en donde entró el 7 de marzo. Entre el 28 de enero y el 6 de febrero, se efectuó el canje de prisioneros de guerra israelíes y egipcios.

Entre tanto, de conformidad con la resolución 1122 (XI) de 26 de noviembre, la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Quinta) de la Asamblea consideró las diversas disposiciones administrativas y financieras adoptadas para la Fuerza de Emergencia. Respecto al método de financiamiento, el Secretario General había llegado a la conclusión de que dichos gastos deberían ser distribuidos entre los Estados Miembros tomando como base la escala de cuotas del presupuesto ordinario para el ejercicio económico de 1957. La Asamblea había creado la Fuerza como instrumento de las Naciones Unidas absolutamente independiente de la política de cualquier nación; por lo tanto, las Naciones Unidas tenían que asumir la plena responsabilidad de su funcionamiento. Los gastos que no fueran asumidos voluntariamente por cada uno de los gobiernos eran gastos de las Naciones Unidas en el sentido del Artículo 17 de la Carta, que declara que los Miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General. El 21 de diciembre la Asamblea aprobó por 62 votos contra 8 y 7 abstenciones una

resolución recomendada por la Quinta Comisión en la que decidía: 1) que los gastos de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, salvo los correspondientes a prestaciones que proporcionaren gratuitamente los gobiernos de los Estados Miembros, serían prorrateados entre los Estados Miembros hasta la suma de 10 millones de dólares con arreglo a la escala de cuotas para las contribuciones al presupuesto anual para el ejercicio económico de 1957; 2) que dicha decisión no prejuzgaría el prorrateo ulterior de cualesquiera gastos que, en relación con la Fuerza, excedieran de los 10 millones de dólares; 3) que se establecería un Comité integrado por el Canadá, Ceilán, Chile, El Salvador, los Estados Unidos de América, la India, Liberia, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que examinaría la cuestión de prorratear los gastos que excedieran de los 10 millones de dólares y presentaría su informe lo antes posible (resolución 1089 (XI)).

Durante el debate sobre el financiamiento de la Fuerza algunos Estados Miembros consideraron que los gastos de la Fuerza deberían ser sufragados por las Potencias que habían actuado contra Egipto.

En los dos meses siguientes, las disposiciones iniciales adoptadas para la Fuerza fueron ampliadas mediante un acuerdo con Egipto que definía su condición jurídica en el país, mediante la publicación de un Estatuto de la Fuerza y mediante nuevas disposiciones sobre su financiamiento.

En un informe de fecha 8 de febrero (A/3526), el Secretario General declaró que, de conformidad con la autorización que le había sido concedida en la resolución 1001 (ES-I) de 7 de noviembre de 1956, y previa consulta con el Comité Consultivo establecido con arreglo a dicha resolución, había realizado las negociaciones necesarias con el Gobierno de Egipto respecto de la condición jurídica de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en Egipto. El informe presentaba a la Asamblea General para su aprobación un acuerdo en forma de canje de notas sobre disposiciones relativas a ciertas condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de la Fuerza durante su permanencia en Egipto. En su carta de acuerdo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto recordaba la declaración de su Gobierno en el sentido de que, al ejercer sus poderes soberanos respecto de cualquier cuestión suscitada por la presencia y funcionamiento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, orientaría su conducta, de buena fe, ajustándose a los términos de la resolución 1000 (ES-I) aprobada el 5 de noviembre.

El acuerdo, declaraba el Secretario General, se basaba en el Artículo 105 de la Carta, en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, a la que Egipto se adhirió en septiembre de 1948, y en las resoluciones de la Asamblea General en que se dispone la creación de la Fuerza de Emergencia. Incluía, entre otras cosas, disposiciones sobre la jurisdicción penal y civil, teniendo en cuenta las funciones especiales que debía desempeñar la Fuerza y teniendo presentes los intereses de las Naciones Unidas, disposiciones sobre el goce por la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, como órgano subsidiario de las Naciones Unidas, de las prerrogativas e inmunidades de la Organización, y sobre la forma de resolver las diferencias que tuvieran por origen la interpretación o aplicación de aquellas disposiciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Convención, cuando ella fuese aplicable, o sometiendo el litigio, para que emi-

tiese fallo definitivo, a un tribunal compuesto de tres árbitros. El acuerdo seguiría en vigor hasta la partida de la Fuerza de Egipto y la fecha efectiva en que aquélla se hubiera llevado a cabo sería definida por el Secretario General y el Gobierno de Egipto. El 22 de febrero la Asamblea aprobó un proyecto de resolución patrocinado por los 10 Miembros que habían proporcionado contingentes a la Fuerza, tomando nota con aprobación de este informe del Secretario General sobre las disposiciones relativas a la situación jurídica de la Fuerza en Egipto (resolución 1126 (XI)).

El día anterior, el Secretario General había hecho circular para información de la Asamblea el "Estatuto de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas", que había dictado de conformidad con la resolución 1001 (ES-I) de 7 de noviembre de 1956, después de haber consultado con el Comité Consultivo y los Estados participantes. El Estatuto afirmaba el carácter internacional de la Fuerza como órgano auxiliar de la Asamblea General.

Respecto a la cuestión del financiamiento de la Fuerza, la Asamblea consideró y aprobó el 27 de febrero, por 52 votos contra 8 y 3 abstenciones, una resolución (1090 (XI)) preparada por el Comité de los Nueve nombrado por la resolución 1089 (XI) de 21 de diciembre y recomendada por la Quinta Comisión, sobre la distribución de los gastos que, según el Secretario General, excederían de los 10 millones de dólares que se le habían asignado en conformidad con la resolución 1122 (XI) de 26 de noviembre de 1956. Conforme a los términos de dicha resolución, la Asamblea, tomando nota de que los gastos de la Fuerza ya aprobados para 1957 representaban un aumento apreciable en las cuotas correspondientes a los Estados Miembros, y reconociendo que ciertos gobiernos habían tomado a su cargo ciertos gastos de la Fuerza por conceptos tales como remuneraciones, material, suministros y servicios: 1) autorizaba al Secretario General a comprometer gastos para la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas hasta una suma total de 16.500.000 dólares para el período que terminaría el 31 de diciembre de 1957; 2) invitaba a los Estados Miembros a hacer contribuciones voluntarias para cubrir la suma de 6.500.000 dólares a fin de aliviar la carga financiera que recaería sobre la totalidad de los Miembros en 1957; 3) autorizaba al Secretario General para que, en espera de que se recibieran contribuciones a la Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, anticipara con cargo al Fondo de Operaciones las cantidades que se requirieran, o en caso necesario, gestionara préstamos para la Cuenta Especial de fuentes apropiadas, incluso recurriendo a otros fondos colocados bajo la autoridad del Secretario General, entendiéndose que tales préstamos no deberían afectar a los programas en curso de ejecución; y 4) decidía que la Asamblea General, en su duodécimo período de sesiones, examinará la manera de financiar cualesquiera gastos de la Fuerza que excedieran de 10 millones de dólares y que no fueran cubiertos mediante contribuciones voluntarias.

c) TRATO DADO A LOS NACIONALES BRITÁNICOS Y FRANCESES Y A LA COMUNIDAD JUDÍA EN EGIPTO (DEBATE EN LA ASAMBLEA GENERAL, 18-21 DE DICIEMBRE DE 1956)

Del 21 de noviembre al 14 de diciembre de 1956 los representantes de Francia, del Reino Unido y de Israel señalaron a las Naciones Unidas acusaciones de mal

trato a ciudadanos franceses y británicos y a la comunidad judía en Egipto por parte del Gobierno de ese país. Esta cuestión fué discutida en cinco sesiones de la Asamblea, entre el 18 y el 21 de diciembre.

Las acusaciones principales se referían a la expulsión de Egipto de nacionales británicos, franceses y judíos y a la confiscación de propiedades británicas, francesas y judías. La respuesta de Egipto decía en esencia que, víctima de una agresión no provocada, Egipto se había visto obligado a tomar ciertas medidas para evitar comprometer su seguridad con la presencia de extranjeros y había ejercido su derecho soberano de confiscar la propiedad de extranjeros enemigos.

d) INFORME ORAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL RETIRO DE FUERZAS BRITÁNICAS Y FRANCESAS Y SOBRE LOS PLANES PARA EL RETIRO DE LAS FUERZAS ISRAELÍES DE EGIPTO (REFERENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE Y EL 22 DE DICIEMBRE DE 1956)

El 21 de diciembre de 1956, el Secretario General contestó en la Asamblea General a ciertas preguntas que hizo el representante de Jordania en el curso de sus declaraciones sobre el cumplimiento de la resolución 1120 (XI) que pedía el retiro inmediato de las fuerzas francesas, británicas e israelíes de Egipto, que entorpecían el avance de la FENU a una posición sobre la línea de demarcación del armisticio egipcio-israelí.

El Secretario General declaró que el representante de Israel le había comunicado, el 1º de diciembre, que el 3 de diciembre las fuerzas israelíes serían retiradas de una ancha faja de territorio (de cerca de 50 kilómetros) en la proximidad del Canal de Suez y a lo largo de toda su extensión. Elementos de la FENU habían entrado inmediatamente en la zona al este del Canal entre las líneas egipcias e israelíes, pese a que su progreso se vió entorpecido por las minas y los caminos destruidos. Después de que el representante de Israel comunicó el 11 de diciembre que Israel estaba dispuesta a retirar otras tropas de la península de Sinaí, el General Burns, comandante de la FENU, había conferenciado, cumpliendo instrucciones, con el comandante israelí el 16 de diciembre, y había aceptado ciertos preparativos concretos a fin de retirar tropas para el 18 y 19 de diciembre, pero había expresado la opinión de que el propuesto ritmo de 25 kilómetros por semana no sería aceptable para el Secretario General. El 17 de diciembre se había confirmado a la delegación de Israel que dicho plan, que hubiera significado una demora de 4 a 6 semanas antes del retiro de las tropas "detrás de las líneas de armisticio", no sería aceptable para el Secretario General. El General Burns había declarado poco satisfactorias otras propuestas para el retiro de tropas hechas por Israel ese día y después de discutirse las propuestas se informó el 20 de diciembre al representante de Israel que un programa de evacuación que no tuviera fijado un término era incompatible con la resolución de la Asamblea y poco satisfactorio. Ese día (21 de diciembre) el representante de Israel había presentado un nuevo programa en que disponía el retiro de tropas en dos etapas. En la primera etapa, ninguna fuerza de Israel estaría "al oeste de El Arish" después de la primera semana de enero, si bien proseguiría la ocupación israelí de Sharm el Sheik y Tirán; la segunda etapa suponía el retiro completo de las fuerzas israelíes, es decir, más allá de las líneas del Armisticio, para una fecha no especificada.

La situación en lo que se refería a las tropas francesas y británicas era que su retirada de Port Saïd estaba ahora a punto de concluir. Previamente, el 3 de diciembre, el Secretario General había transmitido comunicaciones del Reino Unido y Francia en las que, después de tomar nota de que una fuerza efectiva de las Naciones Unidas estaba a punto de llegar y de que el Secretario General había aceptado la responsabilidad de organizar la tarea de despejar el Canal, y de restablecer el libre tránsito cuando éste hubiera sido despejado en conformidad con la resolución del 2 de noviembre, los dos Gobiernos habían confirmado su decisión de proseguir sin demora el retiro de sus fuerzas. Posteriormente se anunció que las fuerzas anglo-francesas habían terminado de retirarse el 22 de diciembre y que los contingentes de la FENU avanzaban y ocupaban posiciones.

e) INFORMES SOBRE LA FAJA DE GAZA (CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 1956)

El 10 de enero de 1957 el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) presentó un informe referente a los efectos de las operaciones militares sobre los refugiados de Gaza que abarcaba el período comprendido entre el 1º de noviembre y mediados de diciembre de 1956 y ese mismo día el Secretario General publicó un informe, fechado el 3 de diciembre de 1956, preparado por un oficial de la FENU que había sido designado representante personal suyo y que había visitado la Faja de Gaza del 27 al 30 de noviembre.

El Director del Organismo informó sobre incidentes en que varios civiles fueron muertos por tropas israelíes durante la ocupación de Khan Yunis, el día 3 de noviembre. El 12 de noviembre había ocurrido otro serio incidente en el campamento del Organismo situado en Rafah, durante una operación de investigación conducida por fuerzas israelíes con el propósito de encontrar a antiguos miembros de la "Brigada de Palestina" y de unidades de los "fedayín". A una protesta del Organismo contra estos actos, el Gobierno de Israel había contestado que estaba tomando medidas urgentes para aclarar los hechos y que estaba haciendo todo lo posible para que esos incidentes no se repitiesen. A fines de noviembre, el Director declaró que en la Faja de Gaza reinaba relativa calma.

El informe del representante del Secretario General se limitaba a investigar las condiciones que existían durante su visita, del 27 al 30 de noviembre. Decía el informe que reinaba la calma. Concluía señalando que algunas de las medidas administrativas parecían indicar que existía la tendencia a facilitar la continuación de la situación creada como resultado de las actividades militares de Israel.

f) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (REFERENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE DE 1956 Y EL 15 DE ENERO DE 1957) Y RESOLUCIÓN 1123 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 19 DE ENERO QUE PIDE EL RETIRO COMPLETO DE ISRAEL EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS

Cuando, a petición de Egipto, la Asamblea General reanudó el debate sobre la cuestión del Oriente Medio en 13 sesiones celebradas entre el 17 de enero y el 2 de febrero de 1957, estudió un informe del Secretario General de fecha 15 de enero (A/3500 y Add.1).

El informe describía los acontecimientos ocurridos desde el informe que formulara verbalmente a la Asamblea el 21 de diciembre de 1956 (véase el apartado *d) supra*) sobre el cumplimiento de las condiciones del retiro de tropas definidas en las resoluciones 997 (ES-I), 999 (ES-I), 1002 (ES-I) y 1120 (XI) de los días 2, 4, 7 y 24 de noviembre de 1956, respectivamente. Desde el completo retiro de las fuerzas anglo-francesas el 22 de diciembre, el cumplimiento se refería a las tropas israelíes. En el curso de sus amplias discusiones con representantes del Gobierno de Israel tendientes a que se acataran las demandas lo más pronto posible, los representantes de Israel anunciaron otros retirios de tropas, después del retiro inicial del 24 de noviembre, que se efectuaron en la forma siguiente: 1) el 3 de diciembre de 1956, retiro hacia el este hasta una distancia aproximada de 50 kilómetros del Canal; 2) del 2 al 8 de enero de 1957, retiro a una línea que corría de norte a sur, con lo cual no quedaban fuerzas israelíes al oeste de El Arish, a unos 40 kilómetros del borde meridional de la Faja de Gaza; 3) el 15 de enero, retiro de las tropas otros 25 a 30 kilómetros hacia el este, excepto en la zona de Sharm el Sheik. El 14 de enero se había anunciado que se pensaba realizar otro retiro de tropas que para el 22 de enero dejaría evacuado por completo el desierto de Sinaí, con excepción de la zona de Sharm el Sheik, que según la comunicación, aseguraba la libertad de navegación por el estrecho de Tirán y el golfo de Aqaba. Con respecto a la evacuación de esa zona, Israel había declarado que estaba dispuesto a iniciar inmediatamente las negociaciones con el Secretario General.

El Secretario General señaló que esa zona y las islas situadas frente a Sharm el Sheik eran territorio egipcio o territorio bajo la jurisdicción egipcia. En virtud de la resolución de la Asamblea, las tropas debían ser retiradas de esos territorios. El Secretario General añadió que podía considerarse que la importancia internacional del golfo de Aqaba justificaba el derecho de paso inocente por los estrechos de Tirán y por el golfo, conforme a principios reconocidos de derecho internacional. Declaró que no había considerado que el debate de la cuestión, y su posible relación con la acción pedida en las resoluciones de la Asamblea, estuviera dentro del mandato que se le había conferido en la resolución 999 (ES-I) del 4 de noviembre.

Las discusiones que había tenido se habían basado en la resolución 999 (ES-I), en la que se le había pedido que tratara de que las fuerzas fueran retiradas detrás de las líneas de armisticio. La resolución básica 997 (ES-I) del 2 de noviembre sobre la crisis del Oriente Medio no sólo instaba al retiro inmediato detrás de las líneas de armisticio, sino también se refería a otros dos puntos de importancia: se instaba a las partes a que desistieran de cruzar las líneas de armisticio para efectuar incursiones y a que observaran escrupulosamente las disposiciones de los acuerdos de armisticio. El Secretario General señaló que los tres puntos no estaban vinculados entre sí en forma condicional.

Añadió además que cuando, a consecuencia del proyectado retiro de Israel, la FENU llegara el 22 de enero a la línea de demarcación del armisticio en el sector en que esta línea seguía la frontera nordeste del "desierto del Sinaí", estos otros dos puntos adquirirían una importancia todavía mayor. De esos puntos se desprendía claramente que el retiro de las fuerzas israelíes había de hacerse detrás de la línea del armisticio tal como se había establecido en el acuerdo con-

certado entre Egipto e Israel. La última comunicación de Israel no decía nada acerca del retiro de sus fuerzas de la Faja de Gaza, que quedaba situada del lado egipcio de la línea de demarcación. El representante de Israel había declarado verbalmente que su Gobierno estaba dispuesto a discutir prontamente propuestas relativas a arreglos para la Faja de Gaza.

El Secretario General indicó además que el llamamiento que se hacía a las partes para que observaran en su totalidad las disposiciones de los acuerdos de armisticio reforzaba la petición concreta de que desistieran de las incursiones. Las garantías que las partes habían dado al Secretario General en abril y mayo de 1956 sobre la cesación del fuego daban mayor fuerza legal a los artículos pertinentes de los acuerdos de armisticio. La Organización para la Vigilancia de la Tregua tenía como una de sus funciones principales la de impedir que se efectuaran incursiones y ataques armados. Las partes debían prestar a la Organización el apoyo necesario para el cabal y efectivo cumplimiento de sus funciones. Debía establecerse un enlace entre la Organización para la Vigilancia de la Tregua y la FENU y quizás fuera necesario examinar la cuestión de hasta qué punto podía la FENU asumir funciones de la Organización. También convenía que las partes reiteraran formalmente su compromiso de desistir de las incursiones y que se adoptaran las medidas necesarias para impedir que eso ocurriera.

Del mismo modo que la cesación del fuego, el retiro de las tropas era una etapa preliminar de fundamental importancia en una evolución para cimentar debidamente una situación de paz. La función principal de la FENU, "ayudar a mantener la tranquilidad", confería a esa fuerza un valor enorme como respaldo de los esfuerzos destinados a resolver las otras finalidades de la Asamblea, que debían lograrse para crear condiciones más satisfactorias que las reinantes durante el período anterior a la crisis. Era esencial, concluyó el Secretario General, que los gobiernos se encontraran en condiciones de poder dedicarse a las constructivas tareas para las cuales debía preparar el camino la conclusión rápida de la primera etapa de ejecución de la resolución de la Asamblea.

El 17 de enero de 1957, el representante de Ceilán presentó un proyecto conjunto de resolución en nombre de 25 Estados Miembros por el cual se proponía que la Asamblea General, recordando sus resoluciones 997 (ES-I), de 2 de noviembre de 1956, 998 (ES-I), 999 (ES-I), 1002 (ES-I) y 1120 (XI), y tomando nota del informe del Secretario General de fecha 15 de enero de 1957: 1) advirtiera con pesar y preocupación que Israel no había dado cumplimiento a las disposiciones de las mencionadas resoluciones; y 2) pidiera al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para lograr el retiro completo de Israel conforme a las resoluciones mencionadas y le informara sobre dicho retiro dentro de un plazo de cinco días. El 19 de enero, la Asamblea aprobó el proyecto de resolución por 74 votos contra 2 (Francia, Israel) (resolución 1123 (XI)).

g) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DEL 24 DE ENERO DE 1957, PREPARADO EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1123 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 19 DE ENERO DE 1957: CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADICIONALES PARA ESTABLECER CONDICIONES DE PAZ

Durante las discusiones con el Secretario General sobre el retiro de tropas conforme a la resolución 1123

(XI) del 19 de enero de 1957, Israel presentó, el 23 de enero, un *aide-mémoire* en el que explicaba su posición en la zona de Sharm el Sheik y la Faja de Gaza. Declaraba esta nota que la política de beligerancia mantenida por Egipto durante seis años era el factor que más había influido en la forma en que Israel enfocaba este problema. Debido a esto, Israel se preocupaba de que el retiro de sus fuerzas de Egipto no aumentara las serias probabilidades de actos de guerra contra él. El retiro de la región de Sharm el Sheik debía acompañarse de medidas que garantizaran la libre navegación en el estrecho de Tirán y el golfo de Aqaba, que eran vías de navegación internacional en las cuales existía el derecho de paso inocente. La negativa de Egipto a aceptar la decisión fundamental del Consejo de Seguridad del 1º de septiembre de 1951 referente al Canal de Suez, hacía imperativo garantizar que el bloqueo egipcio no se restableciera nunca en el golfo de Aqaba. La FENU podía ser un factor que contribuyera a la solución de este problema si ocupara posiciones evacuadas por Israel y permaneciera allí hasta que, por un arreglo pacífico o por otros instrumentos internacionales, se convinieran entre las partes interesadas otros medios eficaces para garantizar permanentemente la libertad de navegación y para garantizar que no se produjeran actos de beligerancia. Para ese fin se necesitaba una definición más precisa de las funciones de la FENU, en particular, la duración de su misión y los requisitos que se debían cumplir para considerarla terminada. En cuanto a la Faja de Gaza, Israel sugirió que, en vista de la situación imperante allí desde 1948 y del hecho de haber sido utilizada como trampolín para atacar a Israel, ninguna fuerza militar israelí permanecería en esa zona, pero que Israel seguiría proporcionando servicios administrativos y de seguridad, estos últimos con fuerzas de policía israelíes. El plan de Israel no preveía la entrada de la FENU en la zona. Israel estaba dispuesto a preparar con las Naciones Unidas un tipo conveniente de relación con respecto a la Faja.

El 24 de enero, el Secretario General informó (A/3512) que, al expirar el plazo de cinco días fijado por la resolución 1123 (XI), Israel todavía no había dado cumplimiento total a los requerimientos de la Asamblea General con respecto al retiro de las tropas. En el mapa que figuraba como anexo se indicaba que Israel no se había retirado de la Faja de Gaza ni de una Faja que corría a lo largo de la orilla occidental del golfo de Aqaba.

Para contribuir a lograr condiciones de paz en la zona, el Secretario General añadió, era preciso que las Naciones Unidas aplicaran medidas positivas y efectivas dentro de los límites siguientes: 1) Las Naciones Unidas no podían condonar un cambio del *status juris* resultante de una acción militar emprendida en contradicción de las disposiciones de la Carta. Las resoluciones de la Asamblea sobre el retiro de tropas reflejaban ese extremo. 2) El uso de fuerzas militares por las Naciones Unidas que no fuera el previsto en el Capítulo VII de la Carta requeriría el consentimiento de los Estados en que la Fuerza había de operar y no debía recurrirse a él como medio de imponer el arreglo, en interés de una de las partes, de controversias políticas o de situaciones jurídicas que, por su carácter, se admitía que eran controvertibles. (Durante el debate en la Asamblea que se explica a continuación, el Secretario General aclaró el principio manifestando que, en la práctica, el consentimiento debía otorgarse de

manera que ofreciese una base para el funcionamiento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, toda vez que el consentimiento de Egipto había sido condicional en el caso de la FENU). 3) Debía respetarse plenamente, continuaba el informe, los derechos que la Carta y los acuerdos internacionales concertados en ejercicio de esos derechos reconocían.

El Secretario General señaló que el Acuerdo de Armisticio entre Egipto e Israel había creado una situación *de facto*, por la cual la administración y la seguridad en la Faja de Gaza quedaban en manos de Egipto por ser la Potencia que ejercía el "control" efectivo. Esa situación sólo podía cambiarse jurídicamente mediante arreglos entre las partes, y las Naciones Unidas no podían prestar su asistencia para mantener una situación contraria a la creada por el Acuerdo de Armisticio, como la aceptación del control de Israel que se había sugerido, incluso de un control no militar. Además, cualquier función que se asignara a la FENU en la zona de Gaza, que fuera más allá de la autorizada en las resoluciones de la Asamblea, o cualquiera ampliación de las responsabilidades administrativas de las Naciones Unidas que fuera más allá de sus responsabilidades con respecto a los refugiados, exigía el consentimiento de Egipto.

El artículo I del Acuerdo de Armisticio asimila dicho Acuerdo a un pacto de no agresión. El restablecimiento de las relaciones entre las Partes en condiciones más firmes que las que existían en la actualidad podía basarse en una reafirmación que naturalmente debía extenderse también a otras cláusulas, como los artículos VII y VIII. Las restricciones que imponían esos artículos al despliegue de fuerzas militares a ambos lados de la línea de demarcación del armisticio no se cumplían al comenzar la crisis. No debía haberse permitido un retorno a ese estado de cosas. La aplicación plena hubiera reducido la tirantez y hubiera tenido consecuencias positivas sobre otros problemas de la región. Según esos artículos, las "fuerzas defensivas" egipcias e israelíes sólo podían permanecer en el sector del frente occidental bajo su respectivo control, debiendo desmilitarizarse la región alrededor de El Auja y mantener allí la sede de la Comisión Mixta de Armisticio. Con la desmilitarización de la zona de El Auja en conformidad con el Acuerdo de Armisticio, quizás era indicado que la Fuerza estacionase unidades en el lado israelí de la línea, al menos en esa zona. Tal despliegue, que requería una nueva decisión de la Asamblea, tenía la ventaja de colocar a la Fuerza en situación de asumir todos los deberes de vigilancia del Organismo de Vigilancia de la Tregua en lo que se refería a la línea de armisticio egipcio-israelí, ya que en el Acuerdo no se había previsto un nuevo arreglo y que por lo tanto se requería el consentimiento de las dos partes.

Con respecto a la colaboración entre la FENU y el Organismo para la Vigilancia de la Tregua en la prevención de incursiones y ataques armados, que había discutido en su informe previo, el Secretario General había sido informado con posterioridad del deseo de Egipto de que se proporcionara esa ayuda a fin de hacer cesar todos los ataques e incursiones efectuados a través de la línea de armisticio.

En relación con el problema más antiguo, que no estaba directamente relacionado con la presente crisis, de la libertad de paso por el golfo de Aqaba, la acción militar de Israel no debía influir en la solución. Existía una controversia jurídica en cuanto a la amplitud del

derecho de paso inocente por esas aguas. Cualesquiera derechos que existan debían ser ejercidos con prudencia por ambas partes. La resolución del Consejo de Seguridad del 1º de septiembre de 1951 por la que se invitaba a Egipto a levantar las restricciones impuestas a la navegación por el Canal de Suez tenía relación directa con la cuestión. El régimen de armisticio, en el que se fundaba la resolución, se había venido cumpliendo cada vez menos en los últimos años. No obstante, podía considerarse que el régimen estaba en vigor, por lo menos en parte, si las fuerzas se retiraban a las líneas de armisticio, aunque siguieran sin cumplirse otras cláusulas fundamentales del Armisticio. Si se aplicaban de nuevo los artículos VII y VIII, resultaba completa la justificación de la posición contraria a todos los actos de beligerancia y las partes debían dar seguridades de que no reivindicarían ningún derecho de beligerancia, comprendidos dichos derechos en el golfo de Aqaba y en el estrecho de Tirán.

Al retirarse las tropas israelíes de la zona de Sharm el Sheik, la FENU las seguiría del mismo modo que en otras partes de Sinaí. El deber de la Fuerza con respecto a la cesación del fuego y al retiro de las tropas determinaría sus movimientos. No obstante, si se reconocía la necesidad de tal arreglo, se podía convenir en que las unidades de la Fuerza ayudaran a mantener condiciones de paz en la zona excediéndose de los deberes que les imponía este principio general. De conformidad con los principios jurídicos generales reconocidos como terminantes para el despliegue de la FENU, la Fuerza no debía ser utilizada en forma que predeterminara la solución de las cuestiones controvertibles en juego. Por lo tanto la Fuerza no debía ser desplegada de manera que protegiera posiciones especiales en estas cuestiones, aunque transitoriamente podía actuar de manera que ejerciera una acción moderadora.

b) RESOLUCIONES 1124 (XI) Y 1125 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 2 DE FEBRERO DE 1957 EN LAS QUE SE INSTA A ISRAEL A COMPLETAR SU RETIRO SIN MÁS DILACIONES Y EN LAS QUE SE DISPONEN OTRAS MEDIDAS PARA CREAR CONDICIONES PACÍFICAS

Cuando la Asamblea General discutió nuevamente el hecho de que Israel no había cumplido sus resoluciones, en el curso de siete sesiones celebradas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1957, estudió el *aide-mémoire* de Israel, el informe del Secretario General y dos proyectos de resolución presentados el 1º de febrero por Brasil, Colombia, los Estados Unidos, la India, Indonesia, Noruega y Yugoslavia.

En el primer proyecto se proponía que la Asamblea: 1) deplorara que Israel no hubiera completado su retiro detrás de la línea de demarcación del armisticio, a pesar de las repetidas peticiones de la Asamblea General; 2) instara a Israel a que completara su retiro sin más dilación. En el segundo proyecto, que trataba de las medidas expuestas en el informe del Secretario General, se proponía que la Asamblea, reconociendo que el retiro por parte de Israel debía ir seguido de medidas que aseguraran el progreso hacia la creación de condiciones pacíficas: 1) tomara nota con agradecimiento del informe del Secretario General y de las medidas indicadas en el mismo que debían ser llevadas a cabo una vez que Israel hubiera terminado completamente su retirada; 2) instara a los Gobiernos de Egipto e Israel a que observaran escrupulosamente las disposi-

ciones del Acuerdo de Armisticio de 1949; 3) declarara que consideraba que, una vez terminado el retiro total por parte de Israel de las zonas de Sharm el Sheik y Gaza, la observancia escrupulosa del Acuerdo de Armisticio exigía que se situara a la FENU en la línea de demarcación egipcio-israelí establecida por el Armisticio y que se pusieran en práctica las demás medidas propuestas en el informe teniendo debidamente en cuenta las consideraciones citadas en el mismo, a fin de que contribuyeran a establecer condiciones que dieran por resultado el mantenimiento de la paz en la región; y 4) pidiera al Secretario General que, en consulta con las partes interesadas, diera los pasos necesarios para poner en práctica dichas medidas y que informara como fuera procedente a la Asamblea General.

En el curso del debate, varios representantes expresaron la opinión de que, como condición esencial para cualquier otra medida sobre la situación en el Oriente Medio, Israel debía retirar sus fuerzas inmediatamente detrás de la línea de armisticio, y de que ese retiro no debía supeditarse a que las Naciones Unidas dieran previamente ciertas garantías. Varios representantes, que advirtieron las graves consecuencias que tendría el que Israel persistiera en su actitud, consideraron que el primer proyecto de resolución estaba lejos de ser adecuado y propusieron condenar a Israel y dictar sanciones contra él. Según esos Miembros, ceder a la tentativa de Israel de imponer las condiciones descritas en su *aide-mémoire* y cambiar las funciones de la FENU sin el consentimiento de Egipto sería recomendar la agresión.

Aunque se insistió principalmente en la cuestión del retiro de las tropas, también se reconoció que para evitar volver a la situación que prevalecía en octubre, era necesario tomar otras medidas que representarían un progreso concreto hacia la creación de condiciones de paz en el Oriente Medio.

La Asamblea examinó largamente la discutida cuestión del derecho de "paso inocente" y del derecho de un Estado ribereño a tomar las medidas necesarias para defender su seguridad en las angostas aguas del estrecho de Tirán y del golfo de Aqaba que dan acceso al puerto israelí de Eilat, así como la forma en que había evolucionado la situación en la Faja de Gaza y a lo largo de la línea de armisticio. Varios representantes declararon que donde debía resolverse la cuestión del libre paso era en la Corte Internacional de Justicia.

Muchos opinaron que una vez que Israel se retirara, las unidades de la FENU debían entrar, no solamente, como se había dispuesto antes, para garantizar la aplicación de la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre de 1956, sino también para desplegarse en las zonas peligrosas de la Faja de Gaza y Sharm el Sheik hasta que se arreglaran los problemas particulares. Dichos representantes destacaron la necesidad de restablecer y revitalizar el Acuerdo de Armisticio entre Egipto e Israel de 1949 y apoyaron la premisa del Secretario General de que la FENU debía cooperar con el Organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua para garantizar el respeto a las obligaciones de armisticio, inclusive, declararon algunos, la de no ejercer derechos de beligerancia. Algunos sugirieron que las Naciones Unidas colaboraran en medidas para sustituir la actual administración civil de la Faja de Gaza de modo que ésta no pudiera volver a utilizarse como base para incursiones.

Algunos Miembros opinaron que era esencial establecer la FENU en el estrecho de Tirán, sin perjuicio de cualquier determinación que se diera a las cuestiones jurídicas que el problema entrañaba, para lograr allí la separación de las fuerzas egipcias e israelíes de mar y tierra hasta que se estableciera claramente que el no ejercicio de derechos de beligerancia había establecido en la práctica las condiciones de paz que debían existir para la navegación por aguas que tenían tal interés internacional.

Otros Miembros, al expresar su preocupación ante cualquier propuesta de ampliar las funciones de la FENU, declararon que esas propuestas entrañaban ventajas para los agresores y sostuvieron que la misión provisional de la FENU cesaría una vez que Israel retirara sus tropas. La FENU no debía convertirse en una fuerza que ocupara indefinidamente zonas de importancia vital ni utilizarse para ejercer presión en un nuevo intento de intervenir en los asuntos internos de Egipto. Se dijo que el segundo proyecto de resolución atendía al cumplimiento de demandas de Israel a Egipto como precondition para la evacuación del territorio egipcio, y que sus planes para utilizar la FENU se oponían a la Carta y violaban los derechos soberanos de Egipto.

El representante de Egipto, que ya antes había declarado que su Gobierno estaba dispuesto a cumplir todos los términos del Acuerdo de Armisticio, declaró al terminar el debate que la posición de su Gobierno se basaba en el retiro inmediato de Israel y en que la FENU tomara posiciones exclusivamente a ambos lados de la línea de demarcación del armisticio. Expresó que confiaba en que la intención de la Asamblea era mantener las actividades de la FENU dentro de límites jurídicos.

El representante de Israel se mantuvo en la posición expuesta en el *aide-mémoire* de su país y declaró que el Acuerdo de Armisticio, que el Primer Ministro de Israel había declarado el 23 de enero infringido y roto, sin posibilidad de que pudiera volver a ponerse en vigor, no ofrecía base suficiente para establecer relaciones pacíficas entre su país y Egipto. El Acuerdo había naufragado en los escollos de la beligerancia. La renuncia mutua a la beligerancia en todas sus formas era la precondition para cualquier relación ordenada entre Egipto e Israel.

El 2 de febrero, la Asamblea General, después de rechazar una moción del representante de la URSS de aplazar hasta el 5 de febrero la votación sobre el segundo proyecto de resolución, aprobó el primer proyecto por 74 votos contra 2 (Francia e Israel) y 2 abstenciones (resolución 1124 (XI)) y aprobó después el segundo proyecto, por 56 votos contra ninguno y 22 abstenciones (resolución 1125 (XI)).

i) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DEL 11 DE FEBRERO DE 1957 REDACTADO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1125 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DEL 2 DE FEBRERO DE 1957

En un informe del 11 de febrero de 1957 (A/3527), el Secretario General explicó todo lo que había hecho para poner en práctica las medidas previstas en la resolución 1125 (XI) del 2 de febrero.

En un *aide-mémoire* presentado el 4 de febrero, el representante de Israel: 1) pedía al Secretario General que preguntara si Egipto había convenido en la abstención recíproca y completa de actos de beligerancia,

por tierra, aire y mar, cuando se retiraran las tropas de Israel; y 2) preguntaba si, inmediatamente después del retiro de las fuerzas israelíes de la zona de Sharm el Sheik, unidades de la FENU se situarían a lo largo de la costa occidental del golfo de Aqaba para actuar como freno que evitara cualquier acto de hostilidad, y permanecerían en el lugar hasta que las partes interesadas convinieran en otras medidas efectivas que garantizaran la libertad permanente de navegación y la abstención de actos de beligerancia en el estrecho de Tirán y el golfo de Aqaba.

El Secretario General comunicó que ambas cuestiones, en efecto, exigían medidas para aplicar la resolución 1125 (XI) que, aunque estrechamente relacionada con la resolución 1124 (XI), tenía, por lo menos, como precondition, la aceptación plena e incondicional de las demandas de retiro de tropas contenidas en esta última. La segunda cuestión, en vista de la situación de la Asamblea General, exigía el consentimiento de Egipto y hacía importante saber si el propio Israel consentía en principio que la FENU se desplegara en su territorio.

Por consiguiente, el Secretario General había tratado de aclarar, con respecto a la cuestión del retiro de tropas, si, en lo que se refería a Gaza, Israel entendía que el retiro debía comprender la administración civil y la policía de Israel así como sus fuerzas armadas, y con respecto al estacionamiento de tropas de la FENU, si como cuestión de principio Israel se avenía a que la fuerza se estacionara del lado israelí de la línea de demarcación fijada por el armisticio.

En su respuesta, el representante de Israel, reiterando la cuestión planteada en el *aide-mémoire* de su país, declaró que el Gobierno de Israel fijaría su posición sobre todas las cuestiones pendientes una vez que el Gobierno de Egipto informara sobre si emprendería o no actos de beligerancia después del retiro de las tropas israelíes. Su Gobierno consideraba que no era equitativo que se le pidiera discutir su actitud sobre cualquier cuestión concreta que afectara a su seguridad a menos de saber si su respuesta debía basarse en el supuesto de una guerra o en el supuesto de un progreso hacia la paz.

El Secretario General manifestó que su posición se había basado en el reconocimiento por parte de la Asamblea de que para poder progresar hacia la creación de condiciones de paz en la zona se requería, primero, el retiro completo de las tropas de Israel y, segundo, distintas medidas a base de la observancia escrupulosa del Acuerdo de Armisticio, que, en su primer artículo, establecía el derecho de cada parte a su seguridad y a estar libre de todo temor de ataque por las fuerzas armadas de la otra.

Con respecto al Acuerdo General de Armisticio, informó que Egipto había reafirmado su intención de cumplir plenamente sus disposiciones, como había indicado previamente al aceptar la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre, dando por sentado desde luego que la observancia sería recíproca.

El Secretario General manifestó que el punto de vista de Israel era que Egipto había violado invariablemente el Acuerdo de Armisticio General desde 1949 con su ataque contra Israel y con el bloqueo de ese país. Además Israel creía que su finalidad principal de evitar los actos de beligerancia y su carácter de instrumento de transición hacia el arreglo pacífico habían sido repudiados continuamente. La acción de

Egipto, al parecer de Israel, había hecho que el Acuerdo quedara reducido a la nada, con la consecuencia de que había que proceder a formular un nuevo sistema de relaciones.

j) DEBATE EN LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LOS INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL Y RETIRO DE LAS TROPAS ISRAELÍES DE EGIPTO (22 DE FEBRERO A 8 DE MARZO DE 1957)

La Asamblea reanudó el debate sobre la cuestión del Oriente Medio en nueve reuniones celebradas del 22 de febrero al 8 de marzo de 1957. Cuando se terminó el debate, en esta última fecha, el retiro de las fuerzas de Israel detrás de la línea de demarcación de armisticio egipcio-israelí había concluido.

El 22 de febrero el Secretario General completó verbalmente su informe del 11 de dicho mes sobre el problema del retiro. Declaró que podía afirmar con confianza que Egipto deseaba que el traspaso de Gaza del control militar y civil de Israel — que, como había sido el caso, desde el principio sería realizado exclusivamente por la FENU — se hiciera en forma metódica y segura, como se había hecho en otros lugares. Reconociendo las actuales complejidades especiales de la zona de Gaza y la responsabilidad que tenían allí las Naciones Unidas por los refugiados árabes, y teniendo también en cuenta los objetivos y obligaciones del Acuerdo de Armisticio, Egipto estaba dispuesto a concertar arreglos especiales y útiles con las Naciones Unidas y con algunos de sus órganos auxiliares, como el Organismo de Obras Públicas y Socorro y la FENU. Las medidas para el uso de la FENU en esa región debían asegurar su despliegue en la línea de armisticio en la Faja de Gaza y la interposición efectiva de esa Fuerza entre las de Egipto y de Israel. Se utilizaría la asistencia de las Naciones Unidas para poner fin a todas las incursiones y ataques armados a través de la frontera, desde un lado o desde el otro. Además, con respecto al período de transición, podían hacerse otros arreglos con las Naciones Unidas que contribuyeran a proteger la vida y las propiedades en esa región por medio de protección policial eficaz y eficiente que garantizara una administración civil buena, que asegurara mayor asistencia al programa de refugiados de las Naciones Unidas y que protegiera y fomentara el desarrollo económico de sus habitantes y del territorio.

En un informe posterior de fecha 26 de febrero (A/3563), en el que se resumía otro intercambio de opiniones con el representante de Israel, se dijo que el Secretario General — en respuesta a una pregunta de si una administración *de facto* de las Naciones Unidas en Gaza, en la forma que antes se explica, excluía el retorno de Egipto a esa zona — había declarado que su intención había sido indicar arreglos prácticos, tomando en cuenta el control egipcio del territorio dispuesto en el Acuerdo. No había emitido ninguna opinión sobre la posible evolución *de facto*, que dependía de decisiones que debían adoptarse después de que Israel se retirara de la zona de Gaza, retiro que debía ser incondicional de conformidad con las decisiones de la Asamblea General.

El 22 de febrero el representante del Líbano presentó un proyecto de resolución auspiciado por Afganistán, Indonesia, Irak, Líbano, Pakistán y Sudán. En el proyecto se proponía que la Asamblea General: 1) condenara a Israel por no haber acatado las resoluciones 997 (ES-I), 998 (ES-I), 999 (ES-I) y 1002

(ES-I) adoptadas durante el primer período extraordinario de sesiones de emergencia, y las resoluciones 1120 (XI), 1123 (XI) y 1124 (XI) del undécimo período; 2) instara a todos los Estados a que negaran a Israel toda asistencia y toda: las facilidades de carácter militar, económico o financiero; 3) pidiera a todos los Estados que informaran al Secretario General sobre el cumplimiento, por parte de ellos, de la resolución; y 4) pidiera al Secretario General que presentara un nuevo informe sobre el cumplimiento de la resolución y de las resoluciones anteriores.

El representante del Líbano declaró que, aunque Israel sostenía que no se iba a retirar sin ciertas garantías de que no se volvería a la situación anterior al ataque — que según Israel era la causa directa de su invasión a Egipto —, el punto de vista árabe era que la situación había sido consecuencia del desacato de Israel a las decisiones de las Naciones Unidas. Refiriéndose a las actas del Consejo de Seguridad con respecto al Acuerdo de Armisticio, estableció un contraste entre las numerosas ocasiones en que el Consejo de Seguridad había condenado a Israel y el hecho de que Egipto ni en una sola ocasión había sido condenado por actos de ese tipo. Declaró que era absurdo que Israel acusara a Egipto de no observar una resolución particular del Consejo de Seguridad el 1º de septiembre de 1951 cuando Israel había violado persistentemente muchas resoluciones importantísimas del Consejo y de la Asamblea, inclusive aquellas a las que Israel debía su existencia.

Los Estados árabes no estaban dispuestos, continuó, a transigir en el principio del retiro inmediato e incondicional. Este debía preceder cualquier medida que adoptaran las Naciones Unidas para mejorar la situación. Si las Naciones Unidas no mantenían su posición contra la agresión confirmarían a Israel en la creencia de que sólo una política de fuerza era ventajosa y de que podía liquidar por la fuerza sus problemas con sus vecinos. En una situación así, cuando el imperio de la ley se había desplomado, un país que sintiera la necesidad de ayuda exterior, de tipo militar o económico, podría tratar de buscarla donde pudiera hallarla y provocar con ello un conflicto que podía extenderse más allá de una región determinada.

El representante del Canadá declaró que el problema se debía fundamentalmente al temor por parte de Israel de ser exterminado por vecinos incesantemente hostiles, y al temor por los Estados árabes de que el nuevo Estado creado en medio de ellos, con desplazamiento de la población árabe, cediera a ambiciones expansionistas. Esos temores de ambas partes habían impedido la moderación. En esas circunstancias, creía que el objetivo principal del retiro de las tropas de Israel debía asociarse a arreglos que redujeran a un mínimo la posibilidad de que el mismo problema volviera a surgir dentro de uno o dos años. El representante del Canadá hizo propuestas detalladas que comprendían los puntos siguientes: 1) un compromiso firme de Israel y Egipto de respeto escrupuloso del Acuerdo de Armisticio de 1949, inclusive de mantener a sus fuerzas armadas fuera de la zona desmilitarizada de El Auja; 2) despliegue de la FENU sobre la línea de demarcación del armisticio y transferencia a la FENU de los deberes que desempeñaba allí el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua; 3) afirmación por la Asamblea General de que no se entorpecería el paso inocente ni de que no se alegarían derechos de beligerancia en el estrecho de

Tirán, y despliegue de la FENU en la zona de Sharm el Sheik, una vez que Israel se hubiera retirado, para ayudar a mantener la tranquilidad; 4) despliegue de la FENU en la Faja de Gaza, al retirarse Israel, y compromiso por parte de las Naciones Unidas, de acuerdo con Egipto, de sustituir la administración civil israelí por una administración civil efectiva propia, sin que las fuerzas armadas egipcias regresaran allí.

Varios representantes apoyaron el proyecto de resolución de las seis Potencias y también se opusieron a las propuestas del Canadá, especialmente a la de transformar a la FENU en lo que podía equivaler a una fuerza de ocupación. La política de satisfacer las demandas de Israel era parte, alegaron, de una política de olvidar las cuestiones básicas del problema de Palestina que permanecían sin solución porque las demandas de las Naciones Unidas no habían sido cumplidas. El representante de Egipto declaró que el retiro de Israel no debía ser resultado de una componenda que ni Egipto ni las Naciones Unidas podían reconocer.

El 1º de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel anunció a la Asamblea que Israel estaba dispuesto a retirar sus tropas del golfo de Aqaba y del estrecho de Tirán confiando en que habría libertad permanente para el transporte marítimo internacional y de Israel. Recordando la declaración del representante de los Estados Unidos de mantener a la FENU allí hasta que estuvieran garantizadas las condiciones de paz, afirmó que en general se reconocía que entre las funciones de la FENU en el estrecho de Tirán estaba la de impedir actos de beligerancia. Preocupado ante el retiro posiblemente prematuro de la FENU de la zona, su Gobierno había tomado nota de las seguridades dadas en el informe del Secretario General del 26 de febrero de 1957 (A/3563) en el sentido de que cualquier propuesta sobre el retiro de la FENU sería estudiada en primer lugar por el Comité Consultivo, que representaba a la Asamblea en la ejecución de la resolución 997 (ES-I), del 2 de noviembre de 1956, y que la Asamblea tendría oportunidad de impedir cambios precipitados que aumentarían la posibilidad de actos beligerantes. Israel intentaba ejercer su pleno derecho de paso libre e inocente y estaba dispuesto a cooperar con otros países para garantizar el respeto universal de esos derechos. Había sabido con satisfacción que otras Potencias marítimas principales suscribían las opiniones expuestas por los Estados Unidos el 11 de febrero sobre la cuestión y tenían la intención similar de ejercer sus derechos de paso libre e inocente en el golfo y en el estrecho. Cualquier medida contra los buques de bandera israelí sería considerada por Israel como un ataque que le autorizaba a ejercer su derecho inherente de defensa propia en virtud del Artículo 51 de la Carta.

Israel, continuó el Ministro de Relaciones Exteriores, estaba retirando todas sus tropas de la Faja de Gaza suponiendo que se cumplirían las condiciones siguientes: 1) la FENU sería desplegada en Gaza y ésta asumiría exclusivamente el control civil y militar de manos de Israel; 2) la FENU cumpliría las funciones enumeradas en la declaración del Secretario General del 22 de febrero; y 3) la responsabilidad de las Naciones Unidas en la administración de Gaza se mantendría hasta que se llegara a una solución pacífica o a un acuerdo definitivo sobre el porvenir de la Faja de Gaza. Si se creaban allí condiciones que indicaran un retorno a las condiciones desfavorables que existían

previamente, Israel se reservaba la libertad de actuar para defender sus derechos.

El representante de los Estados Unidos declaró que el sentir de su Gobierno, que el Presidente Eisenhower había vuelto a exponer muy recientemente, el 20 de febrero, había sido en todo momento el buscar una solución basada en la justicia y que tuviera en cuenta los intereses legítimos de todas las partes interesadas. Su Gobierno interpretaba el anuncio de Israel en el sentido de que el retiro de las tropas en conformidad con la resolución 997 (ES-I) sería inmediato. No consideraba que las declaraciones que acompañaron al anuncio significaban que la retirada sería "condicional". Estas declaraciones constituían repeticiones de lo que ya había dicho la Asamblea o el Secretario General en sus informes, o esperanzas que no creía irrazonables si se tenían en cuenta las decisiones anteriores tomadas por la Asamblea. Después de citar enteramente la declaración del Secretario General del 22 de febrero, el representante de los Estados Unidos declaró que, con respecto a las medidas de las Naciones Unidas para la Faja de Gaza, su Gobierno opinaba que, desde un punto de vista jurídico, el porvenir de la Faja de Gaza debía ser fijado, como había dicho el Secretario General, teniendo en cuenta el Acuerdo de Armisticio. Su Gobierno esperaba que la medida sugerida por parte de las Naciones Unidas podría mantenerse hasta que se llegara a un acuerdo definitivo con respecto a la Faja de Gaza. Una vez que Israel hubiera completado su retiro, y en vista de las medidas tomadas por las Naciones Unidas para tratar la situación, ninguna de las partes firmantes del Acuerdo de Armisticio tenía motivo alguno para ejercer derechos de beligerancia.

El 4 de marzo, el Secretario General comunicó a la Asamblea que el Comandante de la FENU había llegado a un acuerdo con el Comandante en Jefe de Israel sobre los arreglos técnicos para el retiro de las tropas. Se habían dado instrucciones al General Burns de que conviniera lo necesario para el retiro completo e incondicional, con la toma de posesión, inicial y exclusiva, de la FENU.

El 8 de marzo, el Secretario General informó que Israel había cumplido plenamente con la resolución 1124 (XI) del 2 de febrero y declaró que el 7 de marzo la población de Gaza había sido notificada de que, con el consentimiento de Egipto, se estaba desplegando a la FENU en la zona para mantener la tranquilidad durante el retiro de Israel y después.

El Secretario General declaró que se dedicaría, en consulta con las partes interesadas, a aplicar las medidas a que se refiere la resolución 1125 (XI) sobre la acción que debía seguir al retiro. Observó que el párrafo 3 de esa resolución indicaba que la Asamblea deseaba que las "demás medidas" fueran decididas teniendo en cuenta estudios y consultas más amplios.

b) LA OPERACIÓN DE DESPEJO DEL CANAL DE SUEZ (NOVIEMBRE DE 1956-ABRIL DE 1957)

En cumplimiento de la resolución 997 (ES-I) del 2 de noviembre de 1956 en que la Asamblea General instaba a que "una vez que se haga efectiva la cesación del fuego se adopten medidas para reabrir el Canal de Suez", el Secretario General comenzó inmediatamente a explorar las posibilidades de contratar los servicios de empresas privadas para la operación de despejo. El 8 de noviembre el Secretario General

entró en contacto con algunas empresas holandesas y danesas, especializadas en ese género de trabajos, que le habían sido indicadas por los Gobiernos de los Países Bajos y de Dinamarca en respuesta a anteriores averiguaciones. Estas firmas, Smit y Svitzer, manifestaron estar dispuestas a prestar la colaboración requerida para la operación de despejo. Al mismo tiempo el Secretario General obtuvo los servicios del Teniente General Raymond A. Wheeler para que actuara como su representante especial en esos trabajos. El Sr. John J. McCloy aceptó asesorarlo en la solución de los problemas financieros que pudieran surgir con respecto a la operación.

El Secretario General propuso en su informe del 20 de noviembre (A/3376) que la Asamblea le autorizara a negociar acuerdos sobre las operaciones de despejo del Canal con empresas de países que hubieran permanecido al margen del conflicto; la forma del prorrateo de los gastos se resolvería cuando se hubieran calculado los costos aproximados. Aunque no se tenía la intención de comenzar los trabajos hasta que se hubieran retirado de Port Saïd y de la zona del Canal las fuerzas no egipcias, las negociaciones y el estudio previo, de acuerdo con Egipto, podían iniciarse sin demora.

El 24 de noviembre la Asamblea General aprobó por 65 votos contra ninguno y 9 abstenciones un proyecto de resolución, presentado por el Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, la India, Noruega y Yugoslavia, en el cual la Asamblea tomaba nota con satisfacción de los progresos realizados hasta entonces por el Secretario General en lo que respecta a las disposiciones para despejar el Canal de Suez y lo autorizaba a seguir tratando de encontrar medidas de orden práctico y negociando acuerdos de modo que la operación de despejo pudiera emprenderse pronto y eficazmente (resolución 1121 (XI)).

El día que la Asamblea General aprobó esa resolución, el Secretario General pidió a los dos contratistas mencionados que enviasen a la zona del Canal los buques y demás equipo apropiados para las faenas de rescate que habían sido asignados o prestados a tal efecto, y que activasen las negociaciones para complementar las embarcaciones que tenían disponibles con otras que contratarían con empresas especializadas pertenecientes a diversos países ajenos al conflicto. Por intermedio de los contratistas principales y con la intervención de la Sede de las Naciones Unidas y del General Wheeler, pronto se tuvo contratada una flota de rescate de 32 barcos procedentes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, los Países Bajos, Suecia y Yugoslavia. Mientras tanto el General Wheeler se trasladó a Egipto el 8 de diciembre acompañado de un grupo de expertos en la materia, una vez que los Gobiernos de Francia y el Reino Unido hubieron anunciado oficialmente, el 3 de diciembre, la intención de retirar sus fuerzas.

En respuesta a los ofrecimientos de ayuda técnica que los Gobiernos de Francia y el Reino Unido hicieron el 6 de noviembre (véase el apartado d) de la subsección 3 *supra*), el Secretario General había manifestado que estaba estudiando la posibilidad de que esa labor se llevara a efecto, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, por medio de agentes pertenecientes a países que no se hubieran visto envueltos en el conflicto. Algunos días después tanto Francia como el Reino Unido expresaron que apoyaban los esfuerzos del Se-

cretario General por organizar un equipo de técnicos encargados de despejar el Canal bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y señalaron varios actos de sabotaje de las autoridades egipcias para bloquear el Canal. El Reino Unido se manifestó dispuesto a facilitar para el trabajo de despejo cualquiera de los 36 barcos que tenía fletados e informó que ya se estaba trabajando en la bahía de Port Saïd. El 21 de noviembre el representante del Reino Unido declaró en la Asamblea que su Gobierno haría cuanto estuviera a su alcance para colaborar y estaba dispuesto a facilitar los medios de que disponía y a llevar a cabo los trabajos que la empresa requiriera. Manifestó que como ya había empezado el retiro de las tropas británicas, parecía razonable comenzar también la operación de limpieza del Canal.

Durante su visita a El Cairo a mediados de noviembre, el Secretario General había asegurado en principio al Gobierno de Egipto que las Naciones Unidas tratarían de proveer la ayuda que dicho Gobierno solicitaba para despejar de obstáculos el Canal, tarea que según ese Gobierno debía iniciarse inmediatamente después que las fuerzas no egipcias se hubiesen retirado de Port Saïd y de la zona del Canal.

Como lo expone el informe del Secretario General de 10 de enero (A/3492), a principios de diciembre se había estimado conveniente, para evitar demoras o gastos injustificados, que un número pequeño de buques ingleses y franceses para el despejo se incorporaran a la flota de las Naciones Unidas a fin de terminar determinadas tareas ya empezadas, como lo había pedido el General Wheeler, en la inteligencia de que cada uno de estos buques sería retirado a medida que terminase el trabajo que realizaba. Además, se había comunicado a los Gobiernos de Egipto, Francia y el Reino Unido que a fin de reforzar los medios de que disponían las Naciones Unidas para el despejo del Canal, quizá se necesitaran seis buques escogidos de la flota de despejo anglo-francesa, que serían utilizados al sur de El Cap, con tripulaciones no británicas de las Naciones Unidas.

Al retirarse las fuerzas anglo-francesas el 22 de diciembre, las Naciones Unidas se hicieron cargo de casi todos los buques de rescate anglo-franceses que estaban entonces en Port Saïd. En esa ocasión el General Wheeler propuso redistribuir los recursos disponibles utilizando buques de empresas privadas en el Canal, en lugar de los seis buques antes mencionados, en tanto que se reservaría a los buques anglo-franceses la labor que habían iniciado en la bahía de Port Saïd antes del retiro de las fuerzas, y que tenía por objeto rescatar cuanto antes determinados buques. El 27 de diciembre el General Wheeler anunció que el Gobierno egipcio había convenido en que la flota de salvamento de las Naciones Unidas empezara inmediatamente el despejo del Canal en su entrada meridional, en Suez. La operación empezó allí el 28 de diciembre, y en el extremo norte el 31 de diciembre de 1956.

Como se reseña en un anexo del informe, las operaciones se basaron en un plan de tres etapas, aprobado por las autoridades egipcias, con miras a lograr la reanudación del tránsito normal. Dicho plan comprendía el retiro de obstáculos del Canal y de sus puertos y caletas, el restablecimiento de los servicios de talleres, alumbrado y telecomunicaciones y la realización de trabajos esenciales de dragado. Además, de

los 32 barcos de la flota de salvamento de las Naciones Unidas había 11 embarcaciones anglo-francesas y cuatro buques de abastecimiento que fueron utilizados en la operación de despejo de Port Saïd y retirados en el mes de enero al terminar su trabajo.

En un segundo anexo figuraban cartas del 8 de enero de 1957, que se cambiaron entre el Secretario General y el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto y que, después de aprobadas por el Comité Consultivo, constituyeron el necesario acuerdo de cooperación en la labor de despejo. Conforme a sus términos, las Naciones Unidas prestarían asistencia al Gobierno de Egipto tomando a su cargo los trabajos, cuyos planes debían ser aprobados por dicho Gobierno. Quedaba confirmado que el Secretario General estaría en libertad de emplear el equipo disponible que considerase necesario para llevar a cabo las operaciones. Los trabajos se considerarían como una actividad de las Naciones Unidas y la propiedad y las personas ocupadas en la operación estarían al amparo de la Convención sobre Prerrogativas e Inmidades de las Naciones Unidas. El Gobierno de Egipto prestaría su plena cooperación y ayuda en la ejecución de las operaciones.

En lo tocante a financiamiento, el Secretario General informó que hasta tanto se hubiera presentado un cálculo completo del costo de los trabajos, se remitirían al Comité Consultivo las propuestas sobre la manera de sufragar ese costo. Mientras tanto, él se había puesto en contacto con todos los gobiernos de los Estados Miembros para sugerirles que, para poder llevar a cabo las operaciones sin interrupción, adelantasen, en forma de préstamo provisional, fondos para sufragar los gastos que se estaban efectuando, hasta una suma no menor de 10 millones de dólares. El Secretario General consideró que en enero se dispondría de fondos suficientes para financiar la etapa inicial de los trabajos de despejo del Canal realizados por las Naciones Unidas.

Esa tarea consistía en retirar, además del puente derrumbado de El Ferdan, otros 44 obstáculos. Siete de ellos habían sido removidos por la flota anglo-francesa antes de que las Naciones Unidas iniciaran la labor.

Entre el 27 de diciembre de 1956, fecha en que empezó el trabajo de despejo, y el 4 de marzo, se había limpiado todo el Canal al sur de Port Saïd, menos en lo que respecta a dos buques hundidos en la parte sur del Canal, el remolcador *Edgar Bonnet* y la fragata egipcia *Abukir*, en los que no se pudo empezar a trabajar por haber informado las autoridades egipcias que contenían explosivos y que ellas mismas se encargarían de sacarlos. El 12 y el 22 de marzo, respectivamente, se empezó a trabajar en estos dos buques. A mediados de abril, o sea seis semanas antes de la fecha primitivamente fijada, se había terminado de despejar el Canal, restablecido los sistemas de telecomunicaciones y de alumbrado y reparado los talleres más necesarios, y sólo faltaba recibir cierto equipo ya encargado. Por último, tres semanas más tarde fué retirada la flota utilizada en la operación.

El 12 de abril el Secretario General anunció que para pagar los gastos de despejo del Canal, se habían recibido préstamos, por un total de unos 11 millones de dólares, del Canadá, Suecia, Liberia, Ceilán, Australia, los Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania, Noruega, Dinamarca y los Países

Bajos, así como la promesa de una contribución de Italia que posteriormente se hizo efectiva. Se calculó que los anticipos bastaban para cubrir los gastos.

1) SUSPENSIÓN DEL DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN DEL ORIENTE MEDIO (8 DE MARZO DE 1957)

El 8 de marzo, al cerrarse el debate, la Asamblea General aprobó por 65 votos contra ninguno y 6 abstenciones un proyecto de resolución de siete Potencias por el cual decidió suspender temporalmente las sesiones de su undécimo período y autorizar al Presidente de la Asamblea General para que, en consulta con el Secretario General y con los Estados Miembros representados en la Mesa durante el mismo período de sesiones, convocara a la Asamblea General cuando se juzgara necesario para seguir examinando el tema que se estaba tratando o el relativo a la situación en Hungría (resolución 1119 (XI)).

m) HECHOS POSTERIORES

Después de su entrada en la Faja de Gaza en la noche del 6 al 7 de marzo de 1957, y en la zona de Sharm el Sheik el 8 de marzo, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, además de desplegarse a lo largo de la línea de demarcación, tomó a su cargo, a falta de toda autoridad civil, diversas funciones de seguridad, entre ellas el control de los almacenes y depósitos del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el ferrocarril y sus estaciones y los cruces de carretera, así como el mantenimiento del orden en los centros poblados. Al mismo tiempo se extendió a toda la población de la Faja la ayuda que proporciona el OOPSRPCO en materia de sanidad, socorro, bienestar social y educación. Con excepción de un incidente ocurrido el 10 de marzo, la población de Gaza acogió amistosamente a la FENU y no hubo gran dificultad en mantener el orden y la tranquilidad. No obstante, gran parte de los funcionarios y jefes locales de la administración civil dejaron de cooperar y fué evidente el deseo de que retornase la administración egipcia. Las circunstancias no permitieron reabrir los tribunales, las escuelas para no refugiados y las oficinas de correo de Gaza. Las tiendas empezaron a abrirse poco después de la entrada de la FENU. Se estaba recogiendo la cosecha cítrica y hubo que buscarle mercado rápidamente para que la economía de la Faja no sufriera un nuevo golpe. El 11 de marzo el Gobierno egipcio anunció el nombramiento de un Gobernador Administrativo de Gaza, quien llegó allí con un personal reducido y se hizo cargo de sus funciones el 14 de marzo. Las fuerzas militares egipcias no han vuelto a la Faja de Gaza. El traspaso a la Administración de Gaza de las funciones de mantenimiento del orden asumidas inicialmente por la Fuerza de Emergencia se llevó a cabo paulatinamente en un período de varias semanas. Desplegada a lo largo de la línea de demarcación, la FENU ha seguido cumpliendo su misión fundamental de mantener la tranquilidad, y aunque hubo incidentes ocasionales, algunos de ellos serios, la operación en conjunto se efectuó con éxito en el período a que se refiere este informe.

5. La cuestión del Canal de Suez (26 de abril-21 de mayo de 1957)

El Consejo de Seguridad había terminado su examen de la cuestión del Canal de Suez en octubre de 1956 al aprobar por unanimidad una resolución por

la que se acordó que cualquier arreglo de la cuestión de Suez debía satisfacer seis requisitos básicos (véase la sección 2 *supra*).

El 24 de abril de 1957 el representante de los Estados Unidos de América pidió que se reuniera el Consejo para reanudar el examen de la cuestión y tomar nota de la situación en lo relativo a la navegación a través del Canal.

En la misma fecha, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto anunció al Secretario General que el Canal de Suez estaba abierto nuevamente al tránsito normal y le transmitió una Declaración sobre el Canal de Suez y las disposiciones adoptadas para su funcionamiento a la luz de los principios que al respecto había expuesto el Gobierno egipcio en su memorándum del 18 de marzo. Expresábase que la Declaración era formulada en ejercicio de las funciones derivadas de la participación de Egipto en la Convención de Constantinopla de 1888, después de haberse tomado nota de la resolución del Consejo de Seguridad del 13 de octubre de 1956 y en armonía con las declaraciones de Egipto ante el Consejo acerca de dicha resolución.

El Gobierno de Egipto expresaba en su Declaración, entre otras cosas: 1) que estaba determinado a seguir respetando los términos y el espíritu de la Convención de Constantinopla de 1888, y 2) que confiaba en que los demás signatarios de la citada Convención y todas las demás partes interesadas se guiarían por el mismo propósito; 3) que estaba decidido a: i) mantener libre e ininterrumpida la navegación para todas las naciones, dentro de los límites de las disposiciones de la Convención; ii) limitar a un 1% cualquier aumento en la tarifa corriente de derechos de tránsito que pudiera hacerse dentro de 12 meses cualesquiera; toda desavenencia con respecto a un aumento que excediera de ese límite sería objeto de arbitraje con arreglo al punto 7) *infra*, y iii) mantener y mejorar el Canal conforme a los requisitos que exigen los progresos de la navegación moderna; 4) que la explotación y administración del Canal se harían por intermedio de la Administración del Canal de Suez establecida por Egipto el 26 de julio de 1956, y que se estimularía la cooperación entre esa Administración y los representantes de las empresas de navegación y de comercio con miras a aumentar la utilidad del Canal; 5) que se establecería el pago por adelantado de los derechos de tránsito a la Administración, la cual abonaría al Gobierno de Egipto como canon el 5% de todos los ingresos brutos, y el 25% de los mismos al Fondo de Capital y de Explotación del Canal de Suez para permitirle disponer de suficientes recursos para los gastos de explotación y desarrollo; 6) que se daría debida noticia de cualquier modificación que se introdujera en el código del Canal y que cualquier modificación impugnada por afectar a los compromisos de la Declaración sería sometida al procedimiento establecido en el punto 7) *infra*; 7) que las reclamaciones por causa de discriminación o violación del código del Canal serían sometidas a un tribunal arbitral integrado por una persona designada por la parte reclamante, otra designada por la Administración y una tercera elegida de común acuerdo por ambas partes o, en caso de desacuerdo, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia; las decisiones del tribunal arbitral se adoptarían por mayoría de sus miembros y serían obligatorias para las partes; 8) que se sometería a arbitraje, conforme a la práctica internacional estable-

cida, la cuestión de la indemnización y las reclamaciones con motivo de la nacionalización del Canal si no hubiese acuerdo entre las partes interesadas; 9) que las controversias o los desacuerdos que se suscitaran con respecto a la Convención de Constantinopla de 1888 o a la Declaración debían resolverse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y que serían sometidas a la Corte Internacional de Justicia las diferencias que surgieran entre las partes con respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención; el Gobierno de Egipto adoptaría las medidas necesarias para aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto de la Corte. El Gobierno de Egipto manifestaba que hacía esta declaración, que reafirmaba la Convención de 1888 y concordaba plenamente con ella, como expresión de su determinación de permitir que el Canal de Suez sea una vía marítima eficaz y adecuada. Agregaba que la declaración, con las obligaciones que contenía, constituía un instrumento internacional que sería depositado y registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas.

El Secretario General contestó el mismo día que la Declaración había sido inscrita en el registro en la inteligencia, por parte de él, de que el Gobierno de Egipto la consideraba un compromiso de carácter internacional al cual era aplicable lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta.

El Consejo debatió el tema en dos sesiones celebradas el 26 de abril con la participación del representante de Egipto. Reanudó el debate en otras dos sesiones realizadas el 20 y el 21 de marzo, por haberlo pedido el 16 de mayo el representante de Francia al transmitir un comunicado del Consejo de Ministros de Francia; en ese comunicado se deploraba la decisión de los usuarios del Canal de pagar directamente a Egipto los derechos de tránsito sin contar con un mínimo de garantías sobre la libertad de tránsito y la distribución equitativa del dinero que se cobrara, y se declaraba que el Gobierno francés no podía considerar aceptable que el problema del Canal se resolviera en contradicción con los seis requisitos establecidos en la resolución del Consejo de Seguridad de octubre de 1956.

Al cerrarse el debate, el representante de los Estados Unidos, hablando en su calidad de Presidente del Consejo, declaró que la mayoría del Consejo había demostrado comprender la responsabilidad que incumbía a las Naciones Unidas al aprobar, el 13 de octubre, los seis requisitos que debían satisfacerse en cualquier solución del problema del Canal de Suez. Aunque se habían expresado algunas opiniones en el sentido de que la Declaración de Egipto y el funcionamiento actual del Canal de Suez satisfacían de manera adecuada dichos requisitos, la mayoría consideraba que éstos no habían sido todavía cumplidos, que había cuestiones dudosas que requerían clarificación, y que Egipto aún no había fijado del todo su posición.

Se había observado que Egipto todavía no había depositado su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia conforme a la intención que había manifestado.

También se habían suscitado algunas cuestiones sobre la naturaleza de las obligaciones que Egipto reconocía conforme a la Declaración, la manera en que ellas eran expuestas y si Egipto consideraba que podía por sí solo modificarlas o considerarlas inexistentes.

A este respecto, la mayoría de los miembros dijeron que su aceptación de la Declaración de Egipto era provisional. Se había dicho que las Naciones Unidas debían seguir buscando la solución definitiva, sin dejar de aprovechar los arreglos provisionales en cuanto fuesen útiles y no perjudicasen los intereses de ninguna de las naciones afectadas por la situación.

Se habían expresado dudas con motivo de que la Declaración no previera la cooperación organizada de los usuarios, y se había señalado la necesidad de una clasificación sobre la participación de los usuarios que estaba implícita en varios párrafos, particularmente en los relativos al arbitraje y la fijación de los derechos de tránsito. También se habían planteado cuestiones sobre las indemnizaciones reclamadas con motivo de la nacionalización de la compañía del Canal de Suez y sobre el procedimiento para llegar a un acuerdo. Algunos miembros señalaron que las obligaciones que Egipto parecía haber contraído requerían otras iniciativas de parte del propio Egipto para su cumplimiento.

Subsistía la preocupación general respecto de que el Canal quedara apartado de la política de todas las naciones y esa preocupación se reflejó en todas las dudas expresadas en el Consejo acerca de si era adecuada la Declaración de Egipto.

Era de presumir que el Gobierno de Egipto quisiera considerar cuanto antes las medidas concretas que podría adoptar para disipar las dudas que se habían suscitado. El Presidente declaró que mientras tanto el Consejo mantendría su examen de la cuestión.

Después de la reunión del Consejo de Seguridad, el Secretario General continuó en contacto con el Gobierno de Egipto sobre diversos asuntos planteados en la misma.

6. Denuncia de Siria acerca de la violación por parte de Israel del Acuerdo de Armisticio General entre Israel y Siria: examen de la cuestión por el Consejo de Seguridad (mayo de 1957)

El 20 de abril de 1957, el Jefe Interino de Estado Mayor del Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina informó que a fines de marzo Siria había denunciado ante el Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio de Israel y Siria que en contravención con el artículo V del Acuerdo de Armisticio General, que estableció una zona desmilitarizada entre Siria e Israel, fuerzas militares de este último país habían estado construyendo fortificaciones militares y un puente de valor militar para Israel en la salida del lago Huleh en dicha zona. Siria pedía que la Comisión Mixta de Armisticio efectuara inmediatamente una investigación y que se realizaran las gestiones necesarias ante las autoridades de Israel.

El Jefe Interino de Estado Mayor no había podido hacer inmediatamente una investigación porque Israel no permitió que los observadores militares de las Naciones Unidas entraran en la zona desmilitarizada desde territorio sirio. Sin embargo, al 7 de abril, Israel había dejado de oponerse a que el Jefe Interino de Estado Mayor efectuase una inspección en el lugar del puente. El 7 de abril, verificó él que no había ninguna fortificación de tipo prohibido pero que se había señalado como minada una parte de los sectores occidentales

de acceso al puente; estaba adoptando medidas para que las minas fuesen retiradas. Declaró que si bien el puente podía ser utilizado para fines militares, su convicción era que se lo había construido en relación con los trabajos de rehabilitación de Huleh. Por consiguiente, no creía que hubiera razones para pedir su eliminación. El Jefe Interino de Estado Mayor sugirió también que en vista de las dificultades con que había tropezado la investigación, se debían reafirmar las facultades especiales del Presidente de la Comisión Mixta de Armisticio y de los observadores militares de las Naciones Unidas en la zona desmilitarizada.

En una carta de fecha 13 de mayo de 1957, el representante de Siria pidió que el Consejo de Seguridad se reuniera para considerar la cuestión. El Consejo trató el asunto en tres reuniones celebradas entre el 23 y el 28 de mayo de 1957.

El representante de Siria declaró, entre otras cosas, que se había construido un puente de valor militar para Israel en la zona desmilitarizada; ello constituía, por lo tanto, una violación del Acuerdo de Armisticio. La intención de Israel de no valerse de las ventajas militares del puente carecía de toda pertinencia en cuanto se trataba de determinar una violación del Acuerdo de Armisticio General. El representante de Siria instó al Consejo a censurar a Israel por violaciones del Acuerdo de Armisticio General y a ordenar la demolición del puente.

El representante de Israel sostuvo que el Acuerdo de Armisticio General contenía disposiciones expresas relativas a la normalización de la vida civil en la zona desmilitarizada. El puente de que se trataba había sido construido por Israel con el único objeto de que sirviera de vía de tránsito para el transporte de la maquinaria destinada a la remoción de tierra y dragado y necesaria para terminar el sistema de canales hasta el río Jordán. Con respecto a la libertad de acceso de los observadores militares de las Naciones Unidas, Israel no pondría obstáculos a sus movimientos dentro de la zona desmilitarizada cuando tales movimientos estuvieran requeridos por sus funciones oficiales. Sin embargo, no aceptaría que se hiciera en la zona desmilitarizada ninguna investigación basada en las denuncias de Siria.

Recapitulando el debate, y hablando en su calidad de Presidente, el representante de los Estados Unidos declaró que todos los miembros del Consejo concordaban en que debía respetarse la autoridad del Jefe de Estado Mayor de la Organización de Vigilancia de la Tregua en Palestina y en que las partes debían cooperar con él. Los miembros habían observado que en el caso actual se habían provocado demoras en su inspección del puente y el desempeño de sus tareas. La mayoría había señalado que el Jefe de Estado Mayor era la autoridad competente para asegurar el cumplimiento total de las disposiciones del artículo V del Acuerdo de Armisticio General y había apoyado sus decisiones a ese respecto. Se había tomado nota de otros problemas planteados en la zona desmilitarizada y se había sugerido que el Jefe Interino de Estado Mayor presentara un informe adicional. El Presidente también tomó nota de una declaración del Secretario General en el sentido de que, teniendo en cuenta el debate del Consejo sobre el caso actual, pediría al Jefe Interino de Estado Mayor que presentase ese informe en el plazo de un mes.

7. Actividades de la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina

El 4 de octubre de 1956, la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina presentó su 15º informe sobre la evolución de la situación, que abarca el período comprendido entre el 1º de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1956. La Comisión manifestó que había seguido dedicándose especialmente a ciertos problemas concretos en los que consideraba posible realizar progresos.

Sobre la cuestión de las cuentas de refugiados árabes bloqueadas en bancos de Israel, la Comisión informó que aproximadamente cuatro quintas partes de esos fondos habían sido liberados y que estaba considerablemente adelantada la transferencia de los valores guardados en depósito y en custodia en cajas de seguridad a los refugiados a quienes pertenecían.

En cuanto a la identificación de los bienes situados en Israel y pertenecientes a refugiados árabes, la Comisión calculaba que a mediados de 1957 dispondría de un detalle de las tierras que los refugiados poseen en Israel, y de una información procedente de fuentes oficiales que podría indicar su valor.

El Gobierno de Israel había declarado el 11 de marzo de 1956, en respuesta a una pregunta de la Comisión sobre el propósito declarado de Israel de ofrecer indemnizaciones por las tierras abandonadas por árabes en Israel, que el problema de las indemnizaciones no podía considerarse con prescindencia del contexto general de las relaciones entre árabes e israelíes.

En otra carta del 28 de septiembre de 1956, la Comisión había manifestado su decepción ante el hecho de que Israel hubiera abandonado al parecer la actitud que antes en general siempre había mantenido con respecto a las indemnizaciones, y pidió una respuesta a sus preguntas sobre la administración de las propiedades situadas en Israel y pertenecientes a refugiados árabes.

8. Socorro a los refugiados de Palestina

a) INFORMES DEL DIRECTOR Y DE LA COMISIÓN ASESORA DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO A LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE (NACIONES UNIDAS)

El Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) presentó a la Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, el séptimo informe anual sobre la labor del Organismo en el período comprendido entre el 1º de julio de 1955 y el 30 de junio de 1956, y un informe especial sobre las actividades desarrolladas por el Organismo del 1º de noviembre a mediados de diciembre de 1956 como consecuencia directa de la crisis del Cercano Oriente. Además, la Asamblea tuvo ante sí un informe especial de la Comisión Asesora del OOPSRPCO fechado el 21 de diciembre de 1956.

En el informe anual se señalaba que en la acción continua a largo plazo cuyo objeto es ayudar a los refugiados para que puedan atender a su propia subsistencia, el progreso había sido lento y fragmentario, pero se consignaba que la tarea del Organismo en materia de socorro se había cumplido todo lo satis-

factoriamente que cabía esperar dadas las condiciones locales y los recursos disponibles. La posibilidad de que el Organismo continuara desarrollando sus actividades en todas las esferas dependería de los fondos que se facilitaran, de la actitud y de la cooperación de los refugiados y los gobiernos de los países de asilo, y de las condiciones políticas que imperaran en la zona de esas actividades.

En el informe anual se exponían las siguientes conclusiones: 1) dada la naturaleza de las circunstancias, la labor del Organismo debía juzgarse a la luz de los antecedentes políticos de la cuestión de Palestina, con la cual el problema de los refugiados estaba inextricablemente vinculado. El permanente deseo de la gran masa de los refugiados de regresar a sus antiguos hogares tenía el apoyo de los gobiernos de los países árabes. Los refugiados seguían oponiéndose al desarrollo de proyectos de rehabilitación en gran escala, que ellos erróneamente vinculaban con un reasentamiento permanente y con una renuncia a sus esperanzas de repatriarse. Mientras tanto, se había progresado poco en este campo; 2) aparte de los acontecimientos que pudieran producirse en la situación política, habría necesidad de prestar socorros aun después que terminara el mandato del Organismo. Cuanto más se tardara en lograr una solución política, tanto más tiempo tendría que durar el socorro; 3) si la Asamblea deseara que el Organismo continué prestando sus servicios, debería revisar la amplitud y el alcance de éstos, teniendo en cuenta los obstáculos financieros y de funcionamiento con que tropezaba el Organismo, y decidir el conveniente alcance de las funciones del mismo a la vez que establecer claramente las normas a que se debiera ajustar su acción futura. Esas normas orientadoras debían comprender aspectos tales como las categorías de servicios de socorro que hubiera de suministrarse, la extensión del programa de educación, un posible programa de obras públicas y otros trabajos para la Faja de Gaza, la posible ampliación del mandato del Organismo a fin de permitirle fomentar el desarrollo económico general de los países de asilo en forma tal que beneficiara directamente a los refugiados, y la posible ampliación de los registros para incluir en ellos a los menesterosos no inscritos hasta entonces, que pedían un socorro que no se les había proporcionado por falta de recursos; 4) era importantísimo que la Asamblea proveyera en tiempo oportuno fondos suficientes para que el Organismo pudiera cumplir sus funciones en lo futuro y que los gobiernos de los países de asilo le prestaran su apoyo franco y pleno.

El Director reseñó en su informe especial la repercusión de las recientes luchas del Cercano Oriente sobre los refugiados y las medidas de emergencia adoptadas por el Organismo sobre todo en la Faja de Gaza, a consecuencia de las operaciones militares. Detalló los gastos extraordinarios efectuados hasta mediados de diciembre, que sumaron 465.000 dólares, e instó a los Miembros a hacer las contribuciones necesarias para que el Organismo no se viera obligado a reducir sus ya exiguos servicios en detrimento de los refugiados.

En su informe especial, la Comisión Asesora del OOPSRPCO hizo suyos los dos informes del Director. Señaló las dificultades que originaban los criterios fundamentalmente divergentes de los países contribuyentes y los países de asilo sobre las normas que había de aplicar el Organismo en cuestiones de socorro y acerca del problema de la rehabilitación de los refugiados. Mientras los países contribuyentes opinaban

que el socorro debía depender de la cuantía de las contribuciones que se hicieran, los gobiernos de los países de asilo creían que las Naciones Unidas tenían la obligación de fijar las normas del socorro y que los Estados Miembros debían costear los gastos que originaran. En cuanto a la rehabilitación, los gobiernos de los países contribuyentes consideraban necesario que los refugiados lograran cuanto antes la independencia económica mediante obras e inversiones en gran escala, en tanto que los países de asilo consideraban que esos proyectos implicaban el reasentamiento permanente de los refugiados en contravención de su derecho a ser repatriados. De ahí que la labor del Organismo en materia de rehabilitación hubiera debido limitarse a unos cuantos proyectos de menor importancia. Esa divergencia fundamental de criterio sólo podría ser resuelta por la Asamblea General mediante una nueva definición de las atribuciones del Organismo. En lo tocante a la situación financiera, las dificultades que originaban la insuficiencia de fondos, la falta de pago de ciertas contribuciones prometidas y la reciente situación de emergencia podían acarrear una grave disminución de los servicios que prestaba el Organismo si no se recibían inmediatamente nuevas contribuciones. El presupuesto de socorro de 43.400.000 dólares para el ejercicio económico comprendido entre el 1º de julio de 1956 y el 31 de diciembre de 1957 era insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados. El Organismo iniciaría el nuevo año con sólo 4.900.000 dólares, suma que apenas alcanzaba para atender los gastos de dos meses.

b) EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU UNDÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

La Comisión Política Especial examinó los informes en 13 sesiones, celebradas entre el 11 y el 23 de febrero de 1957.

El 22 de febrero, la Argentina, los Estados Unidos de América, Filipinas, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido presentaron un proyecto conjunto de resolución que fué objeto de dos revisiones el 23 de febrero. El texto final, copatrocinado por los mismos países con excepción de los Países Bajos, tendía a que la Asamblea General, entre otras cosas: 1) encargara al Organismo de que prosiguiera la ejecución de sus programas de socorro y rehabilitación de los refugiados, teniendo presente la limitación impuesta por la cuantía de las contribuciones correspondientes al ejercicio económico; 2) pidiera a los gobiernos de los países de asilo que cooperasen plenamente con el Organismo en el cumplimiento de sus funciones; 3) pidiera a los gobiernos de los países de la región que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 de la resolución 194 (III), proyectaran y ejecutaran, en cooperación con el Director del Organismo, programas que permitieran asegurar la subsistencia de un número apreciable de refugiados; 4) invitara al Organismo a proseguir sus consultas con la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina con miras a la mejor ejecución de las respectivas tareas y con especial referencia al párrafo 11 de la resolución 194 (III); 5) decidiera mantener el fondo de rehabilitación y autorizar al Director para que, a su discreción, de los fondos que hubiera disponibles, efectuara pagos a los diferentes gobiernos de los países de asilo con destino a proyectos de desarrollo de la economía en general, previo acuerdo con el gobierno de que se tratara en cada caso por el cual éste, dentro de un plazo determinado, asumiera la responsabilidad financiera de

prestar asistencia a un número convenido de refugiados que habría de guardar relación con el costo del proyecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 de la resolución 194 (III); 6) reiterara su llamamiento a las organizaciones privadas y a los gobiernos para que ayudaran a satisfacer la urgente necesidad de socorro de otras personas que lo reclamaban y a las cuales hacía referencia el párrafo 5 de la resolución 916 (X); 7) invitara al Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios a que tratase de obtener de los Estados Miembros de las Naciones Unidas la ayuda financiera necesaria; 8) instara a todos los gobiernos a que contribuyeran en la cantidad necesaria para llevar a cabo los programas de socorro y de rehabilitación del Organismo; 9) tomara nota con aprobación de las disposiciones adoptadas por el Organismo para continuar aplicando su programa para los refugiados en la Faja de Gaza; 10) expresara su agradecimiento al Director y a los funcionarios del Organismo por sus continuos y leales esfuerzos por cumplir su mandato, así como a los organismos especializados y a las muchas organizaciones privadas por la valiosa labor que incesantemente realizaban en favor de los refugiados.

El 11 de febrero, el Director del OOPSRPCO, al presentar su informe, reiteró su convicción de que a menos que los refugiados tuvieran realmente la elección que ofrece la resolución 194 (III) sobre repatriación o indemnización o que se llegara a alguna otra solución política del problema de Palestina, el Organismo no podría dar cumplimiento a la resolución de la Asamblea General que pide la reincorporación de los refugiados a la vida económica del Cercano Oriente, fuera por medio de su repatriación o de su reasentamiento.

En el curso del debate algunos representantes de países árabes manifestaron que el principal obstáculo para solucionar el problema de los refugiados era la negativa de Israel a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas sobre repatriación o indemnización. Era esencial que las Naciones Unidas se esforzaran por devolver a los refugiados el derecho de ser repatriados o indemnizados. Los representantes de los países árabes también opinaron que la idea de reasentar o rehabilitar a los refugiados, tal como lo sugería por ejemplo Israel, como única solución aceptable, estaba fuera de la realidad, pues no había disminuído el deseo de los refugiados de ser repatriados. Los proyectos de rehabilitación, aunque se llevaran a cabo, sólo comprenderían a una parte de ellos. Ningún Estado árabe podría cooperar en el reasentamiento ni en la rehabilitación de los refugiados mientras no se hubiera intentado un arreglo político. Agregaron que los gobiernos de los países de asilo habían cooperado con el Organismo, y prometieron seguir prestándole su apoyo en lo futuro.

El representante de Israel observó que la única solución práctica del problema de los refugiados era el reasentamiento y no la repatriación. Manteniendo viva la ilusión de los refugiados sobre la creación de una nueva Palestina árabe a expensas de Israel, se les había instigado a oponerse al reasentamiento. Sin embargo, ya se había progresado algo en algunos países árabes en cuanto a la reintegración de refugiados. Si bien el Gobierno de Israel no podía resolver el problema mediante la repatriación por razones vitales de seguridad y de carácter demográfico y social, mantenía su ofrecimiento de pagar indemnizaciones por los bienes árabes abandonados, pero ese ofrecimiento no podría

llevarse a la práctica mientras existiera el estado de guerra económica de los Estados árabes contra Israel.

Los patrocinadores del proyecto de resolución recordaron las dificultades con que se tropieza para solucionar el problema de los refugiados y declararon que éste sólo se podría resolver mediante una auténtica cooperación entre las partes. A la vez que era necesario que Israel hiciera el máximo esfuerzo en lo relativo a la repatriación, los Estados árabes debían cooperar con los refugiados para que se llevaran a cabo los proyectos de reintegración y desarrollo.

Al terminar el debate, el Director del Organismo hizo una declaración en la que analizó el proyecto de resolución y manifestó cómo interpretaba algunos puntos sobre los cuales había pedido orientación pero que no estaban previstos en la resolución concretamente.

El 23 de febrero la Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución, en votación nominal, por 66 votos contra ninguno y 1 abstención. El 28 de febrero la Asamblea General aprobó por 68 votos contra ninguno y 1 abstención el proyecto de resolución recomendado por la Comisión (resolución 1018 (XI).

c) ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO A LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCAÑO ORIENTE (NACIONES UNIDAS)

Labor

La tarea del Organismo se vió afectada, en el período de que se trata, por la intranquilidad política que imperó en general en el Cercano Oriente, por los sucesos que acompañaron a la ocupación de Gaza por Israel desde noviembre de 1956 a marzo de 1957, y por una extrema estrechez financiera.

El número de refugiados inscritos en el Organismo, que al 1º de mayo de 1956 era de 919.710, era el 1º de mayo de 1957 de 929.117. Durante el año que se considera no hubo ningún cambio de importancia con respecto a la exactitud de la inscripción en las listas del Organismo; las principales dificultades siguen siendo las de Jordania, donde el Gobierno no ha hallado la manera de poner en práctica los arreglos experimentales sobre los cuales se informó a la Asamblea General en su décimo período de sesiones y que tenían por objeto conceder a los refugiados que reunieran las condiciones para ser socorridos (sobre todo a los niños) las raciones retiradas a las personas a quienes no correspondía recibir socorro. Tampoco ha sido posible implantar en Siria el nuevo y más equitativo sistema puesto en práctica en el Líbano el año anterior para decidir cuándo un refugiado ya se mantiene por sí mismo.

No ha habido modificaciones cuantitativas ni cualitativas en las raciones básicas ni en la alimentación complementaria que se da a los refugiados. El número de éstos con derecho a recibir raciones secas básicas era de 846.637 (829.627 raciones completas y 17.010 medias raciones) al 1º de mayo de 1956; al 1º de mayo de 1957 la cifra se había reducido ligeramente a 845.352 (828.527 raciones completas y 16.825 medias raciones). El número mensual de mujeres embarazadas y madres lactantes que reciben una ración complementaria especial ha seguido siendo de unas 27.000; el promedio de las comidas calientes de mediodía que se sirven por prescripción médica ha aumentado de 43.000 a 43.600.

A pesar del desorden que siguió a la ocupación de la Faja de Gaza por Israel a principios de noviembre de 1956, la distribución regular de raciones por el Organismo sólo se retrasó cuatro días en ese mes, si bien el programa de alimentación complementaria quedó interrumpido durante más tiempo. Esto se logró pese a haberse suspendido las comunicaciones normales a través de Port Said y El-Arish, y haber quedado detenida en Port Said la provisión de alimentos de un mes aproximadamente para la Faja de Gaza. Se hallaron y adquirieron otras provisiones de emergencia y se aseguró su transporte hasta Haifa, único puerto que podía servir a la zona de Gaza en la situación reinante. A pesar de importantes dificultades, se logró suministrar las raciones y el combustible a los refugiados regularmente y sin interrupción.

El Organismo debió afrontar otra situación de emergencia en marzo, al retirarse de Gaza las fuerzas de Israel en momentos en que había depositadas en Haifa casi 12.000 toneladas de alimentos y otros suministros que estaban allí para ser transportados a Gaza. Por diversas razones resultó imposible utilizar el ferrocarril desde Haifa, y hubo que hacer arreglos especiales para enviar las mercaderías por mar a Gaza, Rafah y Port Said. Una vez más, mediante medidas de emergencia, estos víveres fueron transportados a tiempo, de manera que no se alteró el suministro normal de las raciones.

El número de refugiados alojados en los campamentos en todos los países era de 373.160 al 31 de marzo de 1957, en tanto que había sido de 363.000 un año antes. Durante el año terminado el 30 de junio de 1957, se concluyó la construcción de tres nuevos campamentos. Varios miles de tiendas de campaña y otras viviendas ya inútiles fueron reemplazadas por habitaciones de hormigón construidas en muchos casos por los propios refugiados con la ayuda pecuniaria del Organismo. Sin embargo, la falta de fondos ha impedido satisfacer todas las necesidades, sobre todo en lo tocante al alojamiento de las familias excesivamente numerosas.

Los servicios de sanidad del Organismo siguen siendo fundamentalmente los mismos. Los servicios médicos y hospitalarios de la Faja de Gaza se vieron muy recargados de trabajo por breve tiempo, cuando Israel empezó a ocupar esa zona, y ciertos servicios clínicos del Organismo estuvieron interrumpidos durante algunas semanas. En abril de 1957 se inauguró la nueva ala para refugiados enfermos agregada por el Organismo a un hospital para tuberculosos del Líbano.

Sigue cumpliéndose el programa para proveer a los niños de ropa que en su mayor parte es hecha por las madres utilizando tela suministrada por el Organismo; todos los niños y niñas menores de 15 años que están al cuidado del Organismo han recibido un equipo de vestido. Se siguen recibiendo de las organizaciones particulares de beneficencia donaciones de ropas usadas, que siempre son muy necesarias. El Organismo paga totalmente el gasto de flete.

La expansión del sistema escolar del Organismo es ahora más lenta, porque ya se ha absorbido la acumulación anterior de niños que no concurrían a la escuela y el número de los que ahora ingresan es normal. Durante el año lectivo 1956-1957 hubo aproximadamente 118.000 alumnos y 3.137 maestros en 370 escuelas del Organismo, y 53.800 alumnos en escuelas oficiales y privadas que también recibieron ayuda para

los refugiados. El alcance general del sistema sigue siendo el mismo. La ocupación israelí apenas se hizo sentir en las escuelas elementales del OOPSRPCO en la Faja de Gaza, si bien se cerraron las escuelas secundarias. También fueron clausurados durante la ocupación israelí los centros de formación agrícola y profesional de Gaza; el centro de formación agrícola no ha sido reabierto. La escasez de fondos obligó a clausurar al fin del año académico los centros de formación de maestros y maestras de Ramallah y Nablus, en Jordania. También por falta de dinero, el Organismo ha tenido que dejar en suspenso los planes, que ya estaban adelantados, de construcción de tres centros de formación profesional y dos centros de formación agrícola en Jordania y el Líbano. Ello es particularmente deplorable porque los egresados de los centros actuales de Jordania y Gaza no tienen ninguna dificultad para conseguir trabajo, y ya empezaban a presentarse en los centros, en procura de formación profesional y en número creciente, aspirantes poseedores de mejor base de preparación.

La penuria financiera también ha puesto fin al programa del Organismo relativo a los proyectos en pequeña escala de rehabilitación económica de los refugiados en Jordania, que habían empezado a atraer el apoyo de gran cantidad de refugiados. Del 1º de mayo de 1956 al 30 de mayo de 1957 se dieron subsidios por un total de 1.655.000 dólares a 4.205 beneficiarios para 574 empresas industriales, comerciales y agrícolas, así como para viviendas. Cuando se adoptó la decisión de no aceptar nuevas solicitudes, se las estaba recibiendo a razón de 500 por mes. No ha ocurrido ninguna novedad de importancia con respecto a las pequeñas colonias agrícolas del Organismo.

En el año que se examina, las oficinas de colocaciones del Organismo ampliaron sus contactos con los gobiernos y la industria privada en el Oriente Medio, y el número de los empleos llenados con refugiados aumentó perceptiblemente.

Finanzas y personal

Se ha caracterizado este período por el agotamiento casi total del fondo de operaciones del Organismo, cuya utilización permitía aprovisionarse con anticipación y aprovechar los precios bajos del mercado mundial. Con la desaparición de esa reserva, otra vez es imprescindible obtener contribuciones lo más pronto posible, y una parte considerable de ellas deberá ha-

cerse efectiva antes de que termine el período a que correspondan. Con la intención de así hacerlo posible, se decidió modificar el período del ejercicio económico del Organismo, que antes iba del 1º de julio al 30 de junio, y basarlo en el año civil. A ese efecto se decidió que el presupuesto que entrara en vigor después del 30 de junio de 1956 comprendiera un período de 18 meses, o sea del 1º de julio de 1956 al 31 de diciembre de 1957. A partir del 1º de enero de 1958, los presupuestos del Organismo volverán a abarcar períodos de 12 meses.

Sobre esta base, el presupuesto para la labor antes reseñada se fijó, con inclusión de los gastos administrativos y generales, en 43.400.000 dólares para servicios de socorro (alimentación, alojamiento, sanidad y bienestar social) y en 22.100.000 dólares para rehabilitación (educación, inclusive formación profesional, y los proyectos de autosostenimiento de los refugiados), para los 18 meses comprendidos entre el 1º de julio de 1956 y el 31 de diciembre de 1957. Esto equivale a unos 29 millones de dólares y 15 millones de dólares anuales para socorro y rehabilitación, respectivamente. Los gastos del período comprendido entre el 1º de julio de 1956 y el 30 de junio de 1957 importaron unos 25 millones de dólares y 8.500.000 dólares, respectivamente, para socorro y rehabilitación. Las diferencias entre las cantidades previstas en el presupuesto y los gastos efectivamente realizados se deben en gran parte a que todos los trabajos nuevos fueron aplazados (por ejemplo, se restringió rigurosamente la construcción de alojamientos y escuelas, no se dieron tiendas de campaña a los beduinos refugiados y no se mejoró la alimentación complementaria para los niños) y a que se detuvo la ejecución de ciertos programas (por ejemplo, el programa de subsidios individuales en Jordania, y la expansión de la formación profesional). No sufrieron ninguna reducción los servicios fundamentales que se prestan a los refugiados, conforme a lo dispuesto por la Asamblea General en el sentido de que en caso de escasez de recursos se asigne prioridad a la alimentación, los servicios de sanidad, el alojamiento y la provisión de ropas.

Al 31 de diciembre de 1956 el Organismo contaba con un personal de 10.128 empleados procedentes de la región, en su mayoría refugiados, y 155 funcionarios internacionales. De ellos, 3.135 eran maestros y 3.411 eran funcionarios de los servicios médicos y sanitarios.

Capítulo II

LA CUESTION DE HUNGRIA

A. LA SITUACION DE HUNGRIA

1. Examen de la cuestión en el Consejo de Seguridad (28 de octubre-4 de noviembre de 1956)

El 27 de octubre de 1956, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América pidieron que se reuniera el Consejo de Seguridad a fin de examinar un tema titulado "La situación en Hungría", en conformidad con el Artículo 34 de la Carta. Los tres países declararon que las fuerzas militares extranjeras que se hallaban en Hungría estaban reprimiendo violentamente los derechos del pueblo húngaro, garantizados por el Tratado de Paz del que eran parte Hungría y las Potencias Aliadas y Asociadas. Otras varias delegaciones expresaron que apoyaban la inclusión de este tema en el orden del día del Consejo.

El 28 de octubre, el representante de la República Popular Húngara protestó en contra de que el Consejo examinara la situación de Hungría. Manifestó que los acontecimientos del 24 de octubre de 1956 y ulteriores y las medidas adoptadas en el curso de esos acontecimientos eran exclusivamente de la jurisdicción interna de Hungría.

En una reunión del Consejo celebrada el 28 de octubre en cumplimiento de la petición antes mencionada, el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sostuvo que la discusión de este tema en el Consejo constituiría una flagrante intervención en los asuntos internos de Hungría y una infracción del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. El examen de este asunto por el Consejo alentaría la rebelión armada dirigida por un movimiento clandestino revolucionario en contra del legítimo Gobierno. Al adoptar medidas para poner fin a las actividades criminales de elementos contrarrevolucionarios, el Gobierno de Hungría había obrado enteramente de acuerdo con el artículo 4 del Tratado de Paz, que le obligaba a no permitir la existencia ni las actividades de organizaciones de tipo fascista. El Artículo 34 de la Carta, que se refería solamente a controversias o situaciones de carácter internacional, no era pertinente, y el Consejo no tenía competencia para examinar tales cuestiones.

El representante del Reino Unido negó categóricamente los motivos atribuidos a los tres Gobiernos por el representante de la URSS, y declaró que el hecho de que las tropas extranjeras estuvieran luchando en Hungría demostraba claramente que la cuestión era de incumbencia internacional.

El 28 de octubre, el Consejo decidió, por 9 votos contra 1 (URSS) y 1 abstención (Yugoeslavia), in-

cluir en su orden del día la cuestión titulada "La situación en Hungría"; el Consejo discutió este punto en cuatro sesiones que se celebraron entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 1956.

En la primera de ellas, el representante de Hungría fué invitado a la mesa del Consejo.

El representante de los Estados Unidos de América señaló que, al desear la independencia de los países satélites, los Estados Unidos no se proponían otra cosa más que dichos países tuvieran gobiernos libremente elegidos por ellos. Describió los acontecimientos de Hungría y dijo que, según la información recibida, los tanques soviéticos y la policía política de Hungría habían disparado contra ciudadanos húngaros. Añadió que en Hungría habían entrado refuerzos militares soviéticos y que había habido una gran batalla. Además de las manifestaciones realizadas en Budapest, se había pedido que se retiraran de Hungría las tropas soviéticas. El representante de los Estados Unidos instó al Consejo a que tomara una decisión para poner fin a la represión en Hungría. Los representantes del Reino Unido y de Francia, y otros miembros del Consejo, sostuvieron que había pruebas suficientes de que las tropas extranjeras habían intervenido en gran escala en Hungría con lo cual se había creado una situación de la que debía conocer el Consejo de Seguridad, en virtud del Artículo 34 de la Carta. Incluso si las tropas soviéticas estaban en Hungría en virtud de las disposiciones del Tratado de Varsovia, esas tropas, en virtud del artículo 8 de dicho Tratado, no podían ser utilizadas para mantener la ley y el orden. En una emisión de radio del 28 de octubre, el Sr. Imre Nagy, Presidente del Consejo de Ministros de Hungría y Ministro Interino de Relaciones Exteriores, había declarado que el reciente alzamiento en Hungría constituía un gran movimiento democrático nacional y también que su Gobierno estaba iniciando negociaciones sobre las relaciones entre Hungría y la URSS, inclusive la cuestión del retiro de las tropas soviéticas.

El representante de la URSS dijo que los acontecimientos de Hungría habían demostrado que con la ayuda de los Estados Unidos de América se había organizado un movimiento clandestino reaccionario en Hungría que había explotado las dificultades y las deficiencias de la labor del Estado y de los órganos del Partido en el país, a fin de engañar a algunos sectores de la población. Señaló que el Sr. Nagy había establecido una clara distinción entre el movimiento democrático y los elementos contrarrevolucionarios que se habían unido a aquél. La milicia popular y el ejército popular de Hungría habían tomado medidas para liquidar el movimiento contrarrevolucionario. En res-

puesta a un llamamiento del Gobierno de Hungría, las unidades militares soviéticas que estaban acantonadas en Hungría en virtud del Tratado de Varsovia habían ido a ayudar a las fuerzas húngaras y a los trabajadores húngaros. Se sabía perfectamente que en Hungría existían amplias libertades democráticas y que todas las declaraciones relativas a la supuesta violación de derechos se hacían para justificar la intervención de las Potencias occidentales en los asuntos internos de dicho país.

El 1º de noviembre, el Sr. Nagy informó al Secretario General que nuevas unidades soviéticas estaban entrando en Hungría. En su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, había expresado su más enérgica protesta al embajador soviético y había exigido el inmediato retiro de dichas fuerzas. Había comunicado a dicho embajador que el Gobierno de Hungría repudiaba desde aquel momento el Tratado de Varsovia y al mismo tiempo que declaraba, a partir del 1º de noviembre, la neutralidad de Hungría acudía a las Naciones Unidas y pedía la ayuda de las cuatro grandes Potencias para defender la neutralidad del país. Pidió al Secretario General que incluyera en el programa de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas la cuestión de la neutralidad de Hungría y la defensa de dicha neutralidad por las cuatro grandes Potencias.

El 2 de noviembre, varios miembros del Consejo condenaron el uso de la fuerza por la URSS en Hungría. La declaración del Gobierno de la URSS del 30 de octubre en el sentido de que había ordenado el retiro de sus unidades armadas de Budapest en cuanto el Gobierno de Hungría reconociera que era necesario, y que deseaba entrar en negociaciones con Hungría y otros Estados partes en el Tratado de Varsovia sobre la presencia de las tropas soviéticas en Hungría, estaba en contradicción con el telegrama enviado al Secretario General por el Gobierno de Hungría. No se podía hacer caso omiso de la súplica hecha en esa comunicación. Era obvio que había existido intervención extranjera en Hungría, y que continuaba en contra de los deseos de la población y del Gobierno. Por lo tanto, existió una evidente violación de la soberanía e independencia de Hungría. También se declaró que el periódico del Partido Comunista Húngaro había calificado de insulto al pueblo de Budapest la relación que el Gobierno de la URSS había dado de los acontecimientos ocurridos en esa ciudad.

El representante de la URSS dijo que el levantamiento contrarrevolucionario en contra del régimen popular de Hungría había sido sofocado por las autoridades húngaras. Citó la declaración de la URSS del 30 de octubre en el sentido de que el Gobierno de la URSS había dado instrucciones a su Mando militar de retirar las unidades militares soviéticas de Budapest tan pronto como el Gobierno de Hungría lo considerara necesario. En aquel momento, cuando la situación había empezado a mejorar, algunos elementos contrarrevolucionarios, con ayuda del extranjero, trataban a toda costa de perturbar el orden que se estaba restableciendo. Los rumores de que la URSS estaba trayendo fuerzas armadas adicionales al territorio de Hungría eran completamente infundados, lo mismo que la declaración del Sr. Nagy. Según el representante de la URSS, el debate de esta cuestión en el Consejo era una maniobra de las Potencias occidentales para distraer la atención pública de la agresión anglo-francesa en el Oriente Medio.

En una carta del 2 de noviembre distribuida entre los miembros del Consejo, el Sr. Nagy dió más detalles, basados principalmente en informes militares, relativos a la llegada de los refuerzos soviéticos y los movimientos de las fuerzas militares soviéticas en Hungría. A base de estos hechos, el Gobierno de Hungría había informado a la Embajada de la URSS y a todas las demás misiones diplomáticas en Budapest sobre las medidas dirigidas en contra de la República de Hungría. Al mismo tiempo, había presentado a la Embajada propuestas concretas relativas a las negociaciones para retirar las tropas soviéticas estacionadas en Hungría y para terminar el Tratado de Varsovia, y había propuesto que una comisión mixta preparara el retiro de las tropas soviéticas. El Sr. Nagy solicitó del Secretario General que pidiera a las grandes Potencias que reconocieran la neutralidad de Hungría y pidió al Consejo de Seguridad que diera instrucciones a los Gobiernos de la URSS y de Hungría para que entablaran inmediatamente dichas negociaciones.

El 3 de noviembre, los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución en virtud del cual, entre otras cosas, el Consejo: 1) invitaría a la URSS a desistir de toda intervención, sobre todo de intervención armada, en los asuntos internos de Hungría; 2) expresaría la esperanza de que la URSS retiraría sus fuerzas de Hungría sin demora; 3) afirmaría el derecho del pueblo húngaro a tener un gobierno que respondiera a sus aspiraciones nacionales y que se dedicara a preservar su independencia y su bienestar; 4) pediría al Secretario General que, en consulta con los directores de los organismos especializados competentes, investigara con toda urgencia las necesidades del pueblo húngaro en materia de alimentos, medicamentos y otros suministros similares, e informara al respecto al Consejo a la mayor brevedad; 5) instaría a todos los Estados Miembros e invitaría a las organizaciones nacionales e internacionales de carácter humanitario a que colaboraran proporcionando los suministros que pudiera necesitar el pueblo húngaro.

El representante de Hungría comunicó al Consejo que los jefes de los ejércitos soviético y húngaro se habían reunido y habían discutido las cuestiones técnicas que implicaba el retiro de las tropas soviéticas. Tenían que reunirse nuevamente aquella noche. Según la propuesta soviética, no pasarían la frontera nuevas tropas hasta que se lograra un acuerdo. El representante de la URSS confirmó que continuaban las negociaciones sobre la cuestión de las tropas soviéticas en Hungría.

El domingo 4 de noviembre de 1956 el Consejo fué convocado urgentemente para reunirse a las 3 de la madrugada a fin de considerar los comunicados sobre un nuevo y violento ataque realizado por las tropas soviéticas en Budapest y en otros lugares de Hungría. Varios representantes condenaron el ataque y señalaron que éste había sido iniciado en el preciso momento en que el representante de la URSS ante el Consejo había confirmado que se estaban celebrando negociaciones sobre el retiro de las tropas soviéticas de Hungría.

El representante de la URSS manifestó que su delegación no había recibido información oficial alguna sobre los nuevos acontecimientos comunicados y en esas circunstancias opinaba que el procedimiento más correcto sería aplazar el examen de la cuestión hasta que se dispusiera de información más fidedigna.

El Consejo estudió un proyecto de resolución de los Estados Unidos en el cual, entre otras cosas, se invitaba a la URSS a no introducir más fuerzas armadas en Hungría y a retirar sin demora todas sus fuerzas de ese país. Dicho proyecto obtuvo 9 votos a favor y 1 en contra (URSS), y no fué aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo¹.

El representante de los Estados Unidos de América presentó un proyecto de resolución que el Consejo aprobó por 10 votos contra 1, mediante el cual el Consejo decidió convocar un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, según lo dispuesto en la resolución 377 (V) titulada "Unión pro paz", para examinar la situación en Hungría.

El Secretario General manifestó que deseaba que se hiciera constar que la declaración que había hecho sobre los deberes del Secretario General en la reunión del Consejo celebrada el 31 de octubre de 1956, cuando se examinó la cuestión del Oriente Medio, se aplicaba también a la situación actual².

2. Examen de la cuestión en el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General (4-10 de noviembre de 1956)

a) INCLUSIÓN DEL TEMA EN EL PROGRAMA

Cuando se reunió el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia, el 4 de noviembre de 1956, para examinar el tema titulado "La situación en Hungría", el representante de la URSS se opuso a que dicho tema se incluyera en el programa ya que tal examen constituiría una violación flagrante del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno legítimo de la República Popular de Hungría había protestado, el 28 de octubre de 1956, contra el debate sobre esta cuestión en las Naciones Unidas. Los llamamientos del Sr. Nagy a las Naciones Unidas eran inconstitucionales y carecían de validez. El Gobierno de Nagy se había desmoronado en realidad, y se había constituido un Gobierno revolucionario de trabajadores y campesinos en el que figuraban algunos ministros del Gobierno de Nagy. Ese Gobierno, presidido por el Sr. Janos Kádár, había informado³ al Secretario General de que ningún llamamiento del Sr. Nagy tenía valor alguno y había reiterado las objeciones del Gobierno de Hungría contra la discusión de esa situación en las Naciones Unidas. La propuesta tendiente a incluir en el programa dicha cuestión había sido dictada por el deseo de agravar la situación y ayudar a los elementos fascistas, que se habían alzado contra el pueblo húngaro y contra su Gobierno legítimo.

En apoyo de la inclusión de dicho tema se declaró que el empleo de fuerzas extranjeras para reprimir los derechos establecidos por el Tratado de Paz con Hungría (10 de febrero de 1947) constituía una violación que preocupaba a las demás naciones partes en dicho Tratado. Los recientes acontecimientos de Hungría habían demostrado claramente que se había violado el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta al em-

plear tanto la amenaza como la fuerza contra la independencia política de Hungría.

El 4 de noviembre la Asamblea decidió, por 53 votos contra 8 y 7 abstenciones, incluir el tema en su programa.

b) APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 1004 (ES-II) DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución, en el cual, después de modificaciones introducidas durante el debate, se disponía, entre otras cosas, que la Asamblea: 1) recordando que el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Hungría había quedado garantizado en el Tratado de Paz, 2) condenando el empleo de fuerzas militares soviéticas para reprimir los esfuerzos del pueblo húngaro encaminados a reafirmar sus derechos, 3) tomando nota de la declaración del Gobierno de la URSS, hecha el 30 de octubre de 1956, de su política de no intervención; 4) tomando nota del requerimiento hecho el 1º de noviembre de 1956 por el Gobierno de Hungría para que el Gobierno de la URSS retirara inmediatamente sus fuerzas, 5) tomando nota asimismo de la comunicación del Gobierno de Hungría del 2 de noviembre de 1956 en la que se pide al Consejo de Seguridad que recomiende a los Gobiernos de la URSS y de Hungría que inicien inmediatamente negociaciones sobre el retiro de las fuerzas soviéticas, 6) advirtiendo que la intervención soviética en Hungría ha ocasionado graves pérdidas de vidas y una gran efusión de sangre del pueblo húngaro, y 7) tomando nota del llamamiento formulado por la radio el 4 de noviembre de 1956 por el Primer Ministro Imre Nagy: 8) instaría al Gobierno de la URSS a que desistiera inmediatamente de todo ataque armado contra el pueblo de Hungría, y de toda forma de intervención; 9) instaría a la URSS a que pusiera término al envío de fuerzas armadas adicionales a Hungría, y a que retirara sin dilación todas sus fuerzas del territorio húngaro; 10) afirmaría el derecho del pueblo húngaro a un gobierno que respondiera a sus aspiraciones nacionales; 11) pediría al Secretario General que investigara la situación causada por la intervención extranjera en Hungría, que observara directamente, por conducto de representantes nombrados por él, e informara al respecto a la Asamblea lo antes posible, y que sugiriera a la mayor brevedad métodos para poner término a la situación existente en Hungría de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; 12) pediría al Gobierno de Hungría y al Gobierno de la URSS que permitieran que observadores designados por el Secretario General entraran al territorio de Hungría, transitaran libremente por él y comunicaran sus conclusiones al Secretario General; 13) pediría a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que cooperaran con el Secretario General y sus representantes en el cumplimiento de sus funciones; 14) pediría al Secretario General que, en consulta con los directores de los organismos especializados competentes, investigara con toda urgencia cuáles eran las necesidades del pueblo húngaro en materia de alimentos, medicamentos y otros suministros similares, y que informara al respecto a la Asamblea General a la mayor brevedad; 15) instaría a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas e invitaría a las organizaciones nacionales e internacionales de carácter humanitario a que colaboraran proporcio-

¹ En la reunión siguiente el representante de Yugoslavia pidió que se hiciera constar que su delegación se había abstenido durante la votación.

² Véase capítulo Ia).

³ Esta comunicación, fechada el 4 de noviembre, fué distribuida el 7 de noviembre.

nando los suministros que pudiera necesitar el pueblo húngaro.

Este proyecto de resolución fué aprobado el 4 de noviembre mediante votación nominal de 50 contra 8⁴ y 15 abstenciones⁵ (resolución 1004 (ES-II)).

c) APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 1005 (ES-II), 1006 (ES-II) Y 1007 (ES-II) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 1956

El 7 de noviembre, el Secretario General comunicó a la Asamblea General que la resolución del 4 de noviembre había sido oficialmente señalada a la atención de los dos Gobiernos más directamente interesados y que en breve estaría en condiciones de informar sobre otras medidas que se adoptarían para dar cumplimiento a la resolución. Entre tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estaba haciendo lo necesario, en colaboración con otras instituciones de servicio social, para hacer frente a las necesidades de víveres, medicamentos y suministros similares.

El 8 de noviembre, el representante de Hungría reiteró la declaración formulada por el Gobierno de Hungría el 28 de octubre en el sentido de que los acontecimientos de Hungría y las medidas adoptadas en relación con ellos eran de la exclusiva jurisdicción de la República Popular de Hungría. El nuevo Gobierno de Hungría había declarado inválidos los llamamientos enviados por el Sr. Nagy y, por lo tanto, no podían considerarse como oficiales.

Varios representantes pusieron en duda que el representante de Hungría representara al pueblo o al Gobierno legítimo de ese país, y declararon que el Gobierno de Kádár había sido impuesto por la fuerza⁶. Italia presentó un proyecto de resolución, cuyos coautores fueron Cuba, Irlanda, Pakistán y Perú, que disponía, entre otras cosas, que la Asamblea General, tomando nota de que las fuerzas soviéticas continuaban su violenta represión contra los esfuerzos del pueblo húngaro por alcanzar su libertad e independencia: 1) instaría de nuevo al Gobierno de la URSS a retirar sus fuerzas de Hungría sin más dilación; 2) consideraría que debían celebrarse elecciones libres en Hungría bajo los auspicios de las Naciones Unidas; 3) reafirmaría su petición al Secretario General de que continuara investigando la situación creada por la intervención extranjera en Hungría; y 4) pediría al Secretario General que informara sobre el cumplimiento de dicha resolución.

En la misma reunión, el Secretario General señaló a la atención un *aide-mémoire* que había enviado aquel mismo día al Gobierno de Hungría, en el que figuraban los puntos principales de su plan para aplicar la resolución 1004 (ES-II). Había preguntado al Gobierno de Hungría si estaba dispuesto a permitir que los observadores designados por él entraran al territorio

de Hungría lo antes posible. Tenía el propósito de proceder a la selección de observadores, en el supuesto de que el Gobierno de Hungría atendiera la petición de la Asamblea General. La Asamblea había pedido también al Secretario General que investigara la situación creada por la intervención extranjera en Hungría. El Secretario General había tomado disposiciones para que se efectuara esa investigación a base del material informativo disponible y confirmado. Por último, la Asamblea había pedido al Secretario General que sugiriera a la mayor brevedad métodos para poner término a la intervención extranjera de conformidad con los principios de la Carta. La Secretaría estaba estudiando activamente esta cuestión. Era evidente que no era posible llegar a un resultado definitivo antes de que se concluyera la investigación a que acaba de hacerse referencia, y sin la cooperación del Gobierno de Hungría en el sentido que había señalado.

El 9 de noviembre, los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución relativo a los aspectos humanitarios de la cuestión y a la asistencia a los refugiados procedentes de Hungría. En virtud de la primera parte de esa resolución, la Asamblea General, considerando que las autoridades militares de la URSS estaban poniendo obstáculos al transporte y a la distribución de víveres y suministros médicos que necesitaba urgentemente la población civil de Hungría: 1) instaría a la URSS a que cesara inmediatamente los actos contra la población húngara que constituían una violación de las normas y principios aceptados de justicia, moralidad y derecho internacional; 2) instaría a las autoridades húngaras a que facilitarían, y a la URSS a que no dificultara, la recepción y distribución al pueblo húngaro de víveres y suministros médicos; y 3) encarecería a la URSS y a las autoridades húngaras a que cooperaran plenamente con el Secretario General, y con sus representantes debidamente nombrados, en el cumplimiento de las tareas de socorro. La segunda parte del proyecto de resolución disponía que la Asamblea General, considerando que, como consecuencia de la acción rigurosa y represiva de las fuerzas armadas soviéticas, un número cada vez mayor de refugiados se veía obligado a salir de Hungría y a buscar asilo en países vecinos: 1) pediría al Secretario General que encargara al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que celebrara consultas con los otros organismos internacionales apropiados y con los gobiernos interesados a fin de adoptar disposiciones rápidas y eficaces para prestar asistencia urgente a los refugiados procedentes de Hungría; y 2) encarecería a los Estados Miembros a que hicieran contribuciones especiales para este fin.

En la reunión siguiente, que se celebró ese mismo día, Austria presentó un proyecto de resolución, que fué modificado antes de la votación, en virtud del cual la Asamblea General, entre otras cosas: 1) resolvería emprender un vasto programa de ayuda inmediata a los territorios afectados; y 2) instaría a todos los Estados Miembros a participar en la mayor medida posible en ese programa de socorro y también a prestar toda su ayuda al Secretario General en el cumplimiento de la resolución.

Ese mismo día, Ceilán e Indonesia presentaron enmiendas al proyecto de resolución de los Estados Unidos tendientes, entre otras cosas, a: 1) suprimir, en la sección I, la referencia que figuraba en el preámbulo a la intervención de las autoridades militares de la URSS; 2) suprimir el párrafo 1 de la parte dispo-

⁴ Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

⁵ Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Finlandia, India, Indonesia, Irak, Jordania, Libia, Nepal, Siria, Yemen, Yugoslavia.

⁶ La cuestión fué planteada en la Comisión de Verificación de Poderes, la cual informó el 8 de noviembre que había decidido recomendar que la Asamblea no tomara decisión alguna sobre dicha cuestión en espera de una aclaración ulterior. El 9 de noviembre, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión por 68 votos contra ninguno y 1 abstención.

sitiva; 3) suprimir en el párrafo 2 la referencia a la intervención de la URSS; y 4) suprimir en el párrafo 3 la referencia a la URSS. El preámbulo de la segunda parte del proyecto de resolución quedaría modificado así: "Considerando que un gran número de refugiados están abandonando Hungría."

Los representantes que hablaron en apoyo del proyecto de resolución presentado por Cuba, Irlanda, Italia, Pakistán y Perú señalaron que el llamado "Gobierno Revolucionario de Trabajadores y Campesinos" era un organismo soviético impuesto a Hungría por los soldados soviéticos, que estaban matando a los obreros y a los campesinos. Hungría debía ser liberada de las tropas extranjeras y su pueblo debía tener derecho a elegir su propio Gobierno mediante elecciones libres.

Varios representantes que se opusieron a esa propuesta, entre ellos Hungría y la URSS, declararon que ésta constituía un nuevo intento de falsear los hechos relativos a los acontecimientos de Hungría para justificar una intervención ulterior en los asuntos internos de ese país con objeto de perturbar el progreso y la consolidación de la evolución pacífica.

También se señaló que la Asamblea no podía, en ninguna circunstancia, tanto si consideraba la acción que se discutía justa como injusta, hacer caso omiso de los derechos soberanos de los Estados Miembros. El derecho del pueblo húngaro a elegir la forma de gobierno que deseaba era inherente a su soberanía y a su calidad de Miembro de las Naciones Unidas. La Asamblea no podía tratar este problema de la misma manera que en el caso de un país colonial, donde el pueblo no tenía representación.

Varios representantes indicaron que se abstendrían en la votación sobre el proyecto de resolución de las cinco Potencias y expresaron la opinión de que no serviría para ningún fin práctico, puesto que la mera aprobación de una resolución en la que se pedían elecciones libres no motivaría esas elecciones. La propuesta era además prematura, puesto que sólo después de haber terminado la tarea que se le había encargado al Secretario General la Asamblea podría comenzar la parte práctica de lo que debía hacer.

La mayoría de los oradores que apoyaron el proyecto de resolución de los Estados Unidos se opusieron a las enmiendas a dicho proyecto propuesto por Ceilán, India e Indonesia. Aparte de que las disposiciones pertinentes del proyecto de resolución constituían una descripción precisa de lo que estaba ocurriendo, la Asamblea General no debía menospreciar la influencia que tendría en la opinión pública la decisión de omitirlas. Los oradores que apoyaron las enmiendas insistieron en que una resolución sobre cuestiones humanitarias no podía contener elementos de carácter político y debía limitarse a las necesidades de la labor prevista.

El 9 de noviembre, la resolución de las cinco Potencias quedó aprobada, en su totalidad, mediante una votación nominal de 48 votos contra 11 y 16 abstenciones (resolución 1005 (ES-II)). Las enmiendas de las tres Potencias al proyecto de resolución de los Estados Unidos fueron rechazadas en votación nominal por 45 votos contra 18 y 12 abstenciones. El proyecto de resolución de los Estados Unidos fué aprobado, en votación nominal, por 53 votos contra 9 y 13 abstenciones (resolución 1006 (ES-II)). A continuación fué aprobado el proyecto de resolución de Austria, en vo-

tación nominal, por 67 votos contra ninguno y 8 abstenciones (resolución 1007 (ES-II)).

d) APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1008 (ES-II) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1956

El 10 de noviembre, la Asamblea General consideró un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos en virtud del cual decidió incluir en el programa provisional de su undécimo período ordinario de sesiones (que debía inaugurarse el 12 de noviembre), como asunto de prioridad, la cuestión que figuraba en el programa de su segundo período extraordinario de sesiones de emergencia. El proyecto de resolución fué aprobado por 53 votos contra 9 y 8 abstenciones (resolución 1008 (ES-II)).

3. Examen de la cuestión por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones

a) MEDIDAS TOMADAS POR EL SECRETARIO GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE EMERGENCIA

En un *aide-mémoire* enviado al Gobierno de Hungría el 10 de noviembre de 1956, el Secretario General señaló con decepción que hasta ese momento no había recibido ninguna respuesta a su *aide-mémoire* del 8 de noviembre (véase el punto b) de la sección 2), a pesar de que la situación era verdaderamente apremiante, y reiteró su solicitud de que se le contestase sin demora. El Secretario General declaró que en caso de que esa contestación se hubiese demorado debido a la necesidad de estudiar la forma en que habían de realizar su visita los observadores, estaba dispuesto a hacer en seguida las gestiones necesarias para discutir ese particular. El mismo día el Secretario General dirigió una copia del *aide-mémoire* al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pidiéndole que apoyase la petición dirigida por él al Gobierno de Hungría para que permitiera a los observadores designados entrar en territorio húngaro, transitar libremente por él y comunicarle las indagaciones que realizasen.

En una nota verbal dirigida por el Secretario General al Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría el mismo 10 de noviembre, el Secretario General solicitó que se le enviase información sobre las necesidades del pueblo de Hungría en materia de suministros médicos, alimentos y ropas. Manifestó que al recibir esos datos quería discutir con el Gobierno de Hungría los medios más adecuados para proporcionar la asistencia requerida.

El 12 de noviembre, el Secretario General anunció que había continuado la discusión relativa a la composición de los grupos de investigación y de observación directa de la situación en Hungría, de conformidad con la resolución 1004 (ES-II). Hasta esa fecha, el Dr. Alberto Lleras (Colombia) y el Magistrado Oscar Gundersen (Noruega) habían aceptado participar en ese trabajo.

El mismo 12 de noviembre, el Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Hungría comunicó al Secretario General una declaración del Gobierno Revolucionario de Trabajadores y Campesinos de la República Popular Húngara, en la cual se decía que en las últimas semanas habían tenido lugar manifestaciones en

masa cuyas demandas democráticas y patrióticas había hecho suyas el Gobierno Revolucionario. Sin embargo, elementos fascistas organizados y delincuentes comunes habían tomado gradualmente la dirección del movimiento y secuestrado y asesinado a centenares de personas de sentir progresista, así como a sus parientes. Ante la grave situación planteada, el Gobierno Revolucionario sólo podía restablecer la ley y el orden público pidiendo ayuda a las tropas soviéticas. Una vez que se hubiera restablecido totalmente el orden, el Gobierno húngaro iniciaría inmediatamente negociaciones con el Gobierno de la Unión Soviética para que dichas tropas se retirasen de Hungría. En vista de lo antedicho, el Gobierno de Hungría declaraba con toda firmeza que el arreglo de la situación planteada en Hungría era exclusivamente de la competencia jurídica interna del Estado húngaro. Cualquier resolución de la Asamblea General relacionada con la situación política interna de Hungría sería contraria a lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. El Gobierno húngaro y el Gobierno soviético eran los únicos competentes para entablar negociaciones sobre el retiro de las tropas soviéticas del territorio de Hungría. El Gobierno de Hungría creía que no se justificaba el envío de representantes designados por el Secretario General. La celebración de elecciones en Hungría era un asunto de la competencia exclusiva de las autoridades húngaras. En relación con los refugiados, el Gobierno de Hungría declaraba que haría lo posible para que los ciudadanos húngaros que habían huido al extranjero como consecuencia de las batallas regresasen libremente y sin peligro. El Gobierno de Hungría aceptaba sinceramente agradecido las humanitarias resoluciones de la Asamblea General para ayudar al pueblo húngaro, y facilitaría la recepción y distribución de los alimentos y medicamentos enviados al pueblo húngaro. El Gobierno colaboraba en esos momentos con los representantes del Comité de la Cruz Roja Internacional. Las tropas soviéticas que se encontraban en Hungría no ponían obstáculos de ningún tipo a estos trabajos de socorro.

El 13 de noviembre el Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Hungría dió detalles acerca de las necesidades de socorro más urgentes y manifestó que su Gobierno estaba dispuesto a entablar conversaciones sobre la forma más conveniente de proporcionar la asistencia requerida así como la manera en que los representantes designados por el Secretario General podrían participar en la organización de esta asistencia sobre el terreno.

En una respuesta del 13 de noviembre, el Secretario General tomó nota con satisfacción de la buena voluntad del Gobierno húngaro de colaborar en la forma más plena con los organismos de las Naciones Unidas en la prosecución de los fines humanitarios perseguidos por las resoluciones de la Asamblea General. Tomó igualmente nota de las opiniones expresadas por ese Gobierno en relación con la resolución 1004 (ES-II). Añadió que al ejecutar la decisión de la Asamblea General, no le correspondía discutir dicha decisión. El Secretario General invitó al Gobierno de Hungría a que considerase de nuevo su opinión de que no se justificaba el envío de representantes designados por el Secretario General, teniendo en cuenta los puntos de vista contrarios tan ampliamente expresados por los gobiernos de los Estados Miembros en la Asamblea General y que se habían reflejado en la votación sobre la resolución, y le instó a que, en su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas, colaborase con la

gran mayoría en aclarar una situación que tanto preocupaba a la Asamblea General.

En una nota verbal del 13 de noviembre, la Delegación Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante las Naciones Unidas informó al Secretario General que el Gobierno soviético mantenía la posición expuesta en la Asamblea General y que en lo relativo a la cuestión concreta del envío de observadores de las Naciones Unidas a Hungría, consideraba que se trataba de un asunto que era exclusivamente de la jurisdicción del Gobierno de la República Popular Húngara.

Asimismo el 13 de noviembre, en una conversación celebrada con el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, el Secretario General ofreció ir personalmente a Budapest cuando realizara su próximo viaje a Egipto, con objeto de concertar la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas al pueblo húngaro, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General.

El 15 de noviembre, el Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Hungría informó al Secretario General que los representantes del Gobierno de la República Popular Húngara tendrían mucho gusto en reunirse con él en Roma a fin de negociar sobre la ayuda ofrecida por las Naciones Unidas, así como para cambiar ideas sobre la posición adoptada por el Gobierno húngaro con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas. El 16 de noviembre, el Secretario General recordó que había hecho verbalmente el ofrecimiento de trasladarse a Budapest para discutir el plan que había de servir de base a las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en Hungría, por considerar útil establecer relaciones personales más amplias con aquellos de los gobernantes húngaros más directamente interesados en este asunto. En estas condiciones, se proponía tratar los asuntos mencionados en su último mensaje con el Ministro de Relaciones Exteriores a la mayor brevedad posible.

El 16 de noviembre el Secretario General informó a la Asamblea General que había constituido, con el propósito de investigar la situación creada por la intervención extranjera en Hungría, un grupo integrado por el Magistrado Oscar Gundersen (Noruega), el Sr. Arthur Lall (India) y el Sr. Alberto Lleras (Colombia).

b) APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 1127 (XI), 1128 (XI) Y 1129 (XI) ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1956

El 13 de noviembre la Asamblea General decidió en votación nominal, por 62 votos contra 9 y 8 abstenciones, incluir el tema "Cuestión examinada por la Asamblea General en su segundo período extraordinario de sesiones de emergencia desde el 4 hasta el 10 de noviembre de 1956" en el programa de su undécimo período de sesiones.

La Asamblea reanudó el debate de la cuestión el 19 de noviembre, cuando consideró un proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba, en el cual, entre otras cosas, la Asamblea: 1) consideraba que la información recibida hacía aún más urgente la necesidad de dar inmediato cumplimiento a las resoluciones que pedían el inmediato retiro de las fuerzas soviéticas de Hungría y el envío, por el Secretario General, de observadores a Hungría; 2) instaba al Gobierno de la URSS y a las autoridades húngaras a

que adoptasen inmediatamente las medidas necesarias para que cesase la deportación de ciudadanos húngaros y fuesen devueltos en seguida a sus hogares aquellos que hubieran sido llevados por la fuerza fuera del territorio de Hungría; y 3) pedía al Secretario General que mantuviese a la Asamblea informada respecto del cumplimiento de esa y de las otras resoluciones anteriores.

En la misma fecha, la Misión Permanente de Hungría ante las Naciones Unidas solicitó que se hiciese distribuir el texto de un comunicado emitido por el Gobierno de Hungría el 18 de noviembre, en el cual declaraba que ninguna de las personas detenidas había sido deportada del territorio de Hungría.

La Asamblea General continuó el debate del asunto en el curso de seis sesiones celebradas entre el 19 y el 21 de noviembre. Durante estas sesiones, se presentaron las siguientes propuestas:

Un proyecto de resolución de Ceilán, India e Indonesia, modificado en el curso del debate para tomar en cuenta una enmienda presentada por Bélgica que disponía, entre otras cosas, que la Asamblea: 1) tomando nota de las afirmaciones y negaciones hechas por los Estados Miembros con respecto a la deportación de nacionales húngaros por la fuerza, 2) recordando el párrafo 5 de la resolución 1004 (ES-II), y 3) tomando nota de que el Secretario General continuaba sus esfuerzos en este sentido ante el Gobierno de Hungría, al cual había instado a que "en su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas, colaborase con la gran mayoría en aclarar la situación": 4) instaba a Hungría a que accediese a la solicitud formulada por el Secretario General, sin perjuicio de su soberanía; y 5) pedía al Secretario General que informase sin demora a la Asamblea General.

Un proyecto de resolución presentado por Argentina, Bélgica, Dinamarca y Estados Unidos de América, por medio del cual, entre otras cosas, la Asamblea: 1) tomaba nota con reconocimiento de las disposiciones adoptadas por el Secretario General y por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados; 2) pedía al Secretario General y al Alto Comisionado para los Refugiados que continuaran esos esfuerzos; 3) instaba a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que hiciesen llegar sus contribuciones al Secretario General, al Alto Comisionado o a otros organismos competentes, para destinarlas al cuidado y reasentamiento de los refugiados húngaros, y a que coordinasen sus programas de asistencia en consulta con la Oficina del Alto Comisionado; y 4) pedía al Secretario General y al Alto Comisionado que hiciesen un inmediato llamamiento tanto a los gobiernos como a las organizaciones no gubernamentales con el fin de atender a las necesidades mínimas actuales que se enumeran en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y les autorizaba a hacer nuevas peticiones a base de los planes y cálculos preparados por el Alto Comisionado con la colaboración de su Comité Ejecutivo.

Enmiendas presentadas por Hungría al proyecto de resolución de los cuatro Estados que disponía, entre otras cosas: 1) que se agregase a la parte dispositiva un nuevo párrafo por el cual la Asamblea, tomando nota de la declaración del Gobierno de Hungría por la que invitaba a los refugiados a retornar a su país, recomendaría a los gobiernos de los países interesados que tomaran medidas urgentes para asegurar el pronto

retorno a Hungría de los ciudadanos húngaros que habían pasado a ser refugiados a consecuencia de la situación actual; y 2) que se sustituyese el párrafo 4 de la parte dispositiva por otro pidiendo al Secretario General y al Alto Comisionado que hiciesen un llamamiento a los gobiernos para que prestaran a los refugiados la asistencia necesaria hasta su retorno a Hungría.

La mayoría de los oradores que intervinieron en el debate condenaron lo que se denominó el reino del terror en Hungría. No podía haber dos clases de Estados Miembros, una que cumpliera las resoluciones de las Naciones Unidas y otra que hiciera caso omiso impunemente de esas resoluciones. El hecho de que se estuvieran realizando deportaciones de Hungría había sido reconocido por Radio Budapest y por la prensa húngara. Si no había nada que ocultar, ¿por qué los observadores de las Naciones Unidas y el Secretario General no eran admitidos en Hungría?

Los representantes de Hungría, de la URSS y de algunos otros Estados Miembros manifestaron que las alegaciones relativas a deportaciones habían sido preparadas con objeto de entorpecer los esfuerzos del pueblo húngaro para restablecer completamente la paz y el orden. Se expresó también la opinión de que la aprobación del proyecto de resolución de Cuba no contribuiría a facilitar las negociaciones emprendidas por el Secretario General.

Algunos representantes que se habían abstenido de votar sobre la resolución 1004 (ES-II) del 4 de noviembre, insistieron en la preocupación con que sus gobiernos veían a las fuerzas armadas de la Unión Soviética intervenir en los asuntos internos de Hungría, intervención que consideraban completamente injustificada, y sostuvieron que las tropas soviéticas debían retirarse rápidamente.

En el curso del debate, el 21 de noviembre, el Secretario General confirmó su ofrecimiento de ir personalmente a Budapest. Señaló que el ofrecimiento se había hecho inicialmente para discutir asuntos relacionados con las actividades humanitarias. Sin embargo, en ulteriores conversaciones, cuando el Gobierno de Hungría había propuesto una reunión en Roma, había indicado al mismo tiempo que desearía ampliar esas conversaciones más allá de la esfera de actividades humanitarias y comprender en ellas también algunos aspectos de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. El Secretario General entendió que de este intercambio de opiniones se desprendía que no había una negativa por parte de Hungría que hiciese imposible mantener su ofrecimiento de trasladarse personalmente a Budapest y, por lo tanto, discutir no sólo las actividades humanitarias sino el aspecto más amplio a que se había referido el Gobierno de Hungría.

El representante de Hungría declaró que votaría en contra del proyecto de resolución de Ceilán, India e Indonesia. Su Gobierno y su delegación estaban dispuestos a hablar con el Secretario General sobre los problemas relacionados con el socorro al pueblo húngaro y sobre la reunión del Secretario General con los representantes del Gobierno de Hungría.

Varios oradores se opusieron a las enmiendas presentadas por Hungría, señalando que debían interpretarse teniendo en cuenta las declaraciones de que los refugiados eran delincuentes comunes y residuo de los grupos fascistas de Horthy. Se veía con claridad

que el regreso de estos refugiados implicaba su liquidación.

El 21 de noviembre, la Asamblea General votó sobre las propuestas presentadas, con el siguiente resultado: el proyecto de resolución de Cuba fué aprobado en votación nominal por 55 votos contra 10 y 10 abstenciones (resolución 1127 (XI)); el proyecto de resolución de Ceilán, India e Indonesia fué aprobado en votación nominal por 57 votos contra 8 y 14 abstenciones (resolución 1128 (XI)). Después de rechazar las enmiendas propuestas por Hungría, la Asamblea aprobó el proyecto de resolución de Argentina, Bélgica, Dinamarca y Estados Unidos en votación nominal por 69 votos contra 2 y 8 abstenciones (resolución 1129 (XI)).

c) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1956

El 30 de noviembre, el Secretario General presentó a la Asamblea un informe acerca de distintos aspectos de la situación. Por cartas del 28 de noviembre de 1956 dirigidas a los jefes de las delegaciones de Hungría y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Secretario General — señalando a la atención de los Gobiernos las resoluciones relativas a la situación en Hungría aprobadas por la Asamblea General el 21 de noviembre — solicitaba de los gobiernos información acerca de asuntos que debían tenerse en cuenta en un informe provisional sobre la ejecución de las diversas resoluciones.

En su respuesta del 29 de noviembre, el jefe de la delegación de la URSS reiteró la posición establecida en la nota del 13 de noviembre y declaró que, como lo había manifestado el representante de la URSS en la Asamblea, las afirmaciones acerca de la deportación de ciudadanos húngaros a la URSS se basaban en rumores calumniosos propalados por ciertos grupos con el propósito de desorientar a la opinión pública.

El Secretario General declaró que no disponía de información acerca de las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea relativas al retiro de las tropas o a otros asuntos políticos conexos.

Los esfuerzos del Secretario General se habían orientado principalmente a la obtención del permiso del Gobierno de Hungría para la admisión en ese país de observadores designados por el Secretario General a los fines prescritos en las resoluciones. Hasta ahora no se había obtenido permiso a este efecto. El Secretario General tenía la esperanza de ser invitado a visitar personalmente a Budapest. Si así ocurría, tenía la intención de organizar su visita en forma tal que abarcara no sólo las actividades humanitarias, a las que se refería originalmente su propuesta, sino también, en general, la posición adoptada por el Gobierno de Hungría con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas. Aunque sus esfuerzos en Budapest tendrían por guía los objetivos perseguidos por esas resoluciones, parecía adecuado, no obstante, que se considerase que las comunicaciones del Secretario General con el Gobierno de Hungría se basaban en la posición que aquél ocupaba en virtud de la Carta, para que sus gestiones tuviesen la mayor amplitud que este aspecto podía darles.

El Secretario General anunció que el grupo que debía cooperar con él en la labor de investigación mencionada en el párrafo 4 de la resolución 1004 (ES-II), estaba

examinando algunos materiales de que disponía la Secretaría. Se le había hecho saber, sin embargo, que esos materiales no eran suficientes para un informe y que el grupo, además, consideraba indispensable que su trabajo fuese completado mediante una observación directa. Como no se había concluido arreglo alguno para realizar observaciones efectivas en Hungría, no se había alcanzado todavía la etapa en que fuese posible presentar un informe general. El Secretario General había expresado anteriormente su parecer de que la investigación debía basarse en el material efectivo y confirmado de que se dispusiera. Para ajustarse a este criterio, sería necesario contar con cierta cooperación de los gobiernos de los Estados Miembros principalmente interesados.

Para concluir, el Secretario General declaró que, por los medios y los conductos a su alcance, había puesto todo su empeño en dar cumplimiento cabal a todas las decisiones de la Asamblea General sobre la situación en Hungría. La índole del problema y la información insuficiente relativa a algunas de las premisas fundamentales para sus actividades habían complicado la tarea. Estimaba que era lógico dedicarse primero a todas las actividades indagatorias, porque el progreso en esas actividades era de importancia capital para enfocar de manera provechosa los demás puntos suscitados por la Asamblea General.

d) COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA CON RESPECTO A LA PROPUESTA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL A BUDAPEST, Y APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1130 (XI) ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 4 DE DICIEMBRE DE 1956

En un cablegrama de fecha 3 de diciembre, el Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Hungría comunicó al Secretario General que su Gobierno mantenía su posición anterior, según la cual la autorización para que observadores de las Naciones Unidas entrasen en territorio de Hungría constituiría una violación de la soberanía húngara y sería contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno húngaro reiteró que estaba dispuesto a que su representante entablase inmediatamente negociaciones con el Secretario General en Roma o en Nueva York. A fin de que el Secretario General pudiese entablar negociaciones directas con el Gobierno húngaro, éste estaba dispuesto a recibir posteriormente al Secretario General en Budapest en una fecha conveniente para ambas partes.

El 3 de diciembre, la Asamblea General reanudó el debate sobre la cuestión. Consideró un proyecto de resolución de Argentina, Australia, Bélgica, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Suecia y Tailandia. El proyecto de resolución disponía que la Asamblea, entre otras cosas: 1) reiterase su llamamiento al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a las autoridades de Hungría para que diesen cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea y permitiesen que observadores de las Naciones Unidas entrasen en el territorio de Hungría y comunicasen sus conclusiones sobre la situación; 2) pidiese al Gobierno de la URSS y a las autoridades húngaras que comunicasen al Secretario General, no más tarde del 7 de diciembre de 1956, su consentimiento para recibir a los observadores; 3) recomendase que entre tanto el Secretario General dispusiese lo necesario para el envío inmediato de observadores

designados por él a Hungría y a otros países que considerara apropiados, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 1004 (ES-II); y 4) pidiese a todos los gobiernos de los Estados Miembros que ayudasen y cooperasen con los representantes designados por el Secretario General en el desempeño de sus funciones.

En el curso del debate sobre el informe del Secretario General y sobre el proyecto de resolución de los 14 Estados, que comenzó el 3 de diciembre y continuó durante seis sesiones celebradas entre esa fecha y el 5 de diciembre, la mayoría de los observadores insistió en la fuerza del sentimiento que habían provocado en todo el mundo los acontecimientos de Hungría y la actitud del Gobierno de la URSS ante las resoluciones aprobadas por la Asamblea. Varios representantes insistieron en que el establecimiento de dos normas de conducta podía ocasionar una crisis grave en las Naciones Unidas. Los representantes de Hungría y de la URSS, y algunos otros, reiteraron que no existía fundamento alguno para discutir el asunto en la Asamblea y solicitaron que se rechazase el proyecto de resolución y se eliminase el asunto del programa.

Varios representantes, aunque criticando la actitud de la URSS en Hungría e insistiendo en la obligación que tenía el Gobierno húngaro de recibir al Secretario General y a sus observadores en Hungría, se opusieron al envío de observadores a los países vecinos y estimaron que no debía ponerse un plazo en el proyecto de resolución. Se objetó igualmente el empleo de la expresión "autoridades húngaras".

En la sesión plenaria celebrada en la tarde del 4 de diciembre, el representante de Hungría declaró que, para poner en práctica la invitación de su Gobierno al Secretario General, estaba dispuesto a entrevistarse con el Secretario General para discutir la fecha y los preparativos relativos a la visita. En la noche de ese día, el Secretario General informó a la Asamblea que se había entrevistado con el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, después de la sesión de la tarde, para discutir la fecha y otros preparativos relativos a su visita a Budapest. Añadió que podía llegar a Budapest el 16 de diciembre y que el representante de Hungría había sugerido al Gobierno húngaro que el Secretario General llegase a Budapest en dicha fecha. Su intención era permanecer en Budapest los días 16, 17 y 18 de diciembre. La Asamblea General aprobó por 54 votos contra ninguno y 23 abstenciones una propuesta del representante de la India en el sentido de que se aceptase la declaración hecha por el Secretario General.

Antes de dicha votación, la Asamblea aprobó por 54 votos contra 10 y 14 abstenciones la resolución presentada por las 14 Potencias (resolución 1130 (XI)).

e) CAMBIO DE COMUNICACIONES CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1130 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL

El 7 de diciembre, el Secretario General comunicó a la Asamblea que, a las 18 horas, no había recibido respuesta alguna a las cartas por medio de las cuales había comunicado el texto de la resolución 1130 (XI) a los dos países directamente interesados. También había dirigido cartas a los representantes de Austria, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia con respecto a los dos últimos párrafos de esa resolución. El Secretario General añadió que no había recibido respuesta

alguna a su indicación del 4 de diciembre en el sentido de que visitaría Budapest el 16 del mismo mes. Si la visita no podía realizarse en la fecha propuesta, dudaba que pudiera ser de alguna utilidad.

El 8 de diciembre, el representante de Austria comunicó al Secretario General que su Gobierno permitiría la entrada en Austria a los observadores que él designara. Esa autorización se concedía por el hecho de ser Austria Estado Miembro de las Naciones Unidas y en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta. Su Gobierno creía que los observadores de las Naciones Unidas estarían también en condiciones de comprobar sobre el terreno la situación de los refugiados, así como la inexactitud de alguna información relativa a las condiciones en que se encontraban los refugiados en Austria.

En la misma fecha, el representante de Yugoslavia respondió que, en principio, su Gobierno se oponía a que se enviasen observadores a un país con el objeto de seguir los acontecimientos que se desarrollaban en otro. En este caso particular, el envío de observadores podría ampliar la zona de tensión y agravar así todavía más la situación. El valor práctico de la presencia de tales observadores sería sumamente dudoso. Por esas razones, sentía no poder recibir a los observadores.

El 9 y el 10 de diciembre, los representantes de Checoslovaquia, Rumania y la URSS contestaron en el sentido de que sus Gobiernos no podían dar su consentimiento para la entrada de observadores en sus respectivos territorios.

f) APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RESOLUCIÓN 1131 (XI) DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1956 Y NUEVA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA ACERCA DE LA PROPUESTA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL A BUDAPEST

La Asamblea General continuó el 10 de diciembre su debate sobre la cuestión. Estudió un proyecto de resolución presentado el 9 de diciembre por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Dinamarca, El Salvador, los Estados Unidos de América, Filipinas, Irlanda, Italia, Noruega, los Países Bajos, Pakistán, Perú, Suecia y Tailandia. Más adelante Colombia, España, la República Dominicana y Turquía se sumaron a los autores del proyecto de resolución que, en su forma original, disponía entre otras cosas que la Asamblea General: 1) profundamente preocupada por los trágicos acontecimientos en Hungría; 2) recordando las disposiciones de sus resoluciones anteriores en las que instaba al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a desistir de su intervención en los asuntos internos de Hungría, retirar sus fuerzas de dicho país y cesar su represión contra el pueblo húngaro; recordando, además, 3) las disposiciones por las que se pedía que se permitiera a observadores de las Naciones Unidas entrar al territorio de Hungría, transitar libremente por él y comunicar sus conclusiones al Secretario General; 4) habiendo recibido el informe del Secretario General del 30 de noviembre en el que se declaraba que "el Secretario General no dispone de información acerca de medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea General relativas al retiro de las tropas o a otros asuntos políticos conexos" y la nota del Secretario General del 7 de diciembre; 5) advirtiendo con grave preocupación que aún no había habido respuesta al último llamamiento hecho por la Asamblea en su resolución del 5 de diciembre de 1956 para que se admitieran obser-

vadores de las Naciones Unidas en Hungría; y 6) considerando que los acontecimientos recientes habían demostrado claramente la determinación del pueblo húngaro de recuperar su libertad e independencia; 7) declaraba que, por el hecho de utilizar su fuerza armada contra el pueblo húngaro el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas violaba la independencia política de Hungría; 8) condenaba la violación de la Carta por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al privar a Hungría de su libertad e independencia y al pueblo húngaro del ejercicio de sus derechos fundamentales; 9) reiteraba su llamamiento al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que desistiera de inmediato de toda forma de intervención en los asuntos internos de Hungría; y 10) instaba al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que tomara inmediatamente las medidas necesarias para el retiro, bajo la observación de las Naciones Unidas, de sus fuerzas armadas de Hungría y a que permitiera el restablecimiento de la independencia política de Hungría.

El 10 de diciembre, Ceilán, India e Indonesia presentaron enmiendas a este proyecto de resolución. En ellas se proponía: 1) suprimir el segundo y tercer párrafos del preámbulo; 2) sustituir el sexto párrafo del preámbulo por una disposición en la que se tomaba nota de la demanda abrumadora del pueblo húngaro de que cesara la intervención de las fuerzas armadas extranjeras y se retiraran las tropas extranjeras; 3) sustituir el párrafo 1 de la parte dispositiva por la declaración de que debía cesar la intervención de las fuerzas armadas soviéticas en Hungría y de que se debía concertar el retiro de dichas fuerzas a fin de que cesaran la violencia y la falta de cooperación y fuera posible restablecer condiciones pacíficas; 4) sustituir el párrafo 2 de la parte dispositiva por una disposición en virtud de la cual la Asamblea General instaría a los Gobiernos de Hungría y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a promover la realización de dicha declaración, de conformidad con los propósitos de la Carta y las intenciones expresadas por ambos Gobiernos; y 5) suprimir el párrafo 4 de la parte dispositiva y reemplazarlo por tres nuevos párrafos en los que la Asamblea: i) declaraba que los recientes acontecimientos de Hungría habían demostrado que el empleo de la fuerza y la violencia no sólo no podía resolver la grave situación en Hungría ni promover su solución, sino que había agravado tal situación y acarreado severas privaciones y denegaciones de libertad para el pueblo húngaro; ii) expresaba su firme convicción de que la promoción de los intereses y de la libertad del pueblo húngaro sólo sería posible sin intervención extranjera y eliminando el temor de que se ejerciera presión externa de cualquier procedencia; y iii) pedía al Secretario General que emprendiera gestiones ante los Gobiernos de Hungría y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por conducto de los representantes de estos Gobiernos en Nueva York, y que examinara sin dilación la posibilidad de ir a Moscú, además de las gestiones similares que estaba realizando respecto de Budapest, a fin de ayudar a promover una pronta solución con la cooperación de todos los interesados.

El 10 de diciembre, Birmania, Ceilán y la India presentaron además un proyecto conjunto de resolución en virtud del cual la Asamblea General, *inter alia*: 1) profundamente preocupada por los trágicos acontecimientos en Hungría; 2) habiendo recibido el informe

del Secretario General del 30 de noviembre y su nota del 7 de diciembre; 3) tomando nota de la abrumadora demanda del pueblo de Hungría de que se retiraran las tropas soviéticas y cesara la intervención extranjera; 4) tomando nota de que el hecho de que no se hubiera convenido y dispuesto el retiro de las fuerzas soviéticas había suscitado y originado una actitud generalizada de resistencia a toda cooperación, especialmente entre los trabajadores de Hungría, y estaba impidiendo que se establecieran condiciones pacíficas; 5) tomando nota, además, de la declaración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 30 de octubre acerca del retiro de sus fuerzas fuera de Hungría y de que las Naciones Unidas y la opinión mundial habían pedido reiteradamente dicho retiro; y 6) reconociendo que para lograr cualquier mejoramiento de la situación en Hungría se requería la iniciativa y la colaboración inmediatas de los Gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Hungría; 7) lamentaba profundamente que no se hubiera tomado medida alguna en consonancia con la declaración soviética antes mencionada y con la abrumadora demanda del pueblo húngaro respecto del retiro de las tropas soviéticas y que, en consecuencia, la situación se hubiera agravado aún más y el pueblo húngaro mantuviera su voluntad de no cooperar; 8) declaraba que la intervención de las fuerzas armadas en Hungría no sólo había resultado en actos de violencia y en derramamientos de sangre, sino que había agravado la situación e impedido lograr una solución; que debía cesar sin demora dicha intervención y que se debían tomar medidas de inmediato para el retiro de fuerzas extranjeras, a fin de poder establecer en Hungría condiciones pacíficas; 9) declaraba que los acontecimientos últimos de Hungría habían demostrado en forma concluyente que la fuerza y la violencia no solucionaban las demandas de un pueblo; y 10) expresaba su firme convicción de que la mejor forma de promover los intereses y la independencia del pueblo húngaro, los intereses de las Naciones Unidas y la cooperación mundial sería poner término a la intervención extranjera existente y obtener garantías de que no habría intervención alguna ni se ejercería presión alguna, desde el exterior, ni por las armas ni de otra manera. El párrafo final de la parte dispositiva contenía disposiciones idénticas a las del último párrafo de las enmiendas de las tres Potencias mencionadas anteriormente.

El 10 de diciembre, en el séptimo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución de las 20 Potencias se incorporó la segunda enmienda propuesta por Ceilán, la India e Indonesia. El 12 de diciembre los autores de este proyecto de resolución volvieron a modificarlo para introducir un nuevo párrafo 5 en la parte dispositiva, en virtud del cual la Asamblea General pediría al Secretario General que, en conformidad con los principios de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General, adoptara cualquier iniciativa que estimara útil en relación con el problema húngaro.

El 11 de diciembre, Austria sometió un proyecto de resolución por el que la Asamblea General autorizaría al Secretario General: 1) a que, con toda energía y utilizando todos los medios a su disposición, adoptara inmediatamente las providencias del caso para lograr una solución constructiva del problema húngaro, basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas; 2) a que, con ese objeto, entablara las negociaciones que estimara adecuadas con Estados Miembros de las Naciones Unidas; y 3) a que informara

la Asamblea General sobre los resultados de sus gestiones y, de ser posible, lo hiciera antes de que terminara la primera parte de su actual período de sesiones.

La Asamblea General examinó las mencionadas propuestas en seis reuniones celebradas el 10, el 11 y el 12 de diciembre.

La mayoría de los oradores apoyaron el proyecto de resolución de las 20 Potencias y subrayaron que la Asamblea, lejos de haber procedido precipitadamente, había deliberado extensamente y hecho todo lo posible para obtener información. Por lo tanto no podía ya aplazar el juicio que estaba obligada a pronunciar. Puesto que todo lo demás había fracasado, debía considerar la posibilidad de condenar a la URSS por sus actividades en contra del pueblo húngaro.

Algunos representantes, aunque de acuerdo con la mayoría acerca de la naturaleza de los actos de la URSS y su responsabilidad, advirtieron que la situación era tal, que sin la cooperación e iniciativa efectivas de dicho país no era posible llegar a una solución, e instaron a que se aceptaran las enmiendas propuestas por Ceilán, la India e Indonesia. La mayoría de los representantes partidarios del proyecto de resolución de las 20 Potencias declararon que les resultaba imposible aceptar dichas enmiendas o se opusieron a las mismas. Entre las razones invocadas para explicar esta actitud figuraba la de que la mayor parte de las ideas contenidas en las enmiendas había sido ya expresada en resoluciones anteriores y que carecía de sentido limitarse a reiterarlas a esta altura de los acontecimientos. Además, importaba no dar la impresión de que se abandonaban principios en que había convenido una mayoría abrumadora. También se hicieron algunas objeciones a la redacción de varias de las enmiendas.

El representante de la URSS y algunos otros representantes estimaron que el proyecto de resolución de las 20 Potencias era francamente provocativo y sostuvieron que la actitud que en el mismo se proponía era contraria al honor y a la autoridad de las Naciones Unidas, socavaría las bases mismas de la Organización y la convertiría en un grupo limitado de Estados dirigidos por los Estados Unidos de América. Sostuvieron además que, a pesar de cualquier resolución que pudiera ser automáticamente aprobada por la Asamblea, todo intento de derrocar el gobierno popular de Hungría estaba condenado al fracaso.

El 11 de diciembre, el representante de Hungría dijo que las delegaciones de los Estados Unidos y de algunos países bajo su influencia habían intentado repetidas veces intervenir en los asuntos internos de Hungría. Su delegación continuaría oponiéndose sistemáticamente a dichas tentativas. Algunas delegaciones habían ofendido a su Gobierno y delegación en forma incompatible con la soberanía húngara y el honor nacional del pueblo húngaro. Por esta razón la delegación de Hungría se abstendría de participar en los trabajos del undécimo período de sesiones de la Asamblea General mientras el debate acerca de la cuestión de Hungría no se realizara conforme al espíritu de la Carta.

Antes y después de esta declaración del representante de Hungría, varios representantes manifestaron su convicción de que el Gobierno de Kadar había sido impuesto por la fuerza al pueblo húngaro y representaba a la URSS más bien que al pueblo de Hungría. Algunos representantes instaron a que se expulsara a la delegación de Hungría de la Asamblea General.

El 12 de diciembre la Asamblea General rechazó las enmiendas al proyecto de resolución de las 20 Potencias y aprobó éste en votación nominal por 55 votos contra 8⁷ y 13 abstenciones⁸ (resolución 1131 (XI)).

Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Austria indicaron que no insistirían en que se votara sobre sus respectivos proyectos de resolución.

En una nota verbal del 12 de diciembre la Misión de Hungría ante las Naciones Unidas informó al Secretario General que el Gobierno de Hungría, refiriéndose a su manifestación de estar dispuesto a celebrar negociaciones con el Secretario General y a recibirlo en Budapest más adelante, cuando fuera conveniente para ambas partes, declaraba que el 16 de diciembre, fecha escogida por el Secretario General, no resultaba conveniente para el Gobierno de Hungría, y que dicho Gobierno presentaría más adelante una propuesta acerca de la visita del Secretario General.

g) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DEL 5 DE ENERO DE 1957

En un informe a la Asamblea General de fecha 5 de enero de 1957, el Secretario General incluyó el texto de una nota recibida del grupo de tres personas creado el 16 de noviembre de 1956, en la que éste expresaba su opinión acerca de la índole y condiciones de las investigaciones que se le encargaron. En la nota se señalaba que la resolución 1004 (ES-II) parecía considerar la tarea de investigar, observar e informar como una sola función. Pero la documentación que el grupo había examinado era el material de que se disponía en general y que todos conocían, lo que no les permitía agregar nada importante a cuanto todos ya sabían acerca de la situación en Hungría. El grupo señalaba también que sólo uno de los países a los que se había pedido que cooperaran había considerado factible ofrecer medios de observación y que hasta tanto fuera posible disponer de nuevas fuentes de material fidedigno mediante la observación sobre el terreno en Hungría y la cooperación de los gobiernos directamente interesados, escaso objeto tendría que trataran de formarse una opinión sobre los acontecimientos recientes. En tales circunstancias, cabía preguntarse si en beneficio de la investigación misma no sería preferible suspenderla por el momento y volver a examinar la cuestión más adelante.

El Secretario General declaró que, en vista de las circunstancias, la única fuente nueva y directa de información a que posiblemente podría recurrirse sería las audiencias a los refugiados de Hungría que se realizarían, en primer lugar, en los países vecinos. El Gobierno de Austria se había declarado dispuesto a recibir observadores con ese fin. Los Estados Unidos de América e Italia ofrecieron a las Naciones Unidas los servicios de observadores para dar audiencia a los refugiados. Las declaraciones de los refugiados en algunos de esos países permitirían tal vez establecer algunos puntos adicionales de importancia, pero para lograr resultados positivos estas audiencias deberían ser extensas y organizadas en forma jurídicamente satisfactoria.

⁷ Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

⁸ Afganistán, Arabia Saudita, Camboja, Egipto, Finlandia, India, Indonesia, Jordania, Marruecos, Siria, Sudán, Yemen y Yugoslavia.

El Secretario General, por su parte, seguía tratando de realizar los fines perseguidos por la Asamblea General en cumplimiento del párrafo 5 de su última resolución (1131 (XI)) sobre la cuestión de Hungría. El Secretario General estimaba que tal vez había llegado el momento oportuno para volver a considerar la forma que debía adoptar la investigación. La Asamblea podía llegar a establecer una comisión especial a la que se encomendarían las funciones confiadas al grupo de investigadores establecido por el Secretario General y que las proseguiría con atribuciones algo más amplias. Dicha comisión debería actuar evidentemente como órgano de la Asamblea General para observar constantemente los acontecimientos relacionados con Hungría en cuanto pudieran interesar a la Asamblea General.

h) CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROBLEMA DE HUNGRÍA (RESOLUCIÓN 1132 (XI) DE LA ASAMBLEA GENERAL, ENERO DE 1957)

La Asamblea General continuó el examen de la cuestión de Hungría en cuatro reuniones celebradas el 9 y el 10 de enero de 1957. Consideró un proyecto de resolución presentado por Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Liberia, Nueva Zelanda, Noruega, los Países Bajos, Pakistán, Perú, Suecia, Tailandia, Turquía, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Dominicana que, después de ser modificado en el curso del debate, disponía que la Asamblea General: 1) recordando sus anteriores resoluciones sobre el problema de Hungría, 2) reafirmando los objetivos señalados en dichas resoluciones y la constante preocupación de las Naciones Unidas en esta materia, 3) habiendo recibido el informe del Secretario General del 5 de enero, y 4) deseando lograr que la Asamblea General y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas recibieran la más completa y mejor información de que pudiera disponerse con respecto a la situación creada por la intervención de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mediante el uso de la fuerza armada y de otros medios, en los asuntos internos de Hungría, así como con respecto a acontecimientos relacionados con recomendaciones de la Asamblea General en esta materia: 5) establecería, con las finalidades mencionadas, una comisión especial compuesta por representantes de Australia, Ceilán, Dinamarca, Túnez y Uruguay, para que hiciera investigaciones y estableciera y mantuviera observación directa en Hungría y otras partes, obteniendo testimonios, reuniendo pruebas y recibiendo información en la forma apropiada con objeto de transmitir sus conclusiones a la Asamblea General en su actual período de sesiones y preparar posteriormente, de tiempo en tiempo, informes complementarios destinados a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la Asamblea General si esta última estuviera reunida; 6) exhortaría a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Hungría a cooperar en toda forma con la comisión y, en particular, a que permitieran a la comisión y a su personal entrar al territorio de Hungría y transitar libremente por él; 7) pediría a todos los Estados Miembros que ayudaran a la comisión en cualquier forma que fuera apropiada para el cumplimiento de su misión, proporcionándole información pertinente, incluso los testimonios y pruebas de que dispusieran y asistiéndola para obtener esa informa-

ción; 8) invitaría al Secretario General a que prestara a la Comisión toda la ayuda y los servicios apropiados; 9) instaría a todos los Estados Miembros a dar pronto cumplimiento a esta resolución y a las anteriores resoluciones de la Asamblea General sobre el problema de Hungría; y 10) reafirmaría su petición de que el Secretario General, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General, continuara tomando toda iniciativa que estimara útil en relación con el problema húngaro.

El 11 de enero la Misión Permanente de la República Popular Húngara ante las Naciones Unidas dirigió una nota verbal al Secretario General transmitiendo una declaración de fecha 10 de junio del Gobierno de Hungría en la que dicho Gobierno protestaba contra el proyecto de resolución de las 24 Potencias, declarando que constituía una ingerencia manifiesta y sin precedentes en los asuntos internos de Hungría. El Gobierno de Hungría consideraba inadmisibles la aprobación de resoluciones de esa naturaleza que atentaban contra la soberanía de la República Popular Húngara. El Gobierno de Hungría terminaba su nota declarando que ninguna comisión de ninguna clase tenía derecho a hacer investigaciones sobre la pretendida cuestión de Hungría, reuniendo testimonios de personas parciales y carentes de toda autoridad, ni a establecer un sistema de observaciones directas en Hungría a fin de obtener información. En la nota se pedía que se suprimiera esta cuestión del programa de la Asamblea y que se permitiera al pueblo de Hungría, una vez restablecidos la ley y el orden, labrar su propio destino y lograr el progreso económico y una Hungría socialista, libre e independiente.

El proyecto de resolución fué aprobado por la gran mayoría de los oradores, que lamentaron y condenaron la actitud de la URSS y del gobierno de Kádár que no habían observado las resoluciones aprobadas por la Asamblea General respecto a Hungría. Varios oradores insistieron en que era esencial que la opinión pública contara con una información tan objetiva y completa como fuera posible sobre el alzamiento en Hungría y la evolución de la situación en dicho país, lo que permitiría cotejar los hechos con la versión de que lo acontecido era sólo resultado de un complot contrarrevolucionario. La Organización tenía el imperioso deber de continuar examinando a fondo el problema y de demostrar que sus principios se aplicaban a todos.

El representante de la URSS, apoyado por otros varios representantes, declaró que la creación por la Asamblea de una comisión destinada a intervenir en los asuntos internos de un Estado Miembro sería una grave violación del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Todo acto o medida de esa comisión carecería en absoluto de fundamento jurídico. La delegación soviética no podía menos de expresar su desagrado por la actitud bastante insólita del Secretario General, que en vez de limitarse a exponer los hechos había presentado una propuesta tendiente a crear una comisión especial de investigación. Como la creación de dicha comisión representaría una violación directa de la Carta, parecía que el Secretario General al hacer esta propuesta actuaba, no como funcionario internacional, sino como parte en una controversia entre varios Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El 10 de enero la Asamblea aprobó el proyecto de resolución de las 24 Potencias por 59 votos contra 8⁹ y 10 abstenciones¹⁰ (resolución 1132 (XI)).

i) OTROS ACONTECIMIENTOS

El 15 de enero de 1957 el representante de Hungría transmitió al Secretario General un memorándum sobre la cuestión relativa a los ciudadanos húngaros que habían salido del país a raíz de los acontecimientos del 23 de octubre de 1956. El representante del Reino Unido envió al Secretario General una carta de fecha 22 de enero en la que se hacían comentarios a dicho memorándum. Con una carta de fecha 26 de enero el representante de Austria transmitió un memorándum sobre la cuestión de los refugiados húngaros en su país.

El 4 de febrero el representante de Hungría transmitió al Secretario General un memorándum sobre la cuestión de Hungría en relación con los hechos acaecidos el 23 de octubre de 1956 y posteriormente en el que el Gobierno de Hungría lamentaba que la actitud adoptada hasta ese momento por la Asamblea General hubiera impedido a Hungría participar en la labor del undécimo período de sesiones de la Asamblea en su carácter de Estado con iguales derechos.

El 13 de febrero el Comité de Verificación de Poderes informó que, en la reunión celebrada el día anterior, había aprobado por 8 votos contra 1 una moción de los Estados Unidos tendiente a "que la Comisión no adoptara ninguna decisión sobre las credenciales presentadas en nombre de los representantes de Hungría". El 21 de febrero la Asamblea General aprobó el informe de la Comisión de Verificación de Poderes.

Por nota de fecha 26 de marzo de 1957 el representante de Hungría transmitió al Secretario General una nota verbal acerca de la cuestión relativa a las credenciales en la que se declaraba que el Gobierno de Hungría consideraba que el hecho de que la Asamblea General no hubiera llegado a ninguna decisión positiva acerca de las credenciales de la delegación de Hungría, constituía un procedimiento discriminatorio sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas, contra el cual protestaba enérgicamente.

El 8 de marzo la Asamblea General decidió por su resolución 1119 (XI) aplazar temporalmente el undécimo período de sesiones y autorizar a su Presidente a que, en consulta con el Secretario General y los Estados Miembros representados en la Mesa durante dicho período de sesiones, convocara nuevamente a la Asamblea cuando se juzgara necesario para considerar nuevas medidas respecto a la cuestión del Oriente Medio y a la cuestión de Hungría.

4. Informes de la Comisión Especial para el Problema de Hungría

La Comisión Especial creada en virtud de la resolución 1132 (XI) de la Asamblea General presentó un informe provisional a la Asamblea el 20 de febrero de 1957. En él manifestaba que la investigación que llevaría a cabo trataría principalmente de los esfuerzos del pueblo de Hungría por reafirmar sus derechos y

de los hechos y datos precisos relativos a las circunstancias que habían concurrido en la intervención de la URSS en la situación dentro de Hungría por medio de sus fuerzas armadas, y de la forma en que esa intervención había influido en la evolución de la situación constitucional, económica, social y política de ese país en sus compromisos internacionales y en la realización de los deseos de su pueblo. Decía la Comisión que en particular se esforzaría por precisar la naturaleza de las relaciones de la URSS y de sus representantes en Hungría con el Gobierno del Sr. Nagy, el origen y significado de las comunicaciones dirigidas por ese Gobierno a las Naciones Unidas, así como el papel desempeñado por la URSS en relación con el derrocamiento de ese Gobierno y con la instauración del régimen actual.

El 12 de junio se distribuyó un nuevo informe adoptado unánimemente por la Comisión, en el cual ésta lamentaba que debido a la actitud del Gobierno de Hungría no le hubiera sido posible establecer y mantener un sistema de observación directa en Hungría, conforme a lo dispuesto en la resolución 1132 (XI) de la Asamblea General. Manifestaba asimismo que tras haber dado audiencia a varios testigos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, había celebrado audiencias en Europa del 11 de marzo al 16 de abril, en la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra y después en Roma, Viena, Londres y nuevamente en Ginebra. La Comisión presentó las siguientes conclusiones:

1) Lo que se produjo en Hungría en octubre y noviembre de 1956 fué un levantamiento nacional espontáneo ocasionado por agravios prolongados que habían creado resentimientos en el pueblo húngaro. Uno de estos agravios era la posición de inferioridad de Hungría en relación con la URSS. El sistema de gobierno imperante en Hungría se sostenía en parte por efecto del terror que hacía reinar la policía de seguridad del Estado, la AVH o policía política. Había además otros motivos de resentimiento contra la presión soviética.

2) La tesis de que el levantamiento fué fomentado por los círculos reaccionarios de Hungría, y de que su fuerza emanó de esos círculos y de los "imperialistas" occidentales, no resistió al examen de la Comisión. De principio a fin, el levantamiento fué dirigido por estudiantes, trabajadores, soldados e intelectuales, muchos de los cuales eran o habían sido comunistas. En la mayoría de las reivindicaciones políticas presentadas durante la revolución figuraba la estipulación de que el socialismo democrático debería ser la base de la estructura política húngara y de que deberían preservarse conquistas sociales tales como la reforma agraria. En ningún momento hubo la menor propuesta encaminada a obtener el regreso al poder o al Gobierno de ninguna personalidad política de los tiempos anteriores a la guerra.

3) El levantamiento no se preparó con anticipación, y los sucesos tomaron de sorpresa a los participantes.

4) Aunque no existe prueba alguna de que el levantamiento fuera preparado con anticipación, y aunque se caracterizó por una continua improvisación, parece ser que las autoridades soviéticas habían tomado medidas ya desde el 20 de octubre para hacer posible una intervención armada en Hungría. Existen pruebas de que aun en su primera intervención las fuerzas soviéticas comprendían tropas traídas de fuera de Hungría, y el Tratado de Varsovia no contiene ninguna cláusula

⁹ Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Polonia, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¹⁰ Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Finlandia, India, Jordania, Siria, Sudán y Yugoslavia.

sula que permita la intervención de fuerzas armadas de la Unión Soviética para fijar el curso de la política interna de cualquiera de los países signatarios.

5) Las manifestaciones del 23 de octubre fueron al principio enteramente pacíficas, y no se ha descubierto prueba alguna de que quienes plantearon las reivindicaciones políticas o se unieron a los manifestantes tuvieran la menor intención de recurrir a la fuerza. La manifestación se convirtió en levantamiento armado porque la AVH abrió fuego contra el pueblo que estaba frente al edificio de la estación de radio. A las pocas horas, los tanques soviéticos entraron en acción contra los húngaros. La presencia de soldados rusos, no como aliados sino como enemigos en combate, acrecentó la solidaridad popular.

6) El Sr. Nagy ha negado, con todas las apariencias de verdad, que fuera él quien formulara la invitación a las autoridades soviéticas para que ayudaran a reprimir por la fuerza el levantamiento o que estuviera siquiera enterado de ella. Puesto que los tanques soviéticos aparecieron en las calles de Budapest alrededor de las dos de la madrugada del 24 de octubre, al Sr. Nagy le hubiera sido imposible dirigir mensaje oficial alguno a las autoridades soviéticas, ya que no ejercía ningún puesto de gobierno en el momento en que los tanques debieron haber recibido sus órdenes. Hasta que se disponga de más información sería prudente abstenerse de formular juicio acerca de si se hizo en efecto tal invitación. Lo mismo puede decirse respecto a la invitación que, según se alega, fué dirigida a las autoridades soviéticas antes de la segunda intervención del 4 de noviembre. Cuando el Gobierno del Sr. Nagy fué reconstituido el 3 de noviembre, el Sr. Kádár siguió como miembro del Gobierno, y la Comisión no tiene conocimiento de hecho alguno que indique que el Sr. Kádár estuviera en desacuerdo con la política del Sr. Nagy. No se conocen con certeza los pasos del Sr. Kádár durante este período y no puede considerarse que haya probado su afirmación de que pidió ayuda soviética en nombre del Gobierno. En todo caso, existen abundantes pruebas de que los preparativos soviéticos para una nueva intervención, incluso el movimiento de tropas y fuerzas blindadas desde el exterior, se habían estado realizando desde los últimos días de octubre. Durante los primeros días siguientes a la formación de su Gobierno, el Sr. Kádár y sus Ministros estuvieron ausentes de Budapest, y las órdenes administrativas dadas al pueblo de Hungría emanaron de los comandantes de las tropas soviéticas.

7) Cuando el Sr. Nagy pasó a ser Primer Ministro no pudo, en un principio, ejercer todos los poderes propios de su cargo, y sólo después que la victoria de los insurgentes debilitó el dominio de la AVH pudo el Sr. Nagy asumir una posición independiente. Viendo que sus compatriotas estaban unidos en su deseo de tener otra forma de gobierno y de conseguir la salida de las tropas soviéticas, el Sr. Nagy se adhirió a los insurgentes.

8) Los pocos días de libertad que disfrutó el pueblo húngaro proporcionaron abundantes pruebas del carácter popular del alzamiento. En toda Hungría renació la libertad de prensa y de radio; la abolición de la AVH

fué motivo de júbilo general que reveló el grado de unidad alcanzado por el pueblo.

9) Hubo varios casos de personas linchadas y maltratadas por la muchedumbre. En casi todos ellos se trató de miembros de la AVH o personas que se creía que habían colaborado con ella.

10) Durante este período los consejos de trabajadores tomaron medidas para dar a los obreros el control efectivo de las empresas industriales nacionalizadas y abolir disposiciones impopulares como las que fijaban normas de producción. Durante los días de libertad, mientras continuaban las negociaciones con las autoridades soviéticas para conseguir el retiro de las tropas rusas, se trató de despejar las calles de Budapest, y la vida comenzó a normalizarse.

11) En contraste con las demandas de restablecimiento de los derechos políticos, presentadas durante el alzamiento, está el hecho de que los Gobiernos húngaros anteriores al 23 de octubre violaron los derechos humanos fundamentales del pueblo húngaro, especialmente hasta el otoño de 1955, violaciones que se han reanudado a partir del 4 de noviembre. La Comisión ha llegado al convencimiento de que hay que aceptar como verídicos los numerosos relatos de los tratos inhumanos y las torturas infligidos por la AVH. Los testimonios que ha recogido han convencido asimismo a la Comisión de que en un intento de reprimir la revolución muchos húngaros fueron deportados a la URSS y de que es posible que a algunos de ellos no se les haya permitido volver a su patria.

12) Desde la segunda intervención soviética del 4 de noviembre, no ha habido prueba de apoyo popular al Gobierno del Sr. Kádár. Este ha abandonado sucesivamente la mayoría de los puntos del programa revolucionario que inicialmente prometió al pueblo húngaro. Sobre el punto básico del retiro de las tropas soviéticas, la actitud del Sr. Kádár ha variado desde aceptar completamente el anhelo de la nación húngara hasta rechazar la idea de discutir este asunto en las circunstancias actuales. El Sr. Kádár ha procedido poco a poco a destruir el poder de los trabajadores. Se han tomado severas medidas de represión y se han aplazado las elecciones generales por dos años. Sólo un reducido porcentaje de los 190.000 húngaros que huyeron de Hungría han aceptado la invitación del Sr. Kádár a regresar al país.

13) Habida cuenta de la amplitud de la intervención extranjera, el examen de la cuestión de Hungría por las Naciones Unidas era legítimo y, además, había sido solicitado por un Gobierno húngaro legalmente constituido. Con respecto a los derechos humanos, Hungría ha aceptado determinadas obligaciones internacionales en virtud del Tratado de Paz. Por lo tanto, la Comisión considera que las objeciones fundadas en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas no son valederas en este caso. Una poderosa intervención armada efectuada por una Potencia en el territorio de otra con la declarada intención de intervenir en los asuntos internos del otro país, tiene que ser, conforme a la propia definición de la agresión formulada por la Unión Soviética, un motivo de preocupación internacional.

B. ASISTENCIA HUMANITARIA AL PUEBLO DE HUNGRÍA

En el curso de las deliberaciones que se desarrollaron a principios de noviembre de 1956, la Asamblea General, en su segundo período extraordinario de sesiones de emergencia, consideró la urgente necesidad que experimentaba el pueblo húngaro en cuanto a víveres, ropas, medicamentos y otras cosas similares y el número cada vez mayor de refugiados que salían de Hungría para buscar asilo en países vecinos.

A fin de aliviar los sufrimientos del pueblo húngaro, la Asamblea resolvió emprender un vasto programa de ayuda inmediata e instó a los Estados Miembros y a las organizaciones de carácter humanitario nacionales e internacionales a que colaborasen proporcionando los suministros que pudiera necesitar el pueblo húngaro. Se pidió al Secretario General que tomase inmediatamente las medidas necesarias y que en consulta con los directores de los organismos especializados apropiados investigase las necesidades del pueblo húngaro.

Con respecto a la asistencia a los refugiados húngaros, la Asamblea instó a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que enviasen sus contribuciones para el cuidado y reasentamiento de los refugiados. Se autorizó al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que en común hicieran llamamientos para este fin, y se pidió al Alto Comisionado que celebrase consultas con otros organismos internacionales apropiados y con los Gobiernos interesados a fin de adoptar disposiciones rápidas y eficaces para prestar asistencia urgente a los refugiados procedentes de Hungría.

1. Socorro al pueblo húngaro en Hungría

El 15 de noviembre de 1956, el Secretario General, remitiéndose a las resoluciones 1004 (ES-II) y 1007 (ES-II) de la Asamblea General, dirigió a los Gobiernos un urgente llamamiento para que colaborasen en el programa de socorro a Hungría. Al mismo tiempo celebró consultas con los directores de los organismos especializados, que se declararon dispuestos a colaborar en la forma que conviniese, en el momento y por los medios que se les indicasen.

El Secretario General juzgó que una vez hecho este llamamiento su función principal era la de averiguar qué clase de socorro se necesitaba y en la medida de lo posible hacer de coordinador, recibiendo las contribuciones, especialmente las de los Gobiernos, o informando y aconsejando acerca del cauce que debería darse a esas contribuciones. Se estimó que no era ni factible ni conveniente que las Naciones Unidas mismas creasen un servicio de distribución de los suministros en Hungría. Al respecto, el Secretario General entabló urgentes negociaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que el 16 de noviembre de 1956 había concluido un acuerdo con la Cruz Roja Húngara para establecer un sistema de distribución de los suministros de socorro procedentes del extranjero. El 4 de diciembre de 1956 las Naciones Unidas y el CICR concluyeron un acuerdo en el que se determinaba que el Comité sería el único organismo encargado de la ejecución del programa de socorro emprendido en nombre de las Naciones Unidas, con las contribuciones hechas en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General.

A continuación se reseñan en términos generales los sistemas que se siguieron para evaluar las necesidades de socorro del pueblo húngaro y los resultados conseguidos, la respuesta de las naciones del mundo a esas necesidades y al llamamiento de la Asamblea General y los programas internacionales de socorro de cuya aplicación práctica cuidó el CICR.

a) NECESIDADES DEL PUEBLO HÚNGARO

En una nota de fecha 10 de noviembre de 1956, el Secretario General pidió al Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría que le informase sobre los suministros médicos, alimentos y ropas que necesitaba el pueblo húngaro del extranjero. El 13 de noviembre de 1956, el Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Hungría envió por cablegrama al Secretario General una lista de los artículos que se necesitaban con mayor urgencia.

El 7 de diciembre de 1956, el Comité Internacional de la Cruz Roja comunicó al Secretario General que había empezado a poner en práctica en Hungría un programa de ayuda de urgencia de los que usualmente realiza el Comité (distribución directa a las víctimas de los sucesos de Hungría) y le hizo saber lo que necesitaba para proseguir inmediatamente ese programa. El Secretario General describió este programa y expuso estas necesidades en un informe provisional que presentó a la Asamblea General el 12 de diciembre de 1956 (A/3443). Algún tiempo después, el CICR propuso una ampliación del programa de asistencia urgente para atender a las mayores necesidades del pueblo húngaro.

A principios de enero de 1957 visitó Hungría una misión mixta de funcionarios de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con objeto de averiguar las necesidades del pueblo húngaro en materia de alimentos, medicamentos y otros suministros similares, conforme a lo dispuesto en la resolución 1004 (ES-II) de la Asamblea General. El Secretario General, en un informe que presentó a la Asamblea General (A/3503), expuso los resultados generales de la labor de la misión y presentó una lista de los artículos que se consideraban necesarios para asegurar un suministro adecuado de alimentos hasta la cosecha siguiente. El Secretario General, el Director General de la FAO y el CICR celebraron consultas con los gobiernos para tratar de satisfacer estas y otras necesidades de socorro.

b) RESPUESTA DE LAS DEMÁS NACIONES

No es posible calcular la magnitud total de la respuesta de las demás naciones a las necesidades del pueblo húngaro, porque no todas las contribuciones fueron comunicadas al Secretario General¹¹ ni siguieron los trámites del CICR. Sin ningún género de duda, esa respuesta sirvió para aliviar los sufrimientos del pueblo de Hungría.

Aunque hubo algunos gobiernos que hicieron generosas contribuciones, la mayoría de los socorros distribuidos por el CICR procedieron de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de otras organizaciones de carácter humanitario. Muchas organizaciones privadas

¹¹ Véanse los documentos A/3405 y A/3464 y Add.1 a 3.

y muchos particulares enviaron contribuciones espontáneamente. En los totales que figuran más adelante están comprendidas las contribuciones gubernamentales y no gubernamentales en efectivo y en suministros de socorro, recibidas directamente por el CICR o enviadas a las Naciones Unidas y a la FAO y administradas por el CICR.

El valor de todas las contribuciones en especie recibidas por el CICR hasta fines de junio en forma de artículos alimenticios (comprendidos los paquetes de víveres), ropas y productos textiles, semillas para las siembras de primavera y artículos varios (carbón, vidrio para ventanas, etc.), ascendió a 15 millones de dólares, aproximadamente. En esta suma está comprendido el valor de los socorros suministrados por el UNICEF en ropa para niños recién nacidos, pañales y mantas, evaluados en 200.000 dólares. En cambio no figura la ayuda de índole similar proporcionada por el UNICEF y evaluada en 450.000 dólares, que fué aprobada por la Junta Ejecutiva del Fondo, ni la gran cantidad de suministros médicos y sanitarios enviados directamente a Viena por las sociedades nacionales de la Cruz Roja y por los gobiernos, ni tampoco el valor de la obra de socorro que llevó a cabo el CICR con ayuda de los fondos puestos a su disposición para el programa médicosocial iniciado en el mes de abril. Es probable que la distribución de la ayuda del UNICEF y de los suministros médicos y sanitarios, así como la ejecución del programa médicosocial, prosigan durante el otoño.

Las contribuciones en efectivo que el CICR había recibido de esas mismas fuentes hasta el 31 de mayo de 1957 ascendían en total a 1.577.102 dólares. En esta suma no está comprendido el producto de la venta, en Hungría, de artículos enviados con fines generales de socorro, que ascendió aproximadamente a un millón de dólares.

Los gobiernos de varios países comunicaron al Secretario General que, además de contribuir al programa internacional de socorro de cuya ejecución en Hungría estaba encargado el CICR, prestaban asistencia por conducto del Gobierno húngaro. En la lista de productos publicada figuraban grandes cantidades de víveres, suministros médicos, combustible, materiales de construcción y diversos artículos de primera necesidad; además se había abierto crédito en mercancías y en moneda convertible. Las sociedades de la Cruz Roja de algunos países también ayudaron directamente a Hungría.

Y, por último, una parte considerable de las contribuciones de algunas organizaciones religiosas fué enviada directamente a las filiales o a las congregaciones correspondientes de Hungría, y un sindicato internacional hizo envíos directos a los obreros húngaros.

c) PROGRAMAS INTERNACIONALES DE SOCORRO

Los recursos que se le proporcionaron al Comité Internacional de la Cruz Roja se distribuyeron en Hungría de la siguiente manera:

Asistencia prestada en forma tradicional

El CICR, siguiendo su tradicional programa de socorro, realizó la siguiente labor:

1) Distribución de leche en polvo y de aceite de hígado de bacalao en los centros que se ocupan de los niños de uno a seis años. Beneficiarios: 173.000 madres y niños, aproximadamente.

2) Distribución de los víveres necesarios para que en las escuelas se sirva una comida a los niños de seis a catorce años. Beneficiarios: 60.000 niños, aproximadamente.

3) Distribución de paquetes de socorro preparados en los almacenes que tiene el CICR en Budapest con artículos suministrados por las sociedades nacionales de la Cruz Roja y por los gobiernos donantes. Las personas a quienes se entregaron estos paquetes en Budapest y en las provincias fueron elegidas entre los grupos siguientes: personas cuyas viviendas habían sido destruidas o habían sufrido daños, familias que habían perdido sus medios de vida, familias numerosas, lisiados, enfermos y ancianos. En total, recibieron unas 150.000 personas dos paquetes por mes.

4) Distribución de suministros médicos, mantas y carbón entre los hospitales (de Budapest y de las provincias).

5) Entrega de grandes cantidades de medicamentos a la Cruz Roja Húngara para que los distribuyese entre quienes los necesitasen.

6) Distribución de ropas en los Centros de la Cruz Roja Húngara (de Budapest y de las provincias).

7) Entrega a la Cruz Roja Húngara de suministros médicos, productos farmacéuticos, instrumentos, equipo y productos textiles para los hospitales (de Budapest y de las provincias).

Para recibir los suministros de socorro en Viena y enviarlos a Hungría, cosa que al principio se hizo por carretera y luego por ferrocarril y por barco, y para fiscalizar su distribución en Hungría, fué preciso organizar importantes servicios. Bajo las órdenes de un director general se constituyeron dos delegaciones, una en Viena y otra en Budapest. A principios de 1957 estas delegaciones tenían 200 empleados, pero ese número fué disminuyendo paulatinamente y el 15 de junio de 1957 sólo era de 60. Al principio se estableció que la labor de socorro que el CICR había de realizar en Hungría terminaría el 30 de junio de 1957, pero el 27 de junio de este año el CICR y la Cruz Roja Húngara firmaron un nuevo acuerdo conforme al cual algunos de los programas suplementarios se prolongarán hasta el mes de septiembre de 1957.

Socorro general

Paralelamente a la tradicional labor de socorro del CICR se pusieron en práctica varios planes de socorro de carácter más general, cuya ejecución fiscalizó asimismo el Comité. Esta labor tenía por objeto corregir algunas de las insuficiencias en el abastecimiento de víveres al pueblo húngaro. Entre otras cosas se suministró harina, de venta en las panaderías, y semillas para las siembras de primavera, de venta individual para los agricultores. Esta harina y estas semillas fueron suministradas por los gobiernos para que se las distribuyese por conducto del CICR; parte de la semilla se distribuyó con ayuda del personal técnico que proporcionó la FAO.

El producto de la venta de la harina y la semilla se depositó en una cuenta especial de la Cruz Roja Húngara, para que de acuerdo con el CICR se destinase a los programas tradicionales de socorro de que se habló anteriormente y se utilizase para sufragar los gastos de distribución que hubiera tenido la Cruz Roja Húngara y para contribuir a dotar nuevamente de equipo a los hospitales y al programa de prótesis.

2. Asistencia a los refugiados húngaros

Conforme a lo dispuesto en las resoluciones 1006 (ES-II) y 1129 (XI) de la Asamblea General, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se encargó de coordinar la asistencia internacional a los refugiados húngaros. A continuación se describen las medidas adoptadas por el Alto Comisionado y por varias organizaciones.

a) AFLUENCIA DE REFUGIADOS

El 28 de octubre de 1956 empezaron a llegar a Austria refugiados procedentes de Hungría. El 4 de noviembre llegaron muchos más de lo acostumbrado y se calcula que el 5 de noviembre habían cruzado la frontera 10.000 refugiados húngaros. La afluencia llegó al máximo en la semana del 20 al 26 de noviembre, durante la cual llegaron a Austria más de 46.000. Para mediados de junio de 1957 habían entrado ya en Austria 174.250 refugiados. Desde fines de octubre de 1956 empezaron también a llegar a Yugoslavia refugiados húngaros, pero su número no fué considerable hasta la segunda semana de enero de 1957. Para mediados de junio de 1957 habían entrado ya en Yugoslavia 19.370 refugiados húngaros. En esa época calculó el Gobierno austriaco que todavía quedaban en Austria 29.500 refugiados húngaros. Los que permanecían aún en Yugoslavia, refugiados en campamentos o en centros, eran 9.950.

b) LLAMAMIENTOS INTERNACIONALES Y CÓMO SE RESPONDIÓ A ELLOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1129 (XI) de la Asamblea General, el Secretario General y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hicieron el 30 de noviembre de 1956 un común llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales para que acudieran en ayuda de los refugiados húngaros. El 11 de marzo de 1957 hicieron en común un nuevo llamamiento, haciendo uso de la autorización que para ello se les había concedido en la resolución citada y en la resolución 1039 (XI). En esos llamamientos se pedía a los gobiernos que prestasen asistencia financiera y proporcionasen oportunidades de reasentamiento.

La respuesta de las naciones a estos llamamientos ha sido alentadora. A mediados de junio de 1957 habían ofrecido o prestado asistencia, de una u otra forma, 46 países y muchas organizaciones privadas. Los gobiernos hicieron ofrecimientos y alrededor de 146.000 refugiados húngaros de los que se hallaban en Austria y 6.500 de los que se encontraban en Yugoslavia fueron admitidos en países de segundo asilo.

Los gobiernos, las organizaciones de carácter humanitario y distintos particulares contribuyeron considerablemente a la asistencia financiera y práctica. Dada la variedad de las formas de asistencia y los muchos conductos por los cuales se prestó, no es posible calcular el valor exacto ni siquiera aproximado de esa asistencia, pero asciende a mucho más de 50.000.000 de dólares.

Hasta el 1º de junio de 1957 se habían prometido o entregado al Secretario General o a la Oficina del Alto Comisionado contribuciones financieras por valor de 10.797.365,44 dólares, en cuya suma está incluido el valor de las contribuciones en especie. La asistencia bilateral dada o prometida directamente al Gobierno

de Austria por otros gobiernos y destinada principalmente al cuidado y manutención de las personas que se habían refugiado en ese país casi ascendió a 8.500.000 dólares. El Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas esperaba haber recibido de 28 países, a fines de 1957, alrededor de 15 millones de dólares para el transporte de refugiados, y varios gobiernos sufragaron el total de los gastos de transporte de los refugiados a sus territorios. Además se gastaron grandes sumas en la recepción e integración de los refugiados en los países de reasentamiento. No se conoce la suma global, pero sí se sabe que los gastos ya hechos o previstos para esos fines ascienden a muchos millones de dólares.

El socorro urgente prestado por las organizaciones de carácter humanitario tuvo muchísima importancia con respecto a la recepción de refugiados, especialmente en Austria. Además estas organizaciones prestaron también asistencia suplementaria a los refugiados que se hallaban en los campamentos y en alojamientos privados. Se suministraron víveres, ropas, mantas y medicamentos en grandes cantidades, calculándose su valor en varios millones de dólares.

c) COORDINACIÓN DEL SOCORRO DE URGENCIA

Por iniciativa del Alto Comisionado se formó en Ginebra un Comité de Coordinación del que formaban parte representantes del Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, de la Administración del Programa de los Estados Unidos de América para Ayudar a los Fugitivos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de otras organizaciones de carácter humanitario que trabajan en pro de los refugiados. La Oficina Auxiliar del Alto Comisionado, junto con el Ministro del Interior de Austria, coordinó el socorro de urgencia dentro de Austria. En Yugoslavia distribuye los suministros de socorro la Cruz Roja Yugoslava, bajo la dirección de un Comité de Coordinación especial que está presidido por el representante del Alto Comisionado y formado por representantes del Gobierno de Yugoslavia y de la Cruz Roja Yugoslava.

d) REASENTAMIENTO

El Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME) organizó el reasentamiento de los húngaros que se habían refugiado en Austria y Yugoslavia. El CIME calcula que las actuales cuotas de admisión permitirán que salgan de Austria antes del 31 de diciembre de 1957 todos los refugiados húngaros que allí están, salvo ocho o diez mil. Casi todos estos serán refugiados que desean quedarse en Austria o que no pueden reasentarse en otros países. Se calcula asimismo que 6.200 refugiados que deseaban emigrar de Yugoslavia se verán obligados a permanecer allí si no se les ofrecen otras oportunidades de reasentamiento.

e) REPATRIACIÓN

Acompañadas por un observador de la Oficina del Alto Comisionado, varias misiones de repatriación procedentes de Hungría visitaron los campamentos y los centros de refugiados de Austria y Yugoslavia para entrevistar a los refugiados y tratar de que volviesen a su patria. A mediados de junio de 1957 se repatriaron directamente de Austria 4.800 refugiados húngaros y de Yugoslavia 2.300. Además se ha sabido que más de 2.300 refugiados húngaros se han repatriado de países de segundo asilo.

El Alto Comisionado intercedió también ante ciertos gobiernos para facilitar el pago de los gastos de transporte de los refugiados que deseaban repatriarse pero que no disponían del dinero necesario para llegar a la frontera de su país natal.

f) CUIDADO Y MANUTENCIÓN

Los Gobiernos de Austria y de Yugoslavia se encargaron de prodigar los cuidados necesarios a los húngaros que se habían refugiado en sus respectivos países, así como de mantenerlos.

Sin embargo la Liga de Sociedades de la Cruz Roja contribuyó también notablemente proporcionando víveres, ropas y atención médica a los refugiados de determinados campamentos de Austria. Esta labor, que llevaron a cabo grupos de especialistas de las sociedades nacionales de la Cruz Roja, se fué extendiendo paulatinamente hasta llegar a todos los campamentos de más de 500 refugiados. Aunque la Oficina del Alto Comisionado prestó considerable ayuda financiera, la mayoría de los gastos fueron sufragados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por las sociedades de la Cruz Roja nacionales.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, junto con la Cruz Roja Yugoslava, suministraron alimentos básicos, ropas y medicina a más de 17.000 personas refugiadas en Yugoslavia. De la distribución de esos suministros se encargó la Cruz Roja Yugoslava.

g) BÚSQUEDA DE PERSONAS DE PARADERO DESCONOCIDO

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó en Ginebra un fichero central de refugiados húngaros, utilizando los datos enviados por las autoridades y por las sociedades de la Cruz Roja de los países de asilo. Gracias a este fichero se pudo establecer comunicación entre distintos refugiados separados por los acontecimientos, y en algunos casos se pudo reunir a familias que se habían dispersado.

h) NECESIDADES A LARGO PLAZO

Además de las necesidades básicas de alojamiento, cuidados y manutención de los refugiados húngaros había que atender a necesidades de otra clase. En particular se juzgó muy necesario evitar que los refugiados jóvenes separados de sus familias se viesan expuestos a los riesgos morales y sociales de la vida de campamento mientras no emigraban o se integraban a la vida del país. Se está tratando de solucionar este problema por medio de varios proyectos a largo plazo que están ejecutándose actualmente en Austria. Hay consejeros y trabajadores sociales que se dedican a cada caso en particular y que ayudan a los refugiados. Además se dan becas a los jóvenes y se está preparando un programa de construcción de viviendas.

El Comité Ejecutivo del FENUR, en su quinto período de sesiones, aprobó un programa de soluciones permanentes que supondrá un gasto de 3.500.000 dólares. Con este programa se piensa atender a las necesidades a largo plazo de los refugiados que se hallan en Austria y que esperan poder emigrar, especialmente las de los refugiados jóvenes, y facilitar la integración de los refugiados que deseen quedarse en Austria o que no pueden reasentarse en otros países.

i) ASISTENCIA QUE TODAVÍA SE NECESITA

La respuesta a los llamamientos hechos conjuntamente por el Secretario General y la Oficina del Alto Comisionado y la asistencia bilateral al Gobierno de Austria han resuelto gran parte de las necesidades financieras. El 15 de junio de 1957 se calculaba que se necesitaban todavía contribuciones financieras complementarias por un valor aproximado de 6 millones de dólares, especialmente para cubrir los gastos originados al Gobierno de Yugoslavia por los refugiados húngaros y para financiar el programa de soluciones permanentes para los refugiados húngaros que se está ejecutando en Austria. También es urgentemente necesario facilitar otras oportunidades de reasentamiento para 6.200 refugiados húngaros que se encuentran en Yugoslavia.

Capítulo III

OTROS ASUNTOS POLITICOS Y DE SEGURIDAD

1. La cuestión del desarme

a) EXAMEN, POR LA COMISIÓN DE DESARME, DEL TERCER INFORME DE SU SUBCOMISIÓN

La Comisión de Desarme celebró 11 sesiones del 3 al 16 de julio de 1956 y una el 20 de diciembre a fin de examinar el tercer informe de su Subcomisión, que le había sido presentado el 4 de mayo en cumplimiento de la resolución 914 (X) aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1955. La Comisión invitó el 12 de julio al representante de la India a que presentara la opinión de su Gobierno sobre las resoluciones 808 (IX) y 914 (X) de la Asamblea General.

El 20 de diciembre, la Comisión decidió por unanimidad tomar nota del tercer informe de su Subcomisión y transmitirlo a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, junto con las actas taquigráficas de las sesiones de la Comisión y documentos conexos.

b) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU UNDÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

La Primera Comisión, a la cual se asignara la cuestión del desarme en el undécimo período de sesiones, la estudió en nueve sesiones, celebradas del 14 al 25 de enero de 1957.

El 14 de enero los Estados Unidos de América presentaron un memorándum en el que se planteaban una serie de propuestas sobre desarme, a saber: 1) que se concertara un acuerdo en virtud del cual, según un sistema eficaz de inspección internacional, toda la producción futura de materias físis sería utilizada o acumulada exclusivamente para fines ajenos a las armas; 2) si se lograra poner en vigor un acuerdo semejante, que se negociara otro acuerdo sobre la limitación y, ulteriormente, la supresión total de todas las explosiones experimentales de armas nucleares; mientras tanto, se prepararían rápidamente métodos para comunicar y registrar por adelantado todos los experimentos nucleares y disponer la observación internacional con carácter limitado de tales experimentos; 3) que se adoptaran medidas para efectuar una primera etapa de reducción, bajo adecuada inspección aérea y terrestre, de los armamentos de tipo corriente y de las fuerzas armadas, utilizando como base de medida las cifras de 2.500.000 hombres para la URSS y los Estados Unidos y de 750.000 para Francia y el Reino Unido; 4) que se sometieran a la participación e inspección internacionales los experimentos con armas de largo alcance de control remoto, tales como "proyectiles intercontinentales", "satélites terrestres", "plataformas espaciales", etc., para garantizar que los futuros descubrimientos relativos al espacio ultraterrestre se aplicaran exclusivamente con fines pacíficos y científicos; y 5) que se implantaran progresivamente siste-

mas de inspección para precautelar la posibilidad de un gran ataque por sorpresa.

En la misma fecha, la URSS propuso que los Miembros de las Naciones Unidas tomaran como base para un acuerdo la declaración del Gobierno de la Unión Soviética de 17 de noviembre de 1956 sobre el desarme y la reducción de la tirantez internacional. En dicha declaración figuraban las siguientes propuestas: 1) reducir en primer lugar las fuerzas armadas de la URSS, de los Estados Unidos de América y de China a 2.500.000 hombres, y las fuerzas armadas del Reino Unido y de Francia a 750.000 hombres; a esta etapa seguiría otra de reducción a 1.000.000 ó 1.500.000 hombres y 650.000 hombres, respectivamente; todos los demás Estados no podrían mantener ejércitos que excedieran de 150.000 a 250.000 hombres; 2) reducir los armamentos proporcionalmente a la reducción en efectivo; 3) prohibir las armas nucleares, suspender su fabricación, prohibir su uso y destruir completamente las existencias de bombas atómicas y de hidrógeno, así como también, como primer paso, cesar inmediatamente los experimentos con armas nucleares; 4) reducir, durante 1957, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia estacionadas en el territorio de Alemania; 5) durante el mismo año, reducir considerablemente las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia estacionadas en los países de la OTAN y las fuerzas armadas de la URSS estacionadas en el territorio de los países partes en el Tratado de Varsovia; 6) liquidar en el curso de dos años las bases militares instaladas en el territorio de otros Estados; 7) reducir los gastos militares de los Estados en conformidad con la reducción de armamentos, la prohibición de las armas nucleares y la liquidación de las bases militares en el territorio de otros Estados; 8) instituir un sistema de control internacional estricto y efectivo para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de desarme, inclusive la utilización de la fotografía aérea dentro de una zona limitada de Europa hasta una distancia de 800 kilómetros al este y al oeste de la línea de demarcación entre las fuerzas armadas principales de los países de la OTAN y las de los países del Tratado de Varsovia, siempre que consientan los Estados interesados; 9) la firma de un pacto de no agresión entre los países de la OTAN y los Estados partes en el Tratado de Varsovia.

La URSS también presentó dos proyectos de resolución según los cuales la Asamblea General: 1) invitaría a los Estados que realizan experimentos con armas atómicas y de hidrógeno a que cesaran inmediatamente los experimentos con este tipo de armas, y 2) convocaría a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para tratar los problemas relativos al desarme.

Durante el debate, en el que tomaron parte 39 delegaciones, el representante del Reino Unido declaró que aunque el plan de Francia y del Reino Unido, modificado y ampliado el 19 de marzo de 1956, parecía aún proporcionar la mejor base hasta ahora concebida para un desarme completo, tanto de armas de tipo corriente como nucleares, el Reino Unido estudiaría con agrado todas las posibilidades para encontrar un medio más simple de iniciar el desarme. Convendría que la Subcomisión de la Comisión de Desarme se dedicase en 1957 al problema de los armamentos de tipo corriente en relación con la reducción de las fuerzas armadas, al problema de la fiscalización planteado en términos de ensayos de orden práctico y al problema de la limitación de los experimentos de armas atómicas y de hidrógeno. El representante de Francia declaró que si bien en principio su país apoyaba un acuerdo general de desarme, accedería a discutir medidas parciales, o aun aisladas, siempre que el valor de tales medidas, separadas de su contexto inicial, no fuese diferente del que tendrían en un plan general. Francia estaba dispuesta a considerar la limitación o el registro de las explosiones nucleares experimentales, pero no consentiría en una suspensión o prohibición de los experimentos si oportunamente no fuese acompañada de la prohibición de fabricar armas nucleares.

El 18 de enero, Canadá, Japón y Noruega presentaron un proyecto de resolución por el cual la Asamblea General: 1) recomendaba que los Estados interesados y en especial los que componían la Subcomisión de la Comisión de Desarme prestaran urgente atención a la cuestión de establecer, como una medida preliminar, un sistema de registro en las Naciones Unidas de las explosiones nucleares experimentales, y 2) pedía al Secretario General y al Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas que colaboraran con los Estados interesados en la aplicación de dicho sistema con el fin de mantener en observación constante la radiación total que ya existía en el mundo y la que se preveía para el futuro.

El 24 de enero la URSS propuso que se aumentara el número de miembros de la Comisión de Desarme agregando a Egipto, India, Polonia y un país latinoamericano, y que se agregaran a la Subcomisión la India y Polonia.

En la misma fecha, Australia, Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, Noruega, el Reino Unido, la URSS y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución por el cual la Asamblea General: 1) pedía a la Comisión de Desarme que convocara a una nueva reunión de su Subcomisión en fecha próxima; 2) recomendaba que la Comisión de Desarme y su Subcomisión prestaran pronta atención a las principales propuestas sobre desarme tanto en lo referente a armas de tipo corriente como nucleares, que se habían presentado a las Naciones Unidas, incluso el plan del Presidente Eisenhower de intercambio de informaciones militares y reconocimientos aéreos recíprocos, y el plan del Sr. Bulganin, Primer Ministro de la URSS, de establecimiento de puestos de control en centros estratégicos, las propuestas de los Gobiernos del Canadá, Japón y Noruega de 18 de enero de 1957, las propuestas generales de Francia y el Reino Unido de 11 de junio de 1954, 19 de marzo y 3 de mayo de 1956, las de los Estados Unidos de 14 de enero de 1957, las de la Unión Soviética de 10 de mayo de 1955, 27 de marzo, 12 de julio y 17 de noviembre de 1956, y 14 y 24 de enero de 1957,

las de la India de 25 de julio de 1956 y las de Yugoslavia de 10 de julio de 1956; 3) recomendaba además que la Subcomisión preparara un informe sobre la marcha de los trabajos a más tardar el 1º de agosto de 1957, e invitaba a la Comisión de Desarme a que estudiara la conveniencia de recomendar que se convocara oportunamente a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General o a una conferencia general de desarme.

El 25 de enero, Filipinas presentó una enmienda al proyecto de resolución del Canadá, Japón y Noruega, que fué aceptada por los autores.

En la misma fecha, la URSS retiró su proyecto de resolución, por el cual se convocaba un período extraordinario de sesiones de la Asamblea para tratar cuestiones de desarme, y convino en que no se pusieran a votación las otras dos propuestas presentadas por su delegación, puesto que serían remitidas a la Comisión de Desarme y a su Subcomisión. Por la misma razón, Canadá, Japón y Noruega convinieron en que tampoco se pusiera a votación su proyecto de resolución.

El proyecto de resolución de las 12 Potencias fué aprobado por unanimidad el 25 de enero, y el 14 de enero la Asamblea aprobó el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión, por 76 votos contra ninguno (resolución 1011 (XI)).

c) ACTUACIONES DE LA SUBCOMISIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARME

La Subcomisión se reunió en Londres el 18 de marzo y continuaba reunida cuando se redactó la presente memoria.

2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

a) CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA CON FINES PACÍFICOS

Por resolución 912 (X) de 3 de diciembre de 1955, la Asamblea General recomendó "que dentro de dos o tres años se celebre bajo los auspicios de las Naciones Unidas una segunda conferencia internacional para el intercambio de información técnica acerca de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos", y pidió al Secretario General que, con el asesoramiento del Comité Consultivo creado por la resolución 810 (IX) de 4 de diciembre de 1954 y en consulta con los organismos especializados competentes, fijara lugar y fecha adecuados para la celebración de la conferencia, extendiera las invitaciones del caso de conformidad con los párrafos 3 y 7 de la sección B de la resolución 810 (IX), preparara y distribuyera un programa, y proporcionara el personal y los servicios necesarios. En virtud de la misma resolución, se mantuvo en funciones a dicho Comité Consultivo a fin de que pudiera ayudar al Secretario General a poner en práctica las disposiciones de dicha resolución.

El Comité Consultivo se reunió en Nueva York el 20 de septiembre de 1956, y celebró un debate preliminar sobre las características de la segunda conferencia internacional para el intercambio de información técnica acerca de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y las disposiciones que habían de tomarse para la misma. En dicha reunión se expresaron opiniones con respecto al lugar, la fecha y el alcance de la conferencia y se celebraron consultas con

los representantes de los organismos especializados interesados, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial. Se convino en principio que la conferencia se celebrara el 1º de septiembre de 1958 o alrededor de esa fecha.

El Comité Consultivo se reunió nuevamente en Ginebra del 6 al 8 de mayo de 1957 y decidió que la segunda conferencia internacional sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos se celebrara en Ginebra del 1º al 13 de septiembre de 1958. En dicha decisión se tuvieron en cuenta, además de Ginebra, las invitaciones que para la celebración de la conferencia habían formulado las ciudades de Chicago y Amsterdam. El Comité elaboró un amplio programa para la conferencia y convino en el procedimiento para organizarla, basado en disposiciones análogas a las de la Conferencia de 1955. El Comité discutió la cuestión de las exposiciones y convino en que las que acompañaran a la Conferencia de 1958 estarían a cargo de los gobiernos participantes exclusivamente y que deberían circunscribirse a los temas científicos tratados en la Conferencia. La cuestión de las exposiciones será examinada nuevamente en una futura reunión del Comité.

b) EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

La Conferencia sobre el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se celebró en la Sede de las Naciones Unidas del 20 de septiembre al 26 de octubre de 1956. La Conferencia examinó un proyecto de estatuto redactado por los 12 gobiernos patrocinadores mencionados en el párrafo 3 de la parte II de la resolución 912 (X) de la Asamblea General. La Conferencia, a la cual fueron invitados los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados, contó con la asistencia de 81 Estados. Examinó una serie de enmiendas al proyecto de estatuto y aprobó por unanimidad su texto con las modificaciones introducidas en la Conferencia. Setenta Estados subscribieron el estatuto en el día de clausura de la Conferencia y otros 10 lo hicieron en el período de 90 días durante el cual estuvo abierto a la firma, alcanzando así a 80 el número total de signatarios. El estatuto entrará en vigor en cuanto 18 Estados, inclusive tres de los cinco siguientes: Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hayan depositado los instrumentos de ratificación correspondientes en poder del Gobierno de los Estados Unidos de América, designado depositario. Hasta el 15 de junio, habían depositado instrumentos de ratificación 10 gobiernos.

Por el anexo I del estatuto se creó una Comisión Preparatoria que se reunió por primera vez inmediatamente después de la clausura de la Conferencia. El 22 de diciembre de 1956 dicha Comisión designó Secretario Ejecutivo al Dr. Paul Jolles, de Suiza, y ha estado dedicada desde entonces a las labores preparatorias de la primera conferencia general del Organismo, que se celebrará en Viena el 1º de octubre de 1957. La Comisión Preparatoria ha celebrado sus sesiones en Nueva York, en la Sede, donde se le han suministrado el personal y los servicios necesarios para su trabajo.

Por resolución 1115 (XI) aprobada el 11 de enero de 1957, la Asamblea General autorizó al Comité Consultivo para la Utilización de la Energía Atómica con fines pacíficos a negociar con la Comisión Preparatoria de la OIEA un proyecto de acuerdo que regirá las relaciones entre las Naciones Unidas y la OIEA. El proyecto de acuerdo en que se convenga se lo someterá a la Asamblea y a la Conferencia General de la OIEA para que lo aprueben.

A fin de establecer desde un principio relaciones provechosas entre el nuevo Organismo, las Naciones Unidas y los organismos especializados, y de coordinar sus actividades, el Secretario General invitó al Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria a que asistiera a la reunión del Comité Administrativo de Coordinación que se celebró en Ginebra el 3 y 4 de mayo de 1957.

c) COMITÉ CIENTÍFICO PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATÓMICAS

El Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas celebró su segundo período de sesiones en la Sede, del 22 de octubre al 2 de noviembre de 1956. Sus grupos de trabajo examinaron los siguientes temas: 1) datos de orden físico; 2) recomendaciones sobre métodos de medición de los niveles de radioactividad natural, de la contaminación del medio ambiente y de otras fuentes artificiales de exposición a las radiaciones; 3) efectos genéticos de las radiaciones; 4) eliminación de los desechos radioactivos en los océanos, y 5) métodos de evaluación de los efectos biológicos de las pequeñas dosis de radiación. El Comité dispuso que su Secretario enviara a los gobiernos un nuevo pedido detallado de datos sobre dichos temas. El Comité elaboró también su primer informe a la Asamblea General sobre las actividades desarrolladas durante el año y dos declaraciones destinadas a las publicaciones médicas y científicas pidiendo la cooperación de la profesión médica, por conducto de los correspondientes organismos gubernamentales, a fin de evaluar los grados de exposición de las poblaciones a los rayos X, cuando se los emplea en la medicina.

El Comité pidió a la FAO, la OMM y la UNESCO que reunieran y le remitieran ciertos datos especiales, y a las Comisiones Internacionales de Protección Radiológica y de Unidades y Mediciones Radiológicas que emprendieran un estudio especial en el campo de la medición de la radiación.

El Comité celebró su tercer período de sesiones en Ginebra del 8 al 18 de abril de 1957. Sus grupos de trabajo examinaron los efectos genéticos de la radiación y los problemas técnicos de la medición y evaluación de la precipitación radioactiva. El Comité examinó el informe principal que presentará a la Asamblea General en 1958, y dispuso que se elaborara un proyecto de dicho informe para considerarlo en su próximo período de sesiones.

Tanto al segundo como al tercer período de sesiones del Comité asistieron representantes de la FAO, la OMS, la OMM y la UNESCO, organismos que cooperan estrechamente con el Comité y están preparando para el mismo estudios especiales. Concurrieron además al tercer período de sesiones representantes de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Comisión Preparatoria del OIEA.

El Comité ha recibido 89 informes técnicos provenientes de 27 Estados Miembros de las Naciones Uni-

das o miembros de los organismos especializados, así como también informes de la OMS, OMM y la FAO.

3. Denuncia formulada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS, y de sus actividades subversivas en contra de esos Estados

El 11 de diciembre de 1956, la URSS propuso la inclusión en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General de un tema titulado "Intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de las democracias populares y su actividad subversiva contra esos Estados". En un memorándum explicativo que acompañaba a dicha propuesta se acusaba a los Estados Unidos de actividades hostiles contra Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, la URSS y Checoslovaquia, destinadas a socavar el sistema político libremente elegido por los pueblos de dichos países. Luego de referirse a varias formas de supuesta intervención, el memorándum declaraba que dicha actividad hostil constituía una flagrante violación de la Carta y era incompatible con los principios en que los Estados Miembros de las Naciones Unidas debían basar sus relaciones con otros Estados. Por consiguiente, la URSS consideraba que la Organización debía tomar urgentes medidas para poner término a la actividad subversiva de los Estados Unidos de América y a su intervención, bajo cualquier forma, en los asuntos internos de otros Estados.

El 14 de diciembre la Asamblea decidió incluir en el programa, por recomendación de la Mesa, un tema titulado "Denuncia formulada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS y de sus actividades subversivas en contra de esos Estados", y asignó dicho tema a la Comisión Política Especial para su consideración e informe.

El 12 de febrero de 1957 el representante de la URSS remitió al Secretario General 18 documentos relativos a dicho tema, inclusive varias comunicaciones de la URSS a los Estados Unidos, relacionadas principalmente con reclamaciones por violación del espacio aéreo soviético por aviones de los Estados Unidos, algunos de los cuales se decía que habían lanzado agentes subversivos y panfletos, así como también algunos comunicados de prensa y una declaración sobre una conferencia de prensa soviética relativa al envío de globos al espacio aéreo soviético por organismos militares norteamericanos.

La Comisión Política Especial celebró seis sesiones, del 25 al 27 de febrero, durante las cuales escuchó exposiciones de los representantes de la URSS, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, la RSS de Ucrania, Rumania, la RSS de Bielorrusia y Polonia, quienes señalaron en detalle varios aspectos de la actividad hostil de los Estados Unidos en sus respectivos países, especialmente por medio de radioemisiones, el lanzamiento de panfletos subversivos desde aviones o globos y el adiestramiento e introducción en sus respectivos territorios de saboteadores y agitadores políticos.

En contestación, el representante de los Estados Unidos rechazó dichas aseveraciones y denunció a su vez que la URSS trataba simplemente de desviar la atención mundial de sus propios intentos de socavar los gobiernos de los países libres en todo el mundo y, sobre todo, de su intervención en los asuntos internos de Hungría. En lo pasado, se habían ya formulado cargos similares, y la Asamblea los había rechazado. La política de los Estados Unidos, además, no se inspiraba en ningún deseo de amenazar la seguridad soviética, sino en el objetivo de mantener la paz mundial.

Varios representantes apoyaron la posición de los Estados Unidos y muchos de ellos destacaron el contraste existente entre la política de los Estados Unidos y la que revelaba la URSS en su intervención militar en los asuntos internos de Hungría.

El 25 de febrero, la URSS presentó un proyecto de resolución por el cual la Asamblea: 1) tomando nota con alarma de que recientemente se había agravado la situación internacional y de que se habían empeorado las relaciones entre los Estados, siendo una de las causas de esa situación la actividad subversiva e intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de los países de democracia popular; 2) considerando que la Carta de las Naciones Unidas exigía a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que practicasen la tolerancia y convivieran en paz como buenos vecinos; 3) recordando que la Asamblea General había condenado en 1947 toda propaganda que estuviera destinada o que pudiera provocar o alentar cualquier amenaza a la paz; 4) teniendo en cuenta además que en 1954 la Asamblea había recomendado a los Estados Miembros la Convención de 1936 relativa al Empleo de la Radiodifusión en Beneficio de la Paz, en la que las partes contratantes "se comprometen mutuamente a prohibir y, llegado el caso, a detener sin pérdida de tiempo la radiodifusión, desde sus respectivos territorios, de cualquier emisión que, en detrimento de las buenas relaciones internacionales, pudiera incitar a la población de cualquier territorio a cometer actos incompatibles con el orden interno o con la seguridad del territorio de una Alta Parte Contratante"; 5) condenaría la actividad subversiva de los Estados Unidos de América contra otros Estados, por estar en contradicción con la Carta y ser incompatible con los principios sobre los cuales debían cimentarse las relaciones internacionales, y 6) invitaría al Gobierno de los Estados Unidos de América a cesar las actividades subversivas contra otros Estados, y la intervención bajo cualquier pretexto en sus asuntos internos, y a organizar sus relaciones con ellos a base de los principios de la Carta.

La Comisión rechazó el proyecto de resolución presentado por la URSS el 27 de febrero por una votación nominal de 53 contra 8 y 11 abstenciones, y en consecuencia informó a la Asamblea que no elevaría ninguna recomendación sobre este tema.

4. Cuestión de la reforma de la Carta para aumentar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de miembros del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia

El 19 de junio de 1956, 18 países latinoamericanos propusieron que se agregaran al programa del undécimo

cimo período de sesiones de la Asamblea General tres temas sobre la cuestión de la reforma de la Carta para aumentar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el número de miembros del Consejo Económico y Social y el número de jueces de la Corte Internacional de Justicia, por cuanto el reciente aumento en el número de Miembros de las Naciones Unidas hacía necesario adoptar dichas medidas.

La Asamblea examinó los tres temas conjuntamente en tres sesiones plenarias celebradas del 14 al 17 de diciembre. Se presentaron dos proyectos de resolución relativos al número de miembros del Consejo de Seguridad: el primero, el 12 de diciembre, por un grupo de países latinoamericanos y España; el segundo, el 18 de diciembre, por 16 Estados de Asia y Africa.

Según el primero de dichos proyectos de resolución, la Asamblea General modificaría los Artículos 23 y 27 de la Carta a fin de: 1) aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad a 13 agregando dos nuevos puestos para miembros no permanentes, y 2) aumentar a ocho el número de votos requeridos para la aprobación de una decisión por el Consejo. La Asamblea sometería dichas modificaciones a la ratificación de los Miembros de las Naciones Unidas.

Según el segundo proyecto de resolución, la Asamblea, considerando que toda reforma de la Carta requeriría la conciliación de importantes criterios diversos, lo cual podía efectuarse mejor después de realizar los estudios y debates necesarios, designaría una comisión compuesta de 15 miembros para que estudiara este asunto en todos sus aspectos e informara al respecto a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones.

El 26 de febrero de 1957, la Asamblea decidió aplazar el examen de los tres temas hasta el duodécimo período de sesiones.

5. Proyecto de convención sobre régimen de consultas

El 9 de octubre de 1956, la Argentina solicitó que se agregara al programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Proyecto de convención sobre régimen de consultas". En un memorándum explicativo, la delegación de dicho país declaraba que el propósito del proyecto de convención era establecer un mecanismo que formaría parte del sistema general de las Naciones Unidas, por intermedio del cual los Estados podrían iniciar consultas en un plano universal frente a la aparición de una situación susceptible de poner en peligro la paz o la seguridad internacionales; acompañaba a dicho memorándum un proyecto de texto de la convención propuesta.

El tema fué asignado a la Comisión Política Especial, que lo estudió en cuatro sesiones celebradas del 17 al 21 de diciembre. El 17 de diciembre la Argentina presentó un proyecto de resolución proponiendo la creación de una comisión especial compuesta de 15 miembros para que examinara el proyecto de convención presentado e informara a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones.

El 19 de diciembre el representante de la Argentina presentó otro proyecto, cuyos autores eran 12 Estados Miembros, por el cual la Asamblea, recordando su propia decisión de celebrar oportunamente una conferencia general para revisar la Carta, decidiría remitir

la propuesta del Gobierno de la Argentina y las actas pertinentes para que se las considerara en dicha conferencia general y recomendaría a los gobiernos de los Estados Miembros que transmitieran al Secretario General, antes de la reunión de la conferencia general, sus opiniones al respecto. El representante de la Argentina declaró que su propuesta se basaba en el principio de que las Naciones Unidas deberían conocer de todos los conflictos o controversias internacionales que constituyeran o pudieran constituir una amenaza para la paz. La comunidad de naciones carecía de un mecanismo que le permitiera organizar dichas consultas con la rapidez y la eficacia necesarias. Estas se habían celebrado a veces fuera de las Naciones Unidas, pero deberían encuadrarse siempre dentro del marco de la Organización y convertirse en uno de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales previstos en el párrafo 3 del Artículo 2 y en el Artículo 33 de la Carta.

Aunque algunos representantes opinaron que la propuesta argentina implicaba una ingerencia en las actividades de otros órganos de las Naciones Unidas y que la comunidad internacional poseía ya un mecanismo eficaz, otros representantes admitieron la importancia de su concepto básico. Sin embargo, en vista de la complejidad de las cuestiones jurídicas que la propuesta entrañaba, opinaban que debía estudiársela cuidadosamente dentro del contexto de la revisión de la Carta.

El 21 de diciembre, la Comisión Política Especial aprobó el proyecto de resolución de las 13 Potencias por 45 votos contra 8 y 8 abstenciones, y el 11 de enero de 1957 lo aprobó la Asamblea General, siguiendo la recomendación de la Comisión, por 58 votos contra 8 y 4 abstenciones (resolución 1014 (XI)).

6. Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas

a) ADMISIÓN DEL SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ, JAPÓN Y GHANA

Durante su undécimo período de sesiones, la Asamblea General, por recomendaciones aprobadas por unanimidad por el Consejo de Seguridad, admitió también por unanimidad como nuevos Estados Miembros de las Naciones Unidas al Sudán, Marruecos, Túnez, Japón y Ghana. Los tres Estados primeramente nombrados fueron admitidos el 12 de noviembre de 1956; Japón el 18 de diciembre de 1956, y Ghana el 8 de marzo de 1957.

El 12 de diciembre de 1956, por 4 votos contra 2 y 5 abstenciones, el Consejo de Seguridad rechazó un proyecto de resolución presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el cual el Consejo habría recomendado a la Asamblea que admitiera como nuevo Miembro de la Organización a la República Popular de Mongolia.

b) EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA, VIET-NAM, LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE VIET-NAM

El 15 de noviembre de 1956 la Asamblea General asignó el tema "Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas" a la Comisión Política Especial, que lo examinó en seis sesiones celebradas del 23 al 30 de enero de 1957.

El 23 de enero, 13 Estados presentaron dos proyectos de resolución, uno relativo a la República de Corea y el otro a Viet-Nam. Según estos proyectos la Asamblea General, observando que la República de Corea y Viet-Nam no habían sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas a causa de la oposición de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: 1) reiteraría su declaración en el sentido de que ambos Estados reunían plenamente las condiciones requeridas para ser admitidos como Miembros de las Naciones Unidas, y 2) pediría al Consejo de Seguridad que procediera a un nuevo examen de sus solicitudes a la luz de esa declaración de la Asamblea General.

En virtud de haber presentado la Argentina enmiendas a dichas propuestas, los autores de las mismas accedieron a agregar una disposición por la cual se solicitaba que el Consejo informara a la Asamblea General lo más pronto posible.

Se presentaron asimismo otros dos proyectos de resolución, el primero de los cuales, propuesto por la URSS, disponía que la Asamblea General pidiera al Consejo de Seguridad que, tomando en cuenta que la opinión general era favorable a que la composición de las Naciones Unidas fuera lo más universal posible, procediera a un nuevo examen de las solicitudes de admisión de la República Popular Democrática de Corea, de la República de Corea, de la República Democrática de Viet-Nam y de Viet-Nam del Sur a fin de recomendar la admisión simultánea de todos estos Estados como Miembros de las Naciones Unidas.

El segundo proyecto de resolución, presentado por la India y Siria, disponía que la Asamblea, recordando su resolución 918 (X) y considerando que era necesario que se siguiera examinando esta cuestión: 1) decidiera transmitir al Consejo de Seguridad las propuestas presentadas durante el actual período de sesiones de la Asamblea General, junto con las actas correspondientes, y 2) pidiera al Consejo de Seguridad que examinara todas las solicitudes de admisión de nuevos Miembros.

El 30 de enero, la Comisión Política Especial aprobó ambos proyectos de resolución de las 13 Potencias. El proyecto de resolución relativo a la República de Corea fué aprobado por 45 votos contra 8 y 22 abstenciones, y el relativo a Viet-Nam fué aprobado por 44 votos contra 8 y 23 abstenciones.

Luego que la Comisión hubo rechazado el proyecto de resolución de la URSS, los representantes de la India y de Siria declararon que en vista de las decisiones de la Comisión no insistirían en que se votara su proyecto conjunto de resolución.

El 28 de febrero de 1957 la Asamblea General aprobó los dos proyectos de resolución recomendados por la Comisión Política Especial. La resolución relativa a la República de Corea (resolución 1017 A (XI)) fué aprobada por 40 votos contra 8 y 16 abstenciones, y la resolución relativa a Viet-Nam (resolución 1017 B (XI)) fué aprobada por 40 votos contra 8 y 18 abstenciones.

7. La cuestión de Chipre

Por pedido de Grecia, transmitido por carta de 13 de marzo de 1956, se agregó al programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea General el tema titulado "Aplicación, bajo los auspicios

de las Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos en el caso de la población de la isla de Chipre".

Por carta de 12 de octubre de 1956, el Reino Unido solicitó la inclusión de un tema titulado "Apoyo prestado por Grecia al terrorismo en Chipre".

El 14 de noviembre de 1956, la Mesa de la Asamblea recomendó la inclusión de ambos temas bajo el título "La cuestión de Chipre: a) Aplicación bajo los auspicios de las Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos en el caso de la población de la isla de Chipre; b) Denuncia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre apoyo desde Grecia al terrorismo en Chipre".

Luego de un debate en sesión plenaria, durante el cual los representantes del Reino Unido y de Turquía declararon que el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta excluía la intervención de las Naciones Unidas en la cuestión de Chipre, como lo proponía Grecia, el tema fué incluido en el programa y asignado a la Primera Comisión para que lo estudiara e informara.

Dicha Comisión examinó este tema en 10 sesiones celebradas del 18 al 22 de febrero de 1957.

El 18 y el 19 de febrero, respectivamente, los representantes del Reino Unido y Grecia presentaron nueva documentación referente al punto b) del tema.

La Comisión examinó un proyecto de resolución sobre el punto a) del tema y dos sobre el punto b).

Según el primero de dichos proyectos, presentado por Grecia, la Asamblea General, reconociendo el derecho del pueblo de Chipre a la libre determinación en conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta; considerando que la situación en Chipre se había agravado considerablemente y que el establecimiento de condiciones de libertad y paz en la isla no sólo era del Mediterráneo Oriental; considerando además que interesaba también a todos los pueblos de la región del Mediterráneo Oriental, considerando además que una solución equitativa de la cuestión contribuiría a la paz y estabilidad en esa región, expresaría el deseo de que se diera al pueblo de Chipre oportunidad de decidir su propio futuro mediante el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

Según el segundo proyecto, también presentado por Grecia, la Asamblea, considerando que para estar en condiciones de evaluar adecuadamente la situación debía disponer de la información y los datos concretos más completos y objetivos que fuera posible en lo relativo a las denuncias británicas sobre apoyo desde Grecia al terrorismo en Chipre: 1) establecería un comité de investigación compuesto de representantes de siete Estados Miembros para que hiciera averiguaciones mediante observación directa, según fuera adecuado, e informara a la Asamblea General, en su próximo período de sesiones, sobre las conclusiones a que llegara, y 2) pediría a los Gobiernos del Reino Unido y de Grecia que ayudaran al Comité en su tarea y le prestaran toda su colaboración.

Conforme a un tercer proyecto de resolución, presentado por el Reino Unido, la Asamblea: 1) considerando que la Carta de las Naciones Unidas consagraba el principio de que los Estados debían abstenerse de intervenir en los asuntos internos de otros Estados, 2) tomando nota de la denuncia del Reino Unido de que durante un largo período se había prestado apoyo

desde Grecia a organizaciones terroristas de Chipre, en forma de armas, municiones y dinero, y 3) tomando nota de que, a pesar de repetidas representaciones del Gobierno del Reino Unido, Radio Atenas había transmitido regularmente programas especiales para Chipre en los que se incitaba a la insurrección y a la violencia: 4) invitaría al Gobierno de Grecia a tomar medidas efectivas para impedir que se apoyara y fomentara desde Grecia el terrorismo en Chipre.

El representante de Grecia declaró que desde 1945 los chipriotas habían solicitado la intervención del Gobierno de Grecia para lograr un arreglo amistoso de la cuestión. Sólo después de innumerables y vanos esfuerzos Grecia había decidido recurrir a las Naciones Unidas para evitar un verdadero desastre. Refutó la aseveración de que Grecia pretendía, por medio de un traspaso de soberanía, la satisfacción de una reclamación territorial griega. El Gobierno de Grecia no tomaba parte alguna en la guerra de independencia de Chipre, que, como lo reconocían los gobernantes británicos, se había producido sólo a causa de que el Gobierno del Reino Unido había exasperado a los chipriotas al negarse a reconocer su derecho a la libre determinación. El Reino Unido había intentado aniquilar el movimiento de liberación y era culpable de haber fomentado la animosidad de la minoría turca en Chipre contra la mayoría griega, así como también de explotar económicamente al pueblo. Los británicos deseaban mantener su control sobre Chipre como trampolín para actuar en el Oriente Medio.

El representante de Grecia agregó que el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta podía aplicarse solamente al territorio nacional de cada Estado; Chipre no formaba parte del territorio nacional británico. La práctica de la Asamblea General demostraba que el derecho de los pueblos a la libre determinación no podía excluirse de la esfera de aplicación del Artículo 10. Además, según el Artículo 73, los intereses de los pueblos coloniales estaban por encima de los de la Potencia Administradora. El Tratado de Lausana de 1923, que había traspasado al Reino Unido la soberanía sobre Chipre, no había excluido la aplicación del derecho a la libre determinación en el caso del pueblo de dicha isla.

El representante del Reino Unido recordó la amistad y las alianzas que unían a su país con Grecia y deploró la situación presente. El Gobierno de Grecia se proponía nada menos que la anexión de Chipre. Desde 1954, el movimiento terrorista en Chipre había sido apoyado y financiado por Grecia y estimulado por la propaganda griega, especialmente por Radio Atenas, en perjuicio del bienestar de la población chipriota y del mantenimiento de buenas relaciones entre Grecia, Turquía y el Reino Unido.

El Gobierno del Reino Unido había reconocido el principio de la libre determinación con respecto a Chipre, pero la aplicación de dicho principio, sin tener en cuenta las circunstancias, no podía sino conducir al caos y, sobre todo, su aplicación en cualquiera de los territorios de un Estado Miembro constituía claramente un asunto interno en el que las Naciones Unidas no tenían competencia. El Gobierno del Reino Unido había buscado por largo tiempo una solución satisfactoria para el problema de Chipre; había informado a los Gobiernos de Grecia y de Turquía que deseaba conceder a Chipre su autonomía a la brevedad posible, y alcanzar una solución definitiva basada en la libre

determinación de las comunidades griega y turca, tan pronto como lo permitieran las condiciones locales e internacionales. El Gobierno de Grecia se había opuesto sistemáticamente a dichos esfuerzos, incluso a las recientes propuestas que el Gobierno de Turquía había aceptado como base para la discusión.

El representante de Turquía declaró que nada justificaba la pretensión de Grecia de anexar Chipre. El interés de Turquía por la condición de Chipre era natural y lógico, puesto que residían en la isla más de 100.000 turcos y existían razones geográficas, históricas, políticas y contractuales que hacían que la condición jurídica de la isla tuviera interés vital para Turquía. El Tratado de Lausana había solucionado la cuestión de la condición jurídica de Chipre. Las actividades de los griegos eran incompatibles con las normas habituales de relaciones amistosas entre las naciones y con las obligaciones asumidas por Grecia según la Carta. Turquía había hecho todo lo posible para evitar que la cuestión llegara a la trágica situación actual. La Asamblea General podría contribuir valiosamente si pidiera a Grecia que no siguiera apoyando al terrorismo en Chipre y si animara a las partes directamente interesadas a que reanuden las negociaciones, pero absteniéndose de plantear soluciones concretas que, en realidad, sólo podrían lograrse mediante negociaciones entre los tres países interesados.

El 21 de febrero, Panamá presentó un cuarto proyecto de resolución por el cual la Asamblea, tomando nota de los distintos pareceres expuestos durante el debate y considerando la conveniencia de que se hiciera un estudio adicional de la cuestión, con miras a buscar una solución adecuada que reafirmara el ideal de las Naciones Unidas de asegurar la convivencia pacífica de los pueblos dentro de los principios consagrados en la Carta: 1) decidiría establecer un comité compuesto de los representantes de cinco Estados Miembros con el fin de estudiar en el terreno la situación reinante en Chipre e informar a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones acompañando las recomendaciones que juzgara convenientes, y 2) pediría a los Gobiernos del Reino Unido y de Grecia y Turquía que brindaran a dicho comité toda la ayuda necesaria.

El 22 de febrero la India presentó un quinto proyecto de resolución por el cual la Asamblea, considerando que la solución del problema de Chipre requería una atmósfera de paz y libertad de expresión, expresaría el sincero deseo de que se encontrara una solución pacífica, democrática y justa con arreglo a los propósitos y principios de la Carta, y la esperanza de que se reanudaran y continuaran las negociaciones con ese fin.

En la misma fecha, la Comisión decidió dar prioridad en la votación al proyecto de resolución de la India, el cual fué aprobado por 76 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

Los representantes de Grecia, el Reino Unido y Panamá anunciaron seguidamente que no insistirían en que se votasen los proyectos de resolución que habían presentado.

El 26 de febrero el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión fué aprobado por la Asamblea General por 57 votos contra ninguno y 1 abstención (resolución 1013 (XI)).

8. La cuestión de Argelia

a) SOLICITUD PARA QUE SE CONSIDERE LA SITUACIÓN DE ARGELIA: EXAMEN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD (JUNIO DE 1956)

El 13 de junio de 1956, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Libano, Libia, Pakistán, Siria, Tailandia y Yemen solicitaron que se convocara urgentemente al Consejo de Seguridad para que estudiara la grave situación de Argelia, conforme al párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta, recordando que en un memorándum explicativo presentado el 12 de abril de 1956 por 17 Estados Miembros se había señalado que la situación de Argelia constituía una amenaza para la paz y una flagrante violación de derechos humanos.

El Consejo examinó dicha solicitud en dos sesiones celebradas el 26 de junio de 1956. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas propuso que se aplazara indefinidamente la discusión de dicha cuestión. Varios representantes, incluso el de Francia, se opusieron a ello porque, en su opinión, el Consejo no podía aplazar la discusión de un tema que no figuraba aún en su programa. La propuesta de la URSS fué rechazada por 7 votos contra 1 y 3 abstenciones.

El representante de Francia se opuso a la inclusión en el programa de la cuestión de Argelia, afirmando que los asuntos de Argelia eran fundamentalmente de la jurisdicción interna de Francia. Francia ejercía en Argelia meramente uno de los atributos más corrientes de la soberanía nacional, es decir, el de mantener el orden público que se había visto perturbado por ciudadanos rebeldes. Cualquier intervención del Consejo en dicha cuestión constituiría una violación del párrafo 7 del Artículo 2 y del Artículo 34 de la Carta.

El representante de Irán sostuvo que la cuestión de Argelia no era de la jurisdicción interna de Francia ya que por su naturaleza podía suscitar una controversia internacional. Además, Argelia había sido un Estado independiente hasta 1830 y su soberanía, que en último término correspondía a su propio pueblo, era inalienable y no había desaparecido. La negativa a examinar la cuestión entrañaría una violación del párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una cuestión que menoscababa derechos humanos fundamentales y las relaciones internacionales no podía considerarse como asunto de la jurisdicción interna de un Estado. Las Naciones Unidas se habían declarado competentes para tratar varios casos similares.

El programa provisional fué rechazado por 7 votos contra 2 y 2 abstenciones.

Al final del debate, el Presidente declaró que estaba seguro de que todos los miembros compartían la esperanza y la confianza en que, conforme a la declaración expresa del Gobierno de Francia, se daría una solución justa y pacífica a este grave problema, a la brevedad posible.

b) DENUNCIA DE FRANCIA SOBRE LA AYUDA MILITAR PRESTADA POR EL GOBIERNO DE EGIPTO A LOS REBELDES DE ARGELIA: EXAMEN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD (OCTUBRE DE 1956)

El 25 de octubre de 1956, Francia pidió que se hiciera figurar en el programa de una próxima sesión del Consejo de Seguridad un tema titulado "Ayuda

militar prestada por el Gobierno de Egipto a los rebeldes de Argelia". En un memorándum adjunto se decía que el 16 de octubre un buque de guerra francés había detenido al barco "Athos" y había descubierto que transportaba clandestinamente a seis pasajeros y estaba cargado con armas y municiones. Conforme a las declaraciones de las personas que se encontraban a bordo, dicha nave había sido cargada en Alejandría en la noche del 3 al 4 de octubre, habiendo tomado parte en las operaciones de carga 150 militares egipcios en uniforme. Las armas debían ser entregadas al jefe de los *maquis* de Turenne, cerca de Tlemcen. La investigación conducida por las autoridades francesas demostraba que los pasajeros conducidos clandestinamente habían seguido cursos de adiestramiento militar en Egipto y que la nave había sido adquirida en julio de 1956 por agentes egipcios.

El 29 de octubre el Consejo examinó la comunicación francesa. El representante de Francia declaró que su Gobierno consideraba que estaba frente a un acto deliberado contra la soberanía francesa en violación de los preceptos fundamentales del derecho internacional, que prohibían la ingerencia en los asuntos internos de otro Estado.

El Consejo decidió, sin votación, incluir dicho tema en el programa. Se levantó seguidamente la sesión para que la delegación de Egipto pudiese prepararse. Se presentó información adicional el 4 de febrero de 1957. No se ha reanudado el debate durante el período de que trata la presente memoria.

c) LA CUESTIÓN DE ARGELIA: EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU UNDÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

El 1º de octubre de 1956, 15 Estados asiáticos y africanos solicitaron la inclusión de la cuestión de Argelia en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General. En un memorándum explicativo declaraban que, a pesar de la recomendación adversa de la Mesa en el décimo período de sesiones de la Asamblea General, ésta había inscrito el tema en su programa y lo había asignado a la Primera Comisión. Como prueba de su espíritu de conciliación, los Estados de Asia y Africa habían decidido, sin embargo, aceptar una propuesta de no volver a debatir la cuestión en dicho período de sesiones porque esperaban que Francia aprovechara esa oportunidad para negociar con los representantes del pueblo argelino un arreglo pacífico que salvaguardase sus legítimos derechos a la libre determinación y a la independencia. Por desgracia, dicha esperanza se vió frustrada. Francia aumentó sus fuerzas armadas en Argelia de 150.000 hombres a más de 450.000 y había intensificado sus actos de represión militar y de exterminación del pueblo argelino, en completa violación de la Convención sobre Genocidio, de la cual era signataria. En vista de que la continuación de tales actos de represión y genocidio constituían un peligro para la paz internacional, la Asamblea tenía el deber ineludible de poner término a ellos.

El 15 de noviembre de 1956 la Asamblea decidió incluir el tema en su programa y lo asignó a la Primera Comisión, que debatió la cuestión en 17 sesiones celebradas del 4 al 13 de febrero de 1957.

El representante de Francia declaró que su país no podría nunca admitir la competencia de las Naciones Unidas con respecto a un problema que, conforme al

derecho internacional, consideraba como un asunto esencialmente interno. Francia no se había opuesto a la inclusión de la cuestión de Argelia en el programa, principalmente porque deseaba contestar públicamente a las sistemáticas campañas calumniosas dirigidas contra Francia durante varios años. Deseaba asimismo destacar la intervención extranjera en la cuestión de Argelia; esta cuestión ya se habría solucionado si ciertas Potencias no hubieran mantenido vivo el conflicto mediante el suministro de armas a los rebeldes. La posición de Francia no estaba en contradicción con su negación de la competencia de la Asamblea General, conforme al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Muchos juristas expertos en derecho internacional convenían en que el principio de la jurisdicción interna exclusiva establecido en dicho Artículo determinaba *per se* una limitación general a las actividades de la Organización. Ninguna disposición de la Carta concedía a la Asamblea la facultad de formular recomendaciones con respecto al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por lo contrario, la intervención de las Naciones Unidas en una cuestión semejante no era compatible con el principio de la jurisdicción interna, porque tal intervención supondría una amenaza directa a la integridad territorial y la existencia misma de los Estados.

El establecimiento de los franceses en Argelia era el resultado de la ocupación legítima de un territorio en una época en que no se ejercía en él ninguna otra soberanía. Solamente Francia estaba calificada para decidir qué sistema político deseaba aplicar a Argelia, de conformidad con su propia Constitución.

El representante de Francia explicó los esfuerzos de su país para mejorar las condiciones de vida de la población argelina y destacó el progreso realizado en el orden económico, agrícola, social y sanitario, y las reformas administrativas que habían determinado que los habitantes indígenas se encargaran gradualmente de la dirección de los asuntos locales y argelinos.

Durante la rebelión de Argelia habían surgido dos grupos principales de rebeldes: el Frente de Liberación Nacional y el Movimiento Nacional Argelino. El primero había planeado la insurrección del 1º de noviembre de 1954, en relación directa con su comité de El Cairo. En cumplimiento de dicho plan habían sido asesinados entre el 1º de noviembre de 1954 y el 31 de diciembre de 1956, 5.354 civiles, incluso 4.149 musulmanes. El representante de Francia destacó que había un gran número de musulmanes franceses que no pertenecían a ningún movimiento y deseaban solamente vivir en paz.

El partido comunista argelino había participado activamente en la rebelión, y algunas Potencias extranjeras, especialmente Egipto, habían prestado apoyo efectivo en forma de propaganda, adiestramiento de terroristas y suministro de armamentos; además la rebelión había sido parcialmente financiada por la Liga de los Estados Arabes.

El Primer Ministro de Francia había esbozado las siguientes medidas para lograr una solución política liberal del problema de Argelia: una oferta incondicional de cesación del fuego, incluso entablando relaciones directas con los combatientes para establecer las condiciones; la celebración de elecciones libres, bajo la fiscalización rigurosa de ambas partes y el control de observadores de países que tuvieran tradiciones democráticas establecidas y a los cuales Francia estaba dispuesta a invitar; discusión con los representantes

electos sobre el futuro de Argelia. Los principios fundamentales para una solución eran la igualdad estricta de derechos para todos los habitantes, coexistencia de las comunidades francesa y musulmana, con el respeto consiguiente por sus derechos legítimos en la reorganización territorial y en la descentralización gubernativa necesaria, y definición de las características propias de Argelia pero manteniendo los nexos necesarios con la Francia metropolitana, incluso la retención por Francia de un poder permanente de arbitraje para prevenir la opresión de una de las comunidades por la otra.

Varios representantes opinaron que, conforme al párrafo 7 del Artículo 2 y otras disposiciones pertinentes de la Carta, la Asamblea General no podía discutir ninguna cuestión o aprobar ninguna resolución que constituyera una ingerencia en los asuntos internos de un Estado Miembro. Muchos Estados se habrían abstenido de ser Miembros de las Naciones Unidas si no hubiera existido tal disposición fundamental.

Por más de un siglo Argelia había sido en derecho parte integrante de Francia y su condición jurídica no había sido puesta en tela de juicio al crearse las Naciones Unidas en 1945. Como ningún principio de derecho internacional ni disposición alguna de la Carta autorizaban cambio alguno en la geografía política de un Estado, las Naciones Unidas no eran competentes para fallar en el caso.

Los representantes que sostenían la competencia de las Naciones Unidas para examinar la cuestión de Argelia expusieron que, durante la década anterior, 700.000.000 de personas de Asia y Africa se habían liberado de la dominación colonial de las Potencias occidentales y estaban en ejercicio de su soberanía nacional. Argelia seguía el mismo proceso de evolución del colonialismo hacia la libertad nacional. Las Naciones Unidas se habían creado para facilitar la evolución ordenada de los pueblos dependientes hacia su independencia. Argelia disfrutaba, antes de la ocupación francesa, de la condición de Estado soberano. No se había traspasado la soberanía a Francia. En ese sentido, las cuestiones de Argelia, de Marruecos y de Túnez eran casi idénticas. Argelia no había pasado a formar parte integrante del territorio de Francia ni de hecho ni de derecho, ni los argelinos habían llegado a ser ciudadanos franceses iguales a los demás ciudadanos de Francia. Argelia no era una colonia, ni un territorio bajo administración fiduciaria, ni tampoco parte de Francia, ni un mandato internacional, ni un protectorado, ni realmente miembro de una unión genuina. La situación de Francia con respecto a Argelia era más bien la de un país que trata de colonizar a otro. La situación de Francia en Argelia se fundaba solamente en la conquista.

Al firmar, conjuntamente con la URSS, el 19 de marzo de 1956, un comunicado que se refería, entre otras cosas, al arreglo de la cuestión de Argelia, Francia había reconocido, por lo menos tácitamente, que la cuestión de Argelia no podía considerarse como una cuestión que interesara a Francia exclusivamente. Las Naciones Unidas debían examinar la cuestión, no sólo porque los pueblos no autónomos tenían derecho a la independencia sino, también, porque la situación en Argelia constituía una amenaza a la paz mundial y a la libertad de las naciones.

En varios casos en que las Naciones Unidas habían considerado que una situación interna era suficiente-

mente seria, se habían declarado competentes, a pesar de la disposición del párrafo 7 del Artículo 2.

Contrariamente a las aseveraciones hechas por el representante de Francia, Argelia, como nación, se había desarrollado muy poco bajo el régimen colonial, en comparación con otros países. La política de Francia en Argelia había sido una mezcla de una política de pacificación — en realidad de guerra y represión — que había fracasado, una política de asimilación que incluía la destrucción de la cultura árabe-argelina, una política de fomento de los recursos de Argelia para beneficio de los franceses y empobrecimiento cultural, económico y social de los argelinos, y una política de mantenimiento de una minoría dirigente francesa en Argelia y de separación de este país de los demás países árabes.

El movimiento de liberación argelino se había iniciado al comienzo mismo de la ocupación francesa y se había convertido en un movimiento nacional gracias a la reorganización efectuada en los últimos 25 años. Había sido estimulado especialmente en 1945, cuando ocurrió una matanza de 45.000 argelinos en una semana. El movimiento encabezado por un Consejo Nacional de la Revolución Argelina no mostraba indicios de influencias extranjeras o comunistas: no existían disensiones entre sus diversos grupos y era realmente un movimiento nacional organizado que representaba al pueblo argelino en su totalidad. Dicho movimiento tenía un partido político, una fuerza de choque y un sistema de administración civil.

El único objetivo práctico y legítimo era asegurar a los argelinos una vida nacional libre y, al mismo tiempo, salvaguardar los legítimos intereses de los residentes europeos. Dicho objetivo podría obtenerse gradualmente adoptando las siguientes medidas: primero, reconocimiento por Francia del derecho de los argelinos a la libre determinación e independencia; segundo, constitución de un gobierno argelino provisional que entablaría negociaciones con Francia, con alguna especie de fiscalización internacional, y que convocaría una asamblea constituyente elegida por sufragio universal; tercero, y al mismo tiempo de la creación de un gobierno provisional, se ordenaría la cesación del fuego.

Procediendo con arreglo a la Carta, las Naciones Unidas podían tomar medidas útiles a tales propósitos, especialmente recomendando que se entablaran negociaciones y decidiendo sobre qué bases deberían éstas celebrarse.

Otros representantes sostenían la opinión de que la cuestión de Argelia debía resolverse mediante negociaciones directas entre Francia y Argelia, sin intervención de las Naciones Unidas. La Organización debía respetar la condición jurídica y política de un Estado al tiempo de entrar en las Naciones Unidas. Cualquier otro procedimiento haría que una organización creada con propósitos pacíficos se transformase en medio de discordia internacional y de guerra. La mejor manera de conciliar los dos principios de respeto por la constitución orgánica de los Estados Miembros y del derecho de los pueblos a la libre determinación sería confiar en que Francia, por su liberal y generosa tradición, habría de encontrar una solución constructiva sobre la base de la cooperación.

Por lo tanto, sería preferible no aprobar ninguna resolución; pero si la Comisión deseaba respetar las prácticas corrientes podría aprobar un texto en que expresara la esperanza de todas las delegaciones de

que la cuestión argelina se solucionara por medios pacíficos y democráticos.

Durante el debate, 18 países de Asia y África presentaron un proyecto de resolución según el cual la Asamblea General: 1) pediría a Francia que satisficiera el deseo del pueblo de Argelia de ejercer su derecho fundamental a la libre determinación; 2) invitaría a Francia y al pueblo de Argelia a entablar en seguida negociaciones encaminadas a la cesación de hostilidades y al arreglo pacífico de sus diferencias conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y 3) pediría al Secretario General que asistiera a las partes en la celebración de esas negociaciones y que informara a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones.

Filipinas, Japón y Tailandia presentaron otro proyecto de resolución por el cual la Asamblea expresaría la esperanza de que Francia y el pueblo de Argelia procurarían poner término al derramamiento de sangre y tratarían de lograr el arreglo pacífico de sus dificultades por medio de negociaciones adecuadas.

Según un tercer proyecto de resolución, presentado por Argentina, Brasil, Cuba, Italia, Perú y la República Dominicana, la Asamblea expresaría la esperanza de que se encontrara una solución pacífica y democrática de la cuestión.

El 13 de febrero de 1957 se sometieron a votación los mencionados proyectos de resolución. El proyecto de las 18 Potencias se votó párrafo por párrafo. En vista del rechazo de los dos primeros párrafos de la parte dispositiva, ambos por 34 votos contra 33, y 9 y 10 abstenciones, respectivamente, la Comisión suspendió la votación sobre el tercer párrafo de la parte dispositiva y sobre el proyecto de resolución en su totalidad. El proyecto de resolución de las seis Potencias fué aprobado por una votación nominal de 41 contra 33 y 3 abstenciones. El representante de Nueva Zelandia propuso que la Comisión no votara sobre el proyecto de resolución de las tres Potencias, pero su moción fué rechazada por una votación nominal de 43 contra 24 y 10 abstenciones. El proyecto de resolución de las tres Potencias fué aprobado por una votación nominal de 37 contra 27 y 13 abstenciones. Francia no participó en la votación de ninguno de los proyectos de resolución.

El 15 de febrero de 1957, en momentos en que la Asamblea General estaba abocada al examen del informe de la Primera Comisión, Argentina, Brasil, Cuba, Filipinas, Italia, Japón, Perú, República Dominicana y Tailandia presentaron un proyecto de resolución por el cual la Asamblea, habiendo oído las declaraciones de varias delegaciones y discutido la cuestión de Argelia y teniendo en cuenta la situación en Argelia, que estaba causando muchos sufrimientos y pérdidas de vidas humanas, expresaría la esperanza de que en un espíritu de cooperación se encontraría una solución pacífica, democrática y justa, por medios adecuados, en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Presidente de la Asamblea General declaró que el nuevo proyecto de resolución tenía carácter transaccional y estaba presentado por las mismas seis Potencias y tres Potencias que habían respectivamente sometido los dos proyectos de resolución recomendados por la Primera Comisión.

El proyecto de resolución fué aprobado por una votación nominal de 77 votos contra ninguno (resolución 1012 (XI)). Francia no participó en la votación.

9. Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana

Por resolución 919 (X), aprobada en su décimo período de sesiones, la Asamblea General encargó a los Gobiernos de la Unión Sudafricana, de la India y de Pakistán que emprendieran negociaciones con miras a llegar a un arreglo de esta cuestión y les invitó a que informaran, según fuere el caso, conjunta o separadamente, a la Asamblea en su undécimo período de sesiones.

Los Gobiernos de la India y de Pakistán explicaron en informes del 5 y el 11 de septiembre de 1956, respectivamente, que por conducto de sus representantes ante las Naciones Unidas habían invitado al Gobierno de la Unión Sudafricana, en la persona de su representante, a entablar dichas negociaciones. Dicho Gobierno, sin embargo, no había accedido a esa solicitud. En el interin, la situación de las personas de origen indio en la Unión Sudafricana se había agravado.

La Asamblea incluyó este tema en el programa de su décimo período de sesiones y lo asignó a la Comisión Política Especial para su consideración e informe.

La Comisión lo discutió en cuatro sesiones celebradas del 7 al 9 de enero de 1957, no estando presente la delegación sudafricana, que se había retirado de la Asamblea, por disposición de su Gobierno, en señal de protesta contra la decisión de incluir el tema en el programa.

Los representantes de la India y del Pakistán expresaron que lamentaban la ausencia de la delegación sudafricana y reiteraron su convencimiento de que correspondía a las Naciones Unidas lograr una solución pacífica de este problema. Sus respectivos Gobiernos estaban dispuestos a continuar todas las gestiones conducentes a tal solución. El representante de la India destacó que la posición de la comunidad india en la Unión Sudafricana seguía empeorando y pidió que se tomaran medidas eficaces para responder al desafío lanzado por el Gobierno de la Unión Sudafricana contra los derechos humanos en el continente africano.

El 8 de enero de 1957 presentaron un proyecto de resolución Argentina, Chile, El Salvador, México y Yugoslavia, a los cuales se unió luego Filipinas, según el cual la Asamblea General: 1) tomaría nota de que los Gobiernos de la India y de Pakistán habían reiterado que estaban dispuestos a proseguir negociaciones con el Gobierno de la Unión Sudafricana, en conformidad con los expresos deseos de las Naciones Unidas; 2) observaría con pesar que el Gobierno de la Unión Sudafricana no había aceptado hasta el momento la celebración de dichas negociaciones; 3) instaría a las partes interesadas a que entablaran negociaciones para facilitar la solución del problema y encarecería de manera especial al Gobierno de la Unión Sudafricana que cooperara para ello; 4) recordaría también su resolución 926 (X), en la que se establecía un programa unificado con el nombre de "Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos", y 5) invitaría a las partes a que informaran a la Asamblea General, cuando ello fuera apropiado, conjunta o separadamente.

Dicho proyecto de resolución fué aprobado en la Comisión Política Especial por 49 votos contra ninguno y 10 abstenciones, y el 30 de enero la Asamblea lo aprobó por 42 votos contra ninguno y 12 abstenciones (resolución 1015 (XI)).

10. La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política de segregación racial (*apartheid*) del Gobierno de la Unión Sudafricana

El 12 de septiembre de 1956, la India solicitó que se incluyera en el programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea General el tema titulado "La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política de segregación racial (*apartheid*) del Gobierno de la Unión Sudafricana". En el memorándum que acompañaba a la solicitud se declaraba que la India se encontraba en la obligación de comunicar a la Asamblea General que el Gobierno de la Unión Sudafricana no había prestado atención alguna al llamamiento hecho en la resolución 917 (X) del 6 de diciembre de 1955 y continuaba su política de discriminación y violación de los derechos humanos. En vista del consiguiente empeoramiento de la situación racial en la Unión Sudafricana, la India pedía a la Asamblea General que volviera a considerar esta cuestión para que los Miembros de las Naciones Unidas pudiesen expresar su opinión sobre ella y persuadir así a la Unión Sudafricana de que debía modificar su política.

A continuación el Pakistán e Indonesia informaron al Secretario General que sus Gobiernos también habían decidido patrocinar la propuesta.

El 15 de noviembre, la Asamblea resolvió, en votación nominal, por 61 votos contra 8 y 7 abstenciones, incluir el tema en su programa y lo remitió a la Comisión Política Especial, que lo estudió en seis reuniones celebradas entre el 11 y el 21 de enero de 1957. La delegación de la Unión Sudafricana, que se retiró por orden de su Gobierno como protesta por la inclusión del tema en el programa, no participó en el trabajo de la Comisión.

El 16 de enero fueron presentados dos proyectos de resolución, uno sometido por Ceilán, Grecia, Haití, Irak e Irán, y otro por Filipinas.

El 17 de enero, la Comisión convino en aplazar el debate durante unos cuantos días para permitir a los patrocinantes de ambas propuestas preparar un solo proyecto de resolución.

El 21 de enero el representante de Filipinas presentó en sustitución un proyecto de resolución patrocinado conjuntamente por las seis Potencias. Según ese proyecto, la Asamblea General, entre otras cosas: 1) tomando nota de que en su resolución 616 B (VII) se declaraba que toda política de los gobiernos que tuviera por objeto perpetuar o aumentar la discriminación era inconciliable con la Carta; 2) tomando nota además de que en sus resoluciones 395 (V), 511 (VII) y 616 A (VII) se había afirmado sucesivamente que una política de "segregación racial" (*apartheid*) estaba forzosamente fundada en doctrinas de discriminación racial; 3) convencida de que en una sociedad multirracial el mejor medio de conseguir la armonía y el respeto a los derechos humanos y a las libertades y el desarrollo pacífico de una comunidad unificada era una legislación y prácticas tendientes a mantener un orden legal que asegurase la igualdad de todas las personas ante la ley y la eliminación de toda discriminación por motivo de raza, credo o color; y 4) convencida, asimismo, de que para progresar hacia la solución de este problema era menester plantearlo en forma conciliatoria en conformidad con los prin-

cipios de la Carta: 5) deploraba que el Gobierno de la Unión Sudafricana no hubiera cumplido hasta ahora sus obligaciones derivadas de la Carta y continuara aplicando medidas discriminatorias que harían más difícil, en lo futuro, el cumplimiento de esas obligaciones; 6) afirmaba su convicción de que persistir en esa política discriminatoria era incompatible no solamente con la Carta, sino también con las fuerzas del progreso y de la cooperación internacional en la realización de los ideales de igualdad, libertad y justicia; 7) exhortaba al Gobierno de la Unión Sudafricana a reexaminar la probabilidad de modificar su posición y a revisar su política teniendo en cuenta sus obligaciones y responsabilidades derivadas de la Carta y los principios adoptados por otras sociedades multirraciales contemporáneas, así como los progresos logrados por ellas; 8) invitaba al Gobierno de la Unión Sudafricana a cooperar, especialmente con su presencia en las Naciones Unidas, en un enfoque constructivo de esta cuestión; y 9) pedía al Secretario General que oportunamente se comunicase con el Gobierno de la Unión Sudafricana a fin de dar cumplimiento a los fines de esta resolución.

Durante el debate, la mayoría de los oradores apoyó el proyecto de resolución y sostuvo que las Naciones Unidas eran competentes para tratar la cuestión. Varios oradores elogiaron el tono conciliatorio de la propuesta, pero algunos opinaron que no era suficientemente enérgica. Otros, aunque en general se oponían a la política de discriminación, creían que las Naciones Unidas no estaban autorizadas a intervenir en los asuntos internos de la Unión Sudafricana, fundándose en el principio de la jurisdicción interna de los Estados.

El proyecto de resolución de las seis Potencias fué aprobado por la Comisión por 55 votos contra 5 y 10 abstenciones, y el 30 de enero fué aprobado por la Asamblea General por 56 votos contra 5 y 12 abstenciones (resolución 1016 (XI)).

El 5 de febrero, el Secretario General remitió la resolución al Gobierno de la Unión Sudafricana, señalándola a su atención.

11. La cuestión India-Pakistán

a) COMUNICACIONES DIRIGIDAS POR EL PAKISTÁN AL CONSEJO DE SEGURIDAD

El 16 de noviembre de 1956, el Pakistán comunicó al Consejo de Seguridad que, según informaciones publicadas por la prensa, el 26 de enero de 1957 entraría en vigor la Constitución preparada por la Asamblea de Srinagar para el Estado de Jammu y Cachemira y, además, que la parte de la Constitución que incorpora dicho Estado a la India se aplicaría el 17 de noviembre de 1956. Esta medida anularía la resolución del Consejo del 30 de marzo de 1951 y las seguridades dadas en aquella época por el representante de la India y se opondría al objetivo del Consejo según el cual la incorporación del Estado a la India o al Pakistán se decidiría por plebiscito efectuado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Cualquier acción realizada por la India con la intención de incorporar el Estado a la India, constituiría una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas y repudiaría los acuerdos internacionales firmados por la India. Por lo tanto se debería pedir a dicho país que desistiese de semejante acción.

El 26 de noviembre, el Pakistán informó al Consejo que tenía confirmación de que la medida que según las informaciones de la prensa india se iba a adoptar el 17 de noviembre de 1956 por la así llamada "Asamblea Constituyente" de Srinagar, ya se había adoptado, y pidió al Presidente que solicitase una aclaración del Gobierno de la India. El 2 de enero de 1957, el Ministro de Relaciones Exteriores del Pakistán comunicó al Consejo de Seguridad que la India se había negado, bajo un pretexto u otro, a hacer honor a sus compromisos internacionales contraídos en virtud de las dos resoluciones aprobadas por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán el 13 de agosto de 1948 y el 5 de enero de 1949 y que, por lo tanto, el Pakistán se veía obligado a concluir que la continuación de las negociaciones directas entre los dos Gobiernos no ofrecía perspectivas de resolver la controversia. En el convencimiento de que la situación planteada requería una acción firme y oportuna del Consejo, solicitó una reunión en fecha próxima para considerar la cuestión de Cachemira.

b) EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD (ENERO-FEBRERO DE 1957)

El Consejo de Seguridad examinó la cuestión en 14 sesiones celebradas entre el 16 de enero y el 21 de febrero de 1957. El representante del Pakistán declaró, entre otras cosas, que la controversia entre su país y la India se refería, esencialmente, al derecho a la libre determinación del pueblo del Estado de Jammu y Cachemira. Alegó que hasta la celebración de un plebiscito, el Territorio no formaba parte ni de la India ni del Pakistán, a pesar de la situación de hecho creada por la ocupación por India de parte del Estado y de la autoridad de Cachemira Azad que prevalece sobre la parte restante. La India y el Pakistán estaban obligados por un compromiso internacional fundado en las dos resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, que fueron aceptadas por las partes. Ninguna parte del acuerdo, que constituye un todo inseparable, podía ser usada, repudiada o anulada unilateralmente.

El representante de la India, recapitulando la opinión de su Gobierno sobre la cuestión de Cachemira, dijo que desde el 1º de enero de 1948 éste se había fundado, entre otras, en las consideraciones siguientes: el Estado se había incorporado legalmente a la India, constituía una parte integrante de la Unión de la India, y la única autoridad que legalmente podría separarlo era el Parlamento soberano de la India; la integridad territorial del Estado era inviolable, Pakistán había cometido una agresión contra él y debía "desistir de la agresión"; la India mantenía sus compromisos originados en las resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, según las interpretaba y de acuerdo a las explicaciones y seguridades que le dió la Comisión de las Naciones Unidas en lo que se refiere a las disposiciones de las resoluciones; y en vista del cambio en las condiciones, que alteraba las circunstancias de las propuestas, la India no podía considerar que estas propuestas constituían un compromiso u obligación permanente.

El 24 de enero, el Consejo aprobó por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (URSS), un proyecto de resolución patrocinado por Australia, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América y el Reino Unido que, entre otras cosas, recordando las resoluciones del Consejo del 21 de abril de 1948, del 3 de junio de

1948, del 14 de marzo de 1950 y del 30 de marzo de 1951, así como las resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán del 13 de agosto de 1948 y del 5 de enero de 1949, declaraba que la convocación de una Asamblea Constituyente y cualquier medida que ésta pudiese adoptar o tratase de adoptar para determinar la forma y afiliación futuras del Estado de Jammu y Cachemira o cualquier acción emprendida en apoyo de esa medida de la Asamblea, no fijaría el destino del Estado de acuerdo con el principio enunciado en las resoluciones precedentes.

El 20 de febrero, fué presentado al Consejo un proyecto de resolución patrocinado por Australia, Cuba, los Estados Unidos y el Reino Unido por el cual el Consejo, entre otras cosas, preocupado por la falta de progreso en la solución de la controversia y considerando la importancia de la desmilitarización del Estado de Jammu y Cachemira en preparación de la celebración de un plebiscito, y tomando nota de la propuesta del Pakistán para el uso provisional de una fuerza de las Naciones Unidas a propósito de la desmilitarización y creyendo que su uso merece estudio, solicitaría del Presidente del Consejo de Seguridad (el representante de Suecia) que visitara el subcontinente para examinar junto con los Gobiernos de la India y el Pakistán las propuestas que, a su juicio, ayudarían a lograr la desmilitarización o facilitarían la solución de la controversia. Se le indicaba que tomase en consideración las anteriores resoluciones del Consejo y de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y que informase sobre ello al Consejo no después del 15 de abril. El proyecto de resolución recibió 9 votos a favor, 1 en contra (URSS) y 1 abstención (Suecia). Como el voto negativo fué el de un miembro permanente del Consejo, el proyecto no fué aprobado. Las enmiendas propuestas por Colombia y la URSS tampoco fueron aprobadas.

Después de que el proyecto de resolución de las cuatro Potencias fué rechazado, Australia, los Estados Unidos y el Reino Unido sometieron otro texto que se limitaba a recordar la resolución del Consejo del 24 de enero de 1957 y sus resoluciones anteriores, así como las de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y solicitaba del Presidente: 1) que examinara con los Gobiernos de la India y del Pakistán cualquier propuesta que, a su juicio, tuviese probabilidades de contribuir a la solución de la controversia, tomando en cuenta las precedentes resoluciones del Consejo y de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán; 2) que para lograr tal fin visitase el subcontinente; y 3) que informase de ello al Consejo a más tardar el 15 de abril. Se invitó a la India y al Pakistán a que cooperasen con el Presidente en esta tarea. El 21 de febrero, se aprobó el proyecto de resolución de las tres Potencias por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (URSS).

c) INFORME DEL SR. GUNNAR JARRING, PRESENTADO EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO APROBADA EL 21 DE FEBRERO DE 1957

El Sr. Gunnar Jarring, de Suecia, visitó la India y el Pakistán entre el 14 de marzo y el 11 de abril de 1957, y durante ese período se entrevistó varias veces con representantes de los dos Gobiernos. El 29 de abril presentó un informe sobre su misión.

El Sr. Jarring declaró que, en vista de las declaraciones formuladas por los representantes de la India y del Pakistán en el Consejo afirmando que sus

Gobiernos habían aceptado las resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán del 13 de agosto de 1948 y del 5 de junio de 1949, había tratado de averiguar cuáles eran los obstáculos a la aplicación de ambas resoluciones y de encontrar una solución a los problemas que han originado.

La resolución del 5 de enero de 1949 preveía la celebración de un plebiscito para decidir la incorporación del Estado de Jammu y Cachemira a la India o al Pakistán. Al estudiar esta cuestión, el Sr. Jarring conocía los graves problemas que podrían plantearse con respecto al plebiscito y a consecuencia del mismo. Según ello, hizo a ambos Gobiernos varias indicaciones que podrían resolver las dificultades o, por lo menos, mitigarlas considerablemente, pero estas sugerencias resultaron no ser aceptables para ninguna de las partes.

Según la India, dos factores impedían la aplicación de las dos resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán: 1) la parte I de la resolución del 13 de agosto de 1948 y, en especial, los párrafos B y E, no habían sido cumplidos por el Pakistán y, por ello, la India había considerado prematuro discutir las partes dispositivas II y III, o aplicar la resolución del 5 de enero de 1949; 2) con respecto a la parte II de la primera resolución, la India opinaba que correspondía al Consejo expresarse sobre lo que la India consideraba como una agresión cometida por el Pakistán contra ella y que correspondía igualmente al Pakistán "desistir de la agresión". La India alegó que los compromisos de la India conforme a la resolución no podrían ponerse en práctica antes de que el Consejo y el Pakistán hubiesen cumplido estos requisitos.

El Sr. Jarring explicó al Gobierno de la India que el Consejo había tomado debidamente en cuenta la reclamación original de la India y que no le correspondía decir si las resoluciones del Consejo sobre la cuestión habían sido o no adecuadas. Señaló que, prescindiendo de los méritos de la posición adoptada entonces por la India, no podía pasarse por alto el hecho de que la India había aceptado las dos resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán.

El Pakistán, por su parte, mantuvo que había aplicado totalmente y de buena fe la parte I de la resolución del 13 de agosto de 1948 y que había llegado el momento de poner en práctica la parte II.

En estas circunstancias, el Sr. Jarring decidió que convendría encarar primero la cuestión relativa a la aplicación de la parte I de la primera resolución de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán. Tenía la impresión de que la India concedía mucha importancia a la ausencia de "un ambiente favorable para realizar nuevas negociaciones" tal como se prevé en la sección E, y que había insistido repetidamente en que el *statu quo* militar previsto en la sección B no regía, debido a la política seguida por el Pakistán.

Para resolver la situación sin salida que se había planteado con respecto a la parte I, preguntó a ambos Gobiernos si estaban preparados a someter a arbitraje la cuestión relativa a la aplicación o falta de aplicación de la parte I. Lo que calificó de arbitraje tenía más bien el carácter de una comprobación de ciertos hechos puestos en duda. Si el árbitro o árbitros verificaran que la resolución se había aplicado en forma incompleta, el Sr. Jarring recomendaba que el árbitro o

árbitros fuesen autorizados para indicar las medidas que debían adoptarse para conseguir la aplicación total. Se preveía además que, después de cierto límite establecido de tiempo, determinarían si se habían seguido o no las indicaciones y se había logrado la aplicación.

El Sr. Jarring declaró que mientras el Pakistán, después de algunas vacilaciones, había aceptado en principio su sugestión, la India había opinado que el arbitraje, en la forma indicada por el Sr. Jarring, no era apropiado. La India explicó que no se oponía al principio del arbitraje, pero que juzgaba que, en este caso, no convenía aplicarlo al problema en discusión, porque semejante procedimiento era incompatible con la soberanía de Jammu y Cachemira y con los derechos y obligaciones de la India con respecto a ese Territorio. La India también temía que el arbitraje, aun sobre un punto aislado de las resoluciones, pudiese interpretarse como un reconocimiento del derecho del Pakistán a ser oído en la cuestión.

El Sr. Jarring informó que, después de haber estudiado tan profundamente el problema como lo había hecho, no podía dejar de tomar nota de la preocupación expresada con respecto a la variabilidad de los factores políticos, económicos y estratégicos relacionados con toda la cuestión de Cachemira, así como de los cambios ocurridos en las relaciones entre las Potencias del Asia occidental y meridional. Agregó que el Consejo debía saber, además, que la aplicación de los acuerdos internacionales de carácter especial, si no se realiza en forma suficientemente rápida, puede hacerse cada vez más difícil porque los problemas que hay que resolver tienden a cambiar.

El Sr. Jarring concluyó que, aunque no podía presentar al Consejo ninguna propuesta concreta que, a su juicio, tuviese en ese momento probabilidades de contribuir a una solución de la controversia, su examen de las circunstancias imperantes a la sazón indicaría que, a pesar de haber llegado a un punto muerto, ambas partes todavía deseaban encontrar una solución pacífica al problema y estaban dispuestas a cooperar a este fin con las Naciones Unidas.

Al 15 de junio de 1957, término del período comprendido en este informe anual, el Consejo de Seguridad no se había reunido nuevamente para considerar esta cuestión.

12. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)

La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental) fué considerada en el noveno y décimo períodos de sesiones de la Asamblea General. En este último período, la Asamblea, por resolución 915 (X) del 16 de diciembre de 1955, expresó la esperanza de que el problema sería resuelto por medios pacíficos y de que las negociaciones a que se hacía referencia en la declaración conjunta expedida por los Gobiernos de Indonesia y de los Países Bajos el 7 de diciembre de 1955 serían fructíferas. La declaración conjunta había anunciado un acuerdo para debatir, entre otros asuntos, "algunos problemas relativos a Nueva Guinea, entendiéndose que cada parte mantenía su posición relativa a la soberanía".

Las negociaciones entre los dos Gobiernos se realizaron en Ginebra entre diciembre de 1955 y febrero de 1956, pero no dieron ningún resultado positivo.

El 8 de octubre de 1956, 15 Estados asiáticos y africanos solicitaron que la cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental) se incluyera en el programa del undécimo período de sesiones. El 17 de octubre, el Irán se sumó a los patrocinantes. En un memorándum explicativo se declaraba que el fracaso de las negociaciones no solamente había empeorado las relaciones entre Indonesia y los Países Bajos, sino que afectaba desfavorablemente al conjunto de las relaciones internacionales con respecto a esa parte del mundo. Las Naciones Unidas tenían la responsabilidad y el deber de hacer nuevos esfuerzos para encontrar una solución pacífica a esta controversia.

El 15 de noviembre, la Asamblea General, por 47 votos contra 18 y 14 abstenciones, decidió incluir el tema en el programa y asignarlo a la Primera Comisión para su consideración e informe.

La Primera Comisión examinó el tema en seis sesiones celebradas entre el 23 y el 28 de febrero de 1957. El 23 de febrero fué presentado un proyecto de resolución patrocinado por 13 Potencias, por el cual la Asamblea pedía a su Presidente que nombrase una Comisión de Buenos Oficios formada por tres miembros para que ayudase a los Gobiernos de Indonesia y de los Países Bajos en sus negociaciones, con el fin de que se pudiese llegar a una solución justa y pacífica del problema, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta; y pedía a dicha Comisión que presentase un informe a la Asamblea General en su próximo período de sesiones.

El representante de Indonesia declaró que la continuación de la controversia, que según él era esencialmente un problema colonial, había empeorado las relaciones entre Indonesia y los Países Bajos. La controversia se planteó a consecuencia de la tentativa de los Países Bajos de negar al pueblo del Irián Occidental la libertad y la independencia conquistadas por el pueblo de Indonesia. El Irián Occidental, que forma parte de Indonesia, quedó temporalmente bajo la administración de los Países Bajos cuando se transfirió la soberanía a Indonesia en 1949, en el entendimiento de que su condición política se determinaría dentro de un año, mediante negociaciones. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por la insistencia de los Países Bajos en mantener el sistema colonial sobre el Territorio. Por lo tanto, Indonesia planteaba nuevamente el problema a las Naciones Unidas para que la Organización pudiese colaborar en la búsqueda de una solución pacífica.

El representante de los Países Bajos señaló que el debate de la cuestión en la Asamblea General no llevaría a un arreglo ni mejoraría las relaciones entre los Países Bajos e Indonesia, sino que sólo empeoraría la situación existente. Alegó que la reclamación indonesia a propósito de Nueva Guinea Occidental no tenía una base jurídica, especialmente desde que Indonesia, en abril de 1956, abrogó unilateralmente todos los Acuerdos de la Conferencia de Mesa Redonda de 1949, que habían servido anteriormente de base a la reclamación. El Gobierno de Indonesia había declarado claramente que la única solución aceptable era la transferencia inmediata a Indonesia de la soberanía sobre la Nueva Guinea Occidental. El Gobierno de los Países Bajos no podía iniciar negociaciones en esas condiciones. Estas negociaciones no solamente constituirían una violación a la garantía de integridad territorial de los Países Bajos, tal como se define en el Artículo 2 de la Carta, sino que serían contrarias

a las obligaciones de su Gobierno hacia el Territorio no Autónomo conforme al Artículo 73 de la Carta. Los Países Bajos han proclamado su intención de conceder a los habitantes, a su debido tiempo, el ejercicio del derecho de libre determinación y la única manera como se servirían los verdaderos intereses del pueblo del Territorio sería rechazando todas las reclamaciones de Indonesia sobre la transferencia de la soberanía, o sobre cualquier demanda de negociación o mediación.

El representante de Australia declaró que su Gobierno estaba directamente interesado en la Nueva Guinea Occidental, por ser vecina a un territorio bajo administración de Australia. Expuso que la cuestión no constituía una amenaza a la paz, sino que era únicamente una reclamación indonesia a propósito de un territorio sometido a la soberanía de los Países Bajos. La cuestión no podía ser considerada como el residuo de un problema colonial, ya que el pueblo de Nueva Guinea Occidental era completamente diferente de los pueblos de Indonesia, tanto en raza como en religión, idioma, apariencia y estructura social. Se opuso al proyecto de resolución fundándose en que significaría admitir que Indonesia podía reclamar basándose en el fondo de la cuestión, en el derecho y en los procedimientos pertinentes. Las negociaciones no podían progresar a base de una reclamación unilateral por una parte y de una negativa total por la otra. Las circunstancias, por lo tanto, no eran apropiadas para los procedimientos sugeridos en el proyecto de resolución.

La mayoría de los representantes que participaron en el debate opinaron que las Naciones Unidas debían prestar sus buenos oficios para colaborar en las negociaciones con el objeto de conseguir una solución justa y pacífica de la cuestión. Creían que la Organización tenía la responsabilidad de promover la solución pacífica de una controversia que perjudicaba las relaciones entre dos Estados Miembros. El proyecto de resolución, a su juicio, sólo proponía un procedimiento para entablar negociaciones y no prejulgaba sobre los méritos del caso, y lo apoyaban como un esfuerzo constructivo para lograr un arreglo amigable.

Otros representantes, oponiéndose al proyecto de resolución, juzgaron que la cuestión se vinculaba a la interpretación de un tratado y que la controversia jurídica debía ser decidida por medios judiciales. El establecimiento de una comisión de buenos oficios no podía lograr ningún resultado útil en vista de la actitud adoptada por las partes interesadas.

El 28 de febrero de 1957, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución de las trece Potencias, en votación nominal por 39 votos contra 25 y 9 abstenciones. Más tarde ese mismo día, la Asamblea General puso a votación nominal el proyecto de resolución en sesión plenaria. Recibió 40 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones y fué desechada, ya que no pudo obtener la mayoría requerida de dos tercios.

13. La cuestión de Corea

a) INFORME DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA UNIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE COREA E INFORME DEL MANDO UNIFICADO

Por resolución 910 (X) del 29 de octubre de 1955, la Asamblea General pidió al Secretario General que incluyera la cuestión de Corea en el programa provisional del undécimo período de sesiones.

La Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea (CNUURC) presentó un informe que abarcaba el período comprendido entre el 7 de septiembre de 1955 y el 24 de agosto de 1956. La Comisión informó que una subcomisión integrada por los representantes de Australia, Filipinas, Tailandia y Turquía había asumido el 1º de enero de 1956 las funciones y responsabilidades confiadas a la Comisión que, sin embargo, se había vuelto a convocar para examinar el informe anual a la Asamblea. Con respecto a sus funciones, la Comisión declaró que, de hecho, no había habido cambio de importancia en la situación desde su último informe en el que había declarado que todavía no podía contribuir a la realización de su objetivo fundamental, la unificación de Corea.

La Asamblea General consideró también un informe especial del Mando Unificado, de fecha 15 de abril de 1956, sobre la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en Corea. En él se exponía que, después de consultas celebradas entre las 16 naciones que aportaron fuerzas militares a la parte de las Naciones Unidas en el conflicto de Corea, el Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas, a causa del incumplimiento de las instrucciones del Acuerdo de Armisticio sobre refuerzos, informes y vigilancia por la parte comunista y la obstrucción a las tareas de la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio, por la parte comunista y por los miembros checoslovacos y polacos de la Comisión, había suspendido provisionalmente, durante el tiempo que la parte comunista continuara sin cumplirlas, la observancia por su parte de las disposiciones del Acuerdo de Armisticio que rigen el funcionamiento de la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en el sector que está bajo su autoridad. Al 11 de junio de 1956, la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio había retirado a la Zona Desmilitarizada sus grupos de inspección de todos los puntos de entrada del norte y del sur.

La cuestión de Corea fué remitida a la Primera Comisión, que estudió el tema durante siete sesiones celebradas entre el 3 y el 8 de enero de 1957.

El 3 de enero, los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución en el que se disponía que la Primera Comisión invitase a un representante de la República de Corea para que participara, sin derecho a voto, en el debate. El representante de la India presentó verbalmente una enmienda a este proyecto por la que se decidía enviar invitaciones a los representantes tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. La enmienda fué rechazada por 40 votos contra 20 y 11 abstenciones, y el proyecto de resolución fué aprobado por 51 votos contra 10 y 12 abstenciones.

Durante el debate general, los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución en el que se disponía que la Asamblea General, advirtiendo que el Acuerdo de Armisticio del 27 de julio de 1953 permanecía en vigor: 1) reiteraba que los objetivos de las Naciones Unidas consistían en lograr, por medios pacíficos, el establecimiento de una Corea unida, independiente y democrática, con una forma representativa de Gobierno y el restablecimiento total de la paz y la seguridad internacionales en la región; 2) instaba a que se siguieran haciendo esfuerzos para lograr di-

chos objetivos de conformidad con los principios fundamentales de unificación expuestos por las naciones que participaron en la Conferencia de Ginebra en 1954 en nombre de las Naciones Unidas y reiterados por la Asamblea General en las resoluciones 811 (IX) y 910 (X); y 3) invitaba a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y la Rehabilitación de Corea a que prosiguiera su labor con arreglo a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, a que observara las elecciones en todo el territorio de Corea e informara al respecto, e invitaba también a todos los Estados y a todas las autoridades a que facilitaran a la Comisión el cumplimiento de esta función.

El representante de los Estados Unidos declaró que los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para lograr la unificación política de Corea habían fracasado porque la parte comunista todavía rechazaba los dos principios fundamentales para un arreglo en Corea, enunciados en la Conferencia de Ginebra de 1954 y reiterados en dos oportunidades por la Asamblea General. En lugar de ello, había propuesto varias fórmulas para la unificación que habrían asegurado al régimen de Corea del Norte el derecho de veto con respecto a la formación de un gobierno unificado que no estuviese bajo la dominación comunista. Las disposiciones sobre refuerzos habían sido flagrantemente violadas por los comunistas, al introducir, sin explicación alguna, cerca de 750 aviones de combate en Corea del Norte, donde no había ninguno cuando se firmó el Acuerdo. La actitud que el Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas se vió obligado a adoptar sobre el problema de la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en Corea, tan estrechamente relacionado con el anterior, fué comunicada a las Naciones Unidas el 15 de agosto.

Muchos de los que apoyaron el proyecto de resolución de los Estados Unidos expresaron su preocupación por el incumplimiento de los objetivos de la Organización, ya que las autoridades de Corea del Norte no mostraban deseo alguno de aceptar el principio de realizar elecciones auténticamente libres bajo la fiscalización de las Naciones Unidas. Algunos Miembros también previnieron contra propuestas de transacción en pro de la unificación, que tuviesen por objeto extender el dominio comunista en Corea.

Algunos juzgaron que si bien las Naciones Unidas debían insistir en ciertos principios fundamentales para la unificación, no necesitaban mantener tanta rigidez en cuanto a los métodos para conseguirla, ya que no podían imponer un arreglo y que las propuestas de Ginebra no podían ser consideradas como un ultimátum final.

El representante de la República de Corea expresó su gratitud por los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para conseguir la unificación y la rehabilitación de Corea, objetivos no logrados debido a que los comunistas chinos y de Corea del Norte desafiaban la autoridad de la Organización en Corea. El desequilibrio en las fuerzas como resultado del desarrollo militar comunista en Corea del Norte ponía en peligro la propia existencia de la República de Corea. La suspensión de las operaciones de la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en Corea no bastaba para corregir la situación. Debían movilizarse todos los medios posibles — morales, políticos, económicos y de otra naturaleza — para obligar a los comunistas a aceptar los principios de las Naciones Unidas en la cuestión de Corea. Pro-

puso, además de la anulación del Acuerdo de Armisticio con el objeto de dar libertad a Corea del Sur y al Mando Unificado para adoptar convenientes medidas para la defensa, la inmediata supresión de la línea de demarcación del Armisticio y el retiro incondicional de las fuerzas invasoras procedentes de la China comunista, así como la realización de elecciones auténticamente libres en Corea del Norte, bajo la vigilancia de las Naciones Unidas, con el objeto de reunirla con la parte sur bajo la Constitución de la República de Corea.

Varios representantes criticaron como poco conforme con la realidad cualquier discusión de la cuestión de Corea en ausencia de un representante de la República Popular Democrática de Corea. Se opusieron al proyecto de resolución de los Estados Unidos porque no tomaba en cuenta la necesidad de un acuerdo entre las dos partes. La Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea debía ser disuelta. La cuestión de Corea podía ser resuelta pacíficamente por los propios pueblos de Corea y se vería facilitada por el establecimiento de relaciones culturales y económicas como las sugeridas vanamente en varias oportunidades por la República Popular. El representante de Polonia, en especial, llamó la atención sobre la grave violación del Acuerdo de Armisticio representada por las restricciones impuestas unilateralmente por el Mando Unificado a la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en Corea. Negó que los representantes de Polonia y de Checoslovaquia en la Comisión de Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio en Corea hubiesen entorpecido la labor de ésta.

Un representante consideró que el proyecto de resolución de los Estados Unidos no tenía probabilidades de lograr el objetivo deseado. Limitaba el principio de las elecciones libres en Corea al método particular incluido en la declaración final de la Conferencia de Ginebra, a saber, que las elecciones deberían realizarse bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Para que las Naciones Unidas pudiesen desempeñar su labor de unificación por medios pacíficos, era necesario establecer negociaciones directas entre las dos partes.

El 11 de enero, la Asamblea General aprobó por 57 votos contra 8 y 9 abstenciones (resolución 1010 A (XI)) el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión.

b) EL PROBLEMA DE LOS EX PRISIONEROS DE LA GUERRA DE COREA

El 5 de octubre de 1956, el representante de la India remitió el informe del Gobierno de la India sobre el problema de los ex prisioneros de la guerra de Corea, pedido por la Asamblea General en su resolución 910 B (X) del 29 de noviembre de 1955.

El 7 de enero de 1957, el representante de El Salvador presentó en la Primera Comisión un proyecto de resolución patrocinado por Ecuador, El Salvador y Venezuela que, después de ser modificado a instancias del representante de Ceilán, disponía que la Asamblea General expresara su reconocimiento a los Gobiernos de la India, la Argentina y el Brasil por su importante cooperación en la solución del problema de los ex prisioneros de la guerra de Corea, y manifestara su esperanza de que los ex prisioneros que aún permanecían en la India serían reasentados en breve, gracias a la cooperación de los Estados Miembros.

El representante de la India describió las condiciones en que se encontraban los 88 ex prisioneros. Dos habían sido repatriados a China y seis a Corea del Norte; 55 habían sido enviados al Brasil y nueve a la Argentina, conforme a sus deseos. En la India permanecían 16 que deseaban ir a México, a la Argentina o quedarse en el país. Pidió al Secretario General que continuase el debate sobre el tema a fin de que no se produjesen nuevas demoras.

El proyecto de resolución fué aprobado por la Primera Comisión el 8 de enero por 69 votos contra ninguno y 9 abstenciones y fué aprobado por la Asamblea General el 11 de enero por 60 votos contra ninguno y 10 abstenciones (resolución 1010 B (XI)).

c) CEMENTERIO EN CONMEMORACIÓN DE LOS CAÍDOS AL SERVICIO DE LAS NACIONES UNIDAS EN COREA

El 15 de diciembre de 1955, la Asamblea aprobó un proyecto de resolución patrocinado por los 14 Estados Miembros cuyas fuerzas habían combatido bajo el mando de las Naciones Unidas en Corea (resolución 977 (X)).

Conforme a esta resolución, la Asamblea decidió instituir y conservar, en homenaje a los muertos, el cementerio de Tanggok, cerca de Pusán, donde se encuentran las tumbas de unos 2.000 hombres que combatieron bajo el Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas, como Cementerio en conmemoración de los caídos al servicio de las Naciones Unidas en Corea. Pedía al Secretario General que, con el asesoramiento de un Comité compuesto de representantes de aquellos países que todavía tuvieran nacionales enterrados en el cementerio, procediera a negociar un convenio con la República de Corea a fin de obtener el uso permanente del lugar donde se hallaba el cementerio y a adoptar todas las disposiciones necesarias para su institución y conservación y lo autorizaba a consignar en el presupuesto de las Naciones Unidas el crédito necesario para este fin.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, en agosto de 1955, comunicó al Secretario General que su Gobierno había decidido ofrecer el terreno del cementerio de Tanggok a las Naciones Unidas como un homenaje a los hombres de las Naciones Unidas que habían caído en Corea. A consecuencia de la aprobación de la resolución 977 (X), el Secretario General preparó, para las negociaciones con la República de Corea, el texto de un proyecto de acuerdo para la institución y conservación del Cementerio conmemorativo. El texto proyectado, después de ser examinado en reuniones celebradas el 22 de julio y el 1º de agosto de 1956 por el comité de asesoramiento establecido conforme a la resolución, fué comunicado al Gobierno de la República, solicitando que ésta hiciera las observaciones oportunas. Se han sugerido ciertas enmiendas y, en el momento de redactar el presente informe, continuaban las negociaciones.

d) SOCORRO Y REHABILITACIÓN DE COREA

Informe del Administrador General del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

El Administrador General presentó a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones un informe que abarcaba el período comprendido entre el 1º de julio de 1955 y el 30 de junio de 1956, en el que declaraba que el Organismo de las Naciones Unidas

para la Reconstrucción de Corea había realizado excelentes progresos en el cumplimiento de su misión de colaborar con el pueblo de Corea para reparar la devastación causada por la agresión. El ritmo de las operaciones se había acelerado aún más durante el año y las actividades habían llegado a su nivel más alto, en el que continuarían sin disminuir hasta que se hubiesen cumplido los programas del Organismo. Las operaciones se realizaban conforme al deseo expresado por la Asamblea en su resolución 920 (X) de que los programas ya aprobados fueran llevados a la práctica sin dilación, en la máxima medida que permitieran los recursos disponibles.

Examen de la cuestión en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General remitió el informe del Administrador General a la Segunda Comisión, que lo examinó en una sesión celebrada el 21 de noviembre de 1956. La Comisión estudió también un proyecto de resolución auspiciado por Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América y el Reino Unido, en el que se proponía a la Asamblea que: 1) felicitase al Administrador General por los excelentes progresos alcanzados por el Organismo en el cumplimiento de su misión de ayuda al pueblo de Corea para aliviar los sufrimientos y reparar la devastación producida por la agresión; 2) felicitase al Administrador General por los progresos que había logrado en la realización del deseo expresado por la Asamblea General en su resolución 920 (X) de que los programas aprobados del Organismo fuesen rápidamente ejecutados con toda la amplitud que permitieran los fondos de que se disponía; y 3) expresase su reconocimiento por la valiosa y continua asistencia prestada al Organismo por los organismos especializados de las Naciones Unidas y por organizaciones voluntarias no gubernamentales.

El Administrador General informó a la Comisión que el Organismo había terminado, o casi terminado, sus programas destinados al fomento de riegos, silvicultura, energía, transporte y comunicaciones, y de ayuda a las organizaciones voluntarias, y que la mayoría de los proyectos restantes se terminarían durante el año civil de 1957. Cada proyecto terminado constituía prueba concreta del interés de las Naciones Unidas en la rehabilitación de la economía de Corea y en el progreso del bienestar del pueblo coreano. Sin embargo, la República de Corea tiene todavía muchos problemas económicos y necesita importaciones en gran escala para el desarrollo de una economía viable. Aunque la inflación ha dado señales de disminuir, continúa representando una grave amenaza. A pesar de ello, el efecto acumulativo de la ayuda de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos era ahora visible. Junto con los esfuerzos vigorosos y decididos del Gobierno y del pueblo de Corea, dicha ayuda ha producido mayor grado de estabilidad económica que en ninguna otra época desde 1951. Las Naciones Unidas y los gobiernos que con ellas han contribuido bien pueden estar orgullosos y satisfechos de los extensos y benéficos efectos del programa del ONURC sobre la economía de Corea en general.

Para terminar, el Administrador General rindió homenaje a la Asamblea General, a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea y al Comité Asesor del ONURC por el apoyo prestado en el cumplimiento de tan difícil tarea.

Al elogiar el trabajo del Organismo, los patrocinantes del proyecto de resolución de las Cinco Potencias señalaron que el programa del ONURC constituía un ejemplo excelente de los resultados que podía lograr la cooperación internacional y probaba que las Naciones Unidas habían sido capaces no solamente de conducir con éxito una acción militar colectiva sino también de llevar a cabo un esfuerzo de reconstrucción en gran escala. También se llamó la atención sobre la importancia del apoyo prestado por la administración de Corea y se expresó admiración por el pueblo coreano, que no solamente había tenido el valor de luchar contra el agresor sino que había demostrado también la decisión de reconstruir su país devastado por la guerra.

El representante de la URSS, al señalar que el Administrador General había informado que se habían logrado ciertos progresos, declaró que la situación en Corea del Sur era todavía difícil. Al describir los progresos conseguidos en Corea del Norte, para los cuales había suministrado asistencia la URSS, declaró que para ambas partes del país sería provechoso establecer relaciones económicas que prepararían el camino para la unificación política. Las Naciones Unidas deberían facilitar un acercamiento económico entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los representantes de Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania comunicaron también que sus países habían prestado asistencia material y técnica a Corea del Norte.

El proyecto de resolución, después de ser aprobado por la Segunda Comisión el 21 de noviembre, fué adoptado por la Asamblea General el 7 de diciembre de 1957, por 54 votos contra ninguno y 13 abstenciones (resolución 1020 (XI)).

Programa del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

Los trabajos de ejecución de los programas, que se habían desarrollado con máxima actividad durante el ejercicio económico de 1955-1956, continuaron realizándose con el mismo ritmo extraordinario durante el año que terminó el 15 de junio de 1957, y como resultado, al concluir el período, virtualmente se había dado término a los programas aprobados del Organismo. Para esa fecha, se habían asignado aproximadamente 142 millones de dólares a los programas, del total de 147 millones de dólares disponibles para el Organismo. El remanente constituía una reserva mínima en caso de que se pudiese necesitar para la conclusión de los proyectos, la terminación de las actividades del Organismo y para contingencias en general. Las actividades habían terminado en aproximadamente 3.812 de las 4.524 localidades donde se desarrollaban proyectos para los cuales el ONURC había suministrado ayuda material o técnica. Las entregas de maquinaria, suministros y equipo, y productos básicos para la venta facilitados para respaldo de la economía y los proyectos de inversión del Organismo totalizaron 669.000 toneladas, por valor de 90.600.000 dólares. El programa de asistencia técnica representó otros 14.200.000 de dólares.

Los principales resultados logrados en el período que se reseña incluyen la terminación de la nueva hilandería de estambre y de una fábrica de teñido y acabado de tejidos de lana y estambre en Masan. Se han instalado cuatro unidades modernas para desmotar y limpiar el algodón en hilanderías principales y se instalará una quinta unidad en julio de 1957. Este equipo, junto con las otras tres unidades suministradas ante-

riormente por el Organismo, puede alimentar el 50% de los husos en funcionamiento en la industria algodonera de la República de Corea. Se han entregado ya 2.100 telares para aumentar en 30 millones de yardas la producción anual de tejidos de algodón y la instalación está virtualmente concluida. La fábrica de cemento de Nungyong está terminada en un 87% y la fábrica de vidrio plano de Inchon, en un 85%. Se ha terminado virtualmente la restauración de la segunda máquina Fourdrinier de la única fábrica manufacturera de papel de Corea del Sur; la restauración de la primera de las máquinas se terminó en julio de 1955. Los trabajos realizados en los proyectos de obras de hidráulica fluvial permitirán proteger a unas 98.000 personas y 78.000 acres de tierras. Ha llegado la draga suministrada para la explotación comercial del yacimiento aurífero de Taechon y ahora se continúa con la extracción de mineral por valor de 3.500.000 dólares en oro recuperable. La producción de carbón registró nuevos progresos considerables, debidos en gran parte al equipo y a la asistencia técnica proporcionados por el ONURC. Se terminaron 4.400 nuevas unidades de vivienda y se construyeron cerca de 1.200 aulas de clases. Se abrió en Suwon el Centro de Educación Fundamental de Corea, se terminó la instalación del equipo en un centro de formación profesional en Seúl, se terminaron varios otros edificios recibiendo nuevo equipo para diferentes centros de formación que el Organismo está estableciendo en diversas partes del país. Ha empezado a funcionar el pabellón de niños en el Centro de Rehabilitación de Tongnae para personas físicamente impedidas. Además, se ampliaron otros 15 orfanatos mientras se iniciaba la construcción del Centro Médico Nacional en Seúl, que progresa rápidamente. También se suministró asistencia financiera a más de 320 pequeñas industrias durante el período que se reseña. El importante y muy efectivo programa de asistencia técnica que permitió al Organismo suministrar al Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas, constantemente desde enero de 1952, personal técnico civil para que prestara servicios directos en la ejecución del programa de asistencia civil en Corea terminó con éxito en junio de 1957. El personal comprendía especialistas en agricultura, divulgación rural, producción de turba, práctica de veterinaria, riego y obras de hidráulica fluvial, transporte por mar y por tierra, energía, obras públicas, enfermería, saneamiento, higiene pública y bienestar, comercio e industria, finanzas, minería, educación, asuntos jurídicos, operaciones portuarias y almacenamiento. Durante los últimos cinco años y medio han constituido un cuadro competente de individuos bien preparados que, en la Sede, han dado continuidad al planeamiento de la asistencia civil en general, y han cumplido con éxito sobre el terreno los programas del Organismo en los muchos y variados campos de asistencia.

Durante el año que acaba de terminar se han manifestado nuevamente la medida y el valor de la asistencia prestada por el Gobierno de la República de Corea y el pueblo coreano en la realización de esta empresa de las Naciones Unidas. El éxito que ha coronado los esfuerzos de reconstrucción del Organismo se debe mucho a su decidida y continua colaboración.

Asistencia de carácter urgente a la población civil de Corea

El Programa de Socorros de Emergencia, según el cual el Mando de las Fuerzas de las Naciones Unidas

ha suministrado amplia asistencia no militar al pueblo de Corea durante la guerra y el período que inmediatamente le siguió, fué dado por terminado en el año que finalizó el 15 de junio de 1957. En esa fecha, el total general de los ofrecimientos hechos para el programa por 39 Estados Miembros y por otros Estados que no son miembros, las organizaciones no gubernamentales y los organismos especializados, ascendía a 479.061.599 dólares, que incluían 427.090.439 dólares contribuidos por los Estados Unidos de América. Del total ofrecido, se han recibido en Corea mercaderías por valor de 474.358.896 dólares. Los ofrecimientos de mercaderías por valor de 2.702.703 dólares ofrecidos por Brasil y de 2.000.000 ofrecidos por el Uruguay, todavía estaban pendientes a la fecha de terminación del programa.

14. Cuestión de la representación de China

El 31 de octubre y el 1º de noviembre de 1956, durante el primer período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, los representantes de Polonia, Albania, Bulgaria, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, Checoslovaquia, Rumania, la República Socialista Soviética de Ucrania y la URSS declararon que China sólo podía estar representada por representantes de la República Popular de China y que no debían reconocerse como válidas las credenciales del representante del Kuomintang.

El 8 de noviembre de 1956, la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea en el primero y segundo períodos extraordinarios de sesiones de emergencia aceptó las credenciales del representante de China por 6 votos contra 3 y ninguna abstención. El 9 de noviembre, la Asamblea aprobó el informe de esa Comisión por 68 votos contra ninguno y una abstención.

El 10 de noviembre la India propuso la inclusión de la representación de China en el programa del undécimo período de sesiones de las Naciones Unidas, señalando que el procedimiento adoptado durante los últimos años de aplazar el examen de la representación de la China en las Naciones Unidas ha hecho que sea imposible celebrar un debate adecuado sobre este asunto cada vez más importante.

Sin embargo, el 14 de noviembre la Mesa de la Asamblea, por 8 votos contra 5 y una abstención, recomendó a la Asamblea la aprobación de un proyecto de resolución que primero había sido propuesto a la Mesa por los Estados Unidos de América, según el cual la Asamblea decidiría no incluir el tema en su programa y no examinar en ese período de sesiones ninguna propuesta en el sentido de excluir a los representantes del Gobierno de la República de China o de admitir a representantes del Gobierno Popular Central de la República Popular de China.

Durante el debate sobre el informe de la Mesa de la Asamblea realizado en sesión plenaria el 15 y 16 de noviembre, el representante de la India presentó enmiendas al proyecto de resolución que hubieran tenido el efecto de invertir las recomendaciones de la Mesa. Las enmiendas fueron rechazadas y el proyecto de resolución recomendado por la Mesa de la Asamblea fué aprobado por 47 votos contra 24 y 8 abstenciones.

La cuestión de la representación de la China se planteó nuevamente, tanto en la Comisión de Verificación de Poderes en el undécimo período de sesiones, como en la sesión plenaria de la Asamblea, cuando se examinó el informe de la Comisión.

El 21 de febrero de 1957, la Asamblea General aprobó por 60 votos contra ninguno y una abstención el informe de la Comisión de Verificación de Poderes que declaraba que el proyecto de resolución presentado por la URSS negando la validez de las credenciales de los representantes del Gobierno de la República de China era improcedente.

La cuestión de la representación de China también fué planteada en otros órganos y organismos de las Naciones Unidas en el período comprendido en la presente Memoria.

15. Cambios en los miembros del Consejo de Seguridad, en la Comisión de Desarme y en la Comisión de Observación de la Paz

Los miembros del Consejo de Seguridad, a principios del período que se considera eran los siguientes: Australia, Bélgica, Cuba, China, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General eligió a Filipinas como miembro no permanente por un período de un año a contar desde el 1º de enero de 1957, para llenar la vacante producida a consecuencia del retiro de Yugoslavia como miembro del Consejo de Seguridad. También eligió a Colombia, Irak y Suecia como miembros no permanentes para cubrir las vacantes que resultaban de la expiración del mandato de Bélgica, Irán y Perú el 31 de diciembre de 1956.

En consecuencia, se produjeron los cambios correspondientes en los miembros de la Comisión de Desarme.

La Asamblea, por resolución 1114 (XI) del 21 de diciembre de 1956, decidió volver a nombrar para los años civiles de 1957 y 1958 a los 14 miembros de la Comisión de Observación de la Paz nombrados en 1954 (resolución 907 (IX)).

Capítulo IV

EVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL

A. ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

1. Estudios económicos

El *Estudio Económico Mundial, 1956*, fué presentado al Consejo Económico y Social en junio de 1957. Conforme a la petición formulada por el Consejo, en su resolución 614 D (XXII), de que en el *Estudio Económico* se siga prestando especial atención a los problemas a largo plazo de interés general, la parte I del estudio de este año contiene un análisis de la evolución de las balanzas de pagos durante la posguerra. En la parte II se examina la evolución reciente de la economía mundial. Sobre la base de dicho análisis de la evolución registrada en la posguerra y de los hechos más recientes, en la introducción al *Estudio Económico* se examinan algunos problemas de desequilibrio exterior y su relación con la falta de estabilidad interna.

En el estudio se indica que el problema de la balanza exterior, que para muchos de los países industrializados ha perdido en gran parte el carácter crítico que tenía en los primeros años de la posguerra, se ha ido agravando en muchos de los países insuficientemente desarrollados. En lo que respecta a los países industrializados, sin embargo, han reaparecido a menudo situaciones de desequilibrio externo a pesar de que el problema interno del exceso de la demanda global haya dejado de dominar el panorama económico. Aunque ha habido considerable flexibilidad en la adaptación de la producción a la estructura variable de la demanda interna y externa, es posible que el desarrollo insuficiente de algunas industrias básicas haya sido causa principal de la aparición de una serie de déficit con el exterior. En muchos de los países insuficientemente desarrollados la adaptación de los recursos a la estructura variable de la demanda interna ha tropezado con obstáculos mucho mayores, y el desequilibrio entre distintos sectores de la economía ha tenido repercusiones más graves en su balanza exterior. El crecimiento económico de los países insuficientemente desarrollados depende en gran medida del aumento de las importaciones de equipo de capital. Pero el hecho de que sus sectores de exportación estén especializados en un reducido número de productos primarios y las dificultades que entraña la adaptación de los recursos a las variaciones de la estructura de la demanda mundial han reducido generalmente la capacidad de esos países para financiar su creciente demanda de importaciones. Por lo tanto, muchos países insuficientemente desarrollados se ven ante el dilema de que si ajustan su ritmo de desarrollo a las exigencias de su equilibrio externo lo más probable es que vean aumentar la diferencia entre su nivel de vida y el de los países industrializados.

Al examinar la evolución económica reciente, se señala en el *Estudio* que la actividad económica de los países industriales adelantados de América del Norte y la Europa occidental siguió intensificándose en 1956, aunque a un ritmo más lento que en el año anterior. Las inversiones industriales siguieron siendo un factor dinámico en la expansión económica, pero en cambio la construcción de viviendas y las industrias productoras de bienes de consumo duraderos perdieron su impulso. Por otra parte, el alza de los precios cobró un ritmo más acelerado y la balanza exterior de varios países desmejoró algo. La orientación de la política económica siguió obedeciendo a la necesidad de frenar la expansión en curso. En los países de producción primaria, las variaciones habidas en los mercados mundiales de productos primarios tuvieron consecuencias mucho menos decisivas que en los años anteriores y, por ello, las medidas y los hechos de carácter interno influyeron en mayor medida sobre la marcha de los acontecimientos. En numerosos países se siguió una política restrictiva destinada a moderar la demanda interna y reducir la presión sobre la balanza de pagos. Al evaluar las perspectivas para 1957 en sus respuestas al cuestionario sobre empleo total y balanza de pagos enviado por el Secretario General en noviembre de 1956, la mayoría de los países adelantados cuya economía está basada en la empresa privada declararon que no preveían aceleración alguna en el ritmo de la actividad económica, pero tampoco ninguna contracción de importancia. Algunos países insuficientemente desarrollados estimaban que, gracias a las restricciones impuestas sobre las importaciones en 1956, sus reservas en el exterior habían aumentado en grado suficiente para poder atenuar algunas de esas restricciones en 1957. Varios países tenían la esperanza de poder reducir la presión inflacionaria mediante el aumento de la producción, pero indicaban que ello dependería en gran medida de la obtención de cosechas abundantes. En los países de planificación económica centralizada la producción industrial siguió aumentando en 1956, pero generalmente a un ritmo más lento que en 1955. En varios de estos países el incremento de la producción agrícola también fué proporcionalmente inferior. En los planes para 1957 había influido mucho la escasez de suministros que se había producido en ciertos sectores básicos de la economía. Recientemente se había efectuado una considerable descentralización de las funciones de planificación y administración.

Para el 24º período de sesiones del Consejo se prepararon dos informes sobre el Oriente Medio. En uno de éstos, titulado *La Evolución Económica en el Oriente Medio, 1955-1956*, se esbozan los principales

cambios de carácter económico habidos en la región en su conjunto durante ese período de dos años, analizándose el crecimiento de la producción, de las inversiones y del comercio en los países del Oriente Medio. El otro informe, titulado *La Industrialización en Egipto, Israel y Turquía: crecimiento y estructura de la industria manufacturera*, fué presentado con carácter de informe preliminar. Se proyecta proseguir este estudio sobre la industrialización con otro informe que tratará de los salarios, las utilidades, los intereses pagados y demás ingresos derivados de la industria, de los diversos problemas relacionados con el costo y la eficiencia de la producción, y de los efectos de la industrialización en la balanza de pagos.

También se preparó para el Consejo otro informe titulado *La Evolución Económica en África, 1955-1956*, en el que se analiza el progreso económico de las tres principales regiones del continente — el África del Norte, la Unión Sudafricana y el África Tropical — especialmente en los campos de la producción, las inversiones y el comercio exterior. Además, el informe contiene un amplio apéndice estadístico formado por unos 30 cuadros que abarcan importantes aspectos de la economía de los principales países del África.

En los últimos meses de 1956, seis economistas de las Naciones Unidas fueron al Oriente Medio y pasaron dos meses o más tiempo en los países de la región, donde celebraron consultas con los departamentos gubernativos, reunieron datos estadísticos y de otra índole no existentes en las fuentes disponibles y se impusieron sobre el terreno de la evolución económica en esos países. Además de que permitió conocer y comprender mejor la evolución económica del Oriente Medio, esta labor sobre el terreno facilitó en gran medida la preparación del estudio sobre la industrialización antes mencionado. Los resultados obtenidos indujeron a mantener esta práctica en 1957. Actualmente se está extendiendo a África esta forma de estudiar la situación económica directamente sobre el terreno.

2. Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados

a) FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico

En su 22º período de sesiones, el Consejo Económico y Social tuvo ante sí un informe provisional del Comité *Ad Hoc* encargado de estudiar la cuestión del establecimiento de un fondo especial de las Naciones Unidas para el desarrollo económico de conformidad con la resolución 923 (X) aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1955. El informe comprendía un resumen y análisis de las opiniones presentadas al Secretario General por 46 gobiernos, así como las consiguientes conclusiones, sobre el establecimiento de un fondo especial, el papel que debería desempeñar éste, el carácter de las aportaciones, la suma inicial que convendría reunir, la estructura del fondo, sus relaciones con las Naciones Unidas y los organismos especializados y el mecanismo para evaluar los proyectos propuestos.

El Consejo señaló a la atención de la Asamblea los debates realizados en su 22º período de sesiones acerca de este asunto, e invitó a los gobiernos que todavía no habían enviado sus respuestas al cuestionario que figuraba en la resolución 923 (X) a hacerlo a la mayor

brevedad. Expresó la esperanza de que entre tanto la Asamblea General examinaría qué otras medidas podrían contribuir a facilitar la próxima creación de ese fondo.

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 1030 (XI), en la que pidió al Comité *Ad Hoc* que siguiera desempeñando ciertas tareas, entre ellas la elaboración de diferentes formas de estructura jurídica que pudieran servir de base para el establecimiento del fondo especial, la redacción de un proyecto de estatutos y la indicación de los tipos de proyectos que podrían preverse en los programas de operaciones de un fondo de esta índole, y que preparase un informe suplementario sobre estos asuntos para su presentación al Consejo, además del informe definitivo anteriormente pedido por la Asamblea. Por otra parte, invitó al Comité a agregar a su informe definitivo cualesquiera sugerencias o propuestas que los gobiernos desearan formular en relación con la prestación de asistencia económica, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los países insuficientemente desarrollados. Por su resolución 1031 (XI), la Asamblea aumentó de 16 a 19 el número de miembros del Comité *Ad Hoc*, siendo Italia, el Japón y Túnez los nuevos miembros nombrados por el Presidente de la Asamblea General.

El Comité *Ad Hoc* celebró dos períodos de sesiones durante el año aquí reseñado y en el primero de ellos redactó y aprobó el informe definitivo pedido por la Asamblea General. Este informe es un texto revisado del informe provisional del Comité e incluye información proporcionada por 11 gobiernos que se recibió con posterioridad al primer período de sesiones celebrado por el Comité en mayo de 1956. Una de las modificaciones introducidas en el texto del informe provisional consiste en el retiro de las reservas expresadas previamente por los representantes de Polonia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca de la conclusión que figuraba en aquel informe.

En su segundo período de sesiones, el Comité *Ad Hoc* preparó su informe suplementario destinado al Consejo Económico y Social. En la parte I se indican los diversos pareceres expresados por los gobiernos y los expertos acerca de los posibles elementos constitutivos del futuro estatuto y se señalan las diferentes formas de estructura jurídica que podrían servir de base para el establecimiento de un fondo especial de las Naciones Unidas para el desarrollo económico y para la elaboración de su estatuto. En la parte II se describen los tipos de proyectos que según las opiniones expresadas por los gobiernos y los expertos podrían incluirse en los programas de operaciones de tal fondo.

Corriente internacional de capitales privados

El informe titulado *La corriente internacional de capitales privados, 1956*, preparado para su presentación al Consejo Económico y Social en su 24º período de sesiones, revela que la corriente internacional de capitales privados para inversiones a largo plazo alcanzó en 1956 la mayor cifra registrada en el período de posguerra, siendo considerable su aumento con respecto al volumen del año anterior. Este aumento se debió en gran medida a las mayores exportaciones de capital de los Estados Unidos de América, pero también al incremento de las de la República Federal de Alemania y del Reino Unido. El volumen de las inversiones directas de los Estados Unidos en el exterior aumentó a más del doble, y las inversiones en valores

de cartera, que se hicieron principalmente en el Canadá, también aumentaron considerablemente, en parte a causa, según parece, del mayor margen de diferencia entre los tipos de interés vigentes en los distintos países. La situación de escasez que reinó en los mercados de capital de varios países de la Europa occidental hizo que disminuyera algo el volumen de nuevas emisiones por cuenta de entidades extranjeras. Al igual que en los años anteriores, entre los beneficiarios de las inversiones internacionales figuraron tanto países desarrollados como países menos desarrollados.

Las industrias extractivas, especialmente la producción de petróleo, siguieron absorbiendo la mayor parte de los fondos invertidos en los países insuficientemente desarrollados, fondos que incluyeron cuantiosos pagos por concepto de nuevas concesiones otorgadas. Sin embargo, las inversiones en la industria manufacturera también parecen haber crecido considerablemente, sobre todo en América Latina. En el curso de 1956 no se registraron cambios de importancia en las disposiciones oficiales que afectan a las exportaciones de capital en los países que son las principales fuentes del capital privado que se invierte en el exterior. Con todo, en algunos de estos países se adoptaron medidas en materia de tributación y control de cambios que deberían estimular o facilitar la exportación de capitales. En varios países importadores de capital se tomaron medidas destinadas en unos casos a reducir, y en otros a ampliar, los sectores dentro de los cuales pueden efectuarse inversiones privadas, incluso inversiones de capital privado extranjero, pero no pudo discernirse ninguna tendencia dominante. En conjunto, se mantuvo la tendencia a atenuar en diversas formas las restricciones aplicables a las remesas de ingresos y capital relacionadas con las inversiones de personas no residentes y a ofrecer garantías a este respecto. No obstante, en algunos países esas remesas fueron sometidas a restricciones más severas y en otros se las redujo o aplazó por medio de disposiciones administrativas a fin de hacer frente a dificultades temporales de balanza de pagos.

b) INDUSTRIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

En su 22º período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó un informe en el que figuraban propuestas encaminadas a realizar, en 1957 y 1958, ciertos proyectos seleccionados por el Secretario General como merecedores de ser puestos en práctica prontamente. Estos proyectos comprendían: un estudio general acerca de la importancia relativa de las inversiones en la industria de los países insuficientemente desarrollados; estudios sobre las inversiones de capital en determinadas industrias (evaluación de las técnicas de elaboración y del equipo, así como de los problemas relativos a la magnitud de las instalaciones de producción); medidas para fomentar la industria en pequeña escala; relación que guardan el desarrollo de la comunidad y las cooperativas con el proceso de industrialización; resumen y evaluación de la experiencia recogida en virtud del programa de asistencia técnica acerca de los problemas de administración industrial en los países insuficientemente desarrollados; reuniones sobre problemas de administración industrial en los países insuficientemente desarrollados; planificación general del medio físico; estudios sobre técnicas de planificación económica; y publicación de un boletín de industrialización y productividad.

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General expresó su satisfacción por los trabajos realizados en relación con las cuestiones de industrialización y productividad y pidió que se continuase prestando preferente atención a dichos asuntos. También señaló a la atención de los Estados Miembros los estudios ya realizados o en preparación a fin de que pudieran utilizarlos en provecho de sus países. Además, pidió al Secretario General que informase al Consejo, en su 25º período de sesiones, sobre los elementos de organización y administración que pudieran ser necesarios para realizar la labor en este campo.

En su 23º período de sesiones, el Consejo tomó nota del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del programa de trabajo sobre industrialización y productividad y declaró confiar en que se podría intensificar la ejecución del programa de trabajo consignado en el informe presentado en el 22º período de sesiones, con particular atención a las necesidades del Oriente Medio y de África, y atribuyendo especial importancia a aquellos estudios y proyectos capaces de prestar asistencia y orientación prácticas para el progreso industrial de los países insuficientemente desarrollados. El Consejo pidió al Secretario General que, en consulta con los organismos especializados competentes, continuase investigando las posibilidades de organizar seminarios, consultas y centros de capacitación que contribuyeran a la aplicación práctica del programa, y que estudiara la posibilidad de reunir los datos económicos fundamentales y de actualidad disponibles, inclusive los referentes a las tendencias de la economía, que fuesen de interés para los organismos oficiales y privados encargados de la formulación de programas económicos.

c) REFORMA AGRARIA Y COOPERATIVAS

El segundo informe sobre *Progresos en Materia de Reforma Agraria*, preparado por el Secretario General en colaboración con la Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Internacional del Trabajo, fué presentado al Consejo Económico y Social en su 23º período de sesiones.

En el informe se analizan las respuestas de los gobiernos a un cuestionario preparado en consulta con la FAO, la OIT y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La parte I trata de las políticas de reforma y de la estructura agraria en general; en la parte II se describen las medidas concretas de reforma agraria, entre las que figuran las relativas a las facilidades para la adquisición de tierras en propiedad, la colonización, las condiciones de la tenencia de tierras, las parcelas de tamaño económico, el crédito agrícola y la política fiscal en relación con la reforma agraria; la parte III expone las repercusiones de las medidas de reforma agraria sobre el desarrollo económico; y la parte IV contiene una breve recapitulación de los progresos realizados por los gobiernos en materia de reforma agraria y en ella se examinan los principales obstáculos que dificultan la aplicación de medidas de reforma agraria, así como las recomendaciones formuladas por gobiernos sobre la futura acción internacional. En un anexo del informe figura un análisis de las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia de reforma agraria.

Al mismo tiempo, el Secretario General presentó un informe sobre las cooperativas que había sido preparado en colaboración con la FAO y la OIT. En la

introducción del mismo se analizan brevemente los problemas que plantea la organización de cooperativas en las condiciones reinantes en los países insuficientemente desarrollados. El informe contiene un capítulo preparado por la OIT sobre las diversas formas de asistencia que los gobiernos y otros organismos pueden prestar para el desarrollo de las cooperativas, y un capítulo preparado por la FAO sobre los sectores que se prestan a la organización de cooperativas.

El Consejo instó a los gobiernos a proseguir sus esfuerzos para dar cumplimiento a las resoluciones correspondientes del Consejo y de la Asamblea General, sugirió que los gobiernos emprendiesen estudios especialmente dedicados a la aplicación de medidas de reforma agraria y sus efectos en la producción, el nivel de vida y el desarrollo económico y social, y señaló a la atención de los gobiernos el asesoramiento y la asistencia de carácter técnico que pueden obtener de las Naciones Unidas y los organismos especializados. El Consejo invitó al Secretario General, a la FAO y a la OIT, así como a los demás organismos especializados, a prestar particular atención, en la labor que realicen en sus respectivos campos de acción en pro de la reforma agraria, a actividades tales como las consistentes en divulgar información acerca de la experiencia de distintos países en lo referente a la aplicación de medidas nacionales de reforma agraria; organizar seminarios y cursos de formación profesional sobre problemas de carácter institucional a fin de favorecer la adopción de una acertada política agraria nacional; estimular, con ayuda de la asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, la realización en distintos países de proyectos y estudios experimentales apropiados; y fomentar, tanto en el plano nacional como internacional, la colaboración de diversas instituciones para la realización de investigaciones relacionadas con la reforma agraria. El Consejo reiteró su recomendación de que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento acogiese favorablemente las solicitudes de préstamos para proyectos de desarrollo destinados a ejecutar programas de reforma agraria. Pidió al Secretario General que se mantuviese al corriente de cualesquier nuevos hechos en materia de reforma agraria, y que en colaboración con los organismos especializados competentes, redactase un nuevo informe sobre la cuestión de la reforma agraria para presentarlo al Consejo en 1962.

Con respecto a las cooperativas, el Consejo consideró en su 23º período de sesiones, que debía concederse prioridad al estudio e investigación de los métodos que permitan lograr que la acción de las cooperativas en determinadas esferas contribuya más eficazmente al desarrollo económico y social global de las regiones insuficientemente desarrolladas. El Consejo tomó nota de que, particularmente en la fase inicial del desarrollo económico, la comprensión insuficiente de los objetivos e ideales de las cooperativas y la falta de medios adecuados de formación de administradores dificultaban la creación de cooperativas y reducían su eficacia, e invitó a los gobiernos a estimular, según convenga, la organización de cooperativas en las regiones poco desarrolladas, especialmente en los ramos de la agricultura y la pesca, así como en la esfera general del desarrollo de la comunidad, y a adoptar medidas apropiadas, en particular con respecto a la formación elemental y avanzada del personal de las cooperativas, y a la información de sus miembros, tanto en la etapa de formación de aquéllas como en la de su desarrollo

ulterior. También invitó a los gobiernos a tener presente que diferentes programas de asistencia técnica permiten proporcionar a los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados la asistencia necesaria para fomentar la organización de cooperativas. El Consejo pidió al Secretario General y a los organismos especializados competentes que, por conducto de sus oficinas regionales en su caso, prestasen a los Estados Miembros toda la ayuda y el asesoramiento posibles para la aplicación de esas medidas y para la creación de centros de formación profesional. Les pidió además que, en los estudios sobre el desarrollo económico y social, se destacase la función de las cooperativas como medio de desarrollo capaz de producir considerables beneficios sociales y económicos. El Consejo pidió asimismo que, dentro de los programas autorizados por el Consejo en su 22º período de sesiones, se siguiesen haciendo estudios específicos sobre la función de las cooperativas en la ejecución de programas de desarrollo de la comunidad y de construcción de viviendas económicas. El Consejo recomendó además que la OIT y la FAO siguiesen estudiando aquellos métodos que la experiencia haya demostrado ser los más eficaces en las diversas esferas en que las cooperativas pueden contribuir más provechosamente a promover el empleo de técnicas modernas, sobre todo en los ramos de la agricultura y la pesca.

d) UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS

Los trabajos relativos a los recursos hidráulicos se desarrollaron de conformidad con dos peticiones formuladas por el Consejo Económico y Social en su resolución 599 (XXI), de 3 de mayo de 1956, una de las cuales se refería a los servicios hidrológicos nacionales existentes y a los planes y condiciones para su ampliación y la otra a las consecuencias de orden administrativo, económico y social del aprovechamiento coordinado de las cuencas fluviales.

Con respecto a los servicios hidrológicos, se envió a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados un cuestionario preparado conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y la Secretaría de las Naciones Unidas. Han empezado a llegar las respuestas a este cuestionario y se están extrayendo los datos que contienen con miras a preparar un informe que se presentará al Consejo en su 25º período de sesiones.

Un grupo de siete expertos de nombradía mundial en materia de aprovechamiento coordinado de las cuencas fluviales celebró una primera reunión en enero de 1957 y celebrará otra en noviembre de 1957; el informe de este grupo será presentado al Consejo en su 25º período de sesiones.

La Secretaría está preparando un informe sobre la utilización del agua con fines industriales, que será publicado en el otoño de 1957.

En julio de 1956 se celebró en Ginebra la tercera reunión de funcionarios de las organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan de las cuestiones relativas al desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos. En esta reunión se examinaron los puntos suscitados por la resolución 599 (XXI) del Consejo y varios otros problemas de interés común, tales como la necesidad de contar con una terminología más uniforme en materia de hidráulica y con estadísticas más amplias en el campo de los recursos hidráulicos, el asunto de la contaminación de las aguas, y la adopción

de medidas adecuadas para lograr que se reúnan, analicen y divulguen datos sobre los trabajos, los programas de investigación y otras actividades en curso en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos.

Conforme a la petición formulada por el Consejo en su 21º período de sesiones de que el Secretario General prepare, en colaboración con los organismos especializados interesados, un informe acerca de las aplicaciones posibles de la energía atómica, especialmente en la producción de energía eléctrica, en la industria y en la agricultura, se publicó un informe titulado *Aplicaciones económicas de la energía atómica: producción de energía eléctrica y aplicaciones industriales y agrícolas*. Este estudio, que fué preparado por las Naciones Unidas con la ayuda de la FAO, la OIT y la UNESCO, trata de las posibles aplicaciones de la energía atómica para la producción de electricidad, la utilización de isótopos y fuentes de radiación en la industria, las posibles aplicaciones en la agricultura, algunos problemas conexos del trabajo y el asunto de los servicios de formación técnica en relación con las aplicaciones de la energía atómica. Al preparar el informe se consultó a los gobiernos de los Estados Miembros que integran el Comité Consultivo para la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, que asesora al Secretario General. Se les envió un cuestionario detallado, que había sido preparado con ayuda de especialistas en energía nuclear, y se recibieron respuestas del Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El cuestionario y las respuestas al mismo se incluyeron en el informe como parte de la documentación auxiliar. Además, para revisar el texto preliminar de algunas partes del informe, se obtuvo el concurso de un grupo de expertos nombrados por los Gobiernos del Brasil, el Canadá, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la URSS.

En cumplimiento de la resolución del Consejo sobre las nuevas fuentes de energía distintas del átomo, asimismo aprobada en el 21º período de sesiones, se preparó un informe titulado *Las nuevas fuentes de energía como factor de desarrollo económico — Energía solar, energía eólica, energía de las mareas, energía geotérmica y energía térmica de los mares*. Para su preparación, el Secretario General contó con la asistencia de cinco especialistas a quienes encargó la preparación de estudios básicos sobre cada una de las nuevas fuentes de energía.

El informe, que debe ser presentado al Consejo en su 24º período de sesiones, consta de tres partes. La primera es de carácter general y consiste en un estudio comparativo de estas cinco nuevas fuentes de energía. Se examinan brevemente los métodos que se han ideado para captar y utilizar estas fuentes con fines económicos y se evalúan sus principales características. A continuación se expone el papel que las diversas fuentes podrían desempeñar en la producción de energía eléctrica, así como en otras aplicaciones no eléctricas en que podría ser importante su utilización y, por último, se sugieren medidas con miras a impulsar las formas de desarrollo que parecen revestir mayor importancia. La segunda parte del informe está formada por cinco anexos separados, dedicados a cada una de dichas nuevas fuentes de energía, que contienen extractos de los referidos estudios preparados por los especialistas. La tercera parte del informe está constituida por una bibliografía, con breves anotaciones analíticas, que fué preparada por la UNESCO.

3. Desarrollo de la cooperación económica internacional y expansión del comercio internacional

El Consejo Económico y Social volvió a ocuparse en su 22º período de sesiones de los obstáculos con que tropieza el comercio internacional y de los medios de desarrollar ese comercio. El Consejo tuvo ante sí un informe titulado *Sistema internacional para la cooperación en materia de comercio*, que había sido preparado en cumplimiento de lo pedido por el Consejo en su 20º período de sesiones. En dicho informe se describía en general el sistema actual de cooperación en materia de comercio y se analizaban más detalladamente algunas de las organizaciones que se ocupan de fomentar la cooperación en el comercio internacional.

El Consejo instó a los gobiernos a no cejar en sus esfuerzos para facilitar la expansión del comercio internacional, y los invitó a comunicar sus observaciones sobre el sistema internacional de cooperación comercial. El Secretario General ha preparado un análisis de estas observaciones para presentarlo al Consejo en su 24º período de sesiones. Este señaló además la conveniencia de que las comisiones económicas regionales estudien las dificultades que impiden la expansión del comercio internacional e indiquen los obstáculos que hay que suprimir en cada una de las regiones respectivas.

En lo referente a la expansión del comercio internacional con miras a favorecer el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, el Consejo recomendó a los gobiernos de los países más desarrollados que tuvieran en cuenta las posibles repercusiones que su política comercial y de producción puede tener en la economía de los demás países, y a los países insuficientemente desarrollados que hicieran lo que pudieran por diversificar los mercados de sus productos acelerando su industrialización, buscando nuevos mercados y aumentando la variedad de su producción. Además, el Consejo puso de relieve la importancia de los estudios estadísticos y analíticos para comprender mejor la evolución de la demanda internacional de productos primarios. Se subrayaron los perniciosos efectos que tienen las fluctuaciones violentas de los precios de los productos primarios y se examinó especialmente la relación de esas fluctuaciones con el desarrollo económico, así como la existente entre el comercio de productos básicos y la situación económica general.

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General reconoció la necesidad de hacer esfuerzos continuos para reducir los obstáculos que entorpecen el comercio internacional. En particular, en su resolución 1027 (XI), de 20 de febrero de 1957, instó a los Estados Miembros a reducir o suprimir las restricciones o las discriminaciones en el comercio y los pagos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades del desarrollo económico de los países menos desarrollados, y a aplicar en la esfera nacional una política económica, monetaria y fiscal que promueva el logro de altos niveles de producción, de empleo y de inversiones, teniendo presente la relación existente entre tal política interna y las posibilidades de expansión del comercio mundial. La Asamblea también instó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados a aprobar el acuerdo por el cual se establezca la Organización de Cooperación Comercial.

4. Problemas internacionales relativos a los productos básicos

Durante el período que abarca esta memoria, tres convenios internacionales sobre productos básicos, concertados en conferencias a que convocó el Secretario General, entraron en vigor: el Convenio Internacional sobre el Estaño, el 1° de julio de 1956; un nuevo Convenio Internacional del Trigo, el 1° de agosto de 1956, y un Convenio Internacional del Azúcar, revisado, el 1° de enero de 1957.

El Consejo Internacional del Estaño, instituido en el Convenio Internacional sobre el Estaño, celebró su primer período de sesiones en Londres en julio de 1956. A principios de 1957, el Consejo elevó el importe del precio mínimo previsto en el Convenio.

El nuevo Convenio Internacional del Trigo fué concertado en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en octubre de 1955 y febrero de 1956, y su texto se basó en gran parte en el del convenio de 1953 que expiró el 31 de julio de 1956.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar, de 1956, que había celebrado su primer período de sesiones en la Sede en mayo y junio de 1956, se reunió en Ginebra del 4 de octubre al 2 de noviembre para un segundo período de sesiones. En esta ocasión, la Conferencia estableció un Protocolo de Enmiendas al Convenio Internacional del Azúcar de 1953 y aprobó cuatro resoluciones. El Protocolo debía entrar en vigor el 1° de enero de 1957 si en esa fecha un número de gobiernos que tuviesen el 60% de los votos de los países importadores y el 75% de los votos de los países exportadores hubiesen ratificado o aceptado el Protocolo, o se hubieran adherido a éste o al Convenio modificado, o se hubiesen comprometido a hacerlo lo más pronto posible, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales. Habiéndose cumplido estos requisitos, el Protocolo entró en vigor en la fecha prevista.

El Convenio, en su forma enmendada, permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 1958. Las enmiendas modificaron los tonelajes básicos de las exportaciones al mercado libre y el mecanismo para determinar las cuotas y también los precios a que éstas deben o pueden ser reajustadas. Entre las resoluciones figuraba la recomendación de que el Consejo Internacional del Azúcar se ocupase especialmente de promover el aumento del consumo del azúcar y examinara la posibilidad de crear para ello un comité permanente.

El convenio internacional concertado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aceite de Oliva celebrada en 1955 debía entrar en vigor el 1° de octubre de 1956 siempre que para esa fecha hubiera sido ratificado por los gobiernos de los cinco países productores principales y por no menos de dos de los principales países importadores. Estos requisitos no se cumplieron y, con arreglo a una resolución que había aprobado la Conferencia, en noviembre de 1956 se reunieron los gobiernos signatarios para examinar la situación. Se decidió continuar explorando las posibilidades de lograr un acuerdo y se invitó a los gobiernos que habían asistido a la Conferencia y aún no habían firmado el Convenio ni se habían adherido a él a hacer saber al Secretario General si seguían creyendo conveniente concertar tal convenio; qué modificaciones, en su caso, estimaban conveniente introducir en el proyecto de convenio para poder aceptarlo; y si

estarían dispuestos a participar en una nueva conferencia para estudiar los cambios que pudieran proponerse. Se pidió al Secretario General que convocara una nueva reunión para examinar las respuestas que se recibieran y los signatarios deben reunirse por segunda vez en Ginebra en julio de 1957.

En julio de 1956 el Consejo Económico y Social dirigió su atención a la importancia del problema de la inestabilidad de los precios de los productos primarios, particularmente en cuanto afectaba a la economía de los países insuficientemente desarrollados.

En el mismo período de sesiones, el Consejo examinó el informe anual de la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos y el de la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos y, en su resolución 620 (XXII), decidió mantener por el momento en funciones a ambos órganos. A petición del Consejo, las actas de los debates fueron transmitidas a la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos, a la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y se invitó a estos órganos a comunicar al Consejo, en su 24° período de sesiones, su parecer acerca de cualesquier defectos que pudieran ver en las disposiciones que rigen la organización de sus actividades y sus métodos de trabajo en materia de problemas internacionales relativos a los productos básicos, así como acerca de la coordinación de sus funciones dentro del marco de las Naciones Unidas, y a presentar propuestas concretas para suprimir esos defectos, si los hubiere.

Durante el año reseñado, la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos celebró su cuarto y quinto períodos de sesiones: en Ginebra, del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 1956, y el otro en Nueva York del 6 al 17 de mayo de 1957. Su informe fué sometido al Consejo en su 24° período de sesiones. La Comisión ha venido siguiendo de cerca la situación actual del comercio internacional de productos primarios y, a base de la información que le proporcionó el Secretario General, preparó el capítulo I de su informe al Consejo, para que éste lo utilizara al examinar la situación económica mundial. El Secretario General ha emprendido, con la cooperación del Director General de la FAO, las tareas preparatorias de ciertos estudios experimentales que tienen por objeto proporcionar información básica sobre la naturaleza y la magnitud de las fluctuaciones de los precios y del volumen del comercio de productos primarios.

Durante el período que se estudia, se publicaron 11 memorándums mensuales sobre los *Hechos más recientes en materia de productos básicos* y el No. 3 del *Boletín del mercado de productos básicos*, con artículos y notas sobre problemas relativos a los productos básicos.

La Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos se reunió en Ginebra en abril de 1957. Su décimo informe anual al Secretario General, titulado *Estudio de 1957 sobre los problemas internacionales relativos a los productos básicos*, se divide en dos partes: en la primera se reseñan las consultas celebradas y las medidas adoptadas en el plano intergubernamental en 1956 y los primeros meses de 1957, y en la segunda se informa sobre la organización de las actividades y los métodos

de trabajo de la Comisión. Esta tiene a su cargo la coordinación de la labor de los grupos que se ocupan de los diversos productos y la primera parte de su informe comprende una descripción de las actividades de los distintos consejos establecidos en virtud de los diferentes convenios concertados.

Durante el año se dedicó considerable atención a la posibilidad de utilizar las existencias de ciertos productos agrícolas para crear una reserva mundial de alimentos. El Consejo Económico y Social examinó en su 22º período de sesiones el informe titulado *Finalidades de una reserva mundial de alimentos — alcance y limitaciones*, redactado por la FAO en cumplimiento de una resolución aprobada por la Asamblea General en su noveno período de sesiones. El Consejo pidió al Secretario General que, en consulta con la FAO y con las organizaciones y los expertos que estimase necesarios, informase sobre la posibilidad de proseguir la acción nacional y la cooperación internacional para lograr los objetivos enunciados en la resolución de la Asamblea y, en particular, que indicase si era posible utilizar, y en caso afirmativo de qué manera, las reservas de productos alimenticios para hacer frente a cualquier escasez de alimentos imprevisible.

Al tratarse en el undécimo período de sesiones de la Asamblea el asunto de la creación de una reserva mundial de alimentos se examinó principalmente la posibilidad de fomentar, mediante una acción internacional, la utilización de los excedentes de productos alimenticios para constituir reservas nacionales de alimentos. En su resolución 1026 (XI), de 20 de febrero de 1957, la Asamblea General pidió al Secretario General que, en consulta con la FAO, estudiara la posibilidad de emprender tal acción, en relación con ciertos aspectos especiales, como el posible desplazamiento de mercados existentes. También le pidió que, en consulta con la FAO y con otros organismos, estudiara la conveniencia de establecer un grupo mixto de trabajo encargado de examinar la posibilidad de poner en ejecución las diversas propuestas formuladas respecto de esta cuestión. Se han celebrado consultas con la FAO y otros organismos interesados, y se ha presentado una nota al Consejo en que se indica que por ahora sería útil seguir estudiando estos asuntos sin crear para ello un grupo oficial de trabajo.

5. Problemas fiscales y financieros

a) PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS

La labor en curso en materia presupuestaria sigue versando principalmente sobre la reclasificación de los datos presupuestarios en forma apropiada para formular la política fiscal, y sobre el mejoramiento de los métodos de la contabilidad presupuestaria del Estado. Esa labor ha consistido: 1) en preparar un modelo práctico de cuentas del Estado presentado en forma de *Manual para la clasificación de las cuentas del Estado*; y 2) en avivar el interés de los gobiernos por las técnicas y fines de la reclasificación presupuestaria mediante ciclos de trabajos prácticos regionales organizados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Durante el período reseñado se hicieron preparativos para el segundo ciclo de trabajos prácticos regionales sobre los problemas de reclasificación y administración presupuestarias que tendrá lugar en Bangkok en septiembre de 1957. La Secretaría ha emprendido la revisión del *Manual*; se han preparado estudios sobre las clasificaciones económicas y funcionales adoptadas en

los últimos años por diversos países situados fuera y dentro de la región de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y sobre la formación del presupuesto, a base del costo de las actividades programadas, método de información financiera destinado a aumentar la eficiencia administrativa y facilitar la planificación de los programas.

Como en años anteriores, el *Anuario Estadístico* de las Naciones Unidas para 1956 contiene información sobre la deuda pública y las principales categorías de ingresos y gastos públicos, a la vez que proporciona datos globales sobre las operaciones en efectivo de los Estados.

b) PROBLEMAS TRIBUTARIOS

En cumplimiento de la resolución 825 (IX) de la Asamblea General, de 1 de diciembre de 1954, se preparó y presentó al Consejo Económico y Social, en su 22º período de sesiones, un memorándum titulado "Tributación de los capitales privados extranjeros en los países exportadores y en los países importadores de capital", junto con estudios por países referentes a Bélgica, los Estados Unidos de América, México y los Países Bajos. En dicho memorándum se reseñaban los progresos hechos en los 10 últimos años para eliminar la doble tributación y se examinaba la legislación tributaria de los países exportadores y los países importadores de capital, con particular referencia a los incentivos fiscales que ofrece a las inversiones extranjeras.

El Consejo elogió el informe y lo transmitió a la Asamblea General; está tomó nota con satisfacción, en su undécimo período de sesiones, de los progresos realizados para eliminar la doble tributación internacional y pidió al Secretario General que completase los estudios sobre este tema.

El aumento de la actividad relacionada con la concertación de acuerdos fiscales internacionales ha hecho necesario preparar tres nuevos volúmenes de la serie *Acuerdos Fiscales Internacionales*. El volumen VI fue publicado en junio de 1956 y contiene el texto de 50 acuerdos celebrados hasta junio de 1955.

El volumen VII, que comprenderá el texto de los nuevos acuerdos concertados posteriormente a junio de 1955, irá a la imprenta en 1957. También se imprimirá en 1957 una revisión del volumen V, titulado *Guía Mundial de Acuerdos Fiscales Internacionales*, con información completa sobre el alcance de todos los acuerdos fiscales concertados hasta el 1º de junio de 1955 y el estado en que se encontraban en esa fecha.

La doble tributación internacional de los derechos de propiedad intelectual de los autores y artistas fué objeto de un estudio conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los resultados preliminares del mismo fueron presentados al Comité Intergubernamental de Derechos de Autor al celebrar éste su primer período de sesiones en París en junio de 1956. A petición del Comité, se está prosiguiendo dicho estudio, y en marzo de 1957 se distribuyó un cuestionario a los gobiernos de los Estados Miembros. Los resultados del estudio serán sometidos al Comité en su segundo período de sesiones, fijado para octubre de 1957.

En abril de 1957 empezó a aparecer, con la publicación de los documentos titulados "Tributación en el Brasil" y "Tributación en el Reino Unido", el *Boletín*

de información tributaria mundial en que se presentan informes completos sobre la administración y los regímenes tributarios de los diversos países. Esta serie se publica en virtud del programa internacional sobre tributación de la Escuela de Derecho de Harvard y en consulta con la Secretaría, conforme a la resolución 378 G (XIII) del Consejo. El tercer volumen, que tratará de la "Tributación en México", aparecerá en el verano de 1957.

c) PROBLEMAS FINANCIEROS

La movilización del capital privado para el desarrollo económico y su encauzamiento hacia inversiones productivas constituyen asuntos que han suscitado creciente interés en las Naciones Unidas. Es cada vez mayor el número de solicitudes de asistencia técnica en materia de política e instituciones financieras que se reciben. El programa de trabajo en curso abarca en particular el estudio de problemas que han adquirido creciente importancia en relación con las actividades de asistencia técnica.

d) ASPECTOS FISCALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO

En diciembre de 1956 se publicó un informe titulado *La política tributaria y el desarrollo económico en Centroamérica*, preparado conjuntamente por la Dirección de Asuntos Económicos de la Secretaría y la secretaria de la Comisión Económica para América Latina. Este es uno de los varios estudios regionales que se han emprendido en relación con el Programa de integración económica de la América Central. En él se examinan los regímenes tributarios y la distribución de los gastos del Estado en los países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se analizan las medidas tributarias sancionadas en el período de postguerra por esos países para satisfacer las crecientes necesidades financieras de sus programas de desarrollo. El informe fué presentado al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano en su cuarta reunión, celebrada en la ciudad de Guatemala en febrero de 1957; se pidió a la Secretaría que iniciara nuevos estudios acerca de los impuestos sobre la propiedad, la renta y los impuestos indirectos, los incentivos fiscales ofrecidos a los inversionistas y los problemas de ajuste de los regímenes tributarios internos que pueden plantearse con motivo de la integración económica paulatina de la región.

Continuando el estudio sobre los impuestos que gravan a la agricultura y al desarrollo económico, emprendido juntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se preparó sobre ese tema un trabajo especialmente dedicado a los problemas de Asia y el Lejano Oriente. Este trabajo será presentado al Grupo de Trabajo sobre planificación y desarrollo económicos en su tercera reunión, que debe celebrarse en Bangkok en el otoño de 1957.

Durante el período que se examina, 19 gobiernos recibieron asistencia técnica, por medio de misiones de expertos, en asuntos fiscales y financieros. Esos expertos se ocuparon principalmente de cuestiones de reforma de la política fiscal y mejoramiento de la administración tributaria y presupuestaria, y prestaron ayuda para la organización de instituciones financieras. Además, en virtud del programa de 1956, se concedieron 68 becas de estudio y ampliación de estudios. Varias de estas becas han contribuido a la realización de programas a largo plazo destinados a formar un núcleo de técnicos fiscales y financieros.

Se recibieron de gobiernos, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales solicitudes de datos de actualidad. En varias ocasiones, los gobiernos han consultado al Secretario General sobre problemas técnicos concretos de índole fiscal o financiera.

6. Colaboración internacional en cuestiones de cartografía

Durante el año considerado, los gobiernos y las organizaciones internacionales desplegaron esfuerzos considerables para robustecer la cooperación internacional en cuestiones de cartografía, especialmente en regiones donde esa cooperación es escasa y faltan todavía datos cartográficos básicos que se necesitan con urgencia.

El Secretario General siguió ocupándose de los preparativos para la segunda Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente, que debe celebrarse en Tokio en octubre de 1958.

Dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se está organizando en cooperación con el Gobierno del Irán, país que se ha ofrecido a actuar como huésped, un seminario regional sobre levantamiento de planos topográficos para el desarrollo económico. Entre los principales participantes se contarán funcionarios de los organismos cartográficos del Irán y los países vecinos. La finalidad más importante del seminario, que debe celebrarse en Teherán en octubre de 1957, es reforzar la asistencia técnica prestada por las Naciones Unidas en cuestiones de cartografía en la región, donde varios gobiernos ya han recibido esa clase de ayuda para desarrollar sus servicios cartográficos.

Se intensificaron los contactos con las instituciones nacionales de los países que se han adherido a las Convenciones sobre el Mapa Internacional del Mundo a Escala de un Millonésimo, y la mayoría de los organismos editores proporcionaron información sobre varios centenares de hojas nuevas de reciente publicación y ediciones revisadas. El Mapa Internacional abarca ya alrededor de las tres cuartas partes del mundo, pero tal vez sea necesario revisar algunas de las hojas. Los informes correspondientes a 1955 y 1956 sobre la marcha de los trabajos contenían información al día sobre el estado de la publicación. Debido a su carácter altamente técnico, estos informes se están publicando ahora en series separadas y se ha abandonado la práctica seguida el año pasado de incluirlos en el boletín cartográfico de las Naciones Unidas titulado *World Cartography*. A partir del volumen V se han vuelto a publicar en este boletín estudios técnicos e informes sobre las actividades desarrolladas en los diversos campos de la cartografía.

Se sigue trabajando en la preparación de un programa destinado a lograr la máxima uniformidad internacional en la escritura de los nombres geográficos.

7. Transportes y comunicaciones

a) COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN CUESTIONES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Las Naciones Unidas han seguido ocupándose directamente de ciertos problemas marítimos debido a que la Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental concertada en Ginebra en

1948, no ha sido ratificada todavía por el número necesario de países y a que la OCMI aún no ha podido empezar a funcionar. De las 21 ratificaciones que son necesarias para que la Convención entre en vigor, sólo se han producido 18, entre las cuales se cuenta la de Italia, país que ratificó el instrumento en el período abarcado por esta memoria. Por otra parte, el Ecuador presentó su ratificación acompañada de una "declaración": ésta ha sido comunicada a los países que ya han ratificado el instrumento, con el ruego de que expresen su parecer sobre la misma y también ha sido puesta en conocimiento de los países que están facultados para ratificarlo.

En un informe titulado *Pollution of Sea by Oil* se reunió y analizó la información técnica disponible sobre la contaminación de las aguas del mar por el petróleo. Este informe fué preparado y distribuido a los gobiernos conforme a lo pedido por la Conferencia Internacional sobre la Prevención de la Contaminación de las Aguas del Mar por el Petróleo, celebrada en Londres en 1954, y a lo resuelto por el Consejo Económico y Social en su 18º período de sesiones.

Se ha seguido de cerca el asunto de la unificación de las medidas del tonelaje marítimo en espera de que la OCMI se haga cargo de esta tarea cuando empiece a funcionar. Se han tomado disposiciones para establecer un grupo de expertos que se encargará de analizar las principales reglamentaciones vigentes en materia de medición del tonelaje y presentará un informe sobre las diferencias y deficiencias que se adviertan en esas reglamentaciones.

El Comité de Expertos en transporte de mercaderías peligrosas examinó en su segundo período de sesiones, celebrado en Ginebra del 16 de agosto al 12 de septiembre de 1956, las observaciones de los gobiernos y organizaciones internacionales interesados, sobre las recomendaciones que el Comité había formulado en su primer período de sesiones (Ginebra 1954), y redactó sus recomendaciones definitivas bajo el título de *Transporte de mercaderías peligrosas — Recomendaciones concernientes a la clasificación y enumeración de las mercaderías peligrosas, a las etiquetas que deben llevar y a los documentos de expedición de dichas mercaderías*. Se ha pedido a los gobiernos, a las comisiones económicas regionales y a las organizaciones internacionales interesados que hagan saber al Secretario General en qué medida pueden ajustar en general sus propias prácticas a las recomendaciones del Comité de Expertos. Se están llevando adelante los preparativos para crear un comité permanente que se encargará de completar y mantener al día la lista de mercaderías peligrosas, establecer un sistema de números clave para esas mercaderías y atribuir esos números, proseguir los trabajos de unificación de los reglamentos sobre embalajes y las pruebas que éstos deben satisfacer, deducir las conclusiones apropiadas respecto de la rotulación de esas mercaderías y estudiar otras cuestiones conexas. Ese comité se compondría de no más de nueve expertos, que serían puestos a disposición del Secretario General, a solicitud de éste, por los Gobiernos de los Estados Miembros interesados en el transporte internacional de mercaderías peligrosas, costeados esos gobiernos los gastos correspondientes. Se han tomado disposiciones para que un consultor haga un estudio comparativo de los sistemas o reglamentos de embalaje, a fin de que el nuevo comité de expertos pueda proseguir el estudio de esa cuestión.

Los Estados partes en la Convención sobre la Circulación por Carretera de 1949, que cuenta ahora con 27 signatarios, han aceptado en general la recomendación del Consejo Económico y Social de que se siga aplicando hasta marzo de 1960 la disposición del párrafo 6 del artículo 24 de la Convención, la cual autoriza a admitir a la circulación internacional a todo conductor que posea documentos emitidos en virtud de las disposiciones de la Convención Internacional relativa a la circulación de vehículos automotores de 1926, o de la Convención sobre Reglamentación del Tráfico Automotor Interamericano. El Secretario General ha señalado a la atención de los gobiernos interesados la resolución aprobada por el Consejo en su 23º período de sesiones, en que recomendó a los gobiernos calificados para ratificar la Convención, y que no lo han hecho todavía, que la ratifiquen prontamente.

Las actividades desarrolladas en otros aspectos del transporte internacional por carretera han comprendido un estudio de los progresos realizados por los países en cuanto a la unificación universal de las señales de carretera y de las reglamentaciones aplicables a la expedición de permisos de conducción de vehículos automotores. En su 19º período de sesiones, el Consejo recomendó a los gobiernos que considerasen las disposiciones de un proyecto de protocolo sobre un sistema uniforme de señales de carretera y un reglamento uniforme mínimo para la expedición de permisos de conducción de vehículos automotores. Para completar el proyecto referente a la expedición de permisos de conducción, el Secretario General ha emprendido consultas con la Organización Mundial de la Salud encaminadas a revisar ciertas recomendaciones relativas al grado de aptitud física y mental de los solicitantes de permisos de conducción. También ha pedido a los gobiernos información sobre el reconocimiento recíproco de los permisos nacionales de conducción en la circulación internacional.

b) FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS Y MERCADERÍAS

El Secretario General informó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones en su octavo período de sesiones, y al Consejo Económico y Social en su 23º período de sesiones, de los resultados de la encuesta relativa a la aplicación de las recomendaciones de la Reunión de Expertos sobre Pasaportes y Formalidades de Frontera celebrada en 1947, y al desarrollo del turismo internacional, su creciente importancia y sus perspectivas futuras. Las respuestas recibidas de los gobiernos indican que tienen profundo interés en que las Naciones Unidas continúen ocupándose de los problemas relacionados con la facilitación de los viajes internacionales y la simplificación de las formalidades en materia de pasaportes y paso de fronteras. De conformidad con una decisión adoptada por el Consejo en su 23º período de sesiones, el Secretario General completará su informe sobre las medidas adoptadas para el desarrollo de los viajes internacionales en cuanto reciba la información necesaria de los gobiernos que aún no han contestado a la petición del Consejo. Con respecto a la ratificación de la Convención sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal de Vehículos Particulares de Carretera, la Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, y el Protocolo Adicional Adjunto (1954), el Secretario General ha señalado a la atención de los gobiernos la resolución aprobada por el Consejo en su 23º período

de sesiones en la que ha recomendado que se ratifiquen lo antes posible estos instrumentos a fin de facilitar el fomento del turismo internacional mediante la aplicación de procedimientos aduaneros simplificados. Para entrar en vigor, las dos convenciones requieren un mínimo de 15 ratificaciones; hasta ahora la primera ha sido ratificada por 12 países y la segunda por 14. El Protocolo Adicional, que entró en vigor el 28 de junio de 1956 por haberse recibido el mínimo establecido de 5 ratificaciones, ha sido ratificado por 10 países.

8. Servicios de estadística de las Naciones Unidas

a) MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES

Las Naciones Unidas han seguido proporcionando a los países diversas formas de asistencia, que comprenden desde la publicación de estudios metodológicos para facilitar el cumplimiento uniforme de las recomendaciones de la Comisión de Estadística, hasta la prestación de ayuda directa a 24 países (dentro del programa de asistencia técnica) por medio de 39 estadígrafos consultores enviados para resolver problemas especiales. Se concedieron becas para ampliar estudios en el extranjero a 20 estadígrafos de 14 países. Entre los numerosos campos de trabajo abarcados figuran los siguientes: estadísticas económicas en general, estadísticas industriales, de distribución, de transportes, del ingreso nacional y de población, pesos y medidas, muestreo estadístico, verificación de la calidad, análisis estadístico, tabulación mecánica y organización estadística. El Centro de Capacitación de Estadígrafos, que depende de la Universidad de Filipinas y tiene carácter permanente, continuó ofreciendo sus cursos académicos y cursos de formación dentro del empleo con una matrícula cada vez más numerosa.

El Centro Interamericano de Bioestadística, establecido en Santiago de Chile en 1952 por el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas, continuó sus actividades como curso ordinario de la Escuela de Sanidad de Chile, ya que las Naciones Unidas se retiraron de él en 1956. El último informe de las Naciones Unidas sobre el Centro, correspondiente al período comprendido entre 1952 y 1955, está publicado en la *Serie de Informes Estadísticos*.

La Conferencia de Estadígrafos Europeos (patrocinada conjuntamente por la Comisión de Estadística y la Comisión Económica para Europa) celebró su cuarto período de sesiones a fines de junio de 1956. Se examinaron los informes de los distintos grupos de trabajo y se determinó el programa de actividades para 1956-1957. Se acordó entre otras cosas la organización de una serie de seminarios sobre determinadas materias estadísticas para permitir el intercambio de información y experiencias entre los países de la región. El primero de dichos seminarios (patrocinado conjuntamente por el Gobierno de Grecia, la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas) se celebró en Atenas en mayo de 1957, y asistieron a él participantes de Austria, España, Grecia y Yugoslavia. El Seminario estudió los métodos, técnicas e instrumentos prácticos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Estadística sobre estadísticas industriales mensuales, trimestrales, anuales y menos frecuentes.

Durante el período examinado, los grupos de trabajo de la Conferencia celebraron reuniones sobre los temas siguientes: censos y encuestas agrícolas; censos de población y censos de habitación; empleo de máquinas electrónicas en las operaciones estadísticas; censos generales de la economía; y consumo de capital.

La Comisión de Estadística en su noveno período de sesiones y la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente en su 13º período de sesiones hicieron suya una resolución de la Cuarta Conferencia Regional de Estadígrafos de Asia y el Lejano Oriente en el sentido de que la Conferencia fuera establecida en forma permanente. La Quinta Conferencia Regional de Estadígrafos de Asia y el Lejano Oriente, convocada en abril de 1957, quedó así reconstituida como primer período de sesiones de la Conferencia de Estadígrafos Asiáticos. Este período de sesiones (patrocinado conjuntamente por la secretaría de la CEALO, la Oficina de Estadística y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) se consagró principalmente a los planes para el censo agrícola mundial de 1960. Se subrayó la necesidad de uniformar definiciones, conceptos y métodos con el fin de mejorar tanto la calidad como la comparabilidad internacional de los datos estadísticos, y se pidió una amplia participación por parte de todos los países de la región. La Conferencia acordó sus atribuciones y elaboró un programa de trabajo a corto plazo que incluía la formación profesional, los censos de población y los cursos agrícolas, el empleo de los métodos de muestreo y posiblemente investigaciones sobre la formación de capital y los presupuestos familiares. Se va a preparar un programa a largo plazo para considerarlo en el próximo período de sesiones, que se celebrará dentro de 15 ó 18 meses.

En agosto de 1956 el Consejo Económico y Social hizo suya una recomendación de la Comisión de Estadística al efecto de "mejorar y sistematizar las disposiciones relativas a la prestación de servicios de asesoramiento en materia de estadística a los países que lo soliciten", en vista de que "es necesario intensificar las actividades en materia de estadística en las partes del mundo en que las estadísticas son insuficientes, en particular en las regiones que abarcan la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y la Comisión Económica para América Latina, así como en el Oriente Medio y en África". Esta recomendación se cumplirá poniendo a disposición de los países de la región técnicos de la Oficina de Estadística que estarán destacados allí, y proporcionando asistencia a los gobiernos de los Estados Miembros que la soliciten.

b) ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESTADÍSTICAS

Una de las funciones más importantes de la Oficina de Estadística es formular y difundir el empleo de normas, conceptos, definiciones y clasificaciones, y adoptar métodos uniformes para elaborar y presentar estadísticas para fines internacionales. Por supuesto, no se trata de recomendar a los países que empleen sin discriminación las normas internacionales, sino de recomendar su uso en ciertas esferas en que las comparaciones son importantes y aun indispensables. En otras esferas se proporciona asistencia para el establecimiento de sistemas nacionales de estadísticas que reflejen los problemas nacionales, pero que permitan a la vez que los países tengan en cuenta las normas internacionales.

Los gobiernos nacionales utilizan cada vez más las 18 publicaciones sobre normas estadísticas y métodos,

además de las definiciones de trabajo incluidas en el *Suplemento al Boletín Mensual de Estadística*. Esto es especialmente cierto en el caso de los países cuyas actividades estadísticas estén aún insuficientemente desarrolladas. Anteriormente no existía ninguna literatura técnica de este tipo, y no solamente se están empleando ahora las definiciones mencionadas en los trabajos estadísticos de los gobiernos, sino que se las usa como textos básicos para las actividades de formación profesional tanto nacionales como internacionales.

El número de países que utilizan o han decidido utilizar la *Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional* (CUCI) asciende actualmente a 77, y 42 países están haciendo uso de la *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas* (CIIU) para la elaboración de sus estadísticas industriales. De un estudio reciente sobre la aplicación de estas clasificaciones en los distintos países se dedujo que más de 50 países utilizaban las recomendaciones internacionales sobre estadísticas industriales o se conformaban a ellas en la práctica. En lo que respecta al ingreso nacional, la Oficina de Estadística distribuyó en 1956 a los diversos servicios estadísticos nacionales el *Primer Cuestionario de Cuentas Nacionales*, en el que se solicitaban cifras detalladas para los nueve cuadros principales de *Un sistema de cuentas nacionales y correspondientes cuadros estadísticos*. A base de las excelentes respuestas al cuestionario, completadas con informaciones sacadas de la correspondencia mantenida con las diversas autoridades estadísticas nacionales y de publicaciones de carácter nacional, la Oficina de Estadística ha reunido y analizado para su publicación una serie completa de las últimas estadísticas disponibles de cuentas nacionales correspondientes a 64 países. Estos datos se han publicado en *Statistics of National Income and Expenditure* (Estadísticas de los Ingresos y los Gastos Nacionales).

Siguen progresando los planes para el programa del censo mundial de población de 1960. Se ha redactado y distribuido un proyecto revisado de las recomendaciones de las Naciones Unidas (que hacen suyos los comentarios de la Comisión de Estadística en su noveno período de sesiones) sobre los temas principales del censo y sus definiciones. Dicha revisión fué también objeto de discusión y comentarios durante el año en las siguientes reuniones regionales: el cuarto período de sesiones de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales del Instituto Interamericano de Estadística; el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre los censos de población y de la vivienda de la Conferencia de Estadígrafos Europeos y la Conferencia Africana sobre Estadísticas Vitales y Sanitarias. La Comisión de Población consideró también el proyecto revisado. Se prevé la celebración de nuevas reuniones regionales sobre este tema antes de que termine el año 1957. Se combinarán las diversas propuestas y puntos de vista de estos organismos para presentar un proyecto conjunto a la Comisión de Estadística en su décimo período de sesiones en 1958, con el fin de que dé su aprobación final a las recomendaciones sobre el Censo de Población y de que éstas puedan distribuirse sin demora a los distintos países, de manera que se las pueda estudiar en relación con los planes nacionales de población. Se está terminando la serie de estudios metodológicos que se utilizarán como manuales para el programa del censo.

En un documento titulado "Principios generales para un censo de habitación" se han publicado y dis-

tribuido las recomendaciones para un programa de censos de habitación que se adapte a las necesidades de los diversos países, y se ha formulado una lista de definiciones internacionales y nacionales de unidades de habitación y viviendas que servirá como documento de referencia. Estos "Principios" han sido objeto de discusión por parte de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales del Instituto Interamericano de Estadística y del Grupo de Trabajo sobre censos de población y de la vivienda de la Conferencia de Estadígrafos Europeos.

En su noveno período de sesiones la Comisión de Estadística pidió que se investigaran los cambios que son necesarios en la *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas*, a la luz de las necesidades y prácticas de los distintos países que la hubieran utilizado para elaborar sus propias clasificaciones nacionales. Con el fin de estudiar las modificaciones necesarias se compararon con la "Clasificación" las clasificaciones nacionales de 27 países. Tomando como base los resultados de dicha comparación, se ha preparado un proyecto de revisión que ha sido distribuido a los gobiernos y a otros organismos interesados para que formulen comentarios. Se presentará un informe sobre este tema a la Comisión de Estadística en su décimo período de sesiones. La proximidad de los censos de población mundial de 1960 y los trabajos sobre estadísticas de la industria y de la distribución que se están realizando actualmente hacen especialmente necesarias la revisión y clasificación de algunos puntos de la "Clasificación".

Se continuó la labor sobre las estadísticas de la distribución. Se modificó debidamente el "Programa de Estadísticas de la Distribución", que se distribuyó para que sirviera de orientación, de conformidad con la petición de la Comisión de Estadística en su noveno período de sesiones. Se está preparando además un estudio sobre las prácticas, conceptos y definiciones nacionales que se publicará en los *Estudios de Métodos*, serie publicada por la Oficina de Estadística. Se ha emprendido un estudio sobre las encuestas industriales llevadas a cabo en los últimos cinco años. Dentro de poco se distribuirán los resultados de esta encuesta, juntamente con las revisiones de las normas internacionales que han sido sugeridas, para que los gobiernos den a conocer sus comentarios; la Comisión lo estudiará entonces en su décimo período de sesiones.

En relación con la enumeración de territorios aduaneros del mundo considerada por la Comisión en su período de sesiones de 1956, se pidió al Secretario General que "enumerara los puertos francos y zonas francas, y que cuando fuere posible indicara la magnitud del comercio de cada uno así como la medida en que dicho comercio estaba incluido en las estadísticas nacionales de importación o exportación de mercaderías". Se distribuyó a los gobiernos un cuestionario con el fin de que esos datos figuren en una edición revisada de la "Lista de Territorios Aduaneros".

c) RECOPIACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS

La Oficina de Estadística ha continuado la tarea habitual de recopilar y publicar datos en materia de comercio exterior, producción y precios, transportes, ingreso nacional, población y estadísticas vitales, y también en otros campos especiales según se necesite, y ha mantenido al día los resúmenes de datos para obtener totales regionales y mundiales en la forma

descrita en la última memoria del Secretario General. Durante el período estudiado se publicaron los siguientes documentos anuales ordinarios: el *Statistical Yearbook, 1956* (Anuario Estadístico, 1956), que contiene las series económicas y sociales más importantes; el *Demographic Yearbook, 1956* (Anuario Demográfico, 1956), en el que se incluyen las principales series demográficas, prestando especial atención a los censos de población, y particularmente a las características económicas, la composición étnica y las estadísticas de la educación; y el *Yearbook of International Trade Statistics, 1955* (Anuario de Estadísticas del Comercio Internacional, 1955), que da estadísticas anuales detalladas para 104 países que representan el 98% del comercio mundial.

Estos tres Anuarios son libros básicos de referencia y se complementan con las publicaciones adicionales siguientes, que aparecen mensual o trimestralmente: *Boletín Mensual de Estadística*, que contiene series de estadísticas sobre más de 60 materias referentes a 140 países y territorios y datos trimestrales sobre los totales mundiales y regionales más importantes, así como artículos especiales sobre las tendencias económicas y sociales más importantes; suplementos al *Boletín Mensual de Estadística*, publicados periódicamente con definiciones detalladas y notas explicativas sobre el alcance, esfera de aplicación y métodos de elaboración de las series que aparecen en el Boletín; *Commodity Trade Statistics* (Estadísticas del Comercio de Mercaderías) (trimestral), que contiene estadísticas sobre importaciones y exportaciones clasificadas en el orden de los 150 grupos de la CUCI y resúmenes dispuestos con arreglo a las 10 secciones de la CUCI; *Direction of International Trade* (Orientación del Comercio Internacional) (números mensuales con un resumen anual, publicados conjuntamente por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), que contienen estadísticas de las exportaciones e importaciones totales de unos 113 países, clasificadas según la orientación; *Population and Vital Statistics Reports* (Estadísticas de Población y Vitales) (trimestral), en que figuran los últimos datos disponibles sobre las tasas de natalidad, mortalidad y defunción de menores, los totales de los censos de población y los cálculos corrientes de población concernientes a más de 200 países y territorios, así como los totales conexos correspondientes a la población continental y mundial; *Statistics of National Income and Expenditure* (Estadísticas de los Ingresos y los Gastos Nacionales) (ahora anual, en vez de semestral), en que figuran los datos más recientes sobre el ingreso y el producto nacionales de más de 60 países, juntamente con los detalles correspondientes; y *Statistical Notes* (Notas Estadísticas), en que se describen los acontecimientos de actualidad en materia de estadísticas internacionales.

Además de las publicaciones mencionadas, han aparecido el segundo estudio de una serie sobre energía (*World Energy Supplies, 1951-1954*), que contiene los datos correspondientes a 150 países; un estudio titulado *Per Capita National Product of Fifty-Five Countries: 1952-1954*; y se ha continuado la publicación de las experiencias de los distintos países en la realización de estudios por el método del muestreo en *Encuestas a base de muestras de interés actual*.

9. Actividades económicas regionales

Las Comisiones Económicas para Europa y para Asia y el Lejano Oriente celebraron su décimo aniversario

durante el período que se examina. En la CEE se hizo especial hincapié en las responsabilidades de la Comisión como órgano para una cooperación general de todos los países de Europa, teniendo en cuenta especialmente el movimiento para una integración económica regional europea. Se prestó también creciente atención al problema general de las necesidades y disponibilidades de energía en Europa.

Un importante acontecimiento, en lo que se refiere a la CEALO fué el que hiciera suya una declaración formulada por cuatro países ribereños sobre su intención de proseguir juntamente con la Oficina de Hidráulica Fluvial y Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos el estudio de los programas previstos para la cuenta del bajo Mekong en relación con la energía hidroeléctrica, la navegación, el riego, el drenaje y la defensa contra las inundaciones. La importancia creciente concedida por la CEALO a las cuestiones comerciales se reflejó en su decisión de substituir su Comité de Industria y Comercio por dos Comités independientes, uno de Comercio y otro de Industria y Recursos Naturales.

Las cuestiones comerciales constituyeron también el tema principal de los debates de la Comisión Económica para América Latina en relación con el programa de integración económica de la América Central, la iniciación de estudios sobre un mercado regional que comprendería toda la América Latina para favorecer el crecimiento de las industrias, y el estudio de medidas que faciliten el comercio plurilateral y el régimen de pagos multilaterales, especialmente dentro de los límites de la región.

Tanto la CEALO como la CEPAL continuaron consagrandone una gran parte de sus recursos a las cuestiones de desarrollo económico y planificación en sus regiones respectivas. Las tres Comisiones regionales mantuvieron e incrementaron su cooperación con las diversas esferas del programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. Revisaron también sus programas de trabajo a la luz de la resolución 630 (XXII) del Consejo Económico y Social, con el fin de lograr una mayor concentración de sus actividades en los principales problemas económicos y sociales.

a) COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

La Comisión Económica para Europa, en su 12º período de sesiones celebrado en abril y mayo de 1957, aprobó varias resoluciones relativas a la contaminación de las aguas en Europa; la propuesta de un acuerdo paneuropeo de cooperación económica; el fomento de las relaciones entre los países del este y el oeste de Europa; la cooperación en los aspectos económicos de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos; el programa de trabajo de la Comisión para 1957-1958; el décimo aniversario de la creación de la Comisión Económica para Europa; y el establecimiento de la igualdad de trato a los tres idiomas de trabajo de la Comisión. La Comisión decidió también que continuara sus estudios el Grupo de Trabajo especial sobre los problemas del gas. La Comisión consideró y aprobó el proyecto de programa de trabajo de sus órganos auxiliares y de su secretaría para 1957-1958.

Al considerar la resolución 630 A I (XXII) del Consejo Económico y Social, la Comisión pidió a sus órganos auxiliares que tuvieran siempre presente dicha resolución cuando prepararan sus futuros programas de trabajo y señaló a su atención una nota del Secretario Ejecutivo a ese respecto. Expresó su satisfacción

por las disposiciones tomadas por los gobiernos y por la secretaría con objeto de lograr una mayor coordinación y concentración de las actividades.

La Comisión consideró también una propuesta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tendiente a intensificar la cooperación entre los países europeos; la cuestión de las consultas comerciales interregionales; y la situación económica en Europa.

La Comisión no aprobó un proyecto de resolución presentado por Checoslovaquia y tendiente a que el Secretario Ejecutivo, en consulta con los gobiernos de los Estados miembros de la Comisión y en colaboración con los comités competentes, procediera a un nuevo estudio de la propuesta de acuerdo paneuropeo de cooperación económica dentro del marco de la CEE y de las nuevas propuestas que más adelante se pudieran formular acerca de los problemas de la cooperación económica paneuropea.

Varias delegaciones pusieron de relieve que la cuestión de la representación de la República Democrática Alemana en la Comisión seguía pendiente y que para resolverla era necesario invitarla a participar con carácter consultivo en las sesiones plenarias de conformidad con el artículo 8 de las atribuciones de la Comisión. Otros gobiernos se opusieron a cualquier modificación del estatuto jurídico de la Zona Oriental de Alemania en la Comisión; ese estatuto está regido por el artículo 10 de las atribuciones de la misma. Se decidió resumir las declaraciones de las delegaciones en el informe anual de la Comisión al Consejo.

La Comisión aprobó por unanimidad un voto de gracias a su Primer Secretario Ejecutivo después de que muchas delegaciones expresaron su satisfacción por el trabajo que había realizado y le desearon toda clase de éxitos en el porvenir.

La secretaría de la CEE continuó manteniendo una estrecha cooperación con varios organismos especializados, así como con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se mantuvieron relaciones de trabajo con el personal del Consejo de Europa, el Consejo de Ayuda Económica Mutua, la Comisión del Danubio, que tiene su sede en Budapest, la Conferencia Europea de Ministros del Transporte, la Alta Autoridad de la Mancomunidad Europea del Carbón y del Acero, y la Organización de Cooperación Económica Europea.

Agricultura

El Comité de Problemas Agrícolas continuó estudiando regularmente las perspectivas a corto y a largo plazo del mercado de cierto número de productos y emprendió un estudio de los factores que influyen en la demanda de algunos de ellos.

Los órganos auxiliares del Comité continuaron sus trabajos sobre el establecimiento de condiciones de venta uniformes para cereales y frutas cítricas así como de normas uniformes para comprobar la calidad de los productos alimenticios perecederos y sobre los problemas que plantea la mecanización de la agricultura.

Carbón

El Comité del Carbón inició una encuesta sobre las tendencias de la política de los países europeos en materia de carbón y estableció un procedimiento para el intercambio de información sobre la labor realizada para mejorar los métodos de producción de carbón.

El Subcomité de Comercio del Carbón prosiguió su estudio trimestral ordinario de la situación de los mercados del carbón y del coque.

El Grupo de Trabajo sobre la utilización consideró cuestiones tales como el problema de la calefacción urbana por distritos y los medios de aumentar el número de carbones empleados para la carbonización.

El Grupo de Trabajo sobre la clasificación terminó el sistema de clasificación internacional de las hullas y continuó sus trabajos sobre sistemas internacionales de clasificación del coque de hulla fabricado a alta temperatura y de los carbones pardos.

Gas

El Grupo de Trabajo especial sobre los problemas del gas celebró dos reuniones y estudió los problemas de mejoramiento de la flexibilidad de la oferta y de la demanda de gas; producción, transporte, distribución y utilización del gas natural; problemas jurídicos que plantea la transmisión de gas a larga distancia mediante tuberías internacionales; y mejoramiento de las estadísticas del gas. Se publicó por primera vez un *Annual Bulletin of Gas Statistics for Europe*.

Energía eléctrica

El Comité de Energía Eléctrica continuó estudiando la situación de la energía eléctrica en Europa. Se inició la publicación regular de las estadísticas de energía eléctrica de todos los países europeos y se preparó un estudio de las nuevas posibilidades de realizar un intercambio de energía eléctrica entre los países del centro y del sudeste de Europa. Se celebró una reunión de especialistas para estudiar la posibilidad de reducir los gastos de construcción de las centrales de energía hidroeléctrica. Respecto a los recursos hidroeléctricos de los países europeos, el Comité aprobó una recomendación referente a la medición de la temperatura en los ríos de interés común. Continuaron los trabajos sobre electrificación rural. Se constituyó una compañía internacional compuesta de empresas de Austria, Italia, la República Federal de Alemania y Yugoslavia con el fin de ejecutar los proyectos elaborados para la exportación de energía eléctrica de Yugoslavia en el marco del sistema "Youngelexport".

Vivienda

El Comité de la Vivienda examinó la situación actual de la vivienda, incluso el papel que desempeñan en el financiamiento de la construcción los capitales privados y las cooperativas de construcción de viviendas, sobre la base de un estudio preparado por la secretaría. Discutió cuestiones tales como la evacuación de las viviendas inhabitables; la organización y los métodos de la administración de la vivienda y la formación profesional en esta materia; y la elaboración de programas de construcción de viviendas. Se hizo un análisis de las medidas adoptadas por los gobiernos en relación con el costo de la construcción de viviendas, prestando especial atención a la industrialización de la construcción de viviendas. Los miembros del Comité tomaron parte en un viaje de estudios a Austria.

Industrias y materiales

El Grupo de Trabajo especial sobre prácticas contractuales en las industrias mecánicas elaboró dos series de condiciones generales para el suministro y el montaje de instalaciones y maquinaria destinadas a la exportación y a la importación, y discutió la posi-

bilidad de formular condiciones generales para el montaje de instalaciones y maquinaria únicamente.

El Grupo de Trabajo especial sobre maquinaria agrícola examinó varios informes preliminares sobre diversos aspectos de la mecanización de la agricultura, intercambios de documentación y clasificación y unificación de la maquinaria agrícola.

Dos relatores, procedentes de la URSS y el Reino Unido respectivamente, comenzaron a trabajar en un informe sobre las consecuencias económicas de la automación en la región.

Transportes

El Comité de Transportes Interiores continuó sus trabajos sobre convenios relativos al transporte por ferrocarril, carreteras y vías de navegación interior. Se aprobó y quedó abierto a la firma el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercaderías peligrosas por carretera. Continuaron los trabajos para un acuerdo análogo sobre transporte de mercaderías peligrosas por vías de navegación interior. Quedó abierto a la firma un proyecto de convención que exime a las administraciones de ferrocarriles del pago de derechos e impuestos sobre las piezas de recambio utilizadas en el extranjero para reparar los vagones standard. Se espera que en breve quede firmado un acuerdo sobre los transportes terrestres internacionales de productos alimenticios perecederos.

El Comité se ocupó también de problemas técnicos relativos al transporte por ferrocarril, estudió diversos tipos de transporte combinado por ferrocarril y carretera y continuó sus estudios sobre tarifas ferroviarias.

Acero

El estudio del mercado del acero siguió siendo la preocupación principal del Comité del Acero. El Comité examinó las perspectivas a largo plazo de la industria del acero y las perspectivas de la demanda en algunos de los principales sectores consumidores de acero. Se terminó un estudio titulado *Steel and Its Alternatives* (El acero y sus materiales substitutivos). Se realizaron también estudios sobre material ferroviario y sobre el alambre y los artículos de alambre. Se preparó un *Repertorio de las organizaciones nacionales de Europa y de los Estados Unidos y de las organizaciones internacionales interesadas en la siderurgia*, así como un informe titulado *Advances in Steel Technology* (Progresos realizados en la técnica del acero).

Madera

El Comité de la Madera examinó la evolución del mercado europeo de la madera blanda aserrada, de los maderos para entibar y de la madera para pulpa, y pidió que se llevara a cabo un examen de las condiciones del mercado de las maderas duras aserradas. Se examinaron también algunos problemas especiales relativos a la exportación y la importación de determinados países, así como las tendencias en la utilización de la madera y de sus productos en la construcción de viviendas.

Continuaron sus trabajos dos órganos mixtos de la FAO y de la CEE: el Comité sobre Técnicas de Explotación Forestal y Capacitación de Obreros Forestales y el Grupo de Trabajo sobre estadísticas de silvicultura y productos forestales. Se organizaron visitas de intercambio y viajes de estudio en relación con el

Comité Mixto, que colaboró también con la Organización Internacional del Trabajo en su sistema de becas para el intercambio de instructores encargados de la formación profesional de los obreros forestales.

Comercio

El Comité de Fomento del Comercio examinó los progresos realizados en lo que respecta a los intercambios comerciales entre los países del este y del oeste de Europa y estudió la posibilidad de realizar nuevos progresos. Se prestó especial atención a problemas tales como la supresión de las restricciones a las importaciones y las exportaciones y la supresión de los obstáculos administrativos y de otra índole. El Comité discutió también el mejoramiento de los medios técnicos de las relaciones comerciales intraeuropeas; el sistema multilateral de pagos; las ferias y exposiciones internacionales; el arbitraje; y la unificación de las condiciones generales de venta.

Juntamente con el quinto período de sesiones del Comité se celebró la cuarta consulta de expertos sobre el comercio entre los países del este y del oeste de Europa.

A raíz de un informe del Secretario Ejecutivo sobre los resultados de sus consultas con los gobiernos, se pondrá en vigor el 1º de julio de 1957 un procedimiento regular para la compensación multilateral de los saldos de las operaciones efectuadas en virtud de acuerdos bilaterales.

Otras actividades

La secretaría trabajó en estrecha colaboración con la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Se continuó el programa conjunto de la AAT y de la CEE para la capacitación práctica en el servicio de jóvenes economistas europeos. La secretaría cooperó también con la AAT en proyectos especiales relativos, en lo principal, a países de Europa meridional.

La Conferencia de Estadígrafos Europeos examinó los informes de los grupos de trabajo sobre las estadísticas de la distribución, las estadísticas relativas a la formación de capital fijo, los indicadores de las variaciones a corto plazo de la coyuntura y las estadísticas relativas a la enseñanza superior y al empleo de graduados. Recibió informes de los organismos especializados y de otras organizaciones internacionales sobre estadísticas agrícolas, estadísticas sobre las condiciones de trabajo y de vida, y estadísticas sobre las causas de defunción. La Conferencia formuló sugerencias concretas respecto a los trabajos estadísticos realizados por diversos comités de la CEE.

Los comités pertinentes de la CEE examinaron diversas cuestiones de interés especial para los países de Europa meridional en materia de energía eléctrica, vivienda, transportes interiores, acero y comercio internacional.

A petición de la Comisión, el Secretario Ejecutivo organizó una consulta de expertos sobre la contaminación de aguas en Europa.

La secretaría ha continuado la publicación de estudios y análisis periódicos entre los que figuran el *Economic Bulletin for Europe* (Boletín Económico para Europa), que aparece trimestralmente, y el *Economic Survey of Europe* (Estudio Económico de Europa), que es publicación anual, y diversos boletines estadísticos.

b) COMISIÓN ECONÓMICA PARA ASIA Y EL LEJANO ORIENTE

La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente celebró su 13º período de sesiones en Bangkok en marzo de 1957. Por tratarse de su 10º aniversario, la Comisión revisó los trabajos realizados durante los últimos 10 años y decidió modificar la orientación de su labor en el sentido de concentrar más los esfuerzos en los grandes problemas a largo plazo, especialmente en los relativos al desarrollo y la planificación económicos, la industrialización, el desarrollo de recursos y los problemas demográficos de la región. La Comisión aprobó resoluciones sobre estudios regionales de las tendencias demográficas, creación de una Conferencia de Estadígrafos Asiáticos, y colonización rural; también decidió establecer un Comité de Industria y Recursos Naturales y un Comité de Comercio, en lugar del Comité de Industria y Comercio existente.

La Comisión siguió trabajando en estrecha cooperación con los organismos especializados. Varias organizaciones no gubernamentales tomaron medidas para mantener enlace con la secretaría en lo que se refiere a los trabajos de la Comisión sobre turismo, arbitraje comercial, unificación de normas y preparación de mapas geológicos.

Desarrollo y planificación económicos

El Grupo de Trabajo sobre planificación y desarrollo económicos examinó las políticas que se siguen en materia de desarrollo y los medios para ejecutar los programas de desarrollo económico en los países de Asia. Su informe, acompañado de la documentación pertinente, se publicó en el *Economic Bulletin for Asia and the Far East* (Boletín Económico para Asia y el Lejano Oriente). El Grupo de Trabajo decidió que en el siguiente período de sesiones examinaría, en colaboración con la FAO, los problemas y técnicas del desarrollo agrícola, así como su planificación y ejecución en relación con el desarrollo económico en general y con la industrialización en particular.

La División de Asuntos Sociales, creada en la Secretaría de la CEALO en conformidad con el plan aprobado por la Asamblea General en 1954, se ocupó de los aspectos sociales del desarrollo económico e industrial, la urbanización y la vivienda.

Se formuló un programa de trabajo sobre estudios demográficos regionales, y la Comisión decidió que se emprendiera un estudio sobre la relación existente entre el crecimiento de la población y el desarrollo económico.

Estudio Económico y Boletín Económico

El *Economic Survey of Asia and the Far East*, 1956 (Estudio Económico de Asia y el Lejano Oriente, 1956) contiene un análisis de la situación económica actual de la región y estudia los problemas de desarrollo económico, producción, comercio, hacienda y precios de cada uno de los países. Se ha continuado publicando el *Economic Bulletin for Asia and the Far East* (Boletín Económico para Asia y el Lejano Oriente).

*Industria y comercio**Industria*

El Subcomité de Recursos Minerales examinó los progresos alcanzados en la producción minera; el aprovechamiento de los recursos minerales; la legislación minera; la prospección aérea; la preparación de un

mapa geológico regional; la formulación de una clasificación uniforme del carbón; y problemas sobre la economía de combustible.

Bajo el patrocinio de la CEALO y de la AAT, un grupo de expertos en energía eléctrica, procedentes de los países de Asia, visitaron la URSS, Suecia, el Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Checoslovaquia y los Estados Unidos de América. El grupo realizó estudios y formuló recomendaciones sobre los aspectos técnicos o de otra naturaleza de los diseños y el funcionamiento de instalaciones modernas. Visitó también centrales de energía atómica y establecimientos de investigación.

El Grupo de Trabajo sobre vivienda y materiales de construcción estudió la situación de la vivienda y sus problemas en la región, y recomendó la adopción de medidas legislativas, financieras y de organización para el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales en materia de construcción. Creó comités asesores para los dos Centros Regionales de la Vivienda establecidos en la India e Indonesia.

El Grupo de Trabajo de las secretarías de la CEALO, la OIT y la UNESCO sobre el personal calificado necesario para el desarrollo económico examinó la situación en que se encuentran los planes y presupuestos relativos a la mano de obra. Se ocupó también de la falta de personal capacitado para el aprovechamiento de los recursos minerales, para el desarrollo de la energía eléctrica y para las pequeñas industrias; de los problemas de la formación de personal directivo para las empresas públicas y privadas; y de diversos planes para el intercambio de visitas de personal técnicamente formado. El Grupo recomendó que los órganos técnicos secundarios de la CEALO continuaran estudiando estos problemas.

El Subcomité del Hierro y el Acero tomó nota de los progresos realizados por la industria siderúrgica en la región, tal como se exponen en el *Iron and Steel Bulletin* (Boletín del Hierro y del Acero) de la secretaría y en su informe sobre los planes y problemas de esta industria. Examinó diversos aspectos técnicos y económicos de la misma; tendencias que se han observado en el consumo del acero y perspectivas de la demanda en la región; y facilidades para la formación técnica de personal.

El Comité de Industria y Comercio examinó las actividades de sus órganos secundarios y de la secretaría sobre pequeñas industrias e industrias domésticas; aprovechamiento de los recursos minerales; energía eléctrica; industria siderúrgica; materiales de construcción; desarrollo industrial; y formación profesional. Decidió reunir un grupo de expertos para evaluar el potencial hidroeléctrico de los países de la región. Puso de relieve la importancia de los mapas geológicos y mineros; el intercambio de información sobre las zonas petrolíferas; geología del petróleo; combustibles de uso corriente y aprovechamiento de la energía nuclear como fuente de combustible; y legislación minera adecuada para el aprovechamiento de los recursos mineros de la región. Con el fin de poder dar aplicación a los programas de viviendas, el Comité propuso una pronta modificación de las disposiciones legislativas relativas a la adquisición de la tierra, de las reglamentaciones y códigos de construcción y de la tributación. Puso también de relieve la necesidad de ampliar los servicios de formación profesional tanto para las pequeñas industrias como para las industrias en gran escala.

Comercio

El Subcomité de Comercio examinó la evolución actual del comercio y la política comercial. Tomó nota de las medidas adoptadas para liberalizar el comercio, y de la mayor ayuda económica prestada por países no pertenecientes a la región, y prestó especial atención a las dificultades que estorban la expansión del comercio internacional. Estudió también los problemas de fletes marítimos, las facilidades para la navegación y facilidades conexas en la región, y el comercio en tránsito de los países que carecen de acceso al mar. Se discutieron también medidas para el fomento del comercio, incluso ferias y exposiciones internacionales, análisis de los mercados, formación de personal para el fomento del comercio y arbitraje comercial.

El Comité de Industria y Comercio destacó la importancia de ampliar el comercio interregional y propuso que, en colaboración con las secretarías de la CEE y de la Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio, se hiciera un estudio sobre los efectos que en el comercio de los países de Asia y el Lejano Oriente podrían tener las medidas que en Europa se adopten para el comercio interregional y la integración económica. El Comité decidió reunir a un grupo de expertos en procedimientos y formalidades aduaneras, en cooperación con la secretaría de la CIOIC y la del *Customs Cooperation Council*. Decidió también continuar estudiando los problemas de la navegación y las dificultades que encuentran los países de la región.

Transportes interiores

El Grupo de Trabajo de la CEALO y la FAO para el estudio de las traviesas de madera estudió medidas para solucionar la creciente escasez regional de tipos aceptables de traviesas y formuló varias recomendaciones.

El 22 de junio de 1956 fué firmada en Bangkok la "Convención relativa al Arqueo y Registro de las Embarcaciones Empleadas en la Navegación Interior" por representantes de Camboja, Indonesia, Laos, la República de China, la República del Viet-Nam y Tailandia, y quedó abierta a la adhesión de otros Estados. El "sistema uniforme de boyas para las vías de navegación interior en Asia y el Lejano Oriente" va implantándose gradualmente en los países miembros de la Comisión conforme a la recomendación del Subcomité de Vías de Navegación Interior. El Centro de formación de mecánicos de motores marinos diesel, patrocinado conjuntamente por la OIT y la CEALO, terminó su primer curso y comenzó el segundo.

El Comité de Transportes Interiores examinó los trabajos realizados en materia de ferrocarriles, carreteras, vías de navegación interior y telecomunicaciones. Formuló principios generales y métodos para calcular los costos comparados de los diferentes medios de transporte, para uso de los países que planifiquen sus sistemas de transporte sobre una base de coordinación, y formuló recomendaciones sobre la utilización de vehículos frigoríficos en los transportes interiores. Aprobó una resolución por la cual pedía que, en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la AAT, se realice un estudio sobre las necesidades nacionales y regionales en materia de telecomunicaciones y que, posteriormente, se convoque conjuntamente por la CEALO y la OIT una conferencia de miembros y de miembros asociados con el fin de

que formulen recomendaciones sobre las medidas que proceda tomar.

Al terminarse los estudios de la secretaría sobre los aspectos de construcción y de tráfico de la seguridad de las carreteras, se celebró un seminario sobre la seguridad de las carreteras; asistieron al mismo expertos enviados por gobiernos y por organizaciones técnicas y profesionales.

Alimentación y agricultura

La División Mixta de Agricultura de la CEALO y la FAO continuó su estudio de la situación actual y sus trabajos sobre políticas de precios de los productos agrícolas y desarrollo y planificación agrícolas. Los resultados de su estudio sobre la elasticidad en función del precio y del ingreso de la demanda de arroz y otros cereales se pusieron a disposición del Subcomité Consultivo sobre Aspectos Económicos del Arroz, del Comité de la FAO de Problemas de Productos Esenciales. El Seminario sobre Financiamiento del Desarrollo Agrícola y Crédito Agrícola patrocinado por la CEALO y la FAO examinó los problemas de financiamiento del desarrollo, ahorro en la agricultura, sistemas de crédito agrícola, financiamiento de la comercialización, aspectos financieros del asentamiento y la reforma agraria, y problemas financieros de los pequeños propietarios.

Hidráulica fluvial y aprovechamiento de los recursos hidráulicos

Un grupo de expertos llevó a cabo un reconocimiento de la cuenca inferior del río Mekong. En su informe se describen varios proyectos que se consideran realizables técnicamente e interesantes desde el punto de vista económico y que se llevarían a efecto en distintos puntos de la corriente principal. En el 13º período de sesiones de la CEALO las delegaciones de los cuatro países ribereños, a saber, Laos, Camboja, Tailandia y la República del Viet-Nam, presentaron una declaración conjunta que la Comisión hizo suya. En una reunión posterior de expertos técnicos de los cuatro países se seleccionaron tres proyectos para un estudio más detallado de su prioridad y se pidió al Secretario Ejecutivo que estudiara la posibilidad de obtener ayuda de las Naciones Unidas y de los organismos especializados interesados, así como de los gobiernos. Reconociendo la interdependencia de los proyectos y la necesidad de una acción coordinada y de un desarrollo integrado de la cuenca del bajo Mekong, los expertos recomendaron la creación de un comité de coordinación de las investigaciones, compuesto por representantes de todos los países ribereños. Dicho comité actuaría bajo los auspicios de las Naciones Unidas, representadas por la CEALO, y dispondría de los servicios de la secretaría de la misma.

Se publicaron los siguientes estudios: *A Survey of Water Resources Development in Burma, Pakistan and India* y *Glossary of Hydrologic Terms used in Asia and the Far East*. En cooperación con la Organización Meteorológica Mundial se empezó a preparar un estudio conjunto sobre las deficiencias más importantes de los datos hidrológicos. Se estudiaron los problemas de organización para la planificación y puesta en práctica de los proyectos sobre la cuenca del río, y se hicieron preparativos para la Tercera Conferencia Técnica Regional sobre Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos.

Estadística

Además de reunir y publicar diversas estadísticas básicas en la revista trimestral *Economic Bulletin for Asia and the Far East*, la secretaría publicó una *Guide to Asian Economic Statistics* y un estudio de la organización y actividades estadísticas de los países de la región. Se emprendió un estudio sobre los métodos para calcular la formación de capital en la región de la CEALO. La primera reunión de la Conferencia de Estadígrafos Asiáticos, que se realizó en abril de 1957 en colaboración con la FAO, recomendó varias medidas para mejorar la calidad y comparabilidad internacional de las estadísticas; esas medidas deberán tenerse en cuenta en la ejecución del programa de la FAO sobre censos agrícolas mundiales para 1960.

Servicios de asesoramiento y de asistencia técnica

La secretaría de la CEALO continuó proporcionando sus servicios de asesoramiento y de asistencia técnica en relación con el programa de trabajo de la Comisión y en colaboración con la AAT y los organismos especializados. Se fomentaron la divulgación y el intercambio de información sobre cuestiones científicas y técnicas mediante la publicación de periódicos y la organización o participación en exposiciones, demostraciones visuales, viajes de estudio y pruebas de laboratorio. Se proporcionaron servicios de asesoramiento en diversas materias económicas y técnicas. La secretaría continuó colaborando en la preparación de peticiones de asistencia técnica y ayudando a la AAT a contratar e instruir expertos, a la vez que formulando comentarios sobre los informes de estos últimos.

c) COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA

La Comisión Económica para América Latina celebró su séptimo período de sesiones en La Paz desde el 15 al 29 de mayo de 1957. Revisó y modificó su programa de trabajo con el fin de lograr una mayor concentración sobre los problemas principales a largo plazo. El marcado interés de la Comisión por encontrar soluciones a los problemas prácticos de política económica se refleja en sus recomendaciones hechas a los gobiernos y en sus peticiones de estudios dirigidas a la secretaría. Resultó evidente que la mayoría de los países de América Latina estaban procurando conjugar los esfuerzos públicos y privados en programas o políticas de desarrollo económico. En algunos casos se había partido de estudios cuidadosos de los problemas y las perspectivas de crecimiento, valiéndose para ello de la técnica de análisis elaborada por la secretaría de la CEPAL. Dicha técnica consiste fundamentalmente en realizar un estudio que proporcione una visión integral y dinámica del proceso económico y un cálculo aproximado de las consecuencias que puede tener la adopción o no adopción de determinadas medidas en el momento adecuado. Constituye la primera fase de programación del desarrollo económico y sirve de orientación para la formulación de la política económica. Tal política puede ser muy distinta en los diferentes países, según que el factor dinámico del crecimiento representado por el sector de exportación tenga caracteres acentuados o débiles. Los estudios por países que la Secretaría ha realizado — para Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y México — han abarcado casos en que se presentan ambos extremos y por ello han contribuido mucho a una mejor comprensión de los problemas generales de desarrollo de América Latina.

Actividades en el campo del desarrollo económico general

Durante los debates sobre este tema se abordaron varios de los problemas en que se percibe la necesidad de establecer mejores orientaciones. Uno de ellos es el de cómo traducir la diagnosis de los problemas de desarrollo en un programa o una política orgánica en que los proyectos públicos y privados para cada sector se evalúen adecuadamente y mantengan entre sí la necesaria interrelación, en forma compatible con el equilibrio externo e interno. La experiencia que la Secretaría va adquiriendo a través de sus trabajos le ha permitido prestar valiosos servicios de asesoramiento a los gobiernos que lo han solicitado. La consideración de los proyectos de desarrollo ha sido hecha con demasiada frecuencia desde el punto de vista del proyecto en sí, sin estimar sus consecuencias más generales y su relación con otros. A este respecto, se consideró que el Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, de la CEPAL y la AAT, habría de ser de suma utilidad para mejorar la evaluación y elaboración de proyectos.

Se observó que en muchos países de América Latina los esfuerzos por coordinar las políticas a corto y a largo plazo habían entrañado una concentración de la atención en los métodos para afrontar la inflación. Se habían hecho esfuerzos antiinflacionarios de primera magnitud, aunque ello a veces al precio de reducir la producción y el empleo en aquellos países en que el crecimiento del sector de exportación o la afluencia de capital del exterior no habían sido suficientes para proveer el volumen global de bienes y servicios, especialmente los de importación indispensables, necesario para asegurar la marcha continuada de la economía.

La secretaría publicó el cuarto volumen de su serie *Analyses and Projections of Economic Development* (Análisis y proyecciones de desarrollo económico), el *Economic Development of Bolivia* (Desarrollo económico de Bolivia), y dejó casi terminado el quinto volumen: *Economic Development of Argentina* (Desarrollo económico de la Argentina). Preparó también un estudio especial titulado "External Disequilibrium in Latin-America's Economic Development: The Case of Mexico" (El desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoamericano: el caso de México).

Continuaron celebrándose cursos regulares anuales en virtud del programa CEPAL/AAT de capacitación en problemas de desarrollo económico. Se celebró también un segundo curso intensivo para economistas y funcionarios de Río de Janeiro a fines de 1956, y se prevé la celebración de cursos análogos en Río de Janeiro y Caracas en agosto y septiembre de 1957, respectivamente.

Comercio internacional y finanzas

Simultáneamente con su examen de los problemas de desarrollo, la Comisión continuó sus esfuerzos para intensificar las relaciones económicas regionales. El Comité de Comercio de la CEPAL, que celebró su primer período de sesiones en noviembre de 1956, decidió emprender ciertos estudios con este objetivo. Los esfuerzos del Comité por eliminar los obstáculos creados por el bilateralismo en los convenios de pagos interlatinoamericanos constituyen un punto de partida en esta dirección, y la Comisión tomó nota de un informe preparado para el Comité por un grupo de trabajo de representantes de bancos centrales de América

Latina. A la vez, observó que se abrían perspectivas de ampliación del mercado regional interlatinoamericano mediante otras medidas, y que se vislumbraba ya el desarrollo de ciertas industrias a base de un mercado regional multilateral.

La Comisión tomó nota con satisfacción de los progresos hacia una mayor integración económica logrados por el Comité de Cooperación Económica de la América Central, cuyos miembros son los ministros de economía de las repúblicas centroamericanas. Tanto en materia de instrumentos de política comercial como de preparación de proyectos de desarrollo industrial complementario, el programa centroamericano refleja la naturaleza de los problemas básicos a que tendrá que hacer frente la creación de un mercado regional entre otros países latinoamericanos. La Comisión estudió atentamente la cuestión del mercado común europeo occidental, insistiendo especialmente sobre sus posibles repercusiones sobre el comercio exterior de América Latina. Se tomó nota de un informe preliminar que al objeto preparó la secretaría ejecutiva, y la Comisión solicitó a la secretaría que siguiera observando atentamente la integración económica de Europa y de otras áreas, teniendo particularmente en cuenta su repercusión en América Latina.

Estudios de industrias

Durante el séptimo período de sesiones de la Comisión muchas delegaciones expresaron su satisfacción por el elevado nivel técnico y la significación práctica de las conclusiones de la Junta Latinoamericana de Expertos en la Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y Acero. Esta reunión, organizada conjuntamente por la CEPAL, la AAT y la Associação Brasileira de Metais, se celebró en São Paulo en octubre de 1956, con la asistencia de 213 expertos de América Latina y 67 expertos de otras partes del mundo. Entre los participantes había representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. Los 99 trabajos presentados a la Junta comprendían diversos aspectos de la industria siderúrgica y de los procedimientos de transformación de hierro y acero, problemas de formación de personal y problemas del desarrollo de las industrias mecánicas y metalúrgicas latinoamericanas. Además de los documentos presentados por la secretaría de la CEPAL y sus consultores, presentaron documentos de la CEAL, la OIT, la UNESCO y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, así como diversas instituciones de investigación, asociaciones profesionales, expertos individuales y empresas tanto latinoamericanas como de otras partes del mundo.

Después de estudiar el informe de la Junta, la Comisión recomendó a la secretaría que, con la colaboración de la AAT y siempre que sus recursos lo permitieran, continuara los estudios sobre esta materia, y que convocara — cuando el estado de los estudios lo justificase, y con la cooperación de los gobiernos, de la AAT y de organismos especializados — a una junta de expertos con el fin de considerar los estudios realizados y sugerir las modificaciones convenientes a los programas de trabajo.

A raíz de una recomendación de la reunión de São Paulo, el Gobierno del Brasil puso a disposición de la

CEPAL fondos para la preparación de un estudio de la industria de automotores en el Brasil. La primera fase de este estudio quedó terminada en junio de 1957 y, sobre la base de sus conclusiones, el Gobierno del Brasil pidió a la secretaría que pasara a la segunda fase del estudio.

El Grupo Asesor en Papel y Celulosa, patrocinado conjuntamente por la CEPAL, la FAO y la AAT, terminó los estudios solicitados por los Gobiernos de la Argentina y Chile y emprendió un estudio análogo en el Perú. El Grupo recibió también peticiones para emprender estudios sobre la industria del papel y de la celulosa en Colombia y México.

A petición del Gobierno del Perú, una comisión estudia actualmente el estado y la estructura de la industria en aquel país y sus posibilidades de desarrollo. Los estudios sobre el terreno de algunos aspectos de esta investigación quedaron terminados en junio de 1957.

Agricultura

La Comisión advirtió que uno de los problemas apremiantes de muchos países latinoamericanos era el relativo atraso del sector agropecuario en lo que respecta a tecnología y producción. Al poco estímulo de los mercados externos en ciertos casos, se agregan con frecuencia medidas internas que han forzado a la agricultura a transferir sus ingresos y sus ahorros a otros sectores de la economía, particularmente a la industria y los servicios. Con arreglo al programa conjunto de la CEPAL y de la FAO se está consagrando una atención especial a estos problemas, especialmente en los estudios nacionales generales de desarrollo económico.

Continuaron los estudios sobre tendencias y productividad del café; se publicó el informe sobre El Salvador y se prevé la publicación del informe sobre Colombia en la segunda mitad de 1957. La secretaría preparó un estudio general sobre la producción de trigo para completar su informe sobre "El Desarrollo Económico del Brasil". Se ha iniciado también un estudio de la producción ganadera en América Latina con investigaciones en la Argentina, y dicha parte del estudio constituirá un capítulo del informe general sobre "El Desarrollo Económico de la Argentina". Se está terminando un estudio acerca de la influencia de las políticas de precios sobre la producción agrícola y ganadera.

Asistencia técnica para el desarrollo económico

La Comisión analizó el papel que desempeña en el programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas, y las delegaciones latinoamericanas expresaron la opinión de que la descentralización de la AAT — practicada actualmente con carácter experimental — presentaba ya un saldo positivo de ventajas para los países beneficiarios de la asistencia técnica. La Comisión, con la abstención de dos delegaciones, aprobó una resolución en la cual expresó su agradecimiento a la Asamblea General por haber autorizado en forma experimental la descentralización de los servicios de la AAT, y manifestó su interés en el sentido de que fuera continuado el experimento de la descentralización de la asistencia técnica, que había aumentado ya considerablemente la eficiencia del programa de asistencia técnica en América Latina.

10. Derechos humanos

a) PROYECTOS DE PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

La Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, encargó a su Tercera Comisión que continuara el examen de los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos. Habiendo aprobado el año anterior el preámbulo y el artículo 1 (relativo al derecho de libre determinación) de ambos pactos, la Comisión decidió primero considerar los artículos de fondo del proyecto de pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y continuar luego con los artículos de fondo del proyecto de pacto de derechos civiles y políticos. Una vez aprobados los artículos fundamentales de ambos pactos, se discutirían las disposiciones generales de cada pacto.

La Comisión aprobó el texto del artículo 6 (derecho a trabajar); del artículo 7 (derecho de toda persona a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias); del artículo 8 (derechos sindicales); del artículo 9 (derecho a la seguridad social); del artículo 10 (derechos relativos a la familia, la madre y el niño); los artículos conjuntos 11 y 12 (derecho a un nivel de vida adecuado); y del artículo 13 (derecho al goce de la salud) del proyecto de pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

La Asamblea General decidió que la Tercera Comisión debería dedicar al debate de los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos el tiempo necesario para completar su consideración, a ser posible, antes de terminar el 13º período de sesiones de la Asamblea General, para que ésta pueda aprobarlos en el mismo período.

b) MEDIDAS PROVISIONALES QUE DEBERÍAN ADOPTARSE EN ESPERA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS PACTOS DE DERECHOS HUMANOS, CON RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A solicitud de Grecia, se incluyó en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General la cuestión de considerar, mientras entran en vigor los pactos de derechos humanos, la posibilidad de que las Naciones Unidas adopten medidas provisionales respecto a las violaciones de derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Derante el debate del tema en la Tercera Comisión, se propuso que la Asamblea General debería invitar a la Comisión de Derechos Humanos a estudiar la posibilidad de crear un comité para examinar cualquier queja presentada por un Estado Miembro contra otro Estado Miembro acerca de violaciones de los derechos humanos. También se propuso que se pidiera a la Comisión que estudiase la posibilidad de establecer un alto comisionado o de crear un organismo especial, para recibir y tramitar, directamente, las peticiones particulares por violaciones de derechos humanos. Estas propuestas no fueron aceptadas, arguyéndose que, mientras los pactos de derechos humanos no entraran en vigor, no existirían normas jurídicas que rigiesen las actividades de tal comité o alto comisionado y que, en conformidad con sus atribuciones, la Comisión de Derechos Humanos había declinado su competencia para intervenir respecto a las quejas relativas a los derechos humanos.

La Asamblea General decidió transmitir a la Comisión de Derechos Humanos las actas y demás documentos relativos a la cuestión de las medidas provisionales que deberían adoptarse con respecto a la violación de los derechos humanos.

c) INFORMES Y ESTUDIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS

Por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, en su 22º período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó dos nuevos programas en materia de derechos humanos: informes trienales sobre los derechos humanos y estudios acerca de derechos o grupos de derechos específicos.

En conformidad con el primero de esos programas, se pidió a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados que transmitieran cada tres años un informe sobre la evolución y los progresos realizados en materia de derechos humanos y las medidas adoptadas para proteger la libertad humana en su territorio metropolitano y en los territorios no autónomos y en fideicomiso que administraren. Los informes deberían tratar de los derechos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del derecho de libre determinación de los pueblos, y completar los datos remitidos para ser publicados en el *Anuario de Derechos Humanos* e indicar las partes pertinentes de los informes ya presentados a otros órganos de las Naciones Unidas o a un organismo especializado. Además, se invitaba a los organismos especializados a informar acerca de los derechos propios de su campo de actividades. Los primeros informes deberían abarcar los años de 1954, 1955 y 1956, y el Secretario General debería presentar el resumen de dichos informes a la Comisión en su 14º período de sesiones en 1958. La Comisión debería estudiar los informes y transmitir al Consejo las observaciones, conclusiones y recomendaciones de carácter objetivo y general que considerase pertinente.

En virtud del segundo programa, la Comisión efectuaría estudios sobre derechos o grupos de derechos específicos. Como primera materia de estudio, el Consejo aprobó el derecho enunciado en el artículo 9 de la Declaración Universal, o sea, el derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Se pidió a los gobiernos que presentarán informes sobre esta materia, y a los organismos especializados y organizaciones no gubernamentales que colaborasen en la ejecución de los estudios. En su 12º período de sesiones, celebrado en 1956, la Comisión designó un comité integrado por cuatro de sus miembros, es decir, Chile, Noruega, Pakistán y Filipinas, encargado de preparar el estudio. Este Comité presentó un informe preliminar en el 13º período de sesiones celebrado en 1957 relativo a la compilación de material para el estudio e indicó hasta qué punto los gobiernos, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales habían suministrado información. Además figuraban ciertas observaciones preliminares acerca del enfoque general del estudio. El Comité expuso que en cuanto a la "detención" y a la "prisión", en el estudio se examinarían esencialmente las condiciones en que podía privarse a una persona de su libertad y las garantías o recursos procesales contra tal privación cuando ésta pudiera considerarse arbitraria. Con respecto al "destierro", el estudio podría exigir el examen tanto del derecho sustantivo como del derecho procesal. El Comité, no obstante, subrayó que en todo

caso no estaba en condiciones de determinar en forma definitiva el alcance preciso del estudio. La Comisión de Derechos Humanos tomó nota del informe preliminar del Comité, y eligió a la Argentina y a Ceilán como miembros del Comité para substituir a Chile y al Pakistán, que habían dejado de formar parte de la Comisión.

d) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Después de instituir un programa de servicios consultivos en materia de derechos humanos en virtud de la resolución 926 (X), aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1955, la Comisión de Derechos Humanos, en su 12º período de sesiones, pidió al Secretario General que estudiara la conveniencia de celebrar seminarios de derechos humanos, especialmente con respecto a la prevención de discriminaciones y protección a las minorías. También la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 10º período de sesiones celebrado en 1956, pidió al Secretario General que estudiase la posibilidad de celebrar seminarios regionales para ayudar a las mujeres a comprender mejor las obligaciones cívicas y para aumentar su participación en la vida pública. En su 21º período de sesiones, el Consejo pidió al Secretario General que organizara seminarios, preferentemente regionales, con arreglo a lo sugerido por las dos Comisiones y, en consecuencia, el Secretario General dirigió una nota a los Estados Miembros en la que sometía a su consideración los siguientes temas para los seminarios: 1) métodos para prevenir y combatir la discriminación racial; 2) deberes cívicos y mayor participación de la mujer en la vida pública en los países donde ha adquirido recientemente derechos políticos; y 3) protección de los derechos humanos en la administración de la justicia penal. Se preguntó a los gobiernos si estarían dispuestos a patrocinar los seminarios y a que éstos se celebrasen en sus países.

Con objeto de estudiar la posibilidad de organizar un seminario respecto al tema 2), el Secretario General convocó a un grupo de trabajo que se reunió en Bangkok en octubre de 1956. Este grupo estaba integrado por expertos de Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Laos, Pakistán y Tailandia. El grupo de trabajo recomendó que debía celebrarse un seminario asiático en 1957 sobre este tema, con arreglo a una base regional. El Gobierno de Tailandia ofreció su país al grupo para que dicho seminario se celebrase en Bangkok en el mes de agosto.

El Gobierno de Filipinas pidió al Secretario General que se organizara un seminario regional sobre el tema de "la protección de los derechos humanos en la legislación y el procedimiento penales" o sobre algunos de los aspectos de esta cuestión. A raíz de esta solicitud, en mayo de 1957 se reunió en Manila un grupo de trabajo de expertos de Australia, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Tailandia y Viet-Nam para elaborar el programa de trabajo del seminario y estudiar otras disposiciones pertinentes. Este grupo convino en que el seminario debería concentrar su atención en la protección de los derechos de los presuntos autores de un delito o de los acusados de haberlo cometido y sugirió varios temas para su discusión. Además, confirmó la opinión expresada por el Secretario General de que "sería conveniente que los participantes en el seminario fuesen personas de grandes méritos y con un alto cargo como jueces superiores, subsecre-

tarios de Estado en el despacho de justicia, directores generales o inspectores generales de policía, profesores de derecho penal y de derecho procesal penal", y subrayó la importancia de que se lograra suficiente equilibrio entre las diversas profesiones, la experiencia y las funciones públicas de los participantes.

Asimismo, el Secretario General ha convocado, para que se reúna en Santiago de Chile en agosto de 1957, un grupo de trabajo de expertos de la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay para que le asesore sobre la posibilidad de organizar, en 1958, un seminario sobre derechos humanos. Se proyecta invitar a todos los Estados latinoamericanos a que participen en dicho seminario. El Secretario General ha propuesto que el seminario estudie el tema "Protección de los derechos humanos en la legislación y el procedimiento penales", o algunos aspectos de esta cuestión.

e) PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en su noveno período de sesiones celebrado en febrero-marzo de 1957, concentró su atención sobre los problemas relativos a la manera de eliminar la discriminación en diversas esferas. La Comisión de Derechos Humanos, en su 13º período de sesiones, examinó el informe de la Subcomisión.

La labor de la Subcomisión se basaba principalmente en el estudio relativo a la discriminación en materia de educación preparado por su Relator Especial, el Sr. Charles D. Ammoun. En este estudio transmitido a la Comisión junto con varias propuestas sobre las medidas que deberían adoptarse, figuraban propuestas sobre una serie de principios generales que habrían de aplicarse para acabar con la discriminación en materia de educación. La Subcomisión indicó que podía ser útil y oportuno que el Consejo Económico y Social elaborase un instrumento internacional en el que se enunciaran los principios fundamentales; en el que se pidiera a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que considerase la posibilidad de elaborar este instrumento, tomando en cuenta dichos principios; y que se ofreciera la oportunidad de señalar a la atención de la Asamblea General la necesidad de conceder a los principios la importancia que merecen en la elaboración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Subcomisión recomendó que debería transmitirse a la UNESCO este estudio para que lo utilizara en sus esfuerzos para combatir la discriminación en materia de educación.

La Comisión de Derechos Humanos, en su 13º período de sesiones, estimó que las propuestas de la Subcomisión merecían ser cuidadosamente estudiadas por los gobiernos. En consecuencia, se pidió al Secretario General que consultase a los gobiernos, en particular con respecto a los principios sugeridos, y obtuviera su opinión sobre la posibilidad de adoptar uno o varios instrumentos internacionales en esta materia.

Además, la Subcomisión examinó dos informes sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación elaborados por la Oficina Internacional del Trabajo para la 40a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1957. En el primero de estos informes se analizaban las diversas formas de discriminación en materia de empleo y ocupación, en tanto

que en el segundo se exponían las conclusiones propuestas por la OIT a fin de que sirviesen como base de las medidas adoptadas por la Conferencia. Tanto la Subcomisión como la Comisión hicieron suyos los conceptos generales y el espíritu en que se fundaban los informes, y sus observaciones fueron transmitidas a la OIT.

La Subcomisión examinó brevemente un informe presentado por su Relator Especial, el Sr. Arcot Krishnaswami, sobre la marcha de los trabajos referentes al estudio sobre la discriminación en materia de libertad de religión y de prácticas religiosas. Se pidió al Relator Especial que, con la ayuda del Secretario General, preparase, con tiempo suficiente para que la Subcomisión pudiera examinarlo en su 10º período de sesiones, un proyecto de informe de análogo alcance al informe definitivo sobre esta materia.

La Subcomisión escuchó también un informe oral del Sr. Hernán Santa Cruz, Relator Especial designado para realizar el estudio sobre la discriminación en materia de derechos políticos.

Después de examinar un informe del Secretario General en el que se exponían los resultados de sus consultas con las organizaciones no gubernamentales respecto de la fecha, la duración, el programa, los objetivos y los métodos de una nueva conferencia de las organizaciones no gubernamentales interesadas en la supresión de los prejuicios y las discriminaciones que pudiera ser convocada, la Subcomisión recomendó que debería disponerse lo necesario para la celebración de esta conferencia en 1958. El Secretario General comunicó a la Comisión de Derechos Humanos que no estaba convencido de la utilidad de esa propuesta, porque no creía que dicha conferencia consiguiera mucho más de lo que consiguió la conferencia celebrada en 1955. La Comisión invitó a la Subcomisión a continuar el examen de la cuestión en su 10º período de sesiones, teniendo en cuenta cualquier observación que pudiera recibir de las organizaciones no gubernamentales interesadas.

f) LIBERTAD DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de la resolución 574 D (XIX) del Consejo Económico y Social, en consulta con la UNESCO, el Secretario General presentó al Consejo, en su 23º período de sesiones, un informe sobre los medios de información en los países insuficientemente desarrollados. A base de la información recibida de 24 gobiernos, en el informe se estudiaba el grado de desarrollo de los medios de información en diferentes regiones del mundo, se resumía la información relativa a las medidas y planes para desarrollar los medios de información, se enumeraban las recomendaciones y propuestas y se hacían sugerencias para formular un programa completo de acción. El Consejo pidió a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados que transmitiesen al Secretario General, si aún no lo habían hecho, la información necesaria para este fin. Además, el Consejo invitó al Secretario General a efectuar, en cooperación con los organismos especializados, según conviniera, y a presentar al Consejo, a más tardar en su 27º período de sesiones, un análisis de la información y de las recomendaciones recibidas de los gobiernos, teniendo también en cuenta las recomendaciones que hiciese la Comisión de Derechos Humanos después de haber examinado el problema.

La cuestión de la libertad de información se incluyó también en el programa del 13º período de sesiones de la Comisión. El Secretario General presentó un resumen histórico de las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en la materia, en el que se describían las medidas y los métodos que se habían empleado y se examinaban los resultados y los progresos obtenidos. La Comisión decidió designar un comité, compuesto de los representantes de Francia, India, Líbano, México y Polonia que se reuniría en la Sede entre el 13º y el 14º períodos de sesiones de la Comisión para examinar la labor de la Organización y de los organismos en esta materia y formular recomendaciones en el 14º período de sesiones.

En cumplimiento de la resolución 841 (IX) aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 1954, el Secretario General preparó un proyecto de protocolo de la Convención Internacional relativa al empleo de la Radiodifusión en Beneficio de la Paz (Ginebra, 1936), distribuyéndolo a los Estados partes en la misma Convención. En el proyecto de protocolo se estipulaba el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones atribuidas a la Sociedad de las Naciones en virtud de la Convención, y la adhesión de los Estados que no eran partes en ella, y se incluían dos nuevos artículos basados en la resolución 424 (V) de la Asamblea. Son partes en la Convención 26 Estados. Hasta ahora el Secretario General ha recibido respuestas de los siguientes 14 Estados: Birmania, Ceilán, Chile, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Irlanda, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Suecia y Suiza, los cuales expresaron su aprobación del traspaso de funciones.

Birmania, Dinamarca e Irlanda manifestaron su aquiescencia al proyecto de protocolo; Suiza formula una reserva al efecto de que no se considerará obligada por los nuevos artículos.

g) DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos, en su 13º período de sesiones, formuló varias recomendaciones relativas a la celebración del décimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1958. La Comisión estimó que al conmemorar el aniversario deberían tenerse en cuenta dos consideraciones principales: la celebración debería mostrar al mundo la importante etapa marcada por la Declaración y, al propio tiempo, señalaría la considerable labor que faltaba por realizar. Además brindaría la oportunidad de dar a conocer mejor los derechos y libertades enunciados en la Declaración. Asimismo, la Comisión formuló varias recomendaciones sobre otros medios de conmemorar la ocasión y recomendó igualmente al Consejo Económico y Social que instara a todos los Estados a participar en el décimo aniversario de la Declaración y pidiera su cooperación a todos los organismos nacionales e internacionales.

h) CONFERENCIA DE Plenipotenciarios de las Naciones Unidas relativa a una convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

La Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas se celebró en Ginebra en agosto-septiembre de 1956. Como base para sus debates, la Conferencia uti-

lizó un proyecto preparado por un comité especial designado por el Consejo Económico y Social.

El 4 de septiembre de 1956, la Conferencia aprobó la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud y la abrió a firma. La Convención estipula que los Estados partes adoptarán en forma progresiva y a la mayor brevedad posible todas las medidas necesarias a fin de abolir por completo las instituciones y prácticas tales como la servidumbre por deudas, la servidumbre, la compra de una mujer en matrimonio y la explotación del trabajo del niño o adolescente (artículo 1); se alienta la prescripción de una edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios (artículo 2); se prevén medidas para la abolición de la trata de esclavos (artículos 3 y 4); y se prevé el castigo de los actos que induzcan a toda persona a someterse a la esclavitud o a la servidumbre (artículos 5 y 6). Asimismo, se estipula la cooperación entre los Estados partes, entre sí y con las Naciones Unidas, así como la comunicación al Secretario General de información sobre las leyes, reglamentos y medidas administrativas que hubieren promulgado para aplicar la Convención (artículo 8). No se permiten las reservas (artículo 9). Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención podrán ser sometidas por cualquiera de las partes en ella a la Corte Internacional de Justicia, a menos que se acuerde recurrir a otra vía de solución (artículo 10). La Convención se aplicará *ipso facto* a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y a otros territorios no metropolitanos de un Estado parte, salvo en los casos en que las leyes y las prácticas constitucionales del Estado parte o del territorio interesado requieran el consentimiento previo del territorio no metropolitano (artículo 12). La Convención estará abierta a firma hasta el 1º de julio de 1957. Después de esa fecha, podrá llegar a ser parte cualquier Estado de las Naciones Unidas o miembro de un organismo especializado o cualquier otro Estado al que la Asamblea General invite a que se adhiera. Hasta principios de junio de 1957, 34 gobiernos habían firmado la Convención y 2 la habían ratificado. La Convención entró en vigor el 30 de abril de 1957, cuando el segundo Estado llegó a ser parte en ella.

i) PROYECTO DE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Comisión de Asuntos Sociales, en su sexto período de sesiones, aprobó un proyecto de Declaración de los Derechos del Niño y lo sometió al Consejo Económico y Social. En su 11º período de sesiones, el Consejo pidió a la Comisión de Derechos Humanos que examinase el proyecto de declaración y que comunicase al Consejo "sus observaciones sobre el principio y el contenido" de dicho documento.

La Comisión no pudo examinar el proyecto hasta su 13º período de sesiones celebrado en 1957. Durante el debate, se expresaron diversas opiniones sobre la naturaleza, los principios y el contenido del proyecto. Hubo acuerdo general, no obstante, en que la Comisión no podía examinar el proyecto de declaración en todos sus aspectos en dicho período de sesiones. La Comisión decidió pedir a los gobiernos de los Estados Miembros que presentaran sus observaciones referentes al proyecto antes del 1º de diciembre de 1957 y examinar entonces nuevamente la cuestión en su 14º período de sesiones en 1958.

j) PROYECTO DE DECLARACIÓN RELATIVO AL DERECHO DE ASILO

En su 13º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos examinó la cuestión del derecho de asilo. Estudió un memorándum en el que se exponían las actividades de los órganos de las Naciones Unidas relacionadas con el derecho de asilo, así como un memorándum complementario en el que figuraba un análisis de los debates y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas referentes a la materia.

En el proyecto de Declaración relativo al Derecho de Asilo presentado a la Comisión se consideraba que toda persona cuya vida, integridad física o libertad estaban amenazadas por una infracción de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos tenía derecho a pedir asilo. Se manifestaba que "la obligación de garantizar un asilo a las personas que lo solicitaren incumbía a la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas". Nadie debería estar sometido a medidas como la expulsión, el rechazo o la denegación de permiso para trasponer la frontera que, en contra de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tuvieran como consecuencia obligarle a volver a un territorio donde su vida, su integridad física o su libertad estuvieran amenazadas, o a permanecer en él.

La Comisión decidió invitar al Secretario General a transmitir el proyecto de declaración, junto con otros documentos pertinentes, a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, así como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pidiéndoles que antes del 31 de diciembre de 1957 hicieran llegar a su poder sus observaciones en la materia.

k) ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS

El *Yearbook of Human Rights* (Anuario de Derechos Humanos) correspondiente a 1957 es el décimo volumen de la serie. Se reseñan en él las disposiciones constitucionales, legislativas y judiciales que afectan a los derechos humanos en los Estados y en los territorios no autónomos y en fideicomiso. Además, contiene una sección relativa a instrumentos internacionales y una reseña de las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

En su 13º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que publicase el *Anuario* correspondiente a 1955, a ser posible antes de su 14º período de sesiones, tal como está ahora previsto; es decir, con las declaraciones de los gobiernos acerca de la aplicación y la evolución del derecho enunciado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". La Comisión nombró un comité compuesto de cinco de sus miembros a fin de estudiar qué medidas deberían adoptarse para mantener la extensión del *Anuario* dentro de límites razonables, especialmente en cuanto a la posibilidad de relacionarlo con los informes periódicos y estudios especiales en conformidad con la resolución 624 B (XXII) del Consejo Económico y Social, e informar a la Comisión en su 14º período de sesiones.

En su 22º período de sesiones, el Consejo invitó a los Estados Miembros y a los colaboradores del *Anuario*, así como a los organismos especiales, según procediese, a que comunicaran al Secretario General

títulos de publicaciones importantes en materia de derechos humanos, y pidió al Secretario General que publicara esos títulos, cuando procediese, en el *Anuario*.

1) OTROS ASUNTOS

En enero de 1957, la Comisión Especial para los Prisioneros de Guerra constituida en virtud de la resolución 427 (V) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1950, presentó al Secretario General un informe sobre la marcha de los trabajos, en el que se resumían los hechos importantes en materia de repatriación de prisioneros de guerra desde que se publicó su último informe en noviembre de 1955. Según el informe, durante el período que se reseña, han sido repatriadas las siguientes personas: 1) nacionales alemanes—9.818 prisioneros de guerra y 1.664 deportados civiles procedentes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1.087 prisioneros de guerra procedentes de Checoslovaquia y 261 prisioneros de guerra procedentes de Polonia; 2) nacionales italianos—5 prisioneros de guerra procedentes de la URSS; 3) nacionales japoneses—1.018 prisioneros de guerra y 565 civiles procedentes de la República Popular de China, 1.372 nacionales japoneses procedentes de la URSS y 36 de Corea del Norte. Se ha previsto que la Comisión Especial se reunirá en septiembre de 1957 en la Oficina Europea.

Durante el período que se reseña, se transmitieron a la OIT 14 reclamaciones relativas a la violación de derechos sindicales que afectaban a Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. En su 23º período de sesiones, se presentó al Consejo Económico y Social una reclamación referente a Arabia Saudita, Estado Miembro de las Naciones Unidas pero que no es miembro de la OIT; el Consejo tomó nota de una respuesta recibida del Gobierno de Arabia Saudita.

Asimismo el Secretario General transmitió a la OIT 16 comunicaciones relativas al trabajo forzoso.

El Secretario General transmitió al Gobierno de la República Federal de Alemania información referente a dos personas que pretendían haber sido víctimas de supuestos experimentos científicos realizados en los campos de concentración nazis. Hasta ahora, se ha señalado a la atención de la República Federal de Alemania un total de 530 casos. El Secretario General ha pedido al Gobierno que le proporcione una lista completa de las medidas que ha adoptado con respecto a este asunto, a fin de que pueda presentar un informe definitivo al Consejo.

En cumplimiento de la resolución 75 (V) del Consejo, tal como fué modificada, el Secretario General presentó a la Comisión de Derechos Humanos, en su 13º período de sesiones, una lista no confidencial de cinco comunicaciones relativas a principios de derechos humanos así como una lista confidencial de 2.321 comunicaciones en las que se alegaban violaciones de derechos humanos. En conformidad con la resolución 192 (VIII) del Consejo, el Secretario General señaló a la atención de la Comisión 16 respuestas de gobiernos de Estados Miembros referentes a 31 comunicaciones. Además, presentó listas análogas de comunicaciones a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 11º período de sesiones, y a la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías en su noveno período de sesiones.

11. Condición jurídica y social de la mujer

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebró su 11º período de sesiones en marzo-abril de 1957, en la Sede. Entre los documentos preparados para ese período de sesiones figuraban un resumen analítico de la información relativa a las posibilidades de instrucción para la mujer, un informe sobre el precio de la novia, la poligamia y los derechos de la madre sobre sus hijos en ciertos territorios africanos, y un informe preliminar sobre la legislación tributaria aplicable a los trabajadoras casadas.

La Comisión aprobó un programa de trabajo que comprendía varios nuevos proyectos, especialmente el estudio de la cuestión de la edad para contraer matrimonio y el requisito del libre consentimiento por ambas partes, y de la edad de jubilación y el derecho a pensión de las trabajadoras, así como el estudio de los informes sobre las medidas adoptadas por los Estados para suprimir la discriminación contra la mujer en la esfera económica, y sobre la condición de las trabajadoras con obligaciones familiares.

a) DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER

Durante el año se prepararon tres informes referentes a los derechos políticos de la mujer. En el memorándum anual del Secretario General sobre las constituciones, leyes electorales y otros instrumentos legales referentes a los derechos políticos de la mujer, preparado para la Asamblea General en su 11º período de sesiones, figuraba un cuadro adicional en el que se indicaba el derecho de la mujer a desempeñar funciones y cargos públicos electivos en los diversos países; este cuadro se incluyó de conformidad con una petición hecha por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su décimo período de sesiones. Además, se prepararon informes complementarios referentes a la información relativa a la situación jurídica y social de la mujer en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer pidió al Secretario General que consultara a los Estados Miembros acerca de la posibilidad de convocar a un seminario internacional sobre las obligaciones cívicas de la mujer y la mayor participación de ésta en la vida pública, que se celebraría en virtud del programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, y que preparara, para presentarlo en el 12º período de sesiones de la Comisión, un informe sobre los resultados de sus consultas (véase también el punto d) de la sección 10 precedente).

Durante el año que se reseña, Canadá, Nicaragua y Noruega ratificaron la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Hasta el 15 de junio de 1957, 27 Estados habían ratificado la Convención o se habían adherido a ella, y 40 Estados la habían firmado.

b) POSIBILIDADES DE INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER

La Comisión examinó un informe preparado por el Secretario General sobre las posibilidades de instrucción para la mujer, así como dos informes preparados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: un informe preliminar sobre la participación de la mujer en la profesión docente y un informe sobre las actividades de la UNESCO relativas a las posibilidades de instrucción para la mujer.

El debate puso de manifiesto el interés de la Comisión en esta cuestión, especialmente respecto a los países y territorios en los que la instrucción primaria no es libre ni obligatoria, y en donde el coeficiente de analfabetismo es elevado entre la población femenina.

La Comisión aprobó un proyecto de resolución en el que se pedía al Consejo Económico y Social que recomendara a los gobiernos la adopción de diversas medidas encaminadas a remediar la situación respecto a las campañas contra el analfabetismo y para que aumentara el número de niñas que asistían a las escuelas primarias. Habiéndose informado a la Comisión que la UNESCO prepararía un informe sobre el acceso de la mujer a la enseñanza superior para su 12º período de sesiones, pidió también a la UNESCO que pusiera al día los datos estadísticos contenidos en su informe sobre posibilidades de enseñanza secundaria para la mujer.

c) PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA

La Comisión examinó un informe sobre las posibilidades de empleo de la mujer en el que figuraba un proyecto de cuestionario sobre los principales ramos de formación en las profesiones liberales y técnicas, y sobre las posibilidades de empleo de la mujer en ellas. La Comisión redactó un cuestionario para que se distribuyera entre los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales, junto con una lista de las ocupaciones profesionales y técnicas cuya descripción y definición figuraban en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo (junio de 1952). La Comisión recomendó al Consejo Económico y Social que pidiera al Secretario General que recogiera los datos contenidos en las respuestas a este cuestionario y, en consulta con los organismos especializados interesados, preparara un informe sobre las posibilidades de trabajo que actualmente se ofrecían a las mujeres como juristas, maestras, arquitectas e ingenieras, y de empleo en las ciencias médicas y de sanidad y en otras ocupaciones afines.

Igualmente, la Comisión estudió los informes preparados por la OIT sobre el empleo parcial para la mujer, el empleo de trabajadores de edad avanzada, las posibilidades para la mujer en las industrias domésticas independientes y la artesanía, y un informe conjunto de la UNESCO y de la OIT sobre las posibilidades de educación profesional y técnica para la mujer. La Comisión invitó al Secretario General a consultar a las organizaciones no gubernamentales acerca de la cuestión relativa a la edad de jubilación y al derecho a pensión de las trabajadoras y a que preparara, a ser posible para el 12º período de sesiones de la Comisión, un informe sobre las respuestas recibidas.

d) SALARIO IGUAL POR TRABAJO IGUAL

El Secretario General preparó un informe destinado a la Comisión sobre los procedimientos prácticos para la aplicación del principio de salario igual por trabajo igual, basado en las informaciones obtenidas de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social. Además, la Comisión recibió un informe preparado por la OIT sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, en el que figu-

raba información respecto a la aplicación del Convenio No. 100 y de la Recomendación No. 90 de la OIT en la que se señalaba que durante 1956 y el primer trimestre de 1957 nueve Estados habían ratificado el Convenio. La Comisión aprobó una resolución en la que se pedía al Consejo que instara a los Estados a que se adhirieran al Convenio de la OIT y de lo contrario que aplicaran el principio de la igualdad de salario; además, pidió a la Oficina Internacional del Trabajo que continuase proporcionando a la Comisión información sobre los esfuerzos de los Estados Miembros para hacer desaparecer la discriminación contra la mujer en materia de salarios.

e) NACIONALIDAD DE LA MUJER CASADA

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la cual se abrió a firma y ratificación o adhesión el 20 de febrero de 1957. Hasta el 15 de junio de 1957, había sido firmada por los 15 Estados siguientes: Canadá, Colombia, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Guatemala, India, Israel, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Uruguay y Yugoslavia. El 7 de junio de 1957, Israel ratificó la Convención.

Al discutir este tema, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer estudió un informe sobre recientes reformas legislativas relativas a la nacionalidad de la mujer casada y una nota acerca de las medidas adoptadas por la Asamblea respecto a la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.

La Comisión expresó su satisfacción de que la Convención hubiese sido aprobada por la Asamblea y de que se hubiese abierto a firma y ratificación. Se opinó que la Convención constituía un paso importante para el mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer, por cuanto en ella se eliminaban las dificultades más serias resultantes de la legislación discriminatoria en materia de nacionalidad. Se expresó la esperanza de que muchos Estados llegarían a ser partes en esta Convención y de que el Secretario General continuaría informando a la Comisión sobre los progresos realizados y sobre las reformas legislativas relativas a la nacionalidad de la mujer casada.

f) CONDICIÓN DE LA MUJER EN DERECHO PRIVADO

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó un informe sobre el precio de la novia, la poligamia y los derechos de la madre sobre sus hijos. Asimismo, se comunicó a la Comisión la recomendación formulada por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud en el sentido de que el Consejo Económico y Social examinase si era oportuno estudiar la cuestión del matrimonio, destacando la conveniencia del libre consentimiento de las dos partes y de fijar una edad mínima para el matrimonio. La Comisión pidió al Consejo que aprobase la recomendación de la Conferencia y decidiera que el estudio mencionado en esa recomendación fuese emprendido por la Comisión. La Comisión pidió al Secretario General que, en caso, de que el Consejo decidiera confiar tal estudio a la Comisión, preparase un informe sobre la cuestión para su 12º período de sesiones. En su 23º período de sesiones, el Consejo tomó nota de la recomendación de la Conferencia y de la solicitud de la Comisión y

decidió encargar a la Comisión que estudiara la cuestión del matrimonio en el sentido indicado por la Conferencia de Plenipotenciarios.

Además, la Comisión pidió al Consejo que recomendase a los gobiernos que fomentaran el establecimiento de un sistema de inscripción obligatoria de los matrimonios por el cual los futuros cónyuges manifestasen personalmente su libre consentimiento en presencia de una autoridad competente, civil o religiosa, ya que dicho sistema de inscripción obligatoria constituiría, en su opinión, una garantía de que los presuntos cónyuges consentían libremente y sin restricciones en contraer matrimonio.

g) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

En un informe sobre este tema preparado para la Comisión se reseñaban los hechos ocurridos durante el presente año, especialmente los relativos a la organización de un seminario regional sobre las obligaciones cívicas y sobre la mayor participación de la mujer asiática en la vida pública que se celebraría en Bangkok en agosto de 1957 (véase también el apartado d) de la sección 10, *supra*). La Comisión manifestó sumo interés en el programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos y su satisfacción por el hecho de que varios gobiernos hubiesen indicado su interés en invitar a que se celebraran en sus países los seminarios sobre la condición jurídica y social de la mujer. La Comisión aprobó una resolución en la que expresaba la esperanza de que dichos seminarios se organizaran anualmente.

h) OTRAS CUESTIONES REFERENTES A LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

La Comisión estudió un memorándum en el que se resumían los proyectos de asistencia técnica que influían en la condición jurídica y social de la mujer que, en su opinión, señalaba la amplitud de los servicios disponibles en virtud de los programas de asistencia técnica. Varios representantes subrayaron la importancia de la mayor participación de la mujer en esos programas como expertos, y titulares de becas de estudios y para ampliación de estudios. La Comisión pidió al Secretario General que preparase un informe para su próximo período de sesiones, sobre el número proporcional de mujeres que en 1956 y en 1957 habían participado como expertas y titulares de becas ordinarias y de becas para ampliación de estudios, y que incluyera datos sobre las preferencias manifestadas por las mujeres respecto de las diferentes actividades, según se deducía de las solicitudes de becas de estudios y para ampliación de estudios que se habían recibido.

Otra cuestión examinada por la Comisión en su 11º período de sesiones fué la de participación de la mujer en la labor de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. A raíz de una declaración formulada por el representante del Secretario General, la Comisión expresó la esperanza de que se evitaría toda discriminación contra el personal femenino con respecto a subsidios por personas a cargo, y la confianza en que aumentarían el número y la proporción de mujeres nombradas y ascendidas a puestos superiores y directivos en las secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

Por último, la Comisión discutió la situación desventajosa de la mujer casada en algunos países, en virtud de las disposiciones tributarias de acumulación de los ingresos del marido y de la mujer, y tomó nota de que la información disponible no era suficiente para hacer un estudio ponderado sobre esta materia. Pidió al Consejo Económico y Social que invitara al Secretario General a obtener información precisa de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas y a que preparase un informe para que la Comisión lo estudiase en su 13º período de sesiones.

12. Estupefacientes

Siguen siendo graves el problema de la toxicomanía y el del tráfico ilícito que abastece a los toxicómanos. Hay todavía millones de toxicómanos y el volumen del tráfico ilícito, como puede colegirse por los decomisos, ha disminuido muy poco. Sin embargo, en algunas partes del mundo en donde la toxicomanía está más difundida se hacen esfuerzos alentadores para suprimirla, sobre todo en el Irán, país en el que se han utilizado los servicios de asistencia técnica de las Naciones Unidas para apoyar la decisión del Gobierno de poner término al cultivo de la adormidera y de curar a los fumadores de opio. Pero sigue funcionando sin tropiezos la organización establecida en virtud de tratados para fiscalizar el comercio legítimo de estupefacientes.

La Comisión de Estupefacientes celebró su 12º período de sesiones durante la época a que se refiere esta memoria (29 de abril-31 de mayo de 1957).

a) INSTRUMENTOS MULTILATERALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

El Secretario General ha recibido las siguientes ratificaciones, aceptaciones, adhesiones y declaraciones:

- i) *Convención Internacional sobre el Opio, firmada en Ginebra el 19 de noviembre de 1925, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946*

Afganistán;

Marruecos formuló una declaración de que aceptaba las obligaciones que le incumbían por la aceptación por Francia en lo que respecta a Marruecos de éste y de otros tratados, y que se consideraba parte en ese instrumento.

- ii) *Convención Internacional para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946*

Jordania;

Marruecos formuló una declaración análoga a la que se indica en el apartado i) de este párrafo.

- iii) *Protocolo firmado en París el 19 de noviembre de 1948 que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención del 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, modificado por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946*

Marruecos formuló una declaración análoga a la que se indica en el apartado i) de este párrafo.

iv) *Protocolo firmado en Nueva York el 23 de junio de 1953 para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio* Mónaco;

Guatemala;

España;

Nueva Zelanda, con una declaración de que el Protocolo se aplicará a la isla de Cook, inclusive Niue, a la isla de Tokelau y al Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental;

Suiza;

Camboja;

Chile.

b) APLICACIÓN DE LOS TRATADOS SOBRE ESTUPEFACIENTES Y FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL

Leyes y reglamentos nacionales

Con arreglo a las convenciones internacionales sobre estupefacientes de 1912, 1925, 1931 y 1936, con las modificaciones introducidas, los gobiernos deben promulgar leyes y reglamentos para poner en vigor estos tratados y deben poner tales leyes y reglamentos en conocimiento de los demás gobiernos, por conducto del Secretario General. Durante el período que es objeto de esta memoria, el Secretario General ha tramitado y distribuido 159 textos. Se ha preparado un *Índice general, 1917-1956*, que abarca las leyes y reglamentos que se han puesto en conocimiento de la Secretaría desde 1947 hasta septiembre de 1956 inclusive.

Informes anuales

En el *Resumen de informes anuales*, figuran los correspondientes a 55 Estados y 79 territorios, respecto de los cuales los gobiernos informaron al Secretario General con arreglo a la Convención de 1931.

La Comisión de Estupefacientes opinó que los gobiernos cumplieran en forma satisfactoria las obligaciones que les imponían los tratados internacionales sobre estupefacientes. Pero advirtió que existían ciertas lagunas en la información enviada y pidió mayor colaboración internacional para subsanarlas.

Listas anuales

De acuerdo con la práctica seguida en años anteriores, y de conformidad con el artículo 20 de la Convención de 1931, se publicó la *Lista de firmas autorizadas para manufacturar estupefacientes*, publicación anual, en la que se efectuaron todos los cambios comunicados por los gobiernos.

Se publicó una edición revisada de la *Lista de autoridades nacionales* que tienen facultad para emitir certificados y para autorizar la importación y exportación de estupefacientes, en la que se efectuaron todos los cambios comunicados por los gobiernos por medio de leyes, informes anuales o correspondencia.

Se preparó también una *Lista de los estupefacientes sometidos a fiscalización internacional*, que tiene por principal objeto servir como material de referencia.

Alcance de la fiscalización

Los tratados internacionales sobre estupefacientes, sobre todo las Convenciones de 1925 y de 1931 y el Protocolo de 1948, contienen disposiciones concretas

en virtud de las cuales los nuevos estupefacientes que tengan propiedades toxicomanígenas pueden ser objeto de fiscalización internacional, y es posible tomar decisiones para eximir de fiscalización a estupefacientes que eran objeto de ella o para modificar decisiones tomadas anteriormente. El procedimiento internacional en esta materia se efectúa por conducto del Secretario General, tanto en lo que respecta a la primera solicitud de una decisión como a la comunicación de las conclusiones o decisiones de la Organización Mundial de la Salud respecto de dicha solicitud, juntamente con el régimen indicado de fiscalización según los tratados internacionales sobre estupefacientes.

Se ha puesto bajo fiscalización internacional a dos nuevos estupefacientes sintéticos: d-1-metil-3-etil-4-fenil-4 propionoxipiperidina y éster etílico del ácido 1-[2-(p-aminofenil)-etil]-4-fenilpiperidina-4-carboxílico y todas sus sales respectivas fueron puestas bajo el régimen establecido por la Convención de 1931 para los estupefacientes especificados en el grupo I del párrafo 2 del artículo 1 de dicha Convención. Se aplazó la decisión sobre una solicitud de que se eximiese de la fiscalización prescrita en los tratados internacionales sobre estupefacientes al isómero dextrógiro del estupefaciente 3-hidroxi-N-fenetilmorfinano (puesto bajo fiscalización internacional en 1955). Además se solicitó una decisión sobre la situación del promedol y de la morfolinoetilmorfetidina según los tratados internacionales sobre estupefacientes.

Se comunicó a la Comisión que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Protocolo de 1948, se había enviado recientemente una comunicación relativa a una nueva sustancia, la d-2, 2-difenil-3-metil-4-morfolino-butiril-pirolidina, conocida con el símbolo R.875. Dada la peligrosidad de este estupefaciente, la Comisión decidió, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo de 1948, que provisionalmente se aplicarían a dicha sustancia las normas de fiscalización previstas en el régimen más estricto de la Convención de 1931, hasta que se adoptara una decisión definitiva.

El Secretario General preparó para uso de la Comisión un *Summary Tabulation of Changes in the Scope of Narcotics Control*, en el que figuraban las modificaciones hechas en sus modalidades de fiscalización por las autoridades nacionales en conformidad con las obligaciones impuestas por los tratados.

c) TRÁFICO ILÍCITO

En el período que se examina siguió funcionando en la forma ordinaria el procedimiento internacional para el intercambio permanente de información sobre tráfico ilícito. En lo que respecta al artículo 23 de la Convención de 1931, se recibieron 482 partes de decomisos por un total de 1.898 decomisos en 21 Estados y 11 territorios; se comunicó esta información a todos los gobiernos mediante resúmenes mensuales, juntamente con las listas respectivas de personas, lugares y barcos mercantes.

Se prepararon y comunicaron a todos los gobiernos listas de marineros y de miembros de las tripulaciones de aviones civiles que fueron condenados por traficar con estupefacientes. Se prepararon y comunicaron a la Unión Postal Universal, de acuerdo con la resolución 585 D (XVI) del Consejo Económico y Social, informes sobre decomisos de estupefacientes enviados por correo.

Siguió el intercambio de información y de consultas con la Comisión Internacional de Policía Criminal, de conformidad con los arreglos establecidos. En forma análoga, siguió colaborándose con la Oficina Permanente para la Lucha contra los Estupefacientes de la Liga de los Estados Arabes.

El Secretario General preparó un estudio del tráfico ilícito de estupefacientes en 1956, en el que analizaba la información sobre los diferentes estupefacientes y las tendencias generales.

d) INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL OPIO

En virtud de los términos de la resolución por la cual se establece el programa de investigaciones sobre estupefacientes, aprobada por la Comisión de Estupefacientes en su décimo período de sesiones, el Secretario General tiene autoridad para presentar informes sobre las investigaciones hechas por el laboratorio de las Naciones Unidas con las muestras de opio capturadas en tráfico ilícito y enviadas por los gobiernos que hicieron el decomiso; estas investigaciones sirven para determinar el origen geográfico del opio. Los informes del Secretario General se envían a los gobiernos que facilitan la muestra y a los gobiernos de los países de donde procede la sustancia. Durante el período que se examina se prepararon tres informes de este tipo.

Se comenzaron a utilizar los siguientes métodos para determinar el origen geográfico de las muestras de opio, métodos que se suman a los que ya se venían utilizando: electroforesis, cromatografía, espectrofotometría, análisis fotométrico y espectrográfico de llama.

Durante el curso del año se recibieron de Afganistán, India, Irán, Nepal y Japón muestras de opio autenticadas por los diferentes gobiernos como de origen nacional; en total se recibieron 343 muestras autenticadas de los 14 países siguientes: Afganistán, Birmania, China, Grecia, India, Irán, Japón, República de Corea, Laos, Nepal, Pakistán, Turquía, Viet-Nam y Yugoslavia. Además, los países siguientes enviaron otras muestras para fines de investigación: Australia, Birmania, Israel, Pakistán, Portugal y Singapur. El laboratorio hizo diferentes estudios analíticos de 37 muestras.

El Gobierno de Yugoslavia designó al Instituto de Fiscalización de Estupefacientes de Zagreb para que colaborase con el Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas en las investigaciones relativas al origen de las muestras de opio.

e) LOS ESTUPEFACIENTES SINTÉTICOS

De acuerdo con un pedido de la Comisión de Estupefacientes, el Secretario General preparó un documento sobre los estupefacientes sintéticos y otros estupefacientes nuevos que, en número de 30 aproximadamente, han sido puestos bajo fiscalización internacional durante los últimos 10 años; en dicho documento se daba toda la información disponible sobre la forma en que se los utiliza en la medicina y el abuso que de ellos hacen los toxicómanos.

Se comprobó que el consumo médico per cápita (o sea midiendo la dosis terapéutica media) de los estupefacientes sintéticos y de otros nuevos estupefacientes, a pesar de ir en aumento, representa un porcentaje relativamente pequeño del consumo total de estupefacientes de todos los tipos. Parece ser también que el empleo de los estupefacientes naturales más débiles, como la codeína y la dionina, aumenta con

mayor rapidez que el de estupefacientes sintéticos como la petidina y la metadona. Un aspecto interesante en el estudio es el descubrimiento de que las diferencias en el consumo per cápita de estupefacientes son muy grandes de un país a otro, aun cuando se trate de países vecinos que tienen servicios médicos análogos.

Respetando las limitaciones estrictas impuestas por el carácter de la información disponible, se hizo una exposición acerca del abuso de los más nuevos estupefacientes y se lo comparó con el que se hace de los estupefacientes tradicionales. Se indicó que, a pesar de que las cantidades de estupefacientes sintéticos que se habían decomisado en la lucha contra el tráfico ilícito eran relativamente pequeñas si se las comparaba a las cifras correspondientes de los estupefacientes naturales, el número de toxicómanos que utilizaban dichas sustancias estaba aumentando, de acuerdo con los informes y en algunos países, aunque no en aquellos que tenían problemas muy graves de toxicomanía, estos toxicómanos representaban un sector grande y tal vez la mayoría del número total de toxicómanos conocidos por las autoridades.

La Comisión estimó que el valor de estas investigaciones y de una serie de estudios técnicos preparados por la OMS, en consulta con la Secretaría de las Naciones Unidas, quedaba demostrado, y propuso que se continuase el trabajo; aprobó un programa a largo plazo de nuevos estudios en los que, en la medida en que sus recursos lo permitiesen, podrían participar los centros nacionales de investigaciones, la OMS, el Comité Central Permanente del Opio y la Comisión Internacional de Policía Criminal.

f) TOXICOMANÍA

El régimen de fiscalización de estupefacientes establecido en virtud de los tratados internacionales sobre estupefacientes es una manera indirecta de impedir la toxicomanía; en años recientes, sin embargo, se ha ido prestando cada vez mayor atención a la rehabilitación del toxicómano y a su restablecimiento como miembro normal de la sociedad. En 1957, el Secretario General preparó un documento en el que estudiaba la información proporcionada por los gobiernos respecto del número de toxicómanos y daba datos sobre el tratamiento de los toxicómanos en instituciones especiales.

g) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUPEFACIENTES

El Consejo Económico y Social, en su 22º período de sesiones, pidió al Secretario General que, previa consulta con los organismos especializados, informase acerca de la medida en que hubiese podido atender, en virtud de las resoluciones existentes, a las demandas de asistencia técnica para la fiscalización de los estupefacientes; se hacía especial referencia a las necesidades del Irán.

En su informe, el Secretario General declaraba que se habían aprobado solicitudes de gobiernos para el envío de ocho expertos en total y que se habían llevado a cabo dos misiones de exploración. Decía también que se habían aprobado nueve solicitudes de becas para ampliación de estudios presentadas por los gobiernos y que en alguno de los casos el becario había comenzado sus estudios. Aunque no se habían recibido solicitudes oficiales para la organización de seminarios, se estaban examinando varias posibilidades.

Por lo que respecta a Irán, se indicaba que del fondo para casos de urgencia del Programa Ampliado de Asistencia Técnica se había asignado una partida especial de 86.000 dólares, y que se habían facilitado los servicios de expertos para ayudar a los diversos departamentos públicos que tienen representación en el nuevo Organismo de Fiscalización del Opio.

También se hizo una relación del programa de especialización de hombres de ciencia en la determinación del origen del opio por métodos físicos y químicos, establecido por el Departamento de Sanidad y Bienestar Social del Canadá.

b) PROYECTO DE CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES

El Secretario General preparó una compilación clasificada de observaciones recibidas de 24 gobiernos sobre el segundo proyecto de Convención Única. F. acuerdo con las decisiones del Consejo Económico y Social y con las recomendaciones de la Comisión de Estupefacientes, este proyecto, que tiene por objeto codificar las disposiciones de los tratados actualmente en vigor sobre estupefacientes, y que fué redactado por la Comisión entre 1950 y 1955, se envió a los gobiernos representados en el Consejo o en la Comisión y que habían sido invitados a participar como observadores en el trabajo de codificación de la Comisión para que formularan sus observaciones. En su décimo período de sesiones, la Comisión preparó un texto simplificado de las disposiciones del segundo proyecto relativas a la constitución de los órganos internacionales que se encargarían de fiscalizar los estupefacientes; de clasificar los diferentes tipos de estupefacientes; de poner los nuevos estupefacientes bajo el régimen internacional de fiscalización; de los órganos nacionales de fiscalización que las partes en la nueva Convención tendrían que establecer y la información que tendrían que suministrar al Secretario General; y, finalmente, determinar las medidas internacionales que habría que adoptar para lograr el cumplimiento de las disposiciones previstas en los tratados.

13. Asuntos sociales

a) POLÍTICA SOCIAL

Durante el período de que se trata, se ha dado mayor importancia a las cuestiones generales de política y desarrollo social, entre ellas las de política social en relación con el fomento económico, los factores sociales de los planes de desarrollo, cuestiones de urbanización en las regiones insuficientemente desarrolladas y las tendencias generales de la situación social en el mundo. Se publicó un segundo *Informe sobre la Situación Social en el Mundo*.

En su 22º período de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó un informe del Secretario General sobre el programa de acción práctica concertada en materia social por las Naciones Unidas y los organismos especializados. En la resolución 585 H (XX), el Consejo firmó su petición de que el Secretario General diera cuenta especialmente en su segundo informe de los cambios ocurridos después de la publicación del *Informe Preliminar sobre la Situación Social en el Mundo* y concediera especial atención a los problemas planteados en los países que atravesaban un período de transición rápida debida sobre todo a la urbanización.

De conformidad con esta petición, el segundo *Informe sobre la Situación Social en el Mundo* se dividió en dos partes. En la parte I, se analizaban los cambios ocurridos desde que se publicó el informe preliminar, utilizando hasta donde era posible los indicadores estadísticos recomendados por el Comité de Expertos para la Definición y Medición Internacional del Nivel de Vida, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión de Estadística y el Consejo. Según las conclusiones de esta parte del informe se realizaron significativos progresos en sectores vitales, en comparación con el período cubierto con el *Informe Preliminar*, aunque esos progresos resultaban pequeños dada la magnitud de la pobreza y de las necesidades existentes y muy desigual en las diferentes esferas del desarrollo social. Se insistió en la deficiencia de los datos estadísticos sobre las condiciones sociales en muchas partes del mundo. A este respecto, se dirigió una nota separada a la Comisión de Asuntos Sociales en su 11º período de sesiones (mayo de 1957), sugiriendo medios y métodos para obtener una mejor información sobre las condiciones sociales en los países de economía insuficientemente desarrollada, entre ellos el de establecer relaciones corrientes con los centros de investigación interesados en los problemas de la política social en esos países.

En la parte II, relativa a la urbanización, el segundo informe muestra que, en los países insuficientemente desarrollados, la urbanización se efectúa a un ritmo muy rápido y, en muchos casos, supone el traslado a la ciudad de la pobreza y el empleo insuficiente del campo; a menudo, la urbanización es más rápida que la industrialización y crea una multitud de problemas sociales.

Del 8 al 18 de agosto de 1956 se celebró en Bangkok un Seminario Mixto Naciones Unidas-UNESCO sobre Urbanización en la Región de la CEALO. Las Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo y la UNESCO prepararon varios estudios y documentos para el Seminario, y la UNESCO presentó cinco estudios experimentales hechos en ciudades asiáticas e iniciados en 1952. Las conclusiones del seminario se publicaron como anexo al segundo *Informe sobre la Situación Social en el Mundo*. Estas conclusiones muestran, especialmente, que el crecimiento acelerado de la población en la región de la CEALO es una de las principales causas de la urbanización excesivamente rápida porque aumenta la importancia del factor de "repulsión" que influye en la emigración rural a las urbes. Generalmente la urbanización va acompañada de trastornos en la organización social, particularmente perceptibles en los cambios de la estructura familiar, en el culto y credo religiosos y en la organización de la sociedad. Para facilitar la etapa de transición y de reorganización, el Seminario recomendó que se tomaran medidas, especialmente para diversificar e intensificar la producción agrícola con objeto de mejorar las condiciones en las zonas rurales; para descentralizar las industrias y favorecer a las pequeñas empresas que se establezcan en las aldeas y pueblos pequeños y relacionar estas medidas con las de planificación del medio ambiente. Se consideró asimismo que los gobiernos y organismos internacionales debían incrementar el estudio e investigación en materia de urbanización.

Se está preparando un Seminario Mixto Naciones Unidas-UNESCO, semejante al anterior, que debiera

celebrarse en América Latina en 1958 con participación de la OIT.

En cumplimiento de la recomendación hecha por el Consejo Económico y Social en su 22º período de sesiones, se ha iniciado el trabajo previo a un estudio de los problemas de equilibrio y coordinación de todas las medidas de orden social y económico para elevar el nivel de vida. A este respecto, el segundo *Informe sobre la Situación Social en el Mundo* expone varias dificultades de orden social ocasionadas por el desequilibrio de los factores de desarrollo.

b) POBLACIÓN

Durante el período que se examina los problemas demográficos continuaron adquiriendo importancia en los países insuficientemente desarrollados. El crecimiento de la población en Asia, Africa y la América Latina ha continuado acelerándose, a medida que los programas sanitarios cada vez más amplios y eficaces han reducido a cifras mucho más bajas la tasa de mortalidad, en tanto que la de natalidad continúa siendo elevada. El programa de estudios demográficos se dedicó de modo más directo que en años anteriores a las tendencias demográficas en estas regiones y a sus consecuencias en cuanto a la política económica y social y a los programas de actividades. De conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Población y del Consejo Económico y Social, se tomaron medidas para ampliar este trabajo, tanto en lo que se refiere a las regiones como a los países, con objeto de prestar una ayuda más directa a los gobiernos en la solución de sus problemas concretos.

Se han establecido centros regionales demográficos de formación profesional y de investigación para Asia y el Lejano Oriente en Bombay, y para América Latina en Santiago de Chile. Estos centros constituyen proyectos de asistencia técnica emprendidos a solicitud de los gobiernos de la India y de Chile, respectivamente, con ayuda financiera de una fundación privada. Realizarán investigaciones sobre cuestiones demográficas de interés común para los diferentes países en cada región e instrucción a personal de esos países en los métodos para estudios demográficos.

Las comisiones económicas para Asia y el Lejano Oriente y para la América Latina se han visto perjudicadas por la falta de expertos calificados para ocuparse en los aspectos demográficos de sus estudios sobre los problemas del desarrollo regional. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General decidió crear puestos para expertos en la Secretaría de estas dos comisiones y en la Dependencia de Asuntos Sociales en el Oriente Medio. Expertos en demografía han sido trasladados de la Sede a las Secretarías de la CEALO y de la CEPAL, y se están adoptando disposiciones para enviar un experto al Oriente Medio a fines de 1957.

En el plano nacional los trabajos se han ampliado con el ofrecimiento de cooperación hecho directamente por la Secretaría a los gobiernos de algunos países insuficientemente desarrollados para la realización de estudios experimentales sobre cuestiones demográficas que tengan importancia en relación con la orientación y preparación de los programas de desarrollo. Dichos estudios tienen por objeto suministrar prontamente la información que soliciten los gobiernos que colaboran en esta tarea y ensayar y demostrar métodos de estudio que podrían usar otros gobiernos cuyos pro-

blemas sean análogos. Su posible utilidad quedó demostrada por el estudio práctico de las tendencias demográficas en el Estado de Misore, India, iniciado en 1951 como un proyecto mixto de las Naciones Unidas y del Gobierno de la India. El informe correspondiente se lo ha sometido al Gobierno de la India con la propuesta de que sea publicado a fin de que otros gobiernos puedan aprovechar la experiencia obtenida en la evaluación de las tendencias demográficas en una región cuyas estadísticas son deficientes y en el análisis de la relación de esas tendencias con el desarrollo social y económico. Durante el período que se examina, se comenzó a trabajar, en cooperación con el Gobierno de Filipinas, en un estudio experimental de la mano de obra y el empleo en relación con las características de la población y los movimientos migratorios en ese país. Asimismo se han preparado planes para realizar estudios demográficos experimentales con la cooperación de los gobiernos de algunos otros países insuficientemente desarrollados.

Varios órganos de las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a las migraciones internas como uno de los factores de las tendencias demográficas y del desarrollo económico y social de los países insuficientemente desarrollados, debido a su estrecha relación con los problemas de superpoblación rural, urbanización e industrialización.

Se completó la publicación de los *Trabajos de la Conferencia Mundial de Población* celebrada en Roma en 1954, con la edición de seis volúmenes en que figuran las monografías presentadas. Estos volúmenes, publicados mediante la ayuda de un subsidio concedido por la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, tratan todos los aspectos principales de las tendencias y los problemas demográficos en diferentes partes del mundo. En su 19º período de sesiones, el Consejo señaló a la atención de los gobiernos interesados, de los organismos especializados, de las comisiones económicas regionales y de las organizaciones no gubernamentales los trabajos de la conferencia y las labores de la Secretaría relacionadas con éstos e hizo algunas sugerencias con respecto al aprovechamiento de las conclusiones en los programas económicos y sociales. En consecuencia, una vez terminada la publicación de los *Trabajos*, se invitó a los gobiernos interesados y a las organizaciones no gubernamentales a comentar las conclusiones de la conferencia y las sugerencias hechas por el Consejo.

Además de los puntos mencionados anteriormente, se continuó trabajando en otros proyectos demográficos recomendados por la Comisión y el Consejo. Se inició el estudio de las tendencias demográficas futuras en los países de Asia, similar a los publicados anteriormente sobre los países de la América Central y la América del Sur. Se terminó un estudio sobre el envejecimiento de la población en diferentes partes del mundo, las causas que lo determinan y algunas de sus consecuencias económicas y sociales y quedaron a punto de terminarse estudios sobre el crecimiento de la mano de obra y su relación con el crecimiento y la estructura demográficos y sobre las tendencias recientes en materia de fecundidad en los países industrializados.

c) DESARROLLO DE COMUNIDADES

En el período que se examina, el Comité Administrativo de Coordinación hizo nuevos esfuerzos para aclarar y definir otra vez, basándose en experiencias

recientes, el concepto de desarrollo de la comunidad, sus relaciones con el desarrollo económico y social integrado y equilibrado y la función de los diferentes servicios en esta materia. Esta aclaración, incorporada en el 20º informe del CAC al Consejo Económico y Social, ha contribuido a promover la acción concertada de las Naciones Unidas y los organismos especializados en materia de desarrollo de la comunidad.

Con objeto de lograr la aplicación de los conceptos, la política y los principios definidos por el CAC, se consultó a los organismos especializados con respecto a la convocación de una serie de reuniones regionales oficiosas de dichos organismos para considerar el desarrollo de la comunidad; la primera de esas reuniones se celebró en Bangkok en febrero de 1957, y se espera realizar otras semejantes en Santiago de Chile y en Beirut.

Se han celebrado consultas oficiosas pero constantes entre los representantes y expertos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en países como Afganistán, Irak y Filipinas, a fin de intercambiar pareceres y experiencias y de promover una mayor cooperación en materia de asesoramiento y ayuda a los gobiernos en la planificación y ejecución de programas completos de desarrollo de la comunidad.

También se ha adelantado en la comprensión de los conceptos y de principios básicos del desarrollo de la comunidad, así como en el reconocimiento y aprovechamiento del movimiento de desarrollo de la comunidad como medio para promover el progreso económico y social y elevar el nivel de vida del pueblo.

En muchos países el progreso ha sido notable. Los Gobiernos de Afganistán, Indonesia, Irak, Tailandia, Viet-Nam y Filipinas, por ejemplo, han formulado e iniciado planes y programas completos y de vasto alcance en materia de desarrollo de la comunidad como parte integrante de los planes nacionales de fomento económico y social. Estimulado por los resultados de los proyectos experimentales de desarrollo de la comunidad urbana, el Gobierno de Pakistán ha incorporado esta cuestión en su plan quinquenal. Con objeto de atender a las crecientes necesidades de Afganistán, Irak y Pakistán, se han constituido grupos de dos a cuatro expertos de las Naciones Unidas especializados en planificación, organización, administración, formación de personal, vivienda rural y urbanización, y aspectos de asistencia social del desarrollo de la comunidad, para prestar servicios de asesoramiento y ayuda. Se han proporcionado los servicios de expertos a Grecia, Haití, Jordania, Libano y Siria para la iniciación de proyectos experimentales de desarrollo de la comunidad para la formación de trabajadores y el ensayo de métodos y técnicas que se espera utilizar con fines de divulgación.

De conformidad con la resolución 1042 (XI) de la Asamblea General de febrero de 1957, en que se pide al Secretario General que preste asistencia, en particular a los Estados recién constituidos, en la preparación y organización de programas de desarrollo de la comunidad, se están contratando expertos para Camboja, Marruecos y Túnez.

Durante el período que se examina se organizaron dos viajes de estudio que permitieron a 13 funcionarios de Filipinas estudiar los proyectos de desarrollo de la comunidad en la India y Pakistán y a seis altos funcionarios de Afganistán visitar a Ceilán, India y Filipinas.

Con objeto de atender las necesidades de diversos países y de conformidad con las solicitudes de varios organismos directivos, se publicó un *Study Kit of Training for Community Development*. Además de las consideraciones básicas sobre capacitación para el desarrollo de la comunidad, tales como la selección de los cursillistas y el contenido y los métodos del programa de formación, este estudio contiene abundante material práctico ilustrativo, cuidadosamente seleccionado.

Se han redactado borradores de los principios y métodos de evaluación del desarrollo de la comunidad y de la función del gobierno en el desarrollo de la comunidad. Se han hecho planes para realizar en la India un estudio sobre el papel que desempeña el desarrollo de la comunidad en el crecimiento económico e industrial, y se ha emprendido, en la región de la CEALO, un estudio sobre el papel que desempeña el desarrollo de la comunidad en la formación de capital y en el desarrollo económico general en los países insuficientemente desarrollados.

Los documentos de las Naciones Unidas sobre organización y desarrollo de la comunidad han resultado útiles para los que se encargan de formular planes y de realizarlos y para otras personas interesadas en el desarrollo de la comunidad.

El Consejo Económico y Social ha reconocido que los proyectos de desarrollo de la comunidad deben adaptarse a las condiciones geográficas, económicas, sociales y demográficas de los países de las diferentes regiones. En su 16º y 20º períodos de sesiones el Consejo subrayó la importancia de la acción regional, y la Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, invitó a los Estados Miembros a que, procediendo de común acuerdo en grupos regionales, continuasen poniendo en práctica otras medidas de desarrollo de la comunidad. La Comisión de Asuntos Sociales, en su undécimo período de sesiones, recomendó que se organizaran conferencias, seminarios, talleres y viajes de estudio, tanto en el plano internacional como en el regional y el nacional, y que se les prestase asistencia con objeto de facilitar la comprensión de los procedimientos y métodos de desarrollo de la comunidad.

La Misión de Estudio sobre desarrollo de la comunidad en los países de Africa concluyó su trabajo y el proyecto de informe ha sido enviado a los gobiernos interesados para que hagan sus observaciones.

Las Naciones Unidas han continuado participando en los centros regionales de educación fundamental establecidos por diferentes gobiernos en cooperación con la UNESCO. Se están celebrando consultas con la UNESCO y con otros organismos especializados interesados acerca del aprovechamiento de los servicios del Centro Regional de Educación Fundamental de Pátzcuaro, México, para un cursillo sobre selección y formación de dirigentes locales para el desarrollo de la comunidad. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de aprovechar los servicios del Centro Regional de Educación Fundamental de Sirs-el Layyan, Egipto, para un cursillo sobre participación y actividades de la mujer en el desarrollo de la comunidad. Como un medio más de dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea y del Consejo acerca de la acción concertada y de poner en práctica el acuerdo a que llegó el CAC en sus reuniones de 1956 respecto a los conceptos de desarrollo de la comunidad, las Naciones Unidas han venido cooperando con la UNESCO y con otros organismos especializados en el asesoramiento y asistencia al Brasil y a Turquía para la preparación

de sus planes de educación fundamental como parte de un programa general de desarrollo de la comunidad.

En consulta con los organismos especializados se preparó un informe titulado "Informe sobre los conceptos y principios del desarrollo de la comunidad y recomendaciones sobre nuevas medidas prácticas que pueden adoptar las organizaciones internacionales" y se sometió al estudio de la Comisión de Asuntos Sociales en su undécimo período de sesiones, en mayo de 1957. Este informe consta de tres partes: en la primera se estudian 10 principios básicos del desarrollo de la comunidad enumerados provisionalmente en el informe sobre *El Progreso Social Mediante el Desarrollo de la Comunidad* y se resumen las observaciones hechas por los gobiernos acerca de esos principios. En la mayoría de las observaciones se sostiene la opinión de que los principios de desarrollo de la comunidad expuestos en el informe deben considerarse como propuestas provisionales que pueden modificarse y cambiarse según la experiencia que se adquiera. Dada la amplitud que van adquiriendo los programas de desarrollo de la comunidad, el continuo perfeccionamiento de los métodos y de las técnicas y la gran diferencia de condiciones económicas y culturales, no se estimó conveniente establecer una fórmula general definitiva.

En la segunda parte del informe se estudia la organización de actividades de los programas de desarrollo de la comunidad en países de África, Europa, la América Latina, el Oriente Medio y el Asia meridional y sudoriental, con el objeto de proporcionar datos útiles para un examen más a fondo de los conceptos y principios del desarrollo de la comunidad y formular recomendaciones para programas de larga duración para una acción internacional concertada.

Las recomendaciones sobre una acción práctica internacional concertada de larga duración para el desarrollo de la comunidad se exponían en la tercera parte del informe y se subrayaba la necesidad de programas, investigaciones y estudios duraderos, así como de proseguir los programas básicos y de organizar seminarios y viajes de estudio. Se recomendaron medios y arbitrios para las actividades duraderas, tales como la formación, en el plano internacional, de un mayor número de dirigentes, la coordinación de la acción internacional y el aprovechamiento de los medios de formación.

Al paso que apoyaba las propuestas sobre programas duraderos de desarrollo de la comunidad, entre las principales recomendaciones de la Comisión de Asuntos Sociales para mejorar el desarrollo de la comunidad y fortalecer la acción internacional en este sentido figuraban: 1) coordinación más efectiva en el plano nacional; 2) estudio más a fondo de los elementos esenciales del proceso de desarrollo de la comunidad, particularmente los relativos a la formación y dirección de personal; 3) aplicación de los principios y programas de desarrollo de la comunidad a las zonas urbanas, y 4) organización de conferencias, seminarios, talleres y viajes de estudio en general, y prestación de asistencia para llevarlos a efecto, con objeto de promover la comprensión de los procedimientos y métodos del desarrollo de la comunidad, e iniciación de programas de investigación y publicaciones sobre aspectos particulares del desarrollo de la comunidad.

d) VIVIENDA, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN

Durante el período que se examina, el programa de las Naciones Unidas en materia de vivienda, construc-

ciones y planificación se ha consagrado a prestar asistencia a los gobiernos en la formulación y ejecución de normas y programas nacionales de vivienda, construcción y planificación; el financiamiento de dichos programas, especialmente para los grupos de ingresos reducidos; la asistencia directa a los gobiernos para la creación de instituciones de investigación y de formación, para aumentar la productividad en las industrias de la construcción y de materiales de construcción, a fin de que se reduzcan los costos de construcción y se mejore la calidad, y el estudio en la esfera regional de la planificación del medio físico, particularmente en relación con los problemas que plantean los programas de urbanización, industrialización y fomento.

Los problemas del financiamiento de los programas de construcción de viviendas y de mejoramiento de la comunidad se discutieron en varias reuniones regionales, entre ellas en un seminario sobre la construcción de viviendas mediante asociaciones sin fines de lucro, para participantes de Asia y del Lejano Oriente, celebrado en Copenhague en julio-agosto de 1956; en el cuarto período de sesiones del Grupo Mixto de Trabajo sobre Vivienda y Materiales de Construcción de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, celebrado en Bangkok en julio-agosto de 1956, y en la Primera Reunión Técnica Interamericana en Vivienda y Planeamiento, celebrada en Bogotá en noviembre-diciembre de 1956. Las conclusiones de estas reuniones así como las de otras anteriores se comunicaron a la Comisión de Asuntos Sociales en su undécimo período de sesiones, junto con las sugerencias sobre acción futura. Un informe sobre esta materia presentado al Consejo Económico y Social contiene información sobre los métodos de financiamiento de los programas de vivienda y de mejoramiento de la comunidad en las principales regiones del mundo. Asimismo, durante este período, un experto en esta materia ha permanecido en la América Latina para asesorar a los gobiernos de la región que lo solicitasen; varios de ellos han aprovechado este servicio.

Se ha prestado ayuda continua a los centros regionales de vivienda en Asia y en el Lejano Oriente (Bandung y Nueva Delhi) y en la América Latina, al Centro Interamericano de la Vivienda (Bogotá) establecido con el estímulo y apoyo de las Naciones Unidas. Estos centros se ocupan en la cuestión de la reducción de los costos de la construcción por medio de la investigación de los materiales y las técnicas de construcción y la formación profesional al efecto, así como del estudio de los aspectos sociales y económicos del problema de la vivienda. Se ha invitado a las Naciones Unidas a hacerse representar en los comités asesores de estos centros.

La coordinación de actividades en materia de vivienda, construcción y planificación ha exigido que se establecieran relaciones estrechas con las comisiones económicas regionales, los organismos especializados interesados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Un acuerdo oficioso entre las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para la coordinación de actividades en la América Latina ha permitido simplificar la prestación de asistencia técnica en materia de vivienda en esa región. Un grupo de trabajo especial en materia de vivienda, construcción y planificación del Comité Administrativo de Coordinación se reunió en junio de 1956 en Ginebra para discutir la coordinación, dentro del Programa Integrado de 1949. Se acordó celebrar reunio-

nes oficiosas de coordinación semejantes a ésta de tiempo en tiempo. Se decidió asimismo, con fines de mutua información y de más efectiva colaboración, que las Naciones Unidas preparasen, basándose en las informaciones suministradas por los organismos, durante un período de prueba de dos años, informes anuales sobre las actividades internacionales actuales y proyectadas. El primero de estos informes se preparó a principios de 1957.

Continúa publicándose el boletín *Housing, Building and Planning* semestralmente. Antiguamente se titulaba *Housing and Town and Country Planning* y cada edición trata de un problema especial relacionado con el programa de trabajo. Durante el período que se examina se publicó un catálogo internacional de películas sobre vivienda, construcción y planificación.

e) BIENESTAR SOCIAL

La colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha seguido siendo un aspecto sobresaliente del programa de las Naciones Unidas de protección a la familia y a la infancia.

Formación profesional para el servicio social

En julio y agosto de 1956 se celebró una reunión en la cual 20 expertos participaron en la discusión de la formación profesional básica para el servicio social. El informe definitivo de la reunión servirá como documento de trabajo de tres reuniones regionales que se ocuparán del problema de la formación profesional para el servicio social y que se celebrarán en la América Latina y el Lejano Oriente en 1957 y en el Oriente Medio en 1958.

Se ha preparado un documento sobre el problema de la selección de materiales para la formación profesional y especialmente sobre casos individuales para que se sirvan de él los expertos en formación para el servicio social, las asociaciones nacionales y las escuelas de trabajo social que se encargan de la reunión y preparación de material basado en las condiciones sociales y económicas locales.

Mantenimiento del nivel de vida familiar

Juntamente con la OIT y en consulta con los organismos especializados interesados, se reunió en Ginebra, en septiembre de 1956, un grupo de trabajo compuesto de siete expertos, con amplia experiencia en formular normas de asistencia social y planes sociales; dichos expertos eran naturales de países de diferente grado de desarrollo económico y de distinta estructura social, y aprobaron por unanimidad un informe titulado "Informe sobre una política coordinada relativa a los niveles de vida de las familias".

Al estudiar este informe y las observaciones y comentarios del Secretario General y de los organismos especializados, la Comisión de Asuntos Sociales, en su 11º período de sesiones, expresó su aprobación general de las conclusiones a que llegaron los expertos y subrayó la importancia que tenía el que las Naciones Unidas y los organismos especializados siguieran realizando estudios y esfuerzos, en cooperación con los gobiernos. Propuso que el Consejo recomendase el informe a los gobiernos e invitase a los organismos internacionales a que estudiaran más a fondo el informe, especialmente con objeto de complementar las conclusiones de los expertos.

Protección a la familia y a la infancia

En materia de protección a la familia y a la infancia, se ha dado especial importancia a la cooperación en el plano regional como consecuencia del establecimiento de dependencias regionales de asuntos sociales en Asia y en el Lejano Oriente, en América Latina y en el Oriente Medio. El mayor interés que en los programas del UNICEF se da a la protección social, y particularmente a la capacitación de las madres y a la parte que corresponde al programa de protección a la madre y al niño en los programas de desarrollo de la comunidad, ha aumentado las posibilidades de cooperación.

El Grupo Técnico de Trabajo encargado de las actividades de carácter duradero en favor de la infancia celebró su cuarta reunión en Ginebra, en junio de 1956; el tema más importante del programa fué la organización y administración de los servicios de protección a la infancia. El CAC, en su reunión de octubre de 1956, decidió que se mantuviese al Grupo Técnico pero que en lo futuro se lo reuniese únicamente cuando lo exigiesen las circunstancias. También subrayó la importancia de que prosiguiese la coordinación entre los diferentes organismos para la planificación y la ejecución de proyectos concretos de actividades permanentes en favor de la infancia. Con la publicación de los estudios titulados *Estudio Comparado de las Leyes de Adopción* y *El Cuidado del Niño en Instituciones*, se completó la serie de publicaciones sobre los niños que carecen de vida familiar normal.

Las solicitudes hechas por los gobiernos siguen denotando un creciente interés en obtener asesoramiento acerca de la organización y administración de los servicios sociales.

El segundo número de la *Revista Internacional de Servicio Social* se consagró principalmente a la rehabilitación de los impedidos; los futuros números tratarán de la organización y administración de los servicios sociales, la formación de personal para dichos servicios y la seguridad social y los servicios sociales conexos, en particular en lo que se refiere a los niveles de vida familiar.

Rehabilitación de los impedidos

Desde su iniciación, en 1950, el programa de rehabilitación de los impedidos fué concebido como parte de una actividad coordinada y permanente de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Se han tenido en cuenta especialmente tres principios: 1) los servicios de rehabilitación deben incorporarse a los programas generales de sanidad, instrucción, protección social y empleo de cada país; 2) la asistencia que se preste deberá adaptarse al grado de progreso económico y social nacional o regional; y 3) la asistencia consistirá principalmente en ayuda directa a los gobiernos para la organización de los servicios de rehabilitación y la obtención de personal para los mismos, para la promulgación de medidas para prevenir, descubrir y limitar la incapacidad física, para informar a la opinión pública acerca de los impedidos, y para la realización de investigaciones y la oferta de asesoramiento técnico.

Con objeto de aprovechar plenamente los recursos disponibles tanto en el plano internacional como en el nacional, durante el año que se examina se han consagrado todas las actividades a un número limitado de proyectos en Asia, el Oriente Medio, Africa y la Amé-

rica Latina, con objeto de implantar los programas de rehabilitación en las zonas que se encuentran en una etapa inicial de desarrollo económico y social. La mayoría de estos proyectos se proponían ayudar a los gobiernos y a las organizaciones particulares de beneficencia a establecer centros experimentales de rehabilitación y formar un núcleo de personal técnico como primer paso para la integración gradual de los servicios de rehabilitación en un programa más amplio de protección social. Algunos de los centros fueron establecidos por organismo de seguridad social con el objeto de restituir al trabajo a los impedidos beneficiarios de prestaciones, lo cual indica un reconocimiento cada vez mayor por los gobiernos de la importancia económica de los programas de rehabilitación. En Europa, se ha dado especial importancia a los seminarios y los grupos de estudio para facilitar el intercambio de información y experiencias entre los países que tienen programas de rehabilitación más avanzados y que han alcanzado un nivel análogo de desarrollo en esta materia.

Uno de los hechos más importantes en el período que se examina fué el de que las organizaciones no gubernamentales participaron más activamente en la ejecución de trabajos prácticos. Por ejemplo, la Federación Mundial de Veteranos puso a disposición, por conducto de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, varios expertos para asesorar a los centros experimentales establecidos en Birmania, India e Indonesia. La *American Foundation for Overseas Blind* y la *International Society for the Welfare of Cripples* (Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados) también cooperaron activamente en la ejecución de proyectos.

Aspectos sociales de la migración

Dadas las dificultades con que tropezaron las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en la realización y coordinación de investigaciones sobre los problemas que plantea la migración, especialmente en materia social, el Grupo Técnico de Trabajo sobre Migraciones del Comité Administrativo de Coordinación inició un estudio de esta cuestión que debe concluirse en 1957.

La Conferencia de Plenipotenciarios sobre la Obligación de dar Alimentos, convocada en la Sede en mayo de 1956, aprobó el 20 de junio de 1956 una Convención sobre la Tramitación en el Extranjero de las Demandas de Prestación de Alimentos (véase capítulo VI, 5 f) *infra*).

Defensa social

La Comisión de Asuntos Sociales, en su 11º período de sesiones, recomendó al Consejo Económico y Social la adopción de resoluciones por las que aprobase las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos tales como fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ginebra, agosto de 1955), e hizo suyas las recomendaciones sobre selección y formación del personal penitenciario, sobre los establecimientos penales y correccionales abiertos y sobre los principios generales del trabajo penitenciario, aprobadas por el Congreso.

La Comisión, advirtiendo las dificultades con que había tropezado el Secretario General en la ejecución del programa de trabajo en materia de defensa social, solicitó que se convocase en 1958 una reunión del Comité Asesor Especial de Expertos de que trata el anexo a la resolución 415 (V) de la Asamblea General, de 1º de diciembre de 1950, solicitándole que estudiase las dificultades y que formulase recomendaciones sobre el programa y la política futuros de las Naciones Unidas en materia de defensa social, así como que asesorase al Secretario General sobre la organización del Segundo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que ha de celebrarse en 1960.

El tercer período de sesiones del Grupo Consultivo Europeo en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente se celebró en Ginebra en agosto de 1956 y trató los siguientes asuntos: 1) el tratamiento de determinados tipos de delincuentes respecto a los cuales la sociedad precisa de una protección especial, es decir, los delincuentes habituales y los delincuentes anormales, y 2) el tratamiento de los delincuentes pertenecientes al grupo de edad de los adultos jóvenes. Además de hacer recomendaciones sobre estas materias, el Grupo constituyó un grupo de trabajo para considerarlas más detenidamente. Este se organizará bajo los auspicios del Consejo de Europa y se reunirá en Estrasburgo en septiembre de 1957.

En 1954, el Seminario de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en Asia y el Lejano Oriente había recomendado la creación de un instituto regional de defensa social con la ayuda de las Naciones Unidas. Después de la celebración del Seminario, varios gobiernos expresaron su interés en el proyecto y se han iniciado negociaciones con objeto de explorar las posibilidades de establecer el instituto en la región con la cooperación de los gobiernos interesados.

Lo mismo que en lo pasado, se han recibido informes periódicos de los corresponsales nacionales en materia de defensa social. En la *Revista Internacional de Policía Criminal* figuran resúmenes seleccionados de estos informes. El número de corresponsales de defensa social asciende a 109, nombrados por 46 gobiernos, lo que significa un aumento de 16 corresponsales desde la última Memoria.

Se ha preparado un análisis comparativo preliminar de estadísticas de delitos, que abarca 65 países y los tres tipos de delitos siguientes: homicidio, amenaza de acometimiento grave, hurto y robo con allanamiento de morada.

Actualmente ascienden a 19 las ratificaciones y adhesiones al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobadas por la resolución 317 (IV) de la Asamblea General.

Durante el período que se examina se publicaron dos números de la *Revista Internacional de Policía Criminal*. Cada número se ha dedicado, en la medida de lo posible, a temas especiales de defensa social, y la *Revista* se utiliza cada vez más como medio de divulgación de los estudios técnicos de las Naciones Unidas sobre defensa social. Figuran también en esta publicación notas bibliográficas e información legislativa seleccionada.

B. ASISTENCIA TÉCNICA

1. Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo económico

a) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Promesas y pagos de contribuciones

Para el ejercicio económico de 1956, 77 gobiernos prometieron un total de 28.800.000 dólares, habiendo sido la cifra de 1955 de 27.600.000 dólares para las actividades del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Tanto la cantidad total prometida como el número de gobiernos contribuyentes eran mayores que en lo pasado.

El aumento de las contribuciones en 1956, agregado a un considerable saldo a favor de 1955 y al pago de cantidades prometidas pendientes de años anteriores, dió al Programa una base financiera más firme y permitió que se lo aplicara más eficaz y completamente que en 1954 y 1955, años en los cuales la inseguridad financiera determinó una reducción de las actividades en relación con los programas aprobados.

Las promesas de contribuciones para 1957 también son mayores. Ochenta gobiernos han prometido ya un total de 30.800.000 dólares, y 30 de estas promesas son mayores que en 1956. El pago de las contribuciones también ha mejorado.

Uso de las divisas

En 1956 las diferentes divisas en que se pagaron las contribuciones al Programa se utilizaron de un modo más completo. En 1958 se llevará a término la asimilación completa de divisas en los procedimientos de formulación de programas nacionales en conformidad con las opiniones expresadas por el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social. A recomendación del CAT, el Consejo declaró en su 22º período de sesiones que, si en el momento de la Conferencia de compromisos financieros una cantidad superior al equivalente de 500.000 dólares y al total de las sumas prometidas el año anterior, en una moneda cualquiera, no estuviera aún comprometida para el financiamiento del programa aprobado, dicha moneda no sería fácilmente utilizable. El Consejo encareció a los gobiernos que procuraran en la medida de lo posible que la parte de su contribución que excediera del equivalente de 500.000 dólares se hiciera efectiva en divisas inmediatamente utilizables o en una moneda convertible en esas divisas. También determinó los procedimientos para la utilización de contribuciones y pidió que los observaran la Junta de Asistencia y las organizaciones participantes. Éste asunto lo examinó más tarde la Segunda Comisión, en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, y el Consejo lo examinará nuevamente en su período de sesiones de verano, en 1957.

Fondo de Operaciones y de Reserva

A fines de 1956, el Fondo de Operaciones y de Reserva del Programa Ampliado llegó a 12 millones de dólares según lo autorizado por el CAT. A recomendación de la JAT, fueron revisadas y modificadas las disposiciones relativas a la utilización del Fondo, en cuanto a la concesión de anticipos a las organizaciones participantes a base de compromisos firmes de

aportar contribuciones, quedando entendido que esos anticipos serían reembolsados tan pronto como se recibieran contribuciones, y también anticipos para financiar obligaciones autorizadas por el Presidente Ejecutivo de la JAT con objeto de atender los casos urgentes que se presentasen en la ejecución del programa anual. Éste permitirá que se suspenda el "Fondo para Casos Urgentes", que comprende aproximadamente un 5% de los recursos del Programa, que ha sido utilizado en 1956 para atender solicitudes para casos urgentes.

b) ACTIVIDADES

Programas para 1956 y 1957

En 1956 se puso en ejecución el primer programa anual de asistencia técnica que fuera trazado y aprobado en conformidad con los nuevos procedimientos de formulación de programas nacionales fijados por el Consejo Económico y Social a fines de 1954. También fué el programa anual de mayor consideración desde que se inició el Programa Ampliado en 1950. A fines de 1956, las obligaciones contraídas por el Programa ascendían a 30.500.000 dólares, de los cuales 25.300.000 correspondían a gastos directos de proyectos en países y territorios insuficientemente desarrollados, suma que era mayor en 4 millones a la de 1955.

En 1956 el Programa Ampliado proporcionó asistencia técnica a 103 países y territorios. Como en años anteriores, la asistencia proporcionada a los gobiernos consistió sobre todo en los servicios de expertos en determinadas especialidades, y en un grado menor, en becas y subsidios para estudios, y en material y suministros para formación profesional y demostración.

Se proporcionaron los servicios de 2.346 expertos, o sea 238 más que en 1955, contratados en 67 países, a unos 100 países y territorios. Más de un cuarto de los expertos procedía de países o territorios a los que el Programa proporcionaba también los servicios de expertos extranjeros. Al mismo tiempo, se concedieron 2.128 becas y subsidios para trabajadores aprendices a los nacionales de 99 países y territorios. Unos 88 países dieron hospitalidad y proporcionaron las instalaciones necesarias para la formación profesional. Casi todas las becas fueron concedidas como parte integrante de proyectos más amplios de asistencia técnica.

En 1956, las organizaciones participantes destinaron 3.300.000 dólares a material y suministros, en comparación con 2.300.000 en 1955.

La distribución regional de asistencia técnica en 1956 fué la siguiente: África, 8,9%; Asia y el Lejano Oriente, 32,5%; Europa, 6,8%; América Latina, 28,8%; Oriente Medio, 19,6%; y proyectos interregionales, 3,4%. Estos porcentajes regionales son casi iguales a los de años anteriores, pero denotan una asistencia mayor a países que han alcanzado su independencia recientemente. Desde que se inició el Programa, Libia ha recibido una ayuda considerable, pero en los últimos años, especialmente en 1956 y 1957, se ha proporcionado mayor asistencia a Viet-Nam, Camboja, Laos, Sudán, Túnez, Marruecos y Ghana.

Según los nuevos procedimientos de formulación de programas utilizados para planear las actividades de 1956, los gobiernos beneficiarios preparan solicitudes

detañadas y fijan las prioridades teniendo en cuenta sus propios planes de fomento. La Junta de Asistencia Técnica encontró que el resultado más importante de la formulación de los programas por los propios países en 1956 era el mayor número de proyectos directamente enlazados con determinados programas de fomento nacional o local.

Conforme al programa para 1957, aprobado por el CAT, el importe total de los gastos de las organizaciones participantes y de la JAT será de unos 32 millones de dólares, de los cuales 26 millones corresponderán a gastos directos de los proyectos.

Autorización para casos urgentes

En 1956, el "Fondo para Casos Urgentes" le dió cierta flexibilidad al programa, pues permitió que el Presidente Ejecutivo de la JAT autorizara fondos para financiar proyectos indispensables y urgentes que no podían preverse cuando se elaboró el programa. El recurso a esta autorización resultó particularmente benéfico en el caso de países que acababan de emanciparse y que comenzaban a formular planes de fomento económico y social. En 1957, el Presidente Ejecutivo sigue teniendo facultades para autorizar esas asignaciones especiales con cargo al Fondo de Operaciones y Reserva.

Proyectos regionales y proyectos continuos

Cuando el CAT aprobó el programa de asistencia técnica para 1956, en diciembre de 1955, se dedicó especial atención al por ciento de proyectos regionales. El Comité decidió que la JAT debía limitar los proyectos regionales a un 10% de todas las actividades sobre el terreno planeadas para 1957, aunque podía presentar proyectos regionales que "ofreciesen perspectivas especialmente interesantes" excediéndose del límite del 10%, para que los examinase el CAT. Al aprobar el programa para 1957, el CAT autorizó proyectos regionales que excedían en 250.000 dólares el límite del 10%. El CAT pidió que se siguiera la norma del 10% al preparar los planes para 1958.

En 1956 estaban en ejecución 1.334 proyectos de asistencia técnica. De éstos, 915, o sea el 69%, se iniciaron en 1955 o antes. Estos "proyectos continuos" constituyeron un 85% del programa total aprobado por el CAT. El Comité tomó nota especialmente de esta elevada proporción y advirtió que una insistencia indebida en los proyectos continuos podía dar como resultado una excesiva rigidez del programa en conjunto. El Comité pidió a la JAT que siguiera de cerca estos proyectos para determinar si su continuación estaba justificada y si no era posible que gradualmente se encargaran de ellos los gobiernos.

Evaluación

En su período de sesiones del verano de 1956, el CAT, basándose en los informes de su Grupo de Trabajo para la Evaluación, señaló a la atención de la JAT, de las organizaciones participantes y de los gobiernos beneficiarios recomendaciones concretas para la mejora de las prácticas de coordinación de los gobiernos, la contratación de expertos por las organizaciones, la continuidad del programa y las actividades, la evaluación y los informes. El Comité pidió que en adelante se evalúen las actividades del Programa Ampliado en todos los informes anuales de la JAT al CAT. El Consejo Económico y Social hizo suya la reco-

mendación del CAT de que los organismos especializados dieran cuenta de estas mismas cuestiones en sus informes anuales al Consejo.

En consecuencia, a principios de 1957, la Junta envió un cuestionario para la evaluación a cada uno de sus representantes residentes. Sus respuestas, así como las observaciones de las organizaciones participantes, se han incorporado en un capítulo especial sobre "evaluación" del informe anual de la JAT correspondiente a 1956.

Mirando hacia el futuro. Para la reunión de julio de 1956 del CAT, la JAT preparó un estudio sobre las perspectivas del Programa Ampliado, titulado *Mirando hacia el futuro*. La Junta señaló que eran insuficientes los recursos financieros actuales para atender la demanda de asistencia técnica internacional, y consideró una moderada expansión del nivel del Programa en los próximos años, hasta una cifra anual de 50 millones de dólares. El informe evaluaba también los actuales procedimientos para la contratación de expertos, la selección de becarios y otras actividades, y exponía los resultados de determinados proyectos. El Comité señaló el informe a la atención de los gobiernos y los invitó a enviar observaciones y sugerencias, que han de presentarse al Consejo Económico y Social en su período de sesiones de julio de 1957.

c) ADMINISTRACIÓN

Gastos administrativos y de los servicios de ejecución

Como el Programa contó en 1956 con mayores recursos, varios de los organismos especializados que no habían podido proporcionar servicios adecuados en las oficinas centrales en 1954 y 1955 pudieron hacerlo de modo más eficaz en 1956. Para ello, hubo que aumentar un tanto los gastos administrativos y de los servicios de ejecución, aunque se redujo la proporción de estos gastos con respecto a los gastos del programa total. En noviembre de 1956, el Grupo de inspección administrativa del CAT estudió detalladamente los gastos administrativos y de los servicios de ejecución que la JAT proponía para 1957. El Comité aprobó los cálculos presentados, pero pidió que en lo futuro se tratara de lograr una reducción de los gastos administrativos. El Comité opinó también que la proporción de los gastos de los servicios de ejecución con respecto a los gastos del programa total no debía excederse en los años siguientes, e hizo hincapié en la necesidad de realizar las mayores economías posibles en la ejecución del Programa.

Oficinas locales de la Junta de Asistencia Técnica

Los servicios locales de la JAT continuaron progresando en 1956. Las funciones de los Representantes Residentes se determinaron más claramente y se mejoraron sus relaciones de trabajo con los gobiernos y las organizaciones participantes gracias a los nuevos procedimientos de formulación de programas nacionales. A principios de 1957 el número de oficinas locales aumentó a 31, que prestaban servicios a 50 países. Se establecieron nuevas oficinas en Santiago (Chile), Addis Abeba, Buenos Aires, Lima y Jartum.

Gastos locales

Los acuerdos mediante los cuales los gobiernos beneficiarios sufragaban una parte de los gastos locales de los expertos se han extendido ahora de 52 gobiernos

beneficiarios que participaban en 1954 a 80 en 1957. En el mismo periodo, las asignaciones totales han aumentado de un equivalente de 615.746 dólares de los Estados Unidos a 2.570.420 dólares de los Estados Unidos.

2. Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas figuran entre las ocho organizaciones que participan en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico y forman parte de la Junta de Asistencia Técnica. Además, administran proyectos solicitados por los gobiernos en virtud de las resoluciones 200 (III), 418 (V) y 723 (VIII) de la Asamblea General que se refieren, respectivamente, al desarrollo económico, el bienestar social y la administración pública. Para el trabajo que se efectúa en virtud de esas tres resoluciones (que a menudo se denomina "Programa Ordinario de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas") figura en el presupuesto de las Naciones Unidas para 1957 una cantidad que excede ligeramente de 1.700.000 dólares. Esta cantidad es algo menor de un tercio de la que las Naciones Unidas gastarán probablemente en los proyectos del Programa Ampliado durante ese mismo periodo. Cualquiera sea el origen de los fondos, la administración del Programa está centralizada. Un informe detallado sobre dicho Programa se presentó al Consejo Económico y Social en su 22º periodo de sesiones y el Consejo tomó nota de él con satisfacción en su resolución 623 (XXII).

En dicha resolución, el Consejo aprobó la importancia que el Secretario General daba en su informe a las actividades de asistencia técnica en materia de administración pública, y le pidió que proporcionara a la Asamblea General en su undécimo periodo de sesiones una documentación completa en apoyo de su petición de más fondos para ese fin. Así se procedió, y en el proyecto de presupuesto aprobado para 1957 figura una suma considerablemente mayor para la asistencia técnica en administración pública.

Con estos mayores recursos no sólo se atenderán las solicitudes constantes y en número cada vez mayor que los gobiernos presentan para obtener asistencia técnica en materia de administración pública sino que, además, se tratará de llevar a cabo el estudio previsto en la resolución 723 (VIII) de la Asamblea General. En especial, se analizará la experiencia adquirida por

las misiones de asistencia técnica para que sirva de referencia a otros gobiernos tanto como a los de los países a donde fueron destinadas las misiones.

En su 22º periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social también hizo suya una recomendación del Comité de Asistencia Técnica de que en los informes anuales al Consejo se diesen datos sobre la evaluación de los proyectos de asistencia técnica. En general, se conviene en que la evaluación incumbe principalmente a los gobiernos y en que, como los proyectos de asistencia técnica suelen constituir solamente una parte de programas nacionales de fomento más amplios, resulta difícil apreciar sus resultados con precisión estadística. Sin embargo, en la Secretaría se recibe mucha información sobre los éxitos o los fracasos y se trata de establecer procedimientos para la reunión ordenada de ese material y para su uso práctico.

Se ha solicitado y prestado asistencia técnica en casi todas las principales esferas de actividad del Consejo. Por ello, se encontrarán referencias a proyectos de asistencia técnica en otras secciones de la presente memoria. La conveniencia de la asistencia técnica, que casi siempre se deduce de los debates del Consejo, de vez en cuando es objeto de sus resoluciones, como, por ejemplo, en las del 22º periodo de sesiones que se refieren a los estudios sobre los recursos y a los estupefactantes, y en las que se refieren a las cooperativas y a la reforma agraria, de su 23º periodo de sesiones.

Con la implantación del programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos (resolución 926 (X) de la Asamblea General), se ha considerado que el utilizar para el nuevo programa los servicios administrativos con que ya cuenta la asistencia técnica permitiría realizar economías.

Lo mismo que en años anteriores, las Naciones Unidas han administrado los proyectos de asistencia técnica en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal y la Organización Meteorológica Mundial. No ha surgido ninguna dificultad grave en la práctica por el hecho de que esas organizaciones especializadas estén en Europa y las Naciones Unidas en América, y la coordinación ha resultado económica y conveniente.

No se da una relación detallada de los proyectos de asistencia técnica por cuanto se los expone de modo completo en otros informes presentados a la Asamblea General o al Consejo Económico y Social.

C. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

Los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados solicitan cada vez más la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para programas cuyo objeto es lograr beneficios duraderos para los niños. El UNICEF presta ayuda actualmente a más de 300 programas en más de 100 países y territorios. En 1956, unos 30 millones de niños, mujeres embarazadas y madres lactantes aprovecharon los programas que reciben ayuda del UNICEF; en 1957, se espera que el número exceda de los 45 millones.

Dadas las inmensas necesidades insatisfechas de los niños, la función del UNICEF, además de la ayuda especial que presta, tiene que ser necesariamente considerada principalmente en cuanto a su influencia en los programas que realizan los gobiernos para solventar los problemas urgentes que afectan a los niños.

La ayuda se limita a programas que prometen dar resultados fundamentales tanto desde el punto de vista técnico como desde el administrativo. Principalmente, se ha proporcionado ayuda para campañas contra enfermedades tales como el paludismo, la tuberculosis, el pian, el tracoma y la lepra; para el establecimiento de servicios elementales de protección a la madre y al niño, especialmente en zonas rurales; y para mejorar la alimentación infantil. Aunque se continúa prestando ayuda para programas determinados, hay una tendencia cada vez mayor a considerar esos programas en su relación con actividades más amplias de higiene y alimentación en el país, según sus posibles repercusiones sociales y económicas y, cuando resulta posible, a coordinarlos con más amplios programas nacionales de fomento.

Las graves consecuencias que tienen en la salud de los niños algunas enfermedades endémicas determinan al UNICEF a prestar ayuda a las campañas en gran escala de lucha contra las enfermedades. También es importante reconocer que, a menos que estas enfermedades sean dominadas, los servicios de protección a la madre y al niño tendrán que responder a una demanda tan grande de atención terapéutica que no les será posible ocuparse de la salud general de la madre y el niño, la prevención de otras enfermedades y la consecución de buena salud. En muchas regiones, los considerables gastos que imponen las enfermedades endémicas impiden virtualmente el financiamiento adecuado de servicios sanitarios permanentes. La lucha contra las principales enfermedades endémicas y su eliminación es a menudo condición previa no sólo para contar con servicios de sanidad eficaces y permanentes, sino para muchas otras actividades económicas y sociales para mejorar el ambiente de la familia y de la comunidad en que crecen los niños.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Oficina de Asuntos Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, se interesa fundamentalmente en ayudar a los países a crear una organización capaz de llevar a cabo una amplia actividad provechosa para los niños. Para conservar los efectos beneficiosos de las campañas en gran escala contra determinadas enfermedades hay que contar con servicios sanitarios y sociales permanentes que puedan continuar los progresos. Por consiguiente, se presta cada vez mayor importancia a que este objetivo se tenga presente en la planificación de las campañas y en la más pronta iniciación, sobre una base sólida, de las actividades permanentes posteriores a las campañas. De ordinario, hace falta para ello mejorar la organización de servicios sanitarios y sociales permanentes al mismo tiempo que se efectúan las campañas.

Los servicios de protección a la madre y al niño constituyen una parte esencial de esta actividad. El UNICEF ha alentado la ayuda a los programas cuya

finalidad es integrar la higiene maternoinfantil en la organización sanitaria local, provincial y nacional, y en que los servicios de higiene infantil están coordinados con los que se proporcionan a los niños por conducto de los servicios de enseñanza, asistencia social, alimentación y divulgación agrícola. En algunos lugares tales como en la India, Kenia, Filipinas y Uganda, se proporciona ayuda para la protección a la madre y al niño como parte fundamental de los programas de desarrollo de la comunidad.

La Junta Ejecutiva del UNICEF estudia periódicamente la cuestión de la distribución conveniente de ayuda entre los diversos tipos de programas. La Junta ha decidido hacer un esfuerzo financiero relativamente grande para ayudar a los gobiernos en una lucha intensa contra el paludismo. En 1957, se espera asignar aproximadamente 9 millones de dólares para esta labor y en 1958 y 1959 cantidades apenas menores. Al mismo tiempo, la Junta se da cuenta de la necesidad de llevar adelante otras labores indispensables. Continuará alentando especialmente la protección a la madre y al niño y, al respecto, se está ocupando con mayor interés en la ayuda para vencer uno de los obstáculos principales para la expansión, esto es, la escasez de personal capacitado. La Junta dedica también su atención a la gran necesidad de otras medidas prácticas para mejorar la alimentación infantil en regiones insuficientemente desarrolladas. Se han hecho progresos en el último año y actualmente se están estudiando activamente otras posibilidades prometedoras. Además, el UNICEF espera que los adelantos técnicos y el análisis de la experiencia adquirida proporcionarán nuevos medios para la lucha contra el tracoma y la tuberculosis.

Las asignaciones hechas en 1956 ascendieron a 22.400.000 dólares. El Director Ejecutivo ha calculado que, hacia 1960, el UNICEF podría asignar útilmente una suma de 30 millones de dólares anuales siempre que disponga de recursos. Como no puede esperarse que el número de gobiernos contribuyentes, cuyo total era de 81 en 1956, aumente mucho en lo futuro, es obvio que hace falta un mayor apoyo de los contribuyentes actuales.

D. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Además de sus actividades ordinarias de protección internacional de los refugiados y de ejecución del programa del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado ha tenido que ocuparse en el importante problema de los refugiados húngaros.

De conformidad con las resoluciones 1006 (ES-II) y 1129 (XI) de la Asamblea General, la Oficina del Alto Comisionado ha coordinado la asistencia urgente y el cuidado y sostenimiento de dichos refugiados y, conjuntamente con el Secretario General, ha dirigido llamamientos a los gobiernos para que les brindasen oportunidades de reasentamiento y les prestasen ayuda económica. En el capítulo II de la presente memoria se dan otros detalles acerca de las medidas adoptadas por el Alto Comisionado en relación con este problema.

a) PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Protección jurídica

La Oficina del Alto Comisionado, en el ejercicio de sus funciones de protección internacional, ha seguido

empeñándose en el mejoramiento de la situación jurídica de los refugiados, animando a los Estados a que se adhieran a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y vigilando su cumplimiento, así como procurando que se incluyan cláusulas beneficiosas para los refugiados en otros instrumentos jurídicos intergubernamentales.

Con posterioridad a la última Memoria del Secretario General, han ratificado la Convención de 1951, que entró en vigor el 22 de abril de 1954, Irlanda (el 30 de noviembre de 1956) y Liechtenstein (el 8 de marzo de 1957). Con fecha 7 de noviembre de 1956, el Gobierno de Marruecos comunicó al Secretario General que asumía las obligaciones derivadas de la ratificación, por el Gobierno de Francia, de la Convención de 1951 y que por lo tanto se consideraba parte en dicha Convención. Con ello ha llegado a 21 el número de Estados partes en la Convención.

En general, los países que han concedido asilo a refugiados procedentes de Hungría les han otorgado las ventajas que se han comprometido a brindar a los

refugiados en virtud de la Convención de 1951, y en algunos casos han proporcionado a esos refugiados facilidades especiales con respecto al derecho de empleo.

La Oficina del Alto Comisionado también ha seguido asesorando a los gobiernos acerca de las disposiciones que deben hacerse figurar en las legislaciones nacionales en beneficio de los refugiados. Las oficinas establecidas en los principales países de residencia de refugiados se han mantenido en relación con las autoridades de dichos países a fin de proteger los intereses de los refugiados en cuestiones tales como admisión y expulsión, derecho de empleo, facilitación del viaje, seguridad social y naturalización.

En la mayoría de países europeos en que existe una Oficina del Alto Comisionado, sus representantes colaboran con las autoridades públicas para determinar cuáles refugiados pueden acogerse a los beneficios de la Convención de 1951, y en el caso de que se refuese a un refugiado el derecho de permanecer en el país se notifica a dichos representantes y se les consulta al respecto.

Fomento de la repatriación voluntaria

De conformidad con los términos del Estatuto y las disposiciones de la resolución 925 (X), de 25 de octubre de 1955, de la Asamblea General, el Alto Comisionado ha seguido adoptando las precauciones necesarias para garantizar la protección de los refugiados que piensen repatriarse. A petición del Alto Comisionado, los países en los que residen refugiados comunican a las oficinas locales de aquél las visitas que proyecta realizar cualquier misión de repatriación y las invitan a que envíen un representante para que acompañe a la misión como observador imparcial, a fin de vigilar que nadie ejerza influencia indebida en los refugiados.

Cuando llega a conocimiento de las oficinas locales que algunos refugiados desean repatriarse, se hacen gestiones para ponerlos en relación con las autoridades competentes de su país de origen. De este modo se ha podido prestar especial atención a varios casos individuales.

Según informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado, se calcula que en 1956 regresaron a sus países de origen unos 2.700 refugiados que estaban a su cuidado, no figurando en dicho número los nuevos refugiados húngaros. La mayoría fueron repatriados de la China, Alemania y Austria.

Fomento de la admisión y del reasentamiento

Durante el pasado año aumentó considerablemente el número de refugiados al cuidado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que pudieron emigrar. Sin contar los nuevos refugiados húngaros, el número de refugiados que emigraron durante 1956 bajo los auspicios del Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas ascendió a 36.531, o sea un 80% más que durante el año anterior. Los principales países no europeos de reasentamiento fueron Australia, Canadá y los Estados Unidos de América.

El aumento puede atribuirse principalmente a la rápida aplicación de la *Refugee Relief Act*, de los Estados Unidos, que expiró el 31 de diciembre de 1956, y a la implantación de programas de migración

intraeuropea, particularmente por los Gobiernos de Bélgica y Suecia, para los refugiados que, por impedimentos físicos o sociales, no pueden participar en los programas ordinarios de migración.

b) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL FONUR

Desde hace dos años está en ejecución el programa del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados, para promover soluciones permanentes y prestar ayuda con carácter de urgencia, que había de contar con 16 millones de dólares y que fuera autorizado por la resolución 832 (IX), de 21 de octubre de 1954, de la Asamblea General. Se ha dado término a casi todos los proyectos del plan de actividades del FONUR para 1955, se halla en ejecución la mayor parte del plan revisado de actividades (1956), y se han iniciado los proyectos del plan revisado de actividades (1957). En 1º de mayo de 1957 los proyectos que se habían llevado a efecto valían más de 6.150.000 dólares.

En 1º de abril de 1957, los proyectos emprendidos según el programa del FONUR habían favorecido a 29.414 refugiados, incluidos 10.573 que actualmente se encuentran firmemente asentados. De conformidad con la política adoptada por el Comité Ejecutivo del FONUR, se ha concedido mayor importancia a los refugiados de los campamentos, la mayoría de los cuales se encuentran en Austria y Alemania. Según cálculos revisados, el número de refugiados que viven en campamentos situados en Austria, Alemania, Grecia e Italia, donde se desarrolla la parte principal del programa del FONUR, se ha reducido de 84.750 que era en 1º de enero de 1955, a 50.330 en 1º de enero de 1957.

No obstante, se teme que no sea posible completar el programa para fines de 1958. Esto se debe, en parte, a que no se han pagado 2.700.000 dólares de las contribuciones prometidas al Fondo por los gobiernos, en parte a la influencia que ha ejercido en la ejecución del programa la cuestión especial de los refugiados húngaros, y en parte a dificultades de orden técnico inherentes a la realización de programas de esta clase. Para solventar la situación creada por la falta de pago de 2.700.000 dólares, el Comité Ejecutivo del FONUR resolvió que se añadiese dicha cantidad a las contribuciones de los gobiernos que deben constituir el objetivo para 1957, con lo cual éstas ascenderán a 7.100.000 dólares aproximadamente, incluyéndose al mismo tiempo en el plan revisado de actividades (1957) los proyectos pendientes del plan revisado de actividades (1956).

En 1º de junio de 1957, las contribuciones de los gobiernos al FONUR para el ejercicio económico de 1957 eran de 3.604.373 dólares.

A petición del Comité Ejecutivo del FONUR, se le presentó en su quinto período de sesiones un informe en que volvía a evaluarse el programa del FONUR teniendo en cuenta la experiencia obtenida en lo pasado y las necesidades previstas para lo futuro. Según dicho informe, aun en el caso de que, antes de la terminación del programa del FONUR en diciembre de 1958, se pudieran suplir los 2.700.000 dólares de las contribuciones pagadas por los gobiernos, todavía harían falta 4.800.000 dólares para lograr soluciones permanentes para los refugiados que en aquel

momento vivan en campamentos y que no puedan recibir asistencia de otros programas internacionales.

A fin de solucionar este problema, el Comité Ejecutivo del FONUR estudió la posibilidad de recomendar que se intensificase el programa del FONUR durante el tiempo que le quedaba de vigencia o que se lo prolongase hasta después de diciembre de 1958, y decidió examinar nuevamente este asunto en un período extraordinario de sesiones que se celebraría en julio de 1957. El Comité advirtió asimismo que, además del problema de los refugiados que aun quedaban en los campamentos, todavía quedarían por resolver al terminar el actual programa del FONUR, los problemas de los refugiados no asentados que vivían fuera de campamentos, de los refugiados de origen europeo que se hallaban en la China, y de los refugiados clasificados como casos difíciles.

E. CUESTIONES DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

En su 22º período de sesiones, como ya había hecho en 1955, en su período de sesiones de verano, el Consejo Económico y Social llevó a cabo un examen general del desarrollo y de la coordinación de los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica, social y de derechos humanos. Las deliberaciones y resoluciones del Consejo sobre estas materias se le comunicaron a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones.

a) DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

En los informes correspondientes a las reuniones de octubre de 1956 y mayo de 1957, el Comité Administrativo de Coordinación ha anotado algunos progresos en la cooperación entre los diversos organismos. Dichos informes serán examinados por el Consejo en su 24º período de sesiones.

En el CAC se han celebrado consultas acerca de la labor de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Estas consultas han versado particularmente sobre las disposiciones para la proyectada segunda conferencia internacional sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos, la cual se espera que se reúna en septiembre de 1958, y sobre la cuestión de las relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos especializados competentes, por una parte, y el proyectado Organismo Internacional de Energía Atómica, por otra.

Asimismo, se han celebrado consultas con los organismos especializados acerca de varios asuntos económicos y sociales de interés común, tales como cooperativas e industrias en pequeña escala; explotación y aprovechamiento de los recursos hidrológicos, inclusive la constitución de un grupo de expertos en aprovechamiento coordinado de las cuencas fluviales; condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones aborígenes; posibilidades de crear una reserva mundial de alimentos; desarrollo de la comunidad; vivienda, edificación y planificación; urbanización; actividades permanentes en favor del niño; estudios e investigaciones sobre migración, y cooperación en esta materia entre los diversos organismos y colaboración con organizaciones no gubernamentales; condiciones necesarias para poder llevar a cabo una acción concertada eficaz sobre pro-

c) ESTUDIO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS PLANES RELATIVOS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

El Comité Ejecutivo del FONUR, como organismo consultivo, examinó un informe acerca de este asunto. Por unanimidad, el Comité decidió recomendar la continuación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados después del 31 de diciembre de 1958, por un período adicional que, en opinión de la mayoría de las delegaciones, debía ser de cinco años, y en condiciones similares a las establecidas por la resolución 727 (VIII), de 23 de octubre de 1953, de la Asamblea General. También decidió que se efectuara un nuevo examen de los planes, por lo menos un año antes de que expirase la prórroga que acordase la Asamblea General.

gramas de gran amplitud; y preparación del informe pedido por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones acerca de los progresos realizados en los territorios no autónomos.

También se han celebrado consultas para procurar que se coordine la participación en la Exposición internacional y universal de Bruselas de 1958 y mejorar la publicidad sobre la obra internacional económica y social mediante una relación de trabajo más estrecha entre los servicios nacionales de información y los servicios de información de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y la consulta entre ellos. Además, se han celebrado consultas entre los diversos organismos en relación con el estudio de los sueldos y subsidios efectuado por el Comité de estudio de sueldos creado por la Asamblea General en su décimo período de sesiones, y acerca de otros problemas referentes a los sueldos y al personal respecto de los cuales el Comité indicó que convendría pedir el parecer y la cooperación de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional y de algunos expertos ajenos a las organizaciones.

El Comité Administrativo de Coordinación ha estudiado también la situación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica basándose para ello en los informes verbales del Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica, y ha dado cuenta de actividades en las que colaboraban las Naciones Unidas y los organismos especializados en relación con las situaciones especiales en el Oriente Medio y en Hungría.

b) ACUERDO CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

En la continuación de su 22º período de sesiones, se le informó al Consejo Económico y Social de que la Junta de Directores de la Corporación Financiera Internacional había autorizado y solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que negociara con las Naciones Unidas un Acuerdo análogo al existente entre las Naciones Unidas y el Banco. El Consejo pidió a su Presidente que negociara un acuerdo con las autoridades competentes del Banco, a fin de vincular a la Corporación con las Naciones Unidas; las negociaciones entabladas entre el Presidente del Consejo y un Vicepresidente del Banco dieron por resultado un acuerdo que el Consejo aprobó y comunicó

a la Asamblea General con la recomendación del Consejo de que la Asamblea lo aprobase en su undécimo período de sesiones. El Acuerdo fué aprobado por el Consejo de Gobernadores del Banco y por la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Financiera Internacional el 31 de enero de 1957, y por la Asamblea General el 20 de febrero de 1957. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo, éste entró en vigor en la última fecha citada.

c) CUERPOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
INTERNACIONALES

En cumplimiento de la solicitud formulada por el Consejo en su 23º período de sesiones, el Secretario General ha redactado un memorándum acerca de un cuerpo de funcionarios administrativos internacionales, para presentarlo al Consejo en su 24º período de sesiones. En dicho memorándum, el Secretario General ha estudiado la posibilidad de crear una administración profesional internacional con hombres y mujeres competentes, de cualquier nacionalidad, "que estén dispuestos a... trabajar en los países menos desarrollados del mundo como funcionarios públicos y a formar parte del sistema administrativo nacional de dichos

países, pero conservando su condición de funcionarios internacionales". Después de analizar los programas de administración pública internacional con que cuentan las Naciones Unidas y los organismos especializados, el memorándum expone la necesidad de plantear la cuestión de un modo diferente a fin de resolver el problema inmediato de la escasez de funcionarios administrativos con experiencia adecuada. En el servicio propuesto, los administradores serán responsables del desempeño de sus funciones ante los gobiernos a los cuales se los asigne. La finalidad no será la de facilitar "expertos", en el sentido estricto de la palabra, sino administradores experimentados con conocimientos suficientes para ocupar con lucimiento diferentes puestos de responsabilidad y en ramos muy diversos de la administración pública. El memorándum contiene asimismo sugerencias acerca de la contratación y las condiciones de servicio, organización y métodos de funcionamiento y disposiciones iniciales, y expone la relación entre semejante servicio de administración pública internacional y los programas de formación profesional existentes o proyectados, y también los proyectos nacionales, regionales e internacionales de formación profesional.

Capítulo V

ASUNTOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y A LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS

A. TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

1. Funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria

a) INFORMACIÓN GENERAL

El acontecimiento más importante en el funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria durante el período que se examina fué la consecución de los objetivos del régimen por la población de uno de los territorios en fideicomiso. A las 0 horas del 6 de marzo de 1957, en el momento en que la Costa de Oro se convertía en Estado independiente con el nombre de Ghana, el Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica pasó a constituir la parte occidental del nuevo Estado, y sus habitantes (poco menos de medio millón) llegaron a ser conciudadanos de los pueblos vecinos con los cuales habían sido administrados, en estrecha asociación, desde la primera guerra mundial.

El acontecimiento fué significativo por muchas razones. Su particular importancia se debe, no sólo a que el Togo fué el primero de los 11 territorios en fideicomiso en alcanzar el objetivo previsto en el régimen de administración fiduciaria, sino por la forma en que se puso fin a los vínculos con el régimen mediante una serie de medidas establecidas en consultas celebradas entre la Asamblea General y la Autoridad Administradora interesada, entre las cuales corresponde señalar un plebiscito de la población realizado en condiciones concertadas por anticipado entre estas dos partes y vigilado en todas sus etapas por las Naciones Unidas.

La naturaleza de estas diversas medidas, y las deliberaciones que a su respecto se desarrollaron en la Asamblea y el Consejo de Administración Fiduciaria, sirvieron para indicar, cuando menos en términos generales, las circunstancias en que las Naciones Unidas estarían dispuestas a considerar, y a su debido tiempo a aprobar, la terminación del régimen de administración fiduciaria en otros casos. En efecto, otra Autoridad Administradora, Francia, planteó otro caso durante el mismo período y propuso la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria relativo al Togo bajo administración francesa (véase más adelante el inciso a) del apartado 1 en la parte 3 de esta misma sección). Explicó que lo hacía sobre la base de nuevas reformas políticas que, a su juicio, satisfacían tanto los requisitos del Régimen de Administración Fiduciaria como las aspiraciones de la abrumadora mayoría de la población interesada; pero ni el Consejo ni la Asam-

blea pudieron llegar a convenir en que se habían creado ya las condiciones en que correspondía apoyar la terminación del acuerdo. No se insistió en la propuesta, al menos por el momento, una vez que la Asamblea, aun reconociendo que se había dado un paso muy importante hacia la consecución de los objetivos de la administración fiduciaria, decidió enviar, por invitación de la Autoridad Administradora, una comisión al Territorio para examinar la situación (resolución 1046 (XI)).

El caso de los dos Togos, además de tener importancia en sí, refleja la creciente tendencia de los pueblos que aun carecen de autonomía, especialmente en África, a conseguir la habilidad y la oportunidad de administrar sus intereses propios. Otros territorios en fideicomiso se han visto afectados en distintos grados por esta tendencia. En el Camerún bajo administración británica, dirigentes elegidos de la opinión pública se han preparado durante este período a tomar parte en una conferencia de representantes para revisar la Constitución de Nigeria, pues el territorio en fideicomiso está administrado como parte integrante de Nigeria. En el Camerún bajo administración francesa, los primeros cambios políticos de importancia que se han efectuado desde 1946 han sido incorporados en un nuevo estatuto introducido tras consultas con una asamblea elegida por sufragio universal.

De los tres territorios en fideicomiso del África oriental, Somalia bajo administración italiana ha conservado el primer lugar en cuanto al adelanto político; el Territorio, que ahora disfruta de amplia autonomía política interna, ha seguido empeñado en aclarar sus perspectivas económicas a fin de prepararse para la independencia que se le concederá en 1960. Se advierte un continuo progreso en Tanganyika y Ruanda Urundi, donde están concentradas más del 50% de las poblaciones en fideicomiso. En la región del Pacífico, donde están situados los cuatro territorios en fideicomiso restantes, se ha dedicado especial atención a la formulación de plazos para la creación de un gobierno de ministerio parlamentario en Samoa occidental y al problema del destino futuro de la población nauruana.

b) PERÍODOS DE SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL

La mayor parte de la tarea de vigilar en sus pormenores las condiciones existentes en los territorios en fideicomiso (mediante el examen de informes anuales y peticiones y la organización de misiones visitadoras)

ha correspondido, como en años anteriores, al Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo clausuró el 14 de agosto de 1956 su 18º período de sesiones, en el que se ocupó principalmente de Somalia y los territorios del Pacífico, y también de las cuestiones del destino futuro de los dos Togos. Entre el 10 de diciembre de 1956 y el 31 de enero de 1957 celebró un sexto período especial de sesiones de seis reuniones, sobre todo para seguir estudiando la cuestión del destino futuro del Togo bajo administración francesa. Durante su 19º período ordinario de sesiones, que comprendió 42 sesiones del 14 de marzo al 15 de mayo de 1957, el Consejo se ocupó especialmente en los territorios en fideicomiso africanos, excepción hecha de Somalia y Tanganika, y en el actual período de sesiones (el 20º) que comenzó el 20 de mayo, examina la situación en esos últimos territorios y los del Pacífico.

Durante los períodos ordinarios de sesiones, el examen de las peticiones ha seguido siendo una carga cada vez más gravosa para el Consejo y su Comité Permanente de Peticiones. En verdad, el aflujo de peticiones ha aumentado tanto que el Consejo se ha visto forzado a postergar el examen de muchas de ellas de un período de sesiones al siguiente. La llegada de nuevas peticiones, que se van agregando a las atrasadas, le obliga a abordar en cada período de sesiones un programa de trabajo muy voluminoso. En su 19º período de sesiones, por ejemplo, el Consejo tuvo conocimiento de 1.596 peticiones y comunicaciones. De ellas, 539 se referían a problemas generales que fueron considerados al examinar el Consejo el informe anual sobre la administración de los correspondientes territorios en fideicomiso. A las 1.057 restantes se aplicó el procedimiento habitual y fueron remitidas al Comité Permanente de Peticiones, que examinó sólo 62 y luego recomendó que se postergara el examen de las 995 restantes hasta el 20º período de sesiones. En el actual período de sesiones, el Consejo tiene ante sí 1.215 peticiones en total.

El aumento del número de peticiones recibidas se debe en gran parte a los acontecimientos políticos en los territorios en fideicomiso del África occidental. Durante el período que se reseña, tal como viene sucediendo desde hace algún tiempo, la mayor parte de las peticiones y comunicaciones se referían al Camerún bajo administración francesa. Como consecuencia de la recepción de unas 4.500 comunicaciones más, que en primer lugar habían sido dirigidas a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones, se impuso tanto al Consejo como a la Secretaría una carga adicional. Al iniciarse el 19º período de sesiones del Consejo, el Secretario General señaló que la distribución de dichas comunicaciones conforme a las normas existentes exigiría mucho tiempo, y que la consecuente demora podía afectar seriamente el ejercicio del derecho de petición. Posteriormente, el Consejo nombró un Comité de dos miembros para estudiar dichas comunicaciones; el Comité preparó un resumen del fondo de las comunicaciones e indicó que se referían a problemas políticos importantes de carácter urgente, de modo que el Consejo, por sugestión del Comité, decidió considerar estas cuestiones cuando examinara el informe anual sobre el Camerún bajo administración francesa.

En vista de la necesidad de examinar detenidamente la situación creada por el gran aflujo de peticiones y de proteger al mismo tiempo el derecho de petición, el Consejo decidió crear, en el mismo período de sesiones, un Comité para revisar el procedimiento relativo a las

peticiones, y le pidió que presentara un informe durante el 20º período de sesiones.

Durante el 19º período de sesiones, el Consejo concedió audiencias a representantes de grupos políticos del Camerún y del Togo bajo administración francesa. Durante el período que se reseña, ha tomado también las disposiciones necesarias para organizar una misión visitadora al África oriental, con lo cual se iniciará el cuarto ciclo de visitas periódicas a los territorios en fideicomiso.

Durante su undécimo período de sesiones, la Asamblea realizó su revisión anual habitual del funcionamiento del régimen de administración fiduciaria, fundándose sobre todo en los informes del Consejo y dedicando particular atención a las cuestiones del destino futuro de los dos Togos. Sobre estos asuntos, que se tratan en el inciso a) del artículo 1 (parte 3 de la sección A), la Cuarta Comisión volvió a conceder audiencia a los representantes de los principales partidos políticos interesados. También concedió audiencia a representantes de los grupos políticos africanos de Tanganika y del Camerún bajo administración francesa, y aprobó una resolución en cada caso. Volvió a surgir un problema que ya había tratado la Comisión anteriormente — a saber, las dificultades con que ciertos peticionarios tropiezan en el Camerún para obtener documentos de viaje; se discutió este problema, entre otras consideraciones, a la luz del memorándum preparado por el Secretario General a pedido de la Comisión. Por su resolución 1062 (XI), la Asamblea General opinó que debía facilitarse a los habitantes de los territorios en fideicomiso el ejercicio del derecho de petición oral, e invitó en consecuencia a los Estados Miembros administradores interesados a otorgar a los peticionarios documentos de viaje que les permitan presentarse ante los órganos competentes de las Naciones Unidas para asistir a las audiencias que dichos órganos les hayan concedido, y regresar al lugar de su residencia.

En un asunto de mayor importancia, la Asamblea General, por resolución 1064 (XI), reafirmó su deseo de que se fijaran plazos para la consecución del gobierno propio o la independencia en todos los territorios en fideicomiso, y renovó su anterior invitación a las Autoridades Administradoras a que presentaran un cálculo de los plazos necesarios. Entre las consideraciones mencionadas se aludía a que Somalia debe obtener su independencia en 1960, y el Togo bajo administración británica, en 1957, al unirse con una Costa de Oro independiente. La Asamblea enumeró otros cinco territorios en fideicomiso respecto de los cuales recomendó a las Autoridades Administradoras que adoptasen las medidas indispensables para que dichos territorios alcancen el gobierno propio o la independencia en una fecha próxima; son ellos: Tanganika, el Camerún bajo administración británica, el Camerún bajo administración francesa, el Togo bajo administración francesa y Ruanda Urundi.

La Asamblea General aprobó otras resoluciones que volvían a referirse a las facilidades de estudio y formación profesional que por su iniciativa se ofrecen a estudiantes procedentes de los territorios en fideicomiso, y a la cuestión de la frontera entre el Territorio en fideicomiso de Somalia bajo administración italiana y Etiopía.

2. Terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria relativo al Togo bajo administración británica

El plebiscito efectuado en mayo de 1956 bajo la vigilancia de las Naciones Unidas en el Togo bajo administración británica con el objeto de determinar los deseos de los habitantes a la luz de la inminente concesión de independencia a la Costa de Oro, dió un resultado general de 93.095 votos (58%) a favor de la unión con una Costa de Oro independiente, y 67.492 votos (42%) a favor de la separación del Territorio con la Costa de Oro y su continuación bajo el régimen de administración fiduciaria, hasta que se decidiera de un modo definitivo su futuro político.

Los resultados del plebiscito fueron comunicados al Consejo de Administración Fiduciaria en su 18º período de sesiones a través de los informes del Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito y el Administrador del Plebiscito nombrado por la Autoridad Administradora. Dichos informes contenían descripciones detalladas de todas las etapas de la consulta, y el Comisionado para el Plebiscito informó que éste se había celebrado en un ambiente de absoluta libertad, imparcialidad y equidad y que su organización y realización habían sido excelentes.

La Autoridad Administradora manifestó al Consejo que en su opinión el resultado había revelado que la mayoría de los habitantes del Territorio considerado en su totalidad era abiertamente partidaria de la unión con una Costa de Oro independiente, y que sólo en dos de los seis distritos la mayoría de los votantes se había pronunciado a favor de la separación. En consecuencia, la única solución justa y práctica consistiría en que el Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea General solicitaran de la Autoridad Administradora que hiciese todos los preparativos necesarios para poner fin al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y efectuar la unión del Territorio con la Costa de Oro cuando esta última alcanzara la independencia, que se consideraba inminente.

El Consejo dirigió a la Asamblea una resolución en tal sentido. Cuando la cuestión se planteó en la Cuarta Comisión durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea, el representante del Reino Unido anunció que, *ad referendum* del Parlamento, la Costa de Oro alcanzaría su independencia el 6 de marzo de 1957. También se suministraron datos acerca de las propuestas constitucionales, entre las cuales se preveía la creación de un Estado unitario de carácter parlamentario en el cual los habitantes del Togo (aproximadamente 430.000) estarían en la misma situación jurídica que los de la Costa de Oro. Se volvieron a conceder audiencias a los portavoces de dos de los principales partidos políticos del Togo bajo administración británica, así como a los del movimiento de unificación ewé y de otros dos partidos del Togo bajo administración francesa.

En su resolución 1044 (XI) del 13 de diciembre de 1956, la Asamblea aprobó la unión del Territorio del Togo bajo administración británica con una Costa de Oro independiente y, en consecuencia, invitó a la Autoridad Administradora a que tomase las medidas necesarias a este fin; resolvió, con el asentimiento de la Autoridad Administradora, que en la fecha en que la Costa de Oro obtuviese su independencia y se efectuase la unión con ella del Territorio en fideicomiso,

el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria cesaría de estar en vigor por haberse logrado los objetivos de la administración fiduciaria; y pidió al Gobierno del Reino Unido que, tan pronto se efectuase la unión, notificase este hecho al Secretario General, y éste a su vez a todos los miembros de las Naciones Unidas y también al Consejo de Administración Fiduciaria.

Por carta del 6 de marzo de 1957, el Gobierno del Reino Unido informó al Secretario General que, a partir de las 0 horas del 6 de marzo de 1957, en virtud de las disposiciones de la denominada *Ghana Independence Act*, los territorios que anteriormente constituían la Costa de Oro se habían convertido en el Estado independiente de Ghana, y que al mismo tiempo se había efectuado la unión del antiguo Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica con el Estado de Ghana.

Por lo tanto, quedó abrogado el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y cesaron las atribuciones de las Naciones Unidas con respecto al antiguo territorio en fideicomiso. Como no se habían tomado disposiciones de vigilancia activa para el período posterior al 13 de diciembre de 1956, no se examinó el último informe anual sobre la administración del Territorio (el correspondiente a 1955), ni un pequeño número de peticiones.

3. Condiciones existentes en los territorios en fideicomiso

1) Territorios en fideicomiso del África Occidental

a) TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

El 30 de julio de 1956, la Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria la reciente promulgación de una ley que, entre otras cosas, autorizaba al Gobierno francés a promulgar por decreto, previa consulta con la Asamblea Territorial del Togo, un estatuto en conformidad con los objetivos señalados en el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y a efectuar, en el momento oportuno, un referéndum que permitiera a los habitantes escoger entre dicho estatuto y la continuación del régimen de administración fiduciaria. Según la Autoridad Administradora, el proyecto de estatuto garantizaba la autonomía territorial, administrativa y financiera del Togo y permitía al pueblo hacerse íntegramente cargo de la administración de sus intereses. En conformidad con los deseos de la Asamblea Territorial, los habitantes del Togo seguirían representados en el Parlamento francés y la Asamblea de la Unión Francesa, para los efectos de la administración de los asuntos de interés común.

En vista de esas circunstancias, el Gobierno francés se proponía efectuar bajo la vigilancia de las Naciones Unidas la consulta popular prescrita durante el mes de octubre de 1956, y solicitaba al Consejo de Administración Fiduciaria que tomase inmediatamente las disposiciones necesarias para el nombramiento de una misión de observadores que vigilasen el desarrollo del referéndum. Pero el proyecto de resolución que con este fin Francia presentó al Consejo no fué aprobado porque las dos votaciones sucesivas terminaron en empate. El representante de Francia anunció que el referéndum se celebraría de todos modos; el 6 de diciembre de 1956, se informó a los miembros del Consejo que el resultado del referéndum celebrado el 28 de octubre había indicado que la mayoría de los elec-

tores eran partidarios del nuevo estatuto y la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Al mismo tiempo se presentó el texto del estatuto, que describe al Togo como república autónoma y define la esfera de competencia de sus propias instituciones, por una parte, y de la República francesa, por la otra. El Gobierno de Francia consideraba como única solución equitativa para las poblaciones del Togo que el Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea General tuviesen en cuenta los arraigados deseos que de ese modo habían quedado expresados y pidiesen a la Autoridad Administradora que adoptase las medidas necesarias para la cesación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.

Estas y otras comunicaciones, entre ellas un informe del Administrador del Referéndum, fueron examinadas por el Consejo en su sexto período especial de sesiones y transmitidas a la Asamblea General sin recomendación alguna. En la Cuarta Comisión el representante de Francia volvió a pedir en nombre de su país, a la Autoridad Administradora interesada, que se terminase el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Se concedió audiencia a peticionarios que representaban a todos los partidos políticos del Territorio. En el curso del debate, y por iniciativa del Gobierno togolés, la delegación de Francia propuso que una misión de información de las Naciones Unidas visitara el Togo para estudiar directamente el funcionamiento de las nuevas instituciones; posteriormente, el mismo representante manifestó que su Gobierno podía considerar la posibilidad de renunciar a su solicitud de terminación de la administración fiduciaria en 1957 si los debates futuros y el contenido de las resoluciones que se adoptaran fuesen aceptables para Francia.

La Asamblea aprobó más tarde la resolución 1046 (XI) por la que consideraba con satisfacción que el alcance de los poderes transferidos al Territorio en aplicación del nuevo estatuto político representaba un paso muy importante hacia la consecución de los objetivos enunciados en el Artículo 76 de la Carta, y felicitaba a la población por el progreso realizado en todos los campos. Resolvió enviar una comisión compuesta de seis miembros para que examinara todos los aspectos de la situación del Territorio a raíz de la aplicación del estatuto y las condiciones en que se estaba efectuando esa aplicación, y que presentara un informe al Consejo de Administración Fiduciaria, y pidió que éste a su vez estudiara el problema y comunicara los resultados de dicho estudio a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones. La Asamblea recomendó asimismo que, además de la introducción de las demás reformas que las autoridades competentes considerasen adecuadas, se procediera lo antes posible a constituir la Asamblea Legislativa del Territorio (en que se había transformado a la antigua Asamblea Territorial) mediante elección basada en el sufragio universal de los adultos.

El Consejo examinó en su 19º período de sesiones el informe anual sobre la administración del Territorio en fideicomiso durante 1955, junto con informaciones más recientes relativas en especial a la aplicación y posterior evolución del nuevo estatuto y la exposición de un peticionario a favor de uno de los partidos políticos. No obstante, decidió proceder a un examen más minucioso del progreso político del Territorio cuando recibiera el informe de la Comisión a que se ha hecho referencia; en consecuencia, no formuló ninguna conclusión ni recomendación sobre asuntos políticos en

ese momento. No se pudo aprobar un proyecto de resolución que se examinó por separado y que recomendaba prontas elecciones para la Asamblea Legislativa a causa de dos empates sucesivos en la votación.

Al propio tiempo, el Consejo aprobó varias conclusiones y recomendaciones sobre asuntos económicos, sociales y educativos, y dirigió a la Autoridad Administradora expresiones de satisfacción en algunos aspectos, y en otros sus esperanzas o indicaciones en relación con el robustecimiento de la economía del Territorio, el mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer, la ampliación de los servicios médicos, y el mayor desarrollo de la educación de todo tipo.

b) CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

Por la misma ley que permitió la concesión de un nuevo estatuto al Togo bajo administración francesa en 1956, el Camerún bajo administración francesa recibió en 1957 un estatuto fundamentalmente análogo en lo que se refiere a las instituciones principales que establece la naturaleza y el alcance de sus atribuciones y la división de los poderes entre el Territorio en fideicomiso y la República Francesa. En cambio, las circunstancias en que se formuló y aplicó el estatuto fueron diferentes: en particular, se realizaron elecciones por sufragio universal para elegir una nueva Asamblea Territorial con el objeto de que estudiara el proyecto, y no se planteó la cuestión de poner fin al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria sobre la base del estatuto.

El decreto que contiene el nuevo estatuto, publicado el 18 de abril de 1957, fué examinado por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 19º período de sesiones. Establece que el Camerún es un "Estado en fideicomiso" (*Etat sous tutelle*) y le otorga una asamblea legislativa y un gobierno responsable ante esa asamblea. El Consejo felicitó a la Autoridad Administradora por lo que consideró un paso importante hacia el logro del gobierno propio o la independencia, observando que se había concedido al Territorio un alto grado de autonomía interna y que se había creado la ciudadanía del Camerún para los habitantes indígenas, que son más de 3 millones.

El Consejo observó también con interés que durante la campaña electoral las personas que debían convertirse en dirigentes de los grupos mayoritarios y minoritarios de la nueva Asamblea Legislativa se habían manifestado a favor de la independencia como objetivo último del Territorio, a pesar de que algunos habían expresado preferencia por una evolución más completa y rápida que otros. Indicó su aprobación por la introducción del sufragio universal y por haberse consultado a la Asamblea Territorial elegida por este medio acerca del nuevo estatuto. Entre otras cosas, observó con satisfacción que 60 cameruneses habían sido nombrados para ocupar altos puestos administrativos y que la introducción del nuevo estatuto permitía acelerar el proceso de africanización.

Teniendo en cuenta estos cambios, el Consejo recordó su anterior recomendación a la Autoridad Administradora de que indicase las etapas y los plazos intermedios para el progreso en los distintos campos, y consideró que serían objetivos adecuados para ese fin la adopción de otras medidas para la evolución de los cuerpos ejecutivo y legislativo y la ampliación de sus atribuciones, así como la formación de personas indígenas y su nombramiento a puestos administrativos

importantes. Recomendó a la Autoridad Administradora que estudiase con ese criterio la aplicación de dichas medidas.

Recordando los disturbios ocurridos en abril y mayo de 1955, que había examinado el año anterior, el Consejo advirtió con pesar que a fines de 1956 se habían producido en una región otros disturbios durante las elecciones territoriales. Expresó la esperanza de que el respeto de las prácticas democráticas normales por todos los sectores de la opinión pública, así como la adopción de medidas de clemencia y en especial de la ley de amnistía prevista en relación con los sucesos de 1955, contribuirían a crear en el Territorio un ambiente de confianza absoluta. El Consejo tuvo también ante sí la resolución 1067 (XI) de la Asamblea General, aprobada después de haberse concedido audiencia a peticionarios del Camerún, por lo que expresaba la esperanza de que la Autoridad Administradora tomaría todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en la actividad política y poner fin a la tirantez que había caracterizado la vida política del Territorio.

El Consejo destacó la necesidad de una vigilancia continua a fin de garantizar en el Territorio el desarrollo de una economía equilibrada y diversificada. Felicitió a la Autoridad Administradora por haber fomentado los hábitos de ahorro de los habitantes, facilitando la obtención de créditos y aumentando la ayuda financiera a la agricultura, y expresó la esperanza de que se aceleraría la participación de los africanos en todos los aspectos de la actividad económica. Se solicitó información respecto de la aplicación en el Territorio de los acuerdos relativos a la comunidad económica europea. Habiendo observado con interés las perspectivas de desarrollo industrial creadas por el empleo de los recursos de energía hidroeléctrica y la producción de aluminio, recomendó a la Autoridad Administradora que siguiera estimulando la formación técnica de los habitantes del Camerún.

El Consejo, en su preocupación por lograr que se forme en el Territorio una sociedad homogénea, observó que deberían adoptarse medidas especiales para mejorar la situación de los grupos kirdi que todavía viven apartados de la vida moderna en las montañas del Camerún septentrional. Insistió otra vez en la necesidad de mejorar la condición jurídica y social de la mujer, elogió la instauración de un régimen de pensiones y subsidios familiares, y se manifestó favorablemente impresionado por la energía con que la Autoridad Administradora trataba de mejorar la vivienda rural.

El Consejo se mostró complacido por la creación de escuelas abiertas a alumnos de cualquier raza. Advirtió que casi 500 estudiantes cameruneses tenían becas de enseñanza superior en Francia, y expresó la esperanza de que las autoridades competentes estudiarán la posibilidad de crear una universidad en el Territorio dentro de un plazo relativamente breve.

c) CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA

Las condiciones políticas del Camerún bajo administración británica fueron estudiadas por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 19º período de sesiones, a la luz de un acontecimiento inminente que al parecer estaba destinado a ser de gran importancia para el porvenir del Territorio en fideicomiso y su

millón y medio de habitantes, a saber, la conferencia de representantes que revisará las disposiciones de la Constitución de Nigeria, que también se aplica en el Camerún. La conferencia, fijada en un principio para septiembre de 1956, fué postergada hasta mayo de 1957, es decir, hasta pocas semanas después del examen por el Consejo de las condiciones del Territorio.

El Consejo reafirmó que nada debía hacerse capaz de prejuzgar de las decisiones que podían adoptarse durante la conferencia, confiando en que los resultados arrojarían alguna luz sobre la situación del Territorio en lo que se refiere al logro del objetivo final de la administración fiduciaria, y a las medidas necesarias para lograrlo. El Consejo manifestó también su satisfacción cuando la Autoridad Administradora aseguró que las delegaciones del Camerún estarían compuestas de representantes de todas las principales tendencias de la opinión en el Territorio. El Consejo tenía conocimiento de que se habían celebrado recientemente elecciones en la región septentrional y en la meridional, que están administradas como regiones separadas, y que los grupos representativos habían celebrado consultas.

Tomó nota con aprobación de ciertas mejoras en los regímenes electorales que rigen en las dos partes del Camerún, y expresó la esperanza de que se extendería el derecho electoral, a medida que la mujer tomase parte más activa en la vida de la comunidad, a fin de llegar más adelante al sufragio universal. Entre las demás reformas introducidas en el gobierno local, el Consejo demostró particular interés en la adopción progresiva del principio de las elecciones por voto secreto.

No obstante, el Consejo consideró sumamente urgente realizar progresos en materia económica y social. El Gobierno del Camerún meridional había pasado por un período de dificultades financieras, al que hizo frente concentrando sus recursos disponibles en el desarrollo básico, de tal modo que mereció las felicitaciones del Consejo. Este también observó con satisfacción los buenos resultados iniciales de los esfuerzos del Gobierno por estimular las inversiones privadas extranjeras. Acogió con satisfacción y alentó las medidas recientes encaminadas a desarrollar la producción de té, café y algodón, entre ellas la utilización del riego en las regiones septentrionales; pero vería complacido una ampliación del sistema de cooperativas en el norte.

El Consejo advirtió un progreso social continuo: en particular observó que las divisiones sociales y religiosas entre los distintos grupos del norte comenzaban a desaparecer; las uniones aldeanas, ciudadanas y tribales adquirirían influencia y se intensificaba el desarrollo de la comunidad en el sur. También se adelantaba continuamente en el empeño por mejorar la condición jurídica y social de la mujer. Tomó nota con satisfacción del aumento en la asignación de créditos para servicios médicos en el norte.

Aunque la situación de la enseñanza mejoraba algo, el Consejo estimó que se necesitaba una acción más enérgica, especialmente en el norte, que está más atrasado. Si bien era mayor la cantidad de estudiantes que recibían educación superior, todavía era relativamente reducida, y por esto consideró necesario seguir concediendo especial atención a la formación de maestros.

2) Territorios en fideicomiso del Africa Oriental

a) SOMALIA BAJO ADMINISTRACIÓN ITALIANA

Los rápidos progresos de la Somalia hacia la independencia, que deberá alcanzar en 1960, indujeron al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 18º período de sesiones, a felicitar a la Autoridad Administradora y a los 1.250.000 habitantes (cifra aproximada) del Territorio en fideicomiso. Tanto la Autoridad Administradora como el Consejo Consultivo de las Naciones Unidas comunicaron al Consejo, en su 20º período de sesiones, otros progresos: el nuevo Gobierno somali y la nueva Asamblea Legislativa han funcionado satisfactoriamente y en los servicios administrativos ha continuado el reemplazo del personal italiano por personal somali. Se está preparando la elección de 1958 de la Segunda Asamblea Legislativa que ejercerá funciones constituyentes.

Los dos problemas que suscitaban especial atención en periodos de sesiones anteriores: la cuestión de límites entre Somalia y Etiopía, y las dificultades del desarrollo económico, siguen ocupando un lugar preponderante en el interés de las Naciones Unidas por el destino del Territorio. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 18º período de sesiones y la Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, recomendaron a los gobiernos interesados que trataran de llegar a un pronto acuerdo sobre el problema de límites, y la Asamblea declaró la urgencia de resolver el problema recordando que, en conformidad con el Acuerdo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Administradora debía presentar, antes del 2 de junio de 1959, un plan para el traspaso ordenado de todas las funciones oficiales a un gobierno somali independiente y debidamente constituido. La Asamblea consideró necesario, en caso de que las negociaciones no hubieran alcanzado resultados concretos antes de celebrarse el duodécimo período de sesiones, que los Gobiernos de Etiopía e Italia aplicasen el procedimiento previsto en la resolución 392 (V) de la Asamblea General, del 15 de diciembre de 1950, o sea el de recurrir a la mediación en caso de surgir discrepancias.

El segundo problema, el futuro económico del Territorio, se ha definido más claramente después de nuevos estudios y deliberaciones. La iniciativa tomada en años anteriores por el Consejo de Administración Fiduciaria y apoyada por la Asamblea General y la Autoridad Administradora, tuvo como consecuencia que en los primeros meses de 1956 se enviara al Territorio una misión de expertos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para estudiar la situación; el Consejo, en su 20º período de sesiones, examinó el informe de la misión, y las observaciones de los Gobiernos de Italia y Somalia. Las discusiones no se refirieron únicamente a la aplicación de planes de desarrollo económico inmediato, sino a la necesidad de seguir extendiendo al Territorio ayuda económica después de 1960.

La misión llegó a las conclusiones principales siguientes: El Territorio de ningún modo podrá aumentar antes de 1960 los ingresos procedentes de sus actuales recursos, en tal proporción como para no seguir necesitando la ayuda que ahora le presta Italia; la ganadería es la principal industria de la cual se pueden esperar a la larga algunos progresos, aunque con pocas perspectivas de utilidades inmediatas o de consideración; hay limitadas oportunidades para los agricultores sedentarios; por último, hasta mucho después de lograr su independencia el Territorio necesitaría ayuda

exterior para los cargos técnicos o especializados de los servicios públicos, sanitarios, educativos, agrícolas y veterinarios. Se informó al Consejo que las autoridades italianas y los funcionarios del Banco habían convenido en que la asistencia financiera exterior debería ascender después de 1960 a un mínimo anual de 32 millones de somalos (aproximadamente 1.600.000 libras esterlinas o 4.500.000 dólares de los Estados Unidos), de los cuales 15 millones de somalos deberán utilizarse para completar el presupuesto ordinario, 10 millones para desarrollo económico y 7 millones para los gastos correspondientes a la contratación directa de técnicos y expertos por el Gobierno somali.

Al mismo tiempo que determinaba así con mayor precisión el problema de la asistencia financiera al futuro Estado independiente, aunque sin llegar de ninguna manera a resolverlo, el Consejo ha estado estudiando aspectos particulares de la economía que se manifiestan susceptibles de desarrollo a largo o a corto plazo. Le han ayudado a ello las evaluaciones de los recursos ganaderos, agrícolas, pesqueros, industriales y mineros hechas por la misión del Banco, y los pronósticos de la Autoridad Administradora. Se ha planteado la posibilidad de proyectar un programa global de asistencia técnica de las Naciones Unidas, y se ha convenido en proceder a deliberaciones previas.

Como en años anteriores, el Consejo de Administración Fiduciaria ha contado con la ayuda del informe anual del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para Somalia y de la presencia de los miembros de éste en sus sesiones del Consejo. El Consejo Consultivo señaló a la atención del Consejo que su función de ayudar y asesorar a la Autoridad Administradora había resultado perjudicada con el traspaso de gran parte de los poderes legislativos del Administrador a la Asamblea Legislativa. En consecuencia, los proyectos de leyes han sido presentados al Consejo Consultivo sólo después de su aprobación por el Consejo de Ministros.

b) TANGANYIKA

Las condiciones que prevalecen en Tanganyika, territorio que por tener más de 8 millones de habitantes es por mucho el más importante de los territorios en fideicomiso, serán examinadas en el actual 20º período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria.

Durante el período que se reseña, la Asamblea General ha tratado ella misma un problema fundamental en la evolución del Territorio en fideicomiso: a saber, las consecuencias políticas de la composición étnica de la población; además del sector africano predominante, que se calcula en más de 8 millones, hay un grupo de inmigrantes en su mayoría asiáticos (alrededor de 90.000) y también un grupo europeo de unas 25.000 personas, compuesto de funcionarios de la Administración, misioneros y un grupo minoritario de colonos permanentes.

Como lo han demostrado los informes anteriores, las distintas etapas del desarrollo constitucional de Tanganyika han reflejado la existencia de estos distintos grupos raciales. En particular, la Constitución actual prevé un cuerpo legislativo en el cual la minoría no oficial está compuesta de un número igual de miembros africanos, asiáticos y europeos nombrados por el Gobernador. Aunque tanto la Autoridad Administradora como el Consejo han considerado este arreglo "paritario" como transitorio, aquélla ha subrayado que deberá durar bastante más tiempo y éste ha manifes-

tado durante varios años la esperanza de que se aumente la representación africana en el cuerpo legislativo. El Consejo también ha opinado que una declaración más concreta sobre las medidas y los procedimientos que le permitirán alcanzar el gobierno propio o la independencia daría al Territorio en fideicomiso una más firme determinación y orientación para lograr su objetivo final.

Durante una audiencia concedida por la Cuarta Comisión de la Asamblea General en su undécimo período de sesiones, el dirigente en Tanganyika de un movimiento africano pidió en particular que la Autoridad Administradora declarase que la finalidad de su política era la evolución del Territorio para que llegase a ser un Estado democrático; que a título de medida transitoria que habría de tomarse en un futuro inmediato, correspondería modificar la Constitución del Territorio a fin de instituir una representación paritaria para los africanos, por una parte, y los no africanos, por otra, y que debería establecerse el sufragio universal común para todos los elementos de la población. Por resolución 1065 (XI), la Asamblea General tomó nota de estas opiniones y las comunicó a la Autoridad Administradora y al Consejo; al mismo tiempo, la Asamblea recomendó a la Autoridad Administradora que considerara la posibilidad de formular una declaración sobre los propósitos de su política en Tanganyika, y especialmente de incluir en ella el principio de que "el Territorio, conforme a los principios del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria, sería encaminado hacia el Gobierno propio o la independencia y llegará a ser un Estado democrático en el que todos los habitantes gozarán de iguales derechos".

Además de seguir dedicando su atención a este asunto durante el actual período de sesiones, el Consejo tendrá ante sí informes relativos a los últimos acontecimientos ocurridos en el Territorio. Entre éstos figuran propuestas de la Autoridad Administradora para iniciar la primera etapa de la organización de las elecciones de representantes ante el Consejo Legislativo; el progreso de los dos partidos políticos que actualmente dicen tener influencia en todo el Territorio; y la creación de tres consejos municipales instituidos en virtud del sistema relativamente reciente de gobierno local, con lo cual dichos Consejos pasaron a ser nueve.

Los informes relativos al desarrollo económico indican un marcado descenso de los ingresos públicos en el segundo semestre de 1956, debido especialmente a la disminución de las importaciones. El movimiento cooperativo se ha desarrollado de tal manera que Tanganyika ocupa ahora el primer lugar a este respecto entre todos los territorios bajo administración británica. Se ha proyectado un amplio plan general destinado a aumentar la producción agropecuaria; se ha aprobado un plan quinquenal para mejorar los servicios médicos y otro para la educación de los africanos, pero su aplicación depende de que se encuentren medios adecuados para financiarlos.

c) RUANDA URUNDI

Todavía no se han podido establecer con tanta claridad como en los demás territorios en fideicomiso de África los métodos que permitirán guiar a los 4.500.000 habitantes de Ruanda Urundi al gobierno propio o a la independencia. En vista del estado actual de evolución de la mayor parte de la población, la Autoridad

Administradora sigue considerando que su tarea, en términos generales, consiste en garantizar el desarrollo económico; eliminar la amenaza del hambre; mejorar los servicios sanitarios; poner la enseñanza al alcance de todos y resolver los demás problemas sociales; y, por último, en estimular la conciencia moral, social y política de los africanos hasta que puedan ser considerados plenamente capaces de conducirse conforme a las normas que se pueden esperar de un pueblo civilizado, y de colaborar así con otros sectores de la población en la creación progresiva de un gobierno que emane directamente de los habitantes.

En tales circunstancias, el traspaso de la autoridad y los deberes oficiales a las instituciones locales estaba todavía en una etapa elemental cuando el Consejo de Administración Fiduciaria examinó las condiciones reinantes en el Territorio en su 19º período de sesiones. El Consejo tomó nota con satisfacción de otros adelantos recientes: la reorganización del Consejo del Vicegobernador General — el órgano consultivo territorial — que tuvo como resultado una mayor proporción de miembros autóctonos, y la satisfactoria introducción del sufragio de los varones adultos en las elecciones indirectas para constituir los consejos de las subprefecturas. El Consejo manifestó la esperanza de que se extenderán progresivamente dichas medidas, y estimó que la creación de un órgano legislativo central y el empleo universal de elecciones directas constituirían objetivos adecuados para las etapas intermedias del desarrollo político que, según se le había recomendado anteriormente, la Autoridad Administradora debía indicar.

La Autoridad Administradora sigue subvencionando en gran parte el desarrollo económico y social de Ruanda Urundi, mediante adelantos anuales sin interés. El Consejo advirtió con satisfacción los progresos logrados en materias tales como la conservación del suelo, el avenamiento de las tierras bajas y el desarrollo de las cooperativas. Expresó la esperanza de que a estas mejoras seguirían la intensificación racional de la producción ganadera, el reasentamiento de los habitantes de regiones superpobladas y un mayor adelanto agrícola. Recomendó varias otras medidas encaminadas a robustecer y diversificar la economía y a acrecentar la participación de la población africana en la industria, el comercio y la agricultura.

El Consejo observó que la Autoridad Administradora había mejorado la situación de la población africana en lo relativo a la libertad de movimiento (asunto criticado antes con frecuencia) en particular, haciendo más flexibles las normas relativas a los pasaportes internos y aboliendo el toque de queda en todas las ciudades menos la capital. Formuló votos por que se suprimieran cuanto antes todas las restricciones. El Consejo estimó que los salarios seguían siendo bajos, a pesar de haber sido aumentados recientemente, y formuló la esperanza que se tomarían otras medidas para establecer condiciones que permitieran aumentar considerablemente los salarios reales y acrecentar las oportunidades de empleo. Tomó nota de que ya no se puede imponer legalmente el trabajo forzado en los centros extraconsuetudinarios y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora encontraría los medios de abolir el sistema de trabajo forzado en el resto del Territorio.

El Consejo formuló varias recomendaciones con respecto a la situación de la enseñanza, especialmente en el sentido de que se aumentara el progreso todavía

lento de la enseñanza secundaria, se intensificara la formación normal y profesional, y se formulara un programa sistemático de educación para las masas y los adultos.

3) Territorios en fideicomiso del Pacífico

a) SAMOA OCCIDENTAL

La Misión Visitadora de 1956 y el Consejo de Administración Fiduciaria acogieron con satisfacción los plazos fijados para la evolución gradual de Samoa occidental a fin de llegar en 1960 al sistema de gobierno de ministerio parlamentario que se describe en la anterior Memoria del Secretario General.

En su 18º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción del acuerdo al que llegaron el Gobierno de Nueva Zelandia y las instituciones representativas del Territorio en fideicomiso sobre la serie de cambios constitucionales previstos. El Consejo expresó la esperanza de que la continua colaboración aseguraría la feliz ejecución del plan de reformas constitucionales en 1960 y el cumplimiento de los objetivos del régimen de administración fiduciaria poco después. Manifestó también la esperanza de que se extenderán entretanto las atribuciones de la legislatura actual mediante el traspaso progresivo de casi todas las cuestiones todavía reservadas a la Autoridad Administradora; que el pueblo samoano acabará por aceptar el sufragio universal y que se apresurará la formación de funcionarios públicos samoanos.

El Consejo volvió a examinar la economía esencialmente agrícola del país que tiene unos 97.000 habitantes, y recomendó a la Autoridad Administradora que concentrase aún más sus actividades en el desarrollo económico y la preparación, en colaboración con los samoanos, de un programa de desarrollo económico integral a largo plazo. Aun estimando que la actual situación financiera de Samoa occidental es razonablemente sólida, el Consejo señaló que era necesario seguir estudiando la manera de aumentar y diversificar las fuentes de ingresos del Territorio. Tomó nota con satisfacción y aprobación de la intención del Gobierno de Nueva Zelandia de traspasar en 1956 al Gobierno de Samoa occidental los valiosos *Reparation Estates*, plantaciones expropiadas a Alemania.

El Consejo aprobó otras recomendaciones relativas a la formación de personal médico y la conveniencia de dictar leyes fundamentales de trabajo y seguro social. El Consejo expresó la esperanza de que pronto se aprobará el programa previsto para implantar la enseñanza primaria obligatoria, pidió a la Autoridad Administradora que redoblaste sus esfuerzos por aumentar la inscripción en las escuelas secundarias y recomendó la creación de un centro de formación profesional.

b) NUEVA GUINEA

Nueva Guinea y su población de casi 1.250.000 habitantes, a juicio de la Misión Visitadora de 1956, reclaman de la Potencia Administradora una acción constructiva y le ofrecen a la vez una oportunidad quizá sin paralelo en la historia de las regiones no autónomas insuficientemente desarrolladas. La Misión explicó que la inmensa mayoría de los habitantes del interior sólo recientemente había tenido su primer con-

tacto con el mundo exterior; que la gran superficie terrestre permitiría alcanzar adelantos en una escala imposible de lograr en las islas más pequeñas del Pacífico; y, sobre todo, que la propia población estaba llena de entusiasmo y buena voluntad, se mostraba dispuesta a trabajar intensamente y a aprender nuevos métodos, y pedía que el progreso material fuese inmediato y trascendental.

La Misión manifestó su preocupación de que este enorme acervo de entusiasmo y buena voluntad pudiese amenguar si el ritmo de desarrollo no era lo suficientemente rápido. La Autoridad Administradora, que ya gasta sumas considerables en el Territorio pero no posee recursos ilimitados, no debía vacilar en recurrir a la asistencia de la comunidad internacional.

El Consejo de Administración Fiduciaria consideró estas opiniones en el curso de su 18º período de sesiones y, reconociendo que este anhelo de desarrollo se debía en gran parte a la Autoridad Administradora, la alentó en consecuencia a sacar el mayor provecho posible de tal entusiasmo y buena voluntad, expresando luego la esperanza de que pudiera suministrar más personal, máquinas y otra asistencia necesaria para satisfacer las demandas cada vez mayores del Territorio.

El Consejo pidió que se siguiera considerando el aumento de la representación indígena en el Consejo Legislativo, que cumple sus funciones tanto para Nueva Guinea como para el territorio australiano de Papua y en el cual tres de los doce miembros no oficiales son habitantes autóctonos y dos de ellos proceden del Territorio en fideicomiso. También expresó la esperanza de que los consejos de gobierno local se desarrollaran más rápidamente y recomendó que se designaran personas indígenas para los consejos consultivos municipales y de distrito ahora constituidos únicamente por representantes no indígenas.

El Consejo volvió a pronunciarse a favor de programas globales de desarrollo económico a largo plazo para el Territorio al expresar la esperanza de que los resultados del actual estudio de las posibilidades agropecuarias del suelo permitirán a la Autoridad Administradora formular esos programas. Tomó nota de que la Autoridad Administradora había aumentado en forma apreciable los subsidios directos al Territorio, y que ella estudiaba con particular interés los medios de incrementar las rentas internas, entre ellos la implantación de impuestos directos, medida que el Consejo ha recomendado con frecuencia. Felicitó a la Autoridad Administradora por la implantación de un programa completo de desarrollo agrícola y por los progresos del movimiento cooperativo y la ampliación de la red de carreteras, y recomendó que siguiera procediendo con extrema cautela en cuanto respecta a la enajenación y el arrendamiento de tierras.

El Consejo recomendó también que se revocaran las restricciones a la libre circulación en algunas poblaciones y que se aboliera por completo el castigo corporal; que se mejoraran las condiciones de trabajo, se acelerara la ejecución del programa de construcción de hospitales y se atendiera inmediatamente a la formación de personal médico. Tomó nota con satisfacción de la existencia de un programa global de construcciones escolares, pero hizo varias recomendaciones sobre distintos aspectos de la situación en materia de educación, incluso la conveniencia de establecer un sistema completo de enseñanza secundaria en el Territorio.

c) NAURU

La suerte de este pequeño Territorio, que sólo cuenta con unos 2.000 habitantes autóctonos, ha seguido siendo motivo de preocupación para el Consejo de Administración Fiduciaria. Durante el período que se reseña el Consejo se enteró de que, como resultado de las propuestas para incrementar la producción, la duración calculada para la explotación de los depósitos de fosfato había quedado reducida a unos 40 años.

El Consejo electo de Administración Local de Nauru informó a la Misión Visitadora de 1956 que entre los habitantes se manifestaba una preferencia creciente por el reasentamiento en Australia y no en alguna isla de la región de Nueva Guinea o sus proximidades, como se había sugerido anteriormente. La Misión estimó que, mientras se continuaba la búsqueda de un asiento futuro para la población, debían estudiarse con mayor empeño las posibilidades de desarrollo del propio Nauru; pero, en cualquier caso, debía concertarse lo antes posible un plan para lo porvenir.

En el curso del 18º período de sesiones, el Consejo instó a la Autoridad Administradora a formular cuanto antes, previa consulta con los nauruanos, un plan general para su posible reasentamiento. Apoyó la idea expresada por la Misión Visitadora en el sentido de que debía garantizarse la continuidad de las consultas mediante la creación de un órgano consultivo mixto de carácter permanente, integrado por representantes de la Administración y por nauruanos con la posible colaboración de los Comisionados Británicos del Fosfato que actualmente explotan los yacimientos de fosfato.

Respecto de las condiciones existentes en la isla, el Consejo tomó nota de las mayores atribuciones y mayor experiencia del Consejo de Administración Local, y reiteró la esperanza de que fuera evolucionando gradualmente un órgano legislativo. Felicitó y alentó a la Autoridad Administradora por las medidas que había adoptado para asignar un mayor número de cargos importantes en la administración a los nauruanos.

En materia económica, el Consejo aprobó varias conclusiones y recomendaciones, propiciando por una parte nuevas medidas para asegurar a los habitantes el mayor beneficio posible de la explotación de los fosfatos y alentando por la otra el desarrollo de la industria pesquera y la reeducación de los nauruanos en el arte casi totalmente olvidado de la agricultura. En materia social, el Consejo pidió que se hiciera todo lo posible por eliminar toda discriminación entre los diversos grupos de población. Felicitó a la Autoridad Administradora por haber suprimido las limitaciones a la libre circulación nocturna de los nauruanos y los trabajadores inmigrantes. El Consejo tomó nota con satisfacción de los nuevos progresos alcanzados en la educación, aunque expresó al mismo tiempo la esperanza de que se ampliaran en particular la formación profesional y la enseñanza secundaria y superior.

d) TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

En su 20º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria se ocupa actualmente en el examen anual de las condiciones reinantes en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, sobre el cual informa al Consejo de Seguridad, por tratarse de un Territorio designado como zona estratégica.

También este Territorio en fideicomiso tiene características únicas: su población relativamente pequeña, de unos 65.000 habitantes, está distribuida en muchos centenares de islas, que se extienden a su vez sobre una superficie marina de unos 3 millones de millas cuadradas.

Cuando el Consejo examinó por última vez las condiciones de ese Territorio, en el curso de su 18º período de sesiones, tenía ante sí el informe de la tercera Misión Visitadora al Territorio, en el cual se señalaban las dificultades que presentaban las distancias que separan a las islas entre sí tanto para el desarrollo coordinado como para formar una conciencia territorial de cualquier tipo. El Consejo tomó nota con satisfacción del progreso general que se había hecho a pesar de todo, y elogió en particular a las autoridades de los Estados Unidos por las excelentes relaciones que habían establecido con la población.

El desalojo de varios grupos de la población de las Islas Marshall con el propósito de efectuar experimentos con armas nucleares en 1946, 1947 y 1954, o a consecuencia de ellos, creó problemas de reasentamiento o de compensación que han ocupado al Consejo en distintas oportunidades. En el curso del 18º período de sesiones, se expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora podría informar este año que todos los grupos de isleños desalojados habían sido reasentados satisfactoriamente en otras islas y en nuevas condiciones de vida; efectivamente, el Consejo tuvo conocimiento durante su actual período de sesiones de que se han realizado progresos considerables para resolver no sólo el problema de la compensación de los grupos desalojados, sino el de las reclamaciones de tierras de otros sectores de la población.

En su 18º período de sesiones, el Consejo tomó nota de que se estaba estudiando una ley orgánica para el Territorio, por la cual se interesaba desde hace mucho tiempo, y de que dicha ley tal vez se aplicaría en 1960. También se ocupó en los medios de alentar la creación de una conciencia territorial en las circunstancias excepcionalmente difíciles del Territorio, y reiteró la esperanza de que en breve se pudiera trasladar la sede de la Administración desde la isla de Guam a algún lugar situado en el propio Territorio. Acogió con satisfacción los adelantos realizados en la institución de cuerpos políticos locales y la concesión de cartas de privilegio a las municipalidades, que constituyen la unidad básica del gobierno propio, así como el progreso en el desarrollo del sistema electoral.

Como la Autoridad Administradora sigue sufragando las cuatro quintas partes del presupuesto del Territorio, el Consejo expresó la esperanza de que seguiría haciendo todo lo posible por desarrollar de algún modo los recursos locales, como mejorando la agricultura, diversificando la producción para la exportación (que ahora se limita casi exclusivamente a la copra) e investigando las posibilidades industriales. Recomendó también que la Autoridad Administradora siguiera contratando especialistas agropecuarios en mayor cantidad y más calificados, coordinara sus programas, combatiera los parásitos y las enfermedades de las plantas, y ampliara las actividades de divulgación. Se había previsto especialmente el desarrollo industrial en relación con las pesquerías, las minas de manganeso y bauxita, las industrias del envase, la producción de trocas y la artesanía.

La Autoridad Administradora mereció elogios por haber conseguido mejorar las condiciones sanitarias

generales, y por su norma de nombrar a micronesios en los servicios médicos. El Consejo estimó que la política en materia de educación era adecuada a las necesidades del Territorio, pero observó que aun se podía aumentar el personal docente calificado norteamericano, los créditos para construcción de escuelas y adquisición de material didáctico, y las oportunidades para cursar estudios superiores.

B. TERRITORIOS NO AUTONOMOS

1. Transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta

Para el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General ha preparado resúmenes acerca de las condiciones existentes en los territorios no autónomos sobre los cuales ha recibido información relativa al año civil 1955 o al año administrativo 1955-1956. Dichos resúmenes se someterán también a la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos en su octavo período de sesiones, que comenzará el 22 de julio de 1957. Se ha dejado de transmitir información con respecto a Marruecos y Túnez porque estos Estados han logrado su independencia e ingresado en las Naciones Unidas.

Como en años anteriores, la mayoría de los Estados Miembros que transmiten información utilizaron como guía el Formulario revisado que la Asamblea General aprobó en su resolución 551 (VI) y enmendó por resolución 930 (X). Además, varios Estados Miembros transmitieron voluntariamente información sobre el sistema de gobierno, como lo solicitan las resoluciones 144 (II), 327 (IV) y 848 (IX).

Después de la admisión de 16 nuevos Miembros en las Naciones Unidas en diciembre de 1955, el Secretario General dirigió el 24 de febrero de 1956 una comunicación a cada uno de ellos señalando a su atención el Capítulo XI de la Carta e invitándolo a informar si está encargado de administrar alguno de los territorios a que se refiere el Artículo 73 (véase *infra* el inciso b) del párrafo 3 de la sección B).

Hasta la fecha han respondido al Secretario General los 14 Estados Miembros siguientes afirmando que no administran territorios a los que se refiere el Artículo 73 de la Carta: Albania, Austria, Bulgaria, Camboja, Ceilán, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Laos, Libia, Nepal, Portugal y Rumania.

Después de la admisión del Japón, Marruecos, Sudán y Túnez a las Naciones Unidas, el Secretario General hizo una comunicación análoga a estos países.

2. Examen de la información transmitida

a) INFORMACIÓN GENERAL

En el curso de las deliberaciones del undécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión consideró las posibilidades de mejorar la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Se sugirió que podía resultar útil crear una subcomisión que examinase el Formulario y propusiese modificaciones, o que la Secretaría preparase un análisis del empleo del Formulario por los Estados Miembros que transmiten información.

Con respecto a las resoluciones de la Asamblea General que prevén la fijación de objetivos y plazos intermedios y finales para el adelanto de los territorios en fideicomiso hacia el gobierno propio o la independencia, el Consejo observó con satisfacción que la Autoridad Administradora había considerado posible fijar algunas fechas intermedias para el desarrollo político del Territorio, y le recomendó que siguiera manteniéndolo al tanto de dichos objetivos y fechas.

En el curso de su séptimo período de sesiones celebrado en 1956, se había informado a la Comisión para la Información que los resúmenes de la información sobre los territorios no autónomos que presenta el Secretario General se prepararían en forma de fascículos reproducidos por el procedimiento *offset*, en lugar de publicarlos como documentos impresos. La Cuarta Comisión consideró que el nuevo sistema debía ser considerado como un experimento sin perjuicio del empleo de otros sistemas en lo porvenir, e invitó al Secretario General a preparar, para el duodécimo período de sesiones de la Asamblea, un informe en que se comparase el costo de los distintos métodos de reproducción de los resúmenes de información, a fin de ofrecer a la Asamblea la oportunidad de adoptar las disposiciones más adecuadas. El 20 de febrero de 1957, la Asamblea General aprobó la resolución 1052 (XI), que refleja estas opiniones.

En su octavo período de sesiones, la Comisión para la Información prestará atención principal en 1957 a las condiciones y el desarrollo económico de los territorios no autónomos.

Habiendo expirado el mandato de Birmania y Guatemala, la Cuarta Comisión, actuando en nombre de la Asamblea General, reeligió a Guatemala y eligió a Ceilán como miembros de la Comisión para la Información por un período de tres años.

b) SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, gran parte del debate general sobre la información procedente de los territorios no autónomos giró alrededor de la situación de la educación, especialmente sobre la base del estudio del informe sobre la educación transmitido por la Comisión para la Información con la recomendación de que se lo aprobara y transmitiera a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y los organismos especializados competentes. La Cuarta Comisión aprobó un proyecto de resolución en este sentido, que más tarde aprobó la Asamblea, con una cláusula adicional en que pedía a los Estados Miembros que pusieran el informe en conocimiento de las autoridades encargadas de la educación en los territorios que administran (resolución 1048 (XI)).

En un proyecto de resolución aprobado por la Comisión y luego por la Asamblea (1049 (XI)), se incorporan las propuestas hechas en el seno de la Cuarta Comisión con motivo de la situación de la educación en los territorios no autónomos, recomendando a los Estados Miembros administradores que estudien la preparación de planes con objetivos y plazos prefijados para diversos aspectos del progreso de la educación. La resolución recomienda a los Estados Miembros administra-

dores que, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura si es necesario, consideren la preparación de dichos planes que deberán comprender el establecimiento o ampliación de la educación primaria universal, gratuita y obligatoria, y la supresión del analfabetismo. La resolución invita también a los Estados Miembros administradores a que incluyan, en sus informes anuales al Secretario General, información sobre tales planes, objetivos y plazos y sobre los resultados obtenidos en su ejecución.

Otro proyecto de resolución aprobado por la Cuarta Comisión y más tarde por la Asamblea General (1050 (XI)) recomienda que se intensifiquen los esfuerzos en pro de la creación de organismos locales de educación y sugiere que dichos organismos participen en la formulación y aplicación de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y los organismos especializados. La resolución insta también a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que aumenten las posibilidades y faciliten las condiciones para conceder becas de estudio y otras formas de asistencia que contribuyan al progreso de la educación.

c) CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Como el debate general en la Cuarta Comisión durante el undécimo período de sesiones se concentró particularmente en la situación de la enseñanza en los territorios no autónomos, los comentarios sobre las condiciones económicas y sociales fueron breves.

Se volvió a insistir en la interdependencia de todos los aspectos del desarrollo y el objetivo del desarrollo económico que se propone mejorar el nivel de vida de los habitantes de los territorios no autónomos. En la resolución 1050 (XI), a que se acaba de hacer alusión, la Asamblea destacó la importancia de preparar a los habitantes de los territorios no autónomos a servirse de los instrumentos de progreso económico, social y político que les permitan alcanzar la plenitud del gobierno propio, reafirmando así el criterio expuesto en la resolución 743 (VIII), es decir que la mejor manera de lograr este fin es la aplicación adecuada de los medios educativos. En materia social, varios representantes mencionaron la conveniencia de que los Estados Miembros administradores tomasen medidas concretas para eliminar la discriminación y mejorar la colaboración interracial.

En su período de sesiones de 1956, la Comisión para la Información aprobó en general las propuestas que le sometió el Secretario General acerca de la preparación de estudios en materia social que la Comisión consideraría en 1958.

Conforme al deseo expresado por la Comisión de tener una nueva oportunidad de estudiar el programa de trabajo en materia social, el Secretario General presentará a la Comisión, en su período de sesiones de 1957, un plan más detallado de la labor que se realizará en 1958.

3. Cuestiones generales relativas a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta

a) PROCEDIMIENTOS PARA EXAMINAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CESACIÓN DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN

En 1955, la cuestión de los procedimientos para examinar las comunicaciones relativas a la cesación del

envío de información había sido remitida a la Comisión para la Información en su período de sesiones de 1956.

En el curso del décimo período de sesiones de la Asamblea General, se presentó a la Cuarta Comisión un proyecto de resolución proponiendo que las comunicaciones transmitidas al Secretario General sobre la cesación del envío de información fuesen remitidas directamente a la Asamblea General para que ésta las examinara y decidiera luego el método más adecuado de llegar a conclusiones que tuvieran presente los intereses de los habitantes del territorio interesado.

En el undécimo período de sesiones, la Asamblea General, por recomendación de la Cuarta Comisión, aprobó la resolución 1051 (XI), conforme a la cual, no obstante las disposiciones de la resolución 448 (V), las comunicaciones transmitidas al Secretario General sobre la cesación del envío de información relativa a un territorio no autónomo debían remitirse directamente a la Asamblea General, la cual adoptaría conclusiones por sí misma, remitiría ciertos puntos a comisiones subordinadas o adoptaría otras medidas.

b) CUESTIÓN DERIVADA DE LA CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1956

A pedido de la Cuarta Comisión, el texto de la carta del 24 de febrero de 1956 dirigida por el Secretario General a los Estados Miembros admitidos en diciembre de 1955 fué sometida a la consideración de dicha Comisión, junto con las respuestas recibidas hasta entonces. Como resultado, hubo un debate sobre la cuestión relativa a la transmisión de información por los nuevos Estados Miembros en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. El debate giró principalmente en torno de la cuestión de la competencia de la Asamblea General para interpretar la aplicación del Capítulo XI, y se hicieron numerosas referencias a ciertas regiones ultramarinas de Portugal. Los principales argumentos generales formulados fueron los siguientes:

Durante la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, se tomaron por unanimidad medidas para la aplicación del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Los representantes de los Estados Miembros administradores aplaudieron con los demás la inclusión en la Carta de principios que todas las potencias coloniales deberían observar. A consecuencia de estas medidas adoptadas por la Asamblea General, el Secretario General había señalado el 29 de junio de 1946 a la atención de todos los Estados que entonces eran Miembros de las Naciones Unidas, las disposiciones del Capítulo XI, y los había invitado, entre otras cosas, a enumerar todos los territorios de cuya administración estaban encargados.

En la segunda parte del primer período de sesiones, la Cuarta Comisión llegó a la conclusión de que no debía tratar de definir el término "Territorio no autónomo" y la Asamblea General tomó nota de la lista de territorios que habían comunicado los Estados Miembros administradores. Esto no quería decir que la enumeración se considerase de alguna manera completa, ni que la Asamblea hubiese abandonado sus derechos para determinar los territorios que debían incluirse.

Al ingresar en 1955 otros Estados Miembros, y creyéndose que algunos de ellos estaban encargados de administrar territorios que no habían alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, se volvió a plantear

toda la cuestión que debía resolver la Asamblea General. Fue necesario entonces examinar las respuestas de los Estados Miembros a la comunicación que les dirigiera el Secretario General en 1956 para comprobar cual era la situación real teniendo en cuenta las disposiciones del Capítulo XI. La cuestión, de importancia capital desde el punto de vista de la política, la ética y el derecho internacionales, podía ser examinada objetivamente, ya que todos reconocían que el colonialismo era un sistema pasible de dicho examen.

Por otra parte, se afirmó que en 1946 la Asamblea General no había enumerado los territorios respecto de los cuales debía transmitirse información en virtud del inciso e del Artículo 73, sino que había aceptado la enumeración que habían transmitido los Estados Miembros administradores interesados. Por lo tanto, había reconocido implícitamente que dicha enumeración competía exclusivamente a esos Estados Miembros y no a la Asamblea. La situación constitucional de los Estados Miembros de las Naciones Unidas no podía ser objeto de examen en la Cuarta Comisión, que sólo podía aceptar las explicaciones o declaraciones que por cortesía quisieran formular los Estados Miembros. El inciso e del Artículo 73 dispone que se transmita la información dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran. Cuando la constitución de un Estado Miembro tenía carácter unitario, tal disposición eliminaba la consideración de una parte cualquiera de un Estado unitario en virtud del Capítulo XI de la Carta. El solo hecho de plantear la cuestión de la transmisión de información respecto de los Estados Miembros recientemente admitidos en la Organización constituía un acto discriminatorio incompatible con el principio de la igualdad soberana de todos los Miembros de las Naciones Unidas.

Varios representantes consideraron en la Cuarta Comisión que la cuestión era tan compleja e importante como para merecer un examen más detenido. La Comisión aprobó un proyecto de resolución en que proponía que la Asamblea estableciese un comité especial encargado de estudiar las disposiciones del Capítulo XI de la Carta en el caso de los Miembros que habían ingresado recientemente en las Naciones Unidas y, en particular, las respuestas a la carta del Secretario General de fecha 24 de febrero de 1956.

Durante el debate en sesión plenaria, los autores del proyecto de resolución presentaron una serie de enmiendas encaminadas a resolver las dificultades planteadas por los que aducían que el texto era discriminatorio contra los nuevos Estados Miembros. Con todo, los que se oponían a la resolución arguyeron que la cuestión era importante en el sentido previsto por las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 18 de la Carta, y que debía decidirse por una mayoría de dos tercios. La Asamblea General apoyó esta interpretación, después de lo cual se retiraron las enmiendas y se sometió a votación el proyecto de resolución original que fue rechazado.

4. Información sobre el progreso alcanzado por los territorios no autónomos

En el curso de su décimo período de sesiones, por resolución 932 (X), la Asamblea General opinó que sería muy conveniente un examen del progreso alcanzado en los territorios no autónomos desde la creación

de las Naciones Unidas, sobre la base de la información transmitida al Secretario General en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Invió al Secretario General a consultar con los organismos especializados interesados y a presentar un informe en el undécimo período de sesiones acerca de los puntos principales que podrían servir para tal examen.

El Secretario General informó a la Asamblea que los organismos especializados habían ofrecido su ayuda para el caso de prepararse dicho informe y añadió que éste podría estar listo antes de 1959 si los organismos especializados le aportasen su plena contribución.

La Asamblea General aprobó la resolución 1053 (XI) indicando que los puntos principales mencionados por el Secretario General en su informe constituían una base satisfactoria para una reseña del progreso alcanzado por los territorios no autónomos desde la creación de las Naciones Unidas, y lo invitaba a preparar, con la colaboración de los organismos especializados interesados, un informe sobre dicho progreso para que la Asamblea General lo considerase en su 14º período de sesiones. La resolución invitaba además a los organismos especializados interesados a colaborar con el Secretario General en la preparación del informe, al que servirá de base la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta y la información suplementaria suministrada por los Estados Miembros administradores a las Naciones Unidas y a los organismos especializados. Por último, invitaba a los Estados Miembros administradores a incluir en la información que transmitieran una exposición de los principios y las medidas prácticas adoptadas que muestren las tendencias generales en los territorios interesados, según se indica en el Formulario, e invitaba al Secretario General a comunicar regularmente a la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos el progreso en la preparación del informe.

5. Colaboración internacional para el progreso económico y social

a) COLABORACIÓN CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General se hicieron referencias a la necesidad y la utilidad de una mayor cooperación de los organismos especializados en las actividades de la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos y en la preparación de estudios del Secretario General sobre las condiciones existentes en dichos territorios. Se atribuyó particular importancia a dicha cooperación en el planeamiento y la preparación del informe sobre el progreso alcanzado por los territorios no autónomos. Posteriormente se entablaron consultas con las secretarías de los organismos especializados interesados, para ponerse de acuerdo sobre un plan uniforme de presentación del informe y la distribución de los temas en que deberá ocuparse cada una de las secretarías. Antes de iniciarse el octavo período de sesiones de la Comisión para la Información se efectuarán otras consultas.

b) COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

La importancia de la colaboración internacional y regional técnica y científica en el orden intergubernamental también se puso de relieve durante el undécimo período de sesiones. Se indicó que tal cooperación sería más efectiva si los Estados Miembros administradores

estudiasen la posibilidad de invitar a los Gobiernos de los Estados Miembros situados en la misma región que los respectivos territorios no autónomos que designaran expertos como representantes en las reuniones de los organismos intergubernamentales de cooperación regional. Esta propuesta se incorporó en la resolución 1050 (XI) sobre el progreso de la educación.

c) ASISTENCIA TÉCNICA

Los miembros de la Cuarta Comisión elogiaron a los organismos especializados por haber proporcionado mayor asistencia técnica a los territorios no autónomos.

En ocasiones anteriores, la Asamblea General había demostrado interés por la forma en que la asistencia técnica recibida por los territorios no autónomos de parte de las Naciones Unidas y de los organismos especializados había de integrarse en los programas de desarrollo a largo plazo de dichos territorios. La resolución 1050 (XI) refleja esta opinión e indica a los Estados Miembros administradores la conveniencia de estudiar el procedimiento más adecuado a fin de permitir que los organismos locales de educación de los territorios no autónomos puedan participar en la formulación y aplicación de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados relativos a dichos territorios.

d) BECAS

Conforme a lo solicitado por la Asamblea General en su resolución 931 (X), el Secretario General presentó un informe sobre las ofertas de facilidades para cursar estudios y obtener formación profesional que se habían recibido en virtud de la resolución 845 (IX), que invitaba a los Estados Miembros a ofrecer becas de estudio a los habitantes de los territorios no autónomos.

Hasta la fecha, el Secretario General ha recibido en total ofertas de 189 becas de estudio hechas por los 14 Estados Miembros siguientes: Birmania, Checo-

eslovaquia, Estados Unidos de América, Filipinas, Grecia, Irán, México, Polonia, Rumania, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Algunas de las ofertas se dirigen tanto a los territorios en fideicomiso como a los territorios no autónomos y son, en su mayor parte, de enseñanza superior. En algunos casos incluyen estudios previos para que el interesado aprenda el idioma del país de estudio.

Se han recibido unas 120 solicitudes de estudiantes residentes en 15 territorios no autónomos. Hasta ahora se han notificado nueve concesiones de becas por los Estados oferentes.

Al revisar los procedimientos establecidos en virtud del párrafo 5 de la resolución 845 (IX) de la Asamblea General, el Secretario General señaló en su informe, ciertos defectos que habían surgido e indicó que, manteniéndose siempre dentro de las disposiciones de la resolución, podría hacer un uso mayor de su discreción en la tramitación de las solicitudes, a fin de apresurar las gestiones.

En la Cuarta Comisión se destacó la importancia del plan de becas de estudio y se expresó la esperanza de que se daría amplia publicidad a la información relativa a las ofertas de becas.

En su resolución 1050 (XI) la Asamblea instó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que aumentasen las posibilidades y facilitasen las condiciones para el otorgamiento de becas de estudio y cualquiera otra forma de asistencia que contribuyese al progreso educativo de las poblaciones de los territorios no autónomos, y reiteró la invitación a los Estados Miembros administradores a que permitiesen el máximo aprovechamiento de estas facilidades y beneficios.

En conformidad con la resolución 931 (X), se presentará a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones un informe con nuevos detalles de las ofertas hechas y el uso que se les haya dado desde principios de 1957.

C. CUESTION DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

Los habitantes y sobre todo la mayoría africana del Territorio bajo Mandato del Africa Sudoccidental han estado durante el período que se reseña sin protección de sus derechos e intereses que les podría asegurar un sistema adecuado de fiscalización internacional. Por una parte, el Gobierno de la Unión Sudafricana, a quien se confió la administración bajo mandato del Territorio, ha seguido negándose a aceptar la opinión de la Asamblea General de que el Territorio debería colocarse bajo el régimen internacional de administración fiduciaria; por la otra, se ha negado una vez más a colaborar en la aplicación del procedimiento provisional de fiscalización que ha establecido la Asamblea, por conducto de su Comisión del Africa Sudoccidental, sobre la base de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 11 de julio de 1950.

En consecuencia, la Comisión del Africa Sudoccidental se vió obligada nuevamente a fundar su examen de las condiciones existentes en el Territorio en informaciones recogidas en la medida de lo posible de fuentes oficiales, pero nunca tan completas como si se

hubiera contado con la cooperación del Gobierno de la Unión Sudafricana. Sin dejar de subrayar la cautela con que había tenido que formular sus opiniones, la Comisión pudo no obstante volver a señalar en su informe a la atención de la Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, las características más notables de la situación política, económica, social y cultural del Territorio y sus 457.700 habitantes (cifra aproximada). Aunque observó ciertas pruebas de progreso en algunos aspectos del desarrollo del Territorio, la Comisión afirmó en términos generales que no había tenido motivo para modificar su creencia de que las principales medidas adoptadas en la administración del Territorio estaban casi exclusivamente destinadas a favorecer a la minoría europea, a menudo a expensas de la población africana. Sobre la base del proceder y las declaraciones del propio Gobierno de la Unión, la Comisión manifestó sus temores sobre el curso futuro de la administración del Territorio; tenía motivos para creer que se había producido una tendencia hacia la integración política del Africa Sudoccidental con la Unión. En conjunto, estimó que existía en el Territorio una situación incompatible con los prin-

cipios del Régimen de Mandatos de la Sociedad de las Naciones, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y con las resoluciones de la Asamblea General sobre ese punto; esta situación, a su juicio, exigía un nuevo y detenido examen por parte de la propia Asamblea.

El debate en la Cuarta Comisión sobre el informe de la Comisión del África Sudoccidental y sobre otros aspectos de la cuestión se desarrolló sin la presencia del representante de la Unión Sudafricana, por razones que según lo afirmó la delegación de ese país no guardaban relación con estos asuntos. Las deliberaciones llevaron a la Asamblea a aprobar nueve resoluciones relativas al África Sudoccidental. Por la resolución 1054 (XI) aprobó el informe de la Comisión del África Sudoccidental sobre la situación en el Territorio, tomó nota con preocupación de la evaluación general de la Comisión, aprobó todas sus conclusiones y recomendaciones sobre las medidas que debería tomar el Gobierno de la Unión Sudafricana e invitó a este último a presentar a las Naciones Unidas información sobre las medidas que hubiese tomado. La Asamblea aprobó también dos resoluciones, redactadas originalmente por la Comisión del África Sudoccidental, relativas a peticiones procedentes del Territorio, y otra relativa a audiencias concedidas a dos peticionarios por la Cuarta Comisión. Por resolución 1047 (XI) la Asamblea, al aceptar y hacer suya la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 1º de junio de 1956 sobre esa cuestión, autorizó a la Comisión del África Sudoccidental a que concediera audiencia a los peticionarios.

Por resolución 1061 (XI) decidió aumentar de siete a nueve el número de miembros de esa Comisión (designando luego a Etiopía y Finlandia), y que se renovara anualmente una tercera parte de los miembros.

Las resoluciones restantes constituían otros esfuerzos de la Asamblea por llegar a una solución del problema de la situación jurídica internacional del Territorio. Por la resolución 1055 (XI) refirmó nueve resoluciones anteriores a los efectos de que se colocara al Territorio bajo el Régimen de Administración Fiduciaria. Por la resolución 1059 (XI), la Asamblea pidió al Secretario General que buscara medios y arbitrios para resolver satisfactoriamente la cuestión del África Sudoccidental y que tomara cualesquiera medidas que considerase necesarias para encontrar una solución en conformidad con los principios de la Carta y con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 11 de julio de 1950. Por la resolución 1060 (XI), pidió a la Comisión del África Sudoccidental que estudiara de qué acciones jurídicas disponían los órganos de las Naciones Unidas o los Estados Miembros que la componen, o los que fueron Estados Miembros de la Sociedad de las Naciones, para lograr, actuando individual o colectivamente, que la Unión Sudafricana cumpliera las obligaciones que había contraído en virtud de los términos del Mandato, hasta que se colocase al Territorio del África Sudoccidental bajo el Régimen de Administración Fiduciaria. La Comisión ha iniciado el estudio de esta cuestión determinada, además de su acostumbrado estudio anual de las condiciones imperantes en el Territorio.

Capítulo VI

ASUNTOS JURIDICOS

1. Corte Internacional de Justicia

a) COMPETENCIA DE LA CORTE

Aceptación de la jurisdicción obligatoria

Desde la presentación de la última memoria anual, ninguno de los Estados que no habían reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia ha depositado declaración alguna aceptando dicha jurisdicción de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto. Durante el período que se reseña expiraron las declaraciones de cuatro Estados y fueron reemplazadas por nuevas declaraciones. Tres de los cuatro Estados que notificaron la terminación de sus declaraciones, depositaron nuevas declaraciones, y el otro ha indicado su intención de hacerlo así.

Por declaración de 1º de agosto de 1956, depositada el mismo día en poder del Secretario General, el Gobierno de los Países Bajos dió por terminada, a partir del 6 de agosto de 1956, su aceptación de la jurisdicción de la Corte fundándose en su declaración de 5 de agosto de 1946, y a partir de la misma fecha, con sujeción a ciertas condiciones, reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte por un plazo de cinco años reservándose el derecho a renovar su reconocimiento en adelante.

Por declaración de 3 de octubre de 1956, depositada el 17 de octubre, el Gobierno de Israel aceptó, con sujeción a ciertas reservas, la jurisdicción obligatoria de la Corte a partir del 25 de octubre de 1956. Esta declaración a la que se puede poner término previa notificación, reemplazó a la anterior, cuya ratificación se depositó el 25 de octubre de 1951, y cuya validez era de cinco años a partir de esa fecha.

Por declaración de 17 de diciembre de 1956, depositada en poder del Secretario General el 19 de diciembre, el Gobierno de Noruega aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte bajo condición de reciprocidad, por un plazo de cinco años a partir del 3 de octubre de 1956 y en adelante hasta que se notifique su terminación. Esta declaración reemplazó a la de 16 de noviembre de 1946 cuya validez era de diez años a partir del 3 de octubre de dicho año.

Por declaración de 10 de diciembre de 1956, depositada en la misma fecha, el Gobierno de Dinamarca aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte, bajo condición de reciprocidad, por un plazo de cinco años a partir de esa fecha y en adelante hasta que se notifique su terminación. Esta declaración reemplazó a la de 10 de diciembre de 1946 en cuya virtud Dinamarca reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte por un plazo de 10 años.

Por carta de 21 de diciembre de 1956, recibida por el Secretario General el mismo día, el Gobierno de Pakistán notificó el retiro y terminación de la declaración de fecha 22 de junio de 1948, depositada en poder del Secretario General el 9 de julio de 1948, por la cual Pakistán aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte por un plazo de cinco años y en adelante hasta seis meses después de que se notifique su terminación.

Por declaración de 23 de mayo de 1947, recibida por el Secretario General el mismo día, el Gobierno de Pakistán aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte, con sujeción a ciertas condiciones, hasta que se pueda notificar la terminación de dicha aceptación.

Por comunicación de 8 de febrero de 1957, recibida por el Secretario General el mismo día, el Gobierno de la India notificó la terminación inmediata de su declaración por la que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte el 7 de enero de 1956, depositada el 9 de enero del mismo año. En la misma comunicación, el Gobierno de la India anunciaba que en breve se presentaría una nueva declaración.

Por declaración de 6 de abril de 1957, depositada el mismo día, el Gobierno de Suecia aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte, bajo condición de reciprocidad, por un plazo de cinco años, a partir del 6 de abril de 1957 y en adelante hasta que se notifique su terminación. Esta declaración en la que figuraba una reserva, reemplazó a la de 5 de abril de 1947, depositada el 6 de abril del mismo año, válida por un plazo de 10 años.

Por carta de 12 de abril de 1957, recibida por el Secretario General el mismo día, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte retiró y dió por terminada su declaración de 31 de octubre de 1957 por la que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte. Por declaración de 18 de abril de 1957, depositada el mismo día en poder del Secretario General, el Gobierno del Reino Unido aceptó, con sujeción a varias reservas, la jurisdicción obligatoria de la Corte hasta que se notifique su terminación.

Nuevos Estados partes en el Estatuto de la Corte

Uno de los cinco Estados admitidos como Miembros de las Naciones Unidas durante el período que se reseña, o sea el Japón, ya era parte en el Estatuto de la Corte. Los otros cuatro, Marruecos, Túnez, Sudán y Ghana, automáticamente llegaron a ser partes como consecuencia de su admisión como Miembros de las Naciones Unidas, ya que el Artículo 93 de la Carta previene que todos los Miembros de las Naciones Unidas son *ipso facto* parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Instrumentos que confieren competencia a la Corte

Los siguientes tratados y otros instrumentos registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas, o depositados e inscritos en la misma, contienen cláusulas que confieren competencia a la Corte Internacional de Justicia en ciertos casos:

Acuerdo sobre transporte aéreo entre Italia y el Líbano (firmado en Beirut el 24 de enero de 1949).

Tratado de Paz entre Birmania y Japón (firmado en Rangún el 5 de noviembre de 1954).

Convención sobre los derechos de nacionales y cuestiones comerciales y de navegación entre Canadá y Francia (firmada en Ottawa el 12 de mayo de 1933).

Acuerdo entre los Países Bajos e Irán sobre servicios comerciales aéreos (firmado en Teherán el 31 de octubre de 1949).

Acuerdo entre Dinamarca e Irán sobre servicios comerciales aéreos (firmado en Teherán el 18 de junio de 1951).

Acuerdo entre Tailandia y la India sobre servicios aéreos (firmado en Bangkok el 12 de junio de 1956).

Competencia de la Corte en materia consultiva

El acuerdo sobre la vinculación entre las Naciones Unidas y la Corporación Financiera Internacional, aprobado el 20 de febrero de 1957 por resolución 1116 (XI) de la Asamblea General, estipula que la vinculación entre las Naciones Unidas y la Corporación se regirá por el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y que a ese efecto se considerará que el término "Banco" que figura en el Acuerdo del Banco se refiere a la Corporación, a menos que se especifique lo contrario, para los fines del Acuerdo. En consecuencia, la Corporación, en virtud del Acuerdo, disfruta del derecho conferido al Banco, de conformidad con el artículo VIII del Acuerdo del Banco, de pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia respecto a cualquier cuestión jurídica que se plantee en relación con las actividades de la Corporación y que no se refiera a la vinculación entre la Corporación y las Naciones Unidas o cualquier organismo especializado.

b) ASUNTOS PLANTEADOS ANTE LA CORTE

1. Opinión consultiva sobre los fallos dictados por el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de las demandas presentadas contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

El 23 de octubre de 1956, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre los fallos dictados por el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de las demandas presentadas contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La solicitud de opinión se presentó a la Corte por resolución aprobada el 25 de noviembre de 1955 por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO que decidió solicitar una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones jurídicas:

"I. ¿Era competente el Tribunal Administrativo, con arreglo al artículo II de su estatuto, para conocer de las demandas presentadas contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, por los Sres. Duberg y Leff y la Sra. Wilcox con fecha 5 de febrero de 1955 y por la Sra. Bernstein con fecha 28 de junio del mismo año?

"II. En caso de una respuesta afirmativa a esta primera pregunta:

"a) ¿Era competente el Tribunal Administrativo para verificar si el poder conferido por el Director General de no renovar los nombramientos por plazo fijo había sido ejercido en bien del servicio y en interés de la Organización?

"b) ¿Era competente el Tribunal Administrativo para pronunciarse sobre la actitud que, con arreglo a la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, debe observar el Director General en sus relaciones con un Estado Miembro, principalmente en cuanto se refiere a la aplicación de la política de las autoridades de ese Estado Miembro?

"III. En todo caso, ¿qué validez tienen las decisiones dictadas por el Tribunal Administrativo en sus fallos Nos. 17, 18, 19 y 21?"

La Corte, después de recibir la solicitud para que emitiera una opinión, concedió a los Estados que tenían derecho a comparecer ante la Corte, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las organizaciones internacionales que han reconocido la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la OIT, la ocasión de exponer su parecer. Varios Estados aprovecharon esta ocasión. La UNESCO hizo otro tanto y acompañó a sus exposiciones por escrito las observaciones que había formulado el abogado que representaba a los funcionarios interesados. Como se le había presentado información suficiente, la Corte no celebró audiencias orales.

Habiendo decidido por 9 votos contra 4 acceder a la solicitud de que emitiera una opinión, por 10 votos contra 3, la Corte contestó en sentido afirmativo la primera pregunta. Por 9 votos contra 4, la Corte opinó que la segunda pregunta no exigía respuesta de la Corte y, respecto a la tercera pregunta, por 10 votos contra 3, que ya no podía impugnarse la validez de los fallos.

El Magistrado Kojevnikov, si bien votó en favor de la decisión de la Corte de acceder a la solicitud de que emitiera una opinión, así como de la parte final de la opinión misma en cuanto a las preguntas I y III, declaró que no podía compartir la opinión emitida por la Corte respecto a la segunda pregunta. Tres Magistrados, los señores Winiarski, Klaestad y Sir Muhammad Zafrulla Khan, acompañaron a la opinión de la Corte, las exposiciones de sus opiniones separadas. El Presidente Hackworth, el Vicepresidente Badawi y los Magistrados Read y Córdova agregaron como apéndices las exposiciones de sus opiniones disidentes.

En su opinión, la Corte advirtió que en los cuatro casos los hechos eran esencialmente idénticos, e hizo referencia exclusivamente al caso del Sr. Peter Duberg (Fallo No. 17). El Sr. Duberg había recibido de la UNESCO un nombramiento por plazo fijo que expiraba el 31 de diciembre de 1954. En 1953 y 1954, el Sr. Duberg se había negado a contestar dos cuestionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América, cuyo objeto era suministrar al Director General de la UNESCO ciertas informaciones referentes a los

ciudadanos norteamericanos que prestaban servicios en esa Organización. Habiendo sido invitado a comparecer ante la *International Organization's Employees Loyalty Board* (Junta Investigadora de la Lealtad de los Ciudadanos Norteamericanos Empleados en Organizaciones Internacionales) dependiente de la Comisión de Personal de Administración Pública de los Estados Unidos de América, el Sr. Duberg se negó a hacerlo así y, el 13 de julio de 1954, lo puso en conocimiento del Director General de la UNESCO. El 13 de agosto, el Director General comunicó a Duberg que, como no podía aceptar que la conducta de éste fuese compatible con las elevadas normas de integridad que se exigen a las personas que prestan sus servicios en la UNESCO, al expirar su contrato no le ofrecería un nuevo nombramiento. Con anterioridad, en un memorándum de 6 de julio de 1954, el Director General había anunciado su decisión de que les ofrecería la renovación de sus nombramientos a todos los titulares de contratos por plazo fijo que expiraban a fines de 1954 o a principios de 1955 que satisficieran las normas exigidas de eficiencia, competencia e integridad. Pese a la opinión en contrario emitida por la Junta de Apelación de la UNESCO, ante la cual había recurrido Duberg, se mantuvo la decisión de no renovar su contrato. El 5 de febrero de 1955, Duberg presentó su demanda ante el Tribunal Administrativo de la OIT el cual, en su fallo de 26 de abril de 1955, se declaró competente para conocerla y falló en cuanto al fondo. Tales fueron las circunstancias en las que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, impugnando la competencia del Tribunal en ese caso y, en consecuencia, la validez del fallo, solicitó una opinión de la Corte fundándose en las disposiciones del artículo XII del estatuto del Tribunal.

Ante todo, la Corte consideró si debería atender a lo solicitado. En primer lugar, advirtió que, en virtud del artículo XII, la opinión tendría carácter obligatorio, efecto que, según la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte, no correspondía a una opinión consultiva. No obstante, tal disposición que constituía tan sólo una norma de conducta para el Consejo Ejecutivo, en modo alguno influía en el funcionamiento de la Corte.

Además, en cierto modo, el procedimiento consultivo así instituido revestía el carácter de una apelación de los fallos del Tribunal. El procedimiento consultivo que así reemplazó al procedimiento contencioso tenía por objeto establecer que ciertas impugnaciones respecto a la validez de los fallos emitidos por el Tribunal en un litigio entre un funcionario y la organización internacional interesada habían de presentarse ante la Corte, mientras que, de conformidad con el Estatuto de la Corte, solamente los Estados podían someterle sus cuestiones. La Corte no tenía que examinar el fondo de dicha solución; sólo había de examinar la cuestión de si su Estatuto y su carácter judicial le permitían conocer del asunto. Contrariamente a la práctica aceptada, el procedimiento consultivo instituido en el presente caso entrañaba cierta falta de igualdad entre la UNESCO y los funcionarios interesados. En primer término, en virtud de las disposiciones del estatuto del Tribunal Administrativo, sólo el Consejo Ejecutivo de la UNESCO podía entablar tal procedimiento. Pero esta falta de igualdad era anterior al examen de esta cuestión por la Corte y no influyó en la forma en que la Corte efectuó ese examen. En segundo lugar, en relación con el procedimiento mismo enta-

blado ante la Corte, aunque el Estatuto y el Reglamento de la Corte facilitaban a la UNESCO los medios necesarios para la presentación de sus opiniones, en el caso de los funcionarios la situación era diferente. Pero esta dificultad se allanó, por una parte, porque las observaciones de los funcionarios se presentaron a la Corte por conducto de la UNESCO y, por otra, porque se prescindió del procedimiento oral. Habida cuenta de esto, podía decirse que no había motivo alguno de peso para que la Corte se negara a acceder a la solicitud de opinión.

La Corte examinó luego la primera pregunta que se le formulara. Advirtió que, conforme al texto de la disposición del estatuto del Tribunal Administrativo, para establecer la competencia del Tribunal para conocer de la demanda de un funcionario, era necesario que éste alegase la inobservancia de las condiciones del nombramiento o de las disposiciones del estatuto del personal. Por consiguiente, era necesario que la demanda estuviese fundada realmente y no sólo de modo ficticio en las condiciones y las disposiciones invocadas, si bien no era indispensable que los hechos alegados por los demandantes condujeran necesariamente a los resultados alegados, pues estos últimos constituían el fondo de la cuestión sometida al Tribunal.

En los litigios de que se trata, los funcionarios habían sometido una interpretación de sus contratos y del estatuto del personal en el sentido de que tenían derecho a que se les renovasen sus contratos. ¿Tenía tal afirmación fundamento suficiente para determinar la competencia del Tribunal? Para contestar esta pregunta fué indispensable estudiar los contratos no sólo en cuanto a su letra sino, también, en relación con la situación real en que se los concertó y el lugar que ocupaban en la Organización. Según la práctica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, a menudo se ha considerado que los titulares de contratos a plazo fijo, aunque su situación no sea la misma de los titulares de contratos permanentes o indeterminados, tienen derecho a que se les tenga en cuenta para un empleo duradero, compatible con las exigencias y las conveniencias de la organización interesada. Esta práctica debía servir para prevenir una interpretación de los contratos a plazo fijo que teniendo en cuenta exclusivamente la significación literal de sus cláusulas relativas a la duración, denotase que al expirar el plazo fijado no era posible fundarse en un contrato a plazo fijo para impugnar una negativa a renovarlo. Además, dicha interpretación no tomaría en cuenta la naturaleza de la renovación de tal contrato que en realidad constituía una continuación del contrato anterior, por lo cual existía una relación jurídica entre la renovación y el nombramiento primitivo. Esta relación que constituía el fundamento jurídico de la demanda de los funcionarios, podía verse una vez más en el memorándum administrativo del Director General de fecha 6 de julio de 1954, anteriormente citado. La Corte estimó que era posible sostener fundadamente que una notificación administrativa redactada en términos tan generales podía considerarse como obligatoria para la Organización. Si el Director General estimaba que debía negar a un funcionario los beneficios de la oferta general así formulada, toda controversia que pudiese surgir respecto a la cuestión era de la competencia del Tribunal Administrativo.

Además, la Corte advirtió que, ante el Tribunal, tanto los demandantes como la UNESCO se ampara-

ban en las disposiciones del estatuto del personal, en las que también se fundaba el memorándum administrativo de 6 de julio. Según el parecer de la Corte, el memorándum constituía una modificación del reglamento del personal que el Director General podía hacer en virtud del estatuto del personal. Expresa o implícitamente, el memorándum también se refería al texto del estatuto del personal, en particular, al concepto de integridad en torno del cual giraba la controversia sometida al Tribunal Administrativo. Por consiguiente, tanto desde el punto de vista de la inobservancia de las condiciones del nombramiento como de la inobservancia del estatuto del personal, los demandantes tenían motivo legítimo para su demanda y era justo que el Tribunal confirmara su competencia.

Por tales razones, la Corte dió respuesta en sentido afirmativo a la pregunta I. En lo concerniente a la pregunta II, la Corte señaló que una solicitud de opinión expresamente presentada con arreglo al artículo XII del estatuto del Tribunal Administrativo debía limitarse a impugnar una decisión del Tribunal por la que confirmase su competencia o a casos de un vicio fundamental de procedimiento. Como la pregunta II no se refería a ninguna de estas dos causas de impugnación, a la Corte no le era posible contestarla.

Habiendo así rechazado el argumento relativo a la competencia del Tribunal Administrativo que constituía el único argumento formulado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, la Corte dió respuesta a la pregunta III, reconociendo que ya no era impugnabile la validez de los cuatro fallos.

2. *Litigio sobre ciertos empréstitos noruegos* (Francia-Noruega)

Hasta el 15 de junio de 1957, la Corte no había pronunciado todavía su fallo en el litigio sobre ciertos empréstitos noruegos entre Francia y Noruega.

El procedimiento se entabló en virtud de solicitud del Gobierno de la República Francesa contra el Reino de Noruega, presentada ante la secretaria de la Corte el 6 de julio de 1955. En la solicitud se indicaba que el Reino de Noruega había emitido en el mercado francés, en diversas fechas, entre 1885 y 1907 cierta cantidad de bonos internacionales pagaderos en oro o que contenían una cláusula oro. A raíz de un decreto noruego de 27 de diciembre de 1931, por el que se suspendía la convertibilidad de los billetes emitidos por el Banco de Noruega, el servicio de los préstamos y la amortización de los bonos se efectuó en adelante únicamente en coronas noruegas. Los tenedores de bonos franceses solicitaron que se reanudara el servicio de los préstamos basándose en el valor nominal en oro. Las discusiones, interrumpidas por la guerra en 1939, fueron reanudadas sin éxito. El Gobierno francés trató directamente el asunto con el Gobierno de Noruega, en nombre de sus nacionales, pero esta intervención no tuvo ningún resultado. El Gobierno francés decidió entonces someter el caso a la Corte.

La solicitud fundaba la competencia de la Corte en este caso en la aceptación por las dos partes de la jurisdicción obligatoria de la Corte en virtud de las declaraciones hechas por ambas en aplicación del artículo 36 del Estatuto (la declaración noruega es de fecha 16 de noviembre de 1946; la declaración francesa de fecha 1º de marzo de 1949).

El 20 de abril de 1956, el Gobierno de Noruega presentó un documento en el que formulaba ciertas excep-

ciones preliminares a la competencia de la Corte, por lo que se suspendieron las actuaciones en cuanto al fondo, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 62 del Reglamento de la Corte.

En sus observaciones y conclusiones respecto a estas excepciones preliminares, el Gobierno de la República Francesa pidió a la Corte que incorpore las excepciones al fondo de la cuestión. En virtud de un auto de 28 de septiembre de 1956, la Corte incorporó las excepciones al fondo de la cuestión y fijó plazo para la presentación de nuevas alegaciones. Las actuaciones orales se celebraron en el Palacio de la Paz de La Haya, del 13 al 27 de mayo de 1957.

3. *Litigio relativo al paso por territorio de la India* (Portugal-India)

En virtud de solicitud presentada por el Gobierno de Portugal se promovió ante la Corte, el 22 de diciembre de 1955, un procedimiento contra la República de la India.

En la solicitud se fundaba la competencia de la Corte en la aceptación por ambos Estados de la jurisdicción obligatoria de la misma conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte. En la solicitud se exponía que Portugal reclamaba ciertos derechos de paso por territorio indio entre el territorio portugués de Damao (litoral de Damao) y los enclavados portugueses de Dadrá y Nagar-Aveli, así como entre estos dos últimos.

Habiendo presentado el Gobierno de la India el 15 de abril de 1957 un documento en el que se oponían ciertas excepciones preliminares a la competencia de la Corte, se suspendieron las actuaciones en cuanto al fondo, en virtud de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 62 del Reglamento de la Corte y se fijó un plazo dentro del cual la República de Portugal podía presentar por escrito sus observaciones y conclusiones respecto a las excepciones planteadas por el Gobierno de la República de la India.

c) OTRAS ACTIVIDADES

En varios de los instrumentos registrados o depositados e inscritos ante el Secretario General de las Naciones Unidas durante el periodo que se reseña figuran estipulaciones por las que se confiere al Presidente de la Corte la facultad de efectuar ciertos nombramientos en los casos previstos en los instrumentos. Esta facultad suele ser la de nombrar árbitros o árbitros terceros para los tribunales de arbitraje que se crearían en caso de controversia entre las partes. Ejemplos de estas estipulaciones pueden encontrarse en los instrumentos siguientes:

Acuerdo entre Israel y Suiza sobre servicios aéreos (firmado en Hakirya el 19 de noviembre de 1952).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Japón sobre garantía de inversiones (firmado en Tokio el 8 de marzo de 1954).

Convenio entre Canadá y Francia sobre las condiciones para la indemnización de los intereses canadienses en las empresas nacionalizadas de gas y electricidad (firmado en París el 26 de enero de 1951).

Acuerdo revisado entre las Naciones Unidas e Indonesia para la prestación de asistencia técnica a la Oficina Nacional de Planificación (firmado en Yakarta el 17 de abril de 1956).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Tailandia sobre garantía de inversiones (firmado en Washington el 27 de agosto y el 1º de septiembre de 1954).

Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y reglamento para la aplicación de dicha Convención (firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954).

Convenio entre los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre seguridad social y protocolo relativo a las prestaciones en especie (firmado en La Haya el 11 de agosto de 1954).

Protocolo relativo a la coordinación de la política económica y social entre Bélgica y Luxemburgo y los Países Bajos (firmado en La Haya el 24 de julio de 1953).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Guatemala sobre garantía para las inversiones privadas (firmado en Washington el 23 de marzo de 1955).

Acuerdo sobre transporte aéreo entre Francia y el Japón (firmado en París el 17 de enero de 1956).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América e Irlanda sobre garantías (firmado en Dublín el 5 de octubre de 1955).

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Ecuador sobre garantía para las inversiones privadas (firmado en Washington el 28 y el 29 de marzo de 1955).

Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional (multilateral, abierto a la firma en Washington el 25 de mayo de 1955).

Acuerdos de garantía y acuerdos de préstamo concertados por diversos Estados con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

d) COMPOSICIÓN DE LA CORTE Y DE LA SALA DE PROCEDIMIENTO SUMARIO

Durante el año pasado, la Corte sufrió la irreparable pérdida de uno de sus miembros más distinguidos, el Magistrado Hsu Mo, cuyo fallecimiento ocurrió, tras corta enfermedad, en La Haya el 28 de junio de 1956. El Magistrado Hsu Mo fué uno de los primeros miembros de la Corte Internacional de Justicia.

El 11 de enero de 1957 la Asamblea General y el Consejo de Seguridad eligieron al Dr. V. K. Wellington Koo (China) para cubrir la vacante así producida.

Desde la última memoria anual no ha habido ninguna otra modificación en la composición de la Corte.

El 6 de mayo de 1957, la Corte Internacional de Justicia constituyó su Sala de Procedimiento Sumario para el período siguiente. La Corte eligió a los siguientes Magistrados para formar dicha Sala:

Presidente: Sr. Hackworth

Vicepresidente: Sr. Badawi

Miembros titulares: Magistrados Guerrero, Basdevant y Winiarski

Suplentes: Magistrados Klaestad y Armand-Ugón.

2. Comisión de Derecho Internacional

a) OCTAVO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Cuando se preparó la última memoria anual del Secretario General no había terminado aún el octavo

período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, efectuado en Ginebra del 23 de abril al 4 de julio de 1956; dicha memoria sólo abarca, pues, la etapa inicial de ese período de sesiones. A continuación figura información adicional sobre la labor realizada por la Comisión en ese período de sesiones:

Derecho del mar

La Comisión dedicó la mayor parte del período de sesiones a discutir el derecho del mar. Examinó las observaciones de 25 gobiernos y la Comisión Internacional de las Pesquerías del Atlántico Noroeste a los artículos provisionales relativos al régimen de la alta mar que había aprobado en el séptimo período de sesiones, junto con un nuevo informe del Sr. J. P. A. François, Relator Especial. La Comisión estudió igualmente, sobre la base del informe del Relator Especial, las observaciones de 25 gobiernos al proyecto de artículos relativos al régimen del mar territorial, aprobado en el séptimo período de sesiones.

De conformidad con la resolución 899 (IX) de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1954, la Comisión ha agrupado en un informe sus recomendaciones en materia de alta mar, mar territorial, plataforma continental, zona contigua y conservación de los recursos vivos del mar. El proyecto aprobado finalmente por la Comisión comprende 73 artículos y se divide en dos partes. La primera, que trata del mar territorial, se subdivide en tres secciones: 1) sección general; 2) límites del mar territorial y 3) derecho de paso inocente. La segunda, relativa a la alta mar, también se subdivide en tres secciones: 1) régimen general; 2) zona contigua; y 3) plataforma continental.

El proyecto, que se ocupa únicamente en el derecho del mar en tiempo de paz, va acompañado de un comentario. La Comisión declara que, al preparar la reglamentación del derecho del mar, llegó a convencerse de que en esta materia no siempre es posible determinar claramente las disposiciones que constituyen una codificación del derecho existente y las que pueden considerarse como nuevas reglas y representan, en consecuencia, una evolución del derecho. En estas condiciones, la Comisión consideró que sería necesario acudir a la vía convencional para dar efectividad al proyecto en su totalidad. Por consiguiente, la Comisión recomienda, según lo preceptuado en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 de su estatuto, a la Asamblea General que convoque a una conferencia internacional de plenipotenciarios encargada de examinar el derecho del mar teniendo presentes no solamente los aspectos jurídicos del problema, sino sus aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos, y de consagrar el resultado de sus trabajos en una o más convenciones internacionales o en los instrumentos que juzgue apropiados.

Derecho de los tratados

Por falta de tiempo, la Comisión no pudo estudiar a fondo el informe presentado por Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial. Examinó algunas cuestiones de carácter general que le fueron sometidas por el Relator, a quien solicitó que prosiguiese su labor teniendo en cuenta esos debates.

Responsabilidad de los Estados

Sin pronunciarse sobre ninguna cuestión particular de las que plantea en su informe el Sr. F. V. García Amador, Relator Especial, la Comisión le pidió que

continuase su trabajo teniendo en cuenta las opiniones expuestas por los miembros de la Comisión.

Relaciones e inmunidades consulares

El Relator Especial, Sr. J. Zourek, sometió a la Comisión algunas cuestiones para que lo orientase en la preparación de su informe para el próximo período de sesiones. Se pidió al Relator que prosiguiese su labor teniendo en cuenta lo dicho durante el debate.

Colaboración con los organismos interamericanos

El secretario de la Comisión de Derecho Internacional presentó un informe acerca de la tercera reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, efectuada en la Ciudad de México del 17 de enero al 4 de febrero de 1956, y al que asistió en calidad de observador de la Comisión. El Sr. M. Canyes, representante del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, hizo una declaración. La Comisión aprobó una resolución en virtud de la cual, teniendo en cuenta que convenía proseguir las relaciones establecidas entre la Comisión y el Consejo Interamericano de Jurisconsultos mediante la participación de sus respectivos secretarios en las reuniones de estos organismos, pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que autorizase al secretario de la Comisión para asistir, en calidad de observador de la Comisión, a la cuarta reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos que tendrá lugar en Santiago de Chile en 1958.

b) EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU OCTAVO PERÍODO DE SESIONES

En el curso del undécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión estudió el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones. El tema principal que examinó fué el relativo al derecho del mar; el Secretario General puso a disposición de la Sexta Comisión un memorándum intitulado "Repertorio de antecedentes de los artículos sobre el derecho del mar aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su octavo período de sesiones". El 21 de febrero de 1957 la Asamblea aprobó la resolución 1105 (XI) (véase la sección 3).

La Asamblea General decidió asimismo, sin votación, aceptar la recomendación de la Comisión de que no se modificase el artículo 11 del estatuto de ese organismo en el sentido de que las vacantes que se produjeran ocasionalmente fueran cubiertas por la Asamblea General y no por la propia Comisión.

c) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN

Por resolución 1103 (XI) del 18 de diciembre de 1956, la Asamblea General decidió modificar los artículos 2 y 9 del estatuto de la Comisión de Derecho Internacional con objeto de aumentar el número de sus miembros de 15 a 21.

El mismo día, la Asamblea eligió los siguientes 21 miembros de la Comisión por un período de cinco años, a partir del 1º de enero de 1957: Sr. Roberto Ago (Italia); Sr. Gilberto Amado (Brasil); Sr. Milán Bartos (Yugoeslavia); Sr. Douglas L. Edmonds (Estados Unidos de América); Sr. Abdullah El-Erian (Egipto); Sr. Faris el-Khoury (Siria); Sir Gerald Fitzmaurice (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); Sr. J. P. A. François (Países Bajos); Sr. Francisco

V. García Amador (Cuba); Sr. Shuhsi Hsu (China); Sr. Thanat Khoman (Tailandia); Sr. Ahmed Matine-Daftary (Irán); Sr. Luis Padilla Nervo (México); Sr. Radhabinod Pal (India); Sr. A. E. F. Sandström (Suecia); Sr. Georges Scelle (Francia); Sr. Jean Spiropoulos (Grecia); Sr. Grigory I. Tunkin (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas); Sr. Alfred von Verdross (Austria); Sr. Kisaburo Yokota (Japón); y Sr. Jaroslav Zourek (Checoslovaquia).

d) PREPARACIÓN DEL NOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Procedimiento arbitral

Por resolución 989 (X) del 14 de diciembre de 1955, la Asamblea General invitó a la Comisión de Derecho Internacional a estudiar las observaciones de los gobiernos y los debates de la Sexta Comisión durante el octavo y el décimo período de sesiones de la Asamblea, relativos al proyecto sobre procedimiento arbitral aprobado por la Comisión en su quinto período de sesiones (1953), en cuanto ellos pueden contribuir a incrementar el valor del proyecto. En consecuencia, el Sr. Georges Scelle, Relator Especial, presentó a la Comisión un informe en el cual analiza y contesta las críticas formuladas al proyecto sobre procedimiento arbitral. Además el informe contiene, en un anexo, un nuevo proyecto de 32 artículos que el Relator propone como modelo.

Relaciones e inmunidades consulares

El Sr. Jaroslav Zourek, Relator Especial, presentó un informe en el cual estudia la evolución histórica de las relaciones consulares y de la codificación del derecho relacionado con ellas. El informe contiene un proyecto de 39 artículos, 19 de los cuales se dedican a los problemas que plantea el establecimiento de relaciones consulares, 18 se refieren a la cuestión de los privilegios e inmunidades de los cónsules (tres de ellos se ocupan en los cónsules honorarios), y dos tratan de problemas generales. Cada artículo está seguido de un comentario.

Derecho de los tratados

El Relator Especial, Sir Gerald Fitzmaurice, presentó un segundo informe sobre esta materia. El informe se ocupa en la validez temporal de los tratados, especialmente en las condiciones generales de la validez temporal o duración de los mismos, y en la cuestión de la extinción y suspensión, dejando de lado por el momento la materia relativa a la revisión y modificación de los tratados. El informe contiene 31 artículos, cada uno de los cuales está seguido de un comentario.

Responsabilidad de los Estados

El Sr. F. V. García Amador, Relator Especial, presentó un segundo informe. Este comienza con un estudio de los actos y omisiones que implican la responsabilidad internacional del Estado por daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de los extranjeros, rama ésta de la responsabilidad del Estado que se presta mejor a la codificación y en la cual esa codificación, como lo considera la Asamblea General en la resolución 799 (VIII) del 7 de diciembre de 1953, se requiere con mayor urgencia. Sigue al informe un proyecto de 12 artículos relacionado con el deber del Estado, que viola o deja de cumplir sus obligaciones internacionales, de reparar los daños causados.

e) NOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

El noveno período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional se inauguró en Ginebra el 23 de abril de 1957. En el programa del período de sesiones figuraban los temas siguientes: relaciones e inmunidades diplomáticas; procedimiento arbitral; derecho de los tratados; responsabilidad de los Estados; relaciones e inmunidades consulares; fecha y lugar del décimo período de sesiones; y preparación del plan de trabajo de la Comisión.

La Comisión eligió la siguiente Mesa: Sr. Jaroslav Zourek, Presidente; Sr. Radhabinod Pal, Primer Vicepresidente; Sr. Luis Padilla Nervo, Segundo Vicepresidente; Sir Gerald Fitzmaurice, Relator General.

La Comisión dedicó la primera parte de su período de sesiones a estudiar el tema "Relaciones e Inmunidades Diplomáticas" sobre la base del informe presentado por el Sr. A. E. F. Sandström, Relator Especial, en su séptimo período de sesiones.

Al tiempo de prepararse la presente memoria, continuaba el trabajo de preparación de un proyecto sobre esta materia.

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Por su resolución 1105 (XI) del 21 de febrero de 1957, la Asamblea General expresó su reconocimiento a la Comisión de Derecho Internacional por su valioso trabajo en materia de derecho del mar y decidió que, en conformidad con la recomendación formulada en el párrafo 28 del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones, se convocase a una conferencia internacional de plenipotenciarios para que examinara el derecho del mar. Recomendó igualmente que la Conferencia estudiase la cuestión del libre acceso al mar de los países sin litoral marítimo, según lo establecido por la práctica o los tratados internacionales. Se dejó a cargo del Secretario General la decisión de convocar a la conferencia, que debe reunirse a principios de 1958, en Ginebra o en Roma.

En cumplimiento de la resolución, el Secretario General invitó a un grupo de expertos, integrado por personas de 10 países diferentes, a que asesorara y ayudara a la Secretaría en la preparación de la conferencia. Previa consulta con los expertos, el Secretario General solicitó a los gobiernos invitados a la conferencia por carta del 25 de marzo de 1957, que le comunicasen cualquier observación de carácter provisional que quisiesen hacer acerca del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones y asuntos conexos. En ella indicaba que sería una contribución apreciable a la preparación eficaz de la conferencia que se incluyese en esos comentarios alguna explicación de las consideraciones que hubieran llevado al gobierno interesado a formular sus conclusiones, y que no sólo tuviesen en cuenta los aspectos jurídicos, sino los aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos del problema. El Secretario General indicó asimismo que sería útil que los gobiernos que se encontrasen en condiciones de hacerlo prestasen atención a la cuestión del libre acceso al mar de los países sin litoral marítimo, por no haber sido estudiada por la Comisión ni tratada en su informe.

En la resolución 1105 (XI), la Asamblea pedía también que se preparasen documentos de trabajo de carácter jurídico, técnico, científico o económico con el fin de facilitar los trabajos de la conferencia. En consulta con el grupo asesor de expertos, el Secretario General tomó disposiciones para la preparación de dichos documentos, previendo unos 20 estudios que deben realizarse en parte por la Secretaría y, en parte, por expertos de fuera. Estos estudios cubrirán aspectos muy diferentes del derecho del mar.

4. Cuestión de la definición de la agresión y asuntos relacionados con ella

a) CUESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN

La Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión (1956), creada de conformidad con la resolución 895 (IX) de la Asamblea General del 4 de diciembre de 1954, se reunió en la Sede y celebró 19 sesiones del 8 de octubre al 9 de noviembre de 1956. Todos los Estados designados por la referida resolución, con excepción de Panamá, estuvieron representados en la Comisión. Son ellos los siguientes: Checoslovaquia, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Irak, Israel, México, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana, Siria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

En el curso del debate, algunos miembros de la Comisión Especial expusieron opiniones muy divergentes sobre la posibilidad y la conveniencia de definir la agresión, sobre la función y el alcance de dicha definición y sobre algunos proyectos de definición que habían sido presentados. La Comisión Especial no adoptó una definición, pero decidió remitir el proyecto de definiciones, junto con el informe de la Comisión, a la Asamblea General.

En cumplimiento de la resolución 895 (IX), la cuestión de la definición de la agresión se incluyó en el programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea. Sin embargo, el Secretario General propuso a la Mesa que aplazase hasta el duodécimo período de sesiones el estudio de este tema, porque los gobiernos no habían tenido tiempo de examinar el informe de la Comisión Especial. La Mesa aprobó la propuesta del Secretario General; la Asamblea General aceptó ulteriormente la recomendación de la Mesa de aplazar la consideración del tema.

b) PROYECTO DE CÓDIGO DE DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD

La Asamblea General en su noveno período de sesiones, por resolución 897 (IX) del 4 de diciembre de 1954, decidió aplazar el examen del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad hasta que la Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión (1956) hubiese presentado su informe.

El proyecto de código se incluyó en el programa provisional del undécimo período de sesiones, pero el tema se aplazó, junto con el estudio del informe de la Comisión Especial (1956), hasta el duodécimo período de sesiones.

c) JURISDICCION PENAL INTERNACIONAL

La Asamblea General en su noveno período de sesiones, por resolución 898 (IX) del 4 de diciembre de 1954, decidió aplazar el examen de la cuestión de la jurisdicción penal internacional hasta que hubiese estudiado el informe de la Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión (1956) y examinado nuevamente el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

El tema se incluyó en el programa provisional del undécimo período de sesiones, pero fué aplazado, junto con el informe de la Comisión Especial (1956) y el proyecto de código, hasta el duodécimo período de sesiones.

5. Tratados y convenciones multilaterales

a) REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

En el año que terminó el 15 de junio de 1957 se registraron en la Secretaría un total de 639 tratados y acuerdos internacionales, 54 de oficio, 489 por 25 gobiernos y 85 por 8 organismos especializados. Fueron presentados y registrados un total de 11 tratados y acuerdos — 8 por la Secretaría, 2 a instancias de 2 gobiernos y 1 a solicitud de un organismo especializado. Esto eleva a 5.842 el total de tratados y acuerdos registrados o depositados e inscritos desde el 14 de diciembre de 1946 al 15 de junio de 1957. Además, en el año terminado el 15 de junio de 1957, se registraron 320 declaraciones certificadas y se depositaron e inscribieron cuatro, lo que lleva a 1.261 el total de las declaraciones certificadas registradas o depositadas e inscritas hasta el 15 de junio de 1957.

Las cifras correspondientes al mismo período del año último fueron: 737 tratados y acuerdos registrados por 26 gobiernos, 94 por 8 organismos especializados y 31 de oficio; 11 acuerdos fueron depositados e inscritos a solicitud de 2 gobiernos, 6 a solicitud de 2 organismos especializados y 5 por la Secretaría, lo que da un total de 884. Fueron registradas un total de 206 declaraciones certificadas relativas a dichos tratados y acuerdos y 2 declaraciones certificadas fueron depositadas e inscritas.

Durante el período que examina la presente memoria, la Secretaría ha publicado 31 tomos de la compilación de tratados (*Treaty Series*) (hasta el tomo 190, más los tomos 192 y 194); otros 31 tomos están en proceso de impresión.

De conformidad con la resolución 966 (X) de la Asamblea General, del 3 de diciembre de 1955, el Secretario General presentó en agosto de 1956 a los Estados Miembros y a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, un informe sobre el nuevo estudio que había hecho de algunas de las cuestiones relacionadas con la publicación de la *Treaty Series* (Compilación de Tratados). La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto presentó sus observaciones a los asuntos examinados por el Secretario General en su 17º informe a la Asamblea en su undécimo período de sesiones.

Por la resolución 1092 (XI) del 27 de febrero de 1957, aprobada por recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea decidió, entre otras cosas, mantener el sistema actual de registro y publicación de tratados

y acuerdos internacionales, en particular con respecto al método de publicación de traducciones y anexos, y pidió al Secretario General que tomase toda las medidas necesarias para reducir lo antes posible las demoras en la publicación de la *Treaty Series* (Compilación de Tratados).

En consecuencia, se ha puesto en práctica un plan acelerado de impresión de las *Series* y si la afluencia de material continúa al mismo ritmo que hoy, se espera que a fines de 1959 el intervalo entre el registro y la publicación se habrá reducido a menos de un año.

b) NUEVAS CONVENCIONES CELEBRADAS BAJO LOS AUSPICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde que se publicó la última memoria, se han concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas los siguientes instrumentos de los cuales es depositario el Secretario General:

Convención aduanera sobre los *containers*, concertada en Ginebra el 18 de mayo de 1956;

Convención aduanera sobre la importación temporal de vehículos comerciales de carretera y Protocolo de firma, concertados en Ginebra el 18 de mayo de 1956;

Convención aduanera sobre la importación temporal para uso privado de aeronaves y de embarcaciones de recreo y Protocolo de firma, concertados en Ginebra el 18 de mayo de 1956;

Convención aduanera sobre el régimen fiscal de los vehículos particulares de carretera en circulación internacional y Protocolo de firma, concertados en Ginebra el 18 de mayo de 1956;

Convención sobre el contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera y Protocolo de firma, concertados en Ginebra el 19 de mayo de 1956;

Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, concertada en Nueva York el 20 de junio de 1956 (entró en vigor el 25 de mayo de 1957);

Convención relativa al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en la navegación interior, concertada en Bangkok el 22 de junio de 1956;

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, concertada en Ginebra el 7 de septiembre de 1956 (entró en vigor el 30 de abril de 1957);

Convención sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera que efectúan el transporte internacional de pasajeros, concertada en Ginebra el 14 de diciembre de 1956;

Convención sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera que efectúan el transporte de mercaderías, concertada en Ginebra el 14 de diciembre de 1956;

Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, concertada en Nueva York el 20 de febrero de 1957.

c) ESTADO DE LAS FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES: ENTRADA EN VIGOR

Son ahora 136 los acuerdos internacionales respecto de los cuales el Secretario General es depositario.

En el curso del año se han añadido 206 firmas en total a estos acuerdos y se han transmitido al Secretario General 123 instrumentos de ratificación, adhesión o notificación. De estos acuerdos 90 han entrado en

vigor, 3 de ellos desde el 16 de junio de 1956. Los que han entrado en vigor con anterioridad a la última memoria aparecen señalados con un asterisco en la lista de la sección anterior y a ellos hay que agregar el siguiente:

Protocolo para prorrogar el período de vigencia de la Convención sobre declaración de fallecimiento de personas desaparecidas, concertado en Nueva York el 16 de enero de 1957 (entró en vigor el 22 de enero de 1957).

d) ACTA GENERAL REVISADA PARA EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

El párrafo 3 del artículo 43 del Acta General Revisada para el Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales, aprobada por la Asamblea General el 28 de abril de 1949, dice lo siguiente:

"El Secretario General de las Naciones Unidas cuidará de que se lleven tres listas designadas con las letras A, B y C, correspondientes respectivamente a las tres modalidades de adhesión a que se refiere el artículo 38 de la presente Acta, en las cuales figurarán las adhesiones y declaraciones adicionales de las Partes Contratantes. Estas listas mantenidas constantemente al día, serán publicadas en la memoria anual presentada por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas."

Las listas previstas en el artículo mencionado son las siguientes:

ADHESIONES

A. *A todas las disposiciones del Acta (capítulos I, II, III y IV)*

Bélgica	23 de diciembre de 1949
Noruega	16 de julio de 1951
Dinamarca	25 de marzo de 1952

B. *A las disposiciones sobre la conciliación y el arreglo judicial (capítulos I y II), conjuntamente con las disposiciones generales referentes a esos procedimientos (capítulo IV)*

Suecia	22 de junio de 1950
--------------	---------------------

Con la reserva a que se refiere el inciso a) del párrafo 2 del artículo 39, destinada a excluir de los procedimientos descritos en la presente Acta las controversias originadas en hechos anteriores a la adhesión de la parte que formule la reserva.

C. *A las disposiciones referentes a la conciliación (capítulo I) y a las disposiciones generales concernientes a ese procedimiento (capítulo IV)*

Ninguna.

e) PRÓRROGA DE LA CONVENCIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Como se consigna en la memoria anual del Secretario General al quinto período de sesiones de la Asamblea General, la Convención sobre Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas se concertó y abrió a la adhesión de los Estados al terminar la Conferencia reunida en Lake Success del 15 de marzo al 6 de abril de 1950. La Convención, que entró en vigor el 24 de enero de 1952, debía expirar, con arreglo a su artículo 17, el 23 de enero de 1957. Por una comunicación del 16 de enero de 1957, el Gobierno de Pakis-

tán, parte en la Convención, transmitió al Secretario General un Protocolo preparado por ese Estado para prorrogar el período de validez de la Convención. Pidió al Secretario General que abriese el Protocolo a la adhesión y que actuase como depositario de éste, puesto que ya lo era de la Convención. Para que el Protocolo pudiese entrar en vigor antes de la fecha de expiración de la Convención, se solicitó también al Secretario General que lo distribuyese inmediatamente a las partes en dicha Convención y, una vez que el Protocolo entrase en vigor, que lo distribuyese entre los demás Estados que tengan derecho a ser partes en aquélla.

El Protocolo prorroga el período de validez de la Convención sobre Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas por un período de 10 años, salvo el derecho de denuncia de la Convención por los Estados partes en ella. Está abierto a la adhesión de todos los Estados que tienen derecho a ser partes en la Convención original.

f) CONVENCIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Obligación de Dar Alimentos que se reunió en la Sede de las Naciones Unidas el 29 de mayo de 1956, terminó sus actividades el 20 de junio de 1956 con la aprobación y apertura a la firma de la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Las principales disposiciones de la Convención están resumidas en la última memoria anual. La Convención permaneció abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1956 y fué suscrita por 26 Estados. Entró en vigor el 25 de mayo de 1957, en el trigésimo día subsiguiente al depósito del tercer instrumento de ratificación o adhesión.

La Conferencia aprobó igualmente una resolución en virtud de la cual, teniendo en cuenta que en el artículo 7 de la Convención se establecen reglas sobre los exhortos necesarios para obtener más pruebas, pide al Secretario General que prepare y envíe a los Estados que tienen derecho a ser partes en la Convención una lista de los Estados cuya legislación prevé los exhortos. En virtud de esta resolución, el Secretario General ha solicitado informaciones a los Estados interesados sobre la legislación o los tratados referentes a exhortos o cartas rogatorias.

g) PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

De conformidad con la resolución 604 (XXI) del Consejo Económico y Social del 3 de mayo de 1956, el Secretario General ha decidido convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios, que se reunirá en la Sede de las Naciones Unidas en mayo de 1958 con el objeto, en primer término, de concertar una convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, tomando como base el proyecto preparado en 1955 por un Comité especial, y, en segundo término, de considerar, si el tiempo lo permite, otras medidas posibles para aumentar la eficacia del arbitraje en el arreglo de las controversias de derecho privado.

El Secretario General, en cumplimiento de la misma resolución, dirigió una carta a tres organizaciones intergubernamentales (el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y el Instituto Internacional

para la Unificación del Derecho Privado) y a 29 organizaciones no gubernamentales, solicitándoles breves informes sobre sus actividades encaminadas a mejorar el arbitraje comercial internacional, y las observaciones e indicaciones que crean pertinentes.

h) PROYECTOS DE CONVENCIÓN PARA LA SUPRESIÓN O REDUCCIÓN DE LA APATRIDIA EN LO PORVENIR

En su quinto período de sesiones (1953), la Comisión de Derecho Internacional propuso un proyecto de Convención para la supresión o reducción de la apatridia en lo porvenir. Teniendo en cuenta las observaciones recibidas de 15 gobiernos (que se han incluido en un anexo al informe de la Comisión), ella reexaminó en su sexto período de sesiones los dos proyectos de Convención y presentó a la Asamblea General nuevos proyectos revisados. La Asamblea aprobó el 4 de diciembre de 1954 la resolución 896 (IX), por la cual expresa su deseo de que se convoque a una conferencia internacional de plenipotenciarios a fin de que concierte una convención para reducir o suprimir la apatridia en lo porvenir tan pronto como 20 Estados, por lo menos, notifiquen al Secretario General que están dispuestos a participar en tal conferencia. Se invitaba al Secretario General a que informase al respecto a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones.

De conformidad con esta resolución, el Secretario General informó en el undécimo período de sesiones que, además de los 16 Estados (véase la Memoria del año pasado) que habían comunicado previamente que estaban dispuestos a participar en la Conferencia de Plenipotenciarios, otros tres Estados (Liechtenstein, Luxemburgo y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) también se habían declarado dispuestos a participar. El Secretario General indicaba asimismo que no había podido convocar la Conferencia por no haberse recibido el número requerido de respuestas afirmativas.

La Sexta Comisión examinó el informe del Secretario General y, sin discusión, recomendó a la Asamblea General que tomase nota del mismo.

Por una comunicación del 12 de junio de 1957, el Gobierno de Sudán informó al Secretario General que estaba dispuesto a participar en la Conferencia, cumpliéndose así la condición impuesta para convocarla, o sea cuando 20 Estados, cuando menos, hubiesen notificado su decisión de participar en ella.

6. Prerrogativas e inmunidades

a) CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde la publicación de la última memoria anual, siete Estados más han pasado a ser partes en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, o sea, en el orden cronológico en que depositaron sus instrumentos de adhesión, Rumania, Hungría, Argentina, Laos, Marruecos, Túnez y Austria. Con excepción de la Argentina, todos estos Estados fueron admitidos como miembros de las Naciones Unidas en 1955 y 1956. De ellos, Rumania y Hungría formularon reservas con respecto a la sección 30 de la Convención, mientras que Laos expresó reservas respecto a los párrafos b) y c) de la sección 18. Contando dichas adhesiones, hay en la actualidad 54 Estados Miembros partes en la Convención, mientras que

27 Estados Miembros no han depositado aún los respectivos instrumentos de adhesión¹.

b) CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Durante el período que se reseña no se ha adherido ningún nuevo Estado a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados ni se ha extendido la aplicación de la misma a otros organismos especializados. Por consiguiente, continúan siendo partes en la Convención 21 Estados Miembros.

c) ACUERDOS ESPECIALES SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES

Como se expresó en la memoria anual presentada a la Asamblea General en su noveno período de sesiones, el Secretario General firmó el 26 de mayo de 1954 un acuerdo con el Gobierno de Tailandia referente a la sede de la Comisión Económica para el Asia y el Lejano Oriente en dicho país. El Secretario General se complace en anunciar que el Gobierno de Tailandia ratificó dicho acuerdo el 6 de febrero de 1957, fecha en que entró en vigor.

Entre otros acuerdos que contienen disposiciones sobre prerrogativas e inmunidades concertados durante el período que se reseña figuran los acuerdos con Egipto de 8 de enero y 8 de febrero de 1957 respecto a las medidas para despejar el Canal de Suez (véase el apartado XI de la sección 4 del capítulo I) y a la situación jurídica de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en Egipto (véase el apartado XI de la sección 4 del capítulo I) y el Acuerdo Provisional con Líbano de 29 de abril de 1957 sobre el Centro de Vacaciones del Personal de la FENU en dicho país.

d) LEGISLACIÓN

En la memoria anual presentada a la Asamblea General en su décimo período de sesiones, el Secretario General se refirió a la Ley del Estado de Nueva York cuyo principal objeto era que a partir del 27 de abril de 1955, se eximiera de impuestos, con sujeción a ciertas condiciones, a los bienes inmuebles de las delegaciones de los Estados Miembros situados dentro de un radio de 12 millas del distrito de la Sede de las Naciones Unidas, siempre que dichos bienes inmuebles fueran utilizados exclusivamente para oficinas o moradas de los representantes residentes principales o con rango de Embajador o Ministro Plenipotenciario, o para oficinas del personal de estos representantes. Esta Ley ha sido recientemente reformada por disposición de la Legislatura del Estado de Nueva York que entró en vigor el 15 de abril de 1957, ampliando de 12 a 15 millas el radio dentro del cual se aplicará dicha exención de impuestos sobre los bienes inmuebles de las delegaciones.

e) ACTUACIONES ANTE TRIBUNALES NACIONALES

En la memoria anual anterior se resumieron las actuaciones iniciadas en 1954 por un ex empleado del Centro de Información de las Naciones Unidas en Buenos Aires reclamando el pago de indemnización

¹ Los Estados Miembros que aún no han depositado sus instrumentos de adhesión a la Convención son los siguientes: Albania, Arabia Saudita, Bulgaria, Camboja, Ceilán, Colombia, Cuba, China, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Libia, México, Nepal, Perú, Portugal, Sudán, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Yemen.

de despido a las cuales se creía con derecho conforme a la legislación argentina del trabajo (Bergareche contra el Centro de Información de las Naciones Unidas).

El 7 de febrero de 1956, el Tribunal de Trabajo No. 17 de Buenos Aires se declaró competente para entender en el juicio, basándose en una opinión del Ministerio Público de que las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas no tenían aplicación en territorio argentino por cuanto la Argentina no había ratificado aún dicha Convención. La decisión respecto al fondo de la cuestión se aplazó debido a ciertas cuestiones de procedimiento. El 12 de abril de 1957, el Ministerio Público, en una nueva opinión comunicó al Tribunal de Trabajo que la Argentina se había adherido a la Convención en virtud del decreto presidencial 15.971 y que, conforme al artículo 31 de la Constitución, la Convención era parte integrante de la ley fundamental de la Nación. En consecuencia, las Naciones Unidas gozaban en territorio argentino de inmunidad contra todo procedimiento judicial, según el artículo II de la Convención, y sus funcionarios eran inmunes contra todo proceso judicial respecto de los actos ejecutados en su carácter oficial, según el artículo V, sección 18. Por tales razones, el Ministerio Público opinaba que el Tribunal de Trabajo no era ya competente para fallar en este caso.

El 23 de abril de 1957, el Tribunal de Trabajo dictó un auto por el cual, conforme a la opinión del Ministerio Público, se declaraba incompetente para entender en el asunto; el demandante ha apelado dicha decisión.

7. Reglamentos de los órganos de las Naciones Unidas

a) REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

Al comienzo de su undécimo período de sesiones, la Asamblea General, siguiendo una recomendación del Secretario General apoyada por la Mesa, resolvió aumentar a ocho el número de sus vicepresidentes. La Asamblea aprobó asimismo otra recomendación del Secretario General, apoyada por la Mesa, de cambiar el nombre de la Comisión Política *Ad Hoc* por el de "Comisión Política Especial"; esta recomendación se basaba en la consideración de que la Comisión había dejado de tener el carácter de provisional y de que una consideración más equitativa de las dos comisiones políticas redundaría en un mayor equilibrio en la distribución de los temas entre ellas.

Accediendo a un pedido de la Asamblea de que redactara las modificaciones del Reglamento derivadas de dichas decisiones, la Sexta Comisión recomendó ciertos cambios en los textos de los artículos 31, 38, 39 y 101. Dichas modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea el 18 de diciembre de 1956 (Resolución 1104 (XI)).

b) REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Al iniciar su 19° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria incorporó a su programa un nuevo tema, relativo al examen del procedimiento del Consejo con respecto a peticiones. Se creó un comité compuesto de cuatro personas, encargado de examinar esta cuestión.

Dicho comité presentó un informe en el 20° período de sesiones en el que concluía que el procedimiento

actual era adecuado para conocer de las comunicaciones y peticiones que se recibían de todos los territorios en fideicomiso, menos uno. El comité formuló ciertas recomendaciones sobre clasificación y trámite de comunicaciones, recomendaciones que estaba estudiando el Consejo cuando se redactó la presente memoria.

En su 19° período de sesiones, el Consejo agregó a su programa un tema titulado "Revisión del Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria". Birmania presentó una propuesta para que se modificara el artículo 19 en el sentido de que la elección de Presidente y Vicepresidente se efectuara al principio del período de sesiones de enero en vez de en el período de sesiones de junio. En su 793a. sesión, el Consejo decidió aplazar indefinidamente la consideración de dicho tema.

Al comenzar su 20° período de sesiones, el Consejo aprobó una propuesta de Birmania de que se incluyera, como tema adicional en el programa, la cuestión de la revisión del artículo 19 del Reglamento del Consejo.

8. Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas

a) ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL

El Tribunal Administrativo se reunió en Ginebra en agosto de 1956 a fin de examinar dos casos.

El primer caso (fallo No. 63), se refería a una demanda entablada por el ex director de la oficina de El Cairo del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) contra dicho Organismo, por rescindir éste su contrato de misión basándose en que era superfluo. El caso había sido aplazado en el año anterior, de conformidad con las partes después que el Tribunal se pronunció acerca de la cuestión de su competencia (fallo No. 57). Luego de oír a las partes acerca del fondo de la cuestión el Tribunal suspendió el examen del caso hasta que el Organismo suministrara nueva documentación y datos.

En el segundo caso (fallo No. 64), un funcionario de la Junta Central Permanente del Opio impugnaba la decisión del Secretario General de no reconocerle la condición de contratado semilocalmente, que le hubiera permitido, mientras perteneciera al cuadro de servicios generales, disfrutar del subsidio de no residente. El demandante había entrado en Suiza en 1941 como prisionero de guerra fugitivo de nacionalidad polaca y había permanecido en dicho país hasta que las Naciones Unidas lo contrataron en 1949. Hasta 1946 su condición fué la de militar internado y luego la de civil internado hasta diciembre de 1947. El Tribunal, luego de determinar que las disposiciones del artículo 52 del Estatuto del Personal no eran aplicables al demandante, examinó si éste podía reclamar sus derechos de conformidad con la interpretación y estipulaciones de dicho artículo, según el cual un funcionario contratado localmente en Ginebra puede ser nacional suizo o una persona que haya residido en la zona de Ginebra por tres años cuando fué contratada. El Tribunal advirtió que los antecedentes del caso llevaban a la conclusión de que el demandante había residido en la zona conforme a la interpretación y las estipulaciones que desde 1945 pudo sin duda abandonar libremente el territorio suizo y que, según el Convenio No. V de La Haya sobre los derechos y obligaciones de las Potencias y personas neutrales en caso de guerra

terrestre (1907), había adquirido *ipso facto* su libertad al penetrar en territorio neutral. Por lo tanto, el Tribunal rechazó la demanda.

El Tribunal se reunió en la Sede en noviembre de 1956 para examinar tres casos.

En el fallo No. 65, el Tribunal se pronunció en el caso que había sido aplazado en la sesión anterior hasta que el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente presentara nuevos documentos. El Tribunal opinó que un memorándum distribuido por dicho Organismo a sus representantes en diversos países confería un derecho, al personal interesado, al pago de una indemnización de despido de conformidad con la legislación del trabajo del país. Sin embargo, sostuvo que dicha indemnización debía ajustarse y ser de naturaleza análoga a las prestaciones previstas por el Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Tribunal rechazó las demandas por indemnización especial y subsidio de enfermedad. En cuanto al reclamo de indemnización por despido, el Tribunal no pudo pronunciarse al respecto basándose en las conclusiones presentadas por escrito por las partes, y decidió, habida cuenta de que la suma que se reclamaba era relativamente reducida que las partes trataran de llegar a un acuerdo, pudiendo presentar nuevamente la cuestión al Tribunal si no lograban concordar. El Tribunal decidió que las costas debía pagarlas el demandado por cuanto se le podía atribuir ciertas demoras.

El fallo No. 66 recayó sobre una demanda de un ex funcionario de la Secretaría de las Naciones Unidas, quien pretendía que era ilegal la negativa del Secretario General a autorizarle que firmara la renuncia a prerrogativas e inmunidades requerida por las leyes de los Estados Unidos para adquirir la condición de residente permanente, y que su dimisión a consecuencia de ello, carecía de fundamento jurídico y era nula e inválida. Basándose en la cláusula 1.8 del Estatuto del Personal el Tribunal sostuvo que ninguna renuncia de prerrogativas e inmunidades podía llevarse a efecto por un funcionario sin la autorización del Secretario General. Rechazó el argumento del demandante de que, para tomar su decisión, el Secretario General se había basado en ciertas actuaciones de la Quinta Comisión durante el octavo período de sesiones de la Asamblea General, y de que dichas actuaciones, con respecto a la renuncia de prerrogativas e inmunidades, habían sido irregulares. Opinó asimismo que la ejecución de la política de la Asamblea General, que se hiciera indispensable por la promulgación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de América, de 24 de diciembre de 1952, correspondía al Secretario General y que éste había expuesto plenamente la situación al personal. Por lo tanto, rechazó el argumento del demandante de que los poderes discrecionales del Secretario General en cuanto a renuncia de prerrogativas e inmunidades se limitaban a aquellas prerrogativas que sólo la Organización podía renunciar y no comprendían las prerrogativas que eran de interés exclusivo del funcionario de que se trataba. En cuanto al argumento del demandante de que su dimisión era nula e inválida, el Tribunal sostuvo que, a falta de causas que justificaran la cancelación de la dimisión, ésta volvía improcedente cualquier nuevo reclamo de su parte contra las Naciones Unidas. Por lo tanto, el Tribunal rechazó la demanda.

En el tercer caso (fallo No. 67), ocho ex funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas, ciudadanos de los Estados Unidos de América, reclamaban el reembolso de los impuestos federales y estatales sobre la indemnización que habían recibido según los fallos pronunciados en 1953 (Nos. 31, 33 a 37, 39, 41 y 51).

Al rechazar dicha demanda, el Tribunal estableció una distinción entre la indemnización concedida y el pago de los sueldos adeudados que se ordenó al mismo tiempo. Sostuvo que la indemnización tenía por objeto reparar un daño y no tenía el carácter de remuneración por servicios prestados. Por lo tanto, la cláusula especial que figuraba en los contratos de cinco de los demandantes y que preveía el reembolso del impuesto sobre la renta aplicable al salario y pagos conexos no era aplicable al monto de las indemnizaciones, aun en el caso de que éstas se consideraran como sueldos por la ley de los Estados Unidos de América.

El Tribunal opinó también que la demanda de reembolso de impuestos sobre el monto de las indemnizaciones no se apoyaba en ninguna decisión de la Asamblea General. Advirtió que la Asamblea había autorizado el reembolso de impuestos en forma anual y que la resolución aplicable a este caso era la resolución 973 (X) de 15 de diciembre de 1955 que se basaba en la resolución 359 (IV) de 10 de diciembre de 1949 en cuanto a las deducciones para el plan de contribuciones del personal. Esta última resolución no contenía referencia alguna a indemnizaciones por perjuicios sufridos como consecuencia de despidos injustificados, a pesar de que enumeraba algunos pagos por sueldos o sumas por concepto análogo y sujetos a dichas deducciones. Por lo tanto, en este caso el Secretario General no estaba facultado para efectuar reembolso alguno.

El Tribunal advirtió que, por otra parte, se reembolsaban a los funcionarios interesados los impuestos nacionales sobre ciertos pagos que no estaban sujetos a las deducciones del plan de contribuciones y examinó la cuestión de si la falta de reembolso en el presente caso se ajustaba a los principios enunciados en esta materia por la Asamblea General. Opinó que no podían aplicarse a este caso los principios de igualdad entre los funcionarios y de protección contra la doble tributación. En lo que respecta al tercer principio, o sea el de equidad entre los Estados Miembros, enunciado en la resolución 13 (I) aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, el Tribunal advirtió que no podía decirse que se lo respetara si una gran parte de la indemnización concedida a los demandantes, con fondos aportados por todos los Estados Miembros la recaudase un Estado determinado por concepto de impuesto sobre la renta. Sin embargo, el Tribunal no se juzgó competente para decidir que, en consecuencia, las Naciones Unidas estaban obligadas a reembolsar a los demandantes en este caso.

Conforme a su reglamento, el Tribunal se reunió en sesión plenaria en la Sede el 4 de diciembre de 1956 para elegir a sus funcionarios para 1957 y examinar cuestiones relativas al funcionamiento del Tribunal.

b) ACUERDOS POR LOS QUE SE EXTIENDE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

El 22 de noviembre de 1956 el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial firmaron un

acuerdo extendiendo la jurisdicción del Tribunal Administrativo a la OMM con respecto a demandas presentadas por los funcionarios de ésta que aleguen incumplimiento del Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas; dicho acuerdo es idéntico a los previamente firmados con otros organismos especializados sobre la misma materia, y entró en vigor el 6 de junio de 1957, fecha en que el Secretario General de la OMM comunicó al Secretario General que sus disposiciones habían sido aprobadas por la OMM conforme a los requisitos constitucionales de dicho organismo.

Accediendo a un pedido formulado por la Quinta Comisión en el décimo período de sesiones de la Asamblea General, se están celebrando consultas entre el Secretario General y los jefes administrativos de los organismos especializados que están afiliados a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, sobre la aplicabilidad del procedimiento de revisión establecido por el artículo 11 del Estatuto del Tribunal Administrativo a los casos en que se trate de la aplicación del Reglamento de la Caja Común.

c) REVISIÓN DE LOS FALLOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Los funcionarios interesados presentaron solicitudes de revisión de los fallos 64, 65, 66 y 67 del Tribunal Administrativo, conforme al procedimiento establecido por la Asamblea General en su décimo período de sesiones (resolución 957 (X) de 8 de noviembre de 1955 y artículo 11 del Estatuto del Tribunal Administrativo), ya expuesto en la memoria anual anterior del Secretario General.

En su primer período de sesiones, celebrado del 16 al 25 de octubre de 1956, el Comité de peticiones de revisión de los fallos del Tribunal Administrativo examinó la demanda relativa al fallo número 64, y en su segundo período de sesiones, celebrado del 21 de enero al 1º de febrero de 1957, las demandas relativas a los fallos 65, 66 y 67. La Comisión decidió en cada uno de estos casos que la demanda, conforme al artículo 11 del estatuto del Tribunal, carecía del necesario fundamento y, por lo tanto, estimó que no se debía solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Conforme al párrafo 4 del artículo 11, el Comité adoptó en su primera sesión, celebrada el 16 de octubre de 1956, un reglamento provisional. Este reglamento provisional, y las enmiendas al mismo aprobadas en la segunda y la tercera reuniones, celebradas el 25 de octubre de 1956 y el 21 de enero de 1957, disponen que las actuaciones del Comité se regirán por el Reglamento de la Asamblea General relativo a sus comisiones, y prescriben además disposiciones especiales relativas a la presentación y examen de las demandas previstas en el artículo 11. El Comité aplazó hasta un futuro período de sesiones el examen de un proyecto de enmienda que establecería que cualquier decisión de la Comisión de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

9. Propuesta de convocación de una conferencia general para la revisión de la Carta

En la última memoria anual del Secretario General se relataron los antecedentes que condujeron a la aprobación por la Asamblea General, el 21 de noviembre de 1953, de la resolución 992 (X) sobre el tema del programa del décimo período de sesiones titulado "Propuesta de convocación de una conferencia general de los Miembros de las Naciones Unidas para la revisión de la Carta". En dicha resolución se preveía la designación de un comité compuesto de todos los miembros de las Naciones Unidas para examinar en consulta con el Secretario General la cuestión de determinar la fecha y el lugar de dicha conferencia, así como también su organización y su reglamento.

El Comité se reunió en la Sede de las Naciones Unidas el 3 de junio de 1957; por 67 votos contra ninguno y 9 abstenciones, aprobó un proyecto de resolución presentado por Brasil, Canadá, Egipto, El Salvador, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Liberia y Panamá, por el cual el Comité: 1) decidía recomendar a la Asamblea General, en su duodécimo período de sesiones, que se mantuviera al Comité y se le pidiera que presentara un informe, con recomendaciones, a la Asamblea General, a más tardar en su décimo cuarto período de sesiones; y 2) pedía al Secretario General que continuara los trabajos previstos en el párrafo 4 de la resolución 992 (X).

En el transcurso del debate, varias delegaciones, inclusive las que habían presentado el proyecto de resolución, estimaron que, aunque era deseable revisar la Carta, no había llegado aún el momento de convocar una conferencia general con tal objeto. Señalaron además que la decisión de aplazar la celebración de la conferencia no excluía la posibilidad de reformar determinados Artículos de la Carta conforme al procedimiento señalado en el Artículo 108. Otras delegaciones sostuvieron que la Carta era un instrumento perfectamente razonable y que no había necesidad de convocar una conferencia de revisión.

El párrafo 4 de la resolución 992 (X), mencionada en la resolución aprobada por el Comité disponía que se completase el programa de publicaciones previsto en la resolución 796 (VIII) de la Asamblea General, aprobada el 23 de noviembre de 1953, y la preparación de suplementos al *Repertorio de la Práctica seguida por los Organos de las Naciones Unidas*. Los cinco volúmenes de dicho *Repertorio*, que fueron primeramente publicados en inglés en 1955, han sido traducidos y publicados tanto en francés como en español. El primer suplemento al *Repertorio*, correspondiente a los dos años comprendidos entre el 1º de septiembre de 1954 y el 1º de septiembre de 1956, ha sido preparado para publicarse en un solo tomo y el Secretario General espera distribuirlo a los Estados Miembros cuando se celebre el duodécimo período de sesiones de la Asamblea.

Capítulo VII

MAYOR COMPRENSION EN LA OPINION PUBLICA

a) CONSIDERACIONES GENERALES

Los acontecimientos internacionales del pasado año y las crisis a que dieron lugar han mantenido y aumentado notablemente el interés que la prensa y el público de la mayoría de los países tienen por las Naciones Unidas. Este interés, que varía de un país a otro, fué naturalmente mayor en aquellos que se vieron envueltos en dichos acontecimientos o afectados por ellos, o cuyos gobiernos tuvieron una intervención primordial en las discusiones y los esfuerzos para solucionarlos. Las deliberaciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y las actividades de los representantes de la Organización tuvieron, en general, resonancia sin precedentes tanto por su relieve como por su volumen.

El papel desempeñado por las Naciones Unidas en la prolongada crisis del Oriente Medio, incluyendo la organización y despliegue de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y los trabajos de limpieza del Canal de Suez; en la situación de Hungría y en los trabajos realizados en favor de los refugiados húngaros y de otros países; en la cuestión del desarme; en la utilización de la energía atómica con fines pacíficos; en la asistencia técnica y el desarrollo económico — tales fueron las cuestiones que concentraron la atención general sobre la Organización, a la vez que otros problemas de especial importancia para determinados países despertaban un interés de carácter regional.

La opinión pública sobre las Naciones Unidas ha mostrado, como siempre, cierta tendencia a dejarse influir por actitudes nacionales y por la medida en que la actuación de las Naciones Unidas parecía coincidir con las aspiraciones nacionales. En conjunto, puede decirse que la reacción mundial fué favorable. En la mayor parte de los países, la opinión se mostró impresionada por la rapidez y decisión con que las Naciones Unidas actuaron en la primera crisis sometida a la consideración de la Asamblea General como consecuencia de la resolución "Unión pro paz" aprobada en 1950. Esa actuación dió por resultado la cesación de fuego y la retirada de fuerzas en el Oriente Medio; la creación y despliegue en el término de pocos días de una Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas sin precedentes ni preparación previa; y la limpieza del Canal de Suez por una flotilla de salvamento de las Naciones Unidas un mes antes de la fecha prevista y con un costo inferior a la cuarta parte de la cifra calculada en un principio y ampliamente difundido. Estos hechos realzaron ante los ojos de la opinión las posibilidades de una organización mundial creada, como dice la Carta, para "asegurar, mediante la aceptación

de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común".

Incluso en los pocos países donde predominó una actitud de censura — con relación a las medidas adoptadas por las Naciones Unidas en cuanto a la crisis del Oriente Medio o la situación en Hungría — el interés por la Organización fué grande. Tanto en estos últimos países como en los demás, el curso de los acontecimientos hizo que la opinión pública se diera cuenta de algunas de las realidades de la política internacional y de su relación con las Naciones Unidas y con las disposiciones de su Carta. Esto permite esperar, si puede aprovecharse eficazmente la oportunidad, que vaya desarrollándose con el tiempo una comprensión más profunda y duradera con el consiguiente apoyo en favor de la Organización.

La persistencia de erróneas interpretaciones debidas a la falta de comprensión de las obligaciones de la Carta, así como de la forma en que funcionan los órganos de las Naciones Unidas, es un punto que merece cuidadosa atención. Este fenómeno obedece en parte a que la opinión pública tiene menos interés por los asuntos mundiales que por los que se relacionan concretamente con la ciencia y la técnica. Esta falta de interés es natural; pero no puede dejar de ser un motivo de creciente inquietud en una época que, en el sentido físico, ha hecho que el mundo entero viva en contacto más estrecho y que el recurso de la guerra, como precio de la imposibilidad de vivir en paz como vecinos, resulte tan costoso que llegue a constituir una amenaza para la propia civilización.

Parece que es necesario hacer todavía mayores esfuerzos para que, entre el público en general, se difunda más el conocimiento de los hechos relativos a la Carta y a las actividades de las Naciones Unidas. Es especialmente evidente la necesidad de que exista una comprensión más amplia de las posibilidades constructivas de la Organización, así como de sus limitaciones constitucionales: una comprensión, en otras palabras, de la medida en que puede o no ejercer una influencia inmediata sobre el curso de los acontecimientos y de la posibilidad de que esa influencia se consolide en el futuro como resultado de aplicar en el presente una política acertada. Son varios los países donde se han hecho propuestas para la creación de una fuerza permanente de las Naciones Unidas, aprovechando la experiencia de la FENU, propuestas que despertaron un gran interés y cuentan con un apoyo cada vez mayor.

La crítica más frecuentemente hecha contra las Naciones Unidas en ciertas esferas reflejó la necesi-

dad de que exista una mayor comprensión. Se dijo que las Naciones Unidas aplicaban una "medida diferente", a causa del desigual cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General, especialmente en lo que se refiere a la situación del Oriente Medio y la de Hungría. Otras voces proclamaron que la Asamblea no aplicaba una medida diferente, sino que ésta era igual en todos los casos. La Carta no confiere a la Asamblea facultades jurídicas para imponer por la fuerza su voluntad a los Estados Miembros; solamente puede hacer recomendaciones. En su afán de resolver las cuestiones "por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia", la Asamblea General pidió la retirada voluntaria de las fuerzas y el cumplimiento voluntario de los otros términos de sus resoluciones tanto sobre la situación del Oriente Medio como sobre la de Hungría. Algunos de los que han lanzado sus críticas no han llegado a comprender bien que tal actitud reflejaba el carácter esencial de las Naciones Unidas, como asociación de Estados nacionales en la que se protegen cuidadosamente los derechos soberanos de todos sus Miembros.

Pero, incluso en aquellas esferas donde se criticó a las Naciones Unidas por su "inactividad" o su "fracaso", hubo muchas que señalaron que, al limitarse a pedir, recomendar y esforzarse por lograr una conciliación con el fin de "crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional", la Organización respondía al íntimo deseo de los pueblos del mundo de evitar una guerra de carácter general. Esas corrientes de opinión se mostraban más dispuestas a aceptar las limitaciones constitucionales de la acción de las Naciones Unidas en defensa de los principios de la Carta, y a apoyar los procedimientos de persuasión y de una mayor eficacia de la Organización. Se creyó, a veces con decepciones, que con esa actitud podría lograrse un reconocimiento más universal de tales principios como derecho de los pueblos.

En otros casos existió la convicción de que únicamente en las Naciones Unidas podían expresar su opinión las pequeñas naciones, o aquellas que acababan de nacer después de depender por un tiempo prolongado de países más adelantados. En muchos sectores se expuso la opinión de que las Naciones Unidas se estaban convirtiendo — al ampliarse el mayor número de sus Miembros — en una imagen cada vez más clara de las esperanzas y las tensiones de la vida del siglo XX y en el centro más importante para el establecimiento de acuerdos esenciales y para el progreso común.

En muchos países hay señales de que se está produciendo un cambio en la opinión pública sobre las Naciones Unidas. Es cierto que la situación internacional se presenta ahora para muchas personas con más claridad que hace un año y que se comprende mejor la fuerza de la opinión mundial que puede movilizarse a través de los órganos de las Naciones Unidas, cuando estos órganos son utilizados.

Entre los hechos que muestran este cambio de la opinión pública puede citarse el gran aumento experimentado el año último por el número de informaciones solicitadas del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y de sus centros de información, en las consultas dirigidas a los servicios de referencias y en la demanda de documentos y de material informativo. Esta nueva demanda es resultado de los debates públicos mantenidos en los diversos órganos

legislativos nacionales; en libros y artículos sobre cuestiones políticas; en cartas a la prensa; en discusiones sostenidas en las escuelas, universidades y organizaciones no gubernamentales; en las tribunas públicas, y en entrevistas transmitidas por radio y televisión.

La admisión de nuevos países en las Naciones Unidas ha estimulado las discusiones sobre la universalidad de la Organización, algunas veces en relación con el problema de la representación de China, expresándose con energía opiniones contradictorias. La admisión de Ghana, incorporando a un antiguo territorio en fideicomiso — el Togo bajo administración británica — inmediatamente después de la proclamación de su independencia, fué objeto de comentarios favorables sobre los progresos generales logrados bajo el régimen de administración fiduciaria; no faltó, sin embargo, quienes pidieran una mayor rapidez en su desarrollo mientras otros aconsejaban que se siguiera un ritmo más lento.

Al aumentar a 81 el número de Estados Miembros hubo algunos países que volvieron a discutir el procedimiento de votación de la Asamblea General, especialmente teniendo en cuenta el papel que ésta desempeña en las importantes cuestiones políticas sometidas a la consideración de las Naciones Unidas en los 12 últimos meses. Algunos sugirieron que se modificara el derecho de voto en la Asamblea, mediante algún sistema de votación ponderada, fundándose en que no es justo el procedimiento de un voto para cada país independientemente de su población, su influencia o la responsabilidad que le incumbe en los asuntos internacionales. Otros países manifestaron su deseo de que se garantice la representación igual de todos los intereses. Se puso de relieve que la gran influencia inevitablemente ejercida en el mundo por los países grandes y poderosos se refleja en los resultados de las votaciones de la Asamblea General y equilibra ya dichas votaciones de forma suficiente, aunque indirecta. En realidad hubo algunos que fueron más lejos y sostuvieron que la Asamblea estaba bajo la "dominación" de los grandes países occidentales altamente desarrollados, a pesar de la representación mucho mayor de las pequeñas potencias y de otras partes del mundo. Los mismos sectores de opinión criticaron la regla de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad — el "veto" — por considerarla "antidemocrática", mientras que en otros países era defendida enérgicamente. En estos últimos casos, la defensa se basó en que esa regla era una advertencia necesaria para recordar la responsabilidad proporcionalmente mayor de aquellos cuya participación en las cargas de la Organización es más grande, frente a una mayoría creciente de Estados que soportan una parte más pequeña de los gastos y riesgos de las actividades internacionales pero tienen un derecho de voto igual.

El interés regional que siempre despiertan las reuniones de las tres comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas aumentó este año por el hecho de que en dos de ellas, la Comisión Económica para Europa y la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, se celebraba su décimo aniversario. Se manifestó también una satisfacción general por el papel que está desempeñando la Comisión Económica para la América Latina en el desarrollo de la economía de esa región.

La celebración en todo el mundo del undécimo aniversario de las Naciones Unidas en 1956 superó en número y variedad a la del décimo aniversario en 1955, e incluso a las de todos los años anteriores. El

éxito de la celebración del Día de las Naciones Unidas siempre se ha debido en gran parte a la cooperación de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales, así como a la de los medios de información. Los informes recibidos de casi todos los países indican que esa cooperación volvió a superar en 1956 a la de todos los años anteriores. Al igual que en estos últimos, los gobiernos de los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales dirigieron la organización de esas fiestas.

Los medios de información para las masas — prensa, radio, cine y televisión — son los principales divulgadores de información con los que necesariamente hay que contar. Los cambios registrados el año último en la opinión pública sobre las Naciones Unidas han hecho recordar que la forma y eficacia de los métodos seguidos por ellos para divulgar los hechos está determinada por actitudes ya existentes. Esas actitudes pueden modificarse de forma que se preste mayor atención a los elementos de los programas de información que tienen un carácter ampliamente educativo. El único medio de preparar a la prensa y al público para acoger las noticias y los acontecimientos consiste en fomentar una justa comprensión de los hechos de la vida internacional, entre los que se cuentan los fines, atribuciones y actividades de las Naciones Unidas.

b) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS

En conformidad con los principios generales establecidos por la Asamblea General en materia de información pública, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, el Departamento de Información Pública no puede asumir por sí solo la educación del público en general en cuanto a los detalles de la organización, fines y actividades de las Naciones Unidas. Esta tarea corresponde principalmente a los organismos oficiales y privados así como a las instituciones docentes de los Estados Miembros, de las organizaciones no gubernamentales y de los propios medios de información. Las actividades de información de las Naciones Unidas se han encaminado, desde un principio, a prestar todos los servicios posibles a dichos organismos y a proporcionarles información. Se han adoptado asimismo medidas para que sea cada vez mayor el número de representantes de tales organismos que, de un modo directo, llegue a conocer la estructura y actividades de la Organización.

En respuesta al creciente número de Estados Miembros, al mayor interés del público por las Naciones Unidas y al aumento de las solicitudes de servicios y materiales de información se ha intensificado el esfuerzo por descentralizar estos servicios, por emplear nuevos idiomas y por desarrollar la producción en los diversos medios — en la medida en que lo permite la necesidad de transmitir noticias — a fin de lograr una comprensión más profunda de los principios fundamentales y de los hechos básicos.

El desarrollo del programa de pasantías y de becas para ampliación de estudios aplicado por el Departamento de Información Pública el año último tuvo como detalles sobresalientes la celebración del primer Seminario de las Naciones Unidas para el personal de los órganos de información y la concesión de un número limitado de becas a miembros de dicho personal. Esas actividades formaban parte de un programa iniciado por el Consejo Económico y Social para desarrollar

“un conocimiento más amplio de la labor de las Naciones Unidas, de los países extranjeros y de los asuntos internacionales, con miras a fomentar entre los pueblos relaciones amistosas basadas en los propósitos y principios de la Carta”. Como resultado de la aprobación dada por el Consejo en su resolución 605 (XXI) del 3 de mayo de 1956, “quedando entendido que en el desarrollo de dicho programa se dará la debida importancia al fomento de la libertad de información”, el primer Seminario de las Naciones Unidas para el personal de los órganos de información se celebró en Ginebra del 23 de julio al 8 de agosto de 1956 y se concedieron seis nuevas becas para una estancia de dos meses de duración en la Sede de las Naciones Unidas. A este Seminario, con el que colaboró estrechamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, asistieron varios dirigentes de gran competencia profesional de los órganos de información que fueron seleccionados a título personal y no como representantes de sus países o de sus medios de información. Los participantes en el seminario procedían de la Argentina, Brasil, Checoslovaquia, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El Seminario logró despertar un gran interés por la labor económica y social de las Naciones Unidas y proporcionó una apreciable cantidad de información por medio de estudios, debates y contactos personales.

Con el propósito de ajustarse a una distribución geográfica se concedieron becas, cuyo número tuvo que limitarse a seis por no disponerse de más fondos, a candidatos del personal de órganos de información designados por los gobiernos de países de los que no había habido participantes en el Seminario. Los becarios procedían de Birmania, Ceilán, Filipinas, Italia, Suecia y Turquía. Se dispuso que los becarios llegaran a la Sede de las Naciones Unidas con la oportunidad necesaria para asistir a la última parte del undécimo período de sesiones de la Asamblea General. Los becarios aprovecharon todas las oportunidades que se les ofrecieron, durante los dos meses de estancia en la Sede, y contaron también con las facilidades concedidas a los corresponsales acreditados.

La transmisión de informaciones y las facilidades ofrecidas a los corresponsales han seguido siendo, desde luego, una de las actividades fundamentales del Departamento de Información Pública. En 1956 hubo 238 corresponsales de prensa acreditados durante todo el año, número que ascendió a 465 durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea General contra 344 en 1955. En 1956 hubo también 93 corresponsales de radio y televisión acreditados de forma permanente, y 113 representantes de noticiarios cinematográficos.

El Departamento ha mantenido, al igual que en años anteriores, un servicio completo de enlace y documentación; ha proporcionado asimismo a un grupo de corresponsales internacionales destacados en la Sede de las Naciones Unidas, y procedentes de más de 35 países, toda clase de facilidades con inclusión de oficinas permanentes para las principales agencias internacionales de información y varios periódicos importantes. Con el fin de aumentar la utilidad de los centros de información como fuentes de los antecedentes oportunos relacionados con las noticias cablegrafiadas por los corresponsales a la prensa de los Estados Miem-

bro, el envío ordinario de material de actualidad y básico ha sido completado con la transmisión cablegráfica de los textos de resoluciones y discursos importantes, así como de los informes relativos a las cuestiones más urgentes, a los centros de mayor importancia.

El programa de publicaciones del Departamento de Información Pública, que desde 1946 ha producido de 10 a 12 millones de ejemplares de publicaciones de diversas clases, se ha descentralizado aún más en el afán de responder a la creciente demanda de documentación en un gran número de idiomas. Algunas publicaciones fundamentales han aparecido hasta en 37 idiomas y, siempre que ha sido posible, se han preparado en los países donde habían de publicarse. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha publicado en cerca de 50 idiomas. Con la cooperación de los gobiernos interesados, el folleto anual del Día de las Naciones Unidas se publica ordinariamente en unos 30 idiomas.

Se prestaron también nuevos servicios a los corresponsales acreditados de radio, televisión y noticiarios cinematográficos. Los estudios, el material de grabación y el tiempo para la transmisión por onda corta fueron puestos a disposición de los corresponsales acreditados de las redes nacionales de radiodifusión.

La Radio de las Naciones Unidas ha producido sus propios programas de noticias e información de actualidad, a saber: sesiones y actividades locales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y declaraciones de los gobiernos y de las delegaciones sobre cuestiones relacionadas con la Organización. Durante el período en que la Asamblea no estuvo reunida, se redujeron los programas de noticias y se prestó mayor atención a los de amplio interés educativo. Hubo también programas de documentales y dramatizaciones semidocumentales sobre los problemas de más interés para las Naciones Unidas. Se desarrolló un plan de producción descentralizada, en virtud del cual los programas preparados semanalmente por la Radio de las Naciones Unidas se transmitían en las diversas regiones por organizaciones nacionales de radiodifusión. Durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, los programas de la Radio de las Naciones Unidas — transmitidos en 34 idiomas — se retransmitieron en 73 países y 44 territorios; esos programas fueron puestos a disposición de los sistemas nacionales de radiodifusión por circuitos de onda corta, grabaciones y líneas de radio.

Los servicios de televisión de las Naciones Unidas tienen todavía un alcance limitado, aunque van ampliándose gradualmente. Se dieron facilidades a las organizaciones nacionales de televisión para transmitir programas y noticias directamente desde las Naciones Unidas, y ordinariamente se proporcionaron a las redes de televisión de América del Norte cinetoscopias sobre las noticias más importantes. Durante los 10 días del período extraordinario de sesiones de emergencia de 1956, la duración de las sesiones transmitidas directamente por estaciones de los Estados Unidos fué de 125 horas. Se proporcionaron también muchas películas para televisión a otros países donde este medio de información está adquiriendo gran importancia. Además de los servicios prestados a los actuales programas nacionales de televisión, la Televisión de los Estados Unidos inauguró en 1956 sus propias producciones. Más de 30 programas semanales de un cuarto de

hora de duración en lengua inglesa fueron distribuidos a las estaciones de los Estados Unidos y Canadá, y se produjeron regularmente programas en español, italiano y alemán. En total, en 1956 se distribuyeron en telecine 680 copias de 55 programas preparados por la televisión de las Naciones Unidas y producidos en siete idiomas.

El Servicio de Cine de las Naciones Unidas se mantuvo en contacto con las compañías de películas y noticiarios, proporcionando facilidades, material y asesoramiento. La cinematoteca, que contiene actualmente 2.500.000 pies de documentos históricos, puso parte de su material a disposición de los productores ajenos a la Organización a precio de costo. En 1956 hubo 195 peticiones de material por un total de 200.000 pies. El Departamento cooperó con los productores nacionales en la producción de 13 películas directamente relacionadas con la obra de las Naciones Unidas y en 12 películas educativas. Además de esos servicios prestados a productores ajenos a la Organización, el Servicio de Cine continuó su propio programa de producción y distribución.

El Servicio de Fotografía y Exposiciones continuó sus actividades de enlace y prestó asistencia a 120 fotógrafos y a ocho artistas que están acreditados en forma permanente. Los servicios de las agencias comerciales se suplementaron con fotografías de fases importantes del trabajo de la Organización realizadas por personal de la misma. Los archivos fotográficos de las Naciones Unidas contienen más de 50.000 negativos seleccionados, cuyas copias están siendo utilizadas cada vez más por redactores y editores. Todos los meses se prepararon fotografías de actualidad para la prensa y cartones para estereotipias, planchas y fotografías en papel brillante para los pequeños periódicos. Se prepararon también cinetoscopias sobre temas de interés especial y cantidades limitadas de carteles con reportajes fotográficos y juegos de los mismos, preparados en las tres lenguas de trabajo y adaptadas a las demás.

El Departamento de Información Pública se encargó de los tres programas anuales ordinarios de formación de pasantes; uno de dos meses para 30 funcionarios públicos; otro de la misma duración para 30 estudiantes; y un tercero para 20 estudiantes, llamados pasantes especiales, que duró un año. Los estudiantes de este último programa sirven como guías, durante parte de su estancia, en la Sede de las Naciones Unidas. Debe mencionarse también el viaje especial de estudios que permitió vinieran a la Sede, durante un mes, siete representantes de organizaciones no gubernamentales de Australia, Birmania, Finlandia, Indonesia, Italia, México y el Reino Unido a quienes se dieron facilidades para estudiar la labor que realizan las Naciones Unidas.

En cumplimiento de la política de prestar asistencia activa a las organizaciones no gubernamentales para que adquieran un mayor conocimiento de las Naciones Unidas, tanto entre sus miembros como entre el público en general, el Departamento de Información Pública organizó en 1956 cuatro conferencias de organizaciones no gubernamentales, a saber: en La Habana del 20 al 27 de julio, para las organizaciones de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras y México; en Santiago de Chile del 17 al 24 de octubre, para organizaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay; en Colombo del 29 de octubre al 1º de noviembre, para las organizaciones de Birmania, Ceilán, la

India, Nepal y el Pakistán, y del 7 al 9 de noviembre, para representantes de las organizaciones nacionales e internacionales, en la Sede de las Naciones Unidas. Para los representantes de las organizaciones nacionales en Europa, se prevé la celebración de una conferencia en Roma entre el 24 y el 26 de junio de 1957. Hubo unos 160 observadores de organizaciones no gubernamentales acreditados en la Sede de las Naciones Unidas en 1956, a los cuales se proporcionó información, documentos y otros servicios.

El Departamento, en cooperación con la UNESCO, continuó prestando ayuda a las autoridades docentes y a las instituciones de los Estados Miembros para el desarrollo o complemento de la enseñanza sobre las Naciones Unidas; y presta actualmente asistencia a unas 600 dependencias docentes de voluntarios en 90 países, organizadas para estimular el interés y actuar como fuentes de información entre los colegios y escuelas de sus zonas respectivas.

El número de personas que acudió a la Sede de las Naciones Unidas, en calidad de visitantes, sobrepasó el año último todas las cifras anteriores. El 24 de abril de 1957 se alcanzó una cifra sin precedentes al recibir la visita de 6.283 personas. El número total de visitantes en el año 1956 fué algo inferior a 800.000. En total, desde 1952, excede de 3.500.000 el número de visitantes. Desde que en 1952 se abrió la librería de las Naciones Unidas en la Sede, ha habido más de 500.000 visitantes que han realizado compras en ella cada año. Actualmente se han nombrado agentes para la venta de las publicaciones de las Naciones Unidas en 88 países.

Al aumentar los servicios regionales prestados a las agencias de información oficiales y particulares, el

personal local contratado para trabajos ocasionales en los centros de información se ha convertido en personal de plantilla.

Como nuevo paso en el proceso de descentralización se ha nombrado también a un funcionario de radio para el Asia Sudoriental, adscrito a esa región, a fin de que colabore en la adaptación y utilización del material de radio de las Naciones Unidas para los sistemas nacionales de radiodifusión. Se han nombrado también funcionarios regionales del servicio de cine para el Asia Sudoriental y Europa, adscritos a esas regiones, quienes están promoviendo activamente la producción ajena a la Organización.

La cooperación establecida con los organismos de los gobiernos de los Estados Miembros, con los medios nacionales de información y con las organizaciones no gubernamentales ha sido y sigue siendo de la mayor importancia para aumentar en todo el mundo el alcance y eficacia de la información relativa a las Naciones Unidas.

El Departamento de Información Pública ha tratado en los últimos meses de hacer frente a la solicitud siempre creciente de servicios e información que dirigen los diferentes medios y el público en general, a pesar de tener que estar atareado al mismo tiempo con prolongados períodos de emergencia. Distribuyendo su personal en forma conveniente y asignando temporalmente funcionarios de una división o de un centro geográfico del mismo departamento a otro, ha podido hacerse frente a todos los problemas que se han presentado. El año próximo las Naciones Unidas tendrán que atender a nuevas peticiones de servicios de los Estados Miembros.

Capítulo VIII

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

1. Servicios de conferencias y documentos

a) EL PROGRAMA DE CONFERENCIA

En años anteriores el programa anual de conferencias en la Sede daba generalmente lugar a dos períodos de intensa actividad, de marzo a julio y de septiembre a diciembre. El primero correspondía al período de sesiones de primavera del Consejo Económico y Social y de sus comisiones orgánicas, así como al del Consejo de Administración Fiduciaria, y el último al período de sesiones anual de la Asamblea General. Pero en los últimos dos años se han agregado importantes reuniones al programa anual, con el resultado de que ahora se registra una actividad continua durante todo el año. Como prueba de este hecho pueden citarse las nuevas actividades en el campo de la energía atómica que han sido motivo de conferencias extraordinarias durante el período que se reseña, tanto en la Sede en 1956 a propósito del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica como en Ginebra, en marzo de 1957, por lo que respecta al Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas. También cabe mencionar la actividad cada vez más intensa de la Subcomisión de la Comisión de Desarme, que se reunió nuevamente en Londres por cuarto año consecutivo y ha estado celebrando allí un prolongado período de sesiones desde marzo de 1957, así como el gran número de reuniones de la Comisión Especial para el Problema de Hungría que en la primavera de 1957 se celebraron en la Sede, en Ginebra, en Roma, en Viena y en Londres.

Por lo que se refiere a 1958, ya están en marcha los preparativos para una nueva conferencia científica sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y una extensa conferencia sobre el derecho del mar.

El programa de conferencias establecido por la Asamblea General en su resolución 694 (VII), del 20 de diciembre de 1952, ha estado en vigor durante más de tres años. Ese programa ha impreso cierto grado de estabilidad al conjunto anual de conferencias, tanto en la Sede como en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas actividades ya mencionadas, unido al continuo aumento del número de reuniones no incluidas en el programa fijo de conferencias que se han celebrado fuera de la Sede, han alterado en gran parte tal estabilidad.

Durante el período abarcado por la presente memoria, el número de reuniones no incluidas en el programa y celebradas fuera de la Sede ha seguido siendo considerable. De ahí que, una vez más, la Oficina Europea

haya tenido que hacer gastos adicionales por concepto de personal supernumerario y que el programa de trabajo de la Sede se haya desorganizado a causa de la necesidad de asignar personal técnico de idiomas para prestar servicios en esas reuniones.

b) SERVICIOS DE DOCUMENTOS

La Sección de Control Editorial se ha esforzado por racionalizar, coordinar y simplificar los documentos, tarea que se hace constante en vista de la forma en que aumenta el número de proyectos adoptados por los diferentes órganos de las Naciones Unidas. Esta tarea se ha cumplido con éxito gracias, sobre todo, al espíritu de cooperación demostrado por los departamentos que preparan los documentos.

Mientras tanto, se han venido agudizando dos problemas especiales. El primero se deriva de los crecientes retrasos en la preparación de informes o estudios requeridos para los períodos de sesiones de los órganos de las Naciones Unidas. Cuando el retraso es debido a causas tales como un exceso de trabajo del personal respectivo o a la demora en recibir la cooperación o los datos procedentes de gobiernos o de organismos ajenos a la Organización, la Sección de Control Editorial poco puede hacer aparte de aconsejar en el momento oportuno a los interesados que no abriguen un optimismo excesivo en cuanto a las fechas de entrega. En algunos casos, sin embargo, la sección ha conseguido que se respeten con mayor exactitud los plazos convenidos, mediante una coordinación más rígida entre todos los servicios de producción que intervienen.

El segundo problema estriba en la calidad literaria, o "legibilidad", de ciertos informes y estudios. Esto no debe sorprender en una Organización que emplea especialistas en temas variados, quienes virtualmente pertenecen a todas las nacionalidades y que no son necesariamente aptos para disponer documentos o redactar (la mayor parte de las veces en un idioma que no es el suyo) para el lector culto pero no especializado. La Sección de Control Editorial, tal como está actualmente constituida, puede asesorar — y así lo hace — en lo que respecta a la disposición y el estilo, pero no puede volver a redactar todo un estudio o un informe. Se ha decidido, por lo tanto, agregar a este servicio dos funcionarios encargados de dar nueva forma a los escritos.

Aunque sus actividades no se extienden oficialmente fuera de la Sede, la influencia de la Sección de Control Editorial ha contribuido en cierto número de casos a mejorar el texto de publicaciones debidas a oficinas regionales.

En el año de que se trata — y en forma mucho más intensa que en el pasado — el Jefe de la Sección de

Control Editorial ha actuado como asesor de la Junta de Publicaciones, cuyo Presidente es también el Editor en Jefe y de quien depende la Sección de Control Editorial para su orientación y fijación de las normas que deben seguirse.

En lo que respecta a traducción, mecanografía, edición de documentos oficiales, versiones taquigráficas e interpretación, cabe mencionar especialmente los servicios prestados por la Secretaría en el satisfactorio desarrollo de los dos períodos extraordinarios de sesiones de emergencia de la Asamblea General, celebrados en septiembre y octubre del pasado año, así como del período ordinario de sesiones, excepcionalmente prolongado y laborioso, que siguió a continuación. El personal demostró su capacidad para adaptarse a un período de trabajo tan intenso como prolongado, y se sintió satisfecho de cumplir el gran número de horas extraordinarias requeridas. Se tropezó con dificultades para la contratación de mecanógrafas en idioma francés y esto impuso una pesada labor para los servicios de taquimecanografía respectivos, cuyo personal es insuficiente.

El propio personal técnico de idiomas se ha encontrado ante un programa de trabajo penoso e ininterrumpido. El undécimo período de sesiones de la Asamblea no se clausuró hasta principios de marzo de 1957, y no se ha registrado reducción alguna en el programa normal de conferencias para este año. Por el contrario, ha sido preciso prestar servicios a reuniones adicionales tales como las de la Subcomisión de la Comisión de Desarme, la Comisión Especial para el Problema de Hungría y la Conferencia de la Comisión Económica para América Latina en La Paz. Como consecuencia de ello ha habido que restringir severamente las licencias, y se han trabajado muchas horas extraordinarias. A pesar de esas medidas, y a causa de la imposibilidad de que los departamentos respectivos presentaran los documentos con anterioridad, la documentación — especialmente en traducción — necesaria para las reuniones del primer semestre de 1957 se vió inevitablemente atrasada. En muchos casos se publicaron excepcionalmente en forma mimeografiada los documentos más importantes, sin perjuicio de imprimirlos posteriormente, para disminuir la demora. Se están realizando intensos esfuerzos a fin de que la sección de interpretación y el servicio de mecanografía en francés dispongan de todo el personal necesario y de formar una reserva de intérpretes adiestrados, tanto dentro como fuera de la Secretaría, que sirva de refuerzo para casos de urgencia y proporcione candidatos competentes para su contratación a medida que se produzcan las vacantes.

El recargado programa de conferencias ha significado un nuevo aumento en el trabajo del personal de actas taquigráficas y en la edición de documentos oficiales. La admisión de 21 nuevos Estados Miembros también ha contribuido considerablemente a acrecentar el volumen del trabajo. En lo que se refiere a las versiones taquigráficas, la Asamblea General por sí sola celebró 108 sesiones plenarias durante el período que se estudia contra 45 en el año precedente. A pesar de este considerable aumento, y con sólo un refuerzo mínimo de personal supernumerario, las actas se están publicando sin retraso.

En cuanto a las actividades de publicación es preciso señalar que los 16 volúmenes de las ediciones en idiomas francés y español de las Actas de la Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía

Atómica con Fines Pacíficos se publicaron durante el período de que se trata, con lo cual se cumplieron las esperanzas formuladas en la memoria anterior. La Oficina Europea, a quien corresponde este mérito, cooperó estrechamente con la Sede en la solución de diversos problemas técnicos. Debe señalarse además que la Oficina Europea realizó este trabajo al mismo tiempo que ponía en ejecución, por cuenta de la Sede, el programa ampliado de trabajo de imprenta en países de moneda débil de Europa. La preocupación por ampliar el programa de trabajo de imprenta en países de moneda débil, así como por descentralizar la adjudicación de los contratos, siguió siendo la misma que en el año precedente.

Durante el período que es objeto de examen se amplió la adjudicación de trabajos de imprenta en Asia y el Oriente Medio, y se prevé un nuevo aumento por este concepto en esas regiones. Se hicieron contratos con varios impresores en el Lejano Oriente, y, en consecuencia, se imprimirá más extensamente en esta región la versión en chino de los documentos oficiales con una considerable reducción en el costo. También se han adoptado medidas para utilizar los servicios de imprenta de la América Latina, y se han convenido normas de producción que pueden aplicarse con el objeto de establecer una base sólida y uniforme para el posterior desarrollo de las negociaciones con los impresores de dicha región. Esta última medida será sumamente ventajosa por lo que respecta a la Comisión Económica para América Latina.

A pesar de los aumentos en el costo del papel, los suministros y la mano de obra, la aplicación total del método de licitación entre los diferentes países ha permitido que se obtengan los precios más favorables para las impresiones de las Naciones Unidas y que de esa forma disminuyan las consecuencias de tales aumentos.

Durante el período de que se trata, la Junta de Publicaciones ha podido aprovechar el aumento en la capacidad de reproducción por los servicios propios de la Organización y aligerar con ello los gastos de imprenta por contrata. Sin embargo, la mayor parte del aumento de esa capacidad se ha utilizado para reproducir el mayor volumen de actas y de documentación correspondientes a los dos períodos extraordinarios de sesiones y al undécimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Este incremento en la productividad, unido a la adquisición de algún equipo auxiliar, hará posible que en el porvenir se reduzcan aún más los gastos de imprenta por contrata o que se publique con poco o ningún costo adicional la documentación de emergencia o imprevista. La principal tarea de los servicios internos de reproducción, sin embargo, sigue siendo la de atender con prontitud a las necesidades de las sesiones.

Los servicios de distribución han sido ajustados en forma que permita servir a los nuevos Estados Miembros, para facilitarles incluso la documentación que necesitan previamente a los fines de referencia. Aunque se pudo reducir el número de personas o entidades no oficiales que reciben documentos, mediante disposiciones estrictas aplicadas por la Secretaría, la distribución entre las delegaciones aumentó, como era de esperar, debido a la admisión de nuevos Estados Miembros. Se confía en que las delegaciones procurarán reducir al mínimo sus necesidades y que continuarán cooperando con la Secretaría para mantener esta economía.

c) SERVICIOS DE BIBLIOTECA

En el año que se estudia se registró un aumento gradual pero rápido en la demanda de los servicios prestados por la Biblioteca, como consecuencia de la admisión de nuevos Estados Miembros. Las entradas, los préstamos, las solicitudes de referencia y todos los servicios auxiliares aumentaron proporcionalmente, y se complicaron en forma desmesurada debido a la necesidad de adquirir material y prestar servicios en idiomas que hasta ahora raramente se habían empleado.

Las entradas en el año ascendieron aproximadamente a 10.000 libros; 70.000 números de diarios y periódicos; 100.000 documentos de los gobiernos; 65.000 documentos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 1.000 mapas y 2.600 grabaciones; es decir, un total aproximado de 250.000 unidades de material de todas clases más cerca de 50 pies cúbicos de material de archivo. Al igual que en años anteriores, más del 75% de las entradas procedió de donaciones o canjes.

Para compensar en cierto grado esta gran entrada de material, la Biblioteca retiró de las colecciones catalogadas aproximadamente 1.775 libros y desechó cerca de 125.000 unidades, que en su mayoría eran diarios, periódicos y documentos, así como 880 pies cúbicos de material de archivo.

Se ha mejorado la colocación de las colecciones, dentro de los límites restringidos del edificio de la Biblioteca, mediante una nueva disposición y la eliminación de material duplicado, anticuado y de poco uso. Pero resulta evidente que la mayor amplitud de las colecciones, que es un reflejo del aumento en el número de Miembros de la Organización, y el creciente volumen anual de la documentación de las Naciones Unidas han agravado los problemas de local de la Biblioteca.

Entre los trabajos bibliográficos terminados durante el año figuran una *Bibliografía sobre la Industrialización en los Países Insuficientemente Desarrollados*, la continuación de varias series ya establecidas, como el *Índice de Documentos de las Naciones Unidas*, las *Nuevas Publicaciones en la Biblioteca de la Sede de las Naciones Unidas*, el *Índice de Actas*, y la *Lista de Artículos Seleccionados*, junto con un considerable número de guías de los archivos, otros índices y bibliografías breves.

2. Servicios generales

Los acontecimientos políticos ocurridos durante el período de que se trata tuvieron gran repercusión en todos los servicios generales y requirieron un reajuste importante en las comunicaciones, los servicios de compra y las actividades de la administración del servicio móvil para satisfacer necesidades de emergencia. En consecuencia, se hizo preciso aplazar temporalmente algunos proyectos de largo alcance con el fin de permitir la reasignación del personal para atender a necesidades urgentes.

a) SERVICIO DE COMPRAS Y TRANSPORTES

El programa de compras aumentó, tanto en volumen como en complejidad, debido a las necesidades de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y de las operaciones de limpieza del Canal de Suez. Los contratos para toda clase de suministros así como los servicios necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de la Fuerza se negociaron en la Sede y sobre el terreno, y el volumen total de las compras excedió

en mucho al de cualquier período precedente. Se estableció en Europa una oficina provisional de compras para negociar la adquisición del material técnico necesario con destino a la rehabilitación de los talleres del Canal de Suez.

Al mismo tiempo, las adquisiciones para el programa de asistencia técnica siguieron en gran escala.

Más del 25% del volumen en dólares de las compras ordinarias y de las destinadas a la asistencia técnica se adjudicó a proveedores de fuera de los Estados Unidos, y la mayor parte de las compras para la Fuerza también se hicieron en mercados de ultramar a través de las oficinas de compra de las Naciones Unidas establecidas en zonas locales.

Las necesidades derivadas de esa situación crítica originaron un aumento apreciable en el volumen de viajes y transportes, que se resolvió con la cooperación de los transportistas, quienes hicieron todo lo posible por facilitar el traslado del personal y de los bienes de las Naciones Unidas. En el período que se estudia los gastos por concepto de viajes ascendieron a 2.686.463 dólares, de los cuales el 42% se pagó en monedas débiles.

b) SERVICIO DE COMUNICACIONES Y REGISTRO

La necesidad de mantener comunicaciones con las fuerzas de emergencia en el Oriente Medio afectó particularmente a los servicios de cablegramas y de valijas diplomáticas. Se instalaron servicios teletipos de radio, a base de 24 horas de trabajo por día, y en estrecha coordinación con la red de radio del Servicio Móvil. La existencia de este sistema de comunicaciones permitió el intercambio económico y rápido de mensajes en un momento que no se disponía de servicios comerciales. Con la cooperación de la Unión Postal Universal se estableció un servicio postal para la FENU; esto permite que los miembros de los diferentes contingentes envíen semanalmente un número limitado de cartas libres de franqueo a sus países de origen.

La Sección de Registro ha terminado de agrupar los archivos por temas, con arreglo a un sistema de clasificación revisado que permite utilizar con más eficacia al personal, y lograr de esa forma una mayor exactitud en el archivo de la correspondencia. También se ha mejorado la centralización de documentos como, por ejemplo, los archivos de contratos que anteriormente se guardaban en varias oficinas diferentes.

La eliminación sistemática de documentos que no se utilizan y que carecen ya de importancia continuó durante todo el año, lo cual ha permitido destruir 1.765 pies lineales de documentos innecesarios. Se ha prestado particular atención a la preparación de planes para eliminar documentos relacionados con asuntos de compras y de transporte, así como a la extensión de este programa de administración de documentos a las oficinas de ultramar. En la actualidad hay un funcionario asignado por la sección de registro, quien está realizando en la Oficina de Ginebra un estudio sobre la eliminación de documentos y organización de archivos.

Durante el prolongado período de sesiones de la Asamblea General se hizo un gran uso de los servicios de grabación, interpretación simultánea y radio, y la información de las reuniones por televisión para su distribución en los países de ultramar se proporcionó mediante telecine.

c) ADMINISTRACIÓN POSTAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Ha seguido en aumento el interés de los filatelistas del mundo entero por los sellos de correo de las Naciones Unidas. Los ingresos brutos en el periodo que se reseña ascendieron a más de 1.500.000 dólares, lo cual representa un aumento de casi 300% sobre los 12 meses precedentes. Este volumen de ventas se ha podido realizar con sólo unos módicos aumentos en los gastos de personal, razón por la cual la contribución a los ingresos diversos de la Organización ha sido considerable.

Los resultados de las actividades desarrolladas para aumentar las ventas de la Administración Postal, especialmente en ultramar, han sido muy alentadores y han despertado un interés mayor en la distribución de los sellos de correo de las Naciones Unidas a través de los centros de información y de la Oficina de Ginebra.

Se considera que la publicidad alcanzada con los sellos de correo utilizados para fines postales tiene tanta importancia como las ventas de carácter filatélico y, por consiguiente, la mayor parte de la correspondencia despachada desde la Sede va franqueada con sellos de las Naciones Unidas. Hay que señalar que la continua cooperación de las autoridades postales de los Estados Unidos en la administración del Acuerdo Postal de las Naciones Unidas ha contribuido en gran parte al buen éxito del uso de estos sellos.

d) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

La mayor asistencia del público y el aumento en el número de Estados Miembros de la Organización han afectado considerablemente a los problemas de la conservación y seguridad de los edificios. Estos factores, unidos a que los edificios se hacen cada vez más antiguos, han hecho necesario que se revise el programa de conservación preventiva para las principales instalaciones mecánicas y la aceleración del plan de reposición de muebles y accesorios.

Entre los trabajos de construcción iniciados o terminados durante el período de que se trata figuran la ampliación de la superficie del primer sótano del edificio de la Asamblea General, con el fin de agregar una cafetería y mejorar los servicios de las tiendas para la venta de recuerdos y regalos; la modificación de la fuente situada frente al edificio de la Secretaría; las mejoras en la decoración de la cafetería y el comedor; las reformas hechas en la sala de meditación; y el establecimiento de un sector permanente de exhibición en el salón de entrada para el público del edificio de la Asamblea General. Se está instalando además la mayor cantidad posible de asientos en las grandes salas de conferencias; y tal vez sea interesante pensar en que cualquier aumento futuro en el número de Miembros de la Organización haría imprescindible una extensa reconstrucción de esos locales y de la Sala de la Asamblea General.

e) SERVICIO MÓVIL

La coordinación de los servicios de administración y logística para la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, así como las operaciones de limpieza del Canal de Suez, constituyeron una de las principales actividades del Servicio Móvil durante este período. Se tramitaron con rapidez los pedidos de equipo y suministros, a la vez que las disposiciones para la asignación de personal de la Sede, de Ginebra y de otras oficinas y misiones de ultramar se cursaron por los conductos administrativos competentes.

La red de radio del Servicio Móvil quedó establecida a base de 24 horas diarias; sin embargo, la mayor utilización de la radiotelefonía permitió aumentar su alcance sin los correspondientes aumentos de personal que de otro modo hubiesen sido necesarios. Se realizaron otras mejoras en la red de radio con la instalación de transmisores más poderosos en Jerusalén, Bangkok y Seúl.

Además de los servicios de emergencia, se mantuvieron otros normales de carácter administrativo para las misiones de conciliación, mediación y observación. Aparte de las tropas de la FENU, el personal de las misiones políticas y de administración fiduciaria aumentó de 315 a 426 durante el periodo que se estudia, de los cuales 11 eran representantes de los Estados Miembros, 97 observadores militares y el resto funcionarios de la Secretaría.

3. Administración del personal

La principal preocupación del Secretario General, en lo que respecta a la administración del personal, ha sido lograr que los funcionarios que componen la Secretaría cuenten con la mejor organización posible y colocarlos al nivel de las necesidades que impone el trabajo del conjunto de la Organización. Esto ha seguido exigiendo que se recurra incesantemente a funcionarios experimentados, no sólo para utilizar su capacidad ya demostrada sino también para aprovechar aptitudes que hasta ahora no se habían ejercido en las funciones oficiales de las Naciones Unidas.

La administración del personal de las Naciones Unidas ha estado siempre en consonancia con los acontecimientos que ocurren en el mundo, lo cual se refleja en la continua variación de la modalidad del trabajo que se realiza dentro de la Organización. Así resultó que en el último año el Secretario General y su administración tuvieron que hacer frente a nuevas responsabilidades, además de sus obligaciones ya establecidas: esta circunstancia ha demostrado una vez más que las Naciones Unidas deben contar con un personal y una administración capaces de desempeñar sus tareas ordinarias y, a la vez, aquellas que les impongan las situaciones críticas que puedan presentarse. En este sentido, un período de sesiones de la Asamblea General tan excepcional como el undécimo, unido a los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia, fueron un momento de prueba para la Secretaría y para la propia Asamblea, que exigió del personal un esfuerzo continuo por un prolongado período de tiempo; aparte de los funcionarios más esenciales del cuadro orgánico y de dirección, los intérpretes, taquígrafos, traductores, secretarios y mecanógrafos, personal de comunicaciones, prensa, radio y televisión, los funcionarios de documentos y de conferencias, guardas y muchos otros llevaron a cabo importantes funciones suplementarias con entereza y éxito.

Del mismo modo, el repentino y grave problema planteado por las súbitas y nuevas responsabilidades de las Naciones Unidas en el Cercano Oriente y por la formación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas se resolvió con la inmediata asignación de miembros del personal procedente de muchas oficinas y servicios del mundo entero. Con la colaboración de las correspondientes autoridades gubernamentales nacionales y locales se estableció rápidamente una base de reexpedición en Capodichino, cerca de Nápoles, como punto de escala para la recepción y reexpedición

por vía aérea de las fuerzas militares enviadas por los gobiernos de los Estados Miembros; se crearon líneas de suministros y de comunicaciones con inclusión de un servicio de puente aéreo; se organizaron servicios postales y se instauró un sistema de fiscalización financiero y comprobación de cuentas. Estos y otros servicios e instalaciones, necesarios con motivo de la llegada de los miembros de la Fuerza de Emergencia, fueron al principio improvisados y después estabilizados mediante acuerdos negociados y otros tratados convenidos con los países donde era preciso actuar. La contratación del personal civil para esta operación decisiva se realizó mediante juiciosas asignaciones de miembros experimentados del personal permanente, quienes trabajaron en estrecha cooperación con un número limitado de personal contratado especialmente fuera de la Secretaría por su competencia y aptitudes particulares. Un caso similar volvió a presentarse a la Secretaría de las Naciones Unidas con motivo de las operaciones de limpieza del Canal de Suez, ocasión en que el personal procedente de la Sede de Nueva York contribuyó notablemente a secundar las tareas de los ingenieros especializados y los expertos en salvamento que trabajaron en armonía para apresurar esa limpieza.

La asignación inicial del personal sacado de sus funciones ordinarias originó, a su vez, una nueva asignación para poder desempeñar las funciones que habían quedado vacantes. Todo ello se llevó a cabo sin perjuicio de los programas de los departamentos y oficinas correspondientes, aunque no sin imponer nuevos esfuerzos a los miembros del personal. Aparte de las necesidades requeridas por las actividades urgentes, el personal de la Secretaría hubo de atender y prestar servicios a la conferencia sumamente importante sobre el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica que se celebró en Nueva York en el otoño de 1956.

Paralelamente, se continuó progresando en los siguientes aspectos: renovación de los funcionarios de los centros de información mediante un intercambio de personal entre la Sede y los centros; descentralización, a título de ensayo, de la Administración de Asistencia Técnica; ubicación de la investigación regional y de los asesores económicos y sociales regionales más cerca de su zona de interés especial, y retorno de algunos funcionarios a la Sede con ese caudal de experiencia regional. También se han iniciado ensayos para comprobar la medida en que personas nombradas concretamente para el Servicio Móvil pueden ser asimiladas en forma conveniente dentro de las plantillas permanentes de la Sede y de Ginebra.

El trabajo de la Comisión Especial para el Problema de Hungría creó la necesidad de disponer de personal especializado en el idioma húngaro para la interpretación, traducción y edición. También en este caso la contratación de personal fuera de la Secretaría fué insignificante, y hubo personal permanente que desempeñó estas tareas sin descuidar las habituales.

a) CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El ritmo de contratación de personal se aceleró algo durante el año pasado, no por causa de las necesidades de emergencia sino por haberse adoptado un procedimiento más activo para cubrir las vacantes producidas, como consecuencia de la reducción en el número total de funcionarios de la Secretaría.

Mientras que la contratación durante los primeros años se basó en la selección de candidatos para per-

sonal de carrera, en los 12 últimos meses se ha prestado constante atención a la adecuada selección de personas experimentadas sacadas de las administraciones públicas, universidades y otros órganos, a quienes se invita a prestar servicios en la Secretaría por un plazo fijo después del cual vuelven a sus ocupaciones precedentes.

Esta norma de contratación ponderada y centralizada ha permitido que se logre un alto nivel entre los candidatos seleccionados para prestar servicios, bien como personal de carrera o a base de plazo fijo. Aunque el estudio final es realizado por un comité interdepartamental de selección, que es directamente responsable ante el Secretario General, se han utilizado los servicios de los oficiales superiores para descubrir a las personas capacitadas y con ello ha resultado beneficiado el número de candidatos que el comité de selección consideró finalmente. Se ha puesto especial empeño en orientar la contratación del nuevo personal capacitado (en lo posible manteniendo las normas de competencia establecidas) hacia aquellos países cuyos ciudadanos participan en una proporción exageradamente pequeña dentro de la parte contratada internacionalmente por la Secretaría.

El mantenimiento de un grupo variable de expertos al servicio de las Naciones Unidas, para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se aparta algo de la contratación de personal para la Secretaría a base permanente o temporal. Persisten las dificultades para atraer personas altamente capacitadas de países como los Estados Unidos y el Canadá, donde se pagan sueldos elevados en las ramas de actividad industrial y comercial. El Programa ha continuado aprovechando las ventajas de la cooperación de los comités nacionales que trabajan en varios países de la Europa occidental, que han seguido recomendando a muchos expertos de sus regiones bien calificados e interesados en esa labor.

b) ESTUDIO DEL RÉGIMEN DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Una de las principales preocupaciones administrativas durante este período fué el estudio general del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones compartido por las Naciones Unidas y seis de los organismos especializados¹, que llevó a cabo un comité de 11 miembros creado por la Asamblea General.

Bajo la presidencia del Sr. Friis, de Dinamarca, el Comité celebró en Nueva York y en Ginebra 91 sesiones entre el 10 de mayo y el 18 de octubre de 1956, en el curso de las cuales consideró hechos y opiniones presentados por funcionarios y representantes del personal de todas las organizaciones participantes. Su informe fué sometido luego a la Asamblea General y distribuido a los órganos legislativos de las respectivas organizaciones participantes.

En el debate sostenido en la Quinta Comisión, el Secretario General hizo varias exposiciones entre las que figuraba una declaración conjunta de los puntos de vista de los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados así como una declaración hecha por el Consejo del Personal de la Sede de las Naciones Unidas y otra de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Las principales conclusiones a que llegó la

¹ Organización Internacional del Trabajo, Organización para la Agricultura y la Alimentación, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de Aviación Civil Internacional y Organización Meteorológica Mundial.

Asamblea General están contenidas en la resolución 1095 (XI) en la cual la Asamblea, entre otras cosas, aprobaba nuevas disposiciones para los sueldos básicos, ajustes por lugar de destino oficial y prestaciones por familiares a cargo; pedía al Secretario General que llevara a cabo la unificación de las condiciones de servicio en la ejecución de los diferentes programas y que estudiara la cuestión de la remuneración sujeta a descuento a los efectos de la Caja de Pensiones, con miras a recomendar medidas a la Asamblea General; modificaba el Estatuto del Personal en ciertos aspectos; y señalaba a la atención de los organismos especializados las decisiones adoptadas por la Asamblea General y les recomendaba la adopción de análogas disposiciones en relación con su propio personal.

Los representantes administrativos de las organizaciones interesadas se reunieron en Ginebra del 11 al 29 de marzo de 1957 y convinieron una serie de medidas detalladas para aplicar las conclusiones adoptadas por la Asamblea General y por los otros cuerpos legislativos, que requerían una acción coordinada.

Aunque para formarse una idea completa de estos asuntos es preciso recurrir a los documentos oficiales del undécimo período de sesiones, a continuación se resumen brevemente los resultados principales de las tareas del Comité de Estudio de Sueldos.

El antiguo régimen de ajustes por variación del costo de vida y coeficientes de ajuste de sueldos se ha substituído, en lo que respecta a las categorías de directores y puestos del cuadro orgánico, por un régimen de ajustes por lugar de destino oficial con un coeficiente positivo o negativo en relación con Ginebra en enero de 1956. Los ajustes por lugar de destino oficial, cuyo importe varía para cada categoría (y en las zonas de costo de vida elevado, también si el funcionario tiene cónyuge o hijos a su cargo), han sido puestos en vigor a partir del 1º de enero de 1957. Como ejemplo puede citarse la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que ha sido colocada bajo este régimen en la clase V, con lo cual las escalas de sueldos aumentan aproximadamente de 15 a 20% con relación a Ginebra. Para la categoría administrativa se ha convenido que el nuevo régimen de ajustes por lugar de destino oficial, junto con otros reajustes destinados a unificar las condiciones de servicio, se establezca en todos los programas y oficinas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados durante el período que termina en enero de 1958. Se ha reafirmado el principio vigente de que las escalas de sueldos del cuadro de servicios generales se sigan fijando a base de las condiciones más favorables de empleo que rijan en la localidad de la Oficina de las Naciones Unidas a que se refieren, y los reajustes locales se han hecho de conformidad con ese principio.

Las escalas de sueldos básicos para el personal del cuadro orgánico siguen invariables, si bien se han hecho ajustes en la categoría de Director (D-2). En cuanto a la remuneración de los Subsecretarios y funcionarios de categoría equivalente, la Asamblea General decidió aplazar el examen de esta cuestión hasta su duodécimo período de sesiones, en el cual el Secretario General informará sobre la cuestión de la organización superior de la Secretaría con inclusión del punto referente a la remuneración.

Las prestaciones familiares para el personal del cuadro orgánico y superior, en la cuantía aplicable a la Sede, se han extendido a todos los lugares de des-

tino oficial a partir del 1º de enero de 1957. Se ha convenido en otorgar prestaciones comparables a las personas empleadas en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a partir del 1º de enero de 1958. Las prestaciones familiares para el personal del cuadro de servicios generales se establecerán, junto con los sueldos, con arreglo a las circunstancias locales en la zona del lugar de destino oficial. De conformidad con una petición hecha por la Asamblea, el Secretario General, en consulta con los jefes ejecutivos de los organismos especializados, ha formulado una definición mejorada de los familiares a cargo con el objeto especialmente de evitar anomalías entre funcionarios del sexo masculino y femenino.

En lo que se refiere a los funcionarios que no son de carrera, se han realizado importantes ajustes en las condiciones de servicio aplicables a las personas que ingresan en la Secretaría por ser adscritas temporalmente a ella o por otra razón inherente al personal que no es de carrera. El derecho a la prima de repatriación se ha substituído por una prestación por servicios de 4% del sueldo básico durante los servicios prestados en su país de origen y a razón del 8% de su sueldo durante los servicios prestados fuera de su país de origen. Las circunstancias en que la Organización concederá prestaciones por muerte o invalidez de ese personal (y de los expertos de asistencia técnica), pero excluyéndolo de toda participación en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, ya han sido estudiadas y serán sometidas a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones para su aprobación y para que se modifiquen consiguientemente los Estatutos de la Caja de Pensiones. Entre otros ajustes que habrán de hacerse en las condiciones de servicio para los nombramientos temporales figura la prestación de un subsidio por misión, para los servicios prestados por un período de uno a cinco años fuera del lugar habitual de residencia o destino del funcionario, subsidio que se concederá en lugar del pago de los gastos por traslado de efectos domésticos.

En lo que se refiere a las prestaciones sociales, la Asamblea General aprobó la adopción del régimen de licencia por enfermedad que había estado en vigor durante algunos años en la OIT, la OMS y la FAO, el cual proporcionará una mayor protección — en los pocos casos de enfermedad muy prolongada — que la del antiguo régimen de las Naciones Unidas. La totalidad de los beneficios de la licencia de maternidad se concederá, de ahora en adelante, después de que la interesada haya prestado servicios durante el período de un año. Los planes de afiliación al seguro colectivo médico y de hospitalización se han ajustado con el fin principal de proporcionar una mayor protección financiera en el caso de producirse cuantiosos gastos por servicios médicos.

Entre las cuestiones examinadas por el Comité de Estudio de Sueldos, y que la Asamblea General decidió aplazar hasta su duodécimo período de sesiones, se encuentran: la posibilidad de conceder aumentos de sueldo suplementarios por años de servicio a los miembros del personal que hayan llegado al límite máximo de sueldo dentro de su categoría; la posible combinación de las categorías de sueldo de oficial adjunto y de oficial de segunda (P-2 y P-3); y la posibilidad de ampliar el cuadro de servicios generales para incluir ciertos puestos que ahora están en el cuadro orgánico en las categorías inferiores y que tienen fundamentalmente carácter de servicio.

El Comité de Estudio de Sueldos había recomendado que cierto número de asuntos de interés común para las Naciones Unidas y los organismos especializados, en el amplio campo de los sueldos y la administración del personal, se remitieran para su estudio y asesoramiento a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. Mientras la Asamblea General decidió examinar con más detenimiento en su duodécimo período de sesiones la intervención de la JCAPI, se convino en que el Comité Administrativo de Coordinación pida a esta última — con la asistencia de expertos independientes designados por el Secretario General en consulta con la JCAPI y con el CAC, según proceda — que examine algunas de las cuestiones más urgentes de interés común a que se refiere el informe del Comité de Estudio de Sueldos. En consecuencia, el CAC ha pedido a la Junta que estudie y haga recomendaciones sobre los principios que deben guiar a las organizaciones participantes para el examen de la aplicación de normas de clasificación comunes respecto de las categorías del cuadro orgánico y de Directores. El CAC ha decidido, además, que en fecha posterior remitirá a la JCAPI el tema de los factores de carácter no económico que intervienen en la contratación y conservación del personal internacional.

El Comité Administrativo de Coordinación ha elegido también dos temas para que sean estudiados rápidamente por comités de expertos del exterior, a saber: la cuestión de la remuneración del personal sujeta a descuento a los efectos de la Caja de Pensiones y la de la administración general del sistema de ajuste por lugar de destino oficial, además de otras cuestiones de metodología estadística y los elementos de juicio que deben aplicarse al establecer los ajustes por lugar de destino oficial, ambos temas derivados de sugerencias de la Asamblea General.

c) OTROS ASUNTOS

Durante los 12 últimos meses — en parte debido al contacto del Comité de Estudio de Sueldos con siete secretarías internacionales, que actúan en cinco ciudades donde radican las sedes respectivas, y con unas 120 dependencias regionales — los horizontes de los servicios administrativos de la Organización se han ampliado en forma efectiva. Las consultas entre las organizaciones, con el objeto de proceder coordinadamente siempre que fuere necesario y factible, han sido frecuentes durante el período que es objeto del presente estudio; esto ha de permitir que se aplique a todo el conjunto de programas, oficinas y servicios que integran la familia de las Naciones Unidas una administración de las condiciones de servicio más racional y coordinada.

Durante el período de que se trata, el Secretario General también ha continuado y consolidado las disposiciones y métodos de consulta con los representantes del personal acerca de todos los asuntos de carácter general relacionados con este último y su administración.

Finalmente, el personal de la Sede se ha seguido viendo favorecido por el infatigable fervor de quienes se dedican a los servicios voluntarios; éstos han continuado dedicando su tiempo, su celo y su capacidad al enriquecimiento del programa social de los miembros del personal, y sus esfuerzos se orientan en gran parte a disipar el sentimiento de extrañeza y aislamiento que domina a aquellos que llegan por primera vez del exterior a la Sede y a lograr que los funcionarios se integren a la vida social de la comunidad.

4. Asuntos financieros

a) FONDO DE OPERACIONES

En virtud de la resolución 1085 (XI) de la Asamblea General, del 21 de diciembre de 1956, el Fondo de Operaciones fué aumentado en 2.000.000 de dólares para que alcanzase la cifra de 22.000.000 de dólares en 1957, y se ajustaron los anticipos de los Estados Miembros con arreglo a la escala de cuotas correspondientes al presupuesto de 1957. En 31 de mayo de 1957 quedaba por pagar un saldo de 1.504.491 dólares con respecto a los anticipos de 1957 al Fondo. Hasta esa misma fecha el Secretario General, en virtud de las facultades que le confería la mencionada resolución, había anticipado con cargo al Fondo las siguientes sumas:

	<i>Dólares de los EE.UU.</i>
i) Para atender a los gastos presupuestarios hasta que se recibieran las cuotas	15.525.265
ii) Préstamos a los organismos especializados	106.240
iii) Compras y actividades autoamortizables	345.669
iv) Anticipos para gastos imprevistos y extraordinarios	81.508
TOTAL	16.058.682

Además de los anticipos pendientes arriba indicados, los gastos autorizados en virtud de la resolución 1084 (XI) y no pagados todavía ascienden a 127.357 dólares.

b) CUOTAS

En 31 de mayo de 1957, la situación en cuanto a las cuotas para dicho ejercicio y a los atrasos de las correspondientes a los ejercicios económicos de 1954, 1955 y 1956 era la siguiente:

	<i>Cuotas asignadas para el ejercicio económico</i>			
	<i>(en dólares de los EE.UU.)</i>			
	1957	1956	1955	1954
Importe total ..	49.088.050	48.330.000	39.640.000	41.300.000
Pagos efectuados y otros créditos	13.440.602	45.449.882	38.239.980	41.296.979
Saldo por pagar	35.647.448	2.880.118	1.400.020	3.021

Las cuotas correspondientes a los ejercicios anteriores habían sido satisfechas en su totalidad.

En su décimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó una escala de cuotas para los años 1956, 1957 y 1958 (resolución 970 (X)). En esta escala no se incluían los 16 Estados que ingresaron como Miembros de la Organización el 14 de diciembre de 1955, justamente antes de clausurarse el período de sesiones. En el undécimo período de sesiones, por resolución 1087 (XI) del 21 de diciembre de 1956, la Asamblea aprobó una escala modificada de cuotas para los 16 nuevos Miembros. Con arreglo a la autorización concedida al Secretario General por la resolución 970 (X) para aceptar una parte de las cuotas correspondientes al ejercicio económico de 1957 en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, el Secretario General, previa consulta con el Presidente de la Comisión de Cuotas, comunicó a los Estados Miembros que el 18,3% de sus cuotas para 1957 podía ser pagado en francos suizos, el 9% en libras esterlinas y el 6,3% en una serie de otras monedas distintas del dólar de los Estados Unidos.

En virtud de los acuerdos concluidos entre el Reino Unido y las Naciones Unidas, la Organización podrá convertir libras esterlinas en otras monedas con el consentimiento de los países de cuya moneda se trate.

El importe de las cuotas correspondientes a 1957 que los Estados Miembros podrán satisfacer en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos asciende al equivalente de 9.223.287 dólares en las siguientes monedas: el equivalente de 5.000.000 de dólares en francos suizos, el de 2.461.850 dólares en libras esterlinas y el de 1.761.437 dólares en otras monedas diversas. Hubo 30 Estados Miembros que aceptaron la opción de pagar en una o varias de esas monedas.

En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General ingresaron en las Naciones Unidas cinco nuevos Estados Miembros. La Asamblea General decidió el 27 de febrero de 1957 aplazar el prorrateo de las cuotas de esos Estados para el año 1957, así como el establecimiento de su escala de cuotas para el año 1958, hasta el duodécimo período de sesiones.

c) SITUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 1956 Y 1957

La Asamblea General, en su décimo período de sesiones (resolución 979 (X)), aprobó para 1956 consignaciones de créditos por un importe de 48.566.350 dólares. Por resolución 1074 (XI), del 7 de diciembre de 1956, este importe fué aumentado hasta un total de 50.683.350 dólares mediante la consignación de créditos suplementarios que ascendieron a 2.117.000 dólares. El informe financiero y los estados de cuentas correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 1956, debidamente certificados por la Junta de Auditores, muestran que el total de las obligaciones contraídas para ese ejercicio fué de 50.508.095 dólares, con lo cual queda un saldo de 175.255 dólares disponibles de los créditos consignados. A esta suma de 175.255 dólares se agregó el excedente (697.626 dólares) de los ingresos reales sobre los ingresos calculados, lo cual hizo elevar el superávit del ejercicio a 872.881 dólares. A esta cantidad pueden añadirse todavía 372.005 dólares correspondientes a economías realizadas al liquidar obligaciones del ejercicio anterior, así como 556.308 dólares correspondientes al saldo neto por concepto de superávit en 1955. Del superávit total, se acreditaron 1.053.230 dólares a las cuotas de los Estados Miembros para el ejercicio económico de 1957.

En su undécimo período de sesiones, la Asamblea aprobó para el ejercicio de 1957 consignaciones de crédito por un importe de 50.815.700 dólares (resoluciones 1083 (XI) y 1100 (XI)). En 31 de mayo de 1957, las obligaciones contraídas y los gastos efectuados con cargo a tales consignaciones ascendían a 22.029.508

dólares, quedando por aplicar un saldo de 28.786.192 dólares.

d) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1958

En un principio, los gastos para el ejercicio económico de 1958 se calculan en 54.782.500 dólares y los ingresos diversos en 3.050.000 dólares, lo cual arroja un saldo neto total de 51.732.500. El presupuesto de gastos para 1957 fué aprobado por una cuantía de 50.815.700 dólares y el de los ingresos diversos por 2.531.010 dólares, lo que arrojó un saldo neto total de 48.284.690 dólares.

e) COMITÉ DE NEGOCIACIONES SOBRE LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

El Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios, creado por la Asamblea General en su décimo período de sesiones (resolución 958 (X)), fué establecido con el objeto de que ayudara a obtener fondos con destino a programas para los cuales no se consignan créditos en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y cuyos gastos se sufragan mediante contribuciones voluntarias.

Se trata del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados (FONUR) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) (OOPSRPCO).

En el informe presentado a la Asamblea en su undécimo período de sesiones, el Comité, comentando la escasez de contribuciones aportadas para el FENUR y el OOPSRPCO (la situación financiera de estos programas se estudia en los correspondientes capítulos del presente informe), recomendó que se cambiara el método para obtener fondos con destino a todos los programas establecidos a base de contribuciones voluntarias.

Fundándose en esta recomendación, la Asamblea aprobó la resolución 1091 (XI), donde figura un nuevo método para obtener promesas de aportaciones con destino a los dos programas de refugiados y en virtud del cual se reunirá en el curso del duodécimo período de sesiones un comité especial plenario de la Asamblea en el que se anunciarán las contribuciones voluntarias. En lo que se refiere al UNICEF y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, sin embargo, se mantiene el sistema actual. Se ha creado un nuevo Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios, con el mismo mandato que en años precedentes, con el encargo de que informe sobre sus actividades a la Asamblea en su duodécimo período de sesiones.